NOAM CHOMSKY Y
EDWARD S. HERMAN

Los guardianes de la libertad

Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas

Traducción de Carme Castells

grijalbo mondadori

PREFACIO

En este libro hemos esbozado un «modelo de propaganda» y lo hemos aplicado a la actuación de los medios de comunicación de los Estados Unidos. El empeño refleja nuestra creencia, basada en muchos años de estudio de los medios de comunicación y su forma de operar, de que éstos sirven para movilizar el apoyo en favor de los intereses especiales que dominan la actividad estatal y privada;[1] *creemos también que sus opciones, énfasis y omisiones pueden entenderse mejor, y en ocasiones con una claridad y penetración sorprendentes, si las analizamos en estos términos.*

Tal cosa quizá sea obvia; sin embargo, lo cierto es que según el postulado democrático los medios de comunicación son independientes y tienen la obligación de descubrir la verdad e informar de ella, y no reflejar pura y simplemente la percepción del mundo que desearían los grupos de poder. Los responsables de los medios de comunicación afirman que su forma de seleccionar noticias se basa en criterios objetivos e imparciales y que para ello cuentan con el apoyo de la comunidad intelectual.[2] *No obstante, de ser cierto que*

1. Utilizamos el término «intereses especiales» en su acepción común, no con el sentido orwelliano que se le ha dado en la era Reagan, en la que designa a los obreros, los granjeros, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los inválidos y los desempleados —en resumen, a la población en general—. Sólo un grupo no mereció esta apelación: las empresas, y sus propietarios y directores. Estos no son «intereses especiales», representan el «interés nacional». Esta terminología representa la realidad de la dominación y el uso operacional de «interés nacional» por los dos partidos políticos principales. Para una opinión similar, con evidencia de la relevancia de este uso en ambos partidos políticos principales, véase Thomas Ferguson y Joel Rogers, *Right Turn: The Decline of the Democrats and the Future of American Politics*, Hill and Wang, Nueva York, pp. 37-39 y *passim*.

2. Herbert Gans, por ejemplo, afirma que «las creencias que realmente prevalecen en las noticias son valores *profesionales* intrínsecos del periodismo nacional y

quienes ostentan el poder tienen capacidad para fijar los términos del discurso, para decidir qué es lo que el público en general puede ver, oír y pensar, y para «dirigir» la opinión pública por medio de campañas de propaganda regulares, la opinión generalizada acerca de cómo trabaja el sistema bien poco tiene que ver con la realidad.[3]

La especial pertinencia de la propaganda para lo que Walter Lippmann denominó «fabricación del consenso» ha sido admitida desde hace tiempo por quienes escriben acerca de la opinión pública, la propaganda y los requerimientos políticos del orden social.[4]

---

que los periodistas aprenden trabajando ... Las reglas para juzgar una noticia exigen que se ignoren las implicaciones del artículo ...» («Are U.S. Journalists Dangerously Liberal?», *Columbia Journalism Review*, noviembre-diciembre 1985, pp. 32-33). En su libro *Deciding What's News* (Vintage, Nueva York, 1980), Gans sostiene que los reporteros de los medios de comunicación en general son «objetivos», pero en el marco de la creencia en una serie de «valores perdurables» que incluyen el «etnocentrismo» y el «capitalismo responsable», entre otros. A nuestro entender, si se comprobara que los reporteros de *Pravda* trabajan coaccionados por la creencia en la justicia esencial del Estado soviético y en el «comunismo responsable», toda discusión sobre su objetividad carecería de sentido. Además, tal como probaremos más adelante, Gans subestima mucho hasta qué punto los reporteros de los medios de comunicación trabajan dentro de un marco limitado de suposiciones.

3. Las críticas neoconservadoras contra los medios de comunicación generalmente los describen como bastiones de los ataques liberales contra el sistema. Ignoran el hecho de que los medios de comunicación son grandes empresas controladas por individuos muy ricos o por otras empresas, y que los miembros de lo que los neoconservadores describen como «cultura liberal» de los medios de comunicación son empleados a sueldo. Asimismo hacen caso omiso del hecho de que los miembros de esta cultura liberal generalmente aceptan las premisas básicas del sistema y no están de acuerdo con otros miembros del sistema en las tácticas apropiadas para alcanzar los mismos objetivos. Los neoconservadores simplemente no están preparados para permitir divergencias de sus propios puntos de vista. En nuestro análisis del capítulo 1, los describimos como quienes desempeñan el importante cometido de ser «reforzadores de opinión», tratando de obligar a los medios de comunicación a omitir incluso el poco disentimiento tolerado en la actualidad. Para un análisis del enfoque neoconservador de los medios de comunicación, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, «Ledeen on the Media», en *The Rise and Fall of the Bulgarian Connection*, Sheridan Square Publications, Nueva York, 1986, pp. 166-170; George Gerbner, «Television: The Mainstreaming of America», en *Business and the Media*, informe Yankelovich, Skelly and White, 19 de noviembre de 1981; Gans, «Are U.S. Journalists Dangerously Liberal?».

4. Véase Walter Lippmann, *Public Opinion*, Allen & Unwin, Londres, 1932; Harold Lasswell, «Propaganda», en *Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillan, Nueva York, 1933; Edward Bernays, *Propaganda*, H. Liveright, Nueva York, 1928; M. J. Crozier, S. P. Huntington y J. Watanuki, *The Crisis of Democracy: Report*

El propio Lippmann sostuvo a principios de los años veinte que la propaganda se había convertido ya en «un órgano regular del gobierno popular» y que su sofisticación e importancia aumentaban sin cesar.[5] *No es nuestra intención afirmar aquí que los medios de comunicación tan sólo se ocupan de la propaganda, pero creemos que la actividad propagandística es uno de los aspectos más relevantes de su cometido. En el primer capítulo del libro esbozamos un modelo de propaganda, que describe las fuerzas que hacen que los medios de comunicación desempeñen un papel propagandístico, así como los procesos mediante los que activan los sesgos y prejuicios, y la selección de noticias que se derivan de ellos. En los capítulos siguientes tratamos de demostrar que ese modelo de propaganda se puede aplicar a la actuación real de los medios de comunicación.*

Las críticas institucionales como la que contiene este libro suelen ser rechazadas por los comentaristas del establishment *aduciendo que son «teorías conspirativas»; tal argumento no es otra cosa que una simple evasiva. En realidad no utilizamos ningún tipo de hipótesis «conspirativa» para explicar la actuación de los medios de comunicación, sino que nuestro tratamiento se asemeja mucho más a un análisis del «mercado libre», cuyos resultados son en gran manera un producto del trabajo de las fuerzas de mercado. La mayoría de elecciones sesgadas de los medios de comunicación surgen de la criba previa de gente que piensa lo que hay que pensar, de*

---

on the Governability of Democracies to the Trilateral Comission, New York University Press, Nueva York, 1975. Para una discusión más amplia, véase Noam Chomsky, *Towards a New Cold War*, Pantheon, Nueva York, 1982, capitulo 1 (hay traducción castellana: *La segunda guerra fría*, Crítica, Barcelona, 1984) y las referencias citadas, especialmente Alex Carey, «Reshaping the Truth: Pragmatists and Propagandists in America», *Meanjin Quarterly*, vol. 35, n. 4 (Australia, 1976).

5. *Public Opinion*, p. 248. Para Lippmann, esto no era censurable, puesto que los «intereses comunes en gran parte eluden a toda la opinión pública, y sólo pueden ser dirigidos por una clase especializada cuyos intereses personales trasciendan lo meramente local» (p. 310). Le angustiaba que el incorregible sesgo de la prensa pudiera engañar tanto a la «clase especializada» como al público. El problema, por consiguiente, era cómo hacer llegar la información adecuada a las elites que toman las decisiones (pp. 31-32). Lippmann creía que esto podría conseguirse mediante el desarrollo de un cuerpo de expertos independientes que pudieran ofrecer consejo no tendencioso a los líderes. No planteó la cuestión sobre los posibles intereses de clase o personales de la «clase especializada» o de los «expertos» en cuya capacidad o equidad se confiaría para articular «el interés común».

preconcepciones interiorizadas, y de la adaptación del personal a las limitaciones de la propiedad, la organización, el mercado y el poder político. La censura es en gran medida autocensura, por un lado de periodistas y comentaristas que se ajustan a la realidad de los requerimientos organizativos de las fuentes y de los medios de comunicación, y por otro de los responsables de alto nivel de dichos medios, que fueron elegidos para poner en práctica las constricciones —que en muchos casos han interiorizado— impuestas por los propietarios y por otros centros de poder, tanto del mercado como gubernamentales.

Existen personajes importantes que toman iniciativas reales para definir y dar forma a las noticias, así como para mantener en línea a los medios de comunicación. Lo que aquí describimos es un «sistema de mercado dirigido», cuya dirección corre a cargo del gobierno, de los líderes de la comunidad, los propietarios y los ejecutivos de los principales medios de comunicación y los diversos individuos o grupos a quienes se ha asignado o permitido emprender iniciativas constructivas.[6] *El número de estos promotores es suficientemente reducido para que actúen al unísono si la ocasión lo requiere, tal como hacen los vendedores en mercados donde existe una fuerte competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos los dirigentes de los medios hacen cosas parecidas porque ven el mundo desde la misma perspectiva, están sometidos a limitaciones y a incentivos similares, de manera que presentan historias o guardan silencio todos a una, en una acción colectiva tácita y con una conducta de seguimiento del líder.*

6. Por ejemplo, Claire Sterling y los expertos del Georgetown Center for Strategic and International Studies —Walter Laqueur, Michael Ledeen y Robert Kupperman— constituyen la máxima autoridad sobre el terrorismo de los medios de comunicación; sobre el papel que tuvieron Sterling y Paul Henze en el desarrollo de la Conexión Búlgara en el complot contra el papa, véase el capítulo 4. En el caso de América Latina, los medios de comunicación han sido obligados a evitar el recurso a la profesión académica para expresar opiniones aprobadas, ya que en este caso la profesión rechaza en gran parte el marco de la propaganda del Estado. Además ha sido necesario crear un nuevo cuadro de «expertos» (Robert Leiken, Ronald Radosh, Mark Falcoff, Susan Kaufman Purcell, etc.) a quienes poder recurrir para satisfacer sus necesidades doctrinales. Véanse ejemplos en Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988. Sobre el proceso de creación de expertos para satisfacer las exigencias del sistema, véase «El suministro de noticias a los medios de comunicación» en el capítulo 1 de esta obra (pp. 50-62).

Pero los medios de comunicación no se presentan como un sólido monolito en todos los temas. Cuando existe algún desacuerdo entre quienes ostentan el poder se produce una cierta diversidad de juicios tácticos acerca de cómo lograr los objetivos que suelen compartir, lo que se refleja en el debate entre los medios. Pero incluso cuando la controversia de las elites acerca de cuestiones tácticas está en pleno apogeo, quedan excluidas de los medios de comunicación las opiniones que ponen en cuestión las premisas fundamentales o sugieren que los modos de ejercicio del poder del Estado al uso están basados en factores sistémicos.

A medida que vayamos avanzando estudiaremos una serie de casos aunque, de hecho, el modelo es básicamente el mismo. Por emplear un ejemplo que estaba presente en los medios de comunicación mientras escribíamos este libro, consideremos la descripción que éstos hacen de Nicaragua, objeto del ataque de los Estados Unidos. En este caso, la división de opiniones entre la elite es suficientemente grande como para poner en cuestión si el patrocinio de un ejército terrorista resulta efectivo para hacer que Nicaragua sea «más democrática» y «menos amenazadora para sus vecinos». Sin embargo esos medios de comunicación raramente consideran, si lo hacen alguna vez, la opinión, o permiten que en sus columnas de noticias aparezcan materiales que la sugieran, de que Nicaragua es más democrática que El Salvador y Guatemala, en cualquier acepción no orwelliana del término.[7] *Buena prueba de ello es que el gobierno de ese país no tiene por rutina asesinar a sus ciudadanos, como hacen los gobiernos de El Salvador y Guatemala;*[8] *que ha*

7. Como otros términos del discurso político, la palabra «democracia» tiene un significado técnico orwelliano cuando se usa en exaltaciones retóricas, o en el «periodismo» habitual, para referirse a los esfuerzos estadounidenses para establecer la «democracia». El término hace referencia a sistemas en los cuales el control de los recursos y los medios violentos aseguran el mando a elementos que servirán a los intereses del poder estadounidense. De esta manera los estados terroristas de El Salvador y Guatemala son «democráticos», así como Honduras bajo el dominio de los militares y la oligarquía, y al grupo de adinerados hombres de negocios, banqueros, etc., organizado por los Estados Unidos como una tapadera del ejército mercenario somocista creado por los Estados Unidos se le llama «la resistencia democrática». Para más información, véase el capítulo 3.

8. De los ochenta y cinco artículos de opinión que aparecieron en el *New York Times* y el *Washington Post* en los tres primeros meses de 1986, durante el «debate nacional» que precedió a la votación del Congreso sobre las ayudas a la contra, ni

llevado a cabo reformas socioeconómicas importantes para la mayoría, que los otros dos gobiernos de ninguna manera pueden emprender;[9] *que Nicaragua no representa ninguna amenaza militar para sus vecinos y que, en realidad, está sometida a continuos ataques por parte de los Estados Unidos y sus clientes y secuaces; y que el temor de Estados Unidos por Nicaragua se debe más a las virtudes de ésta que a sus defectos.*[10] *Los medios de comunicación también evitan cuidadosamente cualquier referencia a los antecedentes y al resultado de otra tentativa similar de los Estados Unidos para restaurar la «democracia» en Guatemala, llevada a cabo en 1954, mediante una invasión auspiciada por la CIA que puso fin a la democracia guatemalteca por un período indefinido. Y aunque durante décadas los Estados Unidos apoyaron al gobierno elitista y ayudaron a organizar el estado del terror en Guatemala (entre muchos otros países), y pese a que en la actualidad subvierte —o aprueba la subversión— de la democracia en Brasil, Chile y Filipinas (entre otros, también en este caso), a pesar de que mantiene una «vinculación constructiva» con regímenes que hacen del terror su base fundamental, y con independencia de no haberse preocupado por la democracia en Nicaragua mientras el brutal régimen de Somoza se mantuvo en el poder, los medios de comunicación consideran dignas de todo crédito las afirmaciones del gobierno acerca de su preocupación por la «democracia» en Nicaragua.*[11]

---

siquiera una mencionó este hecho elemental. Para un análisis más detallado, véase Noam Chomsky, «Introduction», en Morris Morley y James Petras, *The Reagan Administration and Nicaragua*, Monografía I, Institute for Media Analysis, Nueva York, 1987.

9. Sólo dos frases de los ochenta y cinco artículos de opinión citados en la nota anterior mencionaron que el gobierno de Nicaragua había llevado a cabo reformas; ninguno de ellos comparó Nicaragua con El Salvador y Guatemala en esta importante cuestión.

10. Véase Diana Melrose, *Nicaragua: The Threat of a Good Example?*, Oxfam, Oxford, 1985; véanse también los capítulos 3 y 6 de esta obra.

11. En un artículo muy crítico con el «plan de paz» de Reagan para Nicaragua de agosto de 1987, Tom Wicker dice: «Cualquiera que sea su doctrina, los Estados Unidos no tienen ningún derecho histórico o divino para llevar la democracia a otras naciones; y un propósito semejante tampoco justifica el derrocamiento de los gobiernos que no le gustan» («That Dog Won't Hunt», *New York Times*, 6 de agosto de 1987). Wicker no rebate la pretensión de que Reagan intenta conseguir la democracia para Nicaragua; sólo dice que sus medios son dudosos y que su plan no funcionará. Debemos señalar que Wicker está en el límite más extremo de la opinión

El desacuerdo táctico de la elite acerca de cómo tratar el tema de Nicaragua queda reflejado en el debate público, pero los medios de comunicación, en conformidad con las prioridades de dicha elite, han coincidido en elaborar las noticias de manera que resulta imposible enmarcar la política de los Estados Unidos en un contexto significativo; suprime sistemáticamente cualquier evidencia de violencia o agresión estadounidense y presenta a los sandinistas desde una perspectiva extremadamente desfavorable.[12] *Por el contrario, El Salvador y Guatemala, con unos antecedentes bastante peores, se presentan como países en lucha por la democracia bajo unos líderes «moderados», gozando así de una benévola aprobación. Estas prácticas no sólo han distorsionado la percepción pública de la realidad de América Central, sino que también han tergiversado seriamente los objetivos políticos de Estados Unidos, lo que por otra parte es una característica esencial de la propaganda, como señaló Jacques Ellul:*

> *El propagandista no puede revelar evidentemente las auténticas intenciones de aquel a cuyas órdenes trabaja ... Ello supondría someter los proyectos a discusión pública, al escrutinio de la opinión pública, evitando así su triunfo ... Por el contrario, la propaganda debe velar esos proyectos, enmascarando su auténtica intención.*[13]

El poder del gobierno para establecer los marcos contextuales y el orden del día, y para excluir de la inspección pública los hechos inconvenientes, queda también de manifiesto de una manera impresionante en la cobertura de las elecciones en América Central (tema

---

disidente expresable en los medios de comunicación de los Estados Unidos. Más información en el capítulo 3. Para referencias adicionales, véase Chomsky, *Culture of Terrorism*.

12. Por ejemplo, en respuesta a los acuerdos de paz de Guatemala de agosto de 1987, los Estados Unidos inmediatamente aumentaron el número de vuelos de abastecimiento requeridos para mantener en campaña a sus fuerzas en Nicaragua al fenomenal nivel de dos o tres por día. El propósito era socavar los acuerdos mediante una intensificación de la lucha, e impedir que Nicaragua relajara la guardia, de modo que pudiera ser acusada de incumplir los acuerdos. Estas iniciativas estadounidenses eran con mucho las mayores violaciones de los acuerdos, pero virtualmente no fueron mencionadas en los medios de comunicación. Para un análisis detallado, véase Noam Chomsky, «Is Peace at Hand?», *Z magazine* (enero de 1988).

13. Jacques Ellul, *Propaganda*, Knopf, Nueva York, 1965, pp. 58-59.

que examinaremos en el capítulo tercero y mediante el análisis de casos particulares en los capítulos siguientes).

Aun cuando la discrepancia de la elite con respecto a la política del gobierno es prácticamente imperceptible o inexistente, se pueden producir algunos deslices en los medios de comunicación. Así, hechos que socavarían la línea del gobierno si se tratasen correctamente se pueden encontrar normalmente en las últimas páginas de los periódicos. Aquí radica parte del vigor del sistema de los Estados Unidos.

Es posible que el volumen de los hechos inconvenientes aumente, como sucedió durante la guerra del Vietnam en virtud del crecimiento de un segmento de población crítico, que desde 1968 incluía algunos elementos de la elite. Sin embargo, aun en ese caso excepcional era raro que noticias y comentarios llegasen a ocupar un lugar en los medios de comunicación de no ajustarse al marco del dogma establecido (que postulaba los buenos propósitos de los Estados Unidos, que su conducta respondía a la agresión y al terror, etc.). Durante y después de la guerra del Vietnam los apologetas de la política del Estado solían aludir a los hechos inconvenientes, al «pesimismo» periódico de los expertos de los medios de comunicación, y a los debates tácticos para mostrar que los medios de comunicación eran «desfavorables» a la guerra e incluso los «culpables» de que se perdiera. Tales aseveraciones eran ridículas, pero de hecho lograron la doble ventaja de disfrazar el papel real de los medios de comunicación de masas y, al propio tiempo, de presionarlos para que se atuviesen aún más estrechamente a los presupuestos propagandísticos de la política estatal. Hemos argumentado extensamente la «naturalidad» de estos procesos, por los que los hechos inconvenientes apenas aparecen o, cuando lo hacen, se someten convenientemente a las asunciones del modelo; ello excluye en la práctica de los medios de comunicación cualquier disidencia fundamental (aunque se permita en la prensa marginal), y da pie a un sistema de propaganda que resulta bastante más creíble y efectivo, al articularse en torno a unos motivos patrióticos, que otro que se basara en la censura oficial.

En nuestra crítica de las prioridades y el sesgo de los medios de comunicación a menudo nos inspiramos en esos propios medios, al menos respecto de algunos hechos y casos. Ello proporciona la oportunidad para un clásico non sequitur, *en el que las citas que un*

crítico de la prensa extrae de las principales publicaciones periódicas se ofrecen como una «prueba» inequívoca de que la crítica se refuta a sí misma y de que la cobertura que los medios dan de los temas en cuestión es adecuada. No obstante, que los medios de comunicación den cuenta de algunos hechos acerca de una cuestión no prueba en absoluto la exactitud o la suficiencia de tal información. En realidad, dichos medios suprimen materialmente gran parte de ella, como mostraremos en los siguientes capítulos. Pero en este contexto todavía es más importante la atención que se dispensa a un hecho: su ubicación en el medio, el tono con que se trata, las repeticiones, la estructura de análisis bajo el que se presenta, así como los hechos conexos que lo acompañan y le dan significado (o impiden su comprensión). Que un lector meticuloso en busca de un hecho, dé a veces con él con diligencia y mirada escéptica, nada nos dice acerca de si ese hecho ha recibido la atención que merecía y ha sido debidamente contextualizado, de si ha resultado inteligible para el lector o si en realidad ha sido distorsionado o suprimido. El nivel de atención que se le dispense puede ser discutible, pero ello no añade mérito alguno a la pretensión de que si un investigador diligente y escéptico puede encontrar ciertos hechos en la prensa, quedan así demostradas la ausencia de sesgos radicales y las supresiones de facto.[14]

Una de las tesis centrales de este libro es que el perceptible modelo de indignantes campañas y supresiones, de matizaciones y de énfasis, de selección del contexto, las premisas y el orden del día general, resulta altamente funcional para el poder establecido y sensible a las necesidades del gobierno y de los principales grupos de poder. Una atención constante hacia las víctimas del comunismo ayuda a convencer al público de la maldad del enemigo y prepara el terreno para la intervención, la subversión, el apoyo a estados terroristas, una interminable carrera de armamentos y el conflicto militar, todo ello por una noble causa. Al mismo tiempo, la devoción de nuestros dirigentes y medios de comunicación por este restringido grupo de víctimas aumenta la autoestima y el patriotismo públi-

14. Un lector meticuloso de la prensa soviética podía enterarse de algunos hechos sobre la guerra de Afganistán que contradecían la línea del gobierno, pero estos hechos inoportunos no se tomarían en consideración en Occidente para demostrar la objetividad de la prensa soviética y la exactitud de la cobertura informativa de la cuestión.

cos, en la medida que demuestra la humanidad esencial del país y de sus habitantes.

La opinión pública no se da cuenta del silencio que se cierne sobre las víctimas de los estados clientes, lo que es tan importante para el apoyo de la política del Estado como la concentrada atención sobre las víctimas del enemigo. Al gobierno de Guatemala le hubiera resultado muy difícil asesinar a cientos de miles de ciudadanos durante la pasada década si la prensa de los Estados Unidos hubiese prestado la misma cobertura informativa a ese hecho que la que ha dedicado a las dificultades de Andrei Sajarov o al asesinato de Jerzy Popieluszko en Polonia (véase el capítulo segundo). Hubiera sido imposible sufragar una guerra brutal contra Vietnam del Sur y el resto de Indochina, que ha dejado un legado de miseria y destrucción que quizá jamás pueda superarse, si los medios de comunicación no se hubieran sumado a la causa, describiendo una agresión homicida como la defensa de la libertad, abriendo las puertas a las discrepancias tácticas sólo cuando los costes de tal agresión empezaron a ser demasiado altos para los intereses que representaban.

Lo mismo puede decirse de otros de los casos que trataremos y de muchos otros que no mencionaremos.

Desearíamos expresar nuestro agradecimiento por su ayuda en la preparación de este libro a las siguientes personas: James Aronson, Phillip Berryman, Larry Birns, Frank Brodhead, Holly Burkhalter, Donna Cooper, Carol Fouke, Eva Gold, Carol Goslant, Roy Head, Mary Herman, Rob Kirsch, Robert Krinsky, Alfred McClung Lee, Kent MacDougall, Nejat Ozyegin, Nancy Peters, Ellen Ray, William Schaap, Karin Wilkins, Warren Witte y Jamie Young. No obstante, sólo a los autores puede hacerse responsables de su contenido.

1. UN MODELO DE PROPAGANDA

Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática.[1]

En los países donde los resortes del poder están en manos de la burocracia estatal —mediante el control monopolístico sobre los medios de comunicación, a menudo complementado por la censura oficial— resulta obvio que dichos medios están al servicio de los fines de una determinada elite. Resulta mucho más difícil advertir la actuación de un sistema propagandístico cuando los medios de comunicación son privados y no existe censura formal; en particular cuando tales medios compiten activamente, atacan y exponen con cierta periodicidad los errores del gobierno y de las corporaciones, y se autocalifican enérgicamente de portavoces de la libertad de expresión y de los intereses generales de la comunidad. Lo que ya no es tan evidente (y sigue sin discutirse en los medios de comunicación), es la naturaleza limitada de tales críticas, así como la inmensa desigualdad de los recursos de que disponen y el efecto que tal desigualdad produce tanto en el acceso a una organización de medios de comunicación privada como en su funcionamiento y actuación.

Un modelo de propaganda pone el énfasis en esta desigualdad

1. Véase nota 4 del prefacio.

de riqueza y poder, así como en los efectos que ésta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios de comunicación de masas. Se ocupa también de trazar los vericuetos a través de los cuales el dinero y el poder tamizarán las noticias hasta dejarlas listas para su publicación, marginarán las discrepancias y permitirán que el gobierno y los intereses privados dominantes difundan un mensaje adecuado para el público. Los ingredientes esenciales de ese modelo propagandístico o conjunto de nuevos «filtros» se engloban en los siguientes epígrafes: 1) La envergadura, la concentración de propiedad, la riqueza del propietario, y la orientación de los beneficios de las empresas dominantes en el ámbito de los medios de comunicación; 2) la publicidad como fuente principal de ingresos de dichos medios; 3) la dependencia de los medios de la información proporcionada por el gobierno, las empresas y los «expertos», información, por lo demás, financiada y aprobada por esos proveedores principales y por otros agentes del poder; 4) las «contramedidas» y correctivos diversos como método para disciplinar a los medios de comunicación, y 5) el «anticomunismo» como religión nacional y mecanismo de control. Estos elementos interactúan y se refuerzan entre sí. La materia prima de las noticias debe pasar a través de sucesivos tamices, tras lo cual sólo queda el residuo «expurgado» y listo para publicar. Asimismo estos elementos determinan las premisas del discurso y su interpretación, la definición de lo que es periodístico y digno de publicarse, y exponen las bases y el funcionamiento de todo cuanto concierne a una campaña propagandística.

El dominio de los medios de comunicación por parte de la elite, y la marginación de la disidencia que se deriva de la actuación de los filtros que hemos mencionado, se realiza de una manera tan natural que la gente que trabaja en dichos medios, y que con frecuencia actúa con absoluta integridad y buena voluntad, son capaces de autoconvencerse de que eligen e interpretan las noticias de una manera «objetiva» y sobre la base de unos nuevos valores profesionales. De hecho, dentro de los límites que imponen los filtros que hemos señalado a menudo son objetivos, puesto que las constricciones tienen tanto poder y están integradas en el sistema de una manera tan consustancial que cuesta imaginar unas bases alternativas a partir de las que realizar nuevas elecciones. Al valorar el valor periodístico de las reiteradas afirmaciones del gobierno de los

Estados Unidos, según las cuales el 5 de noviembre de 1984 había tenido lugar un envío de aviones MIG a Nicaragua, los medios de comunicación no se detuvieron a considerar el sesgo inherente a la prioridad que se atribuye a la materia prima que proporciona el gobierno, o la posibilidad de que el gobierno pudiese estar manipulando las noticias[2] imponiendo su propio orden del día, desviando deliberadamente la atención que pudiera dispensarse a otro material.[3]

Se necesita una macrovisión, y también una microvisión (asunto por asunto), de las actuaciones de los medios de comunicación para percibir la pauta de manipulación y sesgo sistemático.

Examinemos más pormenorizadamente los principales componentes del modelo de propaganda, que luego aplicaremos y verificaremos en los siguientes capítulos.

2. Los representantes de los medios de comunicación pretenden que lo que el gobierno dice es «de interés periodístico» por derecho propio. Sin embargo, si las aserciones del gobierno son transmitidas sin contexto ni evaluación, y sin considerar un posible intento de manipulación por parte del gobierno, los propios medios de comunicación habrán permitido ser «dirigidos». Su objetividad es «nominal», no real.

A principios de octubre de 1986, la prensa filtró unos memorándums que indicaban que la administración Reagan había llevado a cabo una deliberada campaña de desinformación para influir en los acontecimientos de Libia. Los medios de comunicación de masas, que aceptaron este material sin hacer preguntas, expresaron una gran y justa indignación por haber sido engañados. Para agravar el absurdo, cinco años antes la prensa había denunciado un «programa de desinformación diseñado para poner en aprietos a Gaddafi y su gobierno» organizado por la CIA, junto a operaciones terroristas para derrocar a Gaddafi y tal vez asesinarlo (*Newsweek*, 3 de agosto de 1981; P. Edward Haley, *Qaddafi and the United States since 1969*, Praeger, Nueva York, 1984, p. 272). Pero no aprendieron la lección. De hecho, a los medios de comunicación se les engaña prácticamente a diario, pero raramente tienen que sufrir la afrenta de documentos gubernamentales que revelen su credulidad. En lo referente a Libia los medios de comunicación se conformaron con las ideas de cada una de las estratagemas propagandísticas, desde los «pelotones de choque» de 1981 hasta la bomba en la discoteca de Berlín, tragándose toda declaración por inverosímil que fuera, sin admitir posteriormente su error, y aparentemente incapaces de aprender de las sucesivas trampas —lo cual sugiere que se trata de errores complacientes. Véase Noam Chomsky, *Pirates & Emperors*, Claremont, Nueva York, 1986, capítulo 3. Tal como mostramos a lo largo del presente libro, una serie de mentiras del gobierno, expuestas sucesivamente, nunca parecen despertar escepticismo en los medios de comunicación con relación a una próxima declaración.

3. Para una descripción sobre la estrategia del gobierno para desviar la atención de las elecciones nicaragüenses mediante la falacia de los MIG, y la colaboración de los medios de comunicación en este programa gubernamental, véase «La crisis de los MIG urdida durante la semana electoral nicaragüense», en el capítulo 3.

1.1. PRIMER FILTRO: MAGNITUD, PROPIEDAD Y ORIENTACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En su análisis de la evolución de los medios de comunicación en el Reino Unido, James Curran y Jean Seaton describen cómo, en la primera mitad del siglo XIX, surgió una prensa radical que encontró audiencia entre la clase obrera del país. Esta prensa alternativa generó un efecto que reforzaba la conciencia de clase: unificó a los trabajadores al propugnar un sistema de valores alternativo y una cosmovisión desde la que analizar el mundo, «promoviendo una enorme confianza colectiva a base de constatar repetidamente el poder potencial de los trabajadores para lograr un cambio social mediante la fuerza de la "unión" y la acción organizada».[4] Todo ello fue considerado por la elite dirigente como una gran amenaza. Un miembro del Parlamento llegó a afirmar que los periódicos de la clase obrera «inflamaban las pasiones y despertaban el egoísmo, al contrastar sus condiciones actuales con las que aspiraban a lograr en el futuro, unas condiciones que por lo demás eran incompatibles con la naturaleza humana y con aquellas leyes inmutables que la providencia había establecido para la regulación de la sociedad civil».[5] A resultas de ello se produjo un intento de aplastar los medios de comunicación de la clase obrera mediante persecuciones y leyes antilibelo, exigiendo una costosa fianza como condición para su publicación, e imponiendo diversos impuestos con el propósito de asfixiar económicamente a los medios radicales aumentando su coste. Estos esfuerzos coercitivos no surtieron efecto, y a mediados de siglo fueron abandonados en favor del postulado liberal según el cual el mercado impondría formalidad.

Curran y Seaton muestran como, efectivamente, el mercado *logró* lo que la intervención del Estado no había podido conseguir. Tras la abrogación de los impuestos punitivos sobre los periódicos entre 1853 y 1869, nació un nuevo periódico local, pero en todo lo que quedaba de siglo no apareció ningún periódico local para la clase trabajadora. Curran y Seaton señalan que:

4. James Curran y Jean Seaton, *Power Without Responsability: The Press and Broadcasting in Britain*, Methuen, Londres, 1985², p. 24.

5. Citado en *op. cit.*, p. 23.

> De hecho, el eclipse de la prensa radical de la nación fue tan absoluto que cuando el Partido Laborista se desarrolló a partir del movimiento obrero durante la primera década del siglo XX, no obtuvo el respaldo exclusivo ni de un solo diario o dominical de ámbito nacional.[6]

Una de las razones de peso para ello fue el aumento de escala de la empresa periodística, con el consiguiente e ininterrumpido incremento de los costes de capital a partir de mediados del siglo XIX, a causa de los adelantos tecnológicos y a la creciente presión de los propietarios de dichas empresas por lograr una mayor audiencia. La expansión del mercado libre vino acompañada por una «industrialización de la prensa». En 1837 el coste total de poner en marcha un semanario nacional rentable se cifraba en unas mil libras, lo que suponía a su vez una venta de al menos 6.200 ejemplares para cubrir los costes. En 1867 el coste de salida estimado de un diario londinense era de 50.000 libras. El *Sunday Express*, que apareció en 1918, gastó más de dos millones de libras antes de cubrir costes incluso con una difusión de más de 250.000 ejemplares.[7]

Otro tanto sucedió en los Estados Unidos, donde en 1851 el coste de salida de un nuevo periódico en Nueva York era de 69.000 dólares. La venta pública del *St. Louis Democrat* en 1872 alcanzó una cifra de 456.000 dólares, y en la década de los años veinte se llegaron a vender periódicos urbanos por cifras que oscilaban entre los seis y los dieciocho millones de dólares.[8] Sólo el coste de la maquinaria, aun de los periódicos de menor tirada, supuso durante décadas cifras de cientos de miles de dólares; en 1945 se podía decir ya que «incluso la editora periodística más modesta es un gran negocio ... [y] ya no se trata de una empresa que se pueda acometer a la ligera, ni siquiera disponiendo de un capital sustancial y, por supuesto, en modo alguno si no se dispone de él».[9]

6. *Op. cit.*, p. 34.
7. *Op. cit.*, pp. 38-39.
8. Alfred McClung Lee, *The Daily Newspaper in America*, Macmillan, Nueva York, 1937, pp. 166-173.
9. Earl Vance, «Freedom of the Press for Whom», *Virginia Quarterly Review* (verano de 1945), citado en *Survival of a Free, Competitive Press: The Small Newspaper: Democracy's Grass Roots*, Informe del Presidente, Senate Small Business Committee, 80 Congreso, I sesión, 1947, p. 54.

Por consiguiente, el primer filtro —la limitación de la propiedad de los medios de comunicación de una magnitud y difusión significativa, por exigir una gran inversión— era ya aplicable desde más de un siglo antes, y con el tiempo se iba haciendo cada vez más importante.[10] En 1986 existían en los Estados Unidos unos 1.500 diarios, 11.000 revistas, 9.000 emisoras de radio y 1.500 de televisión, 2.400 editoriales y 7 estudios cinematográficos, en total, unos 25.000 medios de comunicación. Buena parte en ellos, empero, son meros difusores de noticias de ámbito local y escasa tirada, que dependen de las grandes compañías nacionales y de las agencias que suministran información por teletipo o procedimientos afines para todo lo que no sean noticias de ámbito local. En su mayor parte pertenecen a un propietario común, que muchas veces abarca todas las modalidades de medios de comunicación.[11]

Ben Bagdikian señala que pese al gran número de medios de comunicación existentes, las veintinueve grandes organizaciones de estos medios dan cuenta de más de la mitad de la producción de periódicos, y de la mayoría de ventas y audiciencias de las revistas, emisoras, libros y películas. Afirma también que «constituyen un nuevo Ministerio Privado de Información y Cultura», que puede conformar el orden del día nacional.[12]

De hecho, al sugerir la autonomía de los medios de comunicación con respecto al poder del gobierno y de las corporaciones (algo, a nuestro entender, incompatible con la realidad estructural, como luego mostraremos), Bagdikian puede señalar también el verdadero grado de concentración existente en la fabricación de noticias. Desde hace tiempo es sobradamente conocida la estratificación de los medios de comunicación, con un estrato superior —que se mide por el prestigio, los recursos y la difusión— en el que se

10. Téngase en cuenta que hablamos de medios con un alcance substancial: medios de comunicación de masas. Siempre ha sido posible lanzar periódicos de poca circulación y producir boletines ciclostilados o fotocopiados y hacerlos llegar a un público reducido. Pero en Estados Unidos es típico que incluso los periódicos pequeños sobrevivan sólo gracias a las contribuciones de ricos ángeles financieros.

11. En 1987, la Times-Mirror Company, por ejemplo, poseía periódicos en Los Ángeles, Baltimore, Denver y Hartford, Connecticut, tenía sucursales que editaban libros y publicaban revistas, y era propietaria de sistemas de televisión por cable y de siete emisoras de televisión.

12. Ben Bagdikian, *The Media Monopoly*, Beacon Press, Boston, 1987², p. 16.

encuentran de diez a veinticuatro organizaciones.[13] Es este estrato superior, junto al gobierno y a los servicios informativos por teletipo, quien define el orden del día y proporciona la mayoría de noticias nacionales e internacionales a los estratos inferiores de los medios de comunicación, y por ende al público en general.[14] La centralización de este estrato superior se ha incrementado de manera substancial con el auge de la televisión y de su red nacional acaecida tras la segunda guerra mundial. Los mercados de noticias anteriores a la televisión eran locales, aunque dependían en gran medida de los altos estratos y de un reducido número de fuentes para las noticias nacionales e internacionales. Las emisoras televisivas proporcionan la información nacional e internacional a partir de tres fuentes nacionales; por otro lado, la televisión es actualmente el principal proveedor de noticias del público.[15] No obstante, la

13. David L. Paletz y Robert M. Entman, *Media. Power. Politics*, Free Press, Nueva York, 1981, p. 7; Stephen Hess, *The Government/Press Connection: Press Officers and Their Offices*, Brookings, Washington, 1984, pp. 99-100.

14. Las cuatro principales agencias de información occidentales —Associated Press, United Press International, Reuters y Agence France Presse— dan cuenta de un 80 por 100 de las noticias que hoy circulan por el mundo. AP es propiedad de periódicos; UPI es de propiedad privada; Reuters era principalmente propiedad de los medios de comunicación británicos hasta que vendió acciones en 1984, pero el control fue mantenido por los propietarios originales al otorgar inferiores derechos de voto a los nuevos accionistas; la Agence France Presse está fuertemente subvencionada por el gobierno francés. Como señaló Jonathan Fenby, los servicios de las agencias «existen para servir a los mercados», y por consiguiente, se preocupan primordialmente «por los ricos medios de comunicación de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y cada vez más por la comunidad financiera». Compiten encarnizadamente, pero AP y UPI son en realidad empresas estadounidenses que operan a escala internacional ... Sin una base nacional, AP y UPI no podrían operar como agencias internacionales. Por eso tienen que ser organizaciones estadounidenses, sujetas a presiones y requerimientos estadounidenses» (*The International News Services*, Schocken, Nueva York, 1986, pp. 7, 9, 73-74). Véase también Anthony Smith, *The Geopolitics of Information: How Western Culture Dominates the World*, Oxford University Press, Nueva York, 1980, capítulo 3.

15. El decimocuarto informe anual Roper, «Public Attitudes toward Television and Other Media in a Time of Change» (mayo de 1985), indica que en 1984, el 64 por 100 del muestreo mencionó a la televisión como el lugar «donde usualmente obtenía la mayor parte de las noticias sobre lo que ocurre hoy en el mundo ...» (p. 3). Se ha advertido a menudo que las cadenas de televisión dependen en gran medida de prestigiosos periódicos, de las agencias de información y del gobierno para seleccionar sus noticias. Su autonomía como productores de noticias puede ser exagerada fácilmente.

mayoría de edad de la televisión por cable ha provocado una fragmentación de la audiencia televisiva y una lenta erosión del segmento de mercado y del poder de las emisoras televisivas.

El cuadro 1.1 proporciona alguna información financiera básica de los veinticuatro gigantes de los medios de comunicación (o de las compañías matrices que los controlan) que forman el estrato superior de las empresas de medios de comunicación de los Estados Unidos.[16] El recuento incluye: 1) las tres cadenas de televisión: ABC (a través de su propietario, Capital Cities), CBS y NBC (a partir de su propietario último, General Electric, GE); 2) los imperios compuestos por los principales periódicos: *New York Times*, *Washington Post*, *Los Angeles Times* (Times-Mirror), *Wall Street Journal* (Dow Jones), Knight-Ridder, Gannett, Hearst, Scripps-Howard, Newhouse (Advance Publications), y el Tribune Company; 3) las revistas de actualidad y de interés general más importantes: *Time*, *Newsweek* (incluida en el *Washington Post*), *Reader's Digest*, *TV Guide* (Triangle), el *U.S. News & World Report*; 4) uno de los principales editores de libros (McGraw-Hill); y 5) los sistemas de televisión por cable de creciente importancia: los de Murdoch, Turner, Cox, General Corp., Taft, Storer,[17] y el Group W (Westinghouse). La mayor parte de estas organizaciones descollan en más de un campo y están arbitrariamente situadas en una categoría determinada (Time, Inc., es muy importante en la televisión por cable, así como en la publicación de revistas; McGraw-Hill es uno de los principales editores de revistas; la Tribune Company se ha convertido en una gran potencia en el campo de la televisión así como en el de los periódicos; Hearst es importante tanto en periódicos como en revistas, y Murdoch posee intereses significativos en periódicos, en televisión y en *holdings* de películas).

16. Los miembros del estrato superior satisfacen los requisitos de amplitud de audiencia, de importancia estableciendo nuevos estándares, y de activo y beneficios totales. La última media docena de nuestros veinticuatro suponen una cierta arbitrariedad en la selección, aunque la amplitud de la audiencia sigue siendo nuestro criterio fundamental. McGraw-Hill está incluido por su fuerza conjunta en el negocio de libros y revistas de contenido y alcance político.

17. Tal como se cita en el cuadro 1.1, nota 7, Storer pasó al control temporal de la firma de valores Kohlberg Kravis Roberts & Co. en 1985. Puesto que su destino último estaba poco claro en el momento de escribir este libro, y los datos financieros ya no eran disponibles después de 1984, hemos mantenido a Storer en el cuadro y lo inscribimos aquí, a pesar de su incierto *status*.

Estas veinticuatro empresas son enormes, son corporaciones con ánimo de lucro y pertenecen y están bajo el control de grandes fortunas. En el cuadro 1.1 podemos ver que todas las compañías importantes de las que se puede obtener información —excepto una— poseen un activo que supera los mil millones de dólares, siendo la media dos mil seiscientos millones de dólares. El cuadro muestra también que aproximadamente tres cuartas partes de estos gigantes de los medios de comunicación tienen beneficios (descontando impuestos y tasas fiscales) que superan los cien millones de dólares, con un promedio de ciento ochenta y tres millones.

CUADRO 1.1

Datos financieros de las veinticuatro empresas de medios de comunicación más importantes (o de sus casas matrices, diciembre de 1986)

Empresa	Ingresos totales (millones $)	Beneficios sin descontar impuestos (millones $)	Beneficios descontando impuestos (millones $)	Beneficios totales (millones $)
Advance Publication (Newhouse)[1]	2.500	ND	ND	2.200
Capital Cities/ABC	5.191	688	448	4.124
CBS	3.370	470	370	4.754
Cox Communications[2]	1.111	170	87	743
Dow Jones & Co.	1.236	331	183	1.135
Gannett	3.365	540	276	2.801
General Electric (NBC)	34.591	3.689	2.492	36.725
Hearst[3]	4.040	ND	215 (1983)	2.100 (1983)
Knight-Ridder	1.947	267	140	1.911
McGraw-Hill	1.463	296	154	1.577
News Corp. (Murdoch)[4]	8.460	377	170	3.822
New York Times	1.405	256	132	1.565
Reader's Digest[5]	ND	75-100 (1985)	ND	1.400 (1985)
Scripps-Howard[6]	ND	ND	ND	1.062
Storer[7]	1.242	68	(—17)	537
Taft	1.257	(—11)	(—53)	500

Empresa	Ingresos totales (millones $)	Beneficios sin descontar impuestos (millones $)	Beneficios descontando impuestos (millones $)	Beneficios totales (millones $)
Time, Inc.	4.230	626	376	3.762
Times-Mirror	2.929	680	408	2.948
Triangle[8]	ND	ND	ND	730
Tribune Co.	2.589	523	293	2.030
Turner Broadcasting	1.904	(—185)	(—187)	570
U.S. News & World Report[9]	200+	ND	ND	140
Washington Post	1.145	205	100	1.215
Westinghouse	8.482	801	670	10.731

ND = Datos no disponibles.

1. Los ingresos totales los hemos extraído del total del potencial económico de la familia Newhouse en 1985, publicado en la revista *Forbes*. Los beneficios totales se refieren solamente a los obtenidos por sus medios de comunicación, según información publicada en *Advertising Age*, 29 de junio de 1987.

2. La empresa Cox Communications fue de propiedad pública hasta 1985, año en el que se fusionó con otra empresa de la familia Cox, la Cox Enterprises. Los datos aquí expuestos pertenecen al balance de 1984, último año en que fue de propiedad pública y se dio a conocer información financiera relevante.

3. Datos recogidos en «Citizens Rich», de William Barret, *Forbes*, 14 de diciembre de 1987.

4. Estas cifras son en dólares australianos y corresponden al 30 de junio de 1986; en aquel momento el dólar australiano se cotizaba a 68/100 de un dólar estadounidense.

5. Datos de 1985, publicados en el *New York Times*, 9 de febrero de 1986.

6. Beneficios que se refieren únicamente a las ventas obtenidas por los medios de comunicación, según consta en *Advertising Age*, 29 de junio de 1987.

7. Storer pasó al control de la Kohlberg Kravis Roberts & Co., de Wall Street, en 1985. Los datos expuestos aquí pertenecen a diciembre de 1984, último período de autonomía de Storer y última vez que se puso información a disposición del público.

8. Beneficios que se refieren únicamente a las ventas obtenidas por los medios de comunicación, según el *Advertising Age*, 29 de junio de 1987.

9. Ingresos totales de 1985-1986, según el artículo «Mort Zuckerman, Media's New Mogul», publicado en la revista *Fortune*, 14 de octubre de 1985. Beneficios totales publicados en *Advertising Age*, 28 de junio de 1987.

Muchas de las grandes empresas de medios de comunicación están totalmente integradas en el mercado: las restantes son también objeto de fuertes presiones por parte de accionistas, directores y banqueros para que se concentren en cuestiones secundarias o poco comprometidas. Estas presiones se han intensificado en las últimas décadas, puesto que las acciones de los medios de comunicación se han convertido en las favoritas del mercado; por otro lado, quienes de manera real o potencial poseen bienes televisivos o periodísticos pueden capitalizar el incremento de los niveles de audiencia y los ingresos publicitarios convirtiéndolos en valores que multiplican la imagen de marca de los medios de comunicación, y les proporcionan abundantes riquezas.[18] Ello ha estimulado la participación de los especuladores y ha incrementado la presión y la tentación de centrarse intensivamente en la rentabilidad. Las familias propietarias han visto aumentar las divergencias entre aquellos que desean aprovecharse de las nuevas oportunidades y quienes desean mantener el control familiar; con frecuencia sus disensiones han precipitado crisis que han acabado finalmente con la venta de los intereses familiares.[19]

18. John Kluge, tras haber comprado en 1984 el sistema Metromedia en una ventajosa opción de compra por 1.100 millones de dólares, liquidó varias partes de este sistema en 1985-1986 por 5.500 millones de dólares, obteniendo un beneficio personal de unos 3.000 millones (Gary Hector, «Are Shareholders heated by LBOs», *Fortune*, 17 de enero de 1987, p. 100). La emisora KDLA-TV de Los Ángeles, que en 1983 fue comprada por un grupo ajeno al sector en una ventajosa opción de compra por 245 millones de dólares, fue vendida a la Tribune Company por 510 millones dos años después (Richard Stevenson, «Tribune in TV Deal for $510 Million», *New York Times*, 7 de mayo de 1985). Véase también «The Media Magnates: Why Huge Fortunes Roll Off the Presses», *Fortune* (2 de octubre de 1987).

19. Una escisión entre los herederos de James E. Scripps tuvo como resultado final la venta del *Detroit Evening News*. Según un artículo, «Daniel Marentette, miembro de la familia Scripps y que se define a sí mismo como "accionista descontento", dice que los miembros de la familia quieren un mejor interés para su dinero. "Obtenemos mejores rendimientos invirtiendo en una cuenta corriente de Nueva York", dice Mr. Marentette, el cual vende caballos de carreras» (Damon Darlin, «Takeover Rumors Hit Detroit News Parent», *Wall Street Journal*, 18 de julio de 1985). La escisión de la familia Bingham sobre estas cuestiones condujo a la venta del *Louisville Courier-Journal*; los periódicos de New Haven de la familia Jackson se vendieron tras años de riñas, y «el precio de venta (de dichos periódicos), 185 millones de dólares, sólo ha servido para divulgar el valor potencial de la posesión familiar de los periódicos familiares en otros sitios» (Geraldine Fabrikant, «Newspaper Properties, Hotter Than Ever», *New York Times*, 17 de agosto de 1986).

Esta tendencia hacia una mayor integración de los medios de comunicación en el sistema de mercado se ha acelerado con la desaparición de las normas que limitaban la concentración de los medios, la propiedad cruzada y el control por parte de compañías ajenas a los mismos.[20] Asimismo se han abandonado las restricciones —bastante débiles anteriormente— acerca de la publicidad en radio y televisión, la programación de espectáculos incompletos y las amenazas de la «doctrina de la imparcialidad», dejando el campo libre al uso comercial desenfrenado de las ondas.[21]

La mayor rentabilidad de los medios de comunicación en un entorno exento de regulaciones ha llevado asimismo a un incremento de absorciones y de amenazas de absorción, incluso entre gigantes como la CBS y Time, Inc., directamente atacados o amenazados. Esto ha forzado a los gestores de los gigantes de los medios de comunicación a contraer mayores deudas y a centrarse aún más agresiva e inequívocamente en la rentabilidad, a fin de aplacar a los

20. La administración Reagan estrechó el control sobre los titulares existentes de licencias de emisoras de televisión incrementando la duración de éstas de tres a cinco años, y su Federal Communications Commission (FCC) hizo que la renovación de dichas licencias fuera prácticamente automática. La FCC también facilitó en gran medida la especulación y el comercio de propiedades televisivas mediante la reducción del período de titularidad requerido para vender propiedades de reciente adquisición de tres años a uno.

La FCC y el Departamento de Justicia de la era Reagan también rechazaron impugnar las fusiones y las tentativas de adquisición que aumentarían significativamente la concentración de poder (GE-RCA) o la concentración de medios de comunicación (Capital Cities-ABC). Además, a partir del 2 de abril de 1985, los propietarios de medios de comunicación pudieron poseer hasta doce emisoras de televisión, mientras su audiencia total no excediera el 25 por 100 de los receptores de televisión de la nación; y también pudieron tener doce emisoras de FM y doce de onda media, cuando la «norma 7-7-7» de 1953 fue sustituida por la «norma 12-12-12». Véase Herbert H. Howard, «Group and Cross-Media Ownership of Television Stations: 1985», National Association of Broadcasters, Washington, 1985.

21. Mark Fowler, presidente de la FCC en la era Reagan, lo justificó alegando que las opciones del mercado se están abriendo y que el público debe tener libertad de elección. Criticado por Fred Friendly por abolir el criterio de interés público de la ley, Fowler replicó que Friendly «desconfía de la capacidad del público para tomar decisiones propias por medio del mecanismo del mercado. Yo no» (Jeanne Saddler, «Clear Channel: Broadcast Takeovers Meet Less FCC Static, and Critics Are Upset», *Wall Street Journal*, 2 de junio de 1985). Entre otros problemas, Fowler ignora el hecho de que la verdadera libertad de elección implica la posibilidad de seleccionar opciones que no pueden ser ofrecidas por un oligopolio que vende audiencias a los anunciantes.

propietarios y reducir el atractivo que sus bienes tienen para los intrusos.[22] Han cedido parte de su limitada autonomía en favor de los banqueros, los inversores institucionales y grandes inversionistas particulares a los que han tenido que implorar en su calidad de «paladines blancos».[23]

Mientras que las acciones de la gran mayoría de las principales empresas de medios de comunicación se negocian en los mercados de valores, aproximadamente las dos terceras partes de estas compañías están rigurosamente dominadas o controladas por miembros de las familias que las crearon, que conservan gran número de acciones. Esta situación está en proceso de cambio en la medida que se difumina la propiedad familiar entre un gran número de herederos y que las oportunidades del mercado para la venta de los bienes de medios de comunicación siguen mejorando. Con todo, la persistencia del control familiar es evidente, según los datos que se muestran en el cuadro 1.2, en el que asimismo podemos ver la enorme riqueza que poseen las familias que controlan las principales empresas de medios de comunicación. En siete de estas veinticuatro empresas, el valor de mercado de los bienes en poder de las

22. En 1985, la CBS incrementó su deuda en más o menos 1.000 millones de dólares para financiar la adquisición del 2 por 100 de sus propias acciones, con el objeto de repeler una tentativa de adquisición de Ted Turner. El *Wall Street Journal* señaló que «con una deuda que alcanza el 60 por 100 de su capital, necesita mantener altos los ingresos publicitarios para reembolsar los préstamos y el interés» (Peter Barnes, «CBS Profit Hinges on Better TV Ratings», 6 de junio de 1986). Debido al lento crecimiento de los ingresos publicitarios, la CBS emprendió una reducción de plantilla que alcanzó a seiscientos miembros de la división televisiva, la mayor de CBS desde la pérdida de la publicidad de cigarrillos en 1971 (Peter Barnes, «CBS Will Cut up to 600 Posts in Broadcasting», *Wall Street Journal*, 1 de julio de 1986). En junio de 1986, Time, Inc., emprendió un programa para recomprar hasta 10 millones de acciones, o el 16 por 100 de su capital social, con un coste estimado de unos 900 millones de dólares, de nuevo con el propósito de reducir la amenaza de una adquisición hostil (Laura Landro, «Time Will Buy as Much as 16 % of Its Common», *Wall Street Journal*, 20 de junio de 1986).

23. En respuesta a las amenazas de Jesse Helms y Turner contra la CBS, Lawrence Tisch, de la Loews Corporation, fue alentado a aumentar su participación en el capital social de la CBS, que ya era de un 11,7 por 100. En agosto de 1986, la participación de Loews alcanzó el 24,9 por 100, y Tisch obtuvo una posición de control virtual. De acuerdo con William Paley, que poseía el 8,1 por 100 de las acciones, el director ejecutivo de la CBS fue destituido y el propio Tisch tomó posesión del cargo, de forma provisional (Peter Barnes, «Loews Increases Its Stake in CBS to Almost 25 %», *Wall Street Journal*, 2 de agosto de 1986).

CUADRO 1.2

Potencial económico de los grupos mayoritarios de las veinticuatro empresas más importantes de medios de comunicación (o de sus casas matrices, febrero de 1986)

Empresa	Familia o grupo mayoritario	Porcentaje de acciones propiedad del grupo mayoritario	Valor de las acciones del grupo mayoritario (millones $)
Advance Publications	Fam. Newhouse	Prácticamente total	2.200[F]
Capital Cities	Funcionarios y directores (FD)	20,7 (Warren Buffett, 17,8)	711[P]
CBS	FD	20,6[1]	551[P]
Cox Communications	Fam. Cox	36	1.900[F]
Dow Jones & Co.	Fam. Bancroft-Cox	54	1.500[P]
Gannett	FD	1.9	95[P]
General Electric	FD	Inferior a 1	171[P]
Hearst	Fam. Hearst	33	1.500[F]
Knight-Ridder	Fam. Knight y Ridder	18	447[P]
McGraw-Hill	Fam. McGraw	*c.*20	450[F]
News Corp.	Fam. Murdoch	49	300[F]
New York Times	Fam. Sulzberger	80	450[F]
Reader's Digest	Estado de Wallace gestionada por *trust*, sin beneficiarios personales	ND	ND
Scripps-Howard	Herederos Scripps	ND	1.400[F]
Storer	FD	8,4	143[P]
Taft	FD	4,8	37[P]
Time, Inc.	FD	10,7 (Luce 4,6, Temple 3,2)	406[P]
Times-Mirror	Chandlers	35	1.200[P]
Triangle	Annenbergs	Prácticamente total	1.600[F]

Empresa	Familia o grupo mayoritario	Porcentaje de acciones propiedad del grupo mayoritario	Valor de las acciones del grupo mayoritario (millones $)
Tribune Co.	Hered. McCormick	16,6	273[P]
Turner Broadcasting	Turner	80	222[P]
U.S. News & World Report	Zuckerman	Prácticamente total	176[2]
Washington Post	Familia Graham	50+	350[F]
Westinghouse	FD	Inferior a 1	42[P]

FUENTES: P significa procedente de fuentes autorizadas por la empresa, y calculando el valor accionarial según la cotización de febrero de 1986; F significa procedente de la valoración anual que la revista *Forbes* efectúa del potencial económico de los poderosos.

1. Estos *holdings* incluyen el 8,1 de William Paley y un 12,2 por 100 de Laurence Tisch, mediante una inversión efectuada por Loews. Durante ese mismo año, Lowes incrementó su inversión hasta un 29,4 por 100, y así, Laurence Tisch se convirtió en un destacado funcionario ejecutivo.

2. Este es el precio pagado por Zuckerman cuando compró *U.S. News* en 1984. Véase, de Gwen Kinkead, «Mort Zuckerman, Media's New Mogul» publicado en *Fortune*, el 14 de octubre de 1985, p. 196.

familias que las controlaban excedía, a mediados de los ochenta, los mil millones de dólares, y el valor medio se aproximaba a los quinientos millones de dólares.[24] Evidentemente estos grupos de control gozan de una posición especial en el *statu quo* en virtud de su riqueza y de su situación estratégica en una de las grandes instituciones de la sociedad. Y ejercitan el poder que les confiere esta situación estratégica, por lo menos estableciendo los objetivos generales de la empresa y eligiendo a sus máximos dirigentes.[25]

24. Se trataría de ocho empresas si incluyéramos los bienes de Lila Wallace, que falleció en 1984, encomendando su participación mayoritaria en el capital de *Reader's Digest* a los administradores de dicha entidad.

25. Tal como citamos en el prefacio, los neoconservadores aluden regularmente al dominio «liberal» de los medios de comunicación, suponiendo o pretendiendo que los subordinados son los que toman las decisiones, y no la gente que posee o

Los grupos de control de los gigantes de los medios de comunicación han establecido estrechas relaciones con la flor y nata de la comunidad empresarial, a través de sus juntas directivas y los vínculos sociales. En el caso de las empresas de televisión y sistemas por cable NBC y Group W, sus respectivas empresas matrices (General Electric y Westinghouse), son a su vez grandes gigantes empresariales, cuyos consejos de administración están dominados por ejecutivos empresariales y bancarios. Muchas de las restantes grandes empresas de medios de comunicación tienen consejos de administración compuestos fundamentalmente por personal de la casa, característica generalizada entre las compañías relativamente pequeñas y dominadas por su propietario. Cuanto mayor es la empresa y mayor la distribución de las acciones, mayor es el número y la proporción de directivos foráneos. Las características de estos directivos foráneos de los gigantes de los medios de comunicación son muy similares a las de otras grandes empresas de otros ámbitos. El cuadro 1.3 muestra que los ejecutivos empresariales y los banqueros en activo suman todos juntos algo más de la mitad del total de directores foráneos de los diez gigantes de los medios de comunicación; los abogados y los ejecutivos empresariales y bancarios jubilados (que suman nueve de los trece que figuran como tales) hacen que el total de directores foráneos ascienda hasta unos dos tercios del total. Estas 95 personas tienen asimismo cargos directivos en otros 36 bancos y 255 compañías (además de las empresas de medios de comunicación y de sus propias empresas a las que están principalmente vinculados).[26]

Además de estas vinculaciones entre los consejos de administración, todas las grandes empresas de medios de comunicación nego-

---

controla los medios de comunicación. Estos datos, que muestran la posición de riqueza de los propietarios de los medios de comunicación, son algo que comprensiblemente prefieren ignorar. A veces, no obstante, los neoconservadores se vuelven «populistas», y —financiados por la Mobil Oil Corporation y Richard Mellon Scaife— pretenden estar hablando en nombre de las masas en oposición a una adinerada elite que domina los medios de comunicación. Para una discusión más amplia, véase el análisis de Edward S. Herman de *The Spirit of Democratic Capitalism*, «Michael Novak's Promised Land: Unfettered Corporate Capitalism», *Monthly Review*, octubre de 1983, y las obras citadas en el prefacio, nota 3.

26. Se encuentran resultados similares en Peter Dreier, «The Position of the Press in the U.S. Power Structure», *Social Problems* (febrero de 1982), pp. 298-310.

CUADRO 1.3

*Filiación de los directores foráneos de diez de las grandes empresas de medios de comunicación (o sus casas matrices, en 1986)**

Filiación principal	Número	Porcentaje
Ejecutivo empresarial	39	41,1
Abogado	8	8,4
Jubilado (antiguo ejecutivo empresarial o banquero)	13 (9)	13,7 (9,5)
Banquero	8	8,4
Asesor	4	4,2
Organización sin ánimo de lucro	15	15,8
Otros	8	8,4
TOTAL	95	100,0
Otras relaciones		
Otros directivos (de banco)	255 (36)	
Antiguos funcionarios del gobierno	15	
Miembros del Council on Foreign Relations	20	

* Dow Jones & Co.; *Washington Post*; *New York Times*; *Time*, Inc.; CBS; Times-Mirror; Capital Cities; General Electric; Gannet, y Knight Ridder.

cian con banqueros e inversionistas comerciales; logran así líneas de crédito y préstamos, recibos, asesoría y servicios en la venta de acciones y obligaciones, y también respecto de las oportunidades de compra y las amenazas de absorción. Por su parte los bancos y otros inversionistas institucionales poseen grandes partidas de acciones de los medios de comunicación. A principios de la década de los ochenta, tales instituciones dominaban el 44 por 100 de las acciones de los periódicos de propiedad pública y el 35 por 100 de las acciones de las compañías de radiodifusión también de propiedad pública.[27] Con frecuencia estos inversionistas se cuentan tam-

27. Benjamin Compaine *et al.*, *Anatomy of the Communiations Industry: Who Owns the Media?*, Knowledge Industry Publications, White Plains, N.Y., 1982, p. 463.

bién entre los mayores accionistas de las empresas privadas. Por ejemplo, en 1980-1981 el Capital Group, una organización de empresas inversionistas, controlaba el 7,1 por 100 de las acciones de la ABC, el 6,6 por 100 de Knight-Ridder, el 6 por 100 de Time, Inc., y el 2,8 por 100 de Westinghouse.[28] Estos *holdings* o compañías tenedoras de acciones, individual y colectivamente, no ostentan el control, si bien estos grandes inversionistas pueden hacer oír su voz, y sus acciones pueden afectar el bienestar de las empresas y de sus directivos.[29] Si éstos no consiguen emprender acciones que favorezcan las ganancias de los accionistas, los inversionistas institucionales tenderán a vender las acciones (devaluando su precio), o escucharán con agrado los proyectos de absorción que otros les presenten. Estos inversionistas son una fuerza que contribuye a que las empresas de medios de comunicación se orienten hacia unos objetivos (rentabilidad) estrictamente de mercado.

De ahí la diversificación y la difusión geográfica de las grandes empresas de medios de comunicación. La mayoría de ellas se han diversificado fuera de su campo de acción específico, hacia otros sectores en crecimiento. Muchas de las antiguas empresas de medios de comunicación que trabajaban fundamentalmente en la prensa, temerosas del poder de la televisión y de sus efectos sobre los beneficios devengados por la publicidad, se han incorporado tan rápidamente como les ha sido posible a la radiodifusión y a la televisión por cable. También la Time, Inc., ha efectuado una gran diversificación incorporándose a la televisión por cable, que actualmente representa más de la mitad de sus beneficios. Sólo una pequeña minoría de las veinticuatro principales empresas de medios de comunicación permanecen en un único sector.[30]

Asimismo estas grandes empresas se han diversificado en otros sectores ajenos a los medios de comunicación, y compañías de estos otros sectores han establecido a su vez una fuerte presencia en tales

28. *Op. cit.*, pp. 458-460.

29. Véase Edward S. Herman, *Corporate Control, Corporate Power*, Cambridge University Press, Nueva York, 1981, pp. 26-54.

30. Sobre los intereses de quince principales empresas periodísticas en otros campos de los medios, y una lista de verificación de otros sectores en los que participan destacadas firmas de la variada industria de los medios de comunicación, véase Compaine, *Anatomy of the Communications Industry*, cuadros 2.19 y 8.1, pp. 11 y 452-453.

medios. Entre estas últimas las más importantes son General Electric, propietaria de la RCA, que a su vez posee la NBC, y Westinghouse, a la que pertenecen importantes emisoras de televisión, televisión por cable, y de radio. Tanto General Electric como Westinghouse son empresas multinacionales, enormes y diversificadas, estrechamente vinculadas a los controvertidos sectores de la industria de armamentos y la energía nuclear. Cabe recordar aquí que de 1965 a 1967 la International Telephone and Telegraph (ITT) se propuso comprar la ABC, y que dicho intento se vio frustrado tras enormes protestas que se centraron en los peligros que representaba permitir que una gran empresa multinacional, con importantes inversiones en el extranjero y gran actividad comercial, controlase la producción de una gran empresa de medios de comunicación.[31] El temor era que el control por parte de la ITT «pudiese comprometer la independencia de las informaciones de la ABC, especialmente las referidas a los acontecimientos políticos que ocurriesen en países en los que la ITT tenía intereses».[32] La firmeza de la decisión que desautorizaba esta adquisición parece haber quedado justificada por posteriores revelaciones sobre los sobornos políticos efectuados por la ITT y su implicación en las intentonas de derrocar el gobierno chileno. Sin embargo, mucho antes del caso de la ITT, a empresas como la RCA y Westinghouse se les permitió controlar empresas de medios de comunicación, aunque algunas de las objeciones aplicables a la ITT parecen ser asimismo aplicables a éstas. General Electric es una empresa más poderosa que la ITT, con un amplio alcance internacional, profundamente comprometida en el negocio de la energía nuclear, y bastante más importante que la ITT por lo que se refiere a la industria armamentística. Se trata de una organización altamente centralizada y bastante secreta, pero con una larga carrera en decisiones «políticas».[33] General Electric ha contribuido a la financiación del American Enterprise Institute, fundación intelectual de derechas que apoya a los intelectuales que propagan por el mun-

31. La fusión había sido autorizada por la FCC, pero fue obstaculizada mediante la intervención del Departamento de Justicia. Véase «A Broken Engagement for ITT and ABC», *Business Week* (6 de enero de 1967).

32. *Op. cit.*

33. Sobre las enormes y efectivas operaciones de cabildeo de GE, véase Thomas B. Edsall, «Bringing Good Things to GE: Firm's Political Savvy Scores in Washington», *Washington Post* (3 de abril de 1985).

do los mensajes empresariales. Con la compra de la ABC, la General Electric se encuentra en una posición privilegiada para asegurarse de que sus razonables puntos de vista reciben la adecuada atención.[34] La falta de protestas por su absorción de la RCA y la NBC se debió en parte a que el control de la primera sobre la segunda había cruzado ya el umbral de la separación, pero refleja asimismo el ambiente más favorable a los negocios y al *laissez-faire* propio de la era Reagan.

Los intereses no relacionados con los medios de comunicación de las grandes empresas de este sector no son muy elevados, y si exceptuamos la General Electric y la Westinghouse, representan tan sólo una pequeña fracción de sus beneficios totales. Sin embargo su alcance multinacional es más significativo. Todas las cadenas de televisión y los grupos de presión vinculados con éstas, las grandes revistas de actualidad y los estudios cinematográficos mantienen importantes relaciones comerciales en el extranjero, y una parte substancial de sus beneficios procede de las ventas al exterior y de sus operaciones con filiales de otros países. El *Reader's Digest* se publica en diecisiete idiomas y se distribuye en más de ciento sesenta países. El imperio Murdoch es originario de Australia, la empresa matriz sigue siendo australiana, y su expansión en los Estados Unidos se financia con los beneficios obtenidos en Australia y su filial británica.[35]

Otra importante relación estructural es la dependencia y vinculación de las empresas de medios de comunicación con el gobierno. Las empresas y cadenas de radio y televisión necesitan autorizaciones y concesiones del gobierno, por lo cual están sometidas potencialmente al control y al acoso de éste. Esta dependencia técnica legal ha sido utilizada como herramienta para disciplinar a los medios, ya que si sus políticas se apartan con demasiada frecuencia de

34. El tantas veces citado chiste de A. J. Liebling —que si no te gusta lo que dice tu periódico eres perfectamente libre de lanzar el tuyo propio o de comprar uno— subrayaba la impotencia del personal. No obstante, en un clima político tan favorable como el proporcionado por la administración Reagan, una empresa gigantesca insatisfecha con la actuación de la prensa, puede comprar el suyo, como demostró con su ejemplo GE.

35. Allan Sloan, «Understanding Murdoch —The Numbers Aren't What Really Matters», *Forbes* (10 de marzo de 1986), pp. 114 y ss.

la orientación del *establishment* pueden activar esta amenaza.[36] Ante esta contingencia, los medios se protegen mediante los grupos de presión y otros procedimientos políticos, así como mediante el cultivo de las relaciones y la cautela política. Los vínculos políticos de los medios de comunicación son impresionantes. El cuadro 1.3 muestra cómo quince de los noventa y cinco directores foráneos de diez de los gigantes de los medios de comunicación son antiguos funcionarios del gobierno, proporción similar a la que da Peter Dreier en su estudio de los periódicos más importantes.[37] Por lo que se refiere a la televisión, el intercambio constante de personal entre reguladores y empresas reguladas fue masivo durante los años en los que se estableció la estructura oligopólica de los medios de comunicación y de las diversas cadenas.[38]

Los grandes medios de comunicación dependen asimismo del apoyo político general del gobierno. Todas las empresas están interesadas en los impuestos comerciales, los tipos de interés, las políticas de empleo y el reforzamiento o no de las leyes *antitrust*. La General Electric y Westinghouse dependen de las subvenciones del gobierno para sus programas de investigación y desarrollo tanto de la energía nuclear como de tecnología militar y también para la creación de un ambiente favorable a su comercio exterior. El *Reader's Digest*, *Time*, *Newsweek* y los grupos suministradores de películas y de programas televisivos dependen asimismo del apoyo diplomático a su derecho de

36. Sobre la campaña de Nixon y Agnew para intimidar a los medios de comunicación mediante ataques publicitarios y amenazas, véase Marilyn Lashner, *The Chilling Effect in TV News*, Praeger, Nueva York, 1984. Lashner llegó a la conclusión de que la tentativa de Nixon desde la Casa Blanca para acallar los medios de comunicación «triunfó con facilidad, al menos en lo concerniente a la televisión ...» (p. 167). Véase también Fred Powledge, *The Engineering of Restraint: The Nixon Administration and the Press*, Public Affairs Press, Washington, 1971, y William E. Porter, *Assault on the Media: The Nixon Years*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1976.

37. De los 290 directores de su muestreo de grandes periódicos, treinta y seis tenían puestos de alto nivel —en el pasado o en la actualidad— en el gobierno federal (Dreier, «The Position of the Press», p. 303).

38. Un estudio mostró que de los sesenta y cinco comisionados y cargos de alto nivel que abandonaron la FCC entre 1945 y 1970, doce habían estado en el sector privado de la comunicación antes de trabajar en la FCC, y treinta y cuatro entraron al servicio de firmas privadas tras abandonar la comisión (Roger Noll *et al.*, *Economic Aspects of Television Regulation*, Brookings, Washington, 1973, p. 123).

penetrar en culturas extranjeras con los valores y mensajes comerciales estadounidenses, así como con su interpretación de la actualidad. Los gigantes de los medios de comunicación, las agencias de publicidad y las grandes empresas multinacionales tienen un marcado y colectivo interés en lograr un clima favorable a sus inversiones en el Tercer Mundo, de ahí que sus interconexiones y relaciones con el gobierno respecto de estas políticas sean simbióticas.[39]

En resumen, las empresas dominantes en los medios de comunicación son grandes negocios, están controladas por personas muy poderosas o por directivos sometidos a severas limitaciones por parte de los propietarios y otras fuerzas orientadas hacia los beneficios del mercado,[40] y están estrechamente unidas y tienen importantes intereses comunes con otras grandes empresas, con los bancos y con el gobierno. Este es el primero de los poderosos filtros que afectará decisivamente la selección de noticias.

1.2. El segundo filtro: para hacer negocios se necesita el beneplácito de la publicidad

Al abogar por los beneficios del libre mercado como un método para controlar la opinión disidente a mediados del siglo XIX, el

39. «El crecimiento simbiótico de la empresa global y la televisión norteamericana las ha llevado a un tal nivel de interrelación que no pueden ser pensadas por separado. Esencialmente, son el mismo fenómeno. Precedida en todas partes por asesores militares, grupos de presión, vendedores de equipo, especialistas en publicidad, expertos en *merchandising* y vendedores de telefilmes a modo de avanzada, la empresa penetra en gran parte del mundo no socialista. La televisión simplemente es su parte más visible.» Erik Barnouw, *The Sponsor*, Oxford University Press, Nueva York, 1978, p. 158. Para una visión más amplia, véase Herbert I. Schiller, *Communication and Cultural Domination*, International Arts and Sciences Press, White Plains, N.Y., 1976, especialmente los capítulos 3 y 4.

40. ¿Acaso no es posible que aunque las «exigencias» de la gente impliquen un contenido por el que los propietarios sienten una profunda aversión, la competencia y la búsqueda de beneficios les obligue a ofrecer semejante programación? Esto es parcialmente cierto, y junto a la autonomía limitada del personal de los medios de comunicación, puede ayudar a explicar las «sorpresas» que ocasionalmente aparecen en los mismos. No obstante, el hecho de que millones de telespectadores no dispongan de los medios para expresar la demanda de unos productos que no les son ofrecidos constituye una limitación de la fuerza de la demanda del público. Otro problema es que todo un surtido de filtros, que discutimos más adelante, refuerzan los intereses de la clase propietaria.

ministro de Hacienda británico, el liberal sir George Lewis, señaló que el mercado debería promocionar aquellos periódicos que «gozasen de las preferencias del público destinatario de la publicidad».[41] De hecho la publicidad actuó como un poderoso mecanismo debilitador de la prensa de la clase obrera. Curran y Seaton atribuyen al crecimiento de la publicidad un status comparable al del incremento de los costes de capital, en cuanto a factor que permitió que el mercado lograse lo que no habían conseguido los impuestos y el acoso del Estado, señalando que los «anunciantes adquirieron así una autoridad *de facto*, puesto que, sin su apoyo, los periódicos dejaban de ser económicamente viables».[42]

Con anterioridad al auge de la publicidad, el precio de un periódico debía cubrir todos los costes. Con el crecimiento de ésta, los periódicos que atraían anuncios podían permitirse un precio por ejemplar muy por debajo de los costes de producción. Ello representó una seria desventaja para los periódicos que carecían de anuncios: sus precios tendían a aumentar, reduciendo sus ventas y dejándoles un menor superávit para invertir y mejorar sus posibilidades de venta (artículos, un formato atractivo, promoción, etc.). Por esta razón, un sistema basado en la publicidad llevaba a la disolución o a la marginación de las empresas y los géneros de comunicación que dependían exclusivamente de los beneficios obtenidos por las ventas. Con la publicidad, el mercado libre no ofrece un sistema neutral en el que finalmente decide el comprador. Las elecciones de los *anunciantes* son las que influyen en la prosperidad y la supervivencia de los medios.[43] Los que se basan en la publicidad reciben de ésta una subvención que les proporciona un margen de precio-ventas-calidad, que les permite comer el terreno y debilitar a los rivales que no se basan (o no disponen) de ella.[44] Por otra parte, aunque

41. Citado en Curran and Seaton, *Power Without Responsability*, p. 31.

42. *Op. cit.*, p. 41.

43. «... los productores que ofrezcan a los patrocinadores [anunciantes] las mejores oportunidades de lograr un beneficio a través de sus públicos recibirán apoyo, mientras que aquellos que no puedan competir a ese respecto no sobrevivirán.» Joseph Turow, *Media Industries: The Production of News and Entertainment*, Longman, Nueva York, 1984, p. 52.

44. La televisión no comercial también está en franca desventaja por la misma razón y requerirá de un subsidio público para ser capaz de competir. Puesto que la televisión pública no sufre la coerción inherente a la posesión por parte de los ricos, ni necesita apaciguar a los anunciantes, supone una amenaza para la restringida elite

un medio de comunicación basado en la publicidad esté dirigido a una audiencia acaudalada («de alto nivel»), podrá captar con facilidad una gran parte de la audiencia «de nivel inferior», con lo cual sus rivales perderán participación en el mercado y a la larga quedarán relegados o marginados.

La publicidad ha jugado de hecho un importante papel en el aumento de la concentración, incluso entre rivales empeñados con igual energía en la prosecución de los beneficios de la publicidad. Si un periódico o una emisora de televisión disponen de una participación en el mercado y de un margen publicitario, obtendrán beneficios suplementarios que les permitirán competir de una manera más efectiva —con una promoción más agresiva, comprando artículos y programas más atractivos—, mientras que el rival en desventaja deberá efectuar gastos que no puede afrontar para intentar detener el proceso acumulativo de descenso de su participación en el mercado (y de sus beneficios). La crisis suele ser fatal y ayuda a explicar la desaparición de periódicos y revistas de gran tirada, así como la reducción del número de periódicos.[45]

Por tanto, desde la época de la introducción de la publicidad en la prensa, los periódicos radicales y de la clase obrera se han encontrado en seria desventaja. Sus lectores solían ser personas de escasos recursos económicos, factor que siempre ha afectado los intereses de los anunciantes. Un ejecutivo publicitario afirmó en 1856 que algunos periódicos son malos vehículos porque «sus lectores no son compradores, y todo el dinero que empleemos en ellos será prácticamente dinero perdido».[46] Esta misma fuerza representó un gran lastre para la prensa socialdemócrata británica tras la segunda guerra mundial. Entre 1960 y 1967 desaparecieron o fueron absorbidos por la organización del *establishment* el *Daily Herald*, el

---

que controla las comunicaciones de masas. De ahí que los conservadores se esfuercen en mantener a raya a la televisión pública, con planes de inserción anuales, e inversiones de poca envergadura (véase Barnouw, The *Sponsor*, pp. 179-182). Otra opción, seguida en la era Carter-Reagan, ha sido hacerla entrar por la fuerza en la dinámica comercial mediante un repentino recorte presupuestario.

45. Bagdikian, *Media Monopoly*, pp. 118-126. «"El periódico dominante al final prospera", dice Allen H. Neuharth, presidente de Gannett. "El periódico débil al final muere."» Joseph B. White, «Knight-Ridder's No-Lose Plan Blackfires», *Wall Street Journal* (4 de enero de 1988).

46. Citado en Curran and Seaton, *Power Without Responsability*, p. 43.

News Chronicle y el *Sunday Citizen*, pese a su promedio colectivo diario de 9,3 millones de lectores. Como señaló James Curran, con sus 4,7 millones de lectores en su último año, «el *Daily Herald* tenía de hecho más del doble de lectores que el *The Times*, el *Financial Times* y el *Guardian* juntos». Y aún más, los informes mostraron que sus lectores «tenían mejor opinión de su periódico que los lectores habituales de cualquier otro periódico popular», y que «éstos leían más su periódico que los lectores de otros periódicos populares, pese a que la gran mayoría de ellos pertenecen a la clase trabajadora ...».[47] La desaparición del *Daily Herald*, así como la del *News Chronicle* y el *Sunday Citizen*, fueron en gran medida resultado de la progresiva asfixia causada por la falta de apoyo publicitario. El *Daily Herald*, con el 8,1 por 100 de la tirada nacional diaria, tenía un 3,5 por 100 de beneficios publicitarios netos; el *Sunday Citizen* alcanzó una décima parte de los beneficios netos de publicidad obtenidos por el *Sunday Times* y una séptima parte de los del *Observer*. Probablemente Curran esté en lo cierto cuando afirma que la pérdida de estos tres periódicos fue una importante contribución al declive de la suerte del partido laborista, especialmente en el caso del *Daily Herald*, pues se eliminaba una institución de tirada masiva que ofrecía «un marco alternativo de análisis y de comprensión que cuestionaba los sistemas dominantes de representación en la prensa y los medios de radiodifusión principales».[48] Un movimiento de masas que carezca del apoyo de alguno de los medios de comunicación más importantes, y esté sometido a una considerable hostilidad por parte de la prensa activa, sufre una gran desventaja y tiene que luchar contra contumaces enemigos.

Hoy en día los medios de comunicación prósperos están totalmente convencidos de la importancia crucial de la «calidad» de la audiencia: La CBS comunica orgullosamente a sus accionistas que, al tiempo que «trata continuamente de maximizar la recepción de su audiencia», ha desarrollado una nueva «herramienta de ventas» con la que atraer a los anunciantes, el «Perfil de la Audiencia Cliente» o PAC, que colabora a que los anunciantes optimicen la efectividad de sus programas de televisión, mediante la valoración

47. «Advertising and the Press», en James Curran, ed., *The British Press: A Manifesto*, Macmillan, Londres, 1978, pp. 252-255.

48. *Op. cit.*, p. 254.

de los segmentos de la audiencia en proporción a los niveles de utilización de los productos y servicios de los anunciantes».[49] En resumen, los medios de comunicación están interesados en atraerse audiencias con poder adquisitivo, no audiencias *per se*. Como ya sucedía en el siglo XIX, las audiencias opulentas hacen relucir los intereses de los anunciantes. La idea de que la consecución de grandes audiencias hace que los medios de comunicación sean «democráticos» sufre así una debilidad inicial, ¡cuyo equivalente político sería un sistema de voto ponderado por la renta!

El poder de los anunciantes sobre la programación televisiva se debe sencillamente a que son ellos los que compran y pagan los programas. Ellos son los «patrones» que dan las subvenciones a los medios, éstos compiten por su patrocinio, desarrollando equipos especializados para captar anunciantes, que se ven necesariamente obligados a explicar cómo sus programas se ajustan a sus necesidades. Las elecciones de estos patrones afectan grandemente el bienestar de los medios de comunicación, con lo cual los anunciantes se convierten en lo que William Evan denomina «organizaciones normativas de referencia»[50] a cuyas exigencias y demandas deben acomodarse los medios de comunicación si desean tener éxito.[51]

Para una cadena de televisión, la pérdida o ganancia de un punto de audiencia en el índice Nielsen se traduce en una alteración en los beneficios derivados de la publicidad que va de los ochenta a los cien millones de dólares anuales, con algunas variaciones en función de la «calidad» de la audiencia. De ahí el extraordinario interés en la magnitud y en la capacidad adquisitiva de ésta. En un

49. *1984 CBS Annual Report*, p. 13. Esto es un nuevo refinamiento para medir el «rendimiento» de «atraer una audiencia». En el negocio de las revistas, la medida estándar es el CPM, o «coste por millar», que el anunciante satisface para llegar hasta los compradores a través de un anuncio a toda página en blanco y negro. Tendencias recientes, como el PAC de la CBS, se han encaminado a identificar las características especiales de la audiencia receptora. Vendiéndose a sí misma, *Soap Opera Digest*, dice: «Pero Ud. probablemente querrá conocer nuestro primer hito: actualmente, *Soap Opera Digest* llega a más mujeres entre 18 y 49 años con el CPM más bajo que cualquier otra revista femenina» (citado en Turow, *Media Industries*, p. 55).

50. William Evan, *Organization Theory*, Wiley, Nueva York, 1976, p. 123.

51. Turow sostiene que «la continua interacción entre productores y patrocinadores principales tiene un papel muy importante cuando se establecen los límites generales para la actividad cotidiana de producción» (*Media Industries*, p. 51).

sistema de mercado existe una fuerte tendencia a que este tipo de consideraciones tengan una profunda repercusión política. Esto se debe en parte a las presiones institucionales para centrarse en cuestiones secundarias o poco comprometidas y en parte a la continua interacción de las organizaciones de medios de comunicación con los patrones que les suministran sus ingresos. La televisión, como señalaba Grant Tinker, a la sazón director de la cadena de la NBC, «es un medio sustentado por la publicidad», y en la medida que este apoyo decaiga, la programación cambiará».[52]

Los medios de comunicación radicales y de la clase obrera se ven también perjudicados por la discriminación política de los anunciantes. Esta discriminación política está estructurada en las asignaciones publicitarias, en función de la presión que se haga a la gente con posibilidades económicas para que compre. Pero muchas empresas rechazarán siempre patrocinar a los enemigos ideológicos y a aquellos que consideren perjudiciales para sus intereses, y a la fuerza del sistema de elección ponderado por la renta se añaden casos de abierta discriminación. La cadena de televisión pública WNET perdió en 1985 la financiación de la Gulf + Western después de la emisión del documental *Hungry for Profit* (El negocio del hambre), que contenía material crítico con la actividad de las empresas trasnacionales en el Tercer Mundo. Antes de la emisión del programa, y en previsión de una reacción empresarial negativa, los funcionarios de la cadena «hicieron todo lo posible por sanear el programa» (según un portavoz de la WNET).[53] El director ejecutivo de la Gulf + Western se quejó a la emisora porque el programa era «virulentamente anticomercial, por no decir antiestadounidense» y dijo que el haberlo emitido no era un comportamiento propio de «un amigo» de la empresa. El *Economist* de Londres afirmó que «mucha gente cree que la WNET no volverá a cometer el mismo error».[54]

52. Citado en Todd Gitlin, *Inside Prime Time*, Pantheon, Nueva York, 1983, p. 253.

53. Pat Aufderheide, «What Makes Public TV Public?», *The Progressive* (enero de 1988).

54. «Castor oil or Camelot?» (5 de diciembre de 1987). Para más material sobre estas intervenciones, véase Harry Hammitt, «Advertising Pressures on Media», informe n.° 367 del Freedom of Information Center, Facultad de Periodismo, Universidad de Missouri en Columbia, febrero de 1977. Véase también James Aronson, *Deadline for the Media*, Bobbs-Merrill, Nueva York, 1972, pp. 261-263.

Además de la discriminación contra las instituciones de medios de comunicación poco amistosas, los anunciantes también eligen selectivamente los programas basándose en sus propios principios. Salvo raras excepciones, éstos son cultural y políticamente conservadores.[55] Las grandes empresas que se anuncian en la televisión raramente patrocinarán programas que aborden serias críticas a las actividades empresariales, tales como el problema de la degradación ambiental, las actividades del complejo militar-industrial, o el apoyo de estas empresas a las tiranías del Tercer Mundo y los beneficios que obtienen del mismo. Erik Barnouw cuenta la historia de una serie de documentales sobre problemas ambientales propuesta por la NBC en un momento de gran interés por este tema. Barnouw señala que pese a que en aquella época muchas empresas importantes empleaban su dinero en anuncios y otra publicidad relacionada con los problemas ambientales, la serie de documentales no logró encontrar patrocinadores. El problema residía en su excesiva objetividad, que llegaba a sugerir fallos de las empresas y del sistema, mientras que el mensaje empresarial era «tranquilizador».[56]

Con el tiempo las cadenas de televisión han aprendido que estos programas no venden, que de realizarse conllevarán un sacrificio financiero, y que, además, pueden ofender a los poderosos anunciantes.[57] El aumento del precio de los *spots* publicitarios hace que aumenten también las pérdidas de ingresos; y con la creciente presión del mercado por los resultados financieros y la disminución de las normas limitadoras, un sistema de medios de comunicación basado en la publicidad aumentará gradualmente el tiempo destinado

55. Según las instrucciones de Procter & Gamble para su agencia de publicidad, «en nuestro programas no habrá ningún material que de un modo u otro pudiera fomentar el concepto de negocio como algo frío, despiadado y desprovisto de todo sentimiento o motivación espiritual». El director de comunicación empresarial de la General Electric ha dicho: «Insistimos en programas con un ambiente que refuerce nuestros mensajes empresariales» (citado en Bagdikian, *Media Monopoly*, p. 160). Recordemos que GE es el actual propietario de la NBC-TV.

56. Barnouw, *The Sponsor*, p. 135.

57. Los anunciantes también pueden ofenderse por los ataques contra ellos mismos o contra sus productos. Sobre la tendencia de los medios de comunicación a evitar críticas de productos anunciados incluso cuando son importantes para el bienestar del consumidor (por ejemplo, los efectos del tabaco), véase Bagdikian, *Media Monopoly*, pp. 168-173.

a la publicidad y marginará o eliminará a la vez la programación que tenga un contenido importante en temas públicos.[58]

Por lo general, los anunciantes evitarán los programas con serias complejidades y molestas controversias susceptibles de interferir con la «disposición del comprador». Buscarán programas que entretengan alegremente, y se ajusten así al espíritu de la premisa fundamental del programa de compras: la difusión de un mensaje de ventas. Así con el tiempo, en lugar de programas como *The Selling of the Pentagon* (La venta del Pentágono) la evolución natural de un mercado ávido de los dólares del patrocinador ofrecerá programas como *A Bird's Eye View of Scotland* (Escocia a vista de pájaro), *Barry Goldwater's Arizona* (La Arizona de Barry Goldwater), *An Essay on Hotels* (A propósito de los Hoteles), y *Mr. Rooney Goes to Dinner* (Las cenas del Sr. Rooney), un programa de la CBS sobre «cómo comen los estadounidenses cuando cenan fuera, adónde van y porqué».[59] Se dan algunos casos excepcionales de compañías que desean patrocinar programas serios, muchas veces como resultado de dificultades recientes que exigen una compensación en el campo de las relaciones públicas.[60] Pero incluso en estos casos las empresas por lo general no desearán patrocinar estudios profundos de temas delicados y controvertidos, sino que prefieren programas sobre las

58. Esto es difícil de demostrar estadísticamente, dada la poca información facilitada por la FCC durante estos años. A largo plazo, la tendencia de la proporción entre tiempo de publicidad y tiempo de programación se hace patente en la siguiente norma adoptada en 1929 por la National Association of Broadcasting para regular la actividad comercial de la radio: «Los anuncios publicitarios ... no se emitirán entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche». William Paley declaró en 1930 ante el Comité Comercial del Senado que sólo el 22 por 100 del tiempo de la CBS estaba asignado a programas patrocinados comercialmente, manteniendo al 78 por 100 restante; y señaló que la publicidad sólo absorbía «siete décimas del 1 por 100 de todo nuestro tiempo» (citado en *Public Service Responsalibity of Broadcast Licensees*, FCC, GPO, Washington, 7 de marzo de 1946, p. 42). Frank Wolf, refiriéndose a la programación de temas públicos, declara: «Que tales programas no se emitan en la televisión comercial podría deberse a la reglamentación de la FCC» (*Television Programming for News and Public Affairs*, Praeger, Nueva York, 1972, p. 138; véanse también pp. 99-139).

59. Barnouw, *The Sponsor*, p. 134.

60. Sobre el patrocinio de Edward R. Murrow por Alcoa tras el pleito contra el consorcio, y el de «The Big Blue Marble» por la ITT tras los escándalos de los años setenta, véase Barnouw, *The Sponsor*, pp. 51-52, 84-86. Barnouw demuestra que la cobertura de la ITT en los noticiarios se redujo bruscamente durante el período de patrocinio de dicho programa por la ITT.

antigüedades griegas, el ballet, nostálgicos y temas de historia nacional y cultural. Barnouw señala un interesante contraste: las representaciones de la televisión comercial «casi siempre tienen que ver con el aquí y ahora, como elaborados por los presupuestos publicitarios», pero en la televisión pública, la cultura «viene a significar "otras culturas" ... La civilización estadounidense, aquí y ahora, queda fuera de consideración».[61]

Las emisoras y las cadenas se preocupan también por mantener el «flujo» de los niveles de audiencia, es decir, por hacer que la gente permanezca viendo programa tras programa, manteniendo así los niveles de anunciantes y los ingresos que éstos les proporcionan. La emisión de interludios en la programación de tipo documental cultural que provocan la conexión con la emisora son costosos: con el tiempo un sistema comercial «libre» (es decir, basado en los anuncios) tenderá a suprimirlos. Estos materiales documentales, culturales y críticos serán eliminados también de los medios secundarios, ya que estas empresas se esfuerzan a su vez por interesar a los anunciantes, aunque siempre habrá alguna programación cultural y política que intentará aparecer o sobrevivir en la periferia de los principales medios de comunicación.

1.3. El tercer filtro: el suministro de noticias a los medios de comunicación

Los medios de comunicación de masas están inmersos en una relación simbiótica con las fuentes de información poderosas, tanto por necesidad económica como por reciprocidad de intereses. Estos medios necesitan un flujo constante y fiable de materia prima informativa. Deben satisfacer una demanda diaria de noticias, así como unos horarios apremiantes para la emisión de éstas. No se pueden permitir tener periodistas y cámaras en todos los lugares en los que pueden surgir historias importantes. La economía les obliga a que concentren sus recursos en los lugares en los que se suelen producir las noticias importantes, en los que abundan los rumores y las filtraciones, y en los que se acostumbran a celebrar las conferencias de prensa. La Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de

61. Barnouw, *The Sponsor*, p. 150.

Estado, todos ellos en Washington D.C., son núcleos centrales de actividad informativa. En cuanto al ámbito local, el ayuntamiento y la comisaría de policía son los protagonistas de «flashes» informativos regulares para los periodistas. Las empresas comerciales y los grupos industriales son asimismo proveedores regulares y fiables de historias consideradas periodísticas. Estas burocracias ponen en circulación un gran volumen de material que satisface las necesidades de caudales fiables y programados de los organismos informativos. Mark Fishman lo llama «el principio de afinidad burocrática: sólo otras burocracias pueden satisfacer las necesidades iniciales de una burocracia informativa».[62]

Las fuentes gubernamentales y empresariales tienen también el gran mérito de ser reconocidas y veraces debido a su status y prestigio, lo cual es importante para los medios de comunicación. Para Fishman,

> los trabajadores informativos están predispuestos a considerar objetivos los relatos burocráticos, puesto que ellos mismos participan en el apoyo a un orden normativo de expertos autorizado socialmente. Los periodistas se rigen por el principio de que los funcionarios han de saber lo que tienen la obligación de saber... Concretamente, un trabajador informativo identificará la declaración de un funcionario no sólo como una afirmación, sino como un fragmento de conocimiento verosímil y creíble. Esto equivale a una división moral del trabajo: los funcionarios están en posesión de los hechos, los periodistas se limitan a recogerlos.[63]

Otra de las razones de la importancia que se concede a las fuentes oficiales es que los medios de comunicación afirman ser proveedores «objetivos» de noticias. En parte para mantener esta imagen de objetividad, y en parte para protegerse de críticas de parcialidad y de la amenaza de procesos por difamación, necesitan material que pueda mostrarse como presuntamente correcto.[64] Esta es también en parte una cuestión de costes: tomar la información

62. Mark Fishman, *Manufacturing the News*, University of Texas Press, Austin, 1980, p. 143.

63. *Op. cit.*, pp. 144-145.

64. Gaye Tuchman, «Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen's Notions of Objectivity», *American Journal of Sociology*, 77, n. 2, (1972), pp. 662-664.

de fuentes presuntamente creíbles reduce los gastos de investigación, mientras que el material de fuentes que no son fiables *prima facie*, o que despertarán críticas y amenazas, requiere una cuidadosa verificación y una investigación costosa.

La magnitud de las operaciones de información pública de las grandes burocracias gubernamentales y empresariales, que constituye la principal fuente de información, es enorme y asegura un especial acceso a los medios. El Pentágono, por ejemplo, tiene un servicio de información pública que comprende varios miles de empleados, gasta cientos de millones de dólares cada año y empequeñece no sólo los recursos de información pública de cualquier individuo o grupo disidente, sino los del *conjunto* de dichos grupos. En 1979 y 1980, durante un breve período de relativa apertura (clausurada desde entonces), las Fuerzas Aéreas estadounidenses revelaron que el alcance informativo a su disposición estaba compuesto por:

> 140 periódicos, con 690.000 ejemplares semanales;
> la revista *Airman*, con una tirada mensual de 125.000 ejemplares;
> 34 emisoras de radio y 17 de televisión, fundamentalmente en el extranjero;
> 45.000 cuarteles generales y unidades de emisión de noticias;
> 615.000 comunicados de información local;
> 6.600 entrevistas con medios informativos;
> 3.200 conferencias informativas;
> 500 vuelos para orientación con medios de comunicación;
> 50 reuniones con consejos editoriales;
> 11.000 alocuciones o conferencias.[65]

Aquí no se cuentan enormes áreas de la actividad de información pública de las fuerzas aéreas. En un escrito de 1970, el senador J. W. Fulbright descubrió que la actividad de relaciones públicas de las fuerzas aéreas en 1968 comprendía 1.305 empleados a tiempo completo, sin contar otros miles de personas que «tenían actividades públicas colaterales con otras tareas».[66] En aquella época las fuerzas aéreas ofrecían un servicio de cuñas televisivas semanales y

65. United States Air Force, «Fact Sheet: The United States Air Force Information Program» (marzo de 1979); «News Releases: 600,000 in a Year», *Air Force Times* (28 de abril de 1980).

66. J. W. Fulbright, *The Pentagon Propaganda Machine*, H. Liveright, Nueva York, 1970, p. 88.

programas de crónicas grabados para su utilización tres veces por semana, que enviaba a 1.139 emisoras de radio, y produjo también 148 películas, 24 de las cuales fueron distribuidas para su difusión pública.[67] No hay razones para creer que la actividad de relaciones públicas de las fuerzas aéreas haya disminuido desde la década de los sesenta.[68]

Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo sólo a las fuerzas aéreas, que hay otras tres secciones con gran número de programas y que aparte existe un programa global de información pública a cargo de un subsecretario de defensa para temas públicos en el Pentágono. En 1971 un estudio publicado en el *Armed Forces Journal* reveló que el Pentágono publica un total de 371 revistas, con un coste anual de unos 57 millones de dólares, actividad dieciséis veces superior a la de la mayor editorial del país. En una actualización publicada en 1982, el *Air Force Journal International* indicaba que el Pentágono había editado 1.203 publicaciones periódicas.[69] Para apreciar esto en su justa medida, podemos señalar aquí la envergadura de las operaciones de relaciones públicas del American Friends Service Committee (AFSC) y del National Council of the Churches of Christ (NCC), dos de los mayores organismos sin ánimo de lucro cuya voz es un desafío constante a los criterios del Pentágono. El presupuesto de 1984-1985 de la oficina principal de servicios informativos de la AFSC era inferior a los 500.000 dólares, y disponía de un equipo compuesto por once personas.[70]

67. *Op. cit.*, p. 90.

68. Un informe de Associated Press sobre «Newspapers Mustered as Air Force Defends B1B», publicado en el *Washington Post* (3 de abril de 1987), indicaba que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos tenían 227 periódicos en 1987, contrastando con los 140 de 1979.

69. «DOD Kills 205 Periodicals; Still Publishes 1.203 Others», *Armed Forces Journal International* (agosto de 1982), p. 16.

70. Sus nueve oficinas regionales también realizaban operaciones de relaciones públicas, pero el personal y los fondos no son asignables a esta función. Son inferiores al conjunto de la oficina central.

El presupuesto total de relaciones públicas del ASFC asciende más o menos lo mismo que el contrato entre el Departamento de Estado y la International Business Communications para presionar a favor de la contra (419.000 dólares). Este era sólo uno de los contratos investigados por la GAO que «la oficina de la Latin American Public Diplomacy adjudicaba a individuos para investigación y documentación sobre América Latina, dijo un funcionario de la GAO relacionado con la investigación», Rita Beamish, «Pro-contra Contracts are Probed», *Philadelphia Enquirer* (22 de julio de 1987), p. 4A.

Globalmente, el número de comunicados de prensa de la institución se cifra alrededor de los doscientos por año, ofrece treinta conferencias de prensa anuales y produce también anualmente una película y dos o tres series de diapositivas. No elabora cuñas televisivas, fotografías o programas de radio grabados para los medios de comunicación. La oficina de información del NCC tenía un presupuesto anual de unos 350.000 dólares, difundía unos cien comunicados informativos por año y celebra unas cuatro conferencias de prensa anualmente.[71] La proporción de los comunicados y conferencias de prensa de las fuerzas aéreas con relación a los de la AFSC y el NCC juntos es de 150 a 1 (o de 2.200 a 1 si contamos los comunicados de prensa locales de las fuerzas aéreas), y de 94 a 1, respectivamente. Si a ello añadimos los otros servicios esta diferencia aumenta considerablemente.

Sólo el sector empresarial dispone de recursos para producir información pública y propaganda al mismo nivel que el Pentágono y otros organismos del Estado. La AFSC y el NCC no pueden igualar las compras multimillonarias en dólares de espacio en los periódicos de la empresa Mobil Oil u otras inversiones empresariales para difundir sus puntos de vista.[72] Hay cientos o incluso quizás miles de empresas individuales que disponen de unos presupuestos para información y presión pública que superan a los de la AFSC y el NCC. Un *colectivo* empresarial como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos disponía en 1983 de un presupuesto para investigación, comunicaciones y actividades políticas de 65 millones de dólares.[73] En 1980, la Cámara publicó una revista de negocios (*Nation's*

71. Los servicios informativos del NCC están concentrados en la Oficina de Información, pero tienen parte de su personal disperso en servicios de comunicaciones en otros lugares de la organización que producen unos cuantos boletines, revistas, vídeos y películas.

72. En 1980, Mobil Oil tuvo un presupuesto de relaciones públicas de 21 millones de dólares y el personal de dicho departamento lo formaban setenta y tres personas. Entre 1976 y 1981 produjo al menos una docena de reportajes especiales para televisión sobre cuestiones tales como el precio de la gasolina, contratando a un periodista de televisión para entrevistar a los ejecutivos y demás expertos de Mobil, reportajes que se emiten con frecuencia en dicho medio, a menudo sin indicación expresa de Mobil. Véase A. Kent MacDougall, *Ninety Seconds To Tell It All*, Dow Jones-Irvin, Homewood, Ill., 1981, pp. 117-120.

73. John S. Saloma III, *Ominous Politics: The New Conservative Labyrinth*, Hill & Wang, Nueva York, 1984, p. 79.

Business) con una tirada de 1,3 millones de ejemplares, y un semanario con 740.000 suscriptores, produciendo también semanalmente un programa distribuido a 400 emisoras de radio, así como sus propios programas semanales de debate emitidos por 128 emisoras de televisión comercial.[74]

Junto a la Cámara de los Estados Unidos existen miles de cámaras de comercio estatales y locales y de asociaciones industriales vinculadas también a actividades propias de grupos de presión y de relaciones públicas. Los organismos de presión de la comunidad empresarial e industrial son «una red con más de 150.000 profesionales»,[75] sus recursos están relacionados con la renta y los beneficios empresariales, y con el valor protector de los desembolsos en actividades de relaciones públicas y de cabildeo. Los beneficios empresariales en 1985 alcanzaron los 295.500 miles de millones de dólares. Evidentemente, cuando la comunidad empresarial está inquieta por el ambiente político, como lo estuvo en la década de los setenta, dispone de los medios necesarios para hacer frente a cualquier amenaza. Los gastos publicitarios y de imagen empresariales e industriales aumentaron de los 305 millones de dólares en 1975 a los 650 millones en 1980.[76] Gracias a los dividendos que obtienen efectúan campañas directas y otros envíos por correo, distribuyen películas, folletos y prospectos educativos, e invierten en iniciativas, referéndums y cabildeo, a lo que añaden aportaciones políticas y de pensamiento. Se calcula que las inversiones de las empresas y asociaciones industriales en publicidad política y popular alcanzó los 1.000 millones de dólares por año en 1978, y que en 1984 había aumentado hasta los 1.600 millones de dólares.[77]

Para consolidar su privilegiada posición como fuentes de información, los promotores de informaciones gubernamentales y empresariales se esfuerzan por facilitar las cosas a los organismos infor-

74. MacDougall, *Ninety Seconds...*, pp. 116-117.

75. Thomas B. Edsall, *The New Politics of Inequality*, Norton, Nueva York, 1984, p. 110.

76. Peggy Dardenne, «Corporate Advertising», *Public Relations Journal* (noviembre de 1982), p. 36.

77. S. Prakash Sethi, *Handbook of Advocacy Advertising: Strategies and Applications*, Ballinger, Cambridge, Mass., 1987, p. 22. Véanse también Edsall, *New Politics*, capítulo 3: «The Politicization of the Business Community»; y Saloma, *Ominous Politics*, capítulo 6: «The Corporations: Making Our Voices Heard».

mativos. Así, les proporcionan instalaciones en las que reunirse, dan a los periodistas copias de discursos por adelantado, e informes posteriores; programan conferencias de prensa teniendo en cuenta las horas de cierre de recepción de noticias;[78] escriben comunicados de prensa en un lenguaje asequible, y organizan cuidadosamente sus conferencias de prensa y sesiones fotográficas.[79] La obligación de los funcionarios informativos es «satisfacer las necesidades programadas de los periodistas con material que su sincronizada oficina ha generado a su propio ritmo».[80]

Efectivamente, las grandes burocracias de los poderosos *subvencionan* a los medios de comunicación, obteniendo así un acceso especial a los mismos en virtud de su contribución a la reducción de sus costes de adquisición de materia prima y de producción de noticias. Las grandes instituciones que proporcionan este subsidio se convierten así en fuentes de información «rutinarias» y tienen un privilegiado acceso a los medios de comunicación. Las fuentes de información no rutinarias deben luchar por acceder a sus puertas, y pueden ser ignoradas por la arbitraria decisión de los guardianes que las protegen. Por lo que se refiere a la generosidad de la Office Public Diplomacy del Departamento de Estado[81] cabe señalar que las subvenciones que ésta otorga son a cargo de los contribuyentes de manera que, de hecho, la ciudadanía paga por recibir la propaganda que le interesa a los grupos poderosos tales como los contratistas de armamento y otros patrocinadores del terrorismo de Estado.

Debido a los servicios que proporcionan, a los continuos contactos que genera su actividad normal y a la dependencia mutua, los poderosos pueden utilizar relaciones personales, amenazas y recompensas para influenciar y coercionar aún más a los medios de comunicación. Éstos pueden sentirse obligados a dar por buenas historias extremadamente dudosas y a acallar sus críticas para no ofender a sus fuentes de información y perjudicar su estrecha relación con

78. El bombardeo estadounidense de Libia, el 14 de abril de 1986, fue la primera acción militar programada para acaparar la atención de los telediarios matutinos de las siete. Véase Chomsky, *Pirates & Empeors*, p. 147.

79. Sobre la maestría con la que la administración Reagan las aprovechó para manipular a la prensa, véase «Standups», *The New Yorker* (2 de diciembre de 1985), pp. 81 y ss.

80. Fishman, *Manufacturing the News*, p. 153.

81. Véase nota 70.

éstas.[82] Resulta muy difícil llamar embusteras a las autoridades de cuyas informaciones depende uno, aunque éstas nos digan grandes mentiras. Las fuentes de información críticas se pueden evitar no sólo porque estén menos a mano y por los elevados costes para determinar la verosimilitud de las mismas, sino también porque las fuentes de información principales pueden ofenderse e incluso amenazar a los medios de comunicación que se hagan eco de ellas.

Las fuentes de información poderosas pueden asimismo utilizar su prestigio y su importancia como palanca para vetar el acceso de los críticos a los medios de comunicación: por ejemplo, el Departamento de Defensa rechazó participar en debates sobre temas de defensa en la National Public Radio si concurrían también a ellos expertos del Center for Defense Information; Elliot Abrams rehusó aparecer en un programa sobre los derechos humanos en América central en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, si no se excluía la participación del antiguo embajador, Robert White;[83] Claire Sterling se negó a participar en debates televisivos sobre la conexión búlgara en los que apareciesen sus críticos.[84] En los dos últimos casos, las autoridades y los expertos reconocidos lograron con sus amenazas monopolizar el acceso a los medios de comunicación.

Más importante es que las fuentes de información poderosas acostumbran a aprovecharse de las rutinas y de la dependencia de los medios para «gestionarlos» y manipularlos para que sigan un orden del día y un esquema específico (como tendremos ocasión de

82. El 6 de enero de 1986, el American Friends Service Committee publicó un comunicado, basado en una prolongada investigación de la Freedom of Information Act, el cual mostraba que habían tenido lugar 381 accidentes e «incidentes» con armas nucleares de la marina en el período 1965-1977, cifra mucho más alta que la declarada con anterioridad. Los medios de comunicación no cubrieron directamente el asunto, sino a través de la respuesta de la marina, la cual minimizó la importancia de los nuevos descubrimientos y eliminó o relegó a un segundo plano toda la serie de hechos desvelados por la AFSC, así como su interpretación de los mismos. Un titular típico: «Navy Lists Nuclear Mishaps: None of 630 Imperilled Public, Service Says», *Washington Post* (16 de enero de 1986).

83. El profesor de Harvard encargado del programa, Harvey Mansfield, declaró que en cualquier caso invitar a White había sido un error, ya que «es un representante de la extrema izquierda», mientras que el foro pretendía provocar un debate «entre liberales y conservadores», *Harvard Crimson* (14 de mayo de 1986).

84. Véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *The rise and Fall of the Bulgarian Connection*, Sheridan Square Publications, Nueva York, 1986, pp. 123-124.

demostrar en los siguientes capítulos).[85] En parte este proceso de gestión consiste en inundar a los medios de comunicación con historias, que algunas veces sirven para encarrilarlos en una línea y un esquema determinados (por ejemplo, el suministro ilegal de armas por parte de Nicaragua a los rebeldes salvadoreños), y en otros momentos para ahuyentar totalmente de las portadas de los medios de comunicación las historias inconvenientes (sustituyéndolas, por ejemplo, por el presunto envío de los MIG a Nicaragua durante la semana en que se celebraron las elecciones en ese país, en 1984). Esta estrategia puede remontarse por lo menos hasta el Comité de Información Pública, creado para coordinar la propaganda durante la primera guerra mundial, que «descubrió en 1917-1918 que uno de los mejores mecanismos para controlar las informaciones era inundar los canales informativos con "hechos", lo que equivale a decir información oficial».[86]

La relación entre poder y suministro de noticias se extiende más allá del suministro empresarial y oficial de las noticias diarias, hasta configurar el suministro de los «expertos». El predominio de las fuentes oficiales se ve debilitado por la existencia de fuentes no oficiales muy respetables que proporcionan puntos de vista diferentes con gran autoridad. Este problema se mitiga con la «captación de los expertos»,[87] a base de incluirlos en la nómina, financiando sus investigaciones y organizando fundaciones intelectuales para que les contraten directamente y ayuden a difundir sus mensajes. De esta manera se puede estructurar la parcialidad, y el suministro de los expertos se puede sesgar en la dirección deseada por el gobierno y «el mercado».[88] En palabras de Henry Kissinger, en esta «época de expertos», la «audiencia» de los mismos está constituida por «aquellos que tienen intereses inalienables en las opiniones al uso, puesto que, al fin y al cabo, lo que ha hecho de ellos unos expertos

85. Mark Hertsgaard, «How Reagan Seduced US: Inside the President's Propaganda Factory», *Village Voice* (18 de septiembre de 1984); véase también «Standups», citado en la nota 79.

86. Stephen L. Vaughn, *Holding Fast the Inner Lines*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1980, p. 194.

87. Bruce Owen y Ronald Braeutigam, *The Regulation Game: Strategic Use of the Administrative Process*, Ballinger, Cambridge, Mass., 1978, p. 7.

88. Véase Edward S. Herman, «The Institutionalization of Bias in Economics», *Media, Culture and Society* (julio de 1982), pp. 275-291.

ha sido la elaboración y definición de consenso a un alto nivel».[89] Así pues, es conveniente que esta reestructuración haya tenido lugar para permitir que las opiniones al uso (es decir, las opiniones funcionales a los intereses de la elite) mantengan su posición predominante.

Este proceso de creación del necesario cuerpo de expertos ha sido llevado a cabo deliberadamente y a gran escala. Ya en 1972, el juez Lewis Powell (ascendido más tarde al Tribunal Supremo) escribió un memorándum a la Cámara de Comercio estadounidense instándola a «hacerse con los académicos más reputados del país para reforzar la credibilidad de los estudios empresariales y lograr un mayor protagonismo de las empresas en los campus universitarios».[90] Uno se hace con ellos y se asegura que (en palabras del doctor Edwin Feulner, de la Heritage Foundation) el área público-política «queda cubierta con profundos estudios académicos» que llegan a las conclusiones adecuadas. Utilizando la analogía de la venta de pasta de dientes de Procter & Gamble, Feulner explicó que «la venden y la vuelven a vender cada día a base de mantener fresco el producto en la mente de los consumidores». Mediante la gestión de ventas, en la que se incluye la diseminación de las ideas adecuadas a «mil periódicos», es posible mantener el debate «dentro de la perspectiva correcta».[91]

De acuerdo con esta fórmula, durante los años setenta y a principios de los ochenta se creó una retahíla de instituciones y se reactivaron las ya existentes con el fin de dar publicidad a los puntos de vista empresariales. Varios cientos de intelectuales fueron captados por estas instituciones, que financiaron sus trabajos y diseminaron su producción entre los medios de comunicación mediante un sofisticado esfuerzo propagandístico.[92] La financiación empresarial y la clara finalidad ideológica de este esfuerzo no ha tenido un efecto perceptible sobre la credibilidad de estos intelectua-

89. Henry Kissinger, *American Foreign Policy*, Norton, Nueva York, 1969, p. 28.

90. Citado en Alex Carey, «Managing Public Opinion: The Corporate Offensive», University of New South Wales, 1986 (ciclostilado), p. 32.

91. *Op. cit.*, pp. 46-47, citando las ponencias de Feulner de 1978 y 1985.

92. Para una buena discusión sobre varias de estas organizaciones y sus propósitos, recursos, redes y programas, véase Saloma, *Ominous Politics*, capítulos 4, 6 y 9.

les, sino que, por el contrario, la financiación y la promoción de sus ideas les ha catapultado a la prensa.

Como ejemplo de cómo los expertos subvencionados se apropian del espacio en los medios de comunicación, el cuadro 1.4 reseña los «expertos» sobre temas de terrorismo y de defensa que aparecieron en el programa *McNeil-Lehrer News Hour* en el transcurso de un año a mediados de los ochenta. En él podemos ver que, exceptuando los periodistas, la mayoría de participantes (el 54 por 100) son ex funcionarios o funcionarios en activo del gobierno, y que la categoría inmediatamente inferior (15,7 por 100) proviene de fundaciones intelectuales conservadoras. En esta última categoría el mayor número de apariciones lo proporcionó el Georgetown Center for Strategic and International Studies (CSIS), organización financiada por fundaciones conservadoras y empresas, que proporciona un intercambio constante de personal entre el Departamento de Estado y la CIA y una organización nominalmente privada.[93] En temas tales como el terrorismo y la conexión búlgara, el CSIS ha ocupado un espacio en los medios de comunicación que de otra manera hubiese sido llenado por voces independientes.[94]

También los propios medios de comunicación proporcionan «expertos» que acostumbran a repetir el punto de vista oficial. John Barron y Claire Sterling son personajes conocidísimos como autoridades sobre la KGB y el terrorismo porque el *Reader's Digest* ha financiado, publicado y dado publicidad a sus trabajos; el desertor soviético Arkady Shevchenko se convirtió en un experto en los servicios de información y armamento soviéticos porque el *Time*, la cadena de televisión *ABC* y el *New York Times* lo eligieron como cronista (pese a sus credenciales nada claras).[95] Los medios de comunicación, al dar a estos proveedores de los puntos de vista favoritos grandes oportunidades para exponerlos, les confieren status y hacen de ellos los candidatos obvios para emitir opiniones y análisis.

93. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, p. 259; Fred Landis, «Georgetown's Ivory Tower for Old Spooks», *Inquiry* (30 de septiembre de 1979), pp. 7-9.

94. El experto en terrorismo del CSIS, Robert Kupperman, probablemente ha sido el participante más requerido en los programas de radio y televisión sobre terrorismo de los últimos años.

95. Sobre la calidad de experta de Sterling, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 125-146; sobre Schevchenko, véase Edward J. Epstein, «The Invention of Arkady Shevchenko, Supermole: The Spy Who Came In to Be Sold», *New Republic* (15-22 de julio de 1985).

CUADRO 1.4

Expertos sobre terrorismo y defensa en el McNeil-Lehrer News Hour *desde el 14 de enero de 1985 hasta el 27 de enero de 1986**

Categoría del experto	N.°	%	N.° excluyendo periodistas	% excluyendo periodistas
Funcionario del gobierno	24	20	24	27
Antiguo funcionario del gobierno	24	20	24	27
Fundación intelectual conservadora	14	11,7	14	15,7
Académico	12	10	12	13,5
Periodista	31	25,8	—	—
Asesor	3	2,5	3	3,4
Funcionario de un gobierno extranjero	5	4,2	5	5,6
Otros	7	5,8	7	7,8
TOTALES	120	100	89	100

* Se trata de una recopilación de todas las apariciones en el programa relacionadas con la conexión búlgara (3), y con el abatimiento del avión coreano KAL 007 (5), y terrorismo, defensa y control de armamento (33), desde el 14 de enero de 1985 hasta el 27 de enero de 1986.

Otra clase de expertos cuya preponderancia se debe en gran medida a su utilidad para el poder es la de los antiguos radicales que finalmente llegaron a «ver la luz». Los motivos que han hecho que estos individuos hayan cambiado sus dioses, desde Stalin (o Mao) hasta Reagan y la libre empresa, es diverso, pero para los medios de comunicación del *establishment* la razón del cambio es simplemente que los antiguos radicales han visto finalmente que sus puntos de vista estaban equivocados. En un país cuya ciudadanía valora el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento, los que se cambian la chaqueta son una clase importante de pecadores arrepentidos. Resulta interesante observar como estos antiguos pecadores, cuyos anteriores trabajos despertaban poco interés o eran objeto de las burlas de los medios de comunicación, son súbitamente conside-

rados eminencias y se convierten en auténticos expertos. Podemos recordar como, durante la era McCarthy, desertores y ex comunistas rivalizaban unos con otros contando cuentos sobre la inminencia de una invasión soviética y otras historias sensacionales.[96] Se dieron cuenta que la cobertura informativa dada a sus afirmaciones dependía de que adornasen sus relatos según las exigencias reinantes. El continuo flujo de ex radicales que pasan de la marginalidad a recibir la atención de los medios de comunicación demuestra que estamos presenciando un duradero método de suministro de expertos, que dirán lo que el *establishment* desee que se diga.[97]

96. Véase David Caute, *The Great Fear: The Anti-Communist Purge under Truman and Eisenhower*, Simon & Schuster, Nueva York, 1978, pp. 114-138, el cual enfatiza la importancia del informador mentiroso. Esta patología macartista fue repetida en un libro de 1982 de Robert Leiken sobre el «hegemonismo soviético» —la frase maoísta estándar—, el cual evoca una estrategia soviética para tomar el poder en el hemisferio occidental por medio de Cuba, los sandinistas y movimientos guerrilleros en otras partes (Leiken, *Soviet Strategy in Latin America*, Praeger, Nueva York, 1982).

97. Entonces como ahora, a los antiguos disidentes se les describe como expertos especialmente valiosos por la aparente autenticidad que pueden aportar a los errores de sus antiguos compañeros. El hecho de que sus declaraciones a menudo sean fraudulentas no es un problema porque los medios de comunicación rehúsan advertirlo. Así, Jean Lacouture confirió credibilidad a sus críticas a los Khmers rojos declarando haber sido un antiguo simpatizante —lo cual no sólo es una falsedad, sino un absurdo, ya que nada se sabía acerca de los Khmers rojos—. David Horowitz añadió valor a su renacido patriotismo declarando que junto a los manifestantes contra la guerra de Vietnam llegó a «adquirir un nuevo punto de vista sobre los tiranos extranjeros como Kim Il Sung de Corea del Norte» (Peter Collier y David Horowitz, «Confessions of Two New-Left Radicals: Why We Voted for Reagan», *Washington Post National Weekly Edition*, 8 de abril de 1985). Robert Leiken llegó a ser más potente como crítico de los sandinistas que como supuesto activista en los movimientos pacifistas y antiguo partidario de los sandinistas. Todas y cada una de estas declaraciones eran una falacia, pero este hecho no fue mencionado por los medios de comunicación. Sobre las declaraciones de Leiken y la «fuerza especial» que sus escritos antisandinistas ganaron gracias a su supuesta conversión tras haber sido «fan de los sandinistas», véase Michael Massing, «Contra Aides», *Mother Jones* (octubre de 1987). Descartando esta pretensión, Massing da crédito a la declaración de Leiken de que «participó activamente en el movimiento pacifista», pero esto es muy equívoco. Los activistas del área de Boston, donde declara haber sido organizador de actividades pacifistas, no recuerdan participación alguna de Leiken hasta alrededor de 1970 —una época en la que McGeorge Bundy también podía haber sido descrito como líder activista.

1.4. EL CUARTO FILTRO: EL «CON EL MAZO DANDO» DE LOS REFORZADORES DE OPINIÓN

La alusión a «con el mazo dando» alude a las respuestas negativas, al intento de «dar caña» a declaraciones o programas de los medios de comunicación. Éstas pueden adoptar la forma de cartas, telegramas, llamadas telefónicas, instancias, pleitos, discursos e interpelaciones al Congreso, y otros mecanismos de queja, amenaza y acción punitiva. Se puede organizar de manera centralizada o local o puede consistir en acciones individuales totalmente independientes.

Si las contestaciones críticas se producen a gran escala, o por individuos o grupos que disponen de importantes recursos, pueden resultar incómodas y costosas para los medios de comunicación, que deben defender su posición dentro y fuera de la organización, y en ocasiones ante asambleas legislativas o incluso ante los tribunales. Los anunciantes pueden retirar su patrocinio. La publicidad televisiva se centra principalmente en bienes de consumo que son fácilmente objeto de un *boicot* organizado. Durante la era McCarthy, muchos anunciantes y cadenas de radio y televisión fueron eficazmente coercionados por los cazadores de rojos para que despidiesen o pusiesen en las listas negras a algunos de sus empleados, con la amenaza que de lo contrario boicotearían sus productos. Los anunciantes están aún más interesados en no ofender a audiencias que pueden producir contestaciones críticas, y su demanda de programas adecuados es una característica constante del ámbito de los medios de comunicación.[98] Si se considera que probablemente algunos acontecimientos, posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean eliminados.

La capacidad para producir respuestas críticas, especialmente costosas y amenazantes, está vinculada al poder. Este tipo de respuesta ha aumentado en estrecho paralelismo con el creciente resentimiento empresarial ante las críticas de los medios de comunicación, y con la ofensiva empresarial de los años setenta y ochenta. La respuesta crítica de los poderosos puede ser directa o indirecta. En la directa se incluirían las cartas o llamadas telefónicas desde la Casa Blanca a Dan Rather o a William Paley, o desde la Federal

98. Véase nota 55.

Communications Commission (FCC) a las cadenas de televisión solicitándoles los documentos utilizados en la elaboración de un determinado programa, o desde funcionarios indignados de las agencias de publicidad o patrocinadores empresariales a los funcionarios de los medios de comunicación, solicitándoles un espacio para sus réplicas o amenazándoles con represalias.[99] Asimismo los poderosos pueden actuar indirectamente sobre los medios de comunicación, quejándose de éstos ante su propia audiencia (accionistas y empleados); generando publicidad institucional con el mismo fin, y financiando el control de derechas o acciones de corte intelectual para atacar a los medios de comunicación. Asimismo pueden financiar campañas políticas, colaborando a situar en el poder a políticos conservadores que servirán más directamente los intereses de los poderes privados refrenando cualquier desviacionismo en los medios de comunicación.

Junto a otras inversiones políticas realizadas en los años setenta y ochenta, la comunidad empresarial ha patrocinado el desarrollo de instituciones tales como la American Legal Foundation, la Capital Legal Foundation, el Media Institute, el Center for Media and Public Affairs y la Accuracy in Media (AIM). Estas instituciones pueden considerarse como creadas específicamente para producir respuestas críticas. Otra institución de este estilo, más antigua y con mayor alcance, es la Freedom House. La American Legal Foundation, organizada en 1980, se ha especializado en quejas y procesos para ayudar a las «víctimas de los medios de comunicación» por lo que se refiere a la *Fairness Doctrine* (Doctrina de la Imparcialidad). La Capital Legal Foundation, constituida en 1977, fue el vehículo que Scaife utilizó para el proceso por difamación de la Westmoreland contra la CBS, en el que estaban en juego 120 millones de dólares.[100]

El Media Institute, organizado en 1972 y financiado por acaudalados patrones empresariales, subvenciona programas de control, conferencias y estudios de los medios de comunicación. Ha dejado en un segundo término los fallos de los medios de comunicación en

99. Véase «The Business Campaign Against "Trial by TV"», *Business Week* (22 de junio de 1980), pp. 77-79; William H. Miller, «Fighting TV Hatchet Jobs», *Industry Week* (12 de enero de 1981), pp. 61-64.

100. Véase Walter Schneir y Miriam Schneir, «Beyond Westmoreland: The Right's Attack on the Press», *The Nation* (30 de marzo 1985).

política exterior, para centrarse más en la descripción que éstos hacen de los temas económicos y los relacionados con la comunidad comercial, si bien el abanico de sus intereses es amplio. El tema que ha sido objeto principal de los estudios y conferencias que han patrocinado ha sido el fracaso de los medios de comunicación al no retratar correctamente a las empresas y no dar la debida importancia al punto de vista empresarial,[101] aunque también suscribe trabajos tales como el de John Corry acerca de la presunta parcialidad izquierdista de los medios de comunicación.[102] El presidente del consejo de administración del Instituto en 1985 era Steven V. Seekins, el máximo funcionario de relaciones públicas de la American Medical Association; el presidente del National Advisory Council era Herbert Schmertz, de la Mobil Oil Corporation.

El Center for Media and Public Affairs, dirigido por Linda y Robert Lichter, fue creado a mediados de 1980 como instituto de investigación «sin ánimo de lucro y no partidista», y contó con el caluroso espaldarazo de Patrick Buchanan, Faith Whittlesey y del propio Ronald Reagan, quien reconoció la necesidad de una prensa objetiva e imparcial. Su publicación *Media Monitor*, así como sus estudios e investigaciones, prosiguen los primeros esfuerzos por demostrar la parcialidad liberal y las veleidades antiempresariales de los medios de comunicación de masas.[103]

El AIM (Accuracy in Media) fue fundado en 1969, y creció espectacularmente en la década de los setenta. Su renta anual pasó de los 5.000 dólares en 1971 al millón y medio de dólares a principios de los ochenta, financiación que proviene principalmente de las grandes empresas y de los acaudalados herederos y fundaciones del sistema empresarial. Por lo menos ocho compañías petrolíferas diferentes contribuyeron económicamente a la Accuracy in Media

101. Un anuncio ampliamente difundido por la United Technologies Corporation, titulado «Crooks and Clowns on TV», se basa en el estudio del Media Institute titulado *Crooks, Conmen and Clowns: Businessmen in TV Entertainment*, el cual sostiene que los hombres de negocios son maltratados en los programas de entretenimiento de la televisión.

102. John Corry, *TV News and the Dominant Culture*, Media Institute, Washington, 1986.

103. Véase S. Robert Lichter, Stanley Rothman y Linda Lichter, *The Media Elite*, Adler & Adler, Bethesda, Md., 1986. Para una buena discusión sobre el nuevo centro de Lichter, véase Alexander Cockburn, «Ashes and Diamonds», *In These Times* (8-21 de julio de 1987).

(AIM) a principios de los ochenta, si bien el número total de patrocinadores pertenecientes a la comunidad empresarial es impresionante.[104] La función de la AIM es acosar a los medios de comunicación y presionarlos para que sigan el orden del día empresarial y una política exterior de corte conservador y línea dura. Hostiga a los medios de comunicación para que se unan con mayor entusiasmo al carro de los cazadores de rojos, y los ataca por sus presuntas deficiencias siempre que actúan indebidamente en materia de política exterior, condicionándolos para que tengan problemas (y aumentos de costes) si vulneran las pautas de parcialidad conservadoras.[105]

La Freedom House, que se remonta hasta principios de los años cuarenta, está interrelacionada con la AIM, la World Anticomunist League, la Resistance International, y con organismos del gobierno estadounidense tales como Radio Europa Libre y la CIA; desde siempre ha actuado como virtual brazo propagandístico del gobierno y de la derecha internacional. Envió observadores electorales a las elecciones convocadas en Rhodesia por Ian Smith en 1979, que las consideraron «imparciales» y que sin embargo encontraron dudosas las elecciones de 1980 ganadas por Mugabe y celebradas bajo supervisión británica. Asimismo estos observadores encontraron admirables las elecciones salvadoreñas de 1982.[106] Ha dedicado impor-

104. Louis Wolf, «Accuracy in Media Rewrites News and History», *Covert Action Information Bulletin*, primavera de 1984, pp. 26-29.

105. Es difícil estimar el impacto de la AIM, pero sólo debe ser reconocido como parte de una campaña derechista empresarial de mayor envergadura. Comparte recursos económicos con componentes del laberinto conservador tales como el AEI, Hoover, el Institute for Contemporary Studies y otros (véase Saloma, *Ominous Politics*, especialmente los capítulos 2, 3 y 6), y tiene un cometido específico. El director de la AIM, Reed Irvine, participa habitualmente en programas de televisión, y los medios de comunicación publican regularmente sus comentarios y cartas al director. Los medios de comunicación se sienten obligados a responder cuidadosamente sus detallados ataques contra los noticiarios y documentales, y la Corporation for Public Broadcasting incluso ayudó a respaldar la respuesta de su grupo a la serie sobre Vietnam de la PBS. Su habilidad para conseguir que el director del *New York Times* se entreviste personalmente con él una vez al año —objetivo primordial de todo cabildero— es un impresionante testimonio de su influencia. Sobre su contribución a la salida de Raymond Bonner del *Times*, véase Wolf, «Accuray in Media Rewrites News and History», pp. 32-33.

106. Para un análisis del sesgo de los observadores de la Freedom House, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections: U.S. —Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam and El Salvador*, South End Press, Boston, 1984, apéndice 1, «Freedom House Observers in Zimbabwe, Rhodesia and El Salvador».

tantes recursos a la crítica a los medios de comunicación por su insuficiente simpatía por las aventuras en política exterior de los Estados Unidos y por sus severas críticas a los estados clientes de la nación. La más notable de entre sus publicaciones de este género fue la *Big Story* de Peter Braestrup, según la cual la descripción negativa que los medios de comunicación efectuaron de la ofensiva del Tet ayudó a perder la guerra. Este trabajo es una parodia de erudición, pero aún es más interesante su premisa: según ésta, los medios de comunicación no sólo deben apoyar cualquier aventura nacional en el extranjero, sino que deben hacerlo con entusiasmo, ya que estas empresas son nobles por definición. En 1982, época en la que la administración Reagan tenía problemas para contener las informaciones de los medios de comunicación sobre los asesinatos sistemáticos de civiles cometidos por el ejército salvadoreño, la Freedom House apareció con una denuncia por el «desequilibrio» de las informaciones de los medios sobre El Salvador.[107]

Aunque los engranajes de contestación crítica atacan constantemente a los medios de comunicación, éstos les dan un buen trato. Les ofrecen su respetuosa atención, y raramente mencionan o analizan su papel propagandístico y sus vinculaciones con un programa empresarial de mayor envergadura. Con frecuencia publican las diatribas de Reed Irvine, director de la AIM.

Las respuestas críticas de corte conservador que atacan regularmente a los «medios de comunicación liberales», como las de Michael Ledeen,[108] disponen de un espacio en las columnas de editoriales abiertos, de críticos benevolentes y sus autores, en su calidad de expertos, siempre tienen un lugar en los debates televisados. Este es un reflejo del poder de los patrocinadores, poder que incluye la privilegiada posición de la derecha en los propios medios de comunicación.[109]

107. R. Bruce McColm, «El Salvador: Peaceful Revolution or Armed Struggle?», *Perspectives on Freedom I*, Freedom House, Nueva York, 1982; James Nelson Goodsell, «Freedom House Labels US Reports on Salvador Biased», *Christian Science Monitor* (3 de febrero de 1982).

108. Para una discusión sobre la opinión de Ledeen sobre los medios de comunicación, véase Herman and Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 166-170.

109. Entre los colaboradores de la AIM se cuentan la Reader's Digest Association y la DeWitt Wallace Fund, Walter Annenberg, sir James Goldsmith (propietario del francés *L'Express*) y E. W. Scripps II, presidente de una red de prensa, radio y televisión.

Los productores de respuestas críticas se refuerzan unos a otros y consolidan el mando de la autoridad política en sus actividades de gestión de noticias. El gobierno es uno de los mayores productores de estas respuestas críticas, que ataca, amenaza y «corrige» habitualmente a los medios de comunicación, e intenta poner freno a cualquier desviación de la línea establecida. La propia gestión de las noticias está diseñada para producir estas respuestas críticas. Durante su mandato, Reagan apareció repetidamente en televisión para destilar su encanto ante millones de telespectadores, muchos de los cuales censuraron a los medios de comunicación cuando éstos osaron criticar al «gran comunicador».[110]

1.5. El anticomunismo como mecanismo de control

El último filtro es la ideología del anticomunismo. El comunismo, el peor de los males, ha sido siempre el fantasma temido por los propietarios, puesto que amenaza las raíces mismas de su posición de clase y de su status superior. Las revoluciones soviética, china y cubana representaron un trauma para las elites occidentales, y los continuos conflictos y los profusamente divulgados abusos de los estados comunistas han contribuido a que la oposición al comunismo se haya convertido en el primer principio de la ideología y de la política occidentales. Esta ideología ayuda a movilizar a la población contra un enemigo, y dado que éste es un concepto difuso puede utilizarse contra cualquier persona que propugne una política que amenace los intereses de la propiedad o apoye los acuerdos con los estados comunistas y los radicales. De esta manera ayuda a fragmentar a los movimientos obreros y de izquierdas, y actúa como mecanismo de control político. Si el triunfo del comunismo es el peor de los resultados imaginables, el apoyo al fascismo en el extranjero queda justificado como mal menor. En similares térmi-

110. George Skelton, corresponsal en la Casa Banca de *Los Angeles Times*, señaló que en lo concerniente a los errores consumados por Reagan, «escribes el artículo una vez, dos, y recibes un montón de correspondencia que dice: "Te estás metiendo con él, y vosotros, los chicos de la prensa, también cometéis errores". Y los editores son sensibles a estas cosas, de modo que al cabo de un tiempo los artículos dejan de salir. Estamos intimidados» (citado en Hertsgaard, «How Reagan Seduced Us»).

nos se argumenta la oposición a los socialdemócratas que son demasiado débiles con los comunistas y «están en sus manos».

Los liberales del país, a quienes con frecuencia se acusa de ser procomunistas o insuficientemente anticomunistas, se mantienen continuamente a la defensiva en un medio cultural en el cual el anticomunismo es la religión dominante. Si permiten que el comunismo, o algo que pueda etiquetarse como tal, triunfe en las provincias en las que ostentan el poder, los costes políticos son elevados. De todas maneras la mayoría de ellos han interiorizado totalmente esta religión, pero aún así están sometidos a grandes presiones para que demuestren sus credenciales anticomunistas. Esto hace que muchas veces se comporten como reaccionarios. Su apoyo ocasional a los socialdemócratas queda muchas veces colapsado cuando éstos no son suficientemente severos con los radicales de su circunscripción o con los grupos populares que se organizan en los sectores generalmente marginados. Durante su breve mandato en la República Dominicana, Juan Bosch atacó la corrupción de las fuerzas armadas y del gobierno, inició un programa de reforma agraria, emprendió un gran proyecto para la alfabetización masiva de la población, y mantuvo un gobierno notablemente abierto y un sistema de libertades civiles efectivas. Esta política amenazaba poderosos intereses internos e inalienables, y los Estados Unidos se molestaron por su independencia y por la ampliación de las libertades civiles a comunistas y radicales. Estaba llevando demasiado lejos la democracia y el pluralismo. Kennedy estaba «sumamente defraudado» por el gobierno de Bosch; el Departamento de Estado «se apresuró a amargar al primer presidente elegido democráticamente en la República Dominicana en más de treinta años». El derrocamiento de Bosch por los militares, tras nueve meses en el poder, contaba por lo menos con el apoyo tácito de los Estados Unidos.[111] Dos años más tarde, la administración Johnson invadió la República Dominicana para asegurarse de que Bosch no volviese a asumir el poder.

Los liberales de Kennedy estaban entusiasmados con el golpe militar y la destitución del gobierno popular de Brasil, en 1964.[112]

111. Piero Gleijeses, *The Dominican Crisis*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978, pp. 95-99.

112. Jan K. Black, *United States Penetration of Brazil*, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1977, pp. 39-56.

En la época de Kennedy y Johnson se llevó a cabo un esfuerzo supremo para desarrollar los estados neofascistas de seguridad nacional. En los casos de la subversión estadounidense de Guatemala, en 1947 y 1954, y de los ataques militares en Nicaragua, en 1981 y 1987, las presunciones de vínculos y las amenazas comunistas provocaron que muchos liberales apoyasen las intervenciones contrarrevolucionarias, mientras que otros guardaron silencio, paralizados por el temor de ser salpicados con acusaciones de infidelidad a la religión nacional.

Cabe señalar que cuando se produce el fervor anticomunista, cesa la demanda de evidencias serias que apoyen las declaraciones de abusos «comunistas», y los impostores pueden medrar como fuentes de información. Desertores, informadores y un surtido de diversos oportunistas pasan a primer plano como «expertos», y allí permanecen aún después de ser desenmascarados como nada fiables, cuando no como francos embusteros.[113] Pascal Delwit y Jean-Michel Dewaele comentan que también en Francia los ideólogos del anticomunismo «pueden hacer y decir cualquier cosa».[114] Analizando el nuevo status de Annie Kriegel y Pierre Daix, dos antiguos stalinistas convencidos que actualmente gozan de un gran y acrítico predicamento en Francia,[115] Delwit y Dewaele señalan que:

> Si analizamos sus escritos, podemos encontrar en ellos todas las reacciones clásicas de quienes han sufrido un desengaño amoroso. Pero a nadie se le ocurre criticarles por su pasado, incluso aunque éste los haya marcado para siempre. Pueden haberse convertido, pero no han cambiado... nadie percibe las constantes, aunque son

113. Véanse, *supra*, pp. 61-62; e, *infra*, pp. 256-263.

114. «The Stalinists of Anti-Communism», en Ralph Miliband, John Saville y Marel Liebman, *Socialist Register, 1984: The Uses of Anticommunism*, Merlin Press, Londres, 1984, p. 337.

115. En 1949 Daix se refirió a los campos de concentración de Stalin como «uno de los mayores logros de la Unión Soviética», exponentes de «la completa supresión de la explotación del hombre por el hombre» (citado en Miliband *et al.*, *Socialist Register*, p. 337). Kriegel, antiguo funcionario de la línea dura del Partido Comunista, fue el autor de un libro de 1982 que explicaba que la KGB organizó las masacres de Sabra-Shatila como parte del programa soviético de terrorismo internacional, contratando terroristas alemanes vinculados a la OLP y con la tácita cooperación de la CIA, con el propósito de difamar a Israel. Para más información sobre este estudio en profundidad y su influencia, véase Noam Chomsky, *Fateful Triangle*, South End Press, Boston, 1983, pp. 291-292, 374-375.

> evidentes. Sus *best sellers* son una prueba de que, gracias al apoyo de la crítica más indulgente y perezosa que uno pudiese esperar, se puede embaucar al público. Nadie denuncia o ni siquiera se da cuenta de la arrogancia de los elogios de ayer y las diatribas de hoy, nadie tiene en cuenta que jamás dan una prueba y que utilizan los improperios en lugar del análisis. Su hiperestalinismo trastocado, que adquiere la forma habitual de un exacerbado maniqueísmo, queda encubierto simplemente porque va contra el comunismo. La histeria no ha cambiado, pero obtiene una mejor acogida con su disfraz actual.[116]

El mecanismo de control anticomunista llega, a través del sistema, a ejercer una profunda influencia en los medios de comunicación. En épocas normales, así como en períodos de caza de rojos, los temas suelen ser esquematizados en términos de un mundo dividido en potencias comunistas y anticomunistas, con pérdidas y ganancias asignadas a los bandos contestatarios, y en el cual la propaganda en favor de «nuestro bando» se considera como una práctica informativa totalmente legítima. Son los medios de comunicación los que identifican, crean y ponen en el candelero a personas como Joe McCarthy, Arkady Shevchenko y Claire Sterling y Robert Leiken, o a una Annie Kriegel y a un Pierre Daix. La ideología y la religión del anticomunismo es un filtro potente.

1.6. La dicotomización y las campañas de propaganda

Los cinco filtros reducen la gama de noticias que pasan las barreras, y limitan aún más acusadamente lo que puede convertirse en «grandes noticias», que son objeto de prolongadas campañas informativas. Por definición, las noticias procedentes de las fuentes principales del *establishment* satisfacen las máximas exigencias de los filtros y son rápidamente adaptadas por los medios de comunicación. Los mensajes que proceden y tratan de los disidentes y los débiles, de individuos y grupos desorganizados, nacionales y extranjeros, están en desventaja inicial por cuestiones de costes y credibilidad, y con frecuencia no concuerdan con la ideología o los intere-

116. *Socialist Register*, p. 345.

ses de los guardianes y otros partidos poderosos que influyen en el proceso de criba y filtrado.[117]

Así, por ejemplo, la tortura de los presos políticos y el ataque a los sindicatos en Turquía, aparecerá en los medios de comunicación tan sólo por las presiones de los activistas en favor de los derechos humanos y por las de grupos que tienen poca influencia política. El gobierno de los Estados Unidos apoyó al gobierno de ley marcial turco desde su inicio en 1980, y la comunidad empresarial estadounidense se muestra entusiasmada con los regímenes que profesan un ferviente anticomunismo, fomentan las inversiones extranjeras, reprimen a los sindicatos y apoyan fielmente la política exterior de los Estados Unidos (un conjunto de virtudes que suelen estar estrechamente relacionadas). Los medios que optan por explicar la violencia turca contra su propia ciudadanía tendrán que hacer frente a unos gastos extra para hallar y comprobar las fuentes de información, provocarán las respuestas críticas del gobierno, de las empresas y del engranaje conservador, y serán mal vistas por la comunidad empresarial (incluyendo los anunciantes) por embarcarse en una cruzada y unos intereses tan quijotescos. Acabarán quedándose solos por centrarse en víctimas que son *indignas* desde el punto de vista de los intereses dominantes en los Estados Unidos.[118]

Por el contrario, las protestas por los presos políticos y la violación de los derechos sindicales en Polonia fueron consideradas, por la administración Reagan y por la elite empresarial en 1981 como una causa noble, y, no fortuitamente, como una oportunidad para anotarse tantos políticos. Muchos dirigentes y articulistas asociados de los medios de comunicación pensaron lo mismo. Así, de fuentes oficiales en Washington era posible obtener informaciones y

117. Por supuesto, cuando los disidentes están preparados para denunciar a los enemigos oficiales, pueden pasar a través del sistema de filtrado de los medios de comunicación, tal como lo hacen los expertos ex comunistas descritos en «Anticommunism as a Control Mechanism», p. 29.

118. Véase el capítulo 2, «Víctimas dignas e indignas». En el caso turco, resulta interesante el rechazo de la prensa occidental a hacer públicos los ataques del gobierno turco contra la prensa, incluidos los reporteros de la prensa norteamericana en ese país. Ismet Ismet, reportero de la UPI, recibió una paliza a manos de la policía turca y fue encarcelado bajo cargos inventados. La UPI le aconsejó que no hiciera públicos los cargos contra él, y finalmente lo despidió por criticar la falta de compromiso en el tratamiento de su caso. Véase Chris Christiansen, «Keeping In With The Generals», *New Statesman*, 4 de enero de 1985.

enérgicos juicios sobre las violaciones de los derechos humanos en Polonia, y la dependencia de los disidentes polacos no provocó la respuesta crítica del gobierno de los Estados Unidos o de los engranajes preparados a tal efecto. Estas víctimas serán por lo general identificadas como *dignas* por los gestores de los filtros. Los medios de comunicación nunca explican *por qué* Andrei Sajarov es digno de atención y José Luis Massera, de Uruguay, indigno de ella; la atención y la dicotomización general se produce «naturalmente» como resultado de la actuación de los filtros, aunque el resultado es el mismo que si un comisario hubiese instruido a los medios de comunicación diciéndoles: «concéntrense en las víctimas de las potencias enemigas y olviden las víctimas de los amigos».[119]

119. Creemos que la misma dicotomización se aplica a la esfera doméstica. Por ejemplo, tanto los analistas británicos como los estadounidenses han señalado que los medios de comunicación arremeten periódicamente —y con gran indignación— contra los «timadores de la beneficencia pública», mientras paralelamente restan importancia y toman una actitud benévola ante los mucho más importantes abusos y fraudes fiscales cometidos por los hombres de negocios y los personajes acaudalados. Los medios de comunicación también hacen gala de una profunda desgana al examinar las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza. Peter Golding y Sue Middleton, tras una extensa discusión sobre la antigua «criminalización de la pobreza» y los ataques incesantes contra los gorrones de la beneficencia en Inglaterra, señalan que, al contrario, la evasión de impuestos es «aceptable, incluso loable»; que en la prensa, el evasor de impuestos «no es ya una víctima sino un héroe». Señalan, también, que «el máximo triunfo del bienestar capitalista» ha sido hacer casi invisibles las causas y la condición de la pobreza (*Images of Welfare: Press and Public Attitudes to Poverty*), Martin Robertson, Oxford, 1982, pp. 66-67, 98-100, 186, 193.

En un capítulo titulado «The Deserving Rich» (Los ricos dignos), A. J. Liebling señaló que también en los Estados Unidos, «la cruzada contra los indigentes es la cruzada favorita de los directores de periódicos» y que «no hay un concepto más querido de forma tan generalizada como el de los *pobres indignos* (*The Press*, Ballantine, Nueva York, 1964, pp. 78-79). Liebling detalló varios intentos de los medios de comunicación por mantener bajos los gastos de la beneficiencia y los impuestos «diciendo que ellos [los pobres] tienen bienes ocultos, o mala reputación, o ambas cosas» (p. 79). Estas estrategias no sólo distraen sino que además ayudan a separar a la clase trabajadora con empleo de los desempleados y marginados, y hace que todos ellos se sientan excesivamente incómodos al participar en un sistema degradado de gorronería. Véase Peter Golding y Sue Middleton, «Attitudes to Claimants: A Culture of Contempt», en *Images of Welfare*, pp. 169 ss. Las anécdotas inventadas por el presidente Reagan sobre los timadores de la beneficencia, y su completo silencio sobre los timos a gran escala de sus empresarios patrocinadores, responden a una larga tradición de codicia cínica y despiadada.

Los informes de los abusos sufridos por las víctimas dignas no sólo pasan a través de los filtros; pueden ser también la base de ininterrumpidas campañas propagandísticas. Si el gobierno o la comunidad empresarial y los medios de comunicación consideran que una historia es útil y dramática a la vez, se centran intensivamente en ella y la utilizan para instruir al público. Así ocurrió, por ejemplo, en el derribo soviético de un avión de las líneas aéreas coreanas KAL 007 a principios de septiembre de 1983, que permitió una extensa campaña de denigración de uno de los enemigos oficiales e hizo avanzar considerablemente los planes de rearme de la administración Reagan. Como Bernard Gwertzman señalaba con gran satisfacción en el *New York Times* del 31 de agosto de 1984, funcionarios estadounidenses «afirman que las críticas mundiales por cómo los soviéticos han manejado la crisis ha reforzado a los Estados Unidos en sus relaciones con Moscú». Sin embargo, que los israelíes abatieran un avión civil de las líneas aéreas libias en febrero de 1973 no despertó las protestas occidentales, no hubo denuncias por el «asesinato a sangre fría»[120] ni tampoco ningún boicot. El *New York Times* explicó este trato diferente precisamente en términos de utilidad: «nada útil puede resultar de un áspero debate sobre la atribución de la culpabilidad por el derribo de un avión libio en la península del Sinai la pasada semana».[121] Existía un «propósito extremadamente útil» por el cual centrarse en el acto soviético, que hizo poner en marcha una campaña propagandística masiva.[122]

Por lo general las campañas propagandísticas están estrechamente sincronizadas con los intereses de la elite. La caza de rojos de 1919-1920 fue muy útil para abortar la campaña de organización

120. Para una discusión completa sobre este tratamiento dicotomizado, véase Edward S. Herman, «Gatekeeper versus Propaganda Models: A Critical American Perspective», en Peter Golding, Graham Murdock y Philip Schlesinger, eds., *Communicating Politics*, Holmes & Meier, Nueva York, 1986, pp. 182-194.

121. Editorial, 1 de marzo de 1973. Aparentemente los soviéticos no sabían que estaban abatiendo un avión civil, pero la noticia fue cubierta por funcionarios estadounidenses, y la falsa alegación de que sabían que estaban destruyendo un avión civil proporcionó la base para una crítica extremadamente dura contra los soviéticos por su bárbaro comportamiento. Los israelíes admitieron abiertamente que sabían que estaban abatiendo un avión civil, pero, en este caso, esta cuestión no despertó ningún interés en Occidente.

122. El *New York Times Index*, por ejemplo, tiene siete páginas enteras de menciones del incidente KAL 007, sólo en el mes de septiembre de 1983.

sindical que siguió a la primera guerra mundial, en el ramo siderometalúrgico y en otras industrias. La caza de rojos de Truman y McCarthy colaboró a inaugurar la guerra fría y la economía de guerra permanente, y sirvió también para debilitar la coalición progresista de los años del *New Deal*. La atención crónica que se dedica a la inquietante situación de los disidentes soviéticos, a los asesinatos del enemigo en Camboya y a la conexión búlgara sirven para debilitar el síndrome de Vietnam, para justificar una enorme concentración armamentística y una política exterior más agresiva, y para distraer la atención de la redistribución hacia arriba de la renta, lo que constituía el núcleo del programa económico doméstico.[123] Los recientes ataques de desinformación y propaganda acerca de Nicaragua han sido necesarios para desviar las miradas de las barbaridades de la guerra en El Salvador, y para justificar la creciente inversión estadounidense en la contrarrevolución en América Central.

Inversamente, las campañas propagandísticas *no* se pondrán en marcha en los casos en que las persecuciones, por masivas, ininterrumpidas y dramáticas que sean, no satisfagan el test de utilidad para los intereses de la elite. Así, mientras que la atención dedicada a Camboya en la era de Pol Pot (y después) fue insuperablemente útil, puesto que Camboya había caído en manos de los comunistas y podían extraerse útiles lecciones prestando atención a sus víctimas, las numerosas víctimas de los bombardeos estadounidenses *anteriores* a la toma del poder de los comunistas fueron escrupulosamente ignoradas por la prensa estadounidense de elite. Tras la expulsión de Pol Pot por los vietnamitas, los Estados Unidos empezaron calladamente a apoyar a este criminal «peor que Hitler», sin que la prensa prestase a ello mucha atención, pues una vez más se acomodó al orden del día de la política nacional.[124] La atención a las masacres indonesias de 1965-1966, o a las víctimas de la invasión indonesia de Timor Oriental, desde 1975 en adelante, hubieran sido también claramente inútiles como base para una campaña de los

123. Las orgías de patriotismo, como los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, los vuelos de la lanzadera espacial, y el «Liberty Weekend», actúan de forma similar «reconciliándonos a todos». Véase Elayne Rapping, *The Looking Glass World of Nonfiction TV*, South End Press, Boston, capítulo 5, «National Rituals».

124. Véase *infra*, capítulo 5.

medios de comunicación, porque Indonesia es un país aliado y cliente de los Estados Unidos que mantiene las puertas abiertas a las inversiones occidentales, y porque, en el caso de Timor Oriental, los Estados Unidos eran en gran parte responsables de la carnicería. Lo mismo podemos decir de las víctimas del terror de Estado en Chile y Guatemala, pases clientes de los Estados Unidos cuyas estructuras institucionales básicas, entre las que se cuenta el sistema de Estado del terror, han sido entronizadas y mantenidas por, o con la crucial ayuda de, la potencia estadounidense, de la que siguen siendo clientes. Las campañas propagandísticas en favor de estas víctimas podrían entrar en conflicto con los intereses gubernamentales, empresariales y militares y, en nuestro modelo, no podrían pasar a través del sistema de filtrado.[125]

Las campañas de propaganda pueden ser iniciadas indistintamente por el gobierno o por una de las empresas de medios de comunicación más importantes. Las campañas para desacreditar al gobierno de Nicaragua, para apoyar las elecciones salvadoreñas como un ejercicio de democracia legitimadora, y para utilizar el derribo soviético del avión coreano KAL 007 como medio para movilizar el apoyo de la opinión pública en favor del rearme, fueron iniciadas y fomentadas por el gobierno. Las campañas para dar publicidad a los crímenes de Pol Pot y el presunto complot soviético para asesinar al Papa fueron iniciadas por el *Reader's Digest*, con el enérgico apoyo y seguimiento de la cadena de televisión de la NBC, el *New York Times* y otras grandes empresas de medios de comunicación.[126] Algunas campañas propangandísticas son iniciadas conjuntamente por el gobierno y los medios, y todas ellas precisan la colaboración de estos últimos. El secreto de la unidireccionalidad política de las

125. En los temas en los que la elite está seriamente dividida, se permitirán voces disidentes en los medios de comunicación, y la pomposidad de las declaraciones así como la suspensión de los juicios críticos estarán sujetos a una cierta moderación. Véase la discusión sobre este punto y ejemplos de casos concretos en el prefacio, pp. 15-16.

126. El cometido del gobierno en estos casos no puede ser minimizado, dados los estrechos lazos entre el *Reader's Digest* y la CIA y el hecho de que Paul Henze, una de las principales fuentes e instigador de la campaña de la Conexión Búlgara, fue durante un largo período funcionario de la CIA. Sobre la conexión CIA-*Readers' Digest*, véase Epstein, «The Invention of Arkady Shevchenko», pp. 40-41. Sobre Henze, véase el capítulo 4, pp. 238 y ss. En cuanto a la posibilidad de que una influencia del *Reader's Digest* en la guerra de Camboya fuese debida en parte a un esfuerzo desinformador de la CIA, véase p. 335, y las fuentes citadas.

campañas propagandísticas de los medios de comunicación reside en el sistema de múltiples filtros que acabamos de comentar: los medios de comunicación harán desaparecer rápidamente aquellas historias que resulten perjudiciales para los grandes intereses, si es que tales historias habían logrado aparecer en algún momento.[127]

Para las historias *útiles*, el proceso empezará con una serie de filtraciones, conferencias de prensa y libros blancos del gobierno, etc., o cuando uno o varios medios de comunicación la inician con artículos tales como el «Murder of a Gentle Land» (La aniquilación de un país apacible) (Camboya) de Barron y Paul, o como el «The Plot to Kill the Pope» (El complot para asesinar al Papa) de Claire Sterling, publicados ambos en el *Reader's Digest*. Si los otros medios de comunicación se sienten atraídos por la historia, la continuarán con sus propias versiones, y así la familiaridad con el tema hará que éste se convierta rápidamente en material noticiable. Si los artículos están escritos en un estilo seguro y convincente, los medios de comunicación no los someten a críticas o a interpretaciones alternativas y, con el apoyo que les prestan las personalidades reconocidas, los temas propagandísticos pasan rápidamente a ser considerados como ciertos aunque no haya ninguna evidencia real que dé fe de ello. Esto acostumbra a limitar aún más los puntos de vista divergentes, dado que pueden entrar en conflicto con una creencia popular ya establecida, lo que a su vez abre nuevas oportunidades para declaraciones más exageradas, que se pueden efectuar sin temor a grandes repercusiones. Las afirmaciones igualmente descabelladas que contradijesen los puntos de vista oficiales provocarían una potente respuesta crítica, de manera que el proceso quedaría controlado por el gobierno y el mercado. Este tipo de protecciones no existen cuando se trata de declaraciones apoyadas por el sistema; en este caso las respuestas críticas harán que los medios de comunicación se comporten más histéricamente ante el diablo enemigo. Los medios no sólo suspenden sus juicios críticos y su celo investigador, sino que compiten para encontrar nuevas maneras de apoyar la última verdad que se acaba de establecer. Los temas y los hechos,

127. Proporcionamos varios ejemplos de estas cuestiones en los capítulos siguientes. El caso Watergate, y más recientemente, al final de la era Reagan, el descubrimiento del caso Irán-Contragate, propuestos como ejemplos opuestos, se discuten en el capítulo 6.

e incluso análisis cuidadosos y bien documentados que son incompatibles con el recién institucionalizado tema, son eliminados o ignorados. Si el tema se agota por el propio peso de sus falsedades, los medios de comunicación recogerán tranquilamente sus bártulos y se dedicarán a otra cuestión.[128]

Con la utilización del modelo de propaganda podemos anticipar no sólo las definiciones de dignidad basadas en la utilidad y la atención dicotomizada basada en el mismo criterio, sino que podemos anticipar también que las informaciones sobre las víctimas dignas e indignas (o los estados amigos o enemigos) diferirán en *calidad*. Es decir, podemos esperar una utilización profusa y acrítica de las fuentes oficiales de los Estados Unidos y sus regímenes clientes, mientras que cuando se trate de estados enemigos se utilizarán los refugiados u otras fuentes de información disidentes.[129] Podemos preveer la aceptación acrítica de ciertas premisas al tratar de nuestros asuntos y de los de nuestros amigos, como por ejemplo que nuestro Estado y nuestros dirigentes buscan la paz y la democracia, se oponen al terrorismo y dicen la verdad, premisas que no se aplicarán cuando hablemos de nuestros enemigos. También cabe esperar la utilización de diferentes criterios de valoración, de manera que lo que se presenta como maldad de los estados enemigos será presentado como un incidente secundario cuando se trate de nosotros o de nuestros amigos.[130] Lo que está

128. Esto se aplica claramente al caso de la supuesta Conexión Búlgara del complot para asesinar al Papa. Véase *infra*, capítulo 4.

129. Hemos advertido en otras partes que el *New York Times* confiaba regularmente en oficiales indonesios para «presentar los hechos» sobre Timor Oriental, que estaba siendo invadido por Indonesia, y que ignoraba a los refugiados, a las fuentes de la Iglesia, etc. En contraste, la principal fuente del *Times* para informar sobre los acontecimientos de la posguerra en Vietnam y Camboya fueron los refugiados, no los funcionarios del Estado (*The Washington Connection and Third World Fascism*, South End Press, Boston, 1979, pp. 151-152, 169-176, 184-187). Sobre la tentativa de eludir implicaciones obvias, véase capítulo 5, «La era de Pol Pot», pp. 315-322.

130. Así, cuando la CIA dirige a los contras nicaragüenses hacia «objetivos blandos» tales como cooperativas agrícolas, con explícita aprobación del Departamento de Estado, los comentaristas de los medios de comunicación, o bien aplauden o bien ofrecen disquisiciones filosóficas sobre si tales objetivos son legítimos, dado que están defendidos por una milicia ligeramente armada. Los ataques terroristas contra los kibbutz israelíes, que también están defendidos por colonos armados, son contemplados de un modo distinto. Para más detalles, véase Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988.

en el día al tratar un caso, estará fuera de él cuando discutamos el otro.[131] Asimismo podemos esperar que el gran afán investigador de la maldad del enemigo y de las responsabilidades de los altos funcionarios en los abusos que cometen los estados enemigos, disminuya al estudiar estos temas cuando se trata de nosotros y de nuestros estados amigos.

La calidad de las informaciones queda también demostrada de forma más directa y brusca en el emplazamiento, los titulares, el estilo literario y otros recursos para movilizar el interés y la indignación. En los artículos de opinión, podemos anticipar abundantes limitaciones en el abanico de opiniones que se permiten. Nuestra hipótesis es que las víctimas dignas recibirán un trato prominente y dramático, que serán humanizadas, y que su sacrificio obtendrá un tratamiento detallado y contextualizado que generará el interés y el sentimiento compasivo del lector. Por el contrario, las víctimas indignas merecerán tan sólo una breve referencia, una mínima humanización y un tratamiento descontextualizado que no excite ni enfurezca.

Mientras tanto, dado el poder de las fuentes de información del *establishment*, de los mecanismos de respuestas críticas y de la ideología anticomunista, podemos anticipar que se producirán protestas porque las víctimas dignas están siendo gravemente descuidadas, que las indignas reciben un tratamiento demasiado generoso y acrítico,[132] que la adversión (si no hostilidad) contra el gobierno por parte de los medios de comunicación liberales explica nuestras dificultades en recabar apoyo para la última aventura nacional de intervención contrarrevolucionaria.

131. La forma en que varía lo que se considera actualidad y la expresión de la misma, se ve con gran claridad en el tratamiento de las elecciones tercermundistas, según reciban éstas o no el apoyo estadounidense, tal como se describe en el capítulo 3.

132. Las afirmaciones de Michael Ledeen son clásicas en su audacia. Según él, 1) «la palabra de Gaddafi tiene más credibilidad en los medios de comunicación que la del gobierno estadounidense; y 2) «Se presta mucha más atención y reciben críticas más duras las violaciones relativamente menores de los Derechos Humanos acaecidas en un país cliente (especialmente si está bajo el gobierno autoritario de la derecha) que los pecados mucho más graves de países que nos son hostiles...» (*Grave New World*, Oxford University Press, Nueva York, 1985, p. 131; la superior credibilidad de Gaddafi se describe en las pp. 132-133). Véase el capítulo 2 de este libro para documentación sobre la realidad del tratamiento que los medios de comunicación dispensan a los abusos cometidos por estados clientes y enemigos.

En resumen, una aproximación a los medios de comunicación desde la propaganda evidencia una sistemática y exagerada dicotomización política en la cobertura informativa, que se basa en su utilidad para los importantes intereses de los poderes domésticos. Todo ello puede observarse en la dicotomizada elección de las historias y en la cantidad y calidad de la información. En los siguientes capítulos veremos que esta dicotomización se produce masiva y sistemáticamente en los medios de comunicación: no sólo se trata de elecciones en función de la publicidad o comprensibles en términos de ventajas para el sistema, sino que la forma de tratamiento de los materiales favorables o inconvenientes (emplazamiento, tono, contexto, amplitud de tratamiento) se diferencian en una dirección que está al servicio de los fines políticos.

2. VÍCTIMAS DIGNAS E INDIGNAS

Un sistema de propaganda consecuente presentará a las personas que han sido maltratadas en los estados enemigos como víctimas «dignas» de atención, mientras que aquellas tratadas con igual o mayor severidad por el propio gobierno o el gobierno de los estados clientes serán víctimas «indignas» de dicha atención. Esta diferencia de trato queda patente en el alcance y el carácter de la atención e indignación que reflejan las informaciones. En este capítulo mostraremos cómo en la práctica las definiciones de «dignidad» o «merecimiento» de los medios de comunicación de los Estados Unidos son sumamente políticas y se adecúan perfectamente a las expectativas de un modelo propagandístico. Mientras este tratamiento diferencial se produce a gran escala, los medios de comunicación, los intelectuales y la opinión pública pueden permanecer ajenos a la realidad y mantener la moral alta y un aire santurrón, que es la mejor prueba de la efectividad del sistema de propaganda.

2.1. Jerzy Popieluszko frente a cien víctimas religiosas en América Latina

Se puede establecer una comparación significativa entre el tratamiento que los medios de comunicación dedicaron a Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco asesinado por la policía de su país en octubre de 1984, y la información que esos medios dieron del asesinato de sacerdotes en el área de influencia de los Estados Unidos. En nuestro modelo, Popieluszko, asesinado en un Estado enemigo, sería una víctima «digna» de atención, mientras que los sacerdotes asesinados en nuestros estados clientes de América Latina no mere-

cerían igual trato. En el primer caso es de esperar que los medios de comunicación desencadenen una explosión propagandística, lo que no sucederá en el segundo.

2.1.1. *Aspectos cuantitativos de la cobertura informativa*

En la línea 1 del cuadro 2.1 se muestra la cobertura informativa que las publicaciones *New York Times, Time, Newsweek* y el programa televisivo *CBS News* dispensaron al asesinato de Popieluszko y al juicio de sus asesinos. A partir de la línea 2 hasta la 5 se resume la información que dichos medios dedicaron a los asesinatos de religiosos en América Latina, obra de agentes de los estados clientes de Estados Unidos.[1] La línea 2 muestra la cobertura informativa dispensada a setenta y dos individuos de una lista de religiosos latinoamericanos «mártires» enumerada por Peny Lernoux en su libro *Cry of the People*. La línea 3 describe la que merecieron los asesinatos de veintitrés sacerdotes, misioneros y otros religiosos, perpetrados en Guatemala entre enero de 1980 y febrero de 1985. La línea 4 resume la cobertura informativa del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, abatido por un disparo en marzo de 1980. Y la línea 5 resume la información que se publicó acerca del asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en El Salvador, en diciembre de 1980.

La atención que los medios de comunicación dedicaron al asesinato de Jerzy Popieluszko no sólo empequeñece la que se dedicó a víctimas «menos dignas» de ella, sino que constituye un notable episodio propagandístico y de manipulación de noticias. Ninguna de las víctimas del llamado mundo libre ha recibido un trato com-

1. En un discurso del 19 de julio de 1986, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respondiendo a cargos de persecución religiosa, aseguró que de los 138 religiosos asesinados y 278 secuestrados o desaparecidos en América Central desde 1979 (cifra que incluye a los Lay Delegates of the Word), ninguno había sido víctima del gobierno nicaragüense (*Central America News Update*, 4 de agosto de 1986). Sin embargo, muchos habían sido asesinados por la contra, según la tradición en curso de la violencia somocista. Ver Andrew Reding, «The Church in Nicaragua», *Monthly Review* (julio-agosto de 1987), pp. 34-36. La gran mayoría fueron asesinados por las fuerzas de seguridad y los ejércitos de los estados clientes de los Estados Unidos, o por escuadrones de la muerte asociados a éstos.

parable.[2] El *New York Times* se ocupó del caso Popieluszko diez veces en portada, y la intensidad de las informaciones fue tal que aseguró que sus lectores supiesen quién era Popieluszko, que éste había sido asesinado y que esta sórdida violencia se había producido en un Estado comunista. Por el contrario, el público no encontró referencia alguna a los nombres del padre Augusto Ramírez Monasterio, superior de la orden franciscana en Guatemala, asesinado en noviembre de 1983, ni al del padre Miguel Ángel Montufar, sacerdote guatemalteco que desapareció el mismo mes que Popieluszko, ni supo nada de, literalmente, docenas de otros religiosos que fueron asesinados en las provincias de América Latina, aunque en algunas ocasiones estas muertes tuviesen una repercusión considerable en la prensa local de los países donde habían ocurrido.

En realidad, *ninguna* de las personas de gran relieve asesinadas en América Latina, incluyendo al arzobispo Romero y a las cuatro religiosas estadounidenses, obtuvo en ningún medio una atención comparable a la otorgada a Popieluszko. Mostraremos a continuación cómo también la *calidad* del tratamiento que reciben las víctimas difiere sustancialmente de un caso a otro. Mientras que la cobertura informativa que merece una víctima «digna» suele prodigar los detalles sangrientos y las expresiones que resaltan la atrocidad cometida y piden justicia, las informaciones que se refieren a víctimas «menos dignas» están redactadas en un tono menor, con la intención de restarles carga emocional, y suelen aludir a sentidas y filosóficas generalidades acerca de la omnipresencia de la violencia y de la tragedia inherentes a la vida humana. Esta diferencia cualitativa se hace patente tanto en la ubicación de las noticias como en los editoriales que se dedican a cada caso: diez artículos en portada sobre Popieluszko confirman la importancia del asunto, como el de que se dediquen tres editoriales a denunciar a los polacos, y que no se publique ni un solo editorial denunciando los asesinatos de las víctimas del otro lado.

Si comparamos las líneas 1 y 6 del cuadro 2.1, veremos que, en cada una de las tres categorías de medios de comunicación, la

2. En *The Real Terror Network*, South End Press, Boston, 1982, Edward Herman muestra que en los años 1976-1981, la única cobertura del *New York Times* sobre la persecución de individuos en el extranjero fue la de los disidentes soviéticos, especialmente Sharansky y Sajarov (pp. 169-199), aunque se produjeron numerosos casos tanto o más graves en los dominios de los Estados Unidos.

cobertura informativa dedicada a la víctima digna, Popieluszko, supera la que se dedicó a las otras cien víctimas juntas. Sospechamos que la atención dedicada al caso Popieluszko puede haber superado la que se ha dispensado a los cientos de religiosos asesinados en América Latina desde la segunda guerra mundial, los más importantes de los cuales están incluidos en el centenar que hemos seleccionado. El cuadro nos permite calcular también el mérito *relativo* de las víctimas de todo el mundo, midiéndolo por la importancia que les han otorgado los medios de comunicación estadounidenses. El mérito de la víctima Popieluszko puede tasarse entre 137 y 179 veces más que el de una víctima de los estados clientes de los Estados Unidos;[3] o invirtiendo los términos, un sacerdote asesinado en América Latina tiene cien veces menos mérito que un sacerdote asesinado en Polonia.

A veces se afirma que las víctimas que merecen menor atención por parte de los medios de comunicación estadounidenses reciben ese trato porque sus asesinatos han ocurrido en zonas muy lejanas que son tan diferentes a nosotros que resulta fácil no prestarles atención.[4] Sin embargo, Polonia está bastante más lejos que América Central, y sus vínculos culturales y comerciales con los Estados Unidos no son mayores que los de los países de América Latina en general. De los veintitrés religiosos asesinados en Guatemala (línea 3), tres eran ciudadanos estadounidenses, aunque ni siquiera esta consideración provocó la reacción de los medios de comunicación. Tampoco la violación y el asesinato de las cuatro religiosas estadounidenses a manos de miembros de la Guardia Nacional salvadoreña suscitó una atención comparable a la dedicada a Popieluszko. La valoración relativa del *New York Times* de este tema representa menos de una décima parte que la del caso Popieluszko,

3. Calculado dividiendo el número de artículos e informativos de la *CBS* dedicados a Popieluszko por el número que trata del centenar de víctimas y multiplicando el resultado por 100.

4. Anthony Lewis dice que los disidentes soviéticos «son suficientemente parecidos a nosotros para que nos identifiquemos con ellos» («A Craving for Rights», *New York Times*, 31 de enero de 1977), un punto de vista parcialmente válido, ya que la mayor parte de las víctimas de la política exterior norteamericana son campesinos tercermundistas, pero no válido en tanto que las víctimas de estados clientes tan «parecidos a nosotros» como puedan serlo los disidentes soviéticos no reciben una atención comparable, tal como muestran los casos mencionados y la referencia de la nota 2.

CUADRO 2.1. *Cobertura informativa de los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas. 1: Un sacerdote polaco asesinado frente a cien religiosos asesinados en América Latina*

	NEW YORK TIMES								*TIME* y *NEWSWEEK*				*CBS NEWS*			
	Artículos[1]		Medición en pulgadas		Artículos en portada		Editoriales[1]		Artículos[1]		Medición en pulg.		N.° de la programas informativos[1]		N.° de programas informativos nocturnos	
	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1
Víctimas																
1. Jerzy Popieluszko, asesinado el 19 de octubre de 1984	78	(100)	1.183,0	(100)	10	(100)	3	(100)	16	(100)	313,0	(100)	46	(100)	23	(100)
2. 72 víctimas religiosas en América Latina, 1964-1978[2]	8	(10,3)	117,5	(9,9)	1	(10)	—	—	—	—	16	(5,1)	—[3]	—	—	—
3. 23 religiosos asesinados en Guatemala en. 1980/ feb. 1985[4]	7	(9,0)	66,5	(5,6)	—	—	—	—	2	(12,5)	34,0	(10,9)	2	(4,3)	2	(8,7)
4. Óscar Romero asesinado el 18 de marzo de 1980	16	(20,5)	219,0	(18,5)	4	(40)	—	—	3	(18,8)	86,5	(27,6)	13	(28,3)	4	(17,4)
5. 4 religiosas, asesinadas en El Salvador, 2 dic. 1980	26	(33,3)	201,5	(17,0)	3	(30)	—	—	5	(31,2)	111,0	(35,5)	22	(47,8)	10	(43,5)
6. Total de líneas 2-5	57	(73,1)	604,5	(51,1)	8	(80)	—	—	10	(62,5)	247,5	(79,1)	37	(80,4)	16	(69,6)

1. La cobertura informativa se refiere a un período de 18 meses a partir del primer informe sobre la desaparición o asesinato de la víctima.
2. Relacionados en Penny Lernoux, *Cry of the People* (Doubleday, Nueva York, 1980), pp. 464-465. Hemos omitido los nombres de siete mártires que se habían unido a las guerrillas. Lernoux señala que su lista dista mucho de ser completa, y que en ella figuran tan sólo las víctimas más conocidas.
3. El *CBS News Index* empezó en 1975; hemos dejado la cifra en blanco porque no se cubren los primeros años de este grupo.
4. Se trata solamente de un listado parcial, extraído de unas tablas del «Religious Killed or "Disappeared" in Guatemala», publicadas periódicamente por CONFREGUA, Conferencia de Religiosos de Guatemala.

y luego mostraremos que la cobertura informativa acerca de estas víctimas estadounidenses evidenció una indignación y una pasión considerablemente menores que las constatables en la información relacionada con el sacerdote polaco.[5]

La atención que se dedicó a Popieluszko fue algo sobredimensionada por el rápido enjuiciamiento de sus asesinos, y por el hecho de que era un juicio acerca del cual los periodistas estadounidenses podían informar con toda libertad. Por el contrario, casi todos los asesinatos de las víctimas latinoamericanas fueron realizados por fuerzas oficiales o paramilitares, se trataba de crímenes que jamás fueron investigados o perseguidos por la ley, o en algunas ocasiones incluso (como en el caso de Romero y de las cuatro religiosas estadounidenses) contaron con una protección oficial activa. Sólo en el caso de las cuatro mujeres asesinadas en El Salvador hubo presiones suficientes para forzar algún tipo de investigación y de procedimiento legal. Como tendremos ocasión de ver, el subsiguiente proceso apenas tuvo repercusión en los medios de comunicación (en contraste con el intenso interés que manifestaron por el juicio del caso Popieluszko); la prensa por lo demás no hizo comentario alguno ni investigó la significación del hecho que este juicio, relativamente serio, tuviera lugar en la «totalitaria» Polonia, mientras que en las llamadas «democracias incipientes» de algunos países pertenecientes a la esfera de influencia de los Estados Unidos se perpetraban diariamente crímenes de Estado sin que se produjera ninguna investigación o juicio contra los asesinos.

2.1.2. *La cobertura informativa del caso Popieluszko*

Jerzy Popieluszko era un sacerdote activista y un fuerte puntal del movimiento Solidaridad polaco. En un intento de eliminarlo e intimidarlo, el 19 de octubre de 1984 miembros de la policía secreta polaca lo secuestraron, a continuación le apalearon, ataron y amordazaron y finalmente lo arrojaron a un estanque. Su cuerpo fue

5. No es una coincidencia que el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, y la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, realmente defendieran el asesinato de las mujeres americanas, tal como se describe en la página 114.

encontrado algunos días después. Merced a la airada reacción que el suceso desencadenó, los policías directamente involucrados en el asesinato fueron rápidamente identificados y finalmente juzgados y condenados a duras penas de cárcel. Como ya hemos visto, en Estados Unidos se dedicó gran atención al caso, y además la calidad de la información estaba sumamente bien proyectada hacia la consecución de tantos políticos, y contrasta abiertamente con la calidad de la cobertura informativa dedicada a víctimas menos dignas.

2.1.2 (*a*). *Amplitud y reiteración de los detalles del asesinato y de los daños infligidos a la víctima.* La información sobre el asesinato de Popieluszko se distinguía por la profusión de detalles acerca del trato que sufrió a manos de la policía y al estado de su cadáver. Es más, esos detalles se repetían a la menor oportunidad. El estado de su cadáver fue descrito tras el hallazgo del mismo, al presentarse en el juicio las pruebas médicas, y durante el testimonio de los autores del crimen.[6] Una y otra vez se describía la tensión emocional y la culpabilidad manifestadas por los oficiales de policía durante el juicio, entremezclando estos comentarios con el relato de cómo Popieluszko suplicó por su vida, poniendo así de manifiesto la brutalidad del acto. Se reprodujeron numerosas fotos poco afortunadas de los policías durante el juicio, añadiendo así un detalle dramático que reforzaba la imagen de su crueldad. Los policías aparecían sentados en la sala del juzgado, uno de ellos con «un tic nervioso en el lado derecho de su cara que hacía que su oscuro

6. Aparte de los detalles aparecidos en el *New York Times* que se muestran en el cuadro 2.2, hubo al menos otros cuatro artículos del *New York Times* que repitieron la misma información, y detalles parecidos fueron ofrecidos en *Time*, *Newsweek* y el programa *CBS News*. Para citar un ejemplo entre los muchos de *Time*, un artículo titulado «Grim Tale: Details of a Martyr's Death» (19 de noviembre de 1984), dice así: «Los funcionarios eclesiásticos que vieron el cuerpo del sacerdote martirizado informaron que había sido golpeado salvajemente. Le habían atado con una cuerda el cuello, las muñecas y los tobillos, de modo que se estrangulara si forcejeaba para librarse. Le habían cortado tres dedos de la mano izquierda y mostraba profundas marcas en los brazos. La cantidad de agua contenida en los pulmones indica que seguía respirando, aunque estuviera inconsciente, cuando lo arrojaron, atado de pies y manos, a un depósito». El *Time* repite estos y otros detalles con evidente deleite en cuanto tiene ocasión. Como veremos, el *Time* es menos pródigo en detalles cuando se trata de víctimas indignas.

bigote se contrajese de una manera incontrolable», presentado «un testimonio entrecortado por las lágrimas que confirió al juicio alguno de sus momentos más dramáticos» (*Time*, 18 de febrero de 1985). O bien, los policías lloraban abiertamente o inclinaban sus cabezas ante la horrible evidencia. La figura de Popieluszko fue humanizada, con descripciones de sus características físicas y de su personalidad que hicieron de él algo más que una víctima lejana.[7] En resumen, el acto de violencia y sus efectos sobre Popieluszko se presentaron de manera que generasen el máximo impacto emocional sobre los lectores. La acción fue cruel y merecía la presentación que de él se hizo. Las acciones contra las víctimas menos dignas son crueles también, pero reciben un trato muy diferente.

2.1.2 (*b*). *El énfasis en la indignación, la conmoción y en las peticiones de justicia.* Los artículos sobre el asesinato de Popieluszko eran en gran medida expresiones o declaraciones de condena, indignación, profunda conmoción, manifestaciones de duelo y exigencias de que se hiciese justicia. Dedicaban una atención constante y compasiva a los manifestantes, los que iban de luto, los que lloraban, a quienes paraban simbólicamente en sus trabajos, a las misas que se celebraban en memoria de la víctima y a las expresiones de condena, la mayoría de fuentes no oficiales. La población «continuaba llorando su pérdida» y «aumentaba la indignación pública»; el Papa estaba profundamente conmovido e incluso Jaruzelski condenaba la acción. Como consecuencia de esa repetición cotidiana de condena e indignación se despertó una viva atención por una terrible injusticia, el gobierno polaco se puso a la defensiva y probablemente esa misma atención contribuyó a que tomasen medidas de respuesta a esa acción.

2.1.2 (*c*). *La búsqueda de responsabilidades en la cumbre.* Artículo tras artículo, los medios de comunicación de los Estados Unidos inquirían la cuestión: ¿hasta qué punto las autoridades conocieron y aprobaron ese acto? Según nuestros cálculos, el *New York Times* aludió en dieciocho artículos a las responsabilida-

7. El informe del *Time* titulado «Memories of Father Jerzy» (12 de noviembre de 1984) no tiene un sosia en los artículos sobre las muertes de víctimas indignas que se discuten más adelante.

des a alto nivel, a menudo con titulares explícitos.[8] Algunos artículos mencionaban una conexión soviética («Al parecer un abogado [*sic*] sugiere una conexión soviética en el asesinato del sacerdote», publicado el 31 de enero de 1985); Michael Kaufman, del *New York Times*, intentó dos veces relacionar el caso con el complot para asesinar al Papa, mientras que la prensa estadounidense, encabezada por el *New York Times*, había tratado de relacionarlo con los soviéticos y los búlgaros.[9] Las vinculaciones con la Unión Soviética y con la conexión búlgara se establecieron por el método de encontrar a alguien que dijese lo que el periodista y su periódico trataban de «pescar», sin que en ningún caso hubiese ningún indicio real que sustentase tales afirmaciones.

Time, Newsweek y el programa *CBS News* recurrieron al mismo sistema de plantear cuestiones cada vez más agresivas acerca de los «Hints of a Contact on the Top» (Indicios de un acuerdo en la cumbre) (*Time*), y «Keeping the Lid on Murder» (Echando tierra sobre el asesinato) (*Newsweek*), y el *Time* planteó la posibilidad de que la Unión Soviética hubiese intervenido, así como la llamada conexión búlgara.

2.1.2 (*d*). *Conclusiones y seguimiento.* El *New York Times* dedicó tres editoriales al caso Popieluszko. En cada uno de ellos señalaba la responsabilidad de las autoridades de alto nivel, y el hecho de que «Un estado policial es particularmente responsable de las acciones de su policía» («Murderous Poland» [Polonia asesina], 30 de octubre de 1984). Con total libertad aplicó los calificativos de «brutalidad», «cinismo» y «rudeza» al Estado polaco. Para el *New York Times*, la rápida identificación, juicio y condena de los policías se debía a que la agitación que se había producido tanto en Polonia como en el extranjero había puesto límite a tanta maldad. Se trata de un buen argumento, como señalaremos a lo largo del libro: una publicidad intensa puede limitar la maldad. Pero también señalaremos la importancia que por su parte tiene la *negativa* a publicar y el margen de maniobra que esta negativa proporciona a los clientes

8. «A Polish General is Tied to Death of Warsaw Priest» (3 de noviembre de 1984); «Pole in Killing Tells of Hints of Top-Level Backup» (9 de enero de 1985); «Pole on Trial Names 2 Generals» (5 de enero de 1985); «Second Abductor of Polish Priest Says Order Came "From the Top"» (3 de enero de 1985).

9. Ver capítulo 4, *infra*.

asesinos que gozan de la protección de los Estados Unidos, en cuyo caso el impacto de la publicidad sería bastante mayor.[10] El *New York Times* tampoco señaló el contraste entre la Polonia asesina y El Salvador asesino: en este último país, ninguno de los asesinatos de salvadoreños cometidos por las fuerzas de seguridad o por los escuadrones de la muerte relacionados con aquéllas ha acabado en juicio. La ausencia de dicha comparación, así como el hecho de que el *New York Times* omitiese publicar un editorial titulado «Murderous El Salvador» (El Salvador asesino), ilustra cómo el modelo de propaganda protege al terrorismo útil.[11]

2.2. Rutilio Grande y las otras setenta y dos víctimas indignas de atención

Como podemos ver en el cuadro 2.1, las setenta y dos personas que aparecen en la lista de mártires de Penny Lernoux merecieron la desmesurada cifra de ocho artículos en el *New York Times*, uno

10. El 6 de mayo de 1986, tres hombres armados cogieron a Laura Pinto, miembro de las salvadoreñas «Madres de los Desaparecidos», la golpearon, la violaron y la abandonaron en la calle. El 29 de mayo fue secuestrada y torturada de nuevo, y poco después doce miembros de su grupo fueron detenidas por la policía. El *New Statesman* británico expresó la sorpresa de que este tipo de terror pudiera tener lugar, dado el hecho de que Laura Pinto había viajado a Europa y dado a conocer su existencia a los europeos occidentales (Jane Dibblin, «El Salvador's Death Squads Defy European Opinion», 13 de junio de 1986). Efectivamente, Europa occidental protestó ante estos abusos. No obstante, lo que hizo factible ese terror fue el hecho de que el poder directamente involucrado en El Salvador, los Estados Unidos, tiene a los medios de comunicación bien adaptados a la política de Estado. Los dos asaltos a Laura Pinto y la detención de las doce miembros de las Madres fueron completamente omitidos por el *New York Times* y sus compadres. Cuando en marzo de 1987 se le negó la entrada a los Estados Unidos a una miembro de las «Madres de los Desaparecidos», víctima de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad de Duarte, y que había sido invitada a conferenciar en varias ciudades, con motivo del Día Internacional de la Mujer, los periódicos de categoría no publicaron una sola palabra. Ver Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988. La atención, obligada según el *New York Times*, que este periódico concedió a la violencia polaca, no estaba disponible para proteger a una víctima indigna.

11. Para un análisis de los editoriales del *New York Times* sobre El Salvador en los ochenta, véase Noam Chomsky, «U.S. Policy and Society», en Thomas Walker, ed., *Reagan versus the Sandinistas*, Westview, Boulder, Colo., 1987, pp. 295-296.

en *Newsweek* y ninguno en el *Time*; el programa *CBS News*, por su parte, no habló de ellos ni una sola vez durante los años que recoge el citado cuadro (de 1975 a 1978). En los ocho artículos del *New York Times* se mencionan siete de los nombres que figuran en la lista de Lernoux, y en los artículos del *Newsweek* aparecen dos más. Esto significa que esos importantes medios de comunicación ignoraron absolutamente sesenta y tres asesinatos. Los ocho artículos del *New York Times* carecían del menor detalle y de la categoría dramática susceptibles de despertar un sentimiento de compasión. Describían los asesinatos como unos acontecimientos remotos que habían ocurrido en un mundo distante (véase la descripción del *New York Times* del asesinato de Jerome Cypher, en el cuadro 2.2). Pero esta es una cuestión de elección editorial. El drama está presente para quien quiera verlo, sólo falta el interés de la prensa.[12]

El asesinato del padre Rutilio Grande, uno de los setenta y dos miembros de la lista, supuso un hito importante en la escalada de violencia en El Salvador, además causó un efecto significativo en el a la sazón recientemente designado y conservador arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Rutilio Grande era jesuita, pastor de Aguilares, un hombre progresista que ayudaba a los campesinos a que se organizasen en grupos de autoayuda. Tenía que hacer frente a la encendida oposición de los terratenientes, la policía y los mandos militares locales, pero era un personaje de ámbito nacional para la Iglesia salvadoreña y amigo del arzobispo. El 12 de marzo de 1977, Rutilio Grande recibió varios disparos que le causaron la muerte, junto a un joven y un campesino de setenta y dos años, con quienes se dirigía a Misa. Según la autopsia realizada por la Iglesia, las balas que acribillaron al sacerdote eran del mismo

12. La prensa también puede haberse visto coaccionada por el hecho de que los reporteros que investigan en profundidad y aportan información poco favorable para los regímenes latinoamericanos pueden ser expulsados del país, e incluso asesinados. Los reporteros occidentales muy raramente son amenazados físicamente en Polonia, la Unión Soviética, Cuba o Nicaragua. En El Salvador, Guatemala y otros estados latinoamericanos clientes de los Estados Unidos, a menudo son amenazados y a veces asesinados. La prensa libre no comenta esta ironía, como tampoco se hace eco de los efectos que esta violencia real y potencial, ejercida contra los reporteros disidentes, tiene para la honestidad de la información. Esta cuestión se discute más ampliamente en el capítulo 3, pp. 169-172.

CUADRO 2.2

Las salvajadas infligidas a las víctimas dignas e indignas, tal como las describe el New York Times

---

VÍCTIMAS DIGNAS

Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco, asesinado el 19 de octubre de 1984:

1. Descripción tras el hallazgo del cadáver: «Según las informaciones dadas por quienes vieron el cadáver el martes pasado, éste presentaba magulladuras, signo inequívoco de que había sido apaleado después de su rapto en una carretera cercana a la ciudad de Torun. La autopsia ha demostrado también que el padre Popieluszko había sido amordazado y al parecer atado con una cuerda desde el cuello hasta los pies, de manera que en caso de moverse hubiera podido estrangularse él mismo. Las mismas fuentes declararon que no podían confirmar las informaciones dadas por algunos miembros de la familia del sacerdote asesinado, según las cuales éste había sido herido en la cara y en el cráneo» (29 de diciembre de 1984).

2. Descripción durante el juicio a los asesinos: «La película muestra con toda claridad cómo las piernas del sacerdote habían sido dobladas y atadas a un nudo corredizo alrededor de su cuello, de manera que de estirarse hubiese podido estrangularse él mismo. La cuerda que mantenía sus manos atadas con toda certeza se perdió dentro del agua. También se desplazaron algunas mordazas, y ahora permanecen sobre el alzacuello y la parte anterior de su sotana. De sus piernas pende un saco de piedras que, según una declaración anterior, había sido transportado por toda Polonia durante la semana en que los tres asaltantes estuvieron siguiendo la pista al sacerdote. Cuando las cámaras enfocaron la cara de Popieluszko, el oficial de policía que estaba en el embalse declaró que «el cadáver presentaba señales de haber sido apaleado». Esto quedó confirmado por las pruebas médicas presentadas el jueves por la Dra. Maria Byrdy, anatomopatóloga, quien declaró que el padre Popieluszko había recibido más de una docena de golpes de porra» (26 de enero de 1985).

VÍCTIMAS INDIGNAS

Michael Jerome Cypher, sacerdote estadounidense asesinado en Honduras:

«Los cadáveres fueron encontrados en un pozo dinamitado en un finca de la zona oriental de Honduras...» (19 de julio de 1985). Nota: no se produjeron detenciones ni juicio alguno.

Jaime Alcina, sacerdote español del movimiento de trabajadores de Acción Católica, tras su detención en Chile:

«Algunos días después fue encontrado en el río Mapocho un cadáver con diez orificios de bala en la espalda. El cónsul español identificó el cadáver: era el padre Alcina» (1 de octubre de 1973). Nota: no se produjeron detenciones ni juicio alguno.

El arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador, el 24 de marzo de 1980:

«El arzobispo Romero fue asesinado por un francotirador que salió de un coche rojo que al parecer estaba aparcado justo ante la puerta de la capilla del Hospital de la Divina Providencia. El francotirador efectuó un solo disparo y huyó. Según el médico del hospital al que fue trasladado el arzobispo, la bala le había alcanzado el corazón» (25 de marzo de 1980). Nota: no se produjo ninguna detención ni juicio.

María Rosario Godoy de Cuevas, secretaria del Grupo de Apoyo Mutuo, asesinada en Guatemala el 4 de abril de 1985:

«El cadáver de la secretaria del Grupo de Apoyo a las Familias de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala fue encontrado el viernes en un barranco a quince kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, según ha declarado un portavoz de ese grupo. En el mismo automóvil se hallaron también los cadáveres de su hermano y de su hijo pequeño» (7 de abril de 1985, p. 5).* Nota: no se produjo ninguna detención ni juicio.

Jean Donovan, Ita Ford, Dorothy Kazel y Maura Clarke, cuatro mujeres estadounidenses asesinadas en El Salvador, el 4 de diciembre de 1980:

1. Descripción tras el hallazgo de los cadáveres:

«Los testigos que encontraron su sepultura declararon que ésta se encontraba a un metro y medio de profundidad. A una de las mujeres le habían disparado en la cara, a otra en el pecho. Dos de las mujeres tenían las bragas en los tobillos, manchadas de sangre» (5 de diciembre de 1980)*

2. Descripción durante el juicio de los asesinos:

No se dio ninguna descripción, pese a que se presentó testimonio médico ante el jurado; véase el texto.

---

* Para más detalles, véase el texto que sigue.

calibre que los fusiles Manzer utilizados por la policía. Una «coincidencia» hizo que una hora antes del asesinato todas las líneas telefónicas de la zona quedasen cortadas y que las patrullas de policía que normalmente actuaban en la región hubieran desaparecido misteriosamente».[13] El arzobispo Romero escribió al presidente de El Salvador, Arturo Armando Molina, instándole a que ordenase una minuciosa investigación, que Molina prometió realizar. Una semana después, cuando ya la Iglesia había concluido que con toda probabilidad las balas que habían asesinado a las tres víctimas pertenecían a la policía, Romero escribió una carta aún más dura a Molina, señalando la inexistencia de la prometida investigación oficial e indicando que se habían producido comentarios críticos, «en su mayoría desfavorables para su gobierno». En vista de que la inactividad continuaba, Romero amenazó con rechazar la participación de la Iglesia en cualquier acto oficial del gobierno a menos de que se investigasen los asesinatos y los asesinos fuesen llevados ante la justicia. El biógrafo de Romero escribió:

> Seis semanas más tarde, el abogado que Romero había designado para que se ocupase del caso le comunicó «la desconcertante y abierta indiferencia hacia la investigación por parte de los organismos del Estado». Un sospechoso a quien un juez había ordenado detener, en El Paisnal, fue puesto en libertad sin cargos, y nadie había ordenado la exhumación de los cuerpos para proceder a su examen. Las balas todavía están en las sepulturas.[14]

El asesinato de Rutilio Grande seguía a la serie de expulsiones forzosas de clérigos extranjeros ordenadas por el gobierno Molina y otros asesinatos de personal eclesiástico. Romero y el clero deliberaron largamente acerca de la actitud que debían tomar en respuesta a la escalada de violencia desencadenada contra ellos. Trataron de hacer públicos sus mensajes de inquietud, pero la mayoría no fueron oídos a causa de la censura de los periódicos. Finalmente decidieron emprender una acción espectacular: el cierre temporal de las escuelas y el cumplimiento de la amenaza ya mencionada de

13. Penny Lernoux, *Cry of the People*, Doubleday, Nueva York, 1980, p. 73.
14. James R. Brockman, *The Word Remains: A Life of Óscar Romero*, Orbis, Maryknoll, Nueva York. 1982, p. 11.

negarse a apoyar al gobierno y a otros grupos de poder en actos oficiales.

Toda esta cuestión del asesinato y la respuesta de la Iglesia apenas tuvo repercusión alguna en los medios de comunicación. Hasta ahora el asesinato, la confrontación de una Iglesia desesperada contra un Estado represivo, y las espectaculares acciones llevadas a cabo para movilizar apoyos en su defensa, han sido prácticamente ignorados por los medios de comunicación de los Estados Unidos. El asesinato de Rutilio Grande fue mencionado en *Newsweek* («Priests in Peril» —Sacerdotes en peligro—, 1 de agosto de 1988), pero ni una sola vez llegó a las audiencias del *New York Times*, el *Time* o el programa *CBS News*. Ese era un factor importante que permitía que el terror continuase sin ningún impedimento. Parafraseando el editorial del *New York Times* sobre la «Murderous Poland» (Polonia asesina): si no hay publicidad ni agitación, no se puede poner límite al terror.

2.3. El arzobispo Óscar Arnulfo Romero

El asesinato del arzobispo Romero, el más alto representante de la Iglesia católica en El Salvador, fue una «gran noticia» y tuvo unas implicaciones políticas enormes. En la época de su muerte, Romero se había convertido en el principal y más abierto adversario de la política de represión mediante asesinato llevada a cabo por el gobierno, que contaba con el apoyo militar de los Estados Unidos. En su último sermón, hizo un llamamiento a los miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad para que se negasen a matar a sus hermanos salvadoreños, llamamiento que enfureció al cuerpo de oficiales que intentaban entrenar a las tropas para que matasen de buena gana y con total libertad. Romero estaba en la «lista negra» de la ultraderecha, de la que había recibido amenazas y que desde el principio estaba estrechamente vinculada al ejército y a los servicios de información.[15] Tan sólo unas semanas antes de su asesinato había escrito una enérgica carta al presidente Jimmy Carter, oponiéndose a la inminente concesión de la ayuda de los Estados Unidos a la Junta, por ser ésta perjudicial para los intereses salvadoreños. A la administración Carter le molestó tanto la oposición

15. Tratamos este vínculo más adelante en esta misma sección.

de Romero a su política que presionó en secreto al Papa para que refrenase al arzobispo.[16]

En resumen, Romero no fue tan sólo una víctima «indigna», sino que fue también un importante activista que se opuso a la alianza entre el ejército y la oligarquía del país y a la política de los Estados Unidos en El Salvador. La cobertura informativa que los medios de comunicación estadounidenses dedicaron al asesinato del arzobispo refleja con toda nitidez su amenazante papel. Con la información que dedicaron a este hecho y a otros similares alcanzaron nuevos niveles de deshonestidad y de servicio a la propaganda.

2.3.1. *Detalles acerca del asesinato y de la posterior respuesta pública*

Los detalles que del asesinato de Romero proporcionaron los medios de comunicación estadounidenses fueron concisos (véase cuadro 2.2). Mientras que por una parte abundaban las expresiones de conmoción y dolor, por otra había muy pocas referencias o declaraciones de condena procedentes de los partidarios de Romero. No hubo declaraciones o reflexiones que expresaran que el asesinato era intolerable y que era preciso encontrar al culpable y llevarlo ante la justicia. El *New York Times* no publicó ningún editorial condenando o siquiera mencionando el asesinato. Rápidamente éste fue situado en el contexto más amplio de los presuntos crímenes perpetrados tanto por la derecha como por la izquierda, que tanto lamentaban los oficiales salvadoreños y estadounidenses.

16. Carter envió a Robert Wagner, ex alcalde de Nueva York, a persuadir al Papa para que refrenara a Romero, cosa que aquél intentó. Véase Raymond Bonner, *Weakness and Deceit*, Times Books, Nueva York, 1984, p. 176. El padre César Jerez, provincial de los jesuitas en América Central, fue llamado a Roma poco después para dar explicaciones sobre la carta de Romero. El padre Jerez, que había huido de Guatemala después de que los militares amenazaran su vida, estaba muy próximo al arzobispo Romero. Posteriormente también le forzaron a huir de El Salvador y actualmente está refugiado en Nicaragua, donde es rector de la Universidad Centroamericana, viéndose en la imposibilidad de volver a esas dos «democracias incipientes» excepto para cortas (y peligrosas) visitas.

2.3.2. *La argumentación propagandística: una junta reformista que trata de contener la violencia de derechas e izquierdas*

En la época del asesinato de Romero, los gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos coincidían en afirmar que los asesinatos que se producían en El Salvador eran cometidos por extremistas de derechas y de izquierdas, no por las fuerzas armadas salvadoreñas y sus agentes; así como que el gobierno hacía todo cuanto estaba en sus manos para poner fin a esos asesinatos y emprender reformas. John Bushnell, del Departamento de Estado declaró ante un comité de asignaciones del Congreso que «entre los que están al corriente de la situación a través de la prensa existe cierta percepción errónea de los hechos, según la cual el propio gobierno de El Salvador sería represivo», cuando en realidad la violencia procede «de la extrema derecha y de la extrema izquierda» y sólo «una ínfima parte» de los asesinatos son atribuibles al ejército y a las fuerzas de seguridad.[17] Tales afirmaciones eran una mentira cómplice,[18] que todos los testimonios independientes procedentes de El Salvador contradecían casi diariamente, y que también fue refutada por el arzobispo Romero.[19] En la carta que envió a Carter el 17 de febrero de 1970, el arzobispo denunciaba que la ayuda a la Junta se había traducido en un incremento de la violencia represiva del gobierno, «acumulando un total de muertos y heridos muy superior al de los anteriores regímenes militares». Romero explicaba también a Carter que la idea de que la Junta era reformista era

17. Citado en Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 172.

18. El 27 de septiembre de 1981, Alan Riding escribió en el *New York Times* que «bajo la administración Carter, los oficiales estadounidenses dijeron que las fuerzas de seguridad eran las responsables del 90 por 100 de las atrocidades», no «las bandas incontroladas de la extrema derecha». En resumen, no sólo Bushnell mentía, sino que los medios de comunicación lo sabían y no utilizaron esa información. El 23 de marzo de 1980, apareció un artículo de Riding titulado «El Salvador's Junta Unable to Halt the Killing». Sobre la cobertura de El Salvador durante los años ochenta, incluidas flagrantes falsificaciones y encubrimientos incluso de informes del Congreso, véase Noam Chomsky, *Towards A New Cold War*, pp. 35 y ss., reeditado en James Peck, ed., *The Chomsky Reader*, Pantheon, Nueva York, 1987.

19. La Iglesia calcula que el gobierno fue responsable de la muerte de unos 900 civiles durante los tres primeros meses de 1980, cifra que sobrepasa el total de víctimas de 1979; un informe de Amnistía Internacional fechado el 21 de marzo de 1980 contiene siete páginas de incidentes en los que las fuerzas de seguridad, unidades armadas o grupos paramilitares bajo control militar asesinaron a civiles desarmados, en su mayoría campesinos (citado en Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 172).

un mito, que «ni la Junta ni los democratacristianos gobernaban el país», sino que más bien el poder estaba en manos del ejército, al servicio de sus propios intereses y de los de la oligarquía.[20]

Lo que daba cierta credibilidad a las declaraciones de Bushnell era que jóvenes oficiales habían dado un «golpe reformista» en octubre de 1979, y que liberales y progresistas formaron parte de la primera Junta. Sin embargo, como señala Raymond Bonner:

> Los oficiales jóvenes y progresistas que planearon cuidadosamente el golpe perdieron el control del mismo inmediatamente después de haberlo ejecutado. Sus ideales y sus objetivos fueron subvertidos por los oficiales más antiguos y conservadores que contaban con el respaldo de Devine [embajador de los Estados Unidos] y de la embajada de ese país en El Salvador, así como de funcionarios clave de la administración Carter en Washington.[21]

Los elementos progresistas de la Junta se encontraron totalmente privados de poder y paulatinamente se marcharon o fueron obligados a hacerlo, junto a otros miembros del consejo de ministros y de la administración. José Napoleón Duarte se unió a la Junta en marzo para «cubrir su desnudez» y actuar como agente de relaciones públicas del ejército, pero todos aquellos que no se sintieron satisfechos jugando ese papel se apartaron de ella.[22]

Una vez la vieja guardia militar controló a los oficiales progresistas, en octubre de 1979, empezó una guerra general de exterminio contra todos los individuos y organizaciones progresistas de El Salvador. A finales de mayo fuentes de la Iglesia habían contabilizado la muerte de 1.844 civiles en el transcurso de 1980; a finales de año la cifra aumentó a 10.000 muertes, casi todas a manos del gobierno. La abierta violencia del gobierno apoyado por Carter abocó al centro y a la izquierda a la guerra de guerrilas. El gobierno no era centrista y reformista, era un régimen militar de derechas estrechamente vinculado al grupo terrorista ORDEN y a los escuadrones de la muerte, a los que utilizaban regularmente para sus

20. El propio Duarte reconoció esta situación, admitiendo en una entrevista con Raymond Bonner que el ejército gobernaba El Salvador, pero que esperaba poder asumir el mando *en el futuro* (véase *New York Times*, 1 de marzo de 1982).

21. *Weakness and Deceit*, p. 146.

22. Véase capítulo 3, pp. 175-176.

propósitos. Los grupos paramilitares no eran incontrolables, sino que estaban haciendo lo que el ejército les pedía que hiciesen. Tanto esas fuerzas paramilitares como los escuadrones de la muerte salvadoreños mantenían una relación continuada con los oficiales militares y las fuerzas de seguridad, así como con sus homólogos de los Estados Unidos. Se daba un continuo flujo de personal, una estrecha colaboración a la hora de intercambiar informaciones, financiación de los grupos paramilitares por parte de las fuerzas oficiales y una división del trabajo entre ellos. Los grupos paramilitares se encargaban de ejecutar las misiones de las cuales no querían responsabilizarse las fuerzas oficiales.[23]

Aunque el grupo paramilitar ORDEN fue formalmente abolido cuando se produjo el golpe de octubre de 1979, fue secretamente mantenido y sostuvo una estrecha relación con el *establishment* militar regular. Según un detallado relato,

> Oficialmente los reformistas habían suprimido el grupo ORDEN, la antigua red de información. Pero... funcionarios militares recelosos de los jóvenes reformistas reestablecieron en secreto e incluso ampliaron el antiguo sistema de inteligencia, convirtiéndolo en una red básica que proporcionaba los nombres de presuntos elementos subversivos a los escruadrones de la muerte militares y paramilitares. A los cuatro días del golpe, D'Aubuisson declaraba en una entrevista que los miembros del alto mando le habían destinado a colaborar en la reorganización de ANSESAL [una red de transmisión de información], dentro de un recinto militar bajo el despacho del jefe del Estado Mayor, fuera del alcance de los civiles de la nueva Junta.[24]

La misión secreta de D'Aubuisson fue confirmada por el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, miembro de la Junta, y por el coronel Nicolás Carranza, viceministro de Defensa.[25]

23. Una prueba del hecho de que fuerzas paramilitares asesinan bajo protección oficial es que, año tras año, los asesinatos paramilitares nunca conllevan arrestos (véase Herman, *Real Terror Network*, pp. 115-119). En cuanto a las fuerzas regulares, a lo largo de 1986 «no hay casos conocidos de castigos a soldados u oficiales militares por violaciones de los derechos humanos cometidos contra civiles salvadoreños» (*The Reagan Administration's Record on Human Rights in 1986*, The Watch Committees and Lawyers Committee for Human Rights, Nueva York, febrero de 1987, p. 46).

24. Laurie Becklund, «Death squads: Deadly "Other War"», *Los Angeles Times* (18 de diciembre de 1983).

25. Michael McClintock, *The American Connection*, vol. I, Zed, Londres, 1985, p. 221.

Pese a ello los medios de comunicación de los Estados Unidos siguieron la fórmula de Bushnell prácticamente al pie de la letra: en El Salvador había una «guerra civil entre grupos de extrema derecha y de extrema izquierda» (*New York Times*, 25 de febrero de 1980); la Junta, «al parecer bien intencionada pero débil», estaba ocupándose de las reformas, pero era incapaz de controlar el terror (*Time*, 7 de abril de 1980). Los medios de comunicación estadounidenses destacaron el carácter reformista de la Junta revolucionaria, pero coincidieron en suprimir cualquier prueba de la falta de poder, las frustraciones y la pronta dimisión de los progresistas y de la sustitución de éstos por civiles deseosos de actuar como «pantallas» para el Estado del terror. Román Mayorga, ingeniero y profesor universitario al que habían elegido por unanimidad todos los que planearon el complot, dimitió el 3 de enero de 1980, junto a Guillermo Manuel Ungo «y por lo menos 37 altos funcionarios del gobierno, incluyendo los jefes de todos los organismos especializados».[26] Pero para los medios de comunicación esas dimisiones no tuvieron lugar, y la Junta continuó siendo «un gobierno centrista débil ... acosado por dos extremos implacables» (editorial del *New York Times* del 28 de abril de 1980), no un gobierno derechista responsable de las matanzas. Robin K. Andersen señalaba que

> ningún medio de comunicación informó ... de la dimisión final de los miembros de la Junta. Ni siquiera la CBS, que había tratado extensamente el nombramiento de Román Mayorga, se dignó informar acerca de la dimisión de éste o la de los demás. Para los espectadores de los noticiarios de televisión, estos sucesos políticos jamás sucedieron; las noticias de televisión omitieron cualquier referencia a esta importante lucha por el poder político que podía explicar los abusos que se sucedieron ... La pérdida del control por parte de los civiles, e incluso su dimisión, no tuvieron efecto alguno en la forma en que las noticias caracterizaban a la Junta, y ésta continuó recibiendo el calificativo de moderada.[27]

26. Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 162.

27. «United States Network Coverage of El Salvador: The Law and Order Frame», 1986 (manuscrito), pp. 17-18. Andersen proporciona varios ejemplos de cómo los medios de comunicación continuaron etiquetando de «moderada» a la Junta a lo largo de 1980, mientras las atrocidades aumentaban en lo que el sucesor del arzobispo Romero, el obispo Rivera y Damas, describió en octubre de 1980 como «guerra de exterminación y genocidio contra una población civil indefensa» (Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 207).

Y el gobierno salvadoreño ha continuado siendo «moderado» y «centrista» hasta hoy.

Otras omisiones de los medios de comunicación colaboraron a reforzar el mito de una Junta neutral situada entre la extrema derecha y la extrema izquierda. El 29 de marzo de 1980 el *New York Times* publicó un despacho de la agencia Reuter comunicando la dimisión de tres altos funcionarios salvadoreños, quienes, según el comunicado, «habían dimitido la noche anterior en protesta por la incapacidad de la Junta para detener la violencia de las fuerzas derechistas e izquierdistas».[28] Un día antes otro despacho de la AP recogía las mismas dimisiones, pero sin dar ninguna explicación del motivo de las mismas. Uno de los funcionarios dimisionarios, el subsecretario de Agricultura Jorge Alberto Villacorta, emitió un comunicado público en el que afirmaba que:

> He dimitido porque creo que no tenía sentido continuar en un gobierno no sólo incapaz de poner fin a la violencia, sino que es el propio gobierno el que genera esta violencia política mediante la represión ... No hace mucho, en una de las grandes fincas expropiadas por la reforma agraria, miembros uniformados de las fuerzas de seguridad, acompañados por una persona enmascarada que señaló a los directores del grupo autogestionario, mataron a tiros a estos últimos delante de los otros cooperantes.[29]

De este comunicado se desprende que la referencia que el despacho de la agencia Reuter hacía de la protesta «contra la incapacidad de la Junta para poner fin a la violencia de las fuerzas derechistas e izquierdistas» era una grave tergiversación, y es evidente que una transmisión honesta de las declaraciones de Villacorta hubiese contradicho los argumentos de la propaganda.

Durante el funeral del arzobispo Romero, celebrado el 30 de marzo de 1980, y en el que se reunieron varios miles de personas para rendirle homenaje, explosiones de bomba y disparos causaron la muerte a unas cuarenta personas e hirieron a varios centenares más. La versión que del hecho dieron el embajador de los Estados

28. «23 Die in El Salvador As Clashes Continue; 3 Officials Step Down», *New York Times* (29 de marzo de 1980).

29. Citado en Robert Armstrong y Janet Shenk, *El Salvador: The Face of Revolution*, South End Press, Boston, 1982, p. 146.

Unidos Robert White y el gobierno salvadoreño fue que «terroristas de extrema izquierda armados sembraron el pánico entre la multitud e hicieron todo lo posible para provocar la respuesta de las fuerzas de seguridad, aunque éstas mantuvieron la disciplina».[30] La narración de los hechos efectuada por Joseph Treaster y publicada en el *New York Times* afirmaba que Duarte había declarado que la violencia procedía de la izquierda. Citaba también una declaración de la Junta según la cual el ejército estaba rigurosamente confinado en sus cuarteles; Treaster comentaba que «no había ningún rastro de fuerzas gubernamentales uniformadas en la plaza antes o durante el tiroteo». No mencionaba ninguna otra versión de los hechos. Sin embargo, un comunicado difundido el 30 de marzo y firmado por veintidós dirigentes eclesiásticos presentes en el funeral, afirmaba que el pánico había comenzado cuando fue arrojada una bomba desde el palacio nacional, a la que siguió el fuego de ametralladoras y otros disparos procedentes del segundo piso del mismo.[31] Treaster hizo caso omiso de este comunicado y el *New York Times* jamás habló de él.

En un artículo complementario fechado el 7 de abril de 1980, Treaster repetía que el 30 de marzo la Junta había ordenado a todas las fuerzas militares que permaneciesen en sus cuarteles, y que éstas obedecieron «pese a que sabían que izquierdistas armados estaban entrando a raudales en la plaza central». Treaster presentó esta afirmación del gobierno como la realidad, y continuó descartando otras fuentes de información y otras pruebas que contradecían la versión del gobierno. Tampoco explicó la razón por la cual los izquierdistas habrían disparado indiscriminadamente sobre su propia gente mientras ésta rendía homenaje al arzobispo.[32]

El título del artículo de Treaster del 7 de abril de 1980 rezaba

30. Del telegrama de White al Departamento de Estado, citado en Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 184.

31. Esta afirmación se cita en Armstrong y Shenk, *El Salvador*, p. 152. Otros declaran que las tropas participaron en los acontecimientos, contradiciendo las afirmaciones de Duarte, la Junta y Treaster. Phillip Berryman, que asistió al funeral, dijo a los autores que vio con bastante claridad dos camiones de tropas en las inmediaciones. Sin embargo, Treaster es cauteloso —sólo habla de tropas *en la plaza*, no cerca de la plaza o en el Palacio Nacional u otros edificios.

32. La opinión expresada en los telegramas del embajador White fue que los izquierdistas actuaron para provocar la respuesta de las fuerzas de seguridad, una táctica autodestructiva que no se basa en ninguna evidencia.

así: «Slaying in El Salvador backfires on rebels» (El asesinato en El Salvador perjudica a los rebeldes). Y en él podía leerse que:

> Varios diplomáticos, empresarios y funcionarios del gobierno coinciden en afirmar que el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, ocurrido hace dos semanas, así como el asesinato de treinta personas en el funeral puede haber beneficiado, más que perjudicado, a la Junta civico-militar en el poder.
>
> Se acusa a la extrema derecha del asesinato del arzobispo y a la extrema izquierda de los disparos y las bombas que convirtieron la plaza central en un caos mientras se celebraban las honras fúnebres del arzobispo Romero.
>
> «No es mucho lo que la Junta ha ganado —declaró Robert E. White, embajador de los Estados Unidos en El Salvador—, pero sus oponentes de extrema derecha y extrema izquierda han perdido prestigio. Todo ello redunda en un aumento del prestigio de la Junta.»

Podemos constatar cómo el título del artículo transforma el asesinato del líder de las fuerzas disidentes (y el de sus partidarios durante el funeral) de una cuestión moral que merecía repulsa en una cuestión de beneficios políticos que se vuelven contra los rebeldes. Sería difícil imaginar que el *New York Times* publicase un artículo sobre Popieluszko con el titular «Slaying in Poland Backfires on Solidarity Movement» (El asesinato en Polonia perjudica al movimiento Solidaridad), presentando quizás como demostración de violencia o agresividad la versión de la prensa oficial. También puede observarse cómo la identificación del asesino de Romero y la obligación del gobierno de hacer justicia habían quedado relegadas a un segundo plano. Finalmente, tenemos la afirmación de que «se acusa a la extrema izquierda» de las muertes en la plaza. La utilización del impersonal permite a Treaster no decir quién acusa a la extrema izquierda. Como fuentes de información para su artículo Treaster alude a «diversos diplomáticos, empresarios y funcionarios del gobierno» —ni siquiera pretende haber hablado con los salvadoreños de a pie o con representantes de la Iglesia— pero la única cita explícita respecto de su afirmación de que «se acusa a la extrema izquierda» era el entonces embajador de los Estados Unidos, Robert White. Al contar únicamente con las notas de prensa del gobierno, y evitar cuidadosamente cualquier prueba o versión alternativa que pudiese resultar conflictiva, el *New York Times* encontró una vez

más la manera de aplicar la fórmula habitual de una derecha mortífera que contrarrestaba a una también mortífera izquierda, situando una vez más en el medio a la Junta auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos, ¡y además con un prestigio reforzado!

2.3.3. *La tergiversación de la postura de Romero*

Como hemos comentado anteriormente, Romero atribuía inequívocamente la culpa de la violencia en El Salvador al ejército y a las fuerzas de seguridad, y consideraba a la izquierda y a las agrupaciones populares como víctimas a las que la violencia y la injusticia había conducido a tomar medidas en defensa propia. Las organizaciones del pueblo, dijo Romero a Carter, están «luchando para defender sus más fundamentales derechos humanos» contra un *establishment* militar que «sólo sabe reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña». En su diario Romero rechazaba totalmente la idea de que el ejército actuase en respuesta a la violencia de otros; para él, las fuerzas de seguridad eran instrumentos «de un programa general de aniquilación de la izquierda, de una izquierda que por sí misma no se habría involucrado en acciones violentas de no ser por la injusticia social con la que quería acabar».[33] Así, la afirmación de Joseph Treaster en la portada del *New York Times* del 31 de marzo de 1980, según la cual Romero «había criticado tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda por extender las matanzas y las torturas en El Salvador» era pura y simplemente una mentira: Romero jamás acusó a la izquierda de cometer torturas o de propagar los asesinatos, jamás comparó derechas e izquierdas y además estaba bastante convencido de que el gobierno (un agente de la derecha) era el principal asesino. A este respecto, las apreciaciones de Romero, esencialmente las mismas que de manera *confidencial* el gobierno de los Estados Unidos había transmitido a la prensa, fueron burdamente falsificadas en público por unos y otros.[34]

33. Citado en Brockman, *The Word Remains*, p. 212.

34. Véase nota 18. La revista *Time* tergiversó los hechos del mismo modo que Treaster, pero con más refinamiento: «Desde su púlpito, condenó reiteradamente la tiranía y el terrorismo que desgarran al pequeño y empobrecido El Salvador y que lo han llevado al borde de la guerra civil» (7 de abril de 1980).

Resulta interesante ver cómo un año más tarde, en un artículo que conmemoraba el aniversario del asesinato del arzobispo Romero, Edward Schumacher, del *New York Times*, señalaba que bajo el sucesor de Romero, el arzobispo Rivera y Damas, «la Iglesia se había desplazado hacia una posición más de centro por lo que se refería a la guerra civil entre el gobierno y la guerrilla».[35] Evidentemente, si la Iglesia tomaba ahora una posición de centro, opuesta a la que manifestaba bajo el arzobispo Romero, tal cosa significaba admitir que el enfoque con el que Treaster y el *New York Times* habían presentado a un Romero imparcial no respondía a la realidad (y así era). ¿Es posible que el *New York Times* encuentre siempre a la Iglesia en el medio y que mienta también un año después? La cuestión puede quedar abierta, ya que el sucesor de Romero es bastante más circunspecto que aquél. Quizás la voluntad de las derechas y del ejército de asesinar a personas como Romero pueda haber condicionado la capacidad del arzobispo Rivera y Damas para expresar su opinión con total libertad, forzándolo a una postura cautelosa en público. Pero ni Schumacher ni el *New York Times* tuvieron en cuenta esta posibilidad.[36]

2.3.4. *La pérdida de interés por las responsabilidades de las altas esferas*

Con el caso Popieluszko, los medios de comunicación trataron incansablemente de demostrar que las altas esferas del gobierno polaco sabían del crimen y eran responsables de él. También solían aludir al interés de los soviéticos y a su posible vinculación con el crimen. Por el contrario, en el caso de Romero no plantearon preguntas semejantes.

Estos medios de comunicación señalaron que Romero se oponía a la ayuda a la Junta salvadoreña (que pese a todo Carter siguió proporcionando), pero omitieron constatar su profunda hostilidad hacia la política de los Estados Unidos y la importancia de su papel

35. «Church in Salvador Now Follows the Middle Path», *New York Path* (22 de marzo de 1981).

36. Para una discusión más detallada sobre la manipulación de las cautas observaciones del arzobispo con propósitos apologéticos por parte de Schumacher, véase Herman, *Real Terror Network*, pp. 178-179.

como opositor (aunque éste era bastante más amenazador para la política de los Estados Unidos que el de Popieluszko con respecto a la Unión Soviética). La prensa jamás hizo mención al emisario especial que Carter envió al Papa en un intento de llamar al orden a Romero, o al hecho de que el superior de los jesuitas en América Central fuese llamado a Roma, probablemente en respuesta a las presiones de los Estados Unidos.[37] Los medios de comunicación suprimieron también el llamamiento que hizo Romero a los militares para que se negasen a asesinar, lo cual hubiese dejado bastante más claro hasta qué punto éste se oponía a la política oficial, y cuánto convenía su asesinato a los gobernantes de El Salvador.

Aunque Romero era con mucho el personaje más importante del *establishment* alineado con los movimientos populares, en un principio los medios de comunicación pretendieron que la filiación política de sus asesinos era un misterio indescifrable. El *Washington Post* estimaba que la probabilidad de que fuesen de izquierdas o de derechas era igual, y el *Miami Herald* publicó el 27 de marzo que «ambas salían beneficiadas por el caos que esta muerte pudo haber ocasionado». (Ningún periódico estadounidense sugirió que Popieluszko pudo haber sido asesinado por simpatizantes de Solidaridad para desacreditar al gobierno polaco.) Esta necedad era una postura minoritaria, el grueso de la prensa sostenía que el asesino probablemente era de derechas, aunque sus relaciones eran confusas. Duarte, persona de toda confianza, sugirió que el asesino era demasiado profesional como para ser del país; necesariamente había tenido que ser contratado en el exterior. Obedientemente, el *New York Times*, *Time*, *Newsweek* y el programa *CBS News* repitieron esta opinión hasta la saciedad.[38]

Si como parece altamente probable, el asesino era un derechista salvadoreño o alguien a su servicio, ¿cuál era su relación, caso de haberla, con el ejército y las fuerzas de seguridad? Anteriormente hemos constatado las estrechas relaciones existentes entre los escuadrones de la muerte y el ejército: cuando menos, hasta cierto nivel

37. Es posible que este error se debiera a un honesto desconocimiento del acontecimiento. El desconocimiento, de todos modos, refleja en parte una falta de compromiso y una perspectiva distorsionada que elimina algunas preguntas del meollo de la investigación.

38. En realidad, esto podría ser cierto. El asesino podría haber sido un miembro de la contra contratado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

tenían un mando común, compartían operaciones y se protegían mutuamente. ¿Pudo el asesino haber sido un miembro de las fuerzas armadas? Dados los vínculos del ejército con las fuerzas paramilitares ¿no es harto probable que éste conociese la identidad del asesino de Romero? Exceptuando a la prensa, los otros medios de comunicación estadounidenses no formularon estas preguntas. Cuando la relación de D'Aubuisson con el asesinato fue del dominio público, los medios evitaron prestar a este tema la debida atención, y no comentaron las estrechas relaciones de éste con las fuerzas oficiales. He aquí una prueba de cómo trabaja un sistema de propaganda.

Por supuesto, cualquier posible relación de los Estados Unidos con el crimen era «muy remota» y los medios de comunicación no se hicieron eco de la misma. Una de las premisas ideológicas de la prensa patriótica es que los Estados Unidos no hacen ese tipo de cosas, sin tener en cuenta la información fáctica que la historia nos proporciona sobre el particular.[39] Pero aún así se pudo haber planteado la cuestión: el ambiente que los Estados Unidos estaban ayudando a crear en El Salvador, entrenando y ayudando a un ejército sanguinario cuya violencia había llevado a Romero a una vehemente oposición, ¿no hacía a los Estados Unidos culpables, al menos de una manera indirecta, del asesinato? Pero la prensa tampoco se ocupó de este punto. El *New York Times* citó las declaraciones de Cyrus Vance, Secretario de Estado, acerca del crimen: «Hace dos semanas escribí al arzobispo diciéndole: "compartimos la repugnancia por la violencia provocada por ambos lados y que se cobra vidas de personas inocentes. Deploramos los esfuerzos de aquellos que pretenden silenciar las voces de la razón y la moderación con explosivos, intimidaciones y asesinatos"».[40] El periódico informaba de que esta carta de Vance era la respuesta al llamamiento efectuado por Romero para que cesase el suministro de armas. El artículo omitió señalar lo más esencial de la argumentación de Ro-

39. Sobre los numerosos intentos *reconocidos* de asesinato contra Fidel Castro, y el asesinato de Patrice Lumumba organizado por la CIA, véase *Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders*, Senate Select Committee to Study Government Operations, 94 Congreso, 1.ª sesión, 20 de noviembre de 1975, S. Rep. 94-465, pp. 13-180.

40. Graham Hovey, «Salvador's Prelate's Death Hightens Fear of War», *New York Times* (26 de marzo de 1980).

mero, y tampoco citaba el parágrafo de la carta de Vance en el que éste rechazaba el llamamiento de Romero. Dicho informe tampoco tomó nota de la grave tergiversación que Vance efectuaba respecto a la postura del arzobispo cuando afirmaba que «Compartimos la repugnancia [por] ... ambos lados». También podemos señalar que mientras Romero fue la víctima de las mismas fuerzas a las que Vance daba su apoyo, así como que las previsiones de Romero parecieron confirmarse con su propio asesinato, en el artículo no había ningún deje de ironía o de crítica con respecto a Vance y a sus asociados. Y aquí la prensa no podía alegar desconocimiento alguno. Como más tarde admitieron, los medios de comunicación sabían muy bien que las fuerzas de seguridad eran las causantes de la violencia.

2.3.5. *Asesinatos impunes o triunfantes*

Los asesinos del arzobispo Romero nunca fueron descubiertos o perseguidos «oficialmente», y el caso compartió la suerte del de decenas de miles de salvadoreños asesinados sin que se hiciese justicia. Pero al contrario de lo que sucedió con Popieluszko, a los medios de comunicación de los Estados Unidos les preocupó bien poco quién fue el culpable o pedir su justo castigo.

Posteriormente se recogieron un gran número de pruebas que mostraban que Roberto D'Aubuisson estaba en el centro de la conspiración para asesinar a Romero. A partir de numerosas entrevistas con activistas del partido ARENA y funcionarios de los Estados Unidos, y del examen de los cablegramas del Departamento de Estado, Craig Pyes y Laurie Becklund, periodistas e investigadores, afirmaron en 1983 que D'Aubuisson había planeado el asesinato con un grupo de oficiales militares en activo, quienes echaron a suertes el honor de llevarlo a cabo.[41] El antiguo embajador Robert White, quien tuvo acceso a los cablegramas del Departamento de Estado y a otra información interna mientras desempeñó dicho cargo, declaró también en febrero de 1984 ante un comité del congreso que «más allá de cualquier duda razonable» D'Aubuisson había «planeado y ordenado el asesinato» del arzobispo Rome-

41. Véase Craig Pyes, «Who killed Archbishop Romero?», *The Nation* (13 de octubre de 1984).

ro, y asimismo dio detalles de la reunión de planificación y de la posterior ejecución del francotirador para asegurar así su silencio.[42] Por otra parte, la confesión de Roberto Santiváñez, antiguo alto funcionario del servicio de inteligencia salvadoreño, aportó más pruebas de la vinculación de D'Aubuisson con el crimen. Según Santiváñez, el asesinato de Romero fue planificado y llevado a cabo por D'Aubuisson con la ayuda de otros antiguos miembros de la Guardia Nacional de Somoza, aunque «bajo la protección del general García y del coronel Carranza».[43] Los informantes de Pyes y Becklund indicaron también que D'Aubuisson era un subordinado y aliado político de Carranza, el número dos del ejército salvadoreño hasta su renuncia en diciembre de 1980, forzada por las presiones de los Estados Unidos, y tras la cual se le encargó dirigir la Policía del Tesoro. D'Aubuisson había trabajado también con la oficina central de los servicios de inteligencia de la Guardia Nacional, la G-2, mientras ésta estaba bajo el mando del general Eugenio Vides Casanova. Pyes y Becklund afirmaron que «durante el tiempo en que Vides estuvo al mando de la Guardia, funcionarios militares en servicio activo para la G-2 estuvieron relacionados —según cablegramas del Departamento de Estado— con el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, cometido en marzo de 1980 ...».[44] Cabe señalar que Vides Casanova acabó siendo ministro de Defensa, puesto que siguió desempeñando bajo el gobierno de Duarte.

En resumen, existen suficientes pruebas de la identidad de los asesinos de Romero, y de que éstos estaban relacionados de manera harto significativa con los más altos funcionarios del *establishment* militar salvadoreño. De hecho, una investigación judicial que se realizó en El Salvador dirigida por el juez Atilio Ramírez, no tardó

42. Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 178.

43. Stephen Kinzer, «Ex-Aide in Salvador Accuses Colleagues on Death Squads», *New York Times* (3 de marzo de 1984).

44. Craig Pyes, «Dirty War in the Name of Freedom», *Albuquerque Journal* (18 de diciembre de 1983). En noviembre de 1987, Duarte anunció nuevas (y bastante insustanciales) evidencias que implicaban a D'Aubuisson en el asesinato, pero a nadie de las reinantes fuerzas de seguridad. El anuncio fue un esfuerzo transparente para mantener su imagen de «moderado», manteniéndose en un terreno intermedio entre los extremistas de derecha y de izquierda. Fue cuidadosamente programado para que coincidiera con la atrevida visita a El Salvador de dos auténticos «moderados», los líderes del FDR Rubén Zamora y Guillermo Ungo, que han vivido en el exilio al estar amenazados de muerte en este Estado terrorista.

mucho en señalar a D'Aubuisson y al general Medrano, protegido de los Estados Unidos en dicho país. Pero Ramírez pronto tuvo que huir del país, tras varias amenazas y un atentado fallido contra su vida, lo que puso fin a la persecución activa del crimen en El Salvador. En el exilio el juez Ramírez afirmó que el grupo de investigación criminal de la policía no llegó al escenario del crimen hasta cuatro días después de cometido, y que ni la policía ni el fiscal general proporcionaron ninguna prueba a su tribunal. Ramírez concluyó que «sin duda alguna» desde el principio había «algún tipo de conspiración para echar tierra sobre el asesinato».[45]

No hace falta decir que el testimonio del juez Ramírez no fue recogido por los medios de comunicación estadounidenses, que tampoco prestaron mucha atención a las sucesivas pruebas de la vinculación de D'Aubuisson con el asesinato. En el mejor de los casos esta información fue publicada en la última página, tratada de manera escueta y nunca situada en un marco de indignación y condena mediante el uso de un lenguaje emotivo o solicitando a los partidarios de Romero que enjuiciasen las pruebas; tampoco suscitó jamás estridentes peticiones de justicia. Hasta la fecha no hemos podido encontrar mención alguna del hecho que los verdaderos gobernantes de esa «democracia incipiente» son oficiales militares que están estrechamente asociados con D'Aubuisson y su camarilla y que bien pueden haber estado implicados en el asesinato.

Tras la detención de D'Aubuisson en una redada del 8 de mayo de 1980, con documentos que mostraban que estaba planificando un golpe de Estado y con pruebas de su vinculación con el asesinato de Romero, fue arrestado y se encontró ante la amenaza de un juicio y posterior encarcelamiento. Se convocó rápidamente una asamblea de todo el cuerpo de oficiales del ejército salvadoreño —unas setecientas personas— que pidieron su liberación: poco después fue puesto en libertad, con la aquiescencia del ministro de Defensa.[46] Los documentos que se encontraron en su poder desaparecieron del mapa. Las fuerzas de seguridad efectuaron también una redada en las oficinas de asistencia legal del arzobispado, llevándose todos los archivos relacionados con el asesinato. Durante

45. Noam Chomsky, *Turnig the Tide*, South End Press, 1985, p. 103 (hay trad. cast.: *La quinta libertad*, Crítica, Barcelona, 1988).

46. Armstrong y Shenk, *El Salvador*, pp. 160-161.

la reunión del cuerpo de oficiales salvadoreños que antes hemos mencionado el coronel Adolfo Majano, el último de los reformistas en la «reformista» Junta de 1979 fue denunciado y rápidamente expulsado de ésta, siendo sustituido por otro miembro de la línea dura. El ejército expresó su solidaridad con la ultraderecha de los escuadrones de la muerte, y la Junta se reajustó para enfrentarse a esta nueva amenaza contra la imagen de Junta reformista poniendo a Duarte como presidente, que actuaba de figura decorativa en beneficio del Congreso y de los medios de comunicación, asegurando así que las armas llegasen a los asesinos.

Los medios de comunicación estadounidenses prestaron poca atención a esta importante demostración y consolidación del poder de la extrema derecha, y a la vinculación semioficial de los asesinos del arzobispo Romero. Esta era una clara prueba acerca de la naturaleza del poder en El Salvador y del carácter ficticio de la afirmación de que el gobierno era centrista o reformista. Unos medios de comunicación imparciales hubiesen podido dar a conocer y explicar el significado de esta información. Pero estos hechos contradecían la mitología de Carter y Reagan, de manera que como era de prever los medios guardaron silencio acerca de estos hechos y continuaron perpetuando el mito. El 29 de noviembre de 1980, tras la masacre de los líderes de la oposición en San Salvador, el *New York Times* aventuró que esto significaba «un grave reto a la credibilidad» del gobierno, pero no hay ningún indicio de que la sublevación de mayo de 1980 hubiese modificado su visión del 28 de abril de que éste era «un gobierno centrista pero débil».

Tanto entonces como después los medios de comunicación se avinieron amablemente a la rehabilitación del probable asesino de Romero y a su reintegración dentro de la estructura de poder oficial. Como D'Aubuisson ambicionaba un alto cargo y finalmente podía convertirse en el presidente del cuerpo legislativo salvadoreño, los medios de comunicación no hicieron referencia de sus antecedentes como probable organizador del asesinato del arzobispo Romero y reconocido líder de los escuadrones de la muerte y de los asesinatos masivos. Incluso escondieron bajo la alfombra el abierto antisemitismo de ese fascista.[47] Nos permitimos sugerir que si un

47. En un artículo del 11 de febrero de 1982, fechado en San Salvador, el periódico mexicano *El Día* citaba a D'Aubuisson diciendo a dos reporteros europeos,

antisemita y asesino profesional, sospechoso de haber organizado el asesinato de Popieluszko en Polonia, fuese candidato y se convirtiese en cabeza del legislativo polaco, tal cosa hubiera suscitado más de una sorpresa en los medios de comunicación estadounidenses.

Durante este período las informaciones de los medios de comunicación se atuvieron al mito central inventado por el gobierno, y los artículos e interpretaciones se ciñeron a las premisas básicas del mismo: el «gobierno moderado» al que apoyamos está acosado por el terrorismo de los extremistas de izquierdas y de derechas, y es incapaz de mantenerlos bajo control. El gobierno y los medios de comunicación de los Estados Unidos sabían muy bien que la violencia era fundamentalmente responsabilidad de las fuerzas de seguridad a las que respaldaban, que eran, y siguen siendo, el verdadero poder del país, y de la red paramilitar que dichas fuerzas de seguridad crearon para aterrorizar a la población. Pero se trata de una verdad inexpresada. Hasta ahora los medios de comunicación han mantenido el mito central de los primeros años, aún mucho tiempo después de haber admitido discretamente que éste era una absoluta invención. En un informe acerca de las perspectivas de paz en El Salvador, Lindsey Gruson afirmaba que «hoy, los escuadrones de la muerte de derechas e izquierdas ya no aterrorizan a la población llevándola a la sumisión y al silencio», gracias al éxito del presidente Duarte y de sus ayudantes en los Estados Unidos en conducir al país hacia la democracia, exactamente como predecía el modelo de propaganda.[48]

2.4. Cobertura informativa y seguimiento del asesinato de cuatro religiosas estadounidenses a manos de la Guardia Nacional salvadoreña

El 2 de diciembre de 1980 cuatro religiosas norteamericanas que trabajaban en El Salvador —Maura Clarke, Jean Donovan, Ita

---

uno de ellos alemán, que «Uds. los alemanes son muy inteligentes; se dieron cuenta de que los judíos eran responsables de la propagación del comunismo y empezaron a matarlos». Mientras la prensa estadounidense hinchaba falsas declaraciones antisemitas de los sandinistas, esta manifiesta aprobación del Holocausto no fue recogida por la elite de los medios de comunicación.

48. «Peace Is Still a Long Shot in El Salvador», *New York Times* (27 de septiembre de 1987), Suplemento semanal.

Ford y Dorothy Kazel— fueron secuestradas, violadas y asesinadas por miembros de la Guardia Nacional salvadoreña. Este crimen resultó tremendamente inoportuno para la administración Carter, que apoyaba a la Junta salvadoreña como presunto gobierno «reformista» y trataba de convencer a la opinión pública y al Congreso de que dicho gobierno era merecedor de ayuda. Al tiempo que suspendía temporalmente la ayuda militar a El Salvador, la administración Carter buscaba una rápida y sigilosa resolución del caso. Con el pretexto del anuncio de una ofensiva de los rebeldes reanudó la ayuda y, contraviniendo sus promesas, antes de que el gobierno salvadoreño hubiese emprendido cualquier investigación. Rápidamente fue enviada a El Salvador una comisión encabezada por William P. Rogers, con la misión de indagar los hechos y de ofrecer la ayuda de los Estados Unidos para llevar a cabo la investigación. El informe de la comisión indicaba que «no hay ninguna prueba que indique que altas autoridades salvadoreñas hayan estado implicadas en el asesinato», aunque no mencionaron que el procedimiento seguido para averiguar tal cosa no fue otro que preguntar a las propias autoridades si estaban o no implicadas. La comisión reconoció que la justicia no florecía en El Salvador,[49] pese a lo cual no propuso ninguna investigación independiente y se limitó a solicitar a la Junta salvadoreña que prosiguiese las pesquisas con toda energía. Señaló que la Junta había prometido buscar la verdad «dondequiera que estuviese, en cualquier parte del país y a cualquier nivel».[50] Rogers tardó demasiado en admitir que quizás había sido un poco optimista al esperar que la Junta salvadoreña se ocupase del caso con seriedad.[51]

Con la llegada de la administración Reagan, la ya escasa preocupación por encontrar a los culpables disminuyó aún más, y el predominio del interés en defender el régimen cliente de El Salvador fue aún más contundente. Pronto quedó claro que el tema se podía relegar al olvido —junto a los otros miles de salvadoreños muertos— excepto en lo que hacía referencia a las exigencias de las relaciones públicas. También era bastante evidente el deseo de apoyar cualquier

49. Esta afirmación fue omitida de la edición del informe que llegó hasta el público.

50. Informe, p. 8.

51. Ana Carrigan, *Salvador Witness*, Simon & Schuster, Nueva York, 1984, p. 271.

posible explicación plausible. Alexander Haig, secretario de Estado, declaró ante un comité del Congreso para Asuntos Exteriores que las pruebas «hacían creer» que las cuatro mujeres fueron asesinadas mientras trataban de organizar una barricada, mentira descarada que pronto fue reconocida como tal por el Departamento de Estado.[52] Jean Kirkpatrick, embajadora de Reagan en las Naciones Unidas, lo hizo aún mejor que Haig al sugerir que las cuatro mujeres eran activistas políticas del «Frente» (otra clara mentira, como las declaraciones de Haig), e insinuó claramente que eran un blanco legítimo.[53]

Pese a que Kirpatrick afirmó también que «sin lugar a dudas» el gobierno salvadoreño «no era responsable» de los asesinatos, pronto surgieron pruebas que mostraron que las cuatro mujeres habían sido asesinadas por miembros de la Guardia Nacional. Entonces la administración se apresuró a manifestar que estaba claro que los guardias locales habían «actuado por su cuenta». Esta explicación fue repetida una y otra vez pese a que no había ninguna investigación que la respaldase y a que no se tuvo en cuenta la existencia de importantes pruebas que indicaban lo contrario. Un modelo de propaganda puede esperar que los medios de comunicación hagan los honores a la explicación predilecta del gobierno, y

52. *Foreign Assistance Legislation for Fiscal Year 1982*, parte 1, Hearings before the House Committee on Foreign Affairs, 97 congreso, 1.ª sesión, marzo de 1981, p. 163. Carta de David E. Simcox, del Departamento de Estado, a William P. Ford, fechada el 16 de abril de 1981. Cuando Haig hizo esta declaración, ya era bastante evidente que las mujeres habían sido violadas y asesinadas por disparos a quemarropa por la espalda. Haig nunca se disculpó por esta insultante mentira, ni sufrió por ello ningún ataque serio en los medios de comunicación, con la honorable excepción de Anthony Lewis. Este episodio tampoco parece haber tenido ningún efecto noticiable sobre la reputación de Haig.

53. «Tenemos que ser más claros sobre esto de lo que estamos siendo [*sic*]. Se trataba de activistas políticas que actuaban en nombre del Frente y alguien que está usando la violencia para oponerse al Frente mató a esas mujeres» (entrevista en *Tampa Tribune*, 16 de diciembre de 1980, citada en Carrigan, *Salvador Witness*, p. 279). El ex embajador Robert White señaló que observaciones como estas de Kirkpatrick, en el contexto de El Salvador eran «una incitación al asesinato» (T. D. Allman, *Unmanifest Destiny*, Doubleday, Nueva York, 1984, p. 17).

Jean Donovan preguntó al embajador Robert White, «¿Qué hacen ustedes cuando incluso ayudar a los pobres, ocuparse de los huérfanos, está considerado como un acto de subversión por el gobierno?» (citado en Allman, p. 3). Ayudar a los huérfanos en el campo salvadoreño también era visto como un acto subversivo por los funcionarios de la administración Reagan.

que, a diferencia de lo que sucedió en el caso Popieluszko, en el que algunos puntos importantes podían sumarse a la búsqueda de culpabilidad en las altas esferas, los medios de comunicación se muestren en este caso menos impacientes por encontrar aquello que su gobierno desea ocultar.

La diferencia entre los asesinatos de las cuatro mujeres y otros varios miles pendientes de investigación y resolución en El Salvador estribaba en que las familias de esas víctimas eran ciudadanos estadounidenses, y presionaron hasta que finalmente lograron que el Congreso considerase esos crímenes en particular como piedra de toque y símbolo político, con lo que pasaron a formar parte del orden del día político. Finalmente se exigieron juicio y condenas como condición para la ratificación y ayuda al gobierno militar de El Salvador. Así, en ese caso, tanto la administración Reagan como los militares salvadoreños fueron obligados a «ver cómo se hacía justicia». Para ello tuvieron que transcurrir tres años y medio, y ni aun así se destaparon las responsabilidades a alto nivel. Para los medios de comunicación debió ser todo un reto presentar estos asesinatos y el aplazado y obstaculizado resultado de tal manera que se mantuviesen bajos los niveles de indignación; quitar hierro a las características del sistema que asesinó a las mujeres y al que hubo que *forzar* a que encontrase a los hombres de baja graduación culpables del crimen (tarea que les costó años realizar). Pero al final estos medios de comunicación salieron airosos del trance.

2.4.1. *Detalles de las salvajadas*

El hallazgo del cadáver de Popieluszko fue noticia de portada en el *New York Times* —en realidad, la noticia de portada fue el *fracaso* inicial en encontrar su cuerpo— y en todos los medios de comunicación analizados aquí los detalles de su rapto, el estado de su cadáver y la naturaleza de sus heridas fueron pormenorizadamente narrados con una delectación apenas contenida (véase cuadro 2.2). Estos detalles se repetían a la menor oportunidad (y principalmente durante el juicio). Por el contrario, el hallazgo de los cuerpos de las cuatro mujeres mereció un espacio en la última página del *New York Times*, en los otros cuatro medios que hemos tomado como muestra, los relatos de las violencias cometidas sobre las

mujeres asesinadas fueron muy escuetos, se omitieron muchos detalles y tras la revelación inicial no se volvieron a publicar más. No se hizo ningún intento para reconstruir el escenario de su agonía y de la brutal violencia que sufrieron, de manera que el efecto dramático presente en los relatos acerca del asesinato de Popieluszko desapareció aquí por completo. El asesinato de las cuatro religiosas se trató como algo remoto e impersonal.

La información del *Time*, por ejemplo, después de dar el nombre de las cuatro víctimas, decía: «Dos de las mujeres fueron violadas antes de recibir un tiro en la parte posterior de su cabeza». También el relato del *New York Times*, que figura en el cuadro 2.2, fue bastante sucinto. El informe de la Comisión Rogers señalaba que una de las víctimas había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza, y que «las heridas causadas por la salida del proyectil habían destrozado su cara». El informe Rogers indicaba también que las personas presentes en la exhumación habían encontrado «grandes» heridas y que los cadáveres «presentaban también contusiones». En su informe *Weakness and Deceit* (Debilidad y Engaño), Raymond Bonner afirmaba:

> Los cadáveres estaban hacinados uno sobre el otro en la tosca sepultura. El primero que fue extraído del agujero era el de Jean Donovan, misionera seglar de Cleveland que contaba veintisiete años de edad. Su cara había sido destrozada por una bala de gran calibre que le habían disparado en la parte posterior de la cabeza. Sus pantalones estaban desabrochados y su ropa interior enrollada alrededor de los tobillos. Los campesinos de la zona la encontraron desnuda de cintura para abajo, y trataron de colocarle de nuevo sus prendas antes de enterrarla. A continuación salió el cadáver de Dorothy Kazel, monja ursulina de cuarenta años, también de Cleveland. En el fondo del hoyo estaban dos monjas de Maryknoll, Ita Ford, de cuarenta años, y Maura Clarke, de cuarenta y nueve, ambas de Nueva York. Todas las mujeres habían sido ejecutadas a quemarropa. Los campesinos que las encontraron dijeron que una de ellas tenía la boca atiborrada con su ropa interior, otra la tenía enrollada alrededor de sus ojos. Todas ellas habían sido violadas.

Podemos observar que tanto el *Time* como el *New York Times* olvidaron mencionar las contusiones (cuestión en la que abundaron repetidamente en el caso Popieluszko), la destrucción de la cara de

Jean Donovan, suprimieron también el degradante y degradado uso de la ropa interior de las religiosas,[54] así como el relato de los campesinos que encontraron los cadáveres. Estos detalles y otros proporcionados por Bonner y suprimidos por el *Time* y el *New York Times* (y también por *Neewsweek* y el programa *CBS News*) añadían patetismo y fuerza emocional al cuadro. Se echó mano a tales cosas por un Popieluszko, pero no para cuatro mujeres estadounidenses asesinadas por un Estado cliente de los Estados Unidos. El informe Rogers señalaba también que los cirujanos forenses enviados al lugar del crimen por la Junta, a instancias del embajador Robert White, rehusaron efectuar las autopsias alegando que no disponían de mascarillas quirúrgicas. Este aspecto, que hubiera podido mostrar el lado oscuro de la Junta y de sus agentes, también fue suprimido en los relatos de los medios de comunicación de Estados Unidos.

En el caso Popieluszko, tanto el hallazgo del cuerpo *como el juicio* motivaron una agresiva descripción de los detalles del asesinato y del estado en que se encontró el cadáver. La reticencia de los medios de comunicación con respecto a estos temas cuando se hallaron los cadáveres de las cuatro mujeres fue superada por su reserva durante el juicio. Lidia Chávez, del *New York Times*, que asistió al mismo, informó de que tras ocho horas de testimonios y las siete horas de discusión se centraron en las actividades de las mujeres en El Salvador, «y en los detalles de sus raptos y muertes», pero su artículo no daba ningún dato acerca de las pruebas médicas.

2.4.2. *Falta de indignación y de las insistentes demandas de justicia*

En el caso Popieluszko la prensa transmitió la sensación de que se trataba de una atrocidad intolerable que exigía una reparación inmediata. En el caso del asesinato de las cuatro mujeres estadounidenses, aunque los medios afirmaban y citaban a funcionarios del gobierno que consideraban que era un acto brutal y terrible, nadie lo consideró intolerable, y tampoco insistieron (o mencionaron a personas que sí lo hacían) en pedir justicia. Se limitaron a confiar

54. La versión del *New York Times*, que aparece en el cuadro 2.2, es una versión sucinta e inexacta del uso de la ropa interior.

totalmente en los «altos oficiales» de los gobiernos estadounidense y salvadoreño, que daban una versión más resignada de la situación y que estaban dispuestos a permitir que el sistema salvadoreño de justicia solucionase el tema. Así pues, los medios de comunicación adoptaron también esa vena filosófica: las mujeres, como señalaba el *New York Times*, fueron «víctimas de la estúpida y creciente violencia» de El Salvador (15 de diciembre de 1980). Con Popieluszko, eran auténticos funcionarios del gobierno los que cometieron el crimen, no oscuras fuerzas (a las que resulta más difícil pedir cuentas).

Ni siquiera los funerales y las misas en memoria de las mujeres que se celebraron en los Estados Unidos sirvieron a los medios de comunicación para condenar el hecho y pedir justicia; en su mayoría pasaron desapercibidas o fueron suprimidas. El *New York Times* (8 de diciembre de 1981) publicó en su última página un minúsculo despacho de la UPI acerca de las honras fúnebres de la hermana Dorothy Kazel, reproduciendo la apolítica afirmación del obispo Anthony M. Pilla según la cual «la vida de un misionero nunca ha sido fácil ni agradable».

Debemos tener en cuenta también que, como indicaba la embajadora Kirkpatrick, las víctimas quizá se habían buscado su suerte. El 15 de diciembre de 1980 la revista *Newsweek* publicaba que «Probablemente la violencia en El Salvador se cernirá con creciente ferocidad sobre la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes y monjas están a favor de las reformas, y algunos de ellos son militantes izquierdistas. Estas opiniones causan problemas, incluso para los miembros del clero más moderados». (Es de destacar aquí el uso impersonal de «la violencia»; en ningún momento, el artículo sugiere que fue el gobierno apoyado por los Estados Unidos el que inició los asesinatos y el responsable de la mayoría de ellos.) Por el contrario, en el caso Popieluszko los medios de comunicación se cuidaron muy bien de sugerir que éste había sido una lamentable víctima del creciente conflicto entre el Estado y las fuerzas rebeldes (o entre el Este y el Oeste). Esa situación era mucho más sencilla que la de El Salvador: Popieluszko fue asesinado por funcionarios del Estado, y esto era algo intolerable. Las complicaciones y el recurso a las necedades filosóficas acerca de la «violencia» inlocalizable quedaban reservados a las muertes en las provincias.

2.4.3. *La falta de entusiasmo por la búsqueda de responsabilidades en las altas esferas*

Como hemos visto anteriormente, en el caso Popieluszko los medios de comunicación se mostraron día a día ansiosos y agresivos para buscar y mostrar las pruebas de la participación de las altas esferas en el asesinato. En este otro caso tuvieron inmensas dificultades para encontrar cualquier vinculación del gobierno salvadoreño con los asesinatos, pese a que las pruebas estaban delante de sus ojos. Su celo investigador fue más bien modesto y siguieron gustosos las indicaciones de («confiad en mí») Duarte y de los funcionarios del gobierno estadounidense cuando el caso salió a la luz, sin decir esta boca es mía. El ejército y las fuerzas de seguridad de El Salvador habían asesinado *salvadoreños* de la misma manera que habían asesinado a las cuatro mujeres. Por si fuese poco, las iglesias a las que las mujeres estaban vinculadas habían recibido hacía poco las amenazas del ejército. Una prueba aún más evidente es que los militares locales habían obligado a los campesinos del lugar a que enterrasen los cadáveres. Pero los medios de comunicación no utilizaron esta información para ayudar a encontrar el escenario de los crímenes.

La argumentación inicial de los gobiernos de los Estados Unidos y de El Salvador era que no había ninguna prueba de la vinculación de los militares con el crimen, si bien el que hubieran encubierto los cadáveres no había sido correcto. El 8 de diciembre la Junta emitió un comunicado en el que afirmaba que los asesinos habían sido «terroristas de extrema derecha»,[55] y Duarte reiteró dicha opinión a la prensa, que hizo caso omiso de ella. De acuerdo con la versión del gobierno, el *New York Times*, a los veinte días del asesinato, hablaba todavía de «asaltantes no identificados» pese a que las pistas que apuntaban hacia la Guardia Nacional eran prácticamente abrumadoras, y repitió el descubrimiento del informe Rogers acerca de que las fuerzas de seguridad pudieron haber intentado «ocultar las muertes» tras el hallazgo de los cadáveres.[56]

55. «Statement by Revolutionary Governing Junta», 8 de diciembre de 1980. El comunicado señalaba también que «el gobierno revolucionario repudia y condena la violencia y los crímenes irracionales que ésta genera».

56. Juan de Onis, 24 de diciembre. Para el *New York Times* no se plantea la pregunta de por qué las fuerzas de seguridad querrían ocultar los cuerpos si no estaban involucrados en los asesinatos.

Paulatinamente se filtraron gran número de pruebas que indicaban que las mujeres habían sido asesinadas por miembros de la Guardia Nacional, de manera que no fue posible eludir por más tiempo la vinculación de las fuerzas gubernamentales. A consecuencia de ello se realizó un proceso en dos partes a fin de «delimitar los daños y perjuicios», expuesto por funcionarios salvadoreños y estadounidenses y fielmente recogido por los medios de comunicación. Una de las partes de ese proceso fue la distinción entre el gobierno y la Guardia Nacional. En el caso Popieluszko, el lector jamás pudo dejar de tener presente que la policía asesina formaba parte del gobierno polaco. En el caso de las cuatro mujeres estadounidenses, los medios de comunicación apenas se hicieron eco de que los asesinos tenían alguna conexión con el gobierno salvadoreño. Esto seguía las directrices del mito fundamental, reflejado al pie de la letra por la prensa, según el cual el gobierno salvadoreño era centrista y reformista e intentaba controlar los asesinatos cometidos por extremistas de derechas e izquierdas.[57] Esta invención propiciaba un sistema de doble vía: por una parte los asesinatos masivos del ejército y sus afiliados y por otra las lamentaciones simultáneas de los reformistas, incapaces de controlar a los extremistas. Esto recordaba el apogeo de los asesinatos masivos en Argentina, época en la que el *New York Times* acostumbraba a calificar a la Junta y a gentes como el recientemente condenado general Videla como moderados «incapaces de controlar a los extremistas de derechas» que asesinaban a la población.[58]

El objetivo fundamental del primer proceso fue la eliminación de cualquier investigación seria acerca de la responsabilidad de los funcionarios del gobierno salvadoreño. Desde el principio hasta el final la estrategia salvadoreña fue dilatoria, puesto que la idea de condenar a soldados por haber matado a alguien era contraria a su práctica habitual y, además, habían pocas dudas de que las responsabilidades por el crimen apuntaban más alto. La estrategia oficial de los Estados Unidos, una vez quedó claro que la Guardia Nacional era la responsable del asesinato, fue la de juzgar y condenar a los asesinos de baja graduación —lo que era imprescindible para

57. Hemos discutido este mito en «El arzobispo Óscar Romero» (p. 95).

58. Juan de Onis, «Rightist Terror Stirs Argentina», *New York Times* (29 de agosto de 1976).

vindicar el sistema de justicia en El Salvador, por lo menos para que el Congreso mantuviera el envío de dólares— al tiempo que protegían a los «reformistas» en el gobierno. El 30 de septiembre de 1981 el embajador Deane Hinton declaró con aplomo que los guardias nacionales del lugar «habían actuado por su propia cuenta», pese a que documentos internos del Departamento de Estado reconocían en aquel momento que la investigación salvadoreña había sido una burla, y que existían pruebas adicionales que indicaban la complicidad a alto nivel en el asesinato.[59] Con todo, la postura oficial estaba clara. Y para acompasarse a la versión oficial, los medios de comunicación tuvieron que dejar de investigar las vinculaciones de las altas esferas e incluso suprimir las pruebas procedentes de otras fuentes. Y así lo hicieron.

El periodista John Dinges, después de investigar durante dos meses los asesinatos, presentó a través de la Pacific News Service un informe en el que mostraba que éstos habían sido planificados hasta el último detalle.[60] En primer lugar, se habían interceptado comunicaciones por radio en las que los militares comentaban la llegada de las mujeres al aeropuerto, y otras pruebas de la estrecha vigilancia de sus planes de vuelo que sugerían una operación militar extensa y coordinada. En segundo lugar, un antiguo viceministro de planificación relató a Dinges que tan sólo dos semanas antes del asesinato, Guillermo García, ministro de Defensa salvadoreño, realizó durante media hora una exposición en la que denunció a los sacerdotes y monjas que se encontraban en la misma zona de los asesinatos, afirmando que era necesario hacer algo al respecto.

En una notable hazaña de autocensura, la mayoría de medios de comunicación ignoraron completamente los descubrimientos de Dinges, cuyo informe fue publicado en el *Washington Post, Los Angeles Times* y en otros quince periódicos, pero del que ni una sola línea llegó al *New York Times, Time, Newsweek* o al programa *CBS News*, y ninguno de ellos se ocupó de seguir las pistas que se daban en él. En cambio, continuaron repitiendo las afirmaciones de Duarte y de los funcionarios estadounidenses en las que manifestaban su satisfacción porque los asesinatos no habían trascendido el

59. Véase *infra*, nota 67.

60. John Dinges, «Evidence Indicates Military Planned Missionaries' Deaths», *National Catholic Reporter* (17 de julio de 1981).

ámbito de los guardias nacionales, y que los oportunos canales legales salvadoreños se ocuparían con toda diligencia del asunto.

En marzo de 1984 el coronel Roberto Santiváñez, alto oficial del servicio de información salvadoreño, accedió a «hablar» de la red de escuadrones de la muerte en El Salvador, y sus declaraciones hallaron eco en el programa *CBS News* y en la portada del *New York Times*.[61] Santiváñez proporcionó una serie de detalles fiables acerca del asesinato de las cuatro mujeres, indicando que éste había sido realizado por orden directa del coronel Óscar Edgardo Casanova, responsable de la zona en que ocurrieron. Dos semanas más tarde el coronel Casanova fue asignado a otro destino, como parte del encubrimiento oficial. Su primo hermano Eugenio Vides Casanova, ministro de Defensa elegido por Duarte y jefe de la Guardia Nacional en diciembre de 1980, conocía la orden de asesinato dada por su primo, al igual que Duarte. Pese a que esto era una abrumadora prueba de la implicación de altos oficiales en los asesinatos, no se efectuó seguimiento alguno de la historia ni se estableció ninguna relación con el relato de Dinges acerca de las discusiones de alto nivel sobre la necesidad de tomar alguna determinación con respecto a los trabajadores religiosos. Ni editoriales, ni indignación, ni ninguna presión para tomar cartas en el asunto.

En resumen, las pistas proporcionadas por Dinges y el testimonio de Santiváñez indicaban claramente que el asesinato de las cuatro mujeres tuvo su origen en una decisión de alto nivel. Aun estaba más claro que oficiales de rango medio del gobierno habían

61. Stephen Kinzer, «Ex-Aide in Salvador Accuses Colleagues on Death Squads» (3 de marzo de 1984). Adviértase la «suavidad» del titular. El *New York Times* desperdició la oportunidad de un titular como: «Duarte and Defense Minister Acused of Cover-up of Murder of Four American Women». Santiváñez cobró 50.000 dólares por declarar como testigo, suma que solicitó a causa del riesgo que corría y de la probabilidad de un futuro con escasos ingresos como resultado de su confesión. Este pago recibió una publicidad desacostumbrada que pomía en duda la honestidad de su testimonio, y el *New York Times* despachurró su testimonio por esta cuestión de principios, algo que nunca aplican a los desertores soviéticos, los cuales necesitan menos protección. La revelación de que los «dirigentes demócratas» que la CIA organizó como frente civil para la Contra recibieran durante años unos 80.000 dólares anuales, libres de impuestos, de manos de la CIA, nunca comprometió su integridad como fuentes de información para los medios de comunicación. El desertor nicaragüense Miranda cobró 800.000 dólares por sus servicios sin ser desacreditado.

ordenado el asesinato, y que los oficiales de alto nivel estaban comprometidos en una continua y sistemática ocultación de los hechos. En el caso polaco, nunca se encontraron pruebas de la vinculación de las altas esferas, pero los medios de comunicación estadounidenses incidieron en el tema de una manera implacable. En el caso de las cuatro religiosas, en el que habían abundantes pruebas de las implicaciones de alto nivel, dichos medios de comunicación eludieron hacer presión sobre el tema y no se preocuparon por seguir investigando las pistas, por otra parte evidentes.

No podemos describir aquí con todo detalle el fiasco del proceso judicial salvadoreño, que nunca hubiese avanzado de no ser por las presiones y amenazas de los Estados Unidos.[62] En algún momento los medios de comunicación censuraron al gobierno salvadoreño por «eludir» la investigación,[63] pero por otra parte omitieron captar la profundidad y el alcance del proceso dilatorio y no analizaron lo que esto significaba para esa «incipiente democracia». Se limitaron a transmitir las declaraciones de los gobiernos de El Salvador y de los Estados Unidos, sobre la situación del juicio sin ningún tipo de sarcasmo y sin dar muestras de escandalizarse. Si *hubiesen* dado todos los detalles, el gobierno salvadoreño habría quedado totalmente desacreditado. Así pues, las claras evidencias del rechazo de los oficiales salvadoreños a emprender alguna acción o a interrogar a los testigos pertinentes, y de las amenazas a testigos, abogados y jueces —que hubiesen sido aireadas con fruición en el caso de la investigación polaca—, no fueron tenidas en cuenta.

62. Las investigaciones de Michael Posner y del Lawyers' Committee for International Human Rights dieron como resultado una serie de informes excelentes, fechados en septiembre de 1981, el 20 de julio de 1982 y el 1 de febrero de 1983, que contenían evidencias detalladas y aplastantes de un proceso judicial completamente mediatizado y encubierto oficialmente. Una vez más, al igual que con el informe Dinges, estos documentos fueron ignorados de plano por los medios de comunicación estadounidenses, suprimiendo así los hechos y pistas que contenían. La cobertura informativa de los documentos del comité de abogados fue insignificante. Michael Posner y Scott Greathead consiguieron colocar un artículo de opinión en el *New York Times* del 6 de diciembre de 1983 titulado «3 Years After the Killings, No Justice in Salvador».

63. Tanto el *Time* como el *Newsweek* publicaron artículos sobre el obstruccionismo en febrero de 1981 —el artículo del *Time* del 23 de febrero se titulaba «Stonewalling» (Obstruccionismo)—, pero aunque el obstruccionismo continuó durante años, ahí terminó el interés de esas revistas por la cuestión.

Basten algunas pinceladas acerca del modo de proceder de los salvadoreños. Por ejemplo, dos años después del crimen,

> ... los fiscales manifestaron desconocer el testimonio [que constaba en los archivos del juzgado] del antiguo guardia César Valle Espinosa, fechado el 9 de agosto de 1982, que hacía referencia a las declaraciones del suboficial Colindres Alemán según la cual existían «órdenes de la superioridad» para prender a las mujeres. Los fiscales tampoco conocían las declaraciones que el sargento Dagoberto Martínez, antiguo guardia nacional, había efectuado al FBI en Los Ángeles —California— en las que afirmaba la existencia de una operación para el encubrimiento del crimen ya desde diciembre de 1980.[64]

Y otro detalle ilustrativo del proceso es que dos de los tres jueces a los que se les asignó el caso dimitieron por considerar que sus vidas corrían peligro. Como ya hemos visto, el juez Ramírez, que investigaba el asesinato de Romero, tuvo que huir por la misma razón. La acumulación de estas pruebas revestía una importancia significativa, pero no fue nunca tratada globalmente por la prensa (apenas fueron tratadas individualmente en las últimas páginas de los periódicos). Un tercer ejemplo: según el antiguo embajador Robert White, dos de los guardias nacionales que hubiesen podido establecer la relación de los oficiales de alto rango con los asesinatos fueron muertos a su vez por los escuadrones de la muerte, si bien constaban como caídos en acción.[65] Y un último ejemplo: cuando finalmente se designaron abogados para que defendiesen a los hombres que efectuaron los disparos, uno de ellos, Salvador Antonio Ibarra, estaba dispuesto a defenderlos con seriedad. Sus colegas presionaron a Ibarra para que desistiera de su propósito, afirmando que «la posibilidad de un encubrimiento había sido investigada exhaustivamente», pero Ibarra no cedió. A consecuencia de su rechazo a acceder a sus pretensiones el 30 de octubre de 1983 Ibarra fue secuestrado y torturado en los cuarteles generales de la Guardia Nacional.[66] Liberado gracias a las presiones de los Estados Unidos, Ibarra abandonó el país, dejando campo libre a un equipo legal

64. Lawyer's Committee for International Human Rights, *Update: Justice in El Salvador: A Case Study*, 1 de febrero de 1983, p. 17.

65. Bonner, *Weakness and Deceit*, p. 80.

66. Larry Rother, «Salvador Defense Lawyer Charges Cover-Up in Slaying of U.S. Nuns», *New York Times*, 6 de mayo de 1985.

dispuesto a aceptar que se había producido una «investigación exhaustiva» de las posibles implicaciones de alto nivel. Los medios de comunicación se ocuparon escuetamente de este incidente aislado, pero la prensa libre no hizo mención de todos los demás.

También el gobierno de los Estados Unidos estaba comprometido en el encubrimiento sistemático tanto de la ocultación salvadoreña como de lo que sucedió en realidad. Los medios de comunicación estadounidenses, si bien mencionaron brevemente las evasivas del gobierno salvadoreño, eludieron llamar la atención sobre las igualmente importantes mentiras y omisiones de su propio gobierno. Como ya hemos señalado, las administraciones de Carter y de Reagan priorizaron la protección a su cliente por encima de las peticiones de justicia respecto de cuatro ciudadanas estadounidenses asesinadas por agentes del gobierno salvadoreño. La protección del gobierno de los Estados Unidos a su cliente adoptó diversas formas. Una de ellas era la colaboración activa en el encubrimiento salvadoreño. El sargento Dagoberto Martínez obtuvo permiso para emigrar a los Estados Unidos en diciembre de 1980, y pese a que el posterior interrogatorio al que le sometió el FBI indicaba que Martínez admitió conocer a los autores del crimen y que ocultó tal información —violando la ley salvadoreña—, no se efectuó ninguna acusación en su contra. Los funcionarios estadounidenses afirmaron una y otra vez que no habían razones para creer que los oficiales de alto rango supiesen algo del crimen o hubiesen participado en él, cuando en realidad sabían sin lugar a dudas que lo estaban encubriendo y que se habían negado a investigarlo.[67] También el Departamento de Estado mintió sistemáticamente acerca de la minuciosidad con la que se había llevado a cabo la investigación. El embajador Hinton declaró públicamente que el guardia nacional Pérez Nieto «había sido interrogado concienzudamente y siempre negó que cualquiera de sus superiores le hubiese ordenado vigilar a las mujeres». Sin embargo un cablegrama del propio Departamento de Estado descri-

67. El mismo mes en que Hinton mantenía con toda seguridad que los guardias nacionales de grado inferior habían actuado por cuenta propia, memorándums internos del Departamento de Estado consignaban que «la lectura de los documentos planteó varias preguntas que creemos que deberían habérsele ocurrido a un investigador cuyo propósito real hubiese sido determinar quién había cometido el crimen» (citado en *Update*, p. 31).

bía el testimonio de Pérez Nieto como «incompleto, evasivo y poco dispuesto a cooperar».[68]

Otra de las formas de la participación oficial de los Estados Unidos en el encubrimiento del crimen fue su rechazo a divulgar información sobre la investigación salvadoreña y de las pruebas que ellos mismos habían descubierto. El informe Rogers dio a conocer tardíamente y en una versión que omitía una de las afirmaciones del informe original con respecto a la lamentable situación del sistema de justicia salvadoreño. En respuesta al aumento de voces que criticaban los retrasos, el gobierno de los Estados Unidos encargó al juez Harold R. Tyler que llevase a cabo una nueva investigación. Una vez más, dicho informe fue puesto en cuarentena durante mucho tiempo, al parecer porque en él constaban algunas serias críticas al proceso judicial salvadoreño, que hubiesen podido entorpecer los planes de la administración Reagan, deseosa de hacer constar los progresos cada vez que ello fuese necesario.[69] Las familias y los abogados de las víctimas se encontraron sistemáticamente con la poca disposición del gobierno estadounidense para proporcionarles información del caso. Las razones aducidas para ello es que se trataba de información delicada cuya divulgación podía interferir el proceso legal en El Salvador. Dado que dicho proceso era una broma macabra, que avanzaba sólo en función de las amenazas estadounidenses, parece claro que dichas razones eran claramente fraudulentas. Además, Duarte no se cansaba de repetir que con toda seguridad los guardias arrestados eran culpables, y que ninguna persona de mayor graduación estaba relacionada con el caso, prejuzgándolo así de manera descarada. La única razón pausible del encubrimiento estadounidense es que la administración deseaba minimizar la publicidad adversa con respecto a la actuación de su sanguinario cliente. La información sobre lo que sucedía en realidad, o sus propios análisis internos o valoraciones del proceso legal salvadoreño hubieran dado una mala imagen de su cliente. La administración esperaba que el caso «perdiese actualidad», pero mientras tal cosa sucedía deseaba tener bajo su control la publicidad del mismo.

68. Citado en *Update*, pp. 30-31.

69. Sobre la investigación de Tyler, véase Bonner, *Weakness and Deceit*, pp. 78-80.

En parte las razones de la administración para anhelar ese control eran que éste les permitía hablar de un progreso razonable en el seguimiento del caso cada vez que el gobierno militar necesitase dinero. Como sucede con países satélites derechistas, la «mejoría» se produce siempre en momentos de crisis financiera. En su informe de julio de 1982 el Departamento de Estado consideró que se había realizado un «progreso sustancial» en el caso, y aseguró que habría juicio para finales de 1982. El informe de principios de 1983 reflejaba los «avances significativos» del caso. Esta manipulación de las pruebas para proteger el envío de armas y dinero al régimen no hubiera sido fácil de publicarse todas las informaciones o de contar con una prensa crítica y honesta.

Este encubrimiento del proceso judicial salvadoreño, pese a que se trataba del asesinato de cuatro mujeres estadounidenses, no suscitó en la prensa ni indignación ni comentarios sarcásticos, ni logró que ésta ofreciese otra cosa que una mínima información de la investigación.

2.4.4. *El juicio: cinco guardias nacionales a cambio de 19,4 millones de dólares*

El juicio de los cinco principales asesinos de las cuatro mujeres mereció haber sido narrado con tintes kafkianos, pero los medios de comunicación estadounidenses se ocuparon de él de forma muy directa. El juicio se celebró tres años y medio después de cometidos los asesinatos, pese a que los tiradores fueron identificados inmediatamente y a las enormes presiones de los Estados Unidos. Dos de los tres jueces a los que se les asignó el caso dimitieron al temer por sus vidas, y el único abogado defensor independiente abandonó el país después de una sesión de torturas en los cuarteles generales de la Guardia Nacional. Durante el juicio los defensores no realizaron esfuerzo alguno por exculpar a sus clientes basándose en que éstos habían recibido «ordenes de la superioridad», aunque ese es el tipo de defensa habitual en tales casos, y además disponían de pruebas significativas para corroborarlo. Los medios de comunicación se abstuvieron de comentar estos aspectos, pese a que hacían pensar en temores, acuerdos o en ambas cosas a la vez, y a que en ocasiones, como hemos visto en el caso Popieluszko, estos medios están

absolutamente alerta ante posibles encubrimientos. En marzo de 1984 Santiváñez, antiguo funcionario del servicio de información, declaró que los guardias sabían que «si no mencionaban el nombre de Casanova, saldrían de la prisión tan pronto como ello fuese factible».[70] En el contexto del juicio no se hizo referencia a estas declaraciones, y los medios de comunicación tampoco.

Como había sucedido en las elecciones salvadoreñas de 1982 y 1984, tanto la puesta en escena como la motivación del juicio eran totalmente estadounidenses. En palabras de Ana Carrigan:

> En el juzgado la seguridad estaba en manos de una unidad especial de Protección Judicial, formada y entrenada en Glencoe, Alabama; los miembros del jurado fueron conducidos al juzgado por la mañana y devueltos a sus hogares tras el veredicto en vehículos blindados de la embajada estadounidense, que asimismo había proporcionado la comida y camas de campaña por si fuese necesario que los jurados y el personal del juzgado pasaran la noche bajo la protección de los custodios del mismo, y cuando se fue la luz, en el preciso momento en que los fiscales empezaban su exposición, se pudo restablecer gracias a la iluminación de emergencia enviada por el personal de la embajada.[71]

Lo que estaba en juego eran los dólares estadounidenses. El Congreso había congelado el envío de 19,4 millones de dólares a la espera del resultado favorable del caso. Durante las veinticuatro horas siguientes al juicio, el Departamento de Estado anunció que se había hecho justicia y envió el dinero a la cuenta del ministro de Defensa Vides Casanova, que era el jefe de la Guardia Nacional el día 4 de diciembre de 1980, fecha en que se habían cometido los asesinatos, y cuyo primo carnal, según el coronel Santiváñez, había dado la orden de matar. Vides Casanova fue también el eficiente protector de su primo y el que retrasó el procesamiento de sus subordinados durante tres años y medio.

Ateniéndose a los presupuestos de un modelo de propaganda, los medios de comunicación fracasaron totalmente a la hora de captar las características de la situación, a saber: la omnipresencia

70. Stephen Kinzer, «Ex-Aide in Salvador Accuses Colleagues on Death Squads», *New York Times* (3 de marzo de 1984).

71. Carrigan, *Salvador Witness*, p. 265.

estadounidense, la seguridad del juzgado, el fallo de la defensa al no señalar la responsabilidad de las altas autoridades, el papel de Vides Casanova, la literal transacción de dinero por justicia en *este caso concreto*, que se prolongó durante tres años y medio. Para *Newsweek*, el resultado fue «un éxito notable», según un artículo del 4 de junio de 1984 titulado «A Defeat for a Dead Squad» (Una derrota para un escuadrón de la muerte), aunque en realidad quien asesinó a las mujeres fue la Guardia Nacional. El artículo resaltaba las dificultades de plantear y de ganar el caso, y la posibilidad de un encubrimiento por parte de personal de alto nivel, pero no utilizó esta información para mostrar la naturaleza del sistema apoyado por los Estados Unidos. El artículo cerraba asimismo la discusión referente al informe Tyler dejando a un lado las vinculaciones de las altas esferas, y sin citar las afirmaciones del informe, según las cuales «algunas pruebas dan testimonio de la vinculación de las altas esferas» ni mencionar que dicho informe admitía las limitaciones de su información. No se hizo referencia alguna a Santiváñez o al informe de Dinges: el *Newsweek* recurrió a una fuente oficial, y la leyó mal.

2.5. Veintitrés víctimas religiosas en Guatemala de 1980 a 1985

La historia moderna de Guatemala quedó conformada decisivamente por la invasión organizada por los Estados Unidos y por el derrocamiento del régimen democráticamente elegido de Jacobo Arbenz, en junio de 1954. Desde aquel momento, si bien Guatemala ha permanecido segura dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos, las muy necesarias reformas económicas y sociales fueron postergadas de la agenda indefinidamente, se suprimió la democracia política y quedó institucionalizado el Estado del terror, que alcanzó unos niveles catastróficos a finales de la década de los setenta y a principios de la de los ochenta. Dado el status de Estado cliente de Guatemala, y de que la contrarrevolución democrática servía a los importantes intereses de las elites, el modelo de propaganda propone que sus víctimas sean «indignas», lo que queda reflejado tanto en la cantidad como en la calidad de la atención que les dispensan los medios de comunicación. Además, mientras las persecuciones en los estados clientes de la Unión Soviética como Polonia

y Checoslovaquia se remiten sistemáticamente a la ocupación soviética, el modelo de propaganda se ocupará de que los medios de comunicación de los Estados Unidos no expliquen la situación actual de Guatemala, sometida al terror de Estado como el producto natural de la intervención estadounidense de 1954 (y posterior). Por el contrario, lo que cabe esperar es que los Estados Unidos sean descritos como espectadores preocupados y benevolentes, que tratan de hacer todo cuanto está en sus manos para refrenar los abusos de los extremistas de derecha y de izquierda.

Antes de analizar cómo tratan los medios de comunicación la situación guatemalteca, permítasenos volver atrás para efectuar una somera revisión del crucial período del 1945 al 1954 y sus secuelas, para situar la cuestión y proceder al examen del papel de los medios de comunicación en los años ochenta. Arbenz y su predecesor, Juan Arévalo, encabezaron el primer sistema democrático de la historia guatemalteca. Durante la década de su gobierno los periódicos, los grupos sociales, sindicatos, campesinos y partidos políticos pudieron organizarse sin temor a la represión y a los asesinatos.[72] Pero esta frágil democracia reposaba sobre la base de la concentración de la propiedad de las tierras, el control extranjero sobre éstas y sobre las instalaciones estratégicas, lo cual representaba una constante amenaza a su independencia y a su libertad política, así como un desastre humano. La lucha por la sindicalización y la reforma agraria durante la década democrática estuvo motivada en parte por el deseo de lograr un electorado masivo que proporcionase la base institucional para la democracia.[73] Todo cambio progresista efectuado tanto por Arévalo como por Arbenz fue recibido con la feroz hostilidad de la oligarquía local y de la comunidad empresarial multinacional, así como la del gobierno de los Estados Unidos.[74] A partir de 1947, época en la que se autorizó la organización de los sindicatos, se pensó en la necesidad de tener bajo control el «comunismo» o la amenaza de éste, y la modesta y efectiva refor-

72. Véase Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, *Bitter Fruit*, Doubleday, Nueva York, 1982, pp. 32-47 y 54-63.

73. Prácticamente todos los observadores independientes eran del parecer que la reforma agraria era muy deseable tanto en nombre de la equidad como de la eficacia. Véase, especialmente, José M. Aybar de Soto, *Dependency and Intervention: The Case of Guatemala in 1954*, Westview, Boulder, 1978, capítulo 6.

74. *Op. cit.* Véase también Richard H. Immerman, *The CIA in Guatemala*, University of Texas Press, Austin, 1982.

ma agraria de Arbenz fue la gota que colmó el vaso.[75] Con la iniciativa, organización, financiación de los Estados Unidos, y mediante una abierta guerra psicológica y acciones terroristas, un minúsculo ejército mercenario expulsó a Arbenz e instauró el régimen «anticomunista».

Desde 1954 hasta nuestros días, ni reformas ni democracia, por no hablar de ningún cambio radical, han sido posibles en Guatemala. La razón principal de ello es que las fuerzas en cuyas manos pusieron el país los Estados Unidos en 1954 «se oponen tajantemente a cualquier cambio que pueda afectar, por poco que sea, su atrincherada posición».[76] Asimismo éstas han aprendido la lección de los años 1945 al 1954, y saben que la democracia lleva inexorablemente hacia las reformas, y amenaza los privilegios en un sistema de desigualdades extremas. Los realmente escasos intervalos de relativa apertura posteriores a 1954 fueron testigos del rápido surgimiento de organizaciones que protegían a los trabajadores urbanos y a los campesinos, de huelgas y de partidos y organizaciones reformistas y radicales. Según Piero Gleijeses, «en los últimos meses del período Arana (1970-1974), la represión había adquirido un carácter más selectivo y en varias ocasiones Lugerud (sucesor de Arana, 1974-1978) se abstuvo de "liquidar" las huelgas por la fuerza».[77] Pero la debilidad de las reformas y de las esperanzas que despertaron, unida a las presiones, forzaron una nueva opción, y «dada la naturaleza del régimen» la ola de terror que siguió fue, para la clase dirigente guatemalteca, «la única opción lógica».[78]

Otra de las razones del fracaso de las reformas y de la democracia ha sido la continua influencia de los Estados Unidos. Para su *establishment* el pluralismo y la democracia de los años 1945 al 1954 eran intolerables, y finalmente abortaron el experimento.[79] En

75. Véase Blanche Wiessen Cook, *The Declassified Eisenhower*, Doubleday, Nueva York, 1981, p. 222.

76. Piero Gleijeses, «Guatemala: Crisis and Response», en Richard B. Fagen y Olga Pellicer, *The Future of Central America: Policy Choices for the U.S. and Mexico*, Stanford University Press, Stanford, California, 1983, p. 188.

77. *Op. cit.*, pp. 191-192.

78. *Ibid.*, p. 192.

79. Los funcionarios estadounidenses a menudo han presionado para conseguir reformas democráticas puramente formales y reducciones de los índices de asesinato, pero han prestado su firme apoyo y ayudado a organizar la *estructura* que ha corroído las reformas democráticas y *aumentado* los índices de asesinatos. En Gua-

los treinta y dos años siguientes bajo el control de los Estados Unidos, Guatemala no sólo se ha convertido en un Estado terrorista raras veces igualado en la escala del asesinato sistemático de civiles, sino que sus inclinaciones terroristas se han incrementado notablemente en los momentos estratégicos de creciente intervención estadounidense. El primero de ellos fue la invasión y la contrarrevolución de 1954, que reimplantó en Guatemala los asesinatos políticos y la represión a gran escala tras la década de democracia. El segundo siguió al surgimiento de un pequeño movimiento de guerrillas a principios de la década de los sesenta, cuando los Estados Unidos iniciaron el adiestramiento formal para cometidos de contrainsurgencia (CI) del ejército guatemalteco. En 1966, un nuevo y reducido movimiento de guerrillas desencadenó una guerra en la que los «boinas verdes» y un contingente de contrainsurgentes ocasionaron la muerte de 10.000 personas como resultado de la persecución de unos trescientos o cuatrocientos guerrilleros. Fue en este momento cuando hicieron su aparición en Guatemala los «escuadrones de la muerte» y las desapariciones. La política de entrenamiento de los Estados Unidos empezó en la década de los setenta, y a ella le siguió una nueva institucionalización de la violencia. La «solución» a los problemas sociales de Guatemala, atribuible específicamente a la intervención de 1954 y al tipo de ayuda proporcionada por los Estados Unidos desde entonces, ha sido la instauración de un terror de Estado permanente. Con Guatemala, los Estados Unidos inventaron el «Estado contrainsurgente».

---

temala (y en otros lugares), las razones para el apoyo regular a instituciones antidemocráticas han sido el temor a la izquierda y la hostilidad crónica de los funcionarios y hombres de negocios estadounidenses hacia las organizaciones populares (sindicatos, organizaciones de campesinos, partidos políticos de masas), por razones económicas y políticas. De esta manera, el apoyo periódico a *formas* liberales pasa a ser irrelevante a causa del sistemático refuerzo de instituciones que socavan con regularidad la *esencia* del liberalismo. Tal como señala Lars Schoultz, la función del «autoritarismo militar», empezando por el golpe brasileño de 1964 respaldado por los Estados Unidos, y que prevalece en América Latina y otros lugares del área de influencia estadounidense, ha sido «destruir las amenazas que se perciben para la estructura existente de privilegio socioeconómico eliminando la participación de la mayoría numérica ...» (*Human Rights and United States Policy toward Latin America*, Princeton University Press, Princeton, 1981, p. 7). No obstante, tal vez les dejemos «participar» mediante elecciones celebradas tras largos períodos de pacificación militar y el desmantelamiento de las organizaciones populares. Véase capítulo 3.

El papel especial del ejército en este Estado contrainsurgente fue elevando paulatinamente su status y poder, y finalmente le dio la capacidad institucional para gobernar Guatemala. Como sucede en otros estados clientes de los Estados Unidos, los militares utilizan su poder para hacer suyas oportunidades económicas y para robar, directa o indirectamente.[80] El terrorismo, el latrocinio y la autonomía de los militares guatemaltecos alcanzó un apogeo provisional —superado más tarde por Ríos Montt— durante el período de gobierno de Lucas García (1978-1982). Éste coincidió con el breve intervalo de la política de derechos humanos de Carter, durante el cual se produjeron abiertas críticas al gobierno guatemalteco y una breve y parcial interrupción del suministro de armas de los Estados Unidos, debido a las presiones del Congreso.[81] Sin embargo, ni siquiera durante la época de Carter las relaciones fueron hostiles; se parecían más a lo que sucede cuando un niño de la familia se porta mal y se le castiga un rato de cara a la pared. En parte el deseo de Carter de no proporcionar nuevos suministros de armas se debía a que aquel niño malo no estaba en peligro. Por el contrario, el año 1980 en El Salvador, donde la adminitración Carter contemplaba la posible victoria de la izquierda, el régimen de terror derechista recibió el rápido apoyo de los Estados Unidos.

Durante la época de Reagan el número de civiles asesinados en Guatemala alcanzó la cifra de varias decenas de miles, y las desapariciones o el hallazgo de cadáveres mutilados se sucedían cotidianamente.[82] Los estudios realizados por Amnistía Internacional (AI), Americas Watch (AW) y otros grupos en pro de los derechos huma-

80. Véase «Counterrevolution and the "Shakedown States"», en Noam Chomsky y Edward S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism*, South End Press, Boston, 1979, pp. 61-66.

81. Desde 1977, Guatemala recurrió a la ayuda de Israel, Estado que presta estos servicios regularmente al gobierno norteamericano. Para más detalles, véanse Bishara Bahbah, *Israel and Latin America: The Military Connection*, St. Martin's, Nueva York, 1986; Benjamin Beit-Hallami, *The Israeli Connection*, Pantheon, Nueva York, 1987; y Jane Hunter, *Israeli Foreign Policy*, South End Press, Boston, 1987. Sobre el constante flujo de armas de los Estados Unidos a Guatemala durante los años de Carter, véase Lars Schoultz, «Guatemala», en Marin Diskin, ed., *Trouble in our Backyard*, Pantheon, Nueva York, 1983, pp. 187 y ss.

82. Piero Gleijeses estima que «el ejército guatemalteco ha matado a unas 100.000 personas desde 1979» («The Reagan Doctrine and Latin America», *Current History* (diciembre de 1986).

nos certificaron que la máquina militar había enloquecido, con el asesinato indiscriminado de campesinos (entre los que se incluían gran número de mujeres y niños), el traslado forzoso de cientos de miles de campesinos y de aldeanos a virtuales campos de concentración y el alistamiento obligatorio de otros tantos cientos de miles de hombres en patrullas civiles.[83] Sin embargo cuando Reagan visitó Guatemala en diciembre de 1982, comentó que el jefe de Estado Ríos Montt estaba «totalmente comprometido con la democracia» y que estaba recibiendo «acusaciones injustas» acerca de los abusos cometidos en materia de derechos humanos. Dos meses antes Amnistía Internacional (AI) había presentado su informe, en el que describía cómo en un período de tres meses se habían efectuado matanzas de civiles en sesenta aldeas indias diferentes y que el número total de muertos superaba los dos mil quinientos.[84]

La política de Reagan con respecto a Guatemala era, como en el caso de Sudáfrica, de «compromiso constructivo».[85] Desde el principio la administración se apresuró a aceptar y a proporcionar armas a los gobiernos militares. Las ininterrumpidas y masivas matanzas eran tan sólo un estorbo. Uno de los métodos mediante los cuales la administración procuró rehabilitar nuestras relaciones con los regímenes guatemaltecos fue el de mentir continuamente con respecto a su historial en derechos humanos (y el propio Reagan se encargó de marcar las pautas). Stephen Bosworth, del Departamento de Estado, aseguró a un comité del Congreso en julio de 1981 que el gobierno de Lucas García había atacado con éxito a la guerrilla «pero ocupándose de proteger a los espectadores inocen-

83. Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, *Guatemala: A Government Program of Political Murder*, AI, Londres, 1981; Grupo de Derechos Humanos del Parlamento, «Bitter and Cruel...», Informe sobre una misión en Guatemala del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico, octubre de 1984; Americas Watch, *Civil Patrols in Guatemala*, AW, Nueva York, 1986.

84. Amnistía Internacional, *Guatemala: Massive Extrajudicial Executions in Rural Areas under the Government of General Efraín Ríos Montt* (11 de octubre de 1982).

85. Según una declaración del Departamento de Estado del 20 de julio de 1981, «necesitamos intentar una nueva, constructiva política de acercamiento a Guatemala ...» (citado en Americas Watch, *Guatemala Revisited: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala*, AW, Nueva York, 1985, p. 4).

tes».[86] Por otra parte el informe sobre la situación de los derechos humanos en dicho país elaborado por el Departamento de Estado en 1981 consideraba que era imposible determinar quién cometía los asesinatos en Guatemala: las desapariciones se atribuían a la «derecha» y a la «izquierda», pero no al gobierno. Por el contrario en febrero de 1981 Amnistía Internacional proporcionó detalladas pruebas de que prácticamente todos los miles de asesinatos tenían su origen en el gobierno, incluyendo entre ellos los efectuados por los escuadrones de la muerte, cuyas víctimas se decidían en un anexo del palacio nacional de Guatemala bajo la supervisión directa del presidente Lucas García.[87]

Con el derrocamiento de Lucas García, repentinamente, como por arte de magia, la línea de la administración Reagan sufrió un cambio y Stephen Bosworth «no encontraba palabras para expresar con justeza el favorable contraste entre la actual situación de los derechos humanos en Guatemala y la situación del pasado mes de diciembre ...». Melvyn Levitsky, subsecretario de Estado para los derechos humanos, declaró ante otro comité del Congreso que «los Estados Unidos no pueden mantener sin dificultades la relación con un gobierno comprometido en el ejercicio de la violencia contra su propio pueblo», como era el caso del régimen de Lucas García.[88]

Cuando éste estaba en el poder, Bosworth sostenía que si bien el de García era un régimen solícito que protegía a los inocentes, y el Departamento de Estado era incapaz de determinar quién realizaba los asesinatos. Cuando Lucas García fue expulsado, el Departamento de Estado descubrió que se trataba de alguien que asesinaba indiscriminadamente, y usó un elevado tono moral al aludir a su conducta. Esto significa que el Departamento de Estado admitía implícitamente sus mentiras anteriores, y contaba con la prensa para que no se hablase de ello. Evidentemente, la razón del cambio no era otra que ayudar a crear un ambiente favorable para el sucesor de Lucas García, Ríos Montt. Según declaraciones efectuadas por John Hughes, portavoz del Departamento de Estado en

86. Citado en Americas Watch, *Guatemala Revisited*, p. 6.

87. Véase Amnistía Internacional, *Guatemala: A Government Program of Political Murder*, p. 8.

88. Americas Watch, *Guatemala Revisited*, p. 6.

enero de 1983, bajo el gobierno de Ríos Montt se estaba produciendo un «declive espectacular» de los abusos en materia de derechos humanos. Ríos Montt era el hombre a quien Reagan consideró que se acusaba injustamente. Pero como ya hemos visto, Amnistía Internacional consideraba que Ríos Montt era otro de los asesinos de alto nivel, que al parecer había superado a su predecesor por lo que se refería a las matanzas de civiles.

Cuando Ríos Montt fue derrocado a su vez, cambió de nuevo la argumentación del Departamento de Estado. Éste reconoció que en 1982, bajo el gobierno de Ríos Montt las cosas habían sido terribles, pero que *ahora* se estaba produciendo una mejora espectacular y el gobierno manifestaba «una creciente sensibilidad para las cuestiones relacionadas con los derechos humanos».[89] Está claro que tenemos aquí un modelo que se repite y que casi puede ser formulado en términos de ley: en el caso de un Estado terrorista con el que la administración desea mantener una «vinculación constructiva», las cosas están en orden y mejoran; pero cuando este régimen es derrocado, su historial se deteriora *ex post facto* y su imagen es muy desfavorable con el régimen humanitario y sensible instaurado en el poder. Se trata de un curioso modelo de idénticas disculpas para cada sucesor de un terrorista, y de denigración *ex post* del derrocado. O sea, de un procedimiento, orwelliano que la prensa occidental asocia con los estados totalitarios, pero que sucede aquí, en nuestra casa, y que sólo puede triunfar con la colaboración de los medios de comunicación. Éstos deben estar dispuestos a minimizar o a ignorar los asesinatos a gran escala que suceden en Guatemala. En este contexto las disculpas consecutivas, las mentiras en defensa de cada asesino y la inconcebible hipocresía apenas resultan dignas de mención.

Dado el papel de los Estados Unidos en los orígenes y en el mantenimiento del Estado contrainsurgente guatemalteco, y el hecho de que dicho Estado se dedica a obstaculizar el crecimiento de las organizaciones populares (a saber, «anticomunista» en la retórica orwelliana), y dada la poderosa presencia comercial estadounidense, un modelo de propaganda preveerá la falta de interés de los medios de comunicación por las víctimas «indignas» de tal gobier-

89. 1984 Human Rights Country Report del Departamento de Estado, citado en Americas Watch, *Guatemala Revisited*, p. 15.

no, y eludió ocuparse del papel de los Estados Unidos en su evolución y sus prácticas. Podemos anticipar que los informes sobre Guatemala realizados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos serán minimizados o ignorados, pese a los espectaculares datos y horripilantes historias que reúnen. Esta es una fuerte prueba para el modelo, dado que la cifra de civiles asesinados entre 1978 y 1985 pudo haber alcanzado las 100.000 personas, con un estilo cruel y macabro que recuerda al de Pol Pot. Amnistía Internacional señalaba en 1981 que:

> los cuerpos de las víctimas habían sido encontrados apilados en barrancos, amontonados en las cunetas o enterrados en fosas comunes. Cientos de ellos mostraban las huellas de la tortura y a la mayoría la muerte les había sobrevenido por estrangulamiento por el procedimiento del garrote, por asfixia con capirotes de plástico o por un tiro en la cabeza.[90]

En este caso se cumplen totalmente las expectativas del modelo de propaganda. Si observamos el cuadro 2.1, en el que se compara el tratamiento informativo que los medios de comunicación dispensaron a veintitrés víctimas religiosas en Guatemala con el que dedicaron al caso Popieluszko, veremos que sólo una de estas veintitrés víctimas aparece mencionada por su nombre en las publicaciones objeto de nuestro estudio, y que veintitrés personas juntas ocupan en el *New York Times* una veinteava parte del espacio que este periódico dedicó a Popieluszko. Por lo que se refiere al asesinato en Guatemala de un sacerdote estadounidense, el reverendo Stanley Rother, el *New York Times* publicó el 5 de agosto de 1981 una escueta referencia en la última página en el que informaba que tres hombres habían sido detenidos para interrogarles por el tiroteo. ¿Cuál fue el resultado de las detenciones? ¿Fueron juzgados esos hombres? Los lectores del *New York Times* nunca lo sabrán, y el gobierno guatemalteco no tendrá que pasar apuros ni sufrir las presiones de las preguntas de la prensa acerca de este caso o de los veintidós restantes.

Además de la escasa atención por el asesinato de los sacerdotes salvadoreños, los detalles que se dieron del caso fueron muy escue-

90. *Guatemala: A Government Program for Political Murder*, p. 5.

tos y no generaron ningún tipo de condena.[91] Los pocos artículos algo más extensos sobre el tema nunca trataron el papel del golpe de 1954 y la prolongada relación en materia de entrenamiento y de suministros de los Estados Unidos con la policía y el ejército guatemaltecos,[92] sino que invariablemente situaban los asesinatos en el marco de una guerra civil con inexplicadas atrocidades por cuenta de los extremistas de derecha y de izquierda (véase «El arzobispo Óscar Arnulfo Romero», p. 95). Un despacho de la AP publicado el 16 de mayo de 1981 en el *New York Times* recibió el titulo de «Four Guatemalans Slain in Leftist-Rightist Rivalry» (Cuatro guatemaltecos asesinados a consecuencia de la rivalidad entre derechistas e izquierdistas). El artículo, que informa del asesinato de uno de los veintitrés sacerdotes, el reverendo Carlos Gálvez Galindo, dice que: «Al parecer los ataques están relacionados con la larga lucha por el poder que mantienen izquierdistas y derechistas». Un despacho de la UPI publicado en el *New York Times* del 29 de julio de 1981 en el que se da cuenta del asesinato del reverendo Stanley Rother, relaciona también al ataque con los «extremistas de derechas», no con el gobierno guatemalteco.

Para el *Time*, Rother y sus aldeanos guatemaltecos «se habían visto apresados en medio de una guerra civil no declarada ...».[93] El *Time* no explicó jamás las raíces de esa guerra civil, ni el papel crucial de los Estados Unidos al negarse a permitir cualquier cambio social pacífico e instaurar las instituciones de contrarrevolución permanente. Sin embargo el *Time* señalaba, de manera harto inusual, que el gobierno era el responsable de la «abrumadora mayoría» de asesinatos y, aun más excepcionalmente, citaba las pruebas de Amnistía Internacional de que los escuadrones de la muerte paramilitares eran un brazo armado del gobierno. Pero el artículo no llegaba a explicar el alcance y la naturaleza de los asesinos, remitiéndose al argumento de la guerra civil. Más comprometido

91. Mientras esto es cierto casi sin excepción para los artículos periodísticos, hubo tal vez una docena de columnas de opinión en el *New York Times* y el *Washington Post*, y algunas cartas, en el período 1980-1986, que criticaron el terrorismo de Estado guatemalteco; algunas de ellas criticaban duramente la política estadounidense.

92. Algunas de las columnas de opinión citadas en la nota anterior discutían el papel de los Estados Unidos.

93. «Requiem for a Missionary», 10 de agosto de 1981.

resultaba su análisis del debate político en los Estados Unidos. Para el *Time*, «Guatemala enfrenta a la administración Reagan con uno de sus retos más difíciles en política exterior: por una parte, el gobierno es contemplado como una víctima de la insurgencia patrocinada por Cuba y por ello necesitado de la ayuda estadounidense; por otra, dicho gobierno viola claramente los derechos humanos». La dicotomía que el *Time* efectúa es un tanto desigual: la ayuda cubana es una estratagema de la guerra fría de la que jamás se han encontrado pruebas, aunque proporciona un marco de propaganda adecuado al que el Departamento de Estado suele recurrir para distraer la atención de su propio apoyo a los asesinos de masas. El *Time* equipara en tratamiento una realidad y una acusación extremadamente grave, sin citar siquiera a un solo comentarista político. El «por otra parte» es, a pesar del «claramente», una descripción bastante insuficiente. La administración Reagan optó por apoyar y disculpar regularmente a un gobierno genocida que empleaba una política de masacre para destruir una revuelta exclusivamente autóctona. El «reto» para la administración Reagan —bastante diferente al descrito por el *Time*— estaba en saber cómo *vender* su apoyo a los asesinos de masas. El *Time* puso su granito de arena con la incondicional transmisión de la afirmación de una insurgencia sustentada por Cuba que representaba un grave dilema para los políticos.

Los años de holocausto entre 1978 y 1985 dejaron tras sí una ininterrumpida afluencia de documentos elaborados por los grupos de derechos humanos que proporcionaban espectaculares pruebas de que el terrorismo de Estado en Guatemala estaba a punto de alcanzar niveles de genocidio. Muchos de esos documentos tenían un enorme potencial para educar y despertar a la opinión pública, pero, como preveía el modelo de propaganda, los medios de comunicación de los que nos ocupamos en nuestro estudio los trataron de manera que su valor informativo quedaba minimizado, al igual que su capacidad para crear y movilizar la indignación pública. De una selección de diez importantes informes sobre Guatemala procedentes de Amnistía Internacional y de Americas Watch, sólo cuatro fueron mencionados en los medios de comunicación que estudiamos.[94] Ninguno de ellos mereció ser destacado en primera página,

94. Entre estos documentos se cuentan los cuatro siguientes informes publicados por Amnesty International: *Guatemala: A Government Program of Political*

ni tampoco sirvieron como base para un editorial o para montar una campaña de prensa prolongada e indignada. El dramático informe publicado en marzo de 1985 por Amnistía Internacional, titulado *Disappearances: A Workbook* (Desapariciones: un libro de trabajo) describía el estremecedor avance del terrorismo de Estado a la manera nazi, y pasó totalmente desapercibido para nuestros medios de comunicación, al igual que el informe, también de Amnistía Internacional, de marzo de 1985 cuyo título era *«Disappearances»... under the Goverment of General Oscar Humberto Mejía Víctores* (Desaparecidos... bajo el gobierno del general Óscar Humberto Mejías Víctores), cuya divulgación hubiese interferido la descripción que estos medios de comunicación hacían de las elecciones guatemaltecas de 1984 y 1985, a las que calificaban de ejercicios de legitimación (como veremos en el siguiente capítulo). También fue ignorado el informe de 1985 de Americas Watch sobre los Grupos de Apoyo Mutuo, así como el estudio fechado en 1987 sobre los derechos humanos en Guatemala durante el primer año de Cerezo, y en la próxima sección volveremos a tratar de los Grupos de Apoyo Mutuo. En el próximo capítulo veremos también cómo los medios de comunicación informaron de la elección de Cerezo en un marco de esperanza y de optimismo, pese a la anterior experiencia electoral guatemalteca y a que el propio Cerezo había expresado sus dudas acerca de su propia capacidad para gobernar. El que los medios de comunicación hayan pasado por alto el informe de Americas Watch donde se describen los verdaderos resultados de la presidencia de Cerezo refleja su incapacidad general para hacer un seguimiento de los efectos de las elecciones en los estados clientes (como veremos en el capítulo 3 con relación a El Salvador).

Murder (febrero de 1981); *«Disappearances»: A Workbook* (1981); *Guatemala: Massive Extrajudicial Executions in Rural Areas under the Goverment of General Efraín Ríos Montt* (octubre de 1982); *«Disappearances» in Guatemala under the Government of General Óscar Humberto Mejía Víctores* (marzo de 1985). También incluimos seis estudios de Americas Watch: *Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed* (noviembre de 1982); *Guatemala Revisited: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala* (septiembre de 1985); *Little Hope: Human Rights in Guatemala, January 1984-January 1985* (febrero de 1985); *Guatemala: The Group for Mutual Support* (1985); *Civil Patrols in Guatemala* (agosto de 1986); *Human Rights in Guatemala during President Cerezo's First Year* (1987).

Hemos mencionado ya el importante estudio de Americas Watch *Guatemala Revised: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala* (Nuevo informe sobre Guatemala: De como la administración Reagan encuentra «mejoras» en derechos humanos en Guatemala) cuyo tema más chocante e impresionante es la admisión *ex post facto* por parte del Departamento de Estado de que su apología del *anterior* general no respondía a la realidad. Este esclarecedor documento no fue tenido en cuenta por los medios de comunicación que estudiamos aquí a excepción del *New York Times*, que le dedicó un espacio de siete centímetros y medio en la página 7, con el benévolo título «Rights Group Faults U.S. on Guatemala Situation» (Grupo de derechos humanos culpa a los Estados Unidos de la situación en Guatemala) (24 de septiembre de 1985). El artículo mencionaba que según dicho informe la administración se había negado a admitir los principales abusos contra los derechos humanos en Guatemala, pero se cuidó muy bien de mencionar la confesión *ex post facto* de que había mentido. Evidentemente tal cosa equivaldría a reconocer que la principal fuente de «noticias» del *New York Times* no es fidedigna en absoluto. El último párrafo del artículo, que ocupa una cuarta parte de los siete centímetros y medio dedicados al documento en cuestión, da la respuesta del Departamento de Estado al informe de Americas Watch. Para dicho departamento, Americas Watch «no es tanto una organización de derechos humanos como una organización política». La cínica hipocresía contenida en esta réplica hubiese quedado nítidamente clara si el artículo hubiese mencionado lo esencial de las pruebas de Americas Watch: que la administración no se limitaba a disculpar el terrorismo de Estado en Guatemala, sino que además demostraban que actuaba de manera deshonesta.

En su compromiso de proteger a los generales guatemaltecos en su ataque terrorista contra la población, la administración Reagan empezó a mostrar su resentimiento por las organizaciones como Amnistía Internacional y Americas Watch y en 1981 y 1982 emprendió una campaña sistemática para desacreditarlas, acusándolas de izquierdistas y de ser políticamente tendenciosas. En una carta fechada el 15 de septiembre de 1982 y dirigida a la oficina en Washington de Amnistía Internacional sobre América Latina, el subsecretario de Estado Thomas Enders atacó los informes de dichas orga-

nizaciones por su unilateralidad y defensa de la «ferocidad» y de los «ataques terroristas» de la guerrilla. Enders escribió que:

> nadie negaría la posibilidad [*sic*] de que unidades militares, contraviniendo la política marcada, se hayan visto envueltas en violaciones de los derechos humanos. Pero lo importante es que desde el 23 de marzo el gobierno de Guatemala se ha comprometido a tomar un nuevo rumbo y ha realizado progresos significativos.[95]

Esta asombrosa muestra de justificación de un ejército que estaba en el centro de los asesinatos de miles de civiles fue distribuida por toda Guatemala como un documento oficial de los Estados Unidos, y el texto en su totalidad fue publicado por la prensa guatemalteca. Americas Watch declaró:

> Consideramos que esta utilización de la carta es poco razonable en vista de los riesgos que corren los investigadores de los derechos humanos en un clima político como el de Guatemala. Para nosotros esto significa una prueba más de que el Departamento de Estado, así como el gobierno guatemalteco, admiten que no son neutrales en el conflicto que sufre ese país; el portador de malas noticias se convierte, en virtud de este razonamiento, en una parte del enemigo a la que hay que desacreditar públicamente si es posible.

Dicha organización declaró también que las principales críticas del Departamento de Estado a Americas Watch y a Amnistía Internacional no sólo no eran de recibo, sino que —y esto era lo más importante— se basaban casi totalmente en la presunta veracidad de las declaraciones del ejército guatemalteco (un tipo de credulidad que había quedado claramente de manifiesto en las declaraciones de Enders que hemos mencionado antes).

Como ya hemos visto en el capítulo primero, el gobierno es el principal productor de respuestas a las críticas, a la vez que la principal fuente de información. Este episodio de Guatemala es una importante muestra de los esfuerzos del gobierno para silenciar otras fuentes de información. Es interesante ver como el *New York Times* nunca mencionó ni criticó esta siniestra campaña, pese a que

95. Esta carta está reproducida en Americas Watch, *Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed* (noviembre de 1982).

ésta se llevaba a cabo en el contexto de una política de protección a los asesinos de masas. En el siguiente capítulo mostraremos cómo la revista *Time* colaboró en la campaña, citando sólo una vez a Americas Watch en relación a Guatemala, pero con la descalificadora explicación de que se trata de «un grupo controvertido al que con frecuencia se ha acusado de simpatizar demasiado con la izquierda» (el Departamento de Estado, en el que *Time* deposita toda su confianza, nunca se ve sometido a un adjetivo que sugiera su tendenciosidad). El 4 de diciembre de 1982 el *Washington Post* publicó en la última página un artículo de Terri Shaw sobre la carta de Enders, cuyo título especificaba las acusaciones del Departamento de Defensa: «Embassy Sees "Disinformation" on Guatemala: U.S. Report Says Rights Groups are Used» (La embajada ha observado «desinformación» sobre Guatemala: un informe estadounidense afirma que los grupos de derechos humanos están siendo utilizados). El texto del artículo corroboraba tales acusaciones, pues el autor se limitaba a repetir, sin cuestionarlas en absoluto, las declaraciones de la embajada según las cuales «nunca se pensó que el informe sería hecho público», y tampoco mencionó la amenaza que la divulgación de las acusaciones del Departamento de Estado significaba para los vigilantes de los derechos humanos. A esos grupos se les ha permitido insinuar que el Departamento de Estado trataba de desacreditarles, pero la palabra «desinformación» no se aplica jamás a las declaraciones del Departamento de Estado, y tampoco se realizó un examen serio del contenido de dichas acusaciones. Este superficial artículo puso fin a la información que los medios de comunicación que estudiamos proporcionaron acerca de la campaña del Departamento de Estado. Y el informe de Americas Watch *Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed* (Los derechos humanos en Guatemala: no se permite la neutralidad), que trataba de la campaña y de la carta de Enders, jamás fue mencionado.

2.6. Los asesinatos de miembros del Grupo de Apoyo Mutuo en Guatemala

Los organismos de vigilancia y protección de los derechos humanos tuvieron muchas dificultades para organizarse y sobrevivir en la «democracia de los escuadrones de la muerte» de El Salvador

o Guatemala. Entre octubre de 1980 y marzo de 1983, cinco funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador fueron raptados y asesinados por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el modelo de propaganda, tales asesinatos no debían despertar mucho interés en los medios de comunicación estadounidenses, presunción que quedó confirmada por la evidencia. A modo de ejemplo, podemos comparar la gran cifra de cuatro artículos en la última página que el *New York Times* publicó sobre estos cinco asesinatos,[96] con los treinta y cinco artículos que este periódico dedicó a Natan Sharansky, activista soviético en favor de los derechos humanos. Por supuesto, ninguno de estos artículos estaba en la última página. La proporcionalidad de atención se ajusta perfectamente al análisis general que el modelo de propaganda hace acerca del tratamiento en los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas.

Guatemala ha resultado aún menos hospitalaria que El Salvador para las organizaciones de derechos humanos. El arzobispo guatemalteco, monseñor Próspero Penados del Barrio, declaró en 1984 que «actualmente resulta imposible la existencia de una oficina de derechos humanos en Guatemala».[97] La institucionalización de las «desapariciones» en Guatemala dio comienzo a mediados de la década de los sesenta, y alcanzó finalmente unos niveles inigualados en el hemisferio occidental, con una cifra que rondaba las 40.000 personas.[98] Los grupos de protesta que se constituyeron para buscar información y una solución legal fueron repetidamente puestos fuera de circulación mediante los crímenes organizados por el Estado. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) buscó información de los desaparecidos en los juzgados, durante un breve período de apertura en 1966, pero después del sensacional descubrimiento de que la policía había asesinado a veintiocho izquierdistas, el sistema se volvió a cerrar. Como señala McClintock, «durante los años

96. Para una discusión completa sobre el último de estos asesinatos, el de Marianela García Villas, el 15 de marzo de 1983, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections: U.S.-Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam, and El Salvador*, South End Press, Boston, 1984, pp. 10-11.

97. Citado en Americas Watch, *Guatemala: The Group for Mutual Support, 1984-1985*, p. 2 (a partir de ahora, AW, *Mutual Support*).

98. Council of Hemispheric Affairs, *News and Analysis* (26 de abril de 1986), p. 222.

siguientes muchos líderes y estudiantes de derecho de la AEU fueron perseguidos y asesinados».[99] En los años setenta, la AEU organizó un Comité de Familiares de los Desaparecidos, cuya oficina principal se encontraba en la Universidad Nacional de San Carlos. Americas Watch informó que «dicho Comité se disolvió después de que el 10 de marzo de 1974 un policía vestido de paisano entrase en el centro de ayuda legal de la Universidad y matase de un disparo a su principal organizador y director del centro, el abogado Edmundo Guerra Theilheimer».[100] Otro de estos grupos, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, fue creado a finales de los setenta por Irma Flaquer, psicóloga y periodista. Su hijo fue asesinado y ella misma «desapareció» el 16 de octubre de 1980.

Según el Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico, sólo en el año 1984 en Guatemala se alcanzó un promedio de cien asesinatos políticos y más de cuarenta desapariciones al mes.[101] Seguramente estas cifras están por debajo de la realidad, ya que sólo se contabilizan y se da publicidad a las desapariciones que tienen lugar en Guatemala capital y sus alrededores. El mayor número de asesinatos y desapariciones se produce entre las familias rurales e indias que no disponen de recursos para quejarse y están más expuestas a las represalias.

En este contexto de asesinatos, temores y con el anterior fracaso de todas las organizaciones de derechos humanos se formó en junio de 1984 el Grupo de Apoyo Mutuo o GAM. Éste era un producto de la desesperación de la gente que buscaba información del paradero de sus parientes desaparecidos y estaba dispuesta a correr graves riesgos para conseguirla. Muchos de ellos habían padecido un inmenso dolor en frustrantes búsquedas y pesquisas que en ningún caso habían dado fruto. En Guatemala no existe ningún tipo de satisfacción legal y no se puede obtener nada de provecho con interpelaciones o demandas a la policía o a los juzgados. El señor Hicho, que buscaba a su hija desaparecida, vio unos cien cadáveres durante los meses que acudió al depósito de cadáveres, de los cuales «de un 70 a un 75 por 100 de ellos habían sido

99. McClintock, *American Connection*, vol. 2, p. 83.

100. AW, *Mutual Support*, p. 3.

101. «Bitter and Cruel», Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico (octubre de 1984).

torturados».[102] Otros emprendieron en su búsqueda diferentes y angustiosos caminos. A principios de 1985 un oficial del ejército dijo a una mujer que su marido aún vivía y que podía ocuparse de que regresara si ella se acostaba con él. Ella accedió y su marido apareció muerto poco tiempo después.[103]

La intención de los organizadores del GAM era la de lograr más fuerza mediante las acciones colectivas, utilizarla para recoger información y lograr una respuesta legal a base de suplicatorios y de publicidad. En parte su esperanza de supervivencia y de éxito residía en el hecho de que el jefe del Estado, Mejía Víctores, había sido calificado por la administración Reagan como otro «reformista», así como en que el equipo Reagan-Mejía Víctores trataba de establecer una «imagen» apropiada para inducir al Congreso a «aflojar el cierre del monedero». El GAM también contaba con el apoyo en Guatemala del arzobispo Penados del Barrio y de otros grupos eclesiásticos y seglares, si bien muy pocos se sentían capaces de levantar la voz en un sistema de libre terror de Estado. A nivel internacional el GAM recibió significativos apoyos políticos de partidos políticos humanitarios y progresistas y de los grupos de derechos humanos.

En junio de 1984 treinta miembros del recién organizado GAM celebraron una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, en la que denunciaron las desapariciones e hicieron un llamamiento al gobierno para que «interviniese inmediatamente para encontrar a nuestros seres queridos». A finales de junio y de nuevo a principios de agosto se celebraron misas en la catedral metropolitana para expresar la preocupación por el destino de los desaparecidos. Las primeras misas fueron oficiadas por el rector de la universidad, Meyer Maldonado, y por el arzobispo Penados. Mil personas asistieron a la misa de agosto. El día 1 de ese mismo mes el grupo se entrevistó por primera vez con el general Mejía Víctores, quien en aquella ocasión les prometió investigar las desapariciones. Los días 8 y 9 de agosto el GAM publicó anuncios en los principales periódicos haciendo públicas tales promesas. Posteriormente el grupo empezó a llamar la atención acerca del incumplimiento gubernamental de las promesas efectuadas el primero de agosto, y poco a poco empren-

102. AW, *Mutual Support*, p. 8.
103. *Op. cit.*, p. 7.

dió otras acciones. En octubre de 1984 promovió una marcha y una misa en la catedral por los desaparecidos, que fue la primera manifestación masiva en Guatemala desde el 1 de mayo de 1980 (los participantes fueron secuestrados por las calles y se estima que cien de ellos fueron asesinados o desaparecieron).

La organización continuó creciendo: las pocas familias iniciales se habían convertido en 225 en noviembre de 1984; en 1.300 en la primavera de 1986. La mayoría de sus miembros eran mujeres, entre las que se encontraban muchas campesinas de las zonas rurales. Eran persistentes. Tras las peticiones, interpelaciones, mítines y marchas iniciales empezaron a efectuar acusaciones explícitas y a «acusar públicamente a elementos de las fuerzas de seguridad nacional como directamente responsables de la captura y posterior desaparición de nuestros familiares».[104] Pidieron una investigación, una relación y, sobre todo, justicia. Apelaron a la asamblea constituyente e iniciaron protestas regulares en el centro de Ciudad de Guatemala, golpeando ollas y sartenes y, algunas veces, ocuparon edificos pacíficamente.

Como era de esperar no se hizo nada en respuesta a las peticiones del GAM. La asamblea no tenía poderes, pero por otra parte estaba demasiado asustada como para emitir una declaración de apoyo. Los militares en el gobierno jugaron con el GAM. En público y ante la prensa, Mejía Víctores decía «no quiero eludir responsabilidades y hay que hacer algo al respecto». Pero cuando la prensa no estaba presente sus palabras eran otras: «parece como si me estuviesen acusando a mí, y nosotros no los tenemos [los desaparecidos]». «Sí los tienen», replicó el GAM. «No los tenemos», repitió él.[105] Los militares gobernantes empezaron a sentirse molestos; se intensificaron las amenazas telefónicas, las cartas de advertencia y la vigilancia explícita. Dos días después de la entrevista entre Mejía Víctores y el GAM, aparecieron los cuerpos torturados de dos desaparecidos relacionados con miembros del grupo. Uno de ellos enfrente de su casa, con los ojos arrancados de las órbitas y con la cara apenas reconocible.

En una entrevista de televisión emitida el 14 de marzo de 1985,

104. Carta abierta del 15 de noviembre de 1984, citada en AW, *Mutual Support*, p. 24.

105. AW, *Mutual Support*, pp. 24-25.

Mejía Víctores afirmó que el GAM «estaba siendo utilizado por la subversión, porque si tienen problemas estamos buscando soluciones y les hemos dado todos los medios [para resolver esos problemas]».[106] A esta entrevista siguieron un torrente de titulares en los periódicos, haciendo hincapié en las advertencias y afirmaciones del gobierno de que el GAM estaba manipulado por fuerzas subversivas. A mediados de marzo el general Mejía Víctores compareció de nuevo ante las cámaras de televisión: a la pregunta ¿qué acción piensa emprender el gobierno contra el GAM?, respondió «ya lo sabrán cuando lo vean».[107]

El 30 de marzo de 1985 el dirigente del GAM Héctor Gómez Calito fue secuestrado, torturado y asesinado. (Los seis policías que lo habían ido a buscar fueron asesinados a su vez pocos días después de la muerte de Gómez.)[108] Su vientre y otras partes de su cuerpo habían sido quemadas con un soplete, le habían pegado con tanta fuerza en la cara que sus labios estaban reventados, y su lengua estaba cortada. Después, el 4 de abril, otra dirigente del GAM, María Rosario Godoy de Cuevas, su hermano de veintidós años de edad y su hijo de dos años fueron detenidos, torturados y asesinados. Los pechos de María Rosario Godoy mostraban las huellas de los golpes y su ropa interior estaba ensangrentada. A su hijo de dos años le habían arrancado las uñas de los dedos.

Si nos atenemos a lo periodístico de la noticia, los asesinatos de dos dirigentes del GAM, junto al del hermano y al hijo de uno de ellos, hubiera debido merecer una atención de primer orden. Su valentía era excepcional, la maldad a la que hacían frente era extraordinaria, la justicia de su empeño era incuestionable, y las muertes que sufrieron eran más salvajes aún que la que sufrió Popieluszko. Pero lo más importante de todo es que se trataba de crímenes cuya responsabilidad recaía bastante sobre nosotros, puesto que habían sido perpetrados por clientes que dependían de nuestro apoyo, de manera que su desenmascaramiento y nuestras presiones hubiesen tenido un efecto significativo en la salvaguarda de los

106. *Op. cit.*, p. 36. Por supuesto, esto era mentira. Mejía Vítores se refiere a un cuerpo de investigación establecido por él mismo, enteramente regido por personal del gobierno, incluido el ministro de Defensa, y eso, predeciblemente, dio al gobierno una patente de sanidad sin tacha.

107. *Op. cit.*, p. 38.

108. *Op. cit.*, p. 41.

derechos humanos. Por otra parte, la administración Reagan trataba afanosamente de establecer unas relaciones más cordiales y de mayor apoyo al régimen militar guatemalteco y, como hemos descrito antes, tuvo que batallar mucho para poder dar una imagen favorable del mismo. Pero un modelo de propaganda prevé que incluso esos dramáticos y horripilantes crímenes sean tratados por los medios de comunicación en un tono menor, y que pronto quedarán en el olvido. Al contrario de lo que sucedió con Popieluszko, no suscitarán interés ni indignación capaz de soliviantar a la opinión pública (y de entorpecer los planes de la administración). La historia ha demostrado cuán acertadas son esas previsiones.

El cuadro 2.3 compara la información que los medios dedicaron al caso Popieluszko con la de los asesinatos de los dirigentes del GAM, y en él queda palpablemente claro que el tratamiento es radicalmente diferente en los dos casos. Los asesinatos de los dirigentes del GAM nunca fueron «noticia» para el *Time, Newsweek o* el *CBS News.* El *New York Times* nunca consideró que esos asesinatos fuesen merecedores de la portada o de un comentario editorial, y podemos ver que la información que dio fue muy escueta. El primer informe del cuádruple asesinato apareció el 7 de abril de 1985, en un pequeño suelto en la página cinco del periódico en la que se mencionaba que el cadáver de María Rosario Godoy de Cuevas había sido hallado en su coche, en un barranco, junto a los cadáveres de su hermano y de su hijo pequeño. Ni en esa noticia ni en los artículos que siguieron el *New York Times* mencionó detalle alguno acerca del estado en que se encontraron los cadáveres, ni que el niño de dos años tuviese las uñas arrancadas.[109]

Por lo demás, los artículos del *New York Times*, escritos todos ellos por Stephen Kinzer, utilizaron generalmente un esquema plagado de disculpas. Es decir, no hicieron hincapié en los asesinatos —quiénes eran las víctimas, detalles de la violencia cometida contra ellas, quién los cometió, por qué— y en las estructuras institucionales y las raíces de los asesinatos organizados de los que obviamente éstos formaban parte. En el caso Popieluszko, estos *eran* los temas.

109. Deben tenerse en cuenta dos excepciones muy concisas: el 13 de abril, un artículo sobre el caso menciona que Gómez fue torturado; y uno del 19 de abril señala que le cortaron la lengua. No se proporcionó absolutamente ningún detalle acerca de los asesinatos de Godoy de Cuevas, su hermano y su hijo.

CUADRO 2.3

Cobertura informativa de los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas. 2: El asesinato de un sacerdote polaco frente al asesinato de dos funcionarios del Grupo de Apoyo Mutuo guatemalteco

	NEW YORK TIMES								*TIME* y *NEWSWEEK*				*CBS NEWS*			
	Artículos[1]		Medición en pulgadas		Artículos en portada		Editoriales		Artículos[1]		Medición en pulgadas		N.° de la programas informativos		N.° de programas informativos nocturnos	
	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1	N.°	% de la línea 1
Víctimas																
1. Jerzy Popieluszko, asesinado el 19 de octubre de 1984	78	(100)	1.183,0	(100)	10	(100)	3	(100)	16	(100)	313,0	(100)	46	(100)	23	(100)
2. Héctor Orlando Gómez y María del Rosario Godoy de Cuevas, asesinados entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 1985 (junto a su hijo, que fue torturado).	5	(6,4)	80,0	(6,8)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. La cobertura informativa se refiere a un período de 18 meses a partir del primer informe sobre la desaparición o asesinato de la víctima.

Kinzer dijo poco o nada de los asesinatos de los miembros del GAM, y muy poco acerca de las víctimas y de las experiencias que les habían hecho acercarse a ese grupo, así como de la cuestión de quién lo hizo y qué se estaba haciendo (o no) para llevar a los asesinos ante la justicia. Kinzer daba por hecho que los asesinos habían sido detenidos por agentes del Estado, aunque no lo afirmó explícitamente, ni comentó los antecedentes de la cuestión ni dio ningún argumento que permitiese valorar el caso. Kinzer contemplaba el asunto de manera «objetiva», e hizo algunas breves y retóricas referencias a los supervivientes del GAM, que quedaron contrarrestadas por las referencias a los generales: éstos habían aprobado la formación del GAM (una ambigua verdad a medias), habían nombrado un comité investigador que «no había encontrado ninguna prueba de la existencia en Guatemala de centros de detención secretos» (sin mencionar para nada la composición del comité, ninguna prueba en contra, ni tampoco los temas que éste había podido pasar por alto, como los desaparecidos que habían sido asesinados). Los generales rechazaban también cualquier responsabilidad en el asesinato de Godoy, su hermano y su hijo, que según afirmaron habían sido víctimas de un accidente de coche. Si Kinzer hubiera dado algún detalle de las heridas que presentaban las víctimas, esta mentira hubiese quedado al descubierto y las demás preguntas se hubiesen planteado por añadidura.

Artículo tras artículo Kinzer repetía que el gobierno de Mejía Víctores había prometido que en breve se volvería a instaurar un gobierno de civiles, lo cual ayudaba a distraer la atención de los asesinatos que se sucedían y de las causas de éstos, así como de los comentarios sobre los asesinatos de los miembros del GAM. Tampoco nos decía nada de lo que significaba un «gobierno civil» en un Estado terrorista en el que, como sabía muy bien, los auténticos gobernantes serían las mismas fuerzas militares.[110] En el caso Popieluszko, una vez establecido que la policía había cometido el asesinato, los medios de comunicación dedicaron abundante espacio acerca del aparato policial y sus métodos, así como a prestar aten-

110. Tal y como veremos en el próximo capítulo, el nuevo gobierno civil no hizo nada para terminar con los ataques del ejército contra la población civil; pero tal como cabía esperar, el optimismo de la prensa ante la promesa de una nueva administración civil no profundizó en la cuestión con informes sobre lo que ocurría en realidad.

ción a la responsabilidad de las personalidades de alto nivel en el asesinato. Kinzer no se ocupó en absoluto de estas cuestiones. La estructura de la máquina asesina guatemalteca y su forma de actuar hubiera sido una buena historia, y se podían conseguir muchos detalles acerca de sus operaciones, pero tal cosa no se ajustaba a la agenda del gobierno ni al formato del *New York Times*. De igual manera se ignoró el papel jugado por Mejía Víctores en el asesinato de los líderes del GAM —recordemos sus advertencias inmediatamente antes de que se cometieran los asesinatos y consideremos su prácticamente ilimitado y discrecional poder para asesinar o proteger a los ciudadanos—. Pero una vez más las vinculaciones de las altas esferas cuando se trata de víctimas indignas no son algo que al modelo de propaganda le interese comentar. Kinzer realizó un buen trabajo al hacer que los asesinatos de los miembros del GAM pareciesen algo natural dada la situación, lamentable pero inevitable, parte de la compleja herencia de un país agitado; algo que presumiblemente quedaría resuelto cuando el nuevo gobierno de civiles asumiese el poder.

En un intento de conseguir apoyo exterior, dos de los dirigentes del GAM que quedaban, Nineth de García y Herlindo Hideo de Aquino, viajaron a Europa en marzo y abril de 1986, tras la toma de posesión del presidente civil electo, el democratacristiano Vinicio Cerezo. Uno de sus mensajes más importantes era que los asesinatos y las desapariciones no habían quedado abolidos durante los tres primeros meses de la presidencia de Cerezo, y que los escuadrones de la muerte habían reaparecido de nuevo y actuaban en Ciudad de Guatemala. Por problemas de salud, Nineth de García anuló su visita a Washington D.C., y voló directamente de Europa a Chicago, donde estaba previsto que recibiese la llave de la ciudad de manos de su alcalde, Harold Washington. Sin embargo, al llegar a las aduanas de Chicago los funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización la registraron, la interrogaron y la acosaron durante dos horas, y uno de los funcionarios la llamó subversiva y comunista. Asimismo confiscaron las publicaciones que llevaba y la amenazaron con deportarla, pese a la prevista brevedad de su estancia y a que su visado estaba en vigor. Esta intimidación surtió efecto y Nineth de García voló directamente a Guatemala. Un amigo acudió al banquete en su lugar para aceptar la llave ofrecida por el alcalde Washington.

Este incidente es bastante revelador. No es probable que Sharansky o Walesa hubiesen recibido este trato por parte del Servicio de Inmigración y Naturalización, pero si por casualidad tal cosa hubiese ocurrido, las protestas de la prensa habrían sido enormes.[111] Cuando partidarios del GAM celebraron en Chicago una rueda de prensa para protestar por este ultraje, los medios de comunicación más importantes no acudieron, y ni las notas de prensa ni la carta sobre el tema de un grupo del Congreso y firmada por el senador Patrick Moynihan pudieron romper el silencio. La convergencia entre la política de la administración Reagan para Guatemala y las prioridades de los medios de comunicación fue total. (Según dos de los organizadores de la conferencia de prensa le habían dado toda la información relativa al acto a Steve Greenhouse, el periodista del *New York Times* en Chicago, pero dicho periódico no publicó ni una sola palabra sobre el tema.)

Una nota de prensa del ejército guatemalteco fechada el 17 de septiembre de 1986 acusaba al GAM de dirigir

> ... una funesta campaña de falsedades ... insultos e insolencias dirigidas a la institución militar que supera [los límites] de la libertad y la tolerancia debidas a la libertad de expresión. El ejército no puede permitir la insidia y la truculencia de las maniobras del GAM ... de este intento que compromete a nivel internacional la imagen democrática de Guatemala.[112]

Aunque amenazas muy similares a estas precedieron el asesinato de los dos dirigentes del GAM en marzo y abril de 1984, los medios de comunicación estadounidenses ignoraron totalmente esta nueva información —pese a los tenaces esfuerzos del GAM, de la Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala, y de sus aliados para darle publicidad—. Como en el pasado, la indignidad de estas víctimas continuó siendo un ingrediente esencial para que el ejército guatemalteco conservase su libertad para asesinar.

111. Tal como hemos dicho antes, la prensa estadounidense ignoró por completo la negativa de la administración de permitir venir a hablar a los Estados Unidos a una de las «Madres de los Desaparecidos».

112. Esta nota de prensa fue presentada en un memorándum de «Acción Urgente» de la Comisión pro Derechos Humanos en Guatemala/EE.UU., fechada el 3 de octubre de 1986.

3. ELECCIONES LEGITIMADORAS FRENTE A ELECCIONES IRRELEVANTES EN EL TERCER MUNDO: EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA

Las elecciones en países del Tercer Mundo representan un excelente banco de pruebas para un modelo de propaganda. Algunas de estas elecciones se celebran en estados clientes amigos para legitimar a sus gobernantes y a sus regímenes, mientras que otras se celebran en países enemigos o censurables con objeto de legitimar *sus* sistemas políticos. Esta dicotomía natural se ve reforzada por el hecho de que las elecciones en los estados clientes y amigos se celebran frecuentemente bajo el patrocinio de los Estados Unidos y con amplio apoyo de este país tanto en las cuestiones organizativas como de relaciones públicas. Así, en la República Dominicana en 1966 y periódicamente a partir de entonces, los Estados Unidos organizan las que se ha dado en llamar «elecciones demostrativas» en sus estados clientes; es decir, comicios cuya función primordial es convencer a la población estadounidense que la intervención tenía buenos propósitos, que los habitantes del país invadido y ocupado aprueban la intrusión, y que se ofrece a éstos una elección democrática.[1]

Por tanto, las elecciones en El Salvador de 1982 y 1984 fueron «elecciones demostrativas», así como las celebradas en Guatemala en 1984-1985 contaron con el fuerte respaldo de los Estados Unidos a fin de realzar la imagen de ese país. Por el contrario, las eleccio-

1. Véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *Demonstration Elections: U.S.-Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam and El Salvador*, South End Press, Boston, 1984, *passim*.

nes celebradas en Nicaragua en 1984 pretendían legitimar a un gobierno al que la administración Reagan se esforzaba por desestabilizar y derrocar, razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos procuró presentarlas por todos los medios bajo una perspectiva desfavorable.

Un modelo de propaganda presupone en principio que los medios de comunicación darán el punto de vista y el orden del día del Estado. Es decir, que las elecciones que gozan de beneplácito se considerarán legítimas, sea cual sea la realidad, y las que no gozan de éste se considerarán deficientes, fraudulentas y no legitimadoras; sin tener en cuenta una vez más los hechos. Lo que hace de ellas una prueba de fuego para el modelo de propaganda es que las elecciones salvadoreñas y guatemaltecas de 1982 y 1984-1985 se celebraron en una situación de grave y constante terror de Estado contra la población civil, mientras que en Nicaragua no se daba esta circunstancia. Por ende, para considerar legítimas las dos primeras elecciones y las de Nicaragua una farsa, los medios de comunicación tuvieron que utilizar distintos parámetros de evaluación; más concretamente, tuvieron que eludir el terror de Estado y otras condiciones electorales básicas en las elecciones salvadoreñas y guatemaltecas. Como veremos a continuación, los medios cumplieron estas exigencias y se plegaron a las necesidades del Estado de manera notable.

A fin de demostrar la aplicabilidad del modelo de propaganda en estos casos, describiremos primero el esquema de propaganda acerca de las elecciones que el gobierno de los Estados Unidos trató de inculcar a los medios de comunicación, para analizar a continuación las condiciones electorales básicas bajo las que estos comicios tuvieron lugar en los tres países y, finalmente, examinaremos el tratamiento que los medios de comunicación estadounidenses dispensaron a cada uno de los tres procesos electorales.

3.1. Los esquemas de propaganda de las elecciones

El gobierno de los Estados Unidos ha utilizado diversos mecanismos para dar una imagen favorable de las elecciones que patrocina, y disponiendo un orden del día de los temas que deseaba resaltar, así como de los que prefería ignorar o dejar en un segundo

plano. Un elemento central de la organización de estas elecciones demostrativas ha sido la manipulación de los símbolos y del orden del día para dar una imagen positiva de las elecciones que apoya. El gobierno patrocinador intenta asociar las elecciones con la mágica palabra «democracia», y de paso al régimen militar que respalda con el apoyo a las elecciones (y por tanto también con la democracia). Recalca por ello cuán maravilloso resulta poder celebrar unas elecciones incluso en una situación de conflicto interno; hace que aparezca como un triunfo moral el que el ejército acceda a respaldar los comicios (aunque sea a regañadientes) y a atenerse a sus resultados. La negativa de la oposición rebelde a participar en las elecciones se considera un rechazo a la democracia y una prueba de sus tendencias antidemocráticas, pese a que el auténtico *plan* de los comicios implica la exclusión de los rebeldes de las votaciones.[2] El gobierno patrocinador se vale también de cualquier declaración de los rebeldes que exhorte a la abstención del proceso o amenace con dar al traste con las elecciones. Estas declaraciones se utilizan para transformar los comicios en una dramática lucha entre, por una parte, el «renacido» ejército democrático y la gente que lucha por votar en pro de la «paz», y, por la otra, los rebeldes que se oponen a la democracia, a la paz, y al derecho al voto. Por tanto, el espectacular desenlace de las elecciones radica en *la participación electoral*, con la que se mide la capacidad de las fuerzas de la democracia y de la paz (el ejército) para superar las amenazas de los rebeldes.

Se envían observadores oficiales al escenario de las elecciones para asegurar su éxito por lo que se refiere a las relaciones públicas. En teoría, la misión de estos observadores es comprobar que las elecciones «se ajustan a derecho». Sin embargo, su cometido real es el de proporcionar la *apariencia* de corrección y limpieza, centrándose en el orden del día del gobierno y canalizando la atención de

2. En el caso de las elecciones salvadoreñas de 1982 y 1984, el gobierno confió en los medios de comunicación para quitar importancia no sólo a este plan, sino también al hecho de que los rebeldes eran conducidos a la rebelión por décadas de rechazo de toda opción democrática por parte del ejército, y que en cualquier caso los rebeldes no podrían haber participado en las elecciones porque habrían corrido serio peligro de ser asesinados: los cinco líderes de la oposición política de El Salvador fueron torturados, asesinados y mutilados en San Salvador en noviembre de 1980.

la prensa hacia las fuentes de información dignas de crédito.[3] Estos observadores dan testimonio de la limpieza de las elecciones en virtud de las largas filas de votantes, sus caras sonrientes, la ausencia de incidentes o disturbios ante sus ojos y las garantías y el entusiasmo de los funcionarios de los estados clientes de los Estados Unidos.[4] Estas superficialidades son totalmente coherentes con el fraude organizado. La corrección y limpieza de unas elecciones depende fundamentalmente de las condiciones establecidas previamente, que son prácticamente imposibles de determinar durante los recorridos de estos observadores oficiales, breves y totalmente programados de antemano. Además, cuando se trata de elecciones patrocinadas estos observadores no suelen formular las preguntas verdaderamente importantes.[5] Realizan a la perfección su tarea de relaciones públicas porque el gobierno elige a sus observadores entre las personas que apoyan firmemente sus propósitos y se cuida de realzar su cometido ante la prensa, que les dispensa una respetuosa atención.[6]

3. Tal como señalamos en el capítulo 1, el gobierno y otros grupos de poder intentan monopolizar la atención de los medios de comunicación no sólo inundándolos con su propia propaganda sino también proporcionando auténticos «expertos» de confianza para ratificar esta propaganda.

4. Para un ejemplo modelo del sesgo e insensatez de los observadores, véanse en el apéndice 1 [pp. 309-312 de la edición inglesa, no reproducido aquí] las conclusiones de un grupo de funcionarios-observadores estadounidenses en las elecciones guatemaltecas del 1 de julio de 1984.

5. «La delegación observadora tenía una misión muy simple: evaluar la legitimidad y la honestidad de la votación, del recuento de votos y del anuncio público de los resultados finales de las elecciones salvadoreñas» (senadora Nancy Kassenbaum, *Report of the U.S. Official Observer Mission to the El Salvador Constituent Assembly Elections of March 28, 1982*, Informe al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 97 Congreso, 2.ª sesión, p. 2. Este orden del día no incluye consideraciones sobre ninguna de las condiciones previas —como la libertad de expresión y la ausencia del terrorismo de Estado— que determinan anticipadamente si unas elecciones pueden ser significativas. Véase el texto *infra*.

6. El *New York Times* incluso permitió a los observadores derechistas de Freedom House que dominaran la información sobre las elecciones preparadas por Ian Smith en Rodesia en 1979 (artículos del 22 de abril y del 11 de mayo de 1979). Aunque una brutal guerra civil hizo estragos y los grupos de rebeldes negros estaban excluidos de la votación, Freedom House consideró que fueron unas elecciones legítimas. Un año después, en las nuevas elecciones celebradas bajo los auspicios del gobierno británico, el candidato negro patrocinado por Ian Smith, que había obtenido un 65 por 100 de los votos en las elecciones «legítimas», sólo obtuvo el 8 por

Para el gobierno, cuando se trata de elecciones bajo su patrocinio, están «fuera del orden del día» todos los parámetros básicos que hacen que unos comicios tengan sentido o no con anterioridad al comportamiento que tiene lugar el día de la votación. Estos parámetros incluyen: 1) libertad de expresión y de reunión; 2) libertad de prensa; 3) libertad de organización y mantenimiento de grupos intermedios económicos, sociales y políticos (tales como sindicatos, organizaciones de campesinos, clubs políticos, asociaciones de estudiantes y profesores, etc.); 4) libertad para constituir partidos políticos, organizar a sus miembros, presentar candidatos y realizar campañas electorales sin temor a sufrir una violencia extrema; y 5) la ausencia de terror de Estado y de un clima de temor entre la población. También están «fuera del orden del día» las medidas coercitivas aplicadas el día de la votación, que pueden explicar la afluencia de votantes en términos diferentes a la devoción por el ejército y sus planes, medidas entre las que se cuentan la exigencia legal del voto, o amenazas (explícitas o implícitas) en caso de *no* votar. Otras cuestiones que deben quedar en un segundo plano de acuerdo con el modelo de propaganda es el papel que juega el gobierno de los Estados Unidos en la organización y financiación de los comicios, la campaña interna orquestada para obtener el voto, el fraude sin ambages, y las limitaciones y amenazas a los periodistas que cubren las elecciones.

Otro tema que no consta en el orden del día del gobierno es el *propósito* de las elecciones. Si van dirigidas a influir en la población estadounidense, dar a conocer tal propósito podría levantar sospechas con respecto a su autenticidad. En el caso de las elecciones celebradas en Vietnam el año 1967 y las de El Salvador en 1982 y 1984, el propósito no era tan sólo apaciguar a la población del país promotor, sino también engañarla con respecto a los fines buscados. En ambos casos se daba a entender que las elecciones contribuirían a una resolución pacífica del conflicto, cuando el objetivo real era intensificar la guerra. Ninguna persona que propusiese una opción pacífica podía presentarse como un candidato serio en Vietnam en

---

100, mientras que los rebeldes negros excluidos en aquella ocasión consiguieron una mayoría aplastante. La Freedom House consideró que las segundas elecciones eran dudosas. Véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, apéndice 1, «Freedom House Observers in Zimbabwe, Rodhesia and El Salvador».

1967;[7] y, como describiremos a continuación, en El Salvador no había ningún candidato en favor de la paz ni en 1982 ni en 1984, pese a que los sondeos electorales y los periodistas continuaban afirmando que la paz era la preocupación fundamental del electorado. Esto pone en evidencia lo fraudulento de dichas elecciones y la necesidad de que permaneciesen ocultas las intenciones del país patrocinador.

Cuando se trata de elecciones que se celebran en países enemigos o censurables, el orden del día del gobierno de los Estados Unidos cambia radicalmente. Las elecciones ya no son sinónimo de democracia, y los funcionarios estadounidenses no se maravillan porque los comicios tengan lugar en condiciones adversas. No elogian al ejército por su apoyo a las elecciones y su disposición a atenerse a los resultados. Por el contrario, la ventaja que el partido dominante obtiene del control y del apoyo del ejército se presenta en este caso como algo que compromete la integridad del proceso electoral. El boicot de los rebeldes ya no es una prueba de que la oposición rechaza la democracia, ni tampoco el número de votantes es el desenlace espectacular de la lucha entre el ejército democrático y la oposición rebelde. *En este* caso se señalan las motivaciones ocultas de quienes organizan las elecciones, que intentan autolegitimarse mediante un astuto artificio: las supuestas «elecciones».

Y aún es más importante la modificación de los factores relevantes a tener en cuenta. La atención, lejos de centrarse en aspectos superficiales tales como las largas hileras y las caras sonrientes de los votantes, la simple mecánica del día de la votación, o la personalidad de los candidatos, se centra en los parámetros básicos que estaban fuera del orden del día en elecciones patrocinadas. Como señalaba el Secretario de Estado Shultz, «lo importante, de producirse un proceso electoral, es no observarlo sólo en el momento en que la gente vota, sino que hay que examinar todos los aspectos preliminares que hacen que unas elecciones tengan sentido». Especificando más el tema, Shultz mencionó explícitamente que para que unas elecciones sean significativas se debe permitir que «las formaciones políticas rivales» «se organicen y tengan acceso a la población, derecho de reunión y acceso a los medios de comunica-

7. Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 71-72.

ción».[8] Shultz efectuó estas consideraciones a propósito de las elecciones *nicaragüenses* de 1984. Ningún congresista o comentarista de los medios de comunicación se preguntó si esos criterios podían aplicarse también a las elecciones salvadoreñas o guatemaltecas programadas para ese mismo año.

En resumen, el gobierno utiliza un sistema casi perfecto de doble pensamiento a la manera de Orwell: olvida un criterio «que se ha convertido en poco conveniente y, cuando lo vuelve a necesitar ... lo rescata del olvido durante el tiempo preciso».[9] Llega incluso a reconocer tal cosa: un alto funcionario estadounidense comentó a los miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) que actuaban como observadores en las elecciones nicaragüenses:

> Los Estados Unidos no están obligados a aplicar los mismos parámetros a la hora de juzgar a un país cuyo gobierno le es manifiestamente hostil que cuando se trata de un país como el Salvador, que no lo es. Esta gente [los sandinistas] pueden provocar una situación en América Central que podría convertirse en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esto nos permite modificar nuestros criterios.[10]

Pero, así como un gobierno puede emplear este escandaloso doble rasero, aquellos medios de comunicación que se exijan unos niveles mínimos de objetividad y que no formen parte del sistema de propaganda deberían utilizar el mismo rasero para todos. La cuestión es: Los medios de comunicación de los Estados Unidos, ¿utilizaron el mismo parámetro a la hora de analizar las elecciones en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, o siguieron el orden del día de su gobierno a fin de dar una buena imagen de las elecciones salvadoreñas y guatemaltecas y denigrar las celebradas en Nicaragua?

8. Philip Taubman, «Shultz Criticizes Nicaragua Delay», *New York Times* (6 de febrero de 1984); *Security and Development Assistance*, Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 98 Congreso, 2.ª sesión, 22 de febrero de 1984, p. 83.

9. George Orwell, *1984*, Signet, Nueva York, 1950, p. 163.

10. «The Electoral Process in Nicaragua: Domestic and International Influences», informe de la Delegación de la LASA para observar las elecciones generales de Nicaragua del 4 de noviembre de 1984, Latin American Studies Association, 19 de noviembre de 1984, p. 32 (a partir de ahora, Informe LASA).

3.2. Condiciones electorales básicas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, de 1982 a 1985

Estos tres países, en los que se celebraron elecciones entre los años 1982 y 1985, estaban inmersos en un grave conflicto: Nicaragua estaba sometida a las constantes incursiones fronterizas de la contra, organizada y apoyada por los Estados Unidos. El Salvador en medio de una situación peculiar, mezcla de conflicto civil y de guerra de contrainsurgencia organizada y financiada desde el exterior (Estados Unidos). Guatemala, como ya hemos comentado anteriormente, se había convertido en un Estado contrainsurgente, en guerra permanente para mantener en su lugar a los campesinos y a la mayoría de la población indígena, con una violenta represión estructurada en el corazón de su sistema político.

Sin embargo, y pese a la característica común de conflicto permanente, las condiciones electorales eran bastante más favorables en Nicaragua que en El Salvador y Guatemala, y ello por diversas razones. En primer lugar, constituía un factor de crucial importancia el que, en los dos últimos países, el ejército estaba todavía envuelto durante la época de las elecciones en el asesinato masivo de la población civil, con un número de víctimas que alcanzaba las decenas de miles en cada país, asesinados con procedimientos que a veces evidenciaban un sadismo extremo. Nada ni remotamente parecido a esto sucedía en Nicaragua. Estos hechos, que nadie que tenga un mínimo contacto con la realidad pone en duda, establecen inmediatamente una distinción fundamental por lo que se refiere al clima electoral. En países que están sometidos al terror de una desenfrenada máquina de matar, apoyada u orquestada por una potencia extranjera, las condiciones electorales están fatalmente comprometidas de antemano, aspecto que los medios de comunicación se apresuran a señalar si se trata de países pertenecientes a la esfera de influencia de alguno de los enemigos oficiales.[11]

11. Los medios de comunicación estadounidenses condenaron con adecuada anticipación las elecciones celebradas en Polonia en enero de 1947, bajo control soviético y con la omnipresencia en el país de las fuerzas de seguridad, aunque éstas no produjeron ni de lejos la cantidad de muertes que se vieron en El Salvador y Guatemala entre 1979 y 1987. Véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 173-180.

Una nueva —y relacionada— distinción era que el gobierno sandinista en el poder era un gobierno popular, empeñado en satisfacer las necesidades de la mayoría y que por lo tanto podía *permitir* una mayor libertad de expresión y de organización. El informe de LASA sobre las elecciones nicaragüenses señala que su programa «implica la redistribución de la riqueza y de los servicios públicos. El Estado utilizará su poder para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población». La «lógica de la mayoría», prosigue el informe, conlleva también la participación de «un gran número de personas en las decisiones que afectan a sus vidas».[12] Observadores cualificados concluyeron que el gobierno nicaragüense seguía esta lógica, pese a que la prensa libre no se hizo eco de esta realidad. Tras citar la observación del Banco Mundial de que «existen muchas diferencias en el grado de preocupación que sienten los líderes políticos de los gobiernos por mejorar las condiciones de vida de la población y en estimular su participación activa en el proceso de desarollo», Diana Melrose, de la organización benéfica para el desarrollo Oxfam, declaró que «a juzgar por la experiencia que hemos adquirido en nuestra actividad en setenta y seis países en desarrollo, la firmeza del compromiso del gobierno nicaragüense es algo excepcional».[13] Por el contrario, los gobiernos de El Salvador y de Guatemala están en manos de elites que han luchado desesperadamente durante décadas para evitar las auténticas reformas que los sandinistas estaban llevando a cabo. La represión extrema era el método permanente de control de la mayoría en El Salvador y Guatemala, con el vigoroso e incesante apoyo de los Estados Unidos. La finalidad de dicha represión era mantener la apatía de la población y lograr la destrucción de las organizaciones populares que podían sentar las bases para una democracia significativa. Los sandinistas estaban empeñados en movilizar a la mayoría y en incorporarla a la vida política, algo que podían permitirse

12. Informe LASA, p. 5.

13. *Nicaragua: The Threat of a Good Example?*, Oxfam, Oxford, 1986, p. 14. La filial estadounidense de Oxfam también habla con entusiasmo del esfuerzo sandinista, declarando que «entre los cuatro países de la región donde trabaja Oxfam [Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua], sólo en Nicaragua se ha llevado a cabo un esfuerzo substancial para redistribuir la propiedad de la tierra y proporcionar servicios sanitarios, educativos y agropecuarios a las familias pobres campesinas» (*Oxfam America Special Report: Central America*, otoño de 1985).

hacer porque sus programas estaban pensados para servir a la población en general.

Un tercer factor que afectaba las condiciones electorales era que en El Salvador y en Guatemala el conflicto era interno, y la violencia contra la mayoría constituía uno de los elementos esenciales de la lucha. En Nicaragua, el conflicto tenía que ver con una agresión apoyada desde el exterior que gozaba sólo de un mínimo apoyo interno. Los sandinistas podían apelar al sentimiento nacionalista, movilizado fácilmente contra el terrorismo utilizado por los yanquis. Los gobiernos de El Salvador y Guatemala estaban muy lejos de poder hacer lo mismo; especialmente el gobierno salvadoreño temía que luchar con una reacción nacionalista negativa por la obvia dominación y manipulación extranjera (de los Estados Unidos) de sus asuntos, realidad que alcanzó su máximo nivel de absurdidad cuando Duarte, que visitó Washington a finales de 1987, se puso en ridículo ante toda Latinoamérica al apresurarse a besar la bandera estadounidense. Aunque los sandinistas castigaban con mayor severidad a los partidarios de la contra en el interior a medida que se intensificaba el conflicto, de acuerdo con las pautas normales que los Estados Unidos acostumbran a aplicar en la región, los disidentes de Nicaragua recibían un trato bastante benigno.[14] En El Salvador y en Guatemala las elites gobernantes no podían permitirse semejante tolerancia; de hecho, en esos estados se había institucionalizado la represión mediante el terrorismo a gran escala.

Paradójicamente, el cuarto factor que colaboraba a un ambiente electoral más benigno en Nicaragua era precisamente la hostilidad de los Estados Unidos y el poder de su maquinaria propagandística. Cada detención o acto de hostigamiento en Nicaragua era publicado y se transformaba en una prueba del siniestro talante del gobierno sandinista en la prensa libre de los Estados Unidos. Mientras tanto, como ya hemos descrito en el capítulo 2, los regímenes guatemalteco y salvadoreño podían dar rienda suelta a la tortura, las violaciones, las mutilaciones y los asesinatos masivos y diarios sin despertar ni remotamente una atención e indignación proporcionales, ni tampoco alguna consideración acerca de las características de ambos regímenes. En este contexto, el gobierno nicaragüense estaba

14. Véase *infra*, «Libertad de expresión y de reunión» (p. 164) y «Libertad de prensa» (p. 169).

sometido a intensas presiones para obrar con total corrección, mientras que los países satélites de Estados Unidos tenían libertad para asesinar a su antojo sin que eso les representase un elevado coste político.

Examinemos ahora brevemente cómo quedan El Salvador, Guatemala y Nicaragua si comparamos hasta qué punto cada uno de ellos cumplía las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones libres, antes de ocuparnos del tratamiento que los medios de comunicación dispensaron a estos temas.

3.2.1. *Libertad de expresión y de reunión*

En El Salvador, el derecho a la libre expresión y a la libre reunión quedó legalmente suspendido bajo la orden de estado de sitio del 7 de marzo de 1980. El decreto número 507, del 3 de diciembre de 1980, destrozaba en lo esencial el sistema judicial, permitiendo a las fuerzas armadas retener a ciudadanos sin acusación ni prueba alguna durante 180 días. Bajo esas normas, en los treinta meses anteriores a las elecciones de marzo de 1982, y hasta las elecciones de 1984, varios miles de civiles fueron capturados, encarcelados, torturados, violados y asesinados fuera de la legalidad por presuntas acciones de tendencia «subversiva». El estado de sitio fue levantado a principios de 1982 tan sólo para los seis partidos que concurrían a las elecciones, y con diez días de antelación para todos los salvadoreños, aunque la ciudadanía desgraciadamente no fue informada de ello hasta después de celebradas las elecciones, cuando ya se había restablecido de nuevo el estado de sitio.[15] La práctica de exponer cuerpos mutilados para educar a la ciudadanía quedó institucionalizada en El Salvador a principios de la década de los ochenta. En el capitulo 2 hemos descrito ya las dificultades que tuvo que arrostrar el gobierno de los Estados Unidos para conseguir que los secuaces que asesinaron a cuatro ciudadanas estadounidenses fuesen capturados, encarcelados, juzgados y declarados culpables, lo que se consiguió tras intensas presiones. La población de El Salvador no tenía ningún tipo de protección contra el terrorismo de Estado, aparte de la que le proporcionaba el ejército de la

15. Véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 119-120.

guerrilla en las zonas que están bajo su control. La amenaza de una extrema violencia estatal contra la libertad de expresión era muy acusada en El Salvador en 1982 y 1984, lo que era incompatible con unas elecciones libres.

En Guatemala sucedía otro tanto durante los años 1984, 1985 y desde bastante tiempo atrás. Las acciones de las fuerzas armadas contra los presuntos subversivos estaban totalmente fuera de la ley. Miles de personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas sin mandato judicial y sin tener la oportunidad de defenderse ante un tribunal. Como en El Salvador, la mutilación y exposición de los cuerpos torturados se convirtió en un hecho normal a finales de los setenta y principios de los ochenta.[16] Los tribunales estaban dominados por los militares, y éstos, sencillamente, no ejecutaban ni obedecían las sentencias de aquéllos si no estaban de acuerdo con las mismas: por otra parte, los jueces no eran proclives a enfrentarse con los militares, por razones de dependencia o de temor. Incluso el vizconde Colville de Culross, enviado especial de la Asamblea General de la Naciones Unidas, que había sido un destacado defensor del régimen guatemalteco, tras constatar que más de ochenta miembros de la judicatura, personal de tribunales y profesionales del derecho habían sido asesinados a principios de la década de los ochenta, y que muchos otros estaban amenazados, declaró que «estos actos dejan su huella y no se pueden paliar con rapidez».[17] Podemos señalar aquí dos ejemplos de la falta de autonomía de los tribunales: en mayo de 1983 Ricardo Sagastume Vidaure, a la sazón presidente del Tribunal Supremo, fue repentinamente cesado de su cargo por una orden militar por intentar someter a los militares a la jurisdicción del sistema legal.[18] El 19 de julio de 1984 el coronel Djalmi Domínguez, jefe de relaciones públicas del ejército, declaró

16. Véase Amnesty International, *Guatemala: A Government Program of Political Murder*, AI, Londres, 1981; Michael McClintock, *The American Connection*, vol. 2, Zed, Londres, 1985.

17. Asamblea General de las Naciones Unidas, *Report of the Economic and Social Council: Situation of Human Rights in Guatemala* (13 de noviembre de 1985), p. 15. Sobre la apología del vizconde Colville, véase Americas Watch, *Colville for the Defense: A Critique of the Reports of the U.N. Special Rapporteur for Guatemala*, febrero de 1986.

18. Comisión pro Derechos Humanos en Guatemala, «Report for the 39th General Assembly of the United Nations on the Human Rights Situation in Guatemala», Nueva York, 1984, p. 18. (De ahora en adelante, Informe CDH.)

al periódico *Prensa Libre* que el ejército no toleraría que sus miembros tuviesen que dar cuenta de sus actos ante ningún tribunal.[19]

A principios de los ochenta, tras las matanzas masivas y la destrucción de aldeas ocurrida entre 1980 y 1983, un gran número de campesinos fue destinado a las «aldeas modelo» y a otros lugares bajo el control del ejército, y más de 800.000 hombres tuvieron que enrolarse obligatoriamente en las patrullas civiles con funciones militares, bajo la estrecha vigilancia del ejército. Según el grupo parlamentario británico que visitó Guatemala en 1984,

> el sistema de patrullas civiles se ejecutaba mediante el terror, y estaba diseñado a su vez para sembrar el terror ... Las personas que hacían cualquier cosa fuera de lo corriente se convertían inmediatamente en sospechosas y eran llevadas por la patrullas al *destacamiento** del ejército. Esas personas eran interrogadas por los militares, pero muchas veces eran las propias patrullas civiles las que se encargaban de asesinar a los sospechosos.[20]

Los obispos Taylor y O'Brien, que representaban respectivamente a las Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica de Escocia y de Inglaterra-País de Gales, informaron tras su visita a Guatemala en 1984 que:

> La población civil está prácticamente bajo un control total por la opresiva presencia del ejército y la policía en todo el país, como hemos podido comprobar. Existe también una red de patrullas de defensa civil de ámbito nacional, comisarios e informadores militares y «aldeas modelo» que en algunos casos sirven como campos de internamiento para la población india de las áreas en conflicto. Gran parte de Guatemala parece un país ocupado militarmente. Uno de nuestros informantes resumió la situación diciendo que los militares habían establecido un sistema de «control estructural».[21]

19. *Op. cit.*, p. 23.

* En castellano en el original. (*N. de la t.*)

20. «Bitter and Cruel...», Informe de una misión del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico en Guatemala, octubre de 1984, p. 21.

21. Obispo Maurice Taylor y obispo James O'Brien, «Brief Report on Visit to Guatemala», 27 de octubre-3 de noviembre de 1984, citado en Americas Watch, *Little Hope: Human Rights in Guatemala, January 1984-1985*, AW, Nueva York, 1985, p. 25.

La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, tras una visita sobre el terreno en mayo de 1985, llegó también a la conclusión de que la libertad de expresión y de reunión no existía en Guatemala:

> El derecho de reunión y la libertad de asociación, considerado en los artículos 15 y 16 de la Convención Americana, están asimismo restringidos y limitados, ya que las medidas de seguridad existentes en los polos de desarrollo y la estricta supervisión de las patrullas de defensa civil inhiben a los residentes a la hora de participar en cualquier reunión o asociación social, ideológica, cultural o de otro tipo. Todas estas reuniones, cuando tienen lugar, están sometidas a la vigilancia, supervisión y control de las autoridades, de manera que no gozan de la libertad que tales derechos implican.[22]

Durante las elecciones de 1984-1985, en Guatemala se permitieron las manifestaciones públicas, notificadas con tres días de antelación y aprobadas por las autoridades militares. Sin embargo, en el contexto guatemalteco la concesión de estos derechos no tenía sentido. La delegación de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos para los Derechos Humanos y la Oficina en Washington para América Latina señalaron que fuera lo que fuese lo que las elecciones garantizasen,

> los militares y las patrullas de defensa civil y el clima de temor dificultaban a muchos guatemaltecos organizarse y reunirse. Un observador local dijo que los años de terror y opresión contra las organizaciones locales habían desmovilizado a toda la población rural: «Cuatro miembros del CUC [comunidad de campesinos] fueron asesinados sólo en esta aldea. Ahora es muy difícil organizar cualquier tipo de agrupación». Los puntos de control de carreteras de las patrullas civiles, la policía y el ejército, y la obligatoriedad de salvoconductos para los residentes de las aldeas modelo impiden el libre desplazamiento. En las zonas rurales las patrullas civiles hacen que la gente se retraiga a la hora de reunirse, pues tiene miedo de que la denuncien.[23]

22. InterAmerican Commission on Human Rights, *Civil and Legal Rights in Guatemala*, 1985, p. 156. Los polos de desarrollo son unidades organizativas establecidas por el ejército, nominalmente para fomentar el «desarrollo», pero que en realidad se utilizan como oportunos centros de control y vigilancia.

23. Asociación Internacional de Juristas para los Derechos Humanos, *The 1985 Guatemalan Elections: Will the Military Relinquish Power?*, Washington, diciembre de 1985, p. 56 (de ahora en adelante, Informe AIJDH).

Muchos observadores de las elecciones guatemaltecas han señalado que si bien las grandes cuestiones del país son la distribución y la reforma agraria y los derechos humanos, ningún candidato político planteaba o abogaba por esa reforma agraria o por la reestructuración del ejército, ni tampoco impulsaba un recuento de las decenas de miles de «desapariciones». Un asesor democratacristiano explicaba a la Asociación de Juristas que «los democratacristianos no hemos tratado estos temas porque este no es el momento de iniciar una confrontación con el ejército o con el sector privado».[24]

En resumen, y pese a la «mejora momentánea de la situación de la libertad de expresión» producida durante la campaña electoral, Guatemala no cumplía el primer requisito de unas elecciones libres. El campesinado estaba bajo la disciplina del ejército y traumatizado por las matanzas masivas y por la ausencia de cualquier vestigio de procedimiento legal, y los candidatos eran incapaces de abordar abiertamente las cuestiones fundamentales para la sociedad.

La libertad de expresión y el derecho de reunión estaban limitados en la Nicaragua de 1984 por las presiones y amenazas sociales y por un estado de sitio que se levantó unos seis meses antes de las elecciones celebradas ese mismo año. Sin embargo existían diferencias muy importantes entre las limitaciones existentes en Nicaragua y las que se daban en El Salvador y Guatemala. La más importante de ellas era que en Nicaragua el ejército y la policía no secuestraban regularmente a los presuntos subversivos, ni los torturaban y asesinaban. Los cadáveres mutilados no eran expuestos al público como parte del sistema educativo de la población. Lo que la asociación de juristas describía como «el constante y declarado terror político» en Guatemala, basado en «las numerosas y documentadas masacres de aldeas enteras», y lo que el antiguo oficial salvadoreño Leonel Gómez denominaba el estado de «temerosa pasividad» prevaleciente en El Salvador, no se daban en Nicaragua. En Nicaragua, en 1984, los disidentes podían hablar libremente sin temor a ser asesinados, y el grupo LASA señalaba que:

> cada uno de los miembros de nuestra delegación fue abordado por lo menos una vez por un ciudadano indignado mientras caminaba

24. *Op. cit.*, p. 61.

> por Managua y otras ciudades. Algunos de estos encuentros desembocaron en acaloradas discusiones entre el individuo que se había dirigido a nosotros y los transeúntes que se habían incorporado a la discusión ... esas personas no se sentían intimidadas.[25]

La libertad de reunión en Nicaragua estaba de alguna manera limitada por los hostigamientos, pero no estaba dominada por el terror de Estado, como sucedía en El Salvador y Guatemala. La delegación de LASA examinó detalladamente las acusaciones de los grupos opositores contra los sandinistas por el hostigamiento de sus reuniones, y las encontró en gran medida infundadas, concluyendo que los partidos antagonistas «podían celebrar la amplia mayoría de sus manifestaciones sin impedimentos por parte de los partidarios del FSLN ...».[26]

A nuestro entender, la primera condición básica de unas elecciones libres se cumplía parcialmente en Nicaragua, pero no se cumplía en absoluto ni en El Salvador ni en Guatemala.

3.2.2. *Libertad de prensa*

En El Salvador, los dos únicos periódicos importantes críticos con el gobierno, *La Crónica del Pueblo* y *El Independiente* —bajo ningún concepto periódicos radicales— fueron cerrados en julio de 1980 y enero de 1981 respectivamente. El primero porque su editor en jefe y dos de sus empleados fueron asesinados y mutilados por las fuerzas de seguridad; el segundo porque el ejército arrestó a su personal y destruyó sus locales. El periódico y la emisora radiofónica eclesiásticos fueron repetidamente bombardeados. Ninguna publicación o emisora que representase al grueso de la oposición podía actuar de no ser en la clandestinidad. Desde que la junta revolucionaria asumió el poder, en El Salvador fueron asesinados más de treinta periodistas. Justo antes de las elecciones de 1982 se desencadenó una intensa campaña contra la prensa. El 10 de marzo, un «escuadrón de la muerte» puso en circulación una lista con los nombres de treinta y cinco periodistas a quienes había que asesinar;

25. Informe LASA, p. 27.
26. *Op. cit.*, p. 25.

el 18 de marzo se recuperaron los cadáveres mutilados de dos periodistas holandeses.[27] Ninguno de los asesinatos de periodistas quedó «aclarado», pues se trataba fundamentalmente de asesinatos realizados bajo los auspicios del Estado.

En Guatemala, cuarenta y ocho periodistas fueron asesinados entre 1978 y 1985,[28] y muchos otros fueron raptados y amenazados. Estos asesinatos, raptos y amenazas eran el principal método de control de los medios de comunicación. Como en El Salvador, todavía no se ha detenido ni juzgado a nadie por estos crímenes, por lo que cabe considerarlos como obra del Estado o cuando menos con su aprobación. En Guatemala no existe ningún periódico o emisora de radio o televisión que exprese las opiniones de los rebeldes, la población indígena mayoritaria o las clases bajas en general. «A lo sumo, las variantes reflejan distintas formas de pensamiento estrictamente conservador.»[29] Dado el clima de extremo temor, y las amenazas para que no se pasen de la raya, incluso la prensa conservadora actúa con cautela e incurre en una continua autocensura. Todos los temas básicos que deberían someterse a debate en esta aterrorizada sociedad son cuidadosamente evitados.[30]

En Nicaragua, una vez más, no se han dado casos de asesinatos de periodistas por parte de los terroristas de Estado, ni siquiera de amenazas o de violencia personal. En 1984, la mayoría de las cincuenta y tantas emisoras de radio eran de propiedad privada, y algunas de ellas realizaban sus propios programas informativos; otros cuatro productores independientes proporcionaban programas de radio informativos sin censura previa. En 1984 adquirieron creciente importancia los programas de radio y televisión de fuentes comerciales y propagandísticas de Estados Unidos, emitidos desde Costa Rica, Honduras y otros lugares.[31] Dos de los tres periódicos del país eran de propiedad privada, uno de los cuales apoyaba al

27. Véase más información en Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 120-121.

28. «Journalists Killed and Disappeared since 1976», Committee to Protect Journalists, diciembre de 1986, pp. 6-8.

29. Council of Hemispheric Affairs y el Newspaper Guild, «A Survey of Press Freedom in Latin America, 1984-1985», Washington, 1987, p. 38.

30. Véase el Informe AIJDH, pp. 59-60.

31. Howard H. Frederick, «Electronic Penetration», en Thomas S. Walker, ed., *Reagan versus the Sandinistas*, Westview, Boulder, 1987, pp. 123 y ss.

gobierno pero era crítico con algunos programas y acciones específicas, y el otro era violentamente hostil a los sandinistas. Este último, *La Prensa*, representante de la reducida minoría ultraconservadora, que apoyaba a los contras y la invasión del país patrocinada desde el extranjero, pudo actuar durante todo el proceso electoral de 1984, si bien con alguna censura. No obstante, esta censura permitió la publicación de manifiestos de los grupos de la oposición y una carta pastoral crítica con el régimen. Jamás en El Salvador o Guatemala se ha permitido la libre publicación de un periódico semejante, ni siquiera durante un corto período de tiempo.

No cabe duda de que los medios de comunicación nicaragüenses sufren las limitaciones impuestas por el gobierno, como la censura y los periódicos controles que atentan gravemente contra la libertad de expresión.[32] Sin embargo, hay que tener en cuenta que Nicaragua está sometida a un ataque desde el exterior y en estado de guerra formal. John S. Nichols señala que bajo la Ley de Espionaje promulgada en los Estados Unidos en 1917, se prohibió la distribución por correo de más de cien publicaciones, y que centenares de personas fueron encarceladas por presunta interferencia del reclutamiento militar. Además,

> habida cuenta que los Estados Unidos gozaban de un sistema político relativamente maduro y homogéneo durante la Primera Guerra Mundial, y que no estaban particularmente amenazados por la lucha, el grado de discusión pública tolerado en Nicaragua durante los cinco primeros años de la revolución era considerable. A pesar de las afirmaciones del presidente Reagan, la IAPA y otras organizaciones según las cuales el control sobre los medios de comunicación nicaragüenses era virtualmente totalitario, la diversidad de propietarios y opiniones es inusual tratándose de un país del Tercer Mundo, especialmente si está en guerra.[33]

Nuestra conclusión es que la condición de libertad de prensa necesaria para el desarrollo de unas elecciones libres era totalmente

32. Para una descripción completa de las condiciones impuestas a los medios de comunicación, véase John Spicer Nichols, «The Media», en Thomas S. Walker, ed., *Nicaragua: The First Five Years*, Praeger, Nueva York, 1985, pp. 138-199.

33. *Op. cit.*, pp. 191-192. Para una comparación entre las condiciones de los medios de comunicación de Nicaragua y los de los Estados Unidos en tiempos de guerra y su principal Estado cliente, Israel, véase Chomsky, «U.S. Polity and Society: The Lessons of Nicaragua», en Walker, ed., *Reagan versus the Sandinistas*.

inexistente en El Salvador y en Guatemala, pero que se cumplía parcialmente en Nicaragua.

3.2.3. *Libertad de organización de grupos intermedios*

Quizás el hecho más importante en El Salvador en los dos años anteriores a las elecciones de marzo de 1982 fue la desarticulación de las organizaciones populares y no gubernamentales que podían suponer algún desafío para el ejército y la oligarquía. Como ya hemos mencionado en el capítulo 2, este era el principal empeño político de la Junta revolucionaria desde finales de 1979 en adelante; miles de dirigentes fueron asesinados y numerosas organizaciones destruidas o llevadas a la clandestinidad. El sindicato de enseñantes fue diezmado mediante centenares de asesinatos; la universidad fue ocupada, saqueada y clausurada por el ejército; las organizaciones estudiantiles y los grupos profesionales quedaron destruidos por detenciones y asesinatos, e incluso el sindicato de campesinos auspiciado por la AFL-CIO (que apoyaban al régimen) vio como cientos de sus organizadores y dirigentes eran asesinados entre octubre de 1979 y las elecciones de marzo de 1982.[34]

También en Guatemala las organizaciones intermedias como los sindicatos de campesinos y obreros, las agrupaciones de enseñantes y estudiantes y las organizaciones profesionales sufrieron constantes ataques por parte de las fuerzas armadas desde 1954. El proceso de desmantelamiento de las instituciones que amenazaban a las elites dominantes culminó a principios de los ochenta, cuando el gobierno proclamó que la «asociación ilícita» era punible por la ley. Todos los grupos «que siguieran o estuviesen subordinados a cualquier sistema de ideología totalitaria» (evidentemente con la excepción de las fuerzas armadas guatemaltecas y la ideología de seguridad nacional) eran ilícitas; naturalmente, sólo las fuerzas armadas determinaban cuándo algo era ilícito. Si el general Mejía Víctores consideraba que las madres del GAM eran agentes de la subversión, éstas podían ser asesinadas (véase el capítulo 2). Sindicatos, agru-

34. Para una discusión de esta serie de asesinatos y una clasificación por grupos de los mismos, véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 121-126.

paciones de campesinos, estudiantes y organizaciones profesionales habían surgido regularmente en Guatemala para ser aniquilados tan pronto como exigían con alguna energía respuesta a sus demandas. Las elecciones de 1984-1985 sucedieron a la era de mayor número de asesinatos de masas de la historia moderna guatemalteca —bajo los regímenes de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores—. En 1985 el número de sindicalistas era inferior al de 1950, y otros grupos urbanos estaban diezmados o permanecían inactivos; la mayoría campesina estaba totalmente desmovilizada y bajo el severo control y vigilancia del ejército.

Una vez más existe un acusado contraste entre Nicaragua y los dos estados clientes de Estados Unidos. Bajo el gobierno sandinista se produjo una eclosión de sindicatos y de organizaciones de los campesinos. Se intentó movilizar a la población deliberadamente para que participase en la toma de decisiones a nivel local e interactuase con los dirigentes de alto nivel. Como ya hemos señalado anteriormente, Oxfam felicitó calurosamente al gobierno nicaragüense por tal esfuerzo.

Existe un legítimo debate acerca de hasta qué punto las organizaciones populares y de otro tipo auspiciadas por el FSLN son independientes, dicho de otra manera, si no constituyen un vehículo para la propaganda y la coerción estatales. Oxfam América y su organización homónima de Londres coinciden en considerarlas constructivas. Luis Héctor Serra afirma que las organizaciones populares son relativamente autónomas, y que su estrecha relación con los dirigentes del FSLN «no obstaculiza su capacidad para expresar las preocupaciones de sus miembros a nivel local».[35] Acaba diciendo que las organizaciones populares son «profundamente democráticas» en sus propósitos de involucrar a la población en la toma de decisiones y de educarla en las posiblidades de participación en la vida pública.[36] La diferencia con la organización del campesinado guatemalteco en «polos de desarrollo», cuya esencia organizativa reside abiertamente en el control militar por medio del terror y en la imposición de la *no participación*, es bastante espectacular, sea cual sea la valoración general que se haga de las organizaciones populares del FSLN.

35. «The Grass Roots Organizations», en Walker, ed., *Nicaragua*, p. 79.
36. *Op. cit.*, p. 38.

Por nuestra parte llegamos a la conclusión de que en 1984-1985 ni en El Salvador ni en Guatemala se daban los requisitos básicos de la tercera condición para unas elecciones libres. En Nicaragua sí, por lo menos a un nivel significativo.[37]

3.2.4. *Libertad para organizar partidos, presentar candidatos y realizar campaña electoral para llegar al poder*

Ningún partido de izquierdas pudo organizarse y presentar candidatos para las elecciones de 1982 y 1984 en El Salvador. El Frente Democrático (FDR) fue rápidamente conducido a la clandestinidad. Cinco de sus máximos dirigentes fueron detenidos en El Salvador en noviembre de 1980 por fuerzas oficiales y paramilitares, que los torturaron, mutilaron y asesinaron. Un año antes de las elecciones de marzo de 1982, el ejército publicó una lista de 138 «traidores», entre los que se contaban prácticamente todos los políticos de izquierda y de centroizquierda. El coronel Gutiérrez, poderoso miembro de la Junta, declaró sin lugar a réplica que el FDR no podía participar en las elecciones porque era un «frente» de la guerrilla. Así, la invitación al FDR y al FMLN para que depusiesen las armas y participasen en las elecciones fue fraudulenta, algo que quedó confirmado al admitir el embajador de los Estados Unidos que el FDR no podría realizar de manera segura su campaña electoral en El Salvador, por lo que sugería que la hicieran ¡enviando cintas de vídeo desde el extranjero![38] Más tarde, ni siquiera Duarte, candidato predilecto de los Estados Unidos, pudo desarrollar en 1982 su campaña fuera de San Salvador por temor a ser asesinado, lo que les sucedió a decenas de políticos democratacristianos entre 1980 y 1984.[39] En resumen, ni los partidos radicales ni los partidos

37. A menudo, los estudiosos que analizan la democracia estadounidense han señalado que la relativa debilidad de las organizaciones intermedias (sindicatos, clubes políticos, medios de comunicación que no estén en manos de las empresas, etc.) es un serio impedimento para lograr una democracia política significativa en los Estados Unidos. Sin duda este es el motivo del bajo índice de participación en las elecciones y del alto grado de cinismo acerca de su importancia.

38. Raymond Bonner, *Weakness and Deceit*, Times Books, Nueva York, 1984, pp. 278-279.

39. Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 122-124.

medianamente reformistas y pro Estados Unidos pudieron zafarse en esos años de ser diezmados a causa de los asesinatos políticos.

Debemos señalar también que ningún partido salvadoreño que tuviese como prioridad terminar la guerra negociando con los rebeldes pudo organizarse ni presentar candidatos. Este hecho reviste una especial importancia ya que periodistas y observadores coincidían en afirmar que la paz era el principal resultado que el electorado esperaba obtener con los comicios. En aquella ocasión la consigna que utilizaba la propaganda para conseguir que la gente acudiese a las urnas era «votos contra balas», lo que significaba que los votos eran una vía posible para limitar el uso de las balas. Si no se podía elegir a ningún candidato que abogase por una solución pacífica, resulta obvio que las elecciones eran un fraude.

Los defensores de dichas elecciones argumentaban que había una diferencia sustancial en los candidatos, especialmente entre D'Aubuisson y Duarte, de manera que los electores podían escoger una opción significativa.[40] Pero D'Aubuisson y Duarte no diferían con respecto al tema que más interesaba a los salvadoreños, luchar hasta la victoria, o esforzarse por llegar a un acuerdo negociado con los rebeldes. Ambos eran miembros del partido que optaba por la guerra, y sólo les separaban diferencias tácticas. Aunque Duarte efectuó algunas declaraciones demagógicas acerca de que mantendría conversaciones con los rebeldes para conseguir la paz, nunca elaboró un plan para lograrla, sólo habló de «diálogo» (y no de «negociaciones», que implican la posibilidad de concesiones sustanciales) manteniéndose firme en que los rebeldes debían deponer las armas y participar en la nueva «democracia» que él mismo y el ejército habían establecido.

Duarte se unió a la Junta en un momento de grave crisis, en marzo de 1980, cuando ya todos los civiles progresistas la habían abandonado e inmediatamente después del asesinato del procurador general, el democratacristiano Mario Zamora, obra de los florecien-

40. Enrique A. Baloyra, que mantiene que se podían escoger opciones significativas, dice que la gente votó «ante todo porque querían hacer uso de esta acción colectiva para instar a que se pusiera fin a la violencia y la guerra civil». Pero Baloyra no discute los puntos de vista de Duarte y D'Aubuisson sobre una solución negociada de la guerra, lo que le permite dar la errónea impresión de que uno de ellos apoyaba una vía no bélica para acabar con la violencia y la guerra civil (*El Salvador in Transition*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1982, p. 175).

tes escuadrones de la muerte. Estaba claro que el ejército y sus escuadrones de la muerte afines se habían embarcado en una política de masacres a gran escala. Duarte proporcionó la «hoja de parra» para cubrir la desnudez y la excusa que el ejército necesitaba para la segunda *matanza**.[41] En nuestra opinión, Duarte jamás hubiese recibido el apoyo y la protección de los Estados Unidos y no hubiese podido sobrevivir en El Salvador a menos que dejase claro que estaba básicamente de acuerdo con los propósitos de la administración estadounidense y del ejército salvadoreño. A partir de 1980 Duarte aceptó totalmente la búsqueda de una solución militar sin llegar a un compromiso con «los subversivos» (frase que Duarte utiliza constantemente, al igual que los dirigentes del ejército y los escuadrones de la muerte). En palabras de Raymond Bonner:

> La represión de 1980 alcanzó una magnitud sólo superada por la [primera] *matanza* y fue bastante peor de lo que se hubiese podido imaginar bajo el general Romero ... Al final del año la cifra [de muertos] llegó casi a las 9.000 personas. Cada día se encontraban cadáveres mutilados, sin brazos o sin cabeza: detrás de los centros comerciales, embutidos en bolsas de arpillera y abandonados en polvorientos caminos rurales; arrojados en precipicios y en barrancos.[42]

Y aun con todo esto Duarte no sólo proporcionaba una apariencia de «reforma», sino que felicitaba con regularidad al ejército por su leal servicio. En una carta publicada en el *Miami Herald* el 9 de noviembre de 1981, Duarte escribió que

> las fuerzas armadas están librando una batalla heroica contra un enemigo cruel y despiadado apoyado por grandes recursos de agresión ideológica, que actúa paralelamente a la agresión armada ... Esta es una presa más en el plan de conquista de la región de América Central diseñado por Moscú. Inmediatamente después, su mayor recompensa sería la nación norteamericana ...

* En castellano en el original. (*N. de la t.*)

41. Véase Dennis Hans, «Duarte: The Man and the Myth», *Covert Action Information Bulletin 26*, verano de 1986, pp. 42-47; Noam Chomsky, *Turning the Tide*, South End Press, Boston, 1985, pp. 109 y ss. (hay trad. cast.: *La quinta libertad*, Crítica, Barcelona, 1988).

42. *Weakness and Deceit*, p. 205.

En resumen, al electorado salvadoreño nunca se le ofreció una opción que respondiese a sus anhelos, como llegó a reconocer incluso la prensa.

En Guatemala, como en el Salvador, ningún partido de izquierdas participó en las elecciones a la asamblea constituyente de 1984, y sólo un partido desmantelado hizo una tentativa, totalmente fallida, en las elecciones presidenciales de 1985.[43] Como es de suponer los principales movimientos de la guerrilla quedaron fuera de la órbita electoral. Sus dirigentes hubiesen sido asesinados en caso de detención, pero en modo alguno hubiesen participado de no producirse un cambio drástico en las condiciones sociales y electorales básicas.[44] Incluso un partido centrista como el democratacristiano había sufrido decenas de asesinatos desde 1980 a 1983, y el actual presidente de Guatemala, el democratacristiano Vinicio Cerezo, sobrevivió —que se sepa— a tres intentos de asesinato. Ningún partido de izquierdas digno de tal nombre hubiese reunido los requisitos exigidos bajo las leyes de «asociación ilícita» anteriormente mencionados.

Ningún candidato representaba o tan siquiera hablaba de la mayoría campesina. La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, organización que no puede actuar en el país, señaló que «no existían» partidos políticos de ámbito nacional que fueran portavoces de los sectores mayoritarios como la clase obrera o la población indígena «y como resultado de ello, estos sectores están excluidos institucionalmente del sistema político».[45] Americas Watch indica que una de las funciones del sistema de patrullas civiles es «vigilar y controlar a la población local, evitando cualquier forma de organización política independiente».[46] En las elecciones de 1984-1985 se dieron dos ejemplos de la exclusión del campesinado de cualquier oportunidad política. Uno de ellos es que en el proceso de inscripción en el censo electoral, sólo un 3 por 100 de personas se

43. En 1980 fue asesinado el máximo dirigente del partido Socialdemócrata, y el resto de sus funcionarios se vio obligado a abandonar el país. Sólo unos pocos de estos líderes exiliados volvieron para participar en las elecciones de 1985.

44. La opinión de la guerrilla era que, puesto que el ejército había establecido un sistema de control de alcance nacional, el poder militar estaba institucionalizado y las elecciones no serían significativas. Véase «Guerrilla's View of Elections: Army Will Hold Power Despite Polls», *Latin America Weekly Report* (25 de octubre de 1985), p. 11.

45. Informe CDH, p. 7.

46. Americas Watch, *Civil Patrols in Guatemala*, AW, Nueva York, 1986, p. 2.

declaraban miembros de un partido político. El otro ejemplo, más convincente, es que ningún candidato defendía la reforma agraria, pese a que este era uno de los dos temas claves, en Guatemala (el otro era las matanzas sin impedimento alguno del ejército, que tampoco se discutía en las elecciones, ya que todo el mundo temía claro que fuera quien fuese el vencedor, el ejército continuaría siendo la fuerza gobernante).

Como en el caso de Duarte en El Salvador, la presencia de Vinicio Cerezo como candidato, y como vencedor final de las elecciones de 1985, planteaba la cuestión de si, pese a las limitaciones de la izquierda, su presencia no ofrecía una real opción significativa al electorado. Cerezo se diferenciaba de sus rivales electorales, especialmente durante la recta final de la campaña, por manifestar compasión por las masas y por su determinación de efectuar cambios en el panorama de los derechos humanos y en la pobreza en la que se encontraba la mayoría de la población. Ocasionalmente mencionó la necesidad de una reforma estructural, aunque sin concretar mucho, así como que era prioritario reestablecer el control civil. Sin embargo tenía bastante claro que, en caso de resultar elegido, su poder sería en un principio nominal, y que éste debería ser aumentado en el transcurso de su mandato:

> Las elecciones no significan la transferencia automática del poder real al presidente, sino que se producirá la entrega del poder *formal*. ¿Cuáles son mis posibilidades de consolidar este poder? Un 50 por 100.[47]

Durante la campaña electoral, Cerezo en ningún momento abordó la cuestión de la reforma agraria, e informaciones procedentes de Guatemala indicaban que había prometido a los terratenientes del país que tal cosa no entraba en sus planes.[48] Por otra parte,

47. ¿«El Señor Presidente?» Entrevista de George Black con Cerezo en octubre de 1985, *NACLA Report on the Americas*, noviembre-diciembre de 1985, p. 24.

48. «Hace varios meses, en una reunión con la organización ultraderechista Amigos del País, que supuestamente está estrechamente vinculada con los escuadrones de la muerte, los diputados del PDCG en la Asamblea Nacional prometieron que si su partido llegaba al poder refrenaría las reformas agraria y bancaria, las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército y cualquier otra interferencia para el programa contrarrevolucionario» («Guatemala Votes», *Washington Report on the Hemisphere*, 27 de noviembre de 1985).

tampoco prometió efectuar ninguna acción legal contra aquellos que habían asesinado a miles de personas, ni que fuese a desmantelar el Estado contrainsurgente. De hecho, parecía haber un acuerdo tácito entre Cerezo y los militares en virtud del cual éste les protegería de cualquier persecución y perservaría su poder y relativa autonomía, aunque en realidad no podía obrar de otra manera si quería sobrevivir.[49] En el primer año y medio desde que asumió el poder, Cerezo no realizó ningún cambio significativo en materia de reforma agraria, apoyó vigorosamente al ejército contra cualquier queja o interpelación, y no dio ningún paso para desmantelar las patrullas civiles, los polos de desarrollo u otros elementos del terror institucionalizado.[50] La situación de los derechos humanos en Guatemala «sigue siendo terrible»,[51] si bien había mejorado algo (debido en parte a que los elevados índices de asesinatos ya no se consideraban beneficiosos). Los pobres, con quienes Cerezo se había mostrado muy compasivo durante la campaña electoral, sufrieron nuevas pérdidas en su renta real, dado que las «reformas» de Cerezo se ajustaban a las necesidades del ejército y de la oligarquía. Sus relaciones con los Grupos de Apoyo Mutuo eran decididamente malas. Así, el período postelectoral evidencia que Cerezo, en parte merced a un acuerdo anterior pero fundamentalmente en virtud de las limitaciones estructurales, era totalmente incapaz de servir a los intereses de su electorado. En las elecciones de 1984-1985, Cerezo dio a los guatemaltecos la oportunidad de votar por un hombre de aparente buena voluntad y buenas intenciones, pero incapaz de responder a las exigencias democráticas, a las que se oponían los *reales* gobernantes del Estado.

49. Allen Nairn y Jean-Marie Simon, en «The Bureaucracy of Death», New Republic, 30 de junio de 1985, describen la «alianza táctica» entre Cerezo y el ejército, según la cual el ejército quedaba libre de toda responsabilidad por acciones pasadas y éste le permitía a Cerezo ocupar su cargo.

50. Véase «Cerezo Adapts to Counterinsurgency», *Guatemala*, Guatemala News and Information Bureau, mayo-junio de 1986.

51. Americas Watch, *Human Rights in Guatemala during President Cerezo's First Year*, febrero de 1987. Cerezo abogó por no perseguir a los militares por los viejos crímenes ya que todo el mundo quería empezar de nuevo. Pero Americas Watch señala que si los terribles crímenes del pasado se ven libres del peso de la ley, cabe pensar que Cerezo no tendrá suficiente poder para acabar con los crímenes de los militares en el futuro. «Es un signo de que en Guatemala no se ha establecido el imperio de la ley, y de que no podrá ser establecido» (p. 4).

En Nicaragua, en 1984, el espectro de candidatos era mucho más amplio que en El Salvador, Guatemala o, para lo que hace al caso, los Estados Unidos.[52] El partido Conservador Democrático y el Liberal Independiente estaban abiertamente en favor de respetar la propiedad privada, de reducir el control del gobierno sobre la economía, por la eliminación de los controles de prensa (entre otros) y por una política exterior de adaptación y de no alineamiento más pronunciada. Ambos podían denunciar a los sandinistas por la guerra, así como abogar por la despolitización del ejército y la negociación con la contra. Arturo Cruz, tras prolongadas negociaciones con representantes del gobierno, optó por no concurrir a las elecciones de 1984; se trató de un acto voluntario de Cruz, aunque con grandes presiones de los Estados Unidos.[53] A diferencia de la situación en la que se encontraba la izquierda en El Salvador y en Guatemala, su renuncia no estaba condicionada por amenazas físicas a su persona o por limitaciones de su capacidad de acceso a la población.[54]

Por su calidad de partido en el poder, el FSLN disfrutaba de sustanciales ventajas con respecto a los partidos de la oposición, defendiendo al país contra un ataque externo y habiendo movilizado a la población en pro de sus propios planes de desarrollo. LASA consideró que en su mayor parte las ventajas de las que gozaba el FSLN eran comparables a las que disfrutaban los gobiernos de todos los países, llegando a la siguiente conclusión:

> Parece claro que el FSLN obtiene sustanciales ventajas por su posición de predominio y que, de alguna manera, abusa de ello. Sin embargo, estos abusos no son sistemáticos, y ni la naturaleza de los mismos ni su frecuencia son tales que pueden desarbolar las campañas de los partidos de la oposición o arrojar dudas sobre la validez fundamental del proceso electoral ... En general, en su campaña el

52. Véase Michael Parenti, «Is Nicaragua More Democratic Than the United States?», *Covert Action Information Bulletin 26* (verano de 1986), pp. 48-52.

53. Wayne S. Smith, «Lies About Nicaragua», Foreign Policy, verano de 1987, p. 93. Smith sostiene que Cruz «ahora lamenta no tomar parte y que no haber participado en las elecciones de 1984 fue uno de sus mayores errores políticos».

54. Véase el Informe LASA, pp. 24-25, 29-31. Más adelante, al tratar de la manipulación de las elecciones nicaragüenses por los medios de comunicación, discutimos esta cuestión, así como la probabilidad de que la retirada de Cruz formara parte de una estrategia de relaciones públicas.

> FSLN se afana menos en aprovecharse de las ventajas que le ofrece su posición de lo que suelen hacerlo los partidos en el poder de cualquier otro país (incluyendo los Estados Unidos) y considerablemente *menos* de lo que tradicionalmente han hecho los partidos gobernantes de otros países de América Latina.[55]

Por nuestra parte concluiríamos que la capacidad de los candidatos para reunir los requisitos y presentarse a las elecciones, así como la diversidad de opciones, era substancialmente mayor en Nicaragua que en El Salvador y en Guatemala. Además, como en estos dos últimos casos las amenazas hacían que los grupos políticos de izquierdas más importantes quedasen excluidos del proceso electoral, consideramos que esas elecciones tampoco cumplen otra de las condiciones básicas de cualquier comicio.

3.2.5. *Ausencia del terror de Estado y de clima de temor*

Durante los años 1980 al 1984 los escuadrones de la muerte de El Salvador actuaron con total libertad y en estrecha coordinación con el ejército y las fuerzas de seguridad. Durante los treinta meses anteriores a las elecciones de 1982, el promedio mensual de asesinatos llegó aproximadamente a las setecientas personas. Muchas de esas víctimas fueron violadas, torturadas y mutiladas. Todos estos actos fueron cometidos con la mayor impunidad, y sólo el asesinato de cuatro mujeres estadounidenses provocó —gracias a las presiones del Congreso— algún tipo de acción legal. Incluso William Doherty, del Instituto Americano para el Desarrollo del Trabajo Libre —y antiguo partidario de la política de los Estados Unidos en El Salvador— declaró ante una comisión del Congreso que en aquel país no había ningún sistema judicial operativo, mientras que Leonel Gómez, antiguo funcionario de la reforma agraria en El Salvador, declaró poco después ante el mismo comité que el terror de Estado había llevado a la población a una situación de «temerosa pasividad».[56]

55. Informe LASA, p. 23.

56. La declaración de Doherty aparece en *U.S. Policy toward El Salvador*, vista ante el subcomité para asuntos interamericanos del Comité del Congreso para Asuntos Extranjeros, 97 Congreso, 1.ª sesión, p. 290; la declaración de Gómez aparece en *Presidential Certification of El Salvador*, Comité del Congreso para Asuntos Extranjeros, 97 Congreso, 2.ª sesión, 1982, vol. 1, p. 330.

También en Guatemala el temor endémico, basado en años de ilimitada y continua violencia del ejército, era un hecho dominante de la vida nacional. Según un documento de Americas Watch de principios de 1985:

> La tortura, los asesinatos y las desapariciones continúan a un ritmo extraordinario, y millones de campesinos están bajo la estricta vigilancia y control del gobierno mediante la utilización de patrullas civiles y las «aldeas modelo». En resumen, Guatemala sigue siendo un país de prisioneros.[57]

En 1985 el grupo de juristas democráticos describió a Guatemala como «un país donde la mayoría de la población vive en constante temor».[58]

En el caso de Nicaragua, reiteramos el hecho central que la diferenciaba de los estados clientes de los Estados Unidos: en 1984 su gobierno no asesinaba a los civiles.[59] El principal temor de los ciudadanos corrientes de Nicaragua era el que sentían por la violencia de la contra y de los Estados Unidos.

Nuestra conclusión es que en Nicaragua se cumplía la quinta condición para unas elecciones libres, pero no así en El Salvador y Guatemala. Y en conjunto, encontramos que ni El Salvador ni Guatemala cumplían *ninguna* de las cinco condiciones para unas elecciones libres, mientras que Nicaragua cumplía sobradamente algunas de ellas, y las otras en menor medida.

3.3. Las medidas coercitivas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua

Como ya hemos señalado, en las elecciones patrocinadas por los Estados Unidos la participación electoral se considera una muestra del apoyo público a las elecciones y a sus organizadores. En las elecciones que no se aprueban (aquí, las de Nicaragua), se abandona este modelo y no se tiene en cuenta el número de votantes, o se

57. AW, *Little Hope*, p. 1.
58. Informe AIJDH, p. 4.
59. No obstante, eran asesinados sistemáticamente por terroristas financiados por los Estados Unidos que entraban a Nicaragua desde Honduras y Costa Rica.

considera no significativo dadas las limitadas opciones y las amenazas coercitivas de las autoridades. Pero la cuestión de las amenazas coercitivas debe plantearse claramente en todos los casos en los que éstas representen un problema potencial. Como acabamos de describir, las elecciones en El Salvador se realizaron en una situación de gobierno militar, en la que tenían lugar asesinatos en masa de «subversivos» y se había creado un clima de temor. Si en esa situación el gobierno auspicia unas elecciones y las autoridades militares locales exhortan a la población a votar, un porcentaje significativo de votos debe considerarse resultado de la coerción. Un modelo de propaganda puede prever que los medios de comunicación de masas de los Estados Unidos no llegarán a tal conclusión, como de hecho no lo hicieron.

En El Salvador en 1982 y 1984 el voto era también exigido por la ley. Ésta estipulaba que el abstenerse de votar sería penalizado con una sanción económica, y llamaba también a las autoridades locales a que comprobasen si los votantes acudían a las urnas o no. Este control se podía hacer porque en el momento del voto se sellaba la *cédula* de identificación del votante, dejando así constancia de su participación. Cualquier persona a la que abordase la policía o el ejército tendría que enseñar la cédula de identificación, con lo que se sabría rápidamente si el individuo en cuestión había cumplido su deber patriótico. Justo antes de las elecciones de 1982, el ministro de Defensa García advirtió a la población a través de los periódicos de San Salvador, que no votar sería considerado como acto de traición. Y en las elecciones de 1984, «la publicidad del gobierno y del ejército anterior a las elecciones señalaba más la obligación de votar que la libertad de votar».[60] Dado el clima de temor, la exigencia del voto, el sellado de la cédula de identificación, las advertencias del ejército, y su historial a la hora de tratar con los «traidores», parece evidente que el elemento coercitivo ha resultado determinante por lo que se refiere al número de votantes. Los observadores independientes que se han preguntado las razones por las que votaban los salvadoreños llegaron a la misma respuesta.[61]

60. Reverendo Daniel Long y un grupo de siete observadores ecuménicos, «March 25, 1984, Elections in El Salvador», ciclostilado, 1984, p. 4.

61. Basándose en conversaciones con los votantes, el grupo de Long sostiene que «la mayor parte de la gente hizo cola durante horas porque quería que le sellaran su cédula de identificación y le mancharan el dedo de tinta para evitar las multas por

En Guatemala, como en El Salvador, el voto era exigido por la ley; y los no votantes estaban sometido a una multa de cinco *quetzales* (150 pesetas). También, como en El Salvador, los anuncios insertados en los periódicos por el ejército señalaban que la abstención o el voto en blanco eran un acto de traición.[62] El grupo de juristas informó de que «muchas» personas temían sufrir represalias si no votaban, y que tras las amenazas de los militares la semana anterior a las elecciones existía la «creencia generalizada de que el no votar sería castigado con algo más que la multa de cinco *quetzales* estipulada por la ley».[63]

En Nicaragua era obligatorio la inscripción en el censo electoral, pero *el voto no era exigido por la ley*. Las tarjetas de registro de votantes presentadas el día de la elección quedaban en poder de los funcionarios electorales, de manera que la falta de la credencial de voto sellada no podía utilizarse como base para la represalia.[64] Para los observadores de LASA la mayoría de votantes no daban muestras de votar coaccionados por amenazas: la ley no les exigía el voto, se les había exhortado a votar pero no estaban amenazados con ser declarados «traidores» en caso de que no lo hiciesen; no había ningún método evidente para identificar a los no votantes y el gobierno no asesinaba a los disidentes, a diferencia de lo que era la práctica normal en El Salvador y Guatemala.

En resumen, Nicaragua no desplegó una serie de poderosas medidas coercitivas para obtener los votos, como hicieron los gobiernos salvadoreño y guatemalteco.

---

no votar y/o las posibles represalias del gobierno y los militares ...». Señalan que en varios lugares los funcionarios sellaban las cédulas de identificación de los que no pudieron votar pues de otro modo la muchedumbre no los dejaba salir (*op. cit.*, p. 6).

62. En las elecciones a la Asamblea Constituyente del 1 de julio de 1984, los votos nulos y en blanco fueron más numerosos que los de cualquier partido, alcanzando un asombroso 26 por 100 del total.

63. Informe AIJDH, p. 54.

64. Este procedimiento fue decretado legal a petición de varios partidos de la oposición. (Informe LASA, p. 15.)

3.4. El Salvador: cómo los medios de comunicación estadounidenses transformaron «una enloquecida máquina de asesinar» en el garante de una democracia incipiente

En sus informaciones sobre las elecciones salvadoreñas de 1982, los medios de comunicación estadounidenses se atuvieron estrictamente al orden del día del gobierno. Las personalidades de los candidatos, las largas hileras de personas esperando para votar, la presunta irrupción de los rebeldes y el número de votantes fueron los temas principales.[65] En palabras de Jack Spence, «cada parte informativo, especialmente los de las grandes cadenas, explicó que el día de las elecciones los votos se habían emitido en medio de la extremada violencia de la guerrilla en los colegios electorales».[66] Warren Hoge y Richard Meislin, del *New York Times*, repitieron cada día que los rebeldes amenazaban con dar al traste con las elecciones, y Hoge afirmó que «las elecciones serán significativas sea cual sea su resultado, ya que las guerrillas izquierdistas han montado una campaña para boicotearlas y para disuadir a los votantes de que acudan a los colegios electorales».[67] Pero ni Hoge ni Meislin citaron una sola vez a ningún portavoz de la guerrilla que se comprometiese a tal acción, y en realidad nadie hizo tal cosa. El día de las elecciones ningún votante fue asesinado y no se produjo ningún ataque a los colegios electorales, y el nivel general de la actividad militar de los rebeldes alcanzó su mínima expresión. En resumen, las afirmaciones de los planes de boicoteo no respondían a la realidad: eran pura y simplemente falsificaciones tanto acerca de la planificación de las elecciones como de sus resultados, pero como se adecuaban al guión patriótico previsto se les dedicó mucha atención, fueron repetidas con frecuencia y utilizadas para estable-

65. Los medios de comunicación suprimieron el hecho de que el número de colegios electorales fuera drásticamente reducido en 1982, supuestamente por razones de seguridad, contribuyendo a formar colas aún más largas.

66. «Media Coverage of El Salvador's Election», *Socialist Review* (abril de 1983), p. 29.

67. «Salvadorans Jam Polling Stations; Rebels Close Some», *New York Times* (29 de marzo de 1982).

cer el contraste entre las fuerzas del bien y del mal.[68] Una vez finalizada la votación, Dan Rather exclamó «¡Ha sido un triunfo! Un millón de personas ha acudido a las urnas». Para Rather no fue un triunfo que los sandinistas atrajesen a las urnas 700.000 votantes —una proporción más elevada de la población, y sin voto obligatorio—. El marco de propaganda del gobierno concedía gran importancia al número de votantes de las elecciones salvadoreñas, pero no al de las elecciones nicaragüenses; Rather siguió la consigna como un perro faldero.

Ni Rather ni ningún otro analista de los medios de comunicación destacaron antes o después del 30 de marzo de 1982, que en El Salvador el voto era obligatorio por ley, y ninguno de ellos mencionó la advertencia que el ministro de Defensa, general Guillermo García, hizo publicar en los periódicos salvadoreños, indicando que no votar sería considerado traición.[69] Los parámetros básicos quedaron absolutamente excluidos de los medios de comunicación. La destrucción de *La Crónica* y *El Independiente*, así como el asesinato de veintiséis periodistas antes de las elecciones no fueron tenido en cuenta a la hora de valorar la validez y significación de las mismas.[70] El ejército salvadoreño y sus aliados habían cometido asesinatos a gran escala contra la población civil muchos meses antes de (y durante) marzo de 1982. ¿Estos asesinatos, a los que habría que añadir el estado de sitio, no creaban un clima de temor que entorpecía el libre debate y la libre elección? Raras veces, por no decir ninguna, los medios de comunicación insinuaron siquiera esta posibilidad.

68. Véase también, de Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 164-167.

69. Warren Hoge citó a García, pero sólo para sugerir unas elecciones abiertas: «sin mentiras, usted puede ver aquí qué es lo que el pueblo quiere...», «Salvadorans Jam Polling Stations», *New York Times* (29 de marzo de 1982).

70. Once días antes de las elecciones de 1982, las fuerzas de seguridad salvadoreñas asesinaron a cuatro periodistas holandeses. La prensa extranjera fue conducida a la morgue para que viera los cadáveres, cuyos genitales destripados fueron expuestos a la vista de los medios de comunicación. Este episodio, descrito en un documental de 1984 titulado *In the Name of Democracy*, fue suprimido de los medios de comunicación de los Estados Unidos, no dio lugar a protestas ni generalizaciones acerca de las cualidades del gobierno salvadoreño, y puede haber contribuido al notable silencio de los periodistas de El Salvador dada la situación en que se encuentran los medios de comunicación (y no sólo ellos) en esa incipiente democracia.

¿Podían los candidatos actuar y hacer campaña electoral sin temor a ser asesinados? ¿Podían los rebeldes concurrir a las elecciones? A fin de cuentas, si se trataba de una guerra civil, los rebeldes eran sin lugar a dudas la «oposición principal». Una vez más los medios de comunicación se desentendieron, aduciendo que esta exclusión no era importante o que representaba un boicot voluntario de los rebeldes más que un rechazo basado en las desfavorables condiciones para que las elecciones se desarrollasen libremente, y en un flagrante juego sucio. Las publicaciones objeto de nuestro estudio no mencionaron ni la «lista de condenados a muerte» que circulaba en marzo de 1981 ni las declaraciones de Gutiérrez en las que afirmaba que el FDR no obtendría autorización para concurrir a las elecciones. Ni siquiera apuntaron que el *plan* de las elecciones fue diseñado para crear un ambiente electoral de extrema coerción y parcialidad en el cual no había lugar para los rebeldes, sino que utilizaron su ausencia para tramar el juego del boicot y del triunfo que representaba el número de votantes. Los medios de comunicación nunca hablaron de que el ejército estaba de acuerdo con las elecciones porque no podían perderlas.

Warren Hoge describió el papel del ejército con estas palabras, publicadas en el *New York Times*:

> Los militares ¿juegan algún papel en las elecciones? Los miembros del ejército no pueden votar, y las fuerzas armadas se han comprometido a proteger a los votantes contra toda violencia y a respetar el resultado de los comicios.[71]

Al parecer, para Hoge y el *New York Times* los asesinatos masivos de civiles realizados por el ejército, así como la destrucción y desmovilización sistemáticas de prácticamente todas las organizaciones populares en El Salvador durante los treinta meses que precedieron a las elecciones, relacionadas con lo que el Secretario de Estado Shultz denominaba «aspectos preliminares que hacen que unas elecciones sean representativas», no forman parte del «papel» desempeñado por el ejército. Según el marco de propaganda, las fuerzas de seguridad de los estados clientes «protegen las elecciones»;[72] sólo

71. «Salvador Vote: Uncertainty Remains», 3 de abril de 1982.

72. El *New York Times* dedicó todo un artículo a las promesas del mandamás salvadoreño según el cual «sus tropas proporcionarían la seguridad necesaria en las

las de los estados enemigos interfieren en la libertad de sus ciudadanos para votar sin constreñimientos.

Como ya hemos mencionado, todos los observadores y periodistas destacados en El Salvador coincidían en afirmar que el principal anhelo de la población era poner fin a la guerra, y que incluso la propaganda del gobierno subrayaba que las votaciones eran un vehículo importante para este fin —exhortando al público a que sustituyese «balas por votos»—. Pero ningún partido favorable a la paz participaba en las elecciones salvadoreñas. Y una vez celebradas éstas, la guerra continuó, y los escuadrones de la muerte prosiguieron su actividad. Esto concuerda con la hipótesis de que el propósito real de las elecciones no era otro que aplacar a la población de los Estados Unidos y hacer que continuase financiando más guerra y terror, lo que hace un flaco servicio a la hipótesis de que los habitantes de El Salvador tenían libertad de elección. Una prensa honesta hubiese destacado que las elecciones fracasaron a la hora de sustituir las «balas por los votos», pero los medios de comunicación estadounidenses se abstuvieron de plantear la cuestión.

Ni la experiencia de 1982 ni las consecuencias de ésta disuadieron a los medios de comunicación de seguir una vez más el guión patriótico en 1984. Nos referiremos a ello más adelante, en una comparación estadística de la cobertura informativa que el *New York Times* dedicó a las elecciones de El Salvador y Nicaragua.

3.5. «PRIMER PASO: GUATEMALA OPTA POR LA MODERACIÓN» [73]

La participación del gobierno de los Estados Unidos en las elecciones guatemaltecas de 1984 y 1985 fue menor que en el caso de las elecciones salvadoreñas, pero como ya hemos señalado en

---

elecciones del 25 de marzo (de 1984)»; se cita a Blandon: «Le garantizo que habrá elecciones seguras en todo el país» (Lydia Chávez, «Salvadoran Promises Safe Election», *New York Times*, 14 de marzo de 1984).

73. *Time*, 16 de julio de 1984. «Moderación» es una de las palabras favoritas de los medios de comunicación para describir las elecciones demostrativas. El artículo sobre Duarte y los comicios salvadoreños de mayo de 1984 publicado en *Newsweek* el 7 de mayo de 1984, se titulaba «El Salvador: A Miracle of Moderation». Para una discusión sobre algunos de los usos que los medios de comunicación dan a la palabra «moderación», véase Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988, capítulo 2.8

el capítulo 2, la administración Reagan hizo grandes esfuerzos para dar un barniz favorable a los regímenes asesinos de Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores, y para tratar de reintegrarlos totalmente a la alianza del mundo libre.[74] Dicha administración propició las elecciones de 1984-1985, les proporcionó el asesoramiento y el apoyo financiero necesarios, se ocupó de las relaciones públicas y envió observadores oficiales para que colaborasen a darles un cariz favorable. No se hizo mucho para desenmascarar que el propósito de las elecciones, para la administración Reagan y para el ejército gobernante, no era otro que modificar la «imagen» internacional de Guatemala para facilitar la ayuda y los préstamos a ese país.

Con el apoyo de la administración a esta nueva imagen, pero sin la intensidad del compromiso y del apoyo propagandístico desplegados en El Salvador, y dado el incesante flujo de informes acerca de los continuos asesinatos masivos en Guatemala, el modelo de propaganda anticipó que la respuesta de los medios de comunicación sería la de dar una imagen favorable de las elecciones guatemaltecas, pero con reservas. De hecho recibieron menor atención que las elecciones salvadoreñas, y eran informaciones algo más «imparciales», aunque la defensa de las elecciones continuó siendo —con mucho— la tónica dominante.

Una contundente manifestación de parcialidad fue la pronta aceptación por parte de los medios de comunicación de la trascendencia de las elecciones guatemaltecas, aunque supiese que se celebraban con vistas a crear imagen en un contexto de gobierno prolongado del ejército y masacres sin fin, y pese a las nuevas disposiciones institucionales para las zonas rurales —los reasentamientos

74. Mario Sandoval Alarcón, líder de la extrema derecha guatemalteca, descrito a menudo como el padrino de los escuadrones de la muerte de América Central, asistió a la toma de posesión de Reagan, se reunió con sus consejeros de defensa y política exterior, y declaró que se habían alcanzado «acuerdos verbales» para terminar con las críticas a las violaciones de los derechos humanos y renovar la ayuda militar. Véanse Marlise Simons, «Guatemala: The Coming Danger», *Foreign Policy*, verano de 1981, p. 101; Scott Anderson y John Lee Anderson, *Inside the League: The Schocking Exposé of How Terrorists, Nazis, and Latin American Death Squads Have Infiltrated the Anti-Communist League*, Dodd, Mead, Nueva York, 1986, p. 175; y Alan Nairn, «Controversial Reagan Campaign Links with Guatemalan Government and Privats Sector Leaders», documento que forma parte de una investigación para el Council on Hemispheric Affairs, 30 de octubre de 1980, p. 11.

masivos de la población, las «aldeas modelo», y las patrullas de defensa civil— que, a primera vista, eran incompatibles con unas elecciones libres. Si en un Estado enemigo se hubiesen celebrado unas elecciones en condiciones semejantes, se habría planificado un ejercicio de relaciones públicas que resaltase su nula significación.[75] Sin embargo, en el caso de Guatemala muy pocas veces se mencionaron las patrullas de defensa civil y las continuas masacres, ni se tuvieron en cuenta las fuentes de información que hacían referencia a ellas, y en conjunto el tono de las noticias fue moderadamente esperanzador y optimista. Unánimemente se consideraba que las elecciones para la asamblea constituyente de 1984 eran «alentadoras», representaban un primer paso importante, y que los comicios presidenciales de 1985 «*ponían fin* [la cursiva es mía] a más de treinta años de dominación militar» (*Newsweek*, 17 de enero de 1986). Dan Rather, en el *CBS News*, informó que Cerezo se había convertido en «el primer dirigente civil de Guatemala, después de treinta años de gobierno militar prácticamente ininterrumpido» (9 de diciembre de 1985). Se trataba de una afirmación ambigua, pero implicaba, como admitía tácitamente el *Newsweek*, que era Cerezo y no el ejército, quien *gobernaba*. Julio Méndez Montenegro fue un presidente civil desde 1966 hasta 1970, aunque no gobernase, que finalmente quedó desacreditado porque bajo su presidencia se produjo una enorme escalada de violencia por parte del ejército. Dada esta experiencia anterior, y el hecho de que los generales habían dejado claro que el gobierno de civiles era un «proyecto» del ejército,[76] así como las propias reservas de Cerezo con respecto a su poder, cualquier información objetiva hubiese tratado con cautela el tema del presunto *fin* del gobierno militar.

Como en el caso de El Salvador, el fatídico gobierno de los generales guatemaltecos no era motivo de deslegitimación a los ojos de los medios de comunicación estadounidenses, ni les hacía pensar en la posible justicia de la causa rebelde. El *Time* señalaba (el 27 de febrero de 1984), que la insurgencia izquierdista «suponía un reto permanente para el régimen», pero no profundizaba en las raíces de

75. Así es como fueron tratadas las elecciones polacas de enero de 1984 por los medios de comunicación estadounidenses, aunque el terrorismo de Estado polaco era mucho menos duro que el de Guatemala en 1984-1985. Véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 173-180.

76. Council on Hemispheric Affairs, *News and Analysis*, 6 de febrero de 1987.

esta insurgencia ni indicaba que sus líderes constituían la «principal oposición» cuya capacidad para concurrir a las elecciones hubiese representado «una prueba tangible» de la integridad de las mismas (como declararon en el caso de Nicaragua). El *Time* tampoco comentaba que el régimen significaba un reto permanente para la supervivencia de su población. Los asesinatos masivos del Estado guatemalteco eran justificados en parte por la incuestionable necesidad de sofocar a los insurgentes. Gran parte de los asesinatos —afirmaba el *Time*— tienen que ver con el éxito de Mejía contra los insurgentes». La frase «tienen que ver con» es un eufemismo con aire de excusa para disimular que el «éxito» de Mejía se basaba en el asesinato masivo de hombres, mujeres y niños en, literalmente, centenares de aldeas destruidas.[77] Mejía tenía un «historial mixto» en el que los asesinatos masivos quedaban compensados por «las mejoras en algunas áreas importantes» (según el Departamento de Estado citado por el *Time*). Mejía, decía el *Time* «ha ganado apoyo porque ha mantenido las promesas que hizo tras su llegada al poder». El *Time* nunca explicó cómo había determinado que Mejía «había ganado apoyo», o quién le apoyaba, aparte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Podía la prensa expresar sus opiniones con libertad?, ¿se estaba cerca de la instauración de un Estado de derecho?

En el capítulo 2 hemos resumido cómo Americas Watch demostró que la administración Reagan efectuó ajustes consecutivos en su defensa de cada uno de los generales terroristas guatemaltecos, *reconociendo, tácita y tardíamente, haber mentido antes*. Pero esto no tuvo ningún tipo de influencia en el tratamiento que daba el *Time* a los pronunciamientos del Departamento de Estado, considerándolos como la auténtica verdad parámetro que podía utilizarse para evaluar otras declaraciones. Así, el *Time* dijo que «Americas Watch, controvertido grupo al que con frecuencia se acusa de simpatizar demasiado con la izquierda, afirma que Guatemala es "un país de prisioneros"». El *Time* no se ocupa de verificar por su cuenta la naturaleza de sus fuentes de información, y no cuestiona al Departamento de Estado porque éste expone la verdad oficial y

77. Podemos estar bastante seguros de que *Time* no afirmará que «muchas de las muertes que se han producido en Afganistán están relacionadas con el éxito del general Zakov contra los insurgentes».

patriótica. Se difama a Americas Watch (y se cita muy pocas veces, aunque con una connotación menospreciadora), porque cuestiona la propaganda oficial. *Pravda* tendría dificultad en alcanzar las cotas de servilismo a las exigencias del Estado a las que llega *Time* cuando informa de las elecciones «demostrativas».[78]

Las fuentes de información de los medios de comunicación con respecto a las elecciones guatemaltecas se reducían casi totalmente a los funcionarios y observadores oficiales de los Estados Unidos, a los candidatos políticos guatemaltecos más relevantes, y a los generales. Los portavoces de los insurgentes —que tratándose de Nicaragua hubiesen sido calificados como el «grueso de la oposición»—, los partidos menos grandes, los portavoces de las organizaciones populares, las iglesias, los grupos de derechos humanos, y los ciudadanos corrientes, eran ignorados por los medios de comunicación. Ni el *Time*, el *Newsweek* o la *CBS News* se dirigieron casi nunca a los ciudadanos de a pie o a los portavoces de los insurgentes. Stephen Kinzer, en el *New York Times*, sólo una vez se refirió a un informador rebelde en las decenas de artículos que escribió sobre Guatemala durante los períodos electorales, si bien el día en que se celebraron las elecciones de 1984 habló con varios ciudadanos (que dieron una versión mucho menos optimista que las otras fuentes a las que Kinzer acostumbraba a consultar).

El limitado abanico de fuentes de información de los medios de comunicación refuerza y es el resultado de la propensión de dichos medios a hacer suyo el orden del día o guión patriótico. Las declaraciones de los funcionarios y observadores del gobierno estadounidense son siempre optimistas y esperanzadas cuando se refieren a las elecciones a las que se apoya. También son moderadamente optimistas los principales políticos en liza, ya que tienen ante ellos una buena oportunidad para conseguir al menos un poder nominal. Sin embargo en algunas ocasiones expresan sus dudas acerca de si el ejército abandonará o no el poder. Esto hace que la puesta en escena de las elecciones adquiera un carácter ligeramente diferente a la de El Salvador, donde el ejército demócratico «protegía las elecciones» contra los antidemocráticos rebeldes que rechazaban depo-

78. Para evidencias de la total servidumbre y deshonestidad de *Time* en la cobertura de las elecciones en la República Dominicana y Vietnam, véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*, pp. 45, 46, 51-52, 83-86.

ner sus armas y participar. En Guatemala la cuestión era: ¿Mantendrán los generales su promesa de permanecer en los cuarteles? El triunfo estriba en que *permanecieron* en los cuarteles —un presidente civil asume el poder y ahora *gobierna*—. Llegados a este punto, los medios de comunicación se olvidaron rápidamente del tema, de manera que nunca se comprobó si el ejército abandonó el poder, dejándolo en manos de los civiles, o no (así como tampoco se analizó retrospectivamente la «paz» anhelada por la población de El Salvador). En Polonia, en enero de 1987, y en Nicaragua en 1984, y en los estados enemigos en general, la atención se centra en la *esencia* del poder, y en hasta qué punto este poder configura de antemano los resultados de las elecciones, limitando la posibilidad de que importantes sectores del electorado puedan optar al poder y concurrir de manera efectiva. No sucede lo mismo en Guatemala.

Si los medios de comunicación hubiesen ampliado sus fuentes de información, las condiciones fundamentales hubiesen adquirido una mayor preponderancia. Por ejemplo, tanto antes de las elecciones del 1 de julio de 1984 como de las de diciembre de 1985, la Conferencia Episcopal guatemalteca emitió unas declaraciones pastorales en las que indicaba en términos inequívocos y con detallados argumentos que las condiciones del país eran incompatibles con unas elecciones libres. Su carta pastoral del 8 de junio de 1984 definía las patrullas de defensa civil como «susceptibles a manipulaciones», y abordaba las desapariciones, la «insaciable corrupción» y el hecho de que las estructuras sociopolíticas eran «incapaces de fomentar el bienestar de la sociedad en su conjunto».[79] Stephen Kinzer hizo alusión a este informe en un artículo publicado en el *New York Times* el 22 de julio de 1984, es decir, *después* de las elecciones del primero de julio, y no lo utilizó para enmarcar la discusión acerca de las condiciones electorales ni para llegar a ninguna conclusión acerca de la calidad de las mismas. Además, su resumen del informe de veintisiete páginas indicaba que éste «denunciaba las torturas, el fraude electoral, la concentración de rique-

79. Un resumen de este documento fue entregado a Enfoprensa News Agency, «Information on Guatemala», 22 de junio de 1984. Este excelente boletín semanal de noticias sobre Guatemala publica un flujo constante de temas de aparente interés periodístico; sin embargo, lamentablemente son temas relacionados con las víctimas indignas y en consecuencia no son de interés para los medios de comunicación de masas.

za y las "masacres de familias enteras"», e ignoraba la crítica más específica acerca de las condiciones que deben rodear unas elecciones. El *Time* mencionó brevemente dicha pastoral; *Newsweek* y *CBS News* nunca hablaron de ella.

Por lo que se refiere a las elecciones de 1985, los obispos emitieron otro enérgico comunicado, cuestionando una vez más si podían considerarse significativas unas elecciones en «una situación próxima a la esclavitud y a la desesperación».[80] Señalaron también que las patrullas de defensa civil, la «ideología de seguridad nacional» y el hambre y el empobrecimiento no favorecían unas elecciones serias:

> Para obtener los resultados anhelados, no sólo debe haber libertad en el momento de emitir el voto, sino también toda una serie de condiciones específicas sociales, políticas y económicas que, desafortunadamente, no se dan en Guatemala. En efecto, en Guatemala aún persisten la violencia brutal, la falta de respeto a los derechos humanos y el incumplimiento de las leyes básicas. Es un hecho incuestionable el que cualquier ciudadano/a presionado, aterrorizado o amenazado no es en absoluto capaz de ejercitar su derecho al voto o de ser elegido concienzudamente.

Por lo que nosotros sabemos ese documento no fue mencionado en los principales medios de comunicación ni en ninguna otra parte, pese a que los obispos eran conservadores, dignos de crédito, y una de las pocas instituciones organizadas guatemaltecas no aplastadas por el Estado del terror.

Había otras voces disidentes en Guatemala —políticos de partidos menores, funcionarios sindicales, grupos de derechos humanos, abogados y juristas— que ocasionalmente hablaban de los límites de las condiciones de libertad electorales en el país. Y se produjeron hechos importantes que arrojaban bastante luz sobre el tema, pero la mayoría de ellos fueron proscritos por los medios de comunicación estadounidenses. Por ejemplo,[81] el 4 de julio de 1984, la Comisión para los Derechos Humanos en Guatemala efectuó unas declaraciones en México diciendo que el sentido de las elecciones debía

80. Esta declaración, fechada en octubre de 1985, aparece en el Informe AIJDH.

81. Los dos casos siguientes fueron discutidos en Enfoprensa, «Information on Guatemala».

situarse en el contexto de tres hechos importantes, a saber: que no se cumplieron los requisitos para unas elecciones significativas estipulados en el informe de las Naciones Unidas del 14 de marzo; que se había excluido la participación de la izquierda en las elecciones; y que 115 personas habían sido asesinadas o habían desaparecido durante los treinta días anteriores a las elecciones del primero de julio. La prensa estadounidense hizo caso omiso de esta declaración y de los hechos citados por la comisión.

Consideremos también los siguientes hechos: el 3 de mayo, el general Óscar Mejía Víctores cesó a Ricardo Sagastume Vidaure de su cargo como presidente de la judicatura y del tribunal supremo. El 11 de abril, el estamento judicial había emitido mandatos de *habeas corpus* en favor de 175 personas que habían sido raptadas, y Sagastume había presentado su protesta a Mejía Víctores por la dificultad para proceder contra los abusos de los militares. El 4 de mayo, Acisco Valladares Molina, líder del Partido Populista, señaló que Sagastume había sido «despedido como un simple subalterno». El 8 de mayo, un comunicado de la asociación de abogados guatemaltecos afirmaba que en Guatemala no imperaba la ley, como lo demostraban las constantes violaciones de los derechos humanos y el ejercicio incontrolado de un poder arbitrario. El 8 de mayo, por lo menos dieciséis funcionarios judiciales, entre los que se contaban magistrados del tribunal supremo y del tribunal de apelación, dimitieron como protesta por el cese de Sagastume.

Stephen Kinzer nunca se ocupó de ninguno de estos hechos, ni de su significación, en el *New York Times*, ni tampoco lo hizo ninguno de sus colegas en cualquier otro medio de comunicación. Esto coincide con nuestra hipótesis de que cuando se trata de las elecciones en estados clientes, las condiciones electorales fundamentales, como la presencia o ausencia de los dictados de la ley, quedan fuera del orden del día. Así, mientras Kinzer mencionaba ocasionalmente las patrullas de defensa civil, nunca explicó con detalle lo que eran ni lo que hacían, ni las vinculó a otras estructuras institucionales de control, y evitó de manera sistemática relacionarlas con el poder del ejército. Kinzer tampoco citó casi nunca los numerosos informes sobre esas instituciones coercitivas y su actividad terrorista elaborados por Amnistía Internacional, Americas Watch y el grupo parlamentario británico sobre los derechos humanos, a la hora de comentar los hechos relevantes para las elecciones guatemal-

tecas. Aunque la asamblea constituyente elegida en 1984 elaboró una nueva constitución, Kinzer nunca trató de la naturaleza de dicho instrumento, que validaba el papel especial del ejército y las limitaciones estructurales de la libertad de prensa.

Las informaciones de Kinzer se ajustaban a la línea editorial del *New York Times* y a la agenda del gobierno estadounidense. El esquema editorial del *New York Times* era el siguiente: «los militares, en el poder durante más de treinta y un años, han hecho honor a su promesa de permitir la elección libre de un presidente civil».[82] Los artículos de Kinzer en la misma época transmitían el mismo mensaje —uno de ellos se titulaba «Después de treinta años la democracia tiene una oportunidad en Guatemala» (10 de noviembre de 1985); el título resumía con precisión su contenido, aunque se reservaba su valoración final—. Con todo, el mensaje central era falso, puesto que no se cumplían las condiciones básicas para unas elecciones libres, que el poder del ejército seguía siendo incuestionable, como confirmaba una constitución escrita que eximía al ejército de cumplir la ley y le daba licencia para matar sin constricciones por parte de la «democracia» nominal.[83]

Kinzer sólo pudo transmitir este falso mensaje ignorando el caso Sagastume, las disposiciones institucionales de un Estado de contrainsurgencia, los continuos asesinatos y el omnipresente temor (es decir, las condiciones básicas de unas elecciones libres), y subrayando por el contrario las declaraciones de esperanza, la formalidad del proceso electoral y las promesas del ejército. O sea, el orden del día que el gobierno aplica cuando se trata de elecciones demostrativas.

82. «A New Chance in Guatemala», 12 de diciembre de 1985. El *New York Times* nunca consideró que los sandinistas hubieran «hecho honor» a una promesa en 1984, pero en ese caso tampoco lo hizo la administración Reagan. Del mismo modo, tampoco consideró el hecho de que los generales habían promulgado una amnistía —para sí mismos— antes de permitir que el «proyecto» electoral se llevara a cabo.

83. El editorial del *New York Times* del 12 de diciembre de 1985 felicita a Cerezo por haberse comprometido a «no vengarse de los militares por su mandato asesino». Si traducimos esta versión propagandística, esto significa que Cerezo es demasiado débil para poder prometer una justicia mínima para crímenes terribles, lo cual plantea serias dudas acerca del poder real que detenta. El periódico citado hace una virtud de esta exoneración de los asesinatos de masas, y pretende que es un acto de piedad por parte de Cerezo. El *New York Times* tampoco especula sobre lo que le ocurriría al presidente Cerezo si decidiera tomar «venganza contra los militares».

En su artículo del 27 de diciembre de 1985, «Guatemala vote Heartens Nicaragua Parties» (Los comicios guatemaltecos infunden ánimos a los partidos nicaragüenses), que debería considerarse como uno de los puntos más bajos de su carrera periodística, Kinzer llega a sugerir que los comicios guatemaltecos establecían un modelo electoral para Nicaragua. Al describir la visita de Cerezo a Nicaragua, Kinzer daba cuenta de cómo Cerezo animó a los partidos disidentes, comentándoles que tal vez la paciencia podría minar el poder de los sandinistas (lo que implicaba que Cerezo había minado el poder del ejército guatemalteco y que tenía plenos poderes). El artículo finaliza con una cita de un personaje de la oposición: «Ortega es actualmente el único presidente en toda Centroamérica que viste un uniforme militar, y el contraste empieza a ser evidente». En ningún párrafo del artículo Kinzer señalaba que el poder del ejército no depende de si el jefe de Estado vista o no uniforme, o que el dominio del ejército en Guatemala no había sido aún cambiado. No hacía referencia alguna al hecho de que el ejército guatemalteco había asesinado a decenas de miles de civiles de a pie. Ni parecía apercibirse del hecho de que las elecciones celebradas en Nicaragua fueron mucho más abiertas que las celebradas en Guatemala. Antes al contrario, los medios de comunicación, incluyendo el *New York Times*, desmentían tal cosa constante y explícitamente, de acuerdo con los imperativos del Estado.

Como en el caso de El Salvador, los medios de comunicación estadounidenses nunca llegaron a sugerir que la exclusión de los grupos insurgentes guatemaltecos hacía que las elecciones de ese país no fueran significativas. Algunas veces Kinzer mencionó de pasada que la izquierda estaba al margen de las votaciones, pero nunca se dirigió a alguien para comentar lo que ello implicaba en cuanto a las opciones disponibles para los diversos segmentos de la sociedad. Como coautor de un importante libro sobre el tema, Kinzer estaba perfectamente al corriente de los hechos.[84] La inmensa mayoría de guatemaltecos eran muy pobres, y desde 1954 habían quedado excluidos de toda participación o representación política.

La insurgencia fue el fruto de la lamentable situación y explotación de esa multitud, y de la total imposibilidad de un proceso

84. Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer, *Bitter Fruit*, Doubleday, Nueva York, 1982.

democrático que aliviase la injusticia y la miseria. El ejército gobernante había permitido concurrir a las elecciones y tomar el poder sólo a aquellos partidos y civiles que estuviesen de acuerdo, tácita o explícitamente, en mantener fuera del orden del día político todos los temas que representaban la principal preocupación de la empobrecida mayoría. No existe forma alguna de medir el alcance del apoyo popular a los insurgentes, pero en vista de que éstos optaron por programas orientados a los intereses de la población en general y han sido capaces de mantener su rebelión sin una ayuda externa significativa, y que la respuesta del ejército ha sido una guerra contra prácticamente toda la población rural, la afirmación de los rebeldes de que son el «grueso de la oposición» parece más consistente que cuando este calificativo se aplica a Arturo Cruz y sus asociados de la clase alta nicaragüense. Y si los rebeldes —o cualquier otro candidato que pudiera amenazar al ejército y a la oligarquía haciendo un llamamiento a la mayoría— no pueden concurrir a las elecciones guatemaltecas, ¿no son éstas esencialmente fraudulentas? La Conferencia Episcopal guatemalteca dejó esto bien claro en 1984 y 1985, pero esta respetable fuente, a diferencia de Arturo Cruz y Robert Leiken, fue dejada de lado. Como en El Salvador, estas elecciones no fueron evaluadas, ni antes ni después, en virtud de que se cumplieran o no los requisitos fundamentales para unas elecciones libres. Para el gobierno de los Estados Unidos, los insurgentes no constituían el grueso de la oposición, el Estado del terror guatemalteco era tan sólo un estorbo para las relaciones públicas: las elecciones, por tanto, fueron honestas. El tratamiento de los medios de comunicación de las elecciones guatemaltecas es un fiel reflejo de la agenda de propaganda gubernamental.

3.6. Nicaragua: los medios de comunicación al servicio del proceso de deslegitimación

A diferencia de los casos salvadoreño y guatemalteco, la administración Reagan intentó desacreditar las elecciones nicaragüenses, que amenazaban con legitimar el gobierno sandinista, debilitando así la financiación estadounidense de un ejército terrorista. La administración había censurado a los sandinistas por no ser capaces de celebrar unas elecciones, pero cuando éstas iban a tener lugar las

consideró poco convenientes. Por tanto, desde el momento en que los nicaragüenses empezaron a planificarlas, la administración empezó a expresar sus dudas con respecto a su calidad. Y así como se dedicó a crear una imagen positiva de las elecciones de los dos estados clientes, dedicó importantes recursos para presentar las elecciones nicaragüenses de la manera menos favorable posible. Los medios de comunicación obraron naturalmente en consecuencia, tal como predecía el modelo de propaganda.

Éstos declinaron llamar la atención sobre el cinismo que suponía atacar primero a Nicaragua por no celebrar unas elecciones y afanarse después para desacreditarlas o lograr que se aplazaran.[85] El *Time* mencionó incluso la ausencia de «delegaciones oficiales [de observadores] de la mayoría de democracias occidentales» (19 de noviembre de 1984), como si ello constituyese una prueba desacreditadora de las elecciones y no un reflejo del poder de los Estados Unidos. Más de cuatrocientos cincuenta observadores extranjeros acudieron a las elecciones nicaragüenses, algunos de ellos con magníficas credenciales, y observaron con mayor libertad y mayor alcance que los observadores oficiales estadounidenses en El Salvador y Guatemala. Pero el *Time* y los otros medios de comunicación no les prestaron ninguna atención.[86]

85. Por supuesto, se daba una hipocresía aún mayor si cabe al no llamar la atención sobre la preocupación de la administración por asegurar unas elecciones libres en Nicaragua, pero no así en Chile, Indonesia, Namibia o Corea del Sur, entre muchos otros países, y su pretensión de que los comicios en los estados terroristas de El Salvador y Guatemala eran libres y perfectamente democráticos.

86. El *New York Times* publicó un artículo sobre los numerosos observadores que había en Nicaragua, pero lo hizo *antes* de las elecciones («Election Draws Many U.S. Observers», 4 de noviembre de 1984). El remate del artículo fue sugerir que la tendencia de los observadores era favorable a los sandinistas, cuestión que el *New York Times* nunca aborda cuando hace referencia a los observadores oficiales. En una discusión posterior a las elecciones, el *New York Times* ignoró a los 450 observadores, incluidos aquellos pertenecientes a la Asociación Profesional de Eruditos de América Latina. Un excelente estudio de Lucinda Broadbent, «Nicaragua's elections: A Cruz around the Issues; Comparative Analysis of Media Coverage of the 1984 Elections», inédito por el momento, coincide con nuestras conclusiones y profundiza en los detalles, basándose en el análisis de un amplio muestreo que incluye a las cadenas de televisión de los Estados Unidos y a la prensa británica y estadounidense. Broadbent señala que en su muestreo el espacio dedicado a la oposición al gobierno de Nicaragua es más del doble del espacio favorable al mismo, «una prioridad poco usual en unos medios de comunicación tan amantes de las "fuentes oficiales" se

La utilización que Stephen Kinzer hace de los observadores es digna de mención. En el caso de Nicaragua, ignoró completamente a los observadores no oficiales —muchos de ellos sobradamente cualificados para efectuar tal cometido, como hemos señalado—; llegó incluso a ignorar a la delegación oficial del gobierno holandés, formada por personas de partidos de centro derecha y extremadamente comprensiva con las atrocidades en El Salvador, quienes, tras acudir como observadores a las elecciones salvadoreña y nicaragüense, llegaron a la conclusión de que las elecciones en Nicaragua «habían sido más abiertas que las de El Salvador, en el sentido que había podido tomar parte en ellas más gente, que la oposición no temía por sus vidas», y que «de ese modo la legitimación del régimen quedaba confirmada».[87] Por el contrario, en el caso de Guatemala, citó el informe de los observadores oficiales sobre las elecciones de 1984 y 1985, a pesar de su gran parcialidad y superficialidad. En las elecciones guatemaltecas de 1984, Kinzer hizo mención del informe (no oficial) del Grupo de Juristas para los Derechos Humanos al que nos hemos referido anteriormente, citando sus declaraciones de que el proceso de la votación había sido «correcto en cuanto a su procedimiento», pero omitiendo señalar aquí y en cualquier otra parte sus numerosas afirmaciones acerca de que «la mayor parte de la población vive en temor permanente» (p. 4), de manera que la «corrección del procedimiento» era poco significativa.

Dado que en Nicaragua no se encontraba ningún observador oficial designado por el gobierno de los Estados Unidos, los medios

---

trate del país que se trate» (p. 7). Al igual que nosotros, Broadbent subraya la preponderancia del esquema reaganiano incluso en Gran Bretaña y en la prensa liberal, y la enorme distorsión de la realidad que resulta de esta perspectiva sesgada. También señala que los medios de comunicación nunca hablaron de los programas de los partidos que se presentaban a las elecciones nicaragüenses, lo cual hizo que prevalecieran los clichés reaganianos sobre la política y las intenciones sandinistas. Las descripciones de los medios de comunicación eran «radicalmente opuestas a lo que fue presenciado por los observadores internacionales» (p. 99), razón por la cual, según nuestro punto de vista, estos observadores tenían que ser ignorados.

87. Para más detalles, véase Noam Chomsky, «Introduction», en Morris Morley y James Petras, *The Reagan Administration and Nicaragua*, Institute for Media Analysis, Monografía 1, Nueva York, 1987, nota 32, donde también se discute la distorsión del informe de los observadores holandeses firmada por Robert Leiken en el *New York Review of Books*, 5 de diciembre de 1985. Leiken descarta el informe LASA por considerarlo prosandinista, es decir, erróneo en sus conclusiones.

de comunicación recurrieron con más frecuencia de la habitual a los comunicados que éste emitía. Resulta esclarecedor comparar esta propaganda dirigida de los medios de comunicación con las informaciones de las delegaciones de observadores extranjeros presentes en Nicaragua. A efectos de la comparación, utilizaremos dos de estos informes. Uno, de la delegación interparlamentaria irlandesa, lleva por título *Las elecciones en Nicaragua, noviembre de 1984*. La delegación estaba compuesta por cuatro individuos, tres de ellos de partidos políticos de derecha y derecha moderada, que permanecieron diecisiete días en Nicaragua durante el proceso electoral. Para establecer la comparación con la cobertura informativa de los medios de comunicación utilizaremos también el informe de la delegación de quince personas enviada por la Asociación de Estudios Latino Americanos (LASA), que hemos aludido antes, la mitad de las cuales temía una «considerable experiencia de campo» en Nicaragua. Esta delegación permaneció ocho días en Nicaragua antes de las votaciones, viajó en un autobús alquilado, decidió su propio itinerario y «habló con cualquier persona a la que decidieron acercarse» (así como con muchas personas que espontáneamente se aproximaron a ellos).[88]

3.6.1. *Tono de repulsa y apatía*

La revista *Time* apenas intentó ocultar que seguía el ejemplo de Washington. Citó a John Hugues, a la sazón relaciones públicas del Departamento de Estado (y anteriormente y también después columnista del *Christian Science Monitor*): «No han sido unas elecciones demasiado válidas ... Sólo han sido una representación teatral de los sandinistas».[89] El *Time* siguió su ejemplo con una serie de plumazos denigrantes: «Los sandinistas ganaron, como era de prever ... El ánimo reinante en las elecciones nicaragüenses ha sido de indiferencia ... El resultado nunca estuvo en duda ... En cierta

88. Informe LASA, p. 2.

89. Esto era parcialmente cierto, puesto que los sandinistas estaban intentando cambiar su imagen. Pero también era cierto en El Salvador, con el problema añadido de que las elecciones se celebraron en un contexto de terrorismo de Estado activo. El *Time* nunca empleó la palabra «teatro» para describir ninguno de los dos comicios salvadoreños.

manera, era un anticlímax» (todas las citas pertenecen al ejemplar del 19 de noviembre de 1984). En un artículo anterior (del 29 de octubre), el *Time* se complació en la misma cantinela: «Una campaña sin suspense», los votantes «están demasiado apáticos para acudir a las urnas» (esta era una previsión «pescada» mucho antes de las elecciones). En ambos artículos se cargaban las tintas sobre el «temor». En las elecciones salvadoreñas, el *Time* empleó un tono diferente: «No hay nada que cuestione la significación de este acontecimiento» (es decir, la administración Reagan había realizado una gran inversión de relaciones públicas en las elecciones); «cientos de miles de personas ... han desafiado las amenazas, y algunas veces las balas del FMLN de inspiración marxista, para incorporarse a las largas hileras de votantes que concurrían a las anheladas elecciones presidenciales» (9 de abril de 1984).[90] También en Guatemala «aproximadamente un millón ochocientos mil votantes desafiaron colas de cuatro horas, tormentas tropicales y un apabullante amasijo de opciones políticas para emitir sus votos en las elecciones más abiertas y menos fraudulentas celebradas en su país en más de una década» (26 de julio de 1984). No hay, pues, el menor rastro de apatía o de temor ante la fuerza del *gobierno* en las interpretaciones que hace el *Time* de las elecciones demostrativas.

Por su parte Stephen Kinzer, en el *New York Times*, presentó a su vez una visión bastante menos atractiva de las elecciones nicaragüenses que la que dio de las celebradas en Guatemala. En el primer caso dedicó gran atención a los candidatos de la oposición, como Arturo Cruz (el candidato de los Estados Unidos), mientras que en el de Guatemala ignoró prácticamente a los partidos pequeños, los sindicalistas contestatarios, los rebeldes y los grupos de derechos humanos. A su entender, en Nicaragua votó más gente impelida por el temor que en Guatemala, curioso descubrimiento dadas las circunstancias imperantes en los dos países.[91] Continua-

90. Igual que en 1982, el FMLN no llevó a cabo operaciones militares dirigidas contra el proceso electoral ni amenazó a los votantes salvadoreños. Pero igual que en 1982, el *Time* no se hizo eco de esta información. Asimismo, tampoco informó de las amenazas reales contra los votantes nicaragüenses, difundidas por la radio de la contra, ni de los asesinatos de vigilantes de los colegios electorales.

91. Kinzer mencionó a Cruz en once de los catorce artículos que escribió sobre las elecciones nicaragüenses e incluyó citas del mismo, más o menos extensas, en otros cinco; la desorganización y el hostigamiento aparecen en siete de estos artículos.

mente aludía a los esfuerzos de los sandinistas para obtener el voto, o sostenía que el resultado de las elecciones confirmaba las previsiones, o señalaba la disolución de mítines electorales y las acusaciones de juego sucio y los abandonos de la oposición. Como hacía el *Time*, Kinzer afirmaba que los votantes adoptaban una actitud «filosófica», que no «había un entusiasmo generalizado por las elecciones» y que, «a primera vista», no se apreciaba mucho entusiasmo». Kinzer no comparó las modalidades electorales, el abanico de opciones u otras condiciones básicas en Nicaragua y Guatemala (o El Salvador), sino que sus informaciones sobre las elecciones de ambos países trataban cuestiones diferentes, ajustándose estrechamente a la orientación propagandística.[92]

Con respecto a la presunta actitud negativa y apatía reinantes, tanto la delegación irlandesa como la de LASA señalaron que el voto en Nicaragua era totalmente secreto y no obligatorio. Por tanto, como observó la delegación irlandesa, el menor índice de abstención era más significativo e «invalidaba las previsiones de que un amplio sector de la población se oponía a las elecciones. Además, el porcentaje de votos nulos (un 7,4 por 100) es comparable al de cualquier votación en un país europeo, donde la población es bastante más culta» (p. 7). Esta delegación indicaba también que

> uno de los miembros de nuestro grupo se dirigió a un anciano que esperaba para depositar su voto en un colegio electoral de la zona rural, preguntándole: «¿Qué encuentra usted diferente entre ésta y otras elecciones en las que haya participado?». El hombre respondió: «Todo». «¿En qué sentido?» El hombre se encogió de hombros y repuso: «Todo es diferente».

Los medios de comunicación de los Estados Unidos nunca encontraron a un hombre como ese anciano. La delegación irlandesa indicaba asimismo que:

> Algunos observadores de otros países han dado a entender que la gente que acudía a los colegios electorales no mostraba mucho entusiasmo. Esto no resulta sorprendente, puesto que la gente hacía

92. Véanse especialmente «Sandinista Is Favored but Runs Hard» (30 de octubre 1984), «Going Through the Motions in Nicaragua» (4 de noviembre) y «Sandinistas Hold Their First Elections» (5 de noviembre).

> cola pacientemente esperando su turno para entrar en la cabina y marcar su papeleta electoral. Un miembro de nuestra delegación que tuvo la oportunidad de observar a los votantes en las elecciones estadounidenses, tan sólo dos días después, vio que tampoco allí la gente mostraba mucho entusiasmo cuando estaba haciendo cola.

En nuestra opinión el invariable entusiasmo y optimismo que los medios de comunicación estadounidenses perciben en las elecciones de los estados clientes, y la apatía y la actitud negativa que encuentran en las elecciones de los países no favorecidos por la administración estadounidense, no tienen nada que ver con la realidad electoral, sino que responden totalmente al guión propagandístico impuesto y al cribado de las opiniones e informaciones contrarias.

3.6.2. *Haciendo caso omiso de la superior calidad de las elecciones nicaragüenses*

El modelo de propaganda dedica gran atención a los mecanismos electorales de los estados clientes, pero no actúa igual cuando se trata de estados cuyas elecciones se denigran o menosprecian. Así sucedió en los casos que estamos estudiando. El *Time* (9 de abril de 1984) describió detalladamente los elaborados preparativos electorales en El Salvador, los mecanismos «a prueba de fraude», la utilización de urnas transparentes «Lucite», y el marcado y sellado de las tarjetas de identificación con tinta indeleble. Sin embargo resultó que los mecanismos informatizados de alta tecnología escapaban a la capacidad de comprensión de la población, puesto que un cincuenta por ciento de la misma era analfabeta. Ni el *Time* ni sus colegas señalaron en ningún momento la importancia de mejorar la alfabetización como necesario preludio de las elecciones, ni sugirieron que las urnas «Lucite» podían comprometer el secreto de voto, o que el sellado de las tarjetas de identificación pudiese ser un instrumento coercitivo que ayudase a explicar el número de votantes.

Nicaragua hizo grandes esfuerzos para garantizar el secreto electoral y para implantar un sistema de voto fácil e inteligible. Para ello, emprendieron una campaña de alfabetización masiva antes de las elecciones, y se esforzaron para que el material electoral impre-

so resultara accesible a la mayoría. Las delegaciones de Irlanda y de LASA consideraron que todo ello era un elemento positivo más de las elecciones. Nicaragua asimismo concedió gran prioridad a la elaboración de un censo completo en el que se inscribiesen todos los votantes. La delegación irlandesa señaló que «otras elecciones celebradas recientemente en otros países centroamericanos, como El Salvador y Guatemala, no tomaron este tipo de medidas, por lo que se cuestiona la validez de sus registros, basados en censos obsoletos, registros oficiales incompletos de los cambios poblacionales, y otras fuentes» (p. 5). Por otra parte Nicaragua evitó deliberadamente las urnas transparentes, el sellado de las tarjetas de identificación y otros mecanismos que hubiesen permitido a las autoridades identificar si alguien había votado o no. Según LASA:

> Las papeletas de voto se imprimieron en papel opaco blanco. El contraste con las elecciones de la era Somoza es espectacular. Los Somoza utilizaban papeletas de voto transparentes, de manera que prácticamente uno debía asumir que su voto no era secreto. El mismo problema se dio en las elecciones de 1984 en El Salvador, en las que finas papeletas electorales quedaban depositadas en urnas transparentes. En Nicaragua, en 1984, el voto fue realmente *secreto* (p. 14).

Además en Nicaragua el sistema electoral era proporcional, lo que posibilitaba que los partidos pequeños obtuviesen representación parlamentaria; asimismo los partidos podían acreditarse fácilmente para participar en las elecciones. En 1984 en Guatemala los partidos necesitaban 4.000 firmas para poderse acreditar, cifra considerable y no fácil de conseguir para los partidos disidentes en una sociedad donde los asesinatos políticos se sucedían día tras día.

Stephen Kinzer y sus asociados nunca mencionaron estas diferencias. Por lo general, los méritos esenciales de las elecciones nicaragüenses no fueron nunca contrastados con los procedimientos seguidos en los estados clientes de los Estados Unidos, comparación que hubiera resultado muy reveladora y que hubiese podido minar completamente el «guión» Reagan, con el que estaban comprometidos los medios de comunicación a la hora de informar de las elecciones. Como ya hemos visto, el *Time* se refirió a los amañados mecanismos salvadoreños como si fuesen algo digno de encomio, y el *New York Times* mencionó a su vez en una sola ocasión (Richard Meislin, 25 de marzo de 1984) el tema de las urnas transparentes en

El Salvador, repitiendo sin objeción alguna la postura oficial de que tales urnas pretendían evitar el fraude electoral. No se contempló ninguna otra posibilidad, y el *Newsweek* y el *CBS News* no se ocuparon de estos temas.

3.6.3. *De cómo la irrupción de los rebeldes fue dejada al margen, y de cómo la participación electoral dejó de ser un indicativo del triunfo de la democracia*

En las elecciones salvadoreñas, la irrupción de los rebeldes fue un tema central de la orientación propagandística del gobierno. Ya que los rebeldes se oponían a las elecciones, mediante el voto la gente expresaba su rechazo a los rebeldes y su aprobación al ejército. La participación electoral indicaba el triunfo democrático y la derrota de los rebeldes. Como ya hemos visto, los medios de comunicación siguieron este esquema sin discutirlo. En el caso de Nicaragua, la orientación propagandística se invertió: los rebeldes eran los chicos buenos, y las elecciones convocadas por los chicos malos se condenaron de antemano. La oposición de los rebeldes a las elecciones —y sus afanes por sabotearlas— en modo alguno hicieron de la votación y la elevada participación electoral un indicador del rechazo de los rebeldes y la aprobación de los sandinistas.

Una vez más, los medios de comunicación estadounidenses siguieron el esquema gubernamental *pese a que ello significaba invertir totalmente los parámetros que habían aplicado en las elecciones salvadoreñas.* Los contras y quienes les apoyaban exhortaron a la gente a abstenerse e interfirieron en el proceso electoral por lo menos con igual energía (y con más asesinatos que) los rebeldes en El Salvador. Por si fuera poco, el secreto de voto quedaba más asegurado y no se obligaba a los ciudadanos a votar, o a poseer tarjetas de identificación selladas certificando que habían votado. Los sandinistas tampoco asesinaban, día sí y día también, a ciudadanos de a pie, como era el caso en las «democracias de los escuadrones de la muerte». Así pues, la participación electoral resultaba bastante más significativa en las elecciones nicaragüenses que en las celebradas en El Salvador y Guatemala, dado que los ciudadanos de Nicaragua podían abstenerse o votar a los partidos de la oposición con total libertad.

Los medios de comunicación estadounidenses obviaron este problema a base principalmente de no hablar de él. Se limitaron a ignorar la campaña de la contra y los Estados Unidos en favor de la abstención, orquestada con amenazas y ataques a los colegios y funcionarios electorales, y no destacaron en absoluto que el voto fuese efectivamente secreto y que era posible *no* votar,[93] de la misma manera que, paralelamente, magnificaron, en 1982 y 1984, los esfuerzos de los rebeldes en El Salvador para perturbar las elecciones y ocultaron la *obligatoriedad* del voto y otras presiones para inducir al mismo.

Pese a que el *New York Times* había centrado la atención en el «reto» que suponía la oposición y en las presuntas perturbaciones causadas por los rebeldes a la hora de dar una significación especial a la participación electoral en las elecciones salvadoreñas de 1982,[94] Stephen Kinzer no mencionó ni una sola vez que los contras atacaron varios colegios electorales y habían radiado llamamientos exhortando a la abstención.[95] Para Kinzer, ni tales hechos ni la campaña estadounidense para desacreditar las elecciones representaban un «reto» que resaltara la importancia de la participación electoral en Nicaragua.

La delegación irlandesa señaló que «los partidos del Comité Coordinador Democrático [sustentado por la comunidad empresarial] se oponía al registro de votantes, y hacían llamamientos para boicotear ese proceso» (p. 5), e informó que once colegios electorales fueron cerrados a causa de las actividades contrarrevolucionarias (p. 7). La población votó masivamente «pese a los posibles riesgos que ello entrañaba», por lo cual la delegación irlandesa consideró que la participación electoral fue significativa y «mostraba cuán importantes eran las elecciones para el pueblo» (p. 6). La delegación de LASA aludió a las diversas formas en que «el grueso de la oposición» llamaba a la abstención, y citaba las advertencias radiofónicas emitidas al país desde Costa Rica, en las cuales amenazaban con que la contra asesinaría a los votantes (pp. 16 y 28). LASA

93. Más adelante veremos que el *Time* incluso intenta dar a entender que en Nicaragua el voto es resultado de amenazas coercitivas.

94. Véase la cita de Warren Hoge en la página 185.

95. Como señalamos más adelante, el informe LASA trata estas cuestiones, pero para Kinzer y el resto de los medios de comunicación estaban fuera del orden del día.

señaló también «la nutrida participación electoral» y el «mayor entusiasmo entre los votantes de las zonas menos favorecidas que entre los de los barrios acomodados».[96] Al igual que el *Time*, LASA constató que la participación electoral no satisfizo totalmente las expectativas de los funcionarios y representantes del frente sandinista, pero, a diferencia de dicho periódico, LASA manifestó que el nivel de participación conseguido «se podía comparar favorablemente con los niveles alcanzados en otras dos elecciones celebradas recientemente en América Latina, así como con las elecciones presidenciales estadounidenses de 1984 ...» (p. 16).[97]

En resumen, los informes de ambos grupos de observadores se ocuparon de las irrupciones de los rebeldes en Nicaragua, la participación electoral y del significado de ésta. Los medios de comunicación estadounidenses, que habían dedicado mucha atención a estos temas con referencia a las elecciones salvadoreñas —ajustándose al esquema propagandístico del gobierno—, consideraron que no eran dignos de mención en el caso de Nicaragua.

3.6.4. *La renovada sensibilidad ante la coerción*

Como ya hemos mencionado anteriormente, las «medidas coercitivas» quedaban fuera del orden del día del gobierno de los Estados Unidos cuando se trataba de las elecciones salvadoreñas y guatemaltecas, al igual que el elemento del temor engendrado por los asesinatos masivos y la ausencia de cualquier imperio de la ley en esos dos estados clientes de los Estados Unidos. Sin embargo, la coerción y el temor hicieron su aparición en el orden del día en el caso de Nicaragua. Este resurgimiento quedó de manifiesto con pasmosa deshonestidad e hipocresía en el *Time*, que jamás había mencionado el temor y las presiones del gobierno como factores a tener en cuenta a la hora de explicar la participación electoral en los comicios auspiciados por los Estados Unidos, ni siquiera tras el

96. Nótese que en los Estados Unidos ocurre exactamente lo contrario, lo cual refleja el reconocimiento por parte del público en general de ambas sociedades sobre quién está en condiciones de ganar mediante el proceso electoral.

97. Efectivamente, el índice de participación fue más elevado que en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1984, en las que sólo participó algo más de la mitad del electorado.

asesinato de 50.000 civiles. Sin embargo en Nicaragua los «beligerantes» sandinistas ostentaban un «impresionante monopolio de la fuerza» y era extremadamente dudoso que «relajasen su control», lo cual por otra parte era «esencial para una libre contienda electoral». George Russell, corresponsal del *Time* en América Central, localizó incluso a «un diplomático latinoamericano» que declaró que «no puede haber democracia donde no existe en absoluto libertad personal» (8 de octubre y 14 de mayo de 1984). Ni Rusell ni el *Time* consideraron jamás que el gobierno salvadoreño fuese «beligerante», que detentase un «impresionante monopolio de la fuerza», o que dispusiesen de un «control» que era preciso relajar para la contienda electoral, y la libertad personal nunca se mencionó como algo ausente, o siquiera pertinente, a las elecciones salvadoreñas. Sin embargo, en las elecciones nicaragüenses el *Time* consideró que «se dieron muchas presiones para la participación: numerosos ciudadanos temían perder sus preciosas cartillas de racionamiento». Además, «el gobierno había dejado claro que consideraban erróneo votar a una opción contrarrevolucionaria». Posteriormente, citaron a Daniel Ortega «todos los nicaragüenses auténticos van a votar. Los únicos que no van a votar son los traidores» (19 de noviembre de 1984).

Como ya hemos señalado antes, tanto el ejército guatemalteco como el de El Salvador advirtieron a la población de que el voto era exigido por la ley y que no votar sería considerado una traición. Estas declaraciones eran *advertencias* más concretas, mientras que las de Ortega eran un insulto pero no una amenaza clara. Esta fue la única declaración de ese tipo de Ortega, por lo que la afirmación del *Time* de que el gobierno «había dejado claro» que el no votar era «contrarrevolucionario» es doblemente deshonesta, puesto que la declaración no era claramente una advertencia, y «contrarrevolucionario» era una insidiosa palabra urdida por el *Time*. La postura oficial del gobierno *tal como quedaba reflejada en la ley* era que los nicaragüenses no tenían la obligación de votar, pero el *Time* no dio cuenta de ello. Tampoco informó de que el voto era secreto y que no existía ninguna tarjeta de identificación susceptible de control, de manera que no habría sido posible llevar a cabo la amenaza, caso de que tal cosa hubiera existido realmente. Suprimió el hecho de que el ejército nicaragüense no asesinaba regularmente siquiera a «contrarrevolucionarios», mientras que los ejércitos salvadoreño y

guatemalteco asesinaban a muchos que no eran «revolucionarios», pero que de alguna manera estaban en camino de serlo. En resumen, difícilmente la propaganda hubiese podido ser más descarada.

El presunto «hecho» que señalaba el *Time*, que «mucha» gente temía que se le retirase la cartilla de racionamiento, fue desmentido por LASA, que declaró que «en las entrevistas que hemos realizado en muchos barrios de diversas ciudades, nunca hemos encontrado pruebas de que las cartillas de racionamiento fuesen retenidas o retiradas ... por *ninguna* razón», y mencionó que se habían presentado cinco denuncias ante el consejo electoral alegando intimidación por amenaza de retirada de la cartilla de racionamiento, pero «ninguna de estas alegaciones fueron confirmadas por una investigación» (p. 27). El *Time* no indicó la fuente que le había proporcionado las pruebas y no pudo ofrecer ni un solo ejemplo de los «muchos» casos.

Hemos visto antes cómo Stephen Kinzer citó más quejas por coerción en las elecciones nicaragüenses que en las guatemaltecas, notable logro periodístico dada la incuestionable realidad de la escala y el carácter de la represión en esos dos estados. El que no tuviese en cuenta el Estado del terror en Guatemala como un factor básico que afectaba la calidad de las elecciones en todas sus dimensiones —la posibilidad de que los candidatos concurriesen a ellas, la libertad de expresión y de prensa, la existencia de grupos intermedios, el temor endémico y la relevancia de la participación electoral— alcanzó el nivel de un fraude masivo. Asimismo su cobertura informativa de Nicaragua suponía una enorme tergiversación. No mencionó la *ausencia* de los asesinatos de masas, así como tampoco la ausencia de medidas coercitivas —no había urnas transparentes, ni se exigía sellar la tarjeta de identificación, ni había obligación legal de votar—. La única vez que en sus catorce artículos sobre las elecciones Kinzer mencionó el tema de la obligatoriedad del voto supone también un serio fraude, pues citaba a un votante que decía: «Siempre he votado porque votar es siempre obligatorio». «Desde luego, la ley dice una cosa, pero después de un tiempo uno se da cuenta de que votar forma parte del patriotismo, y el patriotismo contribuye a una vida larga.»[98] La fuente de Kinzer da a entender, aunque no lo diga explícitamente, que en Nicaragua el

98. «Sandinistas Hold Their First Election», *New York Times* (5 de noviembre de 1984).

voto no es una obligación legal, y su confusa declaración —incluso el reservado Kinzer reconocía la ausencia de la obligatoriedad legal de votar— queda contrarrestada por la insinuación de su interlocutor de que el voto podía estar basado en algún tipo de amenaza.

Tanto la delegación irlandesa como la de LASA señalaron la mayor protección del secreto de voto en los comicios, que, en palabras de esta última organización, fueron «meticulosamente diseñados para minimizar los posibles abusos» (p. 15). Resaltan también el que el voto no fuese exigido por la ley y que, al contrario de lo que afirmaba la propaganda de los Estados Unidos expuesta en el *Time* y en otros medios, las medidas coercitivas para obtener el voto eran mínimas. Los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno que pudieran contribuir a un ambiente de temor eran, según LASA, «de escala muy reducida» si se «comparaban con otros países de la zona...» (p. 28). De hecho, constataron que el temor en Nicaragua se debía más a los Estados Unidos y a la contra que al gobierno de Managua.

3.6.5. *El «grueso de la oposición» en primera línea*

Como ya hemos visto, el hecho de que ni en El Salvador ni en Guatemala los insurgentes participasen en las elecciones no inmutó lo más mínimo a los Estados Unidos. Ni tampoco que Duarte reconociese, en 1981, que «las masas estaban con las guerrillas» cuando se unió a la Junta un año antes (lo que era tanto como admitir que constituía el «grueso de la oposición»).[99] Ni tampoco los medios de comunicación quedaron afectados por las matanzas de los dirigentes de la oposición efectuadas por los ejércitos de El Salvador y Guatemala. En El Salvador, la exclusión de los rebeldes formaba parte del plan electoral del gobierno de los Estados Unidos, pues en ese caso no eran el «grueso de la oposición», y la proscripción y asesinato final de sus dirigentes no comprometía la validez de las elecciones. En el caso de Nicaragua, el gobierno de los Estados Unidos trabajó con un esquema diferente, que contrastaba abiertamente con el anterior: la exclusión de los rebeldes

99. Edward Schumacher cita a Duarte con este fin en el *New York Times* del 21 de febrero de 1981.

—a los cuales apoyaba— y de cualquier otro candidato era un grave asunto que amenazaba la validez de las elecciones. Los medios de comunicación siguieron ese esquema como dóciles perritos (dando lametazos en lugar de vigilar).

El eje central de la línea propagandística para las elecciones nicaragüenses que reiteraban una y otra vez los funcionarios estadounidenses era la presunta lucha de Arturo Cruz para inducir a los sandinistas a que creasen un sistema abierto que le permitiese concurrir sin trabas, la incapacidad de los «marxistas-leninistas» para efectuar las concesiones pertinentes, el rechazo de Cruz a participar y la consiguiente «exclusión» del «grueso de la oposición». Sin embargo, Cruz era el «grueso de la oposición» tan sólo para el constructo del gobierno y de los medios de comunicación de los Estados Unidos. Antiguo expatriado (que posteriormente admitió su vinculación con la CIA), carente de toda base electoral en Nicaragua, Cruz hubiese jugado con toda certeza un pésimo papel en unas elecciones libres.[100] Existen buenas razones para creer que Cruz no pensó nunca seriamente en concurrir a las elecciones, pero tanto él como sus patrocinadores utilizaron esa posibilidad justamente para que el esquema de propaganda pudiese surtir efecto.[101]

Los medios de comunicación siguieron las andanzas de Cruz de manera constante y acrítica, por lo que desempeñó un importante papel: continuamente se referían a él como el «grueso de la oposición» o «el líder de la oposición» al partido en el poder (sin ninguna prueba que sustentase tales afirmaciones); su candidatura representaba «una amarga prueba para los propósitos democráticos de los sandinistas» (*Time*, 29 de octubre de 1984). Para el *New York Times* (editorial del 8 de octubre de 1984) unas elecciones sin Cruz serían un «fraude»; en sus columnas de noticias éste ocupaba un

100. El 23 de abril de 1985, el *Wall Street Journal* reveló que Cruz estaba en la nómina de la CIA. Entonces Oliver North se encargó personalmente de esta financiación, esperando así distraer la atención del hecho de que Cruz había sido financiado por la CIA durante el período en que el gobierno estadounidense había estado intentando desacreditar las elecciones nicaragüenses. Véase Stephen Engelberg, *New York Times*, 15 de julio de 1987.

101. Stephen Kinzer, «Ex-Contra Looks Back Finding Much to Regret», *New York Times* (8 de enero de 1988). Aquí Cruz expresa la creencia de que la coalición antisandinista (la Coordinadora) que propuso su candidatura «estaba dominada por gente que nunca tuvo el propósito de llevar a cabo una campaña electoral», y que «procuraron desconcertar a los sandinistas mediante una retirada».

lugar central desde el cual podía denunciar regularmente el proceso electoral como una «farsa» o un «fraude».[102] De hecho el *New York Times* publicó en la última página un buen artículo en el que se demostraba que Cruz no pensaba seriamente en participar, o que sus íntimos aliados nicaragüenses y los funcionarios estadounidenses no le hubieran permitido tal cosa, y que su función era, como ya hemos señalado, desacreditar las elecciones aparentando estar interesado en ellas y acaparar así la atención de la prensa.[103] Pero este artículo menor fue una excepción que no alteró la ininterrumpida atención a la presunta exclusión de la supuesta oposición principal como elemento central del acontecimiento electoral nicaragüense.

Los medios de comunicación se limitaron a adoptar sin reparos el esquema de propaganda del gobierno, centrándose en un presunto «grueso de la oposición» en Nicaragua, que voluntariamente optó por no participar, e ignorando por otra parte el *verdadero* grueso de la oposición de El Salvador, excluida por la fuerza y de acuerdo con los planes. Las fuentes que podían explicar la importancia del «grueso de la oposición» en El Salvador y la relevancia de su exclusión —los observadores salvadoreños y extranjeros—, fueron sencillamente dejadas de lado.[104] Por el contrario, en el caso de las elecciones nicaragüenses, tanto Cruz como los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos tuvieron vía libre para presen-

102. Véanse la nota 91 y los cuadros 3.2 y 3.3.

103. Philip Taubman, «U.S. Role in Nicaragua Vote Disputed», *New York Times* (21 de octubre de 1984). El 30 de junio de 1984, Robert McCartney manifestó en el *Washington Post* que «los líderes de la oposición admitieron en unas entrevistas que nunca habían considerado seriamente participar en las elecciones del 4 de noviembre sino que sólo debatían si deberían hacer campaña durante dos meses y entonces retirarse de la competición arguyendo que los sandinistas habían puesto en su contra al electorado».

104. Lord Chitnis, veterano observador de elecciones que asistió a los comicios salvadoreños en nombre del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento Británico, señaló que «ante todo está un hecho crucial para la comprensión global del ejercicio, a saber, que los políticos que estaban a la izquierda de la Democracia Cristiana (PDC) no podían participar libremente en los comicios ... [la exclusión del FDR hizo de éstos] un concurso de promesas vagas e inferencias entre dos candidatos que ya eran en gran medida responsables de la situación en la que se encuentra hoy El Salvador». En El Salvador, continúa diciendo, las elecciones de 1984 se celebraron en una atmósfera de terror y desesperación, de rumores macabros y espantosa realidad (Pratap C. Chitnis, «Observing El Salvador: The 1984 Elections», *Third World Quarterly*, octubre de 1984, pp. 971-873). Los medios de comunicación estadounidenses nunca citaron a Chitnis como fuente.

tar diariamente sus temas, sin ningún comentario sobre la posible falsedad o el intento manipulador de éstos, en perfecto acuerdo con las perspectivas de un modelo de propaganda.

La administración Reagan no sólo mantenía a Cruz ante los medios de comunicación, sino que trató de sobornar a otros candidatos de las elecciones nicaragüenses para que se retirasen a fin de que se cumpliese la profecía de unas elecciones irrelevantes. Fue notable el descaro con el que una gran potencia intervino en dichas elecciones, pero los medios de comunicación estadounidenses dedicaron una mínima atención a esta cuestión. Nunca denunciaron que fuese algo antidemocrático, ni lo vincularon a la campaña de Cruz (sugiriendo que representaba un gran esfuerzo para desacreditar las elecciones por medio del boicot), ni sugirieron jamás que la «participación electoral» era más significativa dada la activa campaña estadounidense para desacreditar las elecciones. El 31 de octubre de 1984, Stephen Kinzer informó que altos funcionarios estadounidenses confirmaron los «contactos regulares» con partidos nicaragüenses. Su artículo, titulado «Partidos nicaragüenses aluden a presiones sandinistas y estadounidenses», ¡equiparaba, tanto por su encabezamiento como por su contenido, la ayuda y acuerdos del gobierno nicaragüense con partidos de su país con la intervención de los Estados Unidos para que dichos partidos boicoteasen las elecciones! *CBS*, *Newsweek* y el *Time* ignoraron por completo el programa de sobornos estadounidense. *Time* concedió gran atención al número de candidatos y a la retirada de algunos de ellos, pero se cuidó mucho de mencionar que estas retiradas se debían a la connivencia, sobornos y presiones de los Estados Unidos. Incluso llegó a citar, sin hacer ningún comentario, la invención del Departamento de Estado de que «no estaban intentando influenciar el resultado de las elecciones» (19 de noviembre de 1984). La oscuridad más absoluta se cernió sobre todas las pruebas fundamentales. En el mismo artículo, el *Time* afirmaba que «los Estados Unidos han apoyado con fuerza las elecciones en las que todos los partidos se sienten con libertad para participar», falseando la realidad sin rubor alguno.

Por lo que concierne al abanico de opciones electorales en Nicaragua, la delegación irlandesa señalaba que «la ley [de partidos políticos] garantiza la participación de los partidos políticos de todas las ideologías», interesante detalle avalado por el número de opciones políticas representado por los partidos participantes, bas-

tante más amplio que el que podemos encontrar en El Salvador y en Guatemala (o en los Estados Unidos).

LASA declaró que «a ninguna tendencia política nicaragüense importante le fue vetado el acceso al proceso electoral de 1984» (p. 18). Evidentemente no podemos decir lo mismo de El Salvador y Guatemala. Pero los medios de comunicación estadounidenses no aludieron a estos importantes aspectos de la ley y de la práctica nicaragüenses, ni las compararon con las de los estados clientes.

Con respecto al papel de Cruz como «grueso de la oposición», la delegación irlandesa señaló dos factores. Primero:

> La delegación no ha encontrado indicios de que estos partidos [los tres pequeños partidos relacionados con Cruz que boicotearon las elecciones] gocen de un amplio apoyo dentro del país. Tras nuestras conversaciones con diversos personajes políticos, entre los que se contaban representantes de legítimos partidos de la oposición, nos ha quedado claro que la intención de Arturo Cruz de presentarse a las elecciones era dudosa desde el principio... Mientras que la prensa internacional dedicaba gran atención a esos partidos, los miembros de la delegación constataron que su incidencia entre la población era escasa y que poca gente apoyaba su política (p. 7).

En segundo lugar, la delegación irlandesa subrayó que la población tenía libertad para abstenerse o para votar en blanco, y que el escaso seguimiento de esas opciones, «pese al abstencionismo propugnado por» los partidos de Cruz, minimizaba la credibilidad de sus afirmaciones (p. 7). El informe de LASA, basado en un exhaustivo estudio de los hechos, llegó a las mismas conclusiones, a saber: 1) que las «pruebas circunstanciales» indicaban la fehaciente probabilidad de que Cruz no tuviese intención de participar, y 2) que carecía de base electoral y habría sufrido un revés en los comicios.

Más tarde Kinzer admitió este hecho, pero dándole el acostumbrado sesgo propagandístico. Escribió que «la arrolladora victoria de Ortega nunca se había puesto en duda», porque «la oposición fue hecha añicos» (porque, aunque se guardó mucho de señalarlo, carecía de base popular, al contrario que el bien organizado partido sandinista), y «porque los sandinistas controlaban la mecánica electoral». Ni Kinzer ni ningún otro informador ofreció la más mínima prueba de que el control sandinista de la mecánica electoral convirtiera las elecciones en un fraude, ni refutó la conclusión de la

delegación de LASA, según la cual, «el FSLN hizo menos por beneficiarse de su posición que lo que cualquier otro partido en su situación (incluyendo los de los Estados Unidos) acostumbran a hacer». Unos días antes, Kinzer había citado unas declaraciones de Arturo Cruz en las que éste afirmaba que, en favor de los sandinistas, había que reconocer que éstos habían derrocado a Somoza y «habían derribado barreras en Nicaragua que debían ser derribadas, y que esto era irreversible», puesto que «los sandinistas habían trabajado en las catacumbas, mientras que la oposición tradicional había perdido el contacto con las crecientes expectativas de las masas». Como Kinzer sabía muy bien, aunque no lo manifestase por escrito, esta situación se daba ya en las elecciones de 1984, y por este motivo la victoria de los sandinistas nunca se puso en cuestión. Este capcioso rechazo de las elecciones de 1984 es una de las diversas contribuciones de Kinzer a la campaña de los medios de comunicación comparando a los «presidentes electos» de las cuatro «democracias» centroamericanas con el dictador sandinista Ortega, presidente electo sin el *imprimatur* del gobierno de los Estados Unidos. El contexto específico era la masiva campaña de los medios para atribuir el fracaso del acuerdo de paz de Ciudad de Guatemala de agosto de 1987 a los sandinistas, de acuerdo con las prioridades de la administración Reagan, en vísperas de una votación crucial en el Congreso para la renovación de la ayuda a los contras.[105]

LASA también destaca que Cruz —representante de hecho de los contras, un grupo de la comunidad de negocios local y de los Estados Unidos— pudo tomar parte en las elecciones nicaragüenses, con muchos fondos, gran acceso a los medios de comunicación y sin miedo de ser asesinado. Aun sin Cruz los contras tenían voz electoral. LASA apunta que

> no conocemos ningunas elecciones en América Latina (o en cualquier otro país) en las cuales los grupos que propugnan el derrocamiento violento del gobierno en el poder hayan sido incorporados al proceso electoral, especialmente cuando estos grupos están obvia-

105. Stephen Kinzer, «Ortega: Can He Be Trusted?», *New York Times Magazine* (10 de enero de 1988); Kinzer, «Ex-Contra Looks Back», *New York Times* (8 de enero de 1988). Sobre la realidad de los acuerdos de paz y la contribución de los medios de comunicación para que pasaran desapercibidos, atendiendo el orden del día del gobierno, véase Chomsky, *Culture of Terrorism*, y los artículos que ponen al día la cuestión en la revista *Z* (enero de 1988, marzo de 1988).

> mente apoyados por una potencia extranjera. Sin embargo los *contras* estaban representados en la campaña electoral de 1984. Dos de los partidos afiliados a la Coordinadora, el PSD y el PLC, apoyaban su inclusión en las elecciones. Y al tiempo que negaban representar a la *contra*, Arturo Cruz y la Coordinadora parecían aprobar y promover su causa, tanto en Nicaragua como en el extranjero (p. 18).

LASA trató también con cierto detalle la intervención de los Estados Unidos en las elecciones, mencionando cómo durante la campaña electoral aviones estadounidenses efectuaron aterrorizadores reconocimientos aéreos, y comentando los esfuerzos de los Estados Unidos para conseguir la retirada de candidatos. LASA citaba declaraciones de personalidades de los partidos liberal y conservador que afirmaban que los Estados Unidos les habían ofrecido grandes sumas para que los candidatos se retirasen de las elecciones.

3.6.6. *La preocupación por la libertad de prensa y de reunión*

No sólo los derechos de todos y cada uno de los candidatos para optar a un cargo público, sino también otras condiciones básicas que estaban fuera del orden del día en El Salvador y Guatemala, suscitaron gran interés entre el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses en el caso de Nicaragua. El *New York Times*, el *Time*, *Newsweek* y *CBS News* destacaron repetidamente las penalidades y tribulaciones de *La Prensa*,[106] pese a que durante las elecciones salvadoreñas ninguno de ellos mencionó siquiera la violencia física y los asesinatos sufridos por *La Crónica* y *El Independiente*, o el gran número de periodistas asesinados. La violencia de bandas presuntamente organizadas por el gobierno, y la amenaza de los comités de defensa sectorial en Nicaragua, fueron descritas por el *Time*, mientras que nunca mencionó al grupo ORDEN o a los

106. Existe también la pretensión, elaborada por los medios de comunicación, de que *La Prensa* es el periódico que se opuso valientemente a Somoza, y cuyo director fue víctima de este gángster respaldado por los Estados Unidos. Pero seguramente, los medios de comunicación saben bien que la relación entre ambos periódicos apenas es más que el compartir un nombre. El director dejó el periódico en 1980, tras un conflicto con los propietarios, para formar *El Nuevo Diario*, y se le unió un 80 por 100 del personal. Es este periódico, si hay alguno, el que puede reclamar legítimamente ser descendiente del viejo *La Prensa* (Council on Hemispheric Affairs, *Washington Report on the Hemisphere*, 23 de julio de 1986).

escuadrones de la muerte en El Salvador y Guatemala como algo pertinente en relación a la calidad de los comicios. Las condiciones básicas para unas elecciones libres no sólo volvieron a hacer su aparición en el orden del día de los medios de comunicación, sino que éstos daban a entender que en Nicaragua no se cumplían tales condiciones. Estas insinuaciones se basaban casi exclusivamente en citas a funcionarios estadounidenses de Cruz y de sus aliados en Nicaragua. Los medios de comunicación nunca dieron muestras de haber investigado estos temas por sus propios medios, ni de recurrir a informadores independientes.

Richard Wagner, en el programa *CBS News* del 3 de noviembre de 1984, se refirió como de costumbre a Arturo Cruz como la «oposición más enérgica» y puso también en escena a un sencillo ciudadano nicaragüense (sin duda elegido al azar), que dijo así: «¿Cómo pueden ser éstas unas elecciones libres [*sic*], si no tenemos libertad de expresión ni libertad de prensa?». Wagner afirmó que «además de censura» en Nicaragua hay escasez de alimentos, un deteriorado sistema de transportes, un impopular servicio militar obligatorio y oposición eclesiástica, de manera que, con todo ello, «quedaba claro por qué lo que estaba sobre el tapete no son unas elecciones libres y abiertas». Es de notar su cinismo al no plantear *por qué* en Nicaragua había escasez de alimentos y un servicio de transportes deteriorado. Wagner escamoteó asimismo otra distinción entre Nicaragua y El Salvador: el primer país tiene «un impopular servicio militar obligatorio», mientras que en el Estado de terror de El Salvador no hay reclutamiento obligatorio, en su lugar hay rondas de enganche al ejército de jóvenes procedentes de los barrios pobres, de los campos de refugiados y de las zonas rurales, mientras que los jóvenes retoños de los poderosos viven sus regaladas vidas en San Salvador y en Miami (algo similar sucede en Guatemala y Honduras). También es digno de subrayar el doble rasero de Wagner. En El Salvador, tanto en 1982 como en 1984, la censura era bastante más severa (incluyendo en ella los crímenes abiertos), había escasez de alimentos, un deteriorado sistema de transportes, oposición eclesiástica y, aún más importante, una completa exclusión del «grueso de la oposición» y un masivo terror de Estado, pero al parecer en este caso el *CBS News* no consideró que lo que estaba en el tapete no eran unas elecciones libres y abiertas, ya

que en esta ocasión los comicios gozaban del apoyo de los Estados Unidos.[107]

La delegación irlandesa y la de LASA, especialmente esta última, abordaron estos temas, dieron pruebas de haberlos estudiado seriamente, y elaboraron unas conclusiones que contradecían abiertamente las descripciones de los medios de comunicación y del gobierno de los Estados Unidos. LASA se ocupó extensamente de los comités de defensa sandinistas y del alcance de la violencia y de las interferencias en la libertad de asamblea imputable a la *turba*, concluyendo que la cifra total de incidentes de este tipo era «bastante pequeña», y que los más graves ocurrieron antes del inicio de la campaña oficial. «Pese a las desafortunadas declaraciones de Daniel Ortega acerca de estos actos de perturbación, no existen pruebas de que el FSLN hubiese diseñado una estrategia coherente para estimularlos u orquestarlos» (p. 24). Por lo que se refiere a los comités de defensa, LASA llegó a la conclusión de que al parecer no actuaban como una red de espionaje y que no habían pruebas dignas de crédito de que fuesen una fuerza intimidatoria (p. 27). A ello, LASA añadía dos puntos que no fueron tenidos en cuenta por la prensa libre. Uno era que la comisión electoral «publicó anuncios de pago en la prensa exhortando a los ciudadanos a respetar los derechos de todos los partidos políticos a celebrar actos electorales sin interferencias» (p. 24). El segundo, que los actos electorales de Cruz que fueron interrumpidos violaban la ley electoral, que exigía la autorización previa de dichos actos y les otorgaban protección policial. «En otras palabras, dada su decisión de no inscribirse, Cruz y la Coordinadora estaban realizando su campaña electoral deliberadamente fuera del marco legal de protección creado por la normativa electoral» (p. 25). Asimismo LASA compara la violencia en las elecciones nicaragüenses con otros países de la misma zona y en el mismo contexto, concluyendo que «comparados con otras naciones de la región y ante una guerra contra los contras, estos abusos alcanzan una escala muy reducida» (p. 28).

LASA abordó también el tema de la libertad de prensa, que

107. El arzobispo Óscar Romero, líder eclesiástico opuesto al régimen de El Salvador, fue asesinado y sus asesinos nunca han sido arrestados. En Nicaragua, el líder eclesiástico de la oposición, el cardenal Obando, sigue viviendo y hablando sin temor. La prensa libre nunca ha señalado esta diferencia.

aparece como una de las cuestiones más problemáticas de las elecciones. Consideraba la imposición de una censura como algo que perjudicaba la calidad y credibilidad de las elecciones, si bien el argumento de los sandinistas de que un país en guerra «no puede permitir a un periódico que es el instrumento del enemigo que publique sus opiniones libremente» (Sergio Ramírez), no se consideraba totalmente carente de razón. Con todo, aunque la censura era algo arbitrario y un legalismo, LASA terminó por afirmar que «la oposición podía dar a conocer sus mensajes, como efectivamente hacía» (p. 26). Y en conjunto admitió que las elecciones nicaragüenses «fueron un modelo de probidad y honradez para los parámetros latinoamericanos» (p. 32).

Los medios de comunicación estadounidenses no estaban de acuerdo con ello, pero resulta sorprendente la manera en que eludieron comparaciones y datos. En tal sentido podemos referir la manera en que los medios de comunicación denunciaban las restricciones de la libertad de prensa en Nicaragua después de haber ignorado totalmente este tema en el caso de El Salvador, donde las restricciones eran bastante más serias. Este proceso de dicotomización estaba tan interiorizado que los autores llegaban a usar el doble parámetro en el mismo artículo, al parecer sin tener conciencia de su propia parcialidad. En un artículo publicado el 12 de marzo de 1984 en el *New York Times*, titulado «Clear Choices in Salvador, Murky Plans in Nicaragua» (Opciones claras en El Salvador, turbios planes en Nicaragua), Hedrick Smith considera que en El Salvador las opciones están «claras», mientras que en Nicaragua el problema es si en unas elecciones los sandinistas «renunciarían de una manera significativa al poder y al control». Los diversos partidos de un espectro que abarca desde la extrema derecha hasta el centro derecha en El Salvador eran muestra inequívoca de opciones claras, pero los diversos partidos desde la derecha hasta la extrema izquierda en Nicaragua no significaban para Smith auténticas opciones, aunque no explicaba el porqué. Al parecer a Smith nunca se le ocurrió preguntarse si el ejército y los Estados Unidos «abandonarían el poder y el control» (y su determinación de luchar hasta la victoria) por la vía electoral en El Salvador.

¿Se daban en El Salvador las libertades básicas y la ausencia de coerción necesarias para unas verdaderas elecciones libres? Hedrick

Smith se limitó a hablar de las condiciones electorales esenciales *sólo* en Nicaragua. Ofreció un pormenorizado relato de las dificultades de *La Prensa*, de la censura de prensa, del monopolio sandinista del poder, y de los límites presuntamente impuestos a los candidatos de la oposición en Nicaragua. Pero no dijo ni una sola palabra de los escuadrones de la muerte y de los asesinatos de civiles por parte del ejército salvadoreño o de las draconianas leyes del estado de sitio. ¿Cuántos periodistas habían sido asesinados en El Salvador? ¿Cuántos periódicos cerrados? ¿Cuántas emisoras de radio voladas? ¿Cuántos dirigentes sindicales y personajes políticos habían sido asesinados? Estos temas estaban fuera del orden del día de las elecciones preparadas por los Estados Unidos, Hedrick Smith los ignoró. Como portavoz *de facto* de su gobierno, el comentarista del *New York Time* hizo gala de su incoherencia con la misma despreocupación que Reagan y Shultz.

3.7. Pruebas cuantitativas de la sistemática parcialidad de los medios de comunicación

Para demostrar con todo rigor la parcialidad estructural de la cobertura informativa que los medios de comunicación dispensaron a las elecciones del Tercer Mundo, los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 comparan los temas mencionados por el *New York Times* en sus artículos sobre las elecciones nicaragüenses y salvadoreñas de 1984. Los cuadros están organizados siguiendo el esquema gubernamental estadounidense que hemos descrito anteriormente. Los elementos de la parte superior de los cuadros recogen los temas sancionados —el boicot de los rebeldes, personalidades, mecánica electoral, etc.—, que el gobierno desea destacar en las elecciones que patrocina. A continuación se encuentran las condiciones básicas y otros elementos negativos que están fuera del orden del día o el esquema en dichas elecciones. Nuestra hipótesis es que los medios de comunicación atenderán al esquema, haciendo hincapié en las personalidades y otros elementos que figuran en la parte superior del cuadro, mientras que en elecciones como las nicaragüenses el esquema se invierte, y la atención se centra en las condiciones básicas.

CUADRO 3.1

Temas incluidos y excluidos en la cobertura informativa que el New York Times *efectuó sobre las elecciones salvadoreñas del 25 de marzo de 1984**

Temas	N.° de artículos sobre el tema	Porcentaje de artículos sobre el tema
Compatibles con el esquema de los EE.UU. con respecto a las elecciones salvadoreñas		
1. Propósito y esperanzas democráticas	6	21,4
2. Boicot de los rebeldes	15	53,6
3. Número de votantes	7	25,0
4. Mecánica electoral	9	32,1
5. Personalidades y contienda política	10	35,7
6. Reflexiones oficiales sobre las elecciones	10	35,7
7. El ejército como protector de las elecciones	5	17,9
Incompatibles con el esquema de los EE.UU. con respecto a las elecciones salvadoreñas		
8. La finalidad de relaciones públicas	3	10,7
9. Inversión estadounidense en las elecciones	2	7,1
10. Fraude en las elecciones de 1982	0	0
11. La existencia de la libertad de expresión y de reunión, estado legal de sitio	1	3,6
12. Libertad de prensa	0	0
13. Libertad organizativa	0	0
14. Limitaciones a la posibilidad de que los candidatos concurran a las elecciones y hagan campaña electoral	0	0

	Temas	N.° de artículos sobre el tema	Porcentaje de artículos sobre el tema
15.	Estado de terror previo y clima de miedo	3	10,7
16.	Poder de las fuerzas armadas, y vínculos con los candidatos y partidos como posible factor negativo	1	3,6
17.	Obligación legal de votar	4	14,3
18.	Represalias legales por no votar	2	7,1
19.	Estampillado de huellas dactilares de los votantes como mecanismo de control	1	3,6
20.	Sellado de las cédulas de identificación	2	7,1
21.	Requerimiento legal de que en un plazo de diez días las autoridades comprobaran si los electores habían votado	0	0
22.	Posible amenaza ilegal a los no votantes por parte de los escuadrones de la muerte y las fuerzas de seguridad	0	0
23.	Uso de urnas transparentes	1	3,6
24.	Derecho legal de las fuerzas de seguridad para establecer la presencia armada de sus miembros en los colegios electorales	0	0

* Basado en un estudio de 28 artículos sobre las elecciones salvadoreñas publicados en el *New York Times* entre el 1 de febrero y el 30 de marzo de 1984.

CUADRO 3.2

Temas incluidos y excluidos en la cobertura informativa que el New York Times *efectuó sobre las elecciones nicaragüenses previstas para el 4 de noviembre de 1984**

Temas	N.° de artículos sobre el tema	Porcentaje de artículos sobre el tema
Compatibles con el esquema de los EE.UU. con respecto a las elecciones nicaragüenses (de los 7 que aparecían en el cuadro 3.1, todos fueron proscritos menos uno).		
1. Mecánica electoral	3	37,5
*Incompatibles con el esquema de los EE.UU. con respecto a las elecciones nicaragüenses***		
2. La finalidad de relaciones públicas	3	37,5
3. Libertad de expresión	2	25,0
4. Libertad de prensa	6	75,0
5. Libertad organizativa	4	50,0
6. Capacidad de los candidatos para concurrir a las elecciones	5	62,5
7. Poder de las fuerzas armadas vinculadas con el Estado, como factor negativo	3	37,5

* Basado en un estudio de los ocho artículos que sobre las próximas elecciones nicaragüenses se publicaron en el *New York Times* entre el 1 de febrero y el 30 de marzo de 1984.

** La mayoría de temas relacionados bajo este epígrafe en el cuadro 3.1 no son relevantes en el caso de las elecciones nicaragüenses, todos los cuales están tratados en los artículos examinados y relacionados aquí.

CUADRO 3.3

Temas incluidos y excluidos en la cobertura informativa que el New York Times *efectuó sobre las elecciones nicaragüenses del 4 de noviembre de 1984**

Temas	N.° de artículos sobre el tema	Porcentaje de artículos sobre el tema
Compatibles con el esquema de los EE.UU. con respecto a las elecciones nicaragüenses		
1. Propósito y expectativas democráticas	1	4,8
2. Boicot de los rebeldes	0	0
3. Número de votantes	5	23,8
4. Mecánica electoral	0	0
5. Personalidades y contienda política	3	14,3
6. Reflexiones oficiales sobre las elecciones	3	14,3
7. El ejército como protector de las elecciones	0	0
Incompatibilidades con el esquema de los EE.UU. con respecto a las elecciones nicaragüenses		
8. La finalidad de relaciones públicas	7	33,3
9. Inversión sandinista en las elecciones	2	9,5
10. Fraude en anteriores elecciones	NA	NA
11. Libertad de expresión y de reunión	8	38,1
12. Libertad de prensa	6	28,6
13. Libertad organizativa	2	9,5
14. Limitaciones a la posibilidad de que los candidatos concurran a las elecciones y hagan campaña electoral	11	52,5
15. Estado de terror previo y clima de miedo	3	14,3

Temas	N.° de artículos sobre el tema	Porcentaje de artículos sobre el tema
16. Control de las fuerzas armadas por el gobierno	3	14,3
17. Obligación legal de votar	NA	4,8
18. Represalias legales por no votar	NA	NA
19. Estampillado de las huellas dactilares de los votantes	1	NA
20. Sellado de las cédulas de identificación	NA	NA
21. Requerimiento legal de comprobación de haber votado	NA	NA
22. Amenazas ilegales a los votantes	1	4,8
23. Uso de urnas transparentes	NA	NA
24. Presencia de las fuerzas de seguridad en los colegios electorales	NA	NA

* Basado en el estudio de 21 artículos aparecidos entre el 5 de septiembre y el 6 de noviembre de 1984.

NA = No Aplicable.

En el cuadro 3.1 queda de manifiesto cómo en las elecciones salvadoreñas la cobertura informativa del *New York Times* se centró fundamentalmente en los temas de la parte superior del cuadro, desatendiendo las condiciones básicas que hacen que unas elecciones sean relevantes de antemano. Podemos observar cómo el *New York Times* ignoró totalmente los temas de la libertad de prensa, la libertad organizativa y las limitaciones para que los candidatos pudiesen participar en las elecciones.[108] El cuadro 3.2 muestra cómo el *New York Times* trató las inminentes elecciones nicaragüenses en el mismo período de dos meses reflejado en el cuadro 3.1. Es evidente que el periódico se ocupó esencialmente de las condiciones fundamentales de unas elecciones libres, es decir, de los temas que había dejado

108. Para una discusión más detallada de los artículos del *New York Times* sobre estos temas, véase Edward S. Herman, «"Objective" News as Systematic Propaganda: The New York Times on the 1984 Salvadoran and Nicaraguan Elections», *Covert Action Information Bulletin*, 21 (primavera de 1984).

totalmente al margen cuando se trataba de las elecciones salvadoreñas. El cuadro 3.3 muestra el desglose de temas abordados por el *New York Times* durante las elecciones nicaragüenses a finales de año. Una vez más, aunque las diferencias son menos notables que en los cuadros 3.1 y 3.2, queda patente la atención sustancial dedicada a las condiciones básicas en el caso nicaragüense, reflejando una opción editorial que se ajusta al esquema patriótico. Dado que las condiciones básicas para unas elecciones libres eran superiores en Nicaragua, y los elementos coercitivos menos acusados, el énfasis en las condiciones básicas sólo en el caso nicaragüense resulta una prueba aún más evidente de la sistemática parcialidad.

3.8. La crisis de los «MIG» urdida durante la semana electoral nicaragüense

Tal como señaló el *Newsweek* el 19 de noviembre de 1984, «la historia del buque de carga [con dirección a Nicaragua, presuntamente transportando aviones MIG] apareció por primera vez durante las informaciones de la noche electoral», pero en ninguna ocasión el *Newsweek* (o el *Time*, el *New York Times* o el *CBS News*) indicaron que se tratase de un momento elegido a propósito. El *New York Times*, en su exhaustiva información acerca de unos MIG que no se encontraban allí, citó en cierto momento a un funcionario nicaragüense que declaró que la crisis era simplemente una operación de relaciones públicas, pero con ello el *New York Times* dio por finalizadas sus pesquisas. Pese a que los «MIG» no existían, y que era el momento perfecto para distraer la atención por el éxito logrado por unas elecciones a las que la administración Reagan había intentado desacreditar, los medios de comunicación no formularon ninguna pregunta, ni siquiera retrospectivamente. La administración afirmó que mientras se introducía la carga en el buque el satélite de observación fue bloqueado, de manera que se desconocía lo que la nave llevaba en su interior. Los medios de comunicación dieron por cierta tal declaración, sin hacer ningún esfuerzo por averiguar si respondía a la realidad.

Los medios de comunicación decidieron centrar su atención en lo que la administración estimaba que podría hacer *si* los «MIG» hubiesen sido enviados en realidad. Esto permitió que todo el hilo

del discurso cambiase hasta llegar a suponer que los *nicaragüenses* habían *hecho* algo (y por añadidura, algo intolerable). El *Newsweek* encabezaba un artículo retrospectivo titulado «The MIGs That Weren't There» (Los MIG que no han llegado) con las siguientes palabras: «El que se hiciesen con aviones sofisticados indica que estaban pensando en convertirse en una amenaza para sus vecinos». El hecho de que los «MIG» *no hubiesen* llegado, como señalaba el propio título del artículo, de que ello se tratara de una invención de los funcionarios estadounidenses, no fue obstáculo para que se imputase a los nicaragüenses unas intenciones basadas en un hecho inexistente. La afirmación de que estaban considerando convertirse en una amenaza, más que defenderse de una invasión organizada por terceros, es a su vez un criterio patriótico. El *Newsweek* afirmaba también en el texto que «todas las partes parecen estar jugando un juego muy torpe y muy peligroso». He aquí un curioso ejemplo de imparcialidad. Una persona, que se sabe y se admite que ha sido falsamente acusada de robo por un asaltante, está supuestamente «jugando un juego peligroso» junto al atacante que es a su vez el inspirador del falso testimonio.[109]

En medio de un artículo sobre las elecciones nicaragüenses, el *Time* insertó las declaraciones del gobierno acerca de que en un puerto de ese país se había localizado un buque que transportaba embalajes de los que se utilizan para trasladar MIG 21. El *Time* nunca puso en cuestión la estratagema del gobierno por descarada que fuese, y sólo rectificó cuando el gobierno admitió tácitamente

109. En un marco más amplio, Nicaragua está jugando al peligroso juego de defenderse a sí misma de los ataques del exterior, resistiéndose a las exigencias del padrino. Los medios de comunicación estadounidenses nunca se han sorprendido ante lo absurdo que resulta afirmar que Nicaragua sería una «amenaza» militar para sus vecinos si contara con más MIG, cuando la administración Reagan ha estado buscando una excusa para atacar a Nicaragua y acogería con agrado cualquier movimiento nicaragüense en este sentido como ocasión para intervenir directamente. Asimismo, a la prensa nunca se le ocurre la posibilidad de que la administración quiera reducir las importaciones de armamento de Nicaragua para limitar su capacidad de defensa contra las agresiones en curso. Adviértase que a diferencia de las fuerzas de la guerrilla, los contras sólo pueden sobrevivir gracias al suministro regular por vía aérea, con una frecuencia de vuelos del orden de treinta a cuarenta al mes a mediados de 1987, y dos o tres veces esta cifra después de agosto, cuando los Estados Unidos procuraban socavar los acuerdos de Guatemala. Por lo tanto, Nicaragua actuaría razonablemente al conseguir reactores de los años cincuenta para defenderse del poderoso ejército estadounidense.

que se trataba de un engaño deliberado. Al igual que *Newsweek* y que el *New York Times*, el *Time* permitió que el gobierno plantease el orden del día con una declaración de relaciones públicas: *si* los nicaragüenses lo hubiesen hecho, ello hubiera significado un reto para los Estados Unidos; a continuación se especula sobre cómo habríamos reaccionado en ese caso, cuáles eran nuestras opciones políticas, etc. No se discutió la veracidad de la declaración ni la probabilidad de que se tratase de una estratagema manipuladora que ayudase a desviar la atención de unas elecciones no deseadas, y naturalmente, nunca se discutió que todo ello pudiera formar parte de la política de agresión contra una víctima débil.

Cabe mencionar, como única excepción dentro de la cobertura informativa que los medios de comunicación dieron de la crisis de los MIG, el programa *CBS News*. El 6 de noviembre, Dan Rather transmitió directamente desde la administración la «noticia» de que los MIG estaban en camino y que se consideraba la posibilidad estratégica de destruirlos. Sin embargo, el 7 y el 8 de noviembre, quizá reconociendo que habían sido «utilizados» una vez más, la CBS dedicó gran atención a la refutación del ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Miguel d'Escoto, con lo cual éste tuvo la oportunidad de señalar lo absurdo de la «amenaza» nicaragüense, la relación de las declaraciones sobre los MIG con las elecciones en su país, y el rechazo de los Estados Unidos a sumarse a las propuestas de paz de Contadora.

Sin embargo, la estratagema de los MIG cumplió su propósito. Se creó un ambiente de crisis, y las «opciones» contra la hipotética «amenaza» de los sandinistas ocuparon el núcleo de la atención pública. Las elecciones nicaragüenses pasaron desapercibidas. LASA señaló que «la mayoría de los medios de comunicación internacionales no han informado de los resultados finales de las elecciones nicaragüenses, que quedaron virtualmente enterrados por la avalancha de informaciones alarmistas» (p. 31). LASA afirmó finalmente que el proceso electoral nicaragüense fue manipulado, tal como afirmaba el gobierno de los Estados Unidos, pero que esta manipulación se debía al propio gobierno estadounidense y a sus esfuerzos para desacreditar unas elecciones cuya celebración no deseaba. Las elecciones salvadoreñas y guatemaltecas lograron legitimar los regímenes apoyados por los Estados Unidos, al menos ante la opinión de la elite estadounidense. Las elecciones nicaragüenses, bastante

más honestas, no lo consiguieron, gracias al leal servicio de los medios de comunicación.

3.9. El papel de los «observadores» oficiales en el reforzamiento de la línea propagandística

Los observadores oficiales proporcionan un perfecto ejemplo del uso que el gobierno hace de los «expertos» que controlan y de los «pseudo-acontecimientos» para atraer la atención de los medios de comunicación y canalizarlos en la dirección de la línea propagandística. Normalmente consiguen su propósito en las elecciones demostrativas, sin tener en cuenta la brevedad de su visita ni lo absurdo de sus comentarios. Los medios de comunicación dan por supuesto que los observadores oficiales son noticia: son personajes notables, que el gobierno selecciona entre el personal de «reputadas» instituciones, lo que aumenta su credibilidad, y sus observaciones influyen en la opinión pública y en la política. Este razonamiento pertenece a la categoría de las profecías que se autocumplen: los observadores influyen porque los medios de comunicación les conceden su atención. Puesto que los observadores son fuentes fidedignas que elogian la bondad de las elecciones sin prestar la más mínima atención a las condiciones básicas de las mismas, el uso regular que los medios de comunicación hacen de estos observadores como comentadores de la calidad de las elecciones viola las normas esenciales de la objetividad, de la misma manera que la utilización directa de cualquier comunicado del gobierno por parte del *New York Times* o de *Pravda*.[110]

Las elecciones nicaragüenses eran destacables por el número de grupos de analistas y de observadores extranjeros. Hemos señalado antes que el *Time* mencionó la cifra de 450 observadores extranjeros, aunque no citó a ninguno de ellos (remitiéndose, como de costumbre, a los comunicados del Departamento de Estado). Como

110. Para un informe sobre la actuación de los observadores oficiales y semioficiales estadounidenses en la República Dominicana, Vietnam, El Salvador y Zimbabwe, véase Herman y Brodhead, *Demonstration Elections*. El Apéndice 1 (pp. 309-312 de la edición inglesa, no reproducido aquí) ofrece un resumen de las opiniones de un grupo de observadores oficiales estadounidenses que estuvo en Guatemala en julio de 1984. Ambas fuentes confirman la exposición de los hechos sostenida en el texto.

ya hemos visto, el Departamento de Estado lograba que los medios de comunicación siguiesen su esquema, pese a que estaba involucrado en una descarada inversión de los criterios que había empleado ese mismo año en El Salvador y en Guatemala. También era capaz de inducir a los medios a que desestimasen el resultado de las elecciones nicaragüenses con la ayuda de la maniobra distractora de los «MIG». Estos medios de comunicación permitieron también la institucionalización de considerables mentiras: por ejemplo, que en las elecciones nicaragüenses había habido mayor coerción y menos opciones pluralistas que en las elecciones salvadoreñas y guatemaltecas, y que estas últimas eran realmente legitimadoras, a diferencia de las de Nicaragua.

Estos embustes propagandísticos no se hubiesen perpetrado si informes como los de las delegaciones irlandesa y de LASA hubiesen recibido la atención que merecían. Esta última organización se puso en contacto con los principales medios de comunicación e intentó interesarles para que escribiesen artículos sobre su informe, pero todos rechazaron su propuesta. El documento de LASA es probablemente el informe mejor documentado y más elaborado jamás escrito por un observador. Sus autores son, con mucho, el grupo más cualificado para escribir un informe de ese tipo, pues la mitad de ellos tenían experiencia de campo en Nicaragua y el documento era el informe oficial de la principal organización especializada en temas centroamericanos. Los autores representan diversas opiniones, de talante liberal pero con una sólida capacidad crítica (y de ningún modo parciales, a diferencia de los grupos de observadores oficiales a los que los medios de comunicación dedican gran atención). Su informe aborda todos los temas importantes y confronta y sopesa abiertamente los hechos. Si uno lee el informe de LASA y después los relatos sobre las elecciones nicaragüenses publicados en *Time*, *Newsweek* y en el *New York Times*, no le sorprende tanto la diferencia en las conclusiones respectivas como la diferencia en profundidad, ponderación y objetividad. LASA describe con seriedad la historia y el contexto, un relato completo de la organización de las elecciones y una exhaustiva discusión de cada uno de los temas relevantes, comparándolos con otras elecciones. Creemos que una de las razones de peso por la cual los medios de comunicación se han abstenido de utilizar a LASA como fuente de información es que su informe contradice punto por punto las afirmaciones

de la propaganda que los medios de comunicación difunden diaria y acríticamente. De ahí que su auténtica credibilidad, objetividad y calidad resultaran molestas, y hubieran de evitarse por las instituciones que desempeñaban funciones propagandísticas.

3.10. Nota final

Como ya hemos visto, las condiciones electorales en 1984 en Nicaragua eran bastante más favorables que en El Salvador y en Guatemala, y el grupo de observadores de LASA consideró que las elecciones nicaragüenses habían sido «un modelo de probidad y honradez» para los parámetros de América Latina.[111] En El Salvador y en Guatemala no se cumplía *ninguna* de las cinco condiciones previas básicas para toda elección. En ambos países, el terror patrocinado por el Estado, incluyendo la exhibición pública de cadáveres mutilados, causó estragos entre la población civil hasta el mismo día de las elecciones. También en ambos el voto era obligatorio por ley, y la población estaba obligada a llevar consigo las tarjetas de identificación selladas, como certificado de que había votado. En esos dos países la ley excluía de las votaciones al grueso de la oposición, que quedaba excluida también por la verosímil amenaza de represalia y por los propios planes electorales. Con todo, y con exacta sincronía con la línea propagandística del Estado, los medios de comunicación de los Estados Unidos consideraron que la gran participación electoral en esos países había sido un triunfo de la opción democrática y que las elecciones eran legítimas, creándose así las «democracias incipientes». Esto se logró en gran medida porque dichos medios se negaron sencillamente a examinar las condiciones básicas de unas elecciones genuinamente libres, y la aplicación de las mismas a las elecciones de esos estados clientes. Sólo en el caso de las elecciones nicaragüenses los medios de comunicación prestaron atención a temas tales como la libertad de prensa; actuaron, pues, con considerable deshonestidad. Pese a su superioridad en cada uno de los temas esenciales, para los medios de comunicación las elecciones nicaragüenses fueron un fraude y no lograron sus propósitos legitimadores.

111. Informe LASA, p. 5.

Dada la similar actuación de los medios de comunicación en los casos de elecciones patrocinadas por los Estados Unidos en la República Dominicana el año 1966 y en Vietnam en 1967, apuntamos la hipótesis de que los medios de comunicación estadounidenses consideran *siempre* que las elecciones celebradas en el Tercer Mundo bajo el patrocinio de su gobierno son «un paso hacia la democracia», mientras que las elecciones celebradas en países cuyo gobierno es afanosamente desestabilizador son una farsa y un fraude. Desde luego esto responde a las expectativas de un modelo de propaganda, si bien el grado de subordinación a los intereses del Estado en los casos que hemos analizado fue extraordinario, dada la ausencia de coerción abierta. Los «filtros» y cribas producen un resultado propagandístico que sería difícil de superar incluso por un Estado totalitario.

Tras haber perpetrado un provechoso fraude en beneficio de los intereses del Estado, los medios de comunicación se dedicaron, los años siguientes, a reforzar la imagen establecida con su engaño. Guatemala y El Salvador eran «nuevas democracias» con «presidentes electos». Por el contrario, Nicaragua es una dictadura marxista-leninista que no tiene un «presidente electo» y que nunca permitiría unas elecciones a menos que los Estados Unidos la obligaran a ello por la fuerza. El 1 de diciembre de 1987 el *New York Times* publicó un editorial exhortando a la administración a que no traicionase a los demócratas haitianos «considerando a la empobrecida y anárquica Haití como un caso perdido», afirmando que ello «arruinaría las protestas de Washington referentes a la necesidad de unas elecciones libres en Nicaragua». El estilo es confuso, y los comentarios sobre Haití ignoraban como de costumbre el apoyo de Washington a los partidarios de Duvalier que habían hecho de las elecciones una parodia; sea como fuere, quedaba claro que el *New York Times* aceptaba la argumentación de Reagan de que las elecciones celebradas en 1984 en Nicaragua no fueron libres, y que el objetivo estadounidense era propiciar unas que fueran dignas de ese nombre. Este argumento se basa en graves falsificaciones, pero de acuerdo con su función propagandística, el *New York Times*, así como los otros medios de comunicación, dieron por buena la descripción de las elecciones centroamericanas efectuada por el Hermano Mayor, por las buenas o por las malas.

Como ya hemos señalado, la adhesión de los medios de comu-

nicación a la línea propagandística estatal es extremadamente funcional. Así, el gobierno de Guatemala puede asesinar a decenas de miles de personas sin mayores repercusiones porque los medios de comunicación las identifican como víctimas «indignas»; así también, la actual ayuda a los terroristas de Estado de El Salvador y Guatemala, y la financiación de los ataques de los contras sobre «blancos débiles» en Nicaragua, dependen sobremanera de su continuo reconocimiento por los medios de comunicación como acciones «dignas» y de su oportuna legitimación o deslegitimación. Dado que su gobierno patrocina el terror en esos tres estados (así como en Honduras), podemos con toda justicia afirmar que los medios de comunicación estadounidenses, pese a la virtuosa imagen que tienen de sí mismos como oponentes de algo llamado terrorismo, actúan, de hecho, como leales agentes del mismo.

4. EL COMPLOT DE LA KGB Y BULGARIA PARA ASESINAR AL PAPA: DESINFORMACIÓN DE LIBRE MERCADO SERVIDA COMO SI SE TRATARA DE «NOTICIAS»

En el caso de las elecciones salvadoreñas, guatemaltecas y nicaragüenses, el gobierno fue la fuerza motriz que proporcionaba los marcos de análisis adecuados y los hechos a tener en cuenta; el rol de los medios de comunicación consistió principalmente en canalizar información y asegurar que no se contraviniera seriamente el esquema del gobierno. Con el atentado al papa en mayo de 1981 y las consiguientes acusaciones de complot KGB-búlgaro, los medios de comunicación jugaron un papel más destacado tanto en el origen de las afirmaciones como a la hora de mantener el tema en el candelero desde el principio hasta el final.[1] Sin embargo, en muchos aspectos el proceso fue similar. Se creó un marco de análisis dominante que interpretó el atentado al papa de una manera que favorecía especialmente las exigencias de la elite en aquel momento. Rápidamente se desató una campaña en la que la línea de propaganda útil se inculcaba en la conciencia pública a base de repeticiones. No se tuvieron en cuenta esquemas de análisis alternativos y las fuentes de información que se inclinaban por otra manera de ver las cosas

1. Cabe tener en cuenta que las tres principales fuentes contratadas y/o en las que depositaron su confianza los medios de comunicación privados —Claire Sterling, Paul Henze y Michel Ledeen— mantenían desde hacía tiempo relaciones con el gobierno, y que varias organizaciones del gobierno italiano, como la agencia de inteligencia SISMI, participaron en la génesis y la difusión propagandística de las acusaciones, tal como se describe a continuación.

quedaron excluidas de los medios de comunicación. Se seleccionaron los hechos que se ajustaban al marco dominante y se pasaron por alto otros, aunque tuviesen que ver con la validez de sus premisas.[2] Al mismo tiempo, las fuentes de información dominantes, a las que se permitía monopolizar el espacio de los medios de comunicación, se quejaban amargamente porque sus voces quedaban apagadas por el estruendo de la propaganda soviética. Cuando el proceso legal emprendido en Italia contra los búlgaros se perdió tras un largo juicio, los medios de comunicación intentaron en la medida de lo posible racionalizar la cuestión y abandonaron la historia sin hacer ningún análisis retrospectivo y sin resolver las contradicciones.

Lo que hace de la conexión búlgara un ejemplo tan acertado del valor de un modelo de propaganda es que desde el principio la presunción de tal conexión era inverosímil, y que ya mucho antes del juicio de Roma se había convertido en una cuestión verdaderamente cómica. Los medios de comunicación jugaron esa carta hasta el último momento. Si una secuencia de hechos análoga hubiese tenido lugar en Moscú, con Occidente como objetivo —con un criminal casi enloquecido después de diecisiete meses en una prisión soviética, con algunas sesiones amistosas con la KGB y el fiscal de turno, con la implicación de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en una conspiración de asesinato, y cambiando después este testimonio diariamente— habría sido abucheada en Occidente hasta que hubiese desaparecido de escena sin que nadie se molestase en examinar las presuntas pruebas. Sin embargo, la no menos absurda conexión búlgara respondía a criterios de utilidad.

El caso empezó cuando Mohamed Alí Agca disparó e hirió gravemente al papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. Agca era un derechista turco y un asesino relacionado desde hacía tiempo con los «Lobos Grises», grupo vinculado al partido de Acción Nacionalista, de extrema derecha. Al principio las informaciones occidentales señalaban que Agca era un criminal perseguido por la ley, que había escapado de una prisión turca en 1979, y que desde mucho tiempo atrás estaba afiliado políticamente a la derecha fascista. Sus motivos para atentar contra el papa no estaban claros. Los amigos de Agca eran violentamente anticomu-

2. Las escasas excepciones de estas generalizaciones se señalarán más adelante.

nistas, de manera que, en principio, acusar del crimen al Este no parecía algo muy prometedor.

Dos factores permitieron el desarrollo del complot de la KGB y Bulgaria. El primero de ellos era que en sus viajes por Europa como clandestino de los «Lobos Grises», que le habían llevado por doce países diferentes, Agca estuvo un tiempo en Bulgaria. Los traficantes de droga turcos, que tenían conexiones con los «Lobos Grises», participaban también en el tráfico de drogas en Bulgaria. Así pues, habían ciertos «lazos» entre Agca y los búlgaros, que aunque mínimos fueron convenientemente utilizados.

El segundo factor eran las necesidades de la elite occidental, íntimamente relacionadas con el estallido de fervor anticomunista, cuidadosamente acumulado, que imperaba en Occidente. En el primer encuentro del Jonathan Institute, celebrado en Jerusalén en julio de 1979 y al que acudió una nutrida representación de políticos y medios de comunicación occidentales (entre los que se encontraban Claire Sterling, George Will, George Bush y Robert Moss),[3] el tema principal al que hizo referencia el primer ministro israelí Menahem Begin en su alocución pública, así como otros muchos participantes en la conferencia, fue la importancia y la utilidad de afrontar el problema del terrorismo y de vincularlo con la Unión Soviética.[4] Esto es lo que hizo Sterling en 1981 con su libro *The Terror Network*, que se convirtió en la Biblia de la administración Reagan y de la derecha internacional, elevando a su autora al status de experta número uno de los medios de comunicación con respecto a ese tema. El terrorismo y el diablo soviético fueron los objetivos de mayor interés de una campaña propagandística de la administración Reagan que empezó en 1981 y que estaba diseñada para apoyar sus planes de rearme, el emplazamiento de nuevos misiles en Europa y su política intervencionista en el Tercer Mundo. Los disparos contra el papa efectuados por Agca en mayo de 1981 ocurrieron en un momento en que importantes intereses occidentales buscaban la

3. Véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, *The Rise and Fall of the Bulgarian Connection*, Sheridan Square Publications, Nueva York, 1986, pp. 66-71; y también Philip Paull, «International Terrorism: The Propaganda War», tesis de máster en relaciones internacionales, San Francisco State University, junio de 1982.

4. Las razones por las cuales esto era importante para Begin se discuten en las obras citadas en la nota anterior.

manera de vincular a la Unión Soviética con el «terrorismo internacional».[5]

4.1. El modelo Sterling-Henze-Kalb

Aunque la reacción inicial de los medios de comunicación ante el atentado presupone que las raíces del hecho parecían proceder de los políticos de ideología derechista turcos, algunos miembros de la derecha aprovecharon inmediatamente la oportunidad para situar los orígenes del complot en el bloque soviético. Tan sólo seis días después del intento de asesinato, la organización SISMI, el servicio secreto de inteligencia italiano, hizo circular un documento en el que afirmaba que el atentado había sido anunciado por un funcionario soviético en un encuentro de las potencias del Pacto de Varsovia celebrado en Bucarest (Rumania), y que Agca había sido entrenado en la Unión Soviética. Más tarde se demostró que esta «información» había sido inventada por el SISMI o una de sus fuentes, pero aun así fue incluida en el torrente de declaraciones sobre el complot recogidas en un libro publicado en la República Federal de Alemania y en posteriores citas y filtraciones.[6]

El *Reader's Digest* se percató muy pronto de la baza propagandística que representaba el intento de asesinato, y contrató a Paul Henze, especialista en propaganda y durante mucho tiempo funcionario de la CIA, y a Claire Sterling para que investigasen el tema. El artículo de Sterling publicado en el *Reader's Digest* en septiembre de 1982, titulado «The Plot to Kill the Pope» (El complot para asesinar al papa), fue el principal desencadenante de la conexión búlgara; sus ideas y las de Paul Henze proporcionaron las bases para el programa de televisión de la NBC *The Man Who Shot the Pope — A Study in terrorism* (El hombre que disparó contra el papa — Un estudio sobre el terrorismo), que tuvo como narrador a

5. Vincular el intento de asesinato con la Unión Soviética y la KGB suponía una ayuda inestimable para desacreditar a las autoridades soviéticas de 1982 y principios de 1983, ya que Yuri Andropov, que acababa de suceder a Breznev como jefe del Estado, había sido a su vez director de la KGB. El búlgaro Sergei Antonov fue arrestado en Italia en un plazo de tres semanas desde la toma de posesión de Andropov.

6. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 102-103, 206-207.

Marvin Kalb y que fue emitido por primera vez el 21 de septiembre de 1982.

El modelo Sterling-Henze-Kalb (SHK), según el cual Agca era un agente de los búlgaros (e indirectamente de la Unión Soviética) pronto se convirtió en el modelo dominante de los medios de comunicación gracias a la enorme difusión del *Reader's Digest* y del programa de la NBC (que tras una revisión se emitió de nuevo en enero de 1983), y a la pronta e incluso anhelante aceptación de dicho modelo por otros medios de comunicación.[7] Las publicaciones objeto de nuestro estudio —*Newsweek*, *Time*, el *New York Times* y el programa *CBS New*— aceptaron todos el modelo SHK desde el principio, y se mantuvieron leales a él hasta la conclusión del juicio de Roma, en marzo de 1986. Durante el proceso quedaron excluidos los puntos de vista alternativos y un gran número de hechos que no convenía destacar. Junto al *Reader's Digest*, se adhirieron también firmemente al modelo SHK el *Wall Street Journal*, el *Christian Science Monitor* y la cadena de televisión NBC, con lo cual el modelo se hizo rápidamente con una posición dominante en los principales medios de comunicación.

En esta sección y en las dos siguientes describiremos el modelo SHK, discutiremos su poca consistencia y explicaremos una pauta de análisis alternativa de la confesión en la que Agca implicaba a los búlgaros, posibilidad que no fue contemplada por los medios de comunicación. Luego examinaremos minuciosamente la crédula recepción del modelo SHK por parte de los medios dada su adecuación al modelo de propaganda.

El modelo de Sterling, Henze y Kalb se basaba en las siguientes premisas:

1. *Motivo.* En el artículo de Sterling publicado en el *Reader's Digest*, la motivación esencial del intento de asesinato era la voluntad soviética de debilitar la OTAN, algo que conseguirían implicando a Turquía en el asesinato del papa: «el turco estaba en San Pedro para enseñar a la cristiandad que la Turquía islámica era un

7. Para un análisis de estos programas de la NBC-TV, véase Edward S. Herman y Frank Brodhead, «The KGB Plot to Assassinate the Pope: A Case Study in Free World Disinformation», *Covert Action Information Bulletin*, 19 (primavera-verano de 1983), pp. 13-24.

país extraño y vagamente siniestro que no debía estar en la OTAN». Este motivo iba acompañado (y pronto fue suplantado por) la pretensión de que el atentado contribuyera a sofocar el movimiento Solidaridad en Polonia, al privarle de uno de sus apoyos más importantes. En determinado momento Paul Henze sugirió que quizá el intento de la KGB pretendía simplemente «asustar» al papa, no asesinarle, a modo de advertencia, como en las películas de James Bond. Sterling, Henze o Kalb nunca se detuvieron a analizar los costes y riesgos que tal aventura representaba para el bloque soviético.

2. *La prueba de la participación de soviéticos y búlgaros.* Con anterioridad a la confesión de Agca en noviembre de 1982, en la que puso en evidencia a los búlgaros, la prueba en la que se basaba el modelo SHK se limitaba al hecho de que Agca estuvo en Bulgaria el verano de 1980, y que los traficantes de drogas turcos vinculados a los «Lobos Grises» actuaban allí. En noviembre de 1982 Agca dio los nombres de tres búlgaros como sus presuntos cómplices y afirmó que los búlgaros le habían contratado para hacer el trabajo. Nunca proporcionó una prueba creíble ni nombró a testigos que tuviesen algo que ver con los búlgaros, de manera que la nueva «prueba» se reducía a sus declaraciones, efectuadas tras permanecer diecisiete meses en una prisión italiana.

3. *Las presunciones ideológicas.* Como el caso parecía muy poco convincente, sobre todo antes de las nuevas confesiones de Agca en noviembre de 1982, los puntos débiles se rellenaban con presunciones ideológicas: este es el tipo de cosas que hacen los soviéticos; la Unión Soviética y Bulgaria luchaban denodadamente para «desestabilizar» Turquía;[8] la inexistencia de pruebas concluyentes se debía a que los soviéticos eran consumados profesionales que no dejaban huellas, por lo que podían desmentir las acusaciones de

8. Tanto Sterling como Henze manifestaron esto repetidas veces, sin aportar ninguna evidencia y sin intentar explicar por qué la desestabilización podía servir a los intereses soviéticos, dada la probabilidad de que —como ocurrió finalmente— esa inestabilidad y desorden interno en Turquía llevasen al poder a un régimen militar más estrechamente alineado con los Estados Unidos. Sterling y Henze tuvieron suerte de que nadie les pidiera que explicaran estas cosas a la opinión pública occidental.

manera plausible. La KGB contrató a Agca en Turquía y le indujo a montar una coartada derechista para ocultar que era agente de la KGB. Aunque Agca había viajado por otros once países, su estancia en Bulgaria era crucial porque Bulgaria es un Estado totalitario donde la policía está al corriente de todo, de manera que sabían quién era Agca, y lo habían utilizado para sus propios planes.[9]

4.2. Los problemas del modelo Sterling-Henze-Kalb

El modelo básico de Sterling, Henze y Kalb adolecía de una falta absoluta de pruebas verosímiles, dependía totalmente de premisas ideológicas y estaba plagado de incoherencias internas. Sus bases cambiaron cuando empezaron a surgir los problemas; en algunos casos fue necesario invertir totalmente la argumentación.[10]

Uno de los problemas iniciales del modelo era la motivación de búlgaros y soviéticos. A este respecto cabe señalar la extrema ridiculez de la suposición original, según la cual el bloque del Este asumía la dificultad de utilizar a un fascista turco para atentar contra el papa a fin de deteriorar la imagen de Turquía, a consecuencia de lo cual este país sería excluido de la OTAN. No parece razonable que tal exclusión se produjese porque un fascista turco disparase contra el papa, como tampoco lo era que la conservadora jefatura soviética se aviniese a tan fantasioso plan, aunque éste tuviese grandes probabilidades de «éxito».[11] Esta teoría daba por supuesto que Agca sería

9. Marvin Kalb expuso esta misma historia, sin contar con una sola prueba aparte del hecho de que Agca hubiera estado una breve temporada en Bulgaria, entre otros doce países, manifestando que «parece razonable concluir que fue atraído hacia la red de la policía secreta búlgara, y por extensión de la KGB, tal vez sin que ni siquiera él mismo supiera los planes que le tenían reservados» (transcripción del programa de la NBC, 21 de septiembre de 1982, pp. 44-45).

10. Véase a continuación cómo Sterling maneja el problema del arma de Agca.

11. Sterling, Henze y Kalb presuponen con frecuencia que los líderes soviéticos son unos insensatos, y con la misma frecuencia elaboran tramas al estilo del «Dr. No», sin que los medios de comunicación osen poner en duda esta imagen. Sobre la realidad conservadora, véanse George Kennan, *The Nuclear Delusion: Soviet-American Relations in the Nuclear Age*, Pantheon, Nueva York, 1982; John Lowenhardt, *Decision-Making in Soviet Politics*, St. Martins', Nueva York, 1981; y Jerry Hough and Merle Fainsod, *How the Soviet Union Is Governed*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1979.

capturado e identificado como turco, pero que no revelaría que había sido contratado por los búlgaros y los soviéticos. Por ello Sterling sugirió que probablemente Agca tenía que ser asesinado en la plaza de San Pedro a fin de garantizar su silencio, pero una KGB increíblemente incompetente fracasó en el cumplimiento de tan sencilla misión. El modelo SHK sostuvo también en diversos momentos que tal vez Agca no sabía quién le había contratado, para que no pudiera implicar a los países del Este. Más tarde, cuando Agca declaró en Roma sus profundas vinculaciones con los búlgaros, Sterling y Henze no dijeron una palabra acerca de que la KGB tampoco había conseguido mantener la credibilidad de sus desmentidos a las acusaciones.

Nuestros autores se aferraron finalmente a la idea de que el verdadero motivo de soviéticos y búlgaros era sofocar el movimiento polaco Solidaridad. Pero esta teoría era tan poco verosímil como la anterior si nos atenemos a la cronología de los hechos y a un elemental análisis de costes-beneficios. Presuntamente Agca había sido reclutado en Turquía mucho antes de que existiese Solidaridad. Una variante de la versión de Sterling sobre la época del reclutamiento era que Agca fue contratado por los búlgaros en julio de 1980, antes incluso de la huelga de los astilleros de Gdansk, y por consiguiente antes de que Solidaridad representase una amenaza creíble para el dominio soviético. Los riesgos y los costes de un intento de asesinato no eran desdeñables —y de hecho fueron considerables para búlgaros y soviéticos sólo por la mera creencia generalizada en su participación en el mismo— pese a la falta de pruebas fehacientes al respecto. Y tampoco resultaban convincentes los supuestos beneficios que obtendrían de un acto semejante. El asesinato del papa, especialmente si se atribuía a la Unión Soviética, hubiese enfurecido y unido a los polacos, fortaleciendo así su oposición al régimen controlado por los soviéticos. A ello hay que añadir el coste del deterioro de las relaciones con Europa occidental extremadamente importantes para la Unión Soviética en 1981, con la negociación del gaseoducto y con el emplazamiento en puertas de nuevos misiles de los Estados Unidos en Europa occidental, una de las grandes preocupaciones soviéticas. Todos estos factores actuaban en contra a la hora de asumir unos riesgos que se podrían calificar de disparatados.[12]

12. La NBC-TV hizo hincapié en una supuesta nota del papa a Breznev que contenía la amenaza de que, en el caso de una invasión soviética, renunciaría a su

Un segundo problema del modelo SHK es que Agca había amenazado con asesinar al papa ya cuando éste visitó Turquía en 1979, mucho antes también de que Solidaridad existiese. Esto indicaba que Agca y la derecha turca tenían sus propios agravios contra el papa, y que la razón para asesinarle no dependía de ninguna influencia soviética. En parte por esta razón nuestros autores argumentaban que Agca fue reclutado por la Unión Soviética en Turquía antes de la visita del papa, emplazándole para un ataque posterior. Pero esto no es tan sólo una mera especulación carente de cualquier atisbo de veracidad, sino que tampoco explica por qué toda la prensa fascista, y no sólo Agca, atacaron la visita del papa en 1979. ¿Es que toda la derecha fascista estaba al servicio de los objetivos soviéticos? La única vez que este tema apareció en los medios de comunicación, durante el programa «*McNeil-Lehrer News Hour*» del 5 de enero de 1983, Paul Henze declaró en términos que no admitían réplica que «no hubo oposición [por parte de la prensa]» a la visita del papa en 1979. Sin embargo, el periodista turco Ugur Mumcu, reunió una extensa colección de citas de la prensa derechista turca de la época para demostrar la falsedad de la afirmación de Henze.[13]

Un tercer problema del modelo SHK era que Agca era un derechista convencido, lo cual no le convertía precisamente en el candidato idóneo para servir a las potencias comunistas (aunque quizá este hecho propició que se dejara convencer en la prisión para señalarlas como copartícipes en la conspiración). Nuestros autores se afanaban sin descanso para que Agca apareciese como un mercenario desarraigado, pero lo máximo que pudieron obtener fue que, al parecer, Agca no constaba como miembro de los «Lobos Grises».[14] Sin embargo, todos sus amigos, relaciones y contactos desde

---

cargo pontificio y regresaría a Polonia para encabezar la resistencia polaca. Así, el intento de asesinato tenía por objeto quitar al papa de en medio y tener vía libre para una eventual invasión. Esta nota nunca ha sido enseñada, y el Vaticano ha negado su autenticidad. Véase p. 265. Para una discusión más amplia de estos temas, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 14-15, 200.

13. *Papa, Mafya, Agca*, Tekin Yayinevi, Estambul, 1984, pp. 213-220. Mumcu también escribió un substancial volumen sobre Agca, *Agca Dosyasi*, Tekin Yayinevi, Ankara, 1984.

14. Cuando Agca decidió «confesar», explicó a los magistrados italianos que era un asesino dispuesto a trabajar para cualquiera que necesitara un «terrorista

la escuela secundaria hasta la actualidad pertenecían a los «Lobos Grises», y en sus viajes por Europa previos a la cita del 13 de mayo de 1981, se movió exclusivamente a través de la red de dicha organización. Mientras estaba en prisión, Agca escribió una carta a Alparslan Turkes, el líder del Partido de Acción Nacionalista turco, comunicándole que seguía manteniendo su compromiso y su lealtad. Esta carta resultó molesta a Sterling y a Henze, ya que no coincidía con su descripción de un Agca apolítico; por ello, Sterling le restó importancia aduciendo que no era más que una «risible y tosca falsificación». En cualquier caso el problema era que la carta de Agca fue presentada como prueba por las autoridades militares turcas en un juicio celebrado en Ankara, lo que en circunstancias normales hubiese sido para Sterling prueba suficiente de autenticidad. Pero se abstuvo de mencionar este hecho y de examinar su acusación. Ugur Mumcu dedicó cinco páginas de su libro *Agca Dossier* a un detallado informe del asunto de la carta a Turkes, en el que describía el gran empeño de las autoridades en demostrar su autenticidad, para lo cual recurrieron incluso a expertos extranjeros. Todo el mundo coincidió en afirmar que la carta había sido escrita por Agca.

Un cuarto problema del modelo SHK era la idea de que dada la eficiencia de la policía secreta búlgara, ésta conocía la presencia de Agca en Sofía, hecho que aprovechó para incluirlo en su nómina. Esta presunta eficiencia es una presunción ideológica que no respalda la evidencia ni tampoco la práctica real de los búlgaros y soviéticos. Ni siquiera hay pruebas de que los búlgaros hubiesen identificado a Agca, que utilizaba un pasaporte falso. Además, la idea de que la policía búlgara estaba al corriente de todo quedó refutada con las importantes declaraciones de Abdullah Catli, miembro relevante de los «Lobos Grises», efectuadas el 22 de septiembre de 1985 durante el juicio de Roma. Según Catli, muchos miembros de su organización preferían cruzar Bulgaria porque les resultaba fácil esconderse entre la marea de inmigrantes turcos que circulaban por ese país.

El quinto problema del modelo SHK era que al parecer Agca

---

internacional» de confianza. Sonó exactamente como Claire Sterling dijo que tenía que sonar. La justicia italiana y la prensa occidental se lo tomaron bastante en serio. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 113-114.

había conseguido su arma a través de la red de los «Lobos Grises», y no de los búlgaros, quienes por otra parte se la hubieran podido arrebatar con facilidad en Roma. En su artículo del *Reader's Digest*, Sterling siguió el rastro del arma de Agca hasta llegar a Horst Grillmaier, un traficante de armas austríaco que, según Sterling, huyó tras el telón de acero después del 13 de mayo de 1981 para evitar que lo interrogasen en Occidente. Sin embargo, más tarde, resultó que Grillmaier era un antiguo nazi especializado en el suministro de armas a compradores de derechas; que no había desaparecido en absoluto tras el telón de acero y que Agca había recibido el arma de manos de un amigo de los «Lobos Grises», quien a su vez la había conseguido a través de diversos intermediarios. Sterling resolvió la desintegración de la pista original que le llevaba hasta Grillmaier recurriendo simplemente a una nueva base conspirativa: los ingeniosos búlgaros hicieron que Agca adquiriese su arma a un conocido fascista para reforzar la acusación de que era un derechista cuya conexión con las potencias comunistas era imposible.

Otro conjunto de problemas para la hipótesis SHK reside en el extraordinario nivel de incompetencia y en las crasas vulneraciones de los principios de veracidad de los desmentidos que ésta atribuía a las policías secretas búlgara y soviética, características que no cuadran fácilmente con la imagen de superespías a la que el modelo aludía constantemente. En diversos momentos Sterling, Henze y Kalb sostuvieron que soviéticos y búlgaros eran tan profesionales que podían permitirse perseguir al papa porque nunca se iban a ver personalmente implicados en ello. Pero contratar a Agca, criminal perseguido por la ley y derechista mentalmente desequilibrado, hubiera sido una gran imprudencia, pues la coartada se hubiese desbaratado rápidamente en el caso —harto probable— de que lo apresaran. Según la historieta inicial de Sterling, la KGB *deseaba* que lo detuviesen, o cuando menos que identificasen su cadáver, para desacreditar a Turquía. Cuando el motivo de la KGB pasó a ser el debilitamiento de Solidaridad, la amenaza de que Agca revelase la participación búlgaro-soviética hubiera sido aún más grave. En ese caso los búlgaros y la KGB habrían contratado a Agca, pero no lograron asesinarle. Otra anomalía era el que le hubiesen llevado a Sofía para darle instrucciones. Si le reclutaron en Turquía, conducirlo hasta Sofía ¿no hubiese sido otra imprudencia que ponía en peligro una coartada tan cuidadosamente preparada? Y si ello era

así, su visita a Sofía, ¿no constituía una prueba en *contra* de la participación búlgaro-soviética en la conspiración?

Cuando en noviembre de 1982 Agca confesó que los búlgaros habían conspirado con él, tras lo cual los medios de comunicación occidentales consideraron instantáneamente que la conexión búlgara era «verdadera», dio al traste con el modelo SHK y con la lógica de la «veracidad de los desmentidos». Si, como Agca había confesado, los búlgaros habían llegado a un acuerdo con él en Roma, lo habían escoltado hasta la plaza de San Pedro, lo habían entrenado en sus apartamentos y habían participado en el propio atentado, ¿qué queda entonces de la lógica de la «coartada»?

4.3. Un modelo alternativo

Una explicación alternativa de la conexión búlgara se puede derivar a partir de las preguntas que la prensa de los Estados Unidos hubiese planteado con toda seguridad si una historia similar hubiese ocurrido en Moscú; una historia en la que Agca, que habría efectuado cortas visitas a los Estados Unidos durante sus viajes, y que habría permanecido en una prisión soviética durante diecisiete meses tras haber disparado contra un alto funcionario soviético, confesase que tres miembros de la embajada estadounidense habían conspirado con él. En ese caso, la prensa de los Estados Unidos hubiese dispensado una minuciosa atención a lo conveniente que la confesión de Agca resultaba para las necesidades de la propaganda soviética, a los diecisiete meses de retraso en mencionar a los estadounidenses, y a la obvia posibilidad de que Agca hubiese sido inducido o coaccionado a modificar su testimonio anterior. Hubiesen examinado atentamente las condiciones en que se encontraba Agca en la prisión, las visitas que había recibido, su predisposición a «negociar» con sus captores, y cualquier prueba, en sus declaraciones o a partir de otras fuentes, de que había sido coaccionado. El hecho de que Agca hubiese visitado los Estados Unidos, entre otros doce países, no hubiera sido prueba suficiente de la participación de la CIA, y la prensa bien hubiese podido señalar que, en primer lugar, una CIA mínimamente competente no habría llevado a Agca a Washington para darle instrucciones.

El modelo alternativo podría iniciarse con el mismo hecho que

comenzaba el modelo SHK; es decir, la estancia de Agca en Sofía (Bulgaria), pero interpretándolo de manera diferente. Esta visita vulneraba los principios de credibilidad de los desmentidos, y hubiese sido especialmente imprudente si la KGB había reclutado ya a Agca en Turquía. Por otra parte, proporcionaba al sistema de propaganda occidental la conexión necesaria entre el ataque terrorista de Agca en Roma y el bloque soviético. La *conveniencia* de la confesión de Agca —para el dirigente socialista Craxi, para los democratacristianos y los neofascistas italianos, para Reagan, que buscaba la conexión entre el «terrorismo internacional» y la Unión Soviética— es también absolutamente clara, y a una prensa objetiva le hubiese sugerido inmediatamente que esta «demanda» podía haber suscitado la adecuada «respuesta» del encarcelado Agca. El retraso de éste en mencionar a los búlgaros —diecisiete meses después de su entrada en una prisión italiana, y siete meses después de que accediese a «cooperar» con el juez que investigaba el caso, Ilario Martella— también resulta enormemente sugerente: ¿por qué tardó tanto tiempo en delatar a sus cómplices en la conspiración? Sterling intentaba dar una explicación insinuando que Agca esperaba que «los búlgaros acudiesen en su ayuda» y les daba tiempo para ello; Sterling explicó sus sucesivas declaraciones y consiguientes retractaciones diciendo que Agca «hacía guiños» a sus presuntos asociados. El complejo y especulativo intento de racionalizar hechos inconvenientes resultaba innecesario; una explicación muy sencilla, basada en el carácter y en la filiación política de Agca, así como los incentivos que se le ofrecieron (que describiremos a continuación) hubiera sido suficiente.[15] Además, la explicación de Sterling no tenía en cuenta el hecho de que Agca no pudo proporcionar pruebas fehacientes después, durante el juicio, cuando ya estaba claro que los búlgaros no habían respondido a sus presuntos guiños.

Otro elemento sugerente de la confesión de Agca es que ésta fue *posterior* a la elaboración y difusión del modelo SHK por los medios de comunicación. En el transcurso de la investigación del complot, se supo que el prisionero Agca tenía acceso a periódicos, radio y televisión y gozaba de otras formas de comunicación personal con el mundo exterior. También salió a la luz durante la investigación

15. Para un análisis completo de esta teoría, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 138-140.

que el «deseo de obtener publicidad personal» de Agca «parecía insaciable ... En un momento dado de la investigación en Italia, protestó bruscamente cuando los magistrados rechazaron su petición de que los periodistas estuviesen presentes mientras "confesaba"».[16] Agca fue interrogado acerca de una posible conexión búlgara mucho antes de su confesión, y tenía la certeza de que a sus interrogadores les satisfacería que estableciese tal conexión. A finales de 1982 la prensa a la que tenía acceso aludía diariamente a una conexión similar.

Hemos mencionado anteriormente que la agencia del servicio secreto italiano SISMI había distribuido un ejemplo de desinformación al relacionar a los soviéticos con el intento de asesinato a los pocos días del atentado. En aquella época el SISMI estaba bajo el mando del general Giuseppe Santovito, miembro de la logia masónica de extrema derecha Propaganda Due (P-2), y otros muchos integrantes de la misma se habían infiltrado tanto en el SISMI como en otras agencias de información. El escándolo de la P-2 estalló en Italia en marzo de 1981, y a causa de ello Santovito se vio forzado a abandonar el SISMI, aunque tal abandono no significaba en modo alguno que la organización derechista renunciase a su presa.

Una de las características importantes de la política italiana durante el período que va desde 1966 hasta 1981 fue la protección que los servicios de información dieron al terrorismo de derechas, mediante un programa denominado la «estrategia de la tensión».[17] Un aspecto de dicha estrategia era la realización de atentados terroristas de derechas cuya responsabilidad se atribuía a la izquierda, muchas veces con la ayuda de documentos falsificados y el recurso a denunciantes perjuros. El objetivo de esa estrategia era polarizar la sociedad, desacreditando a la izquierda y preparando el terreno para un golpe derechista. Muchos miembros de la P-2 en las fuerzar armadas y en los servicios de inteligencia participaron en la puesta en marcha de ese programa, y otros muchos simpatizaban con sus propósitos. En julio de 1984, una comisión del Parlamento

16. Michael Dobbs, «Child of Turkish Slums...», *Washington Post* (14 de octubre de 1984). El disparo de Agca contra el papa podría haber sido motivado, en parte, por su búsqueda de notoriedad.

17. Para un informe completo sobre esta estrategia y los demás asuntos tratados en este párrafo, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 71-98.

italiano publicó su informe final sobre la conspiración de la P-2. En los tomos de anexos de dicho informe figuraban las vistas realizadas que evidenciaban la politización de los servicios de inteligencia, su continuada utilización de técnicas de desinformación y su connivencia y protección al terrorismo de derechas. En julio de 1985 un tribunal de Bolonia dictó un fallo en el que mencionaba al SISMI y a sus oficiales como autores de numerosas falsificaciones, y como colaboradores en el encubrimiento de la bomba terrorista colocada en Bolonia en 1980.[18]

En diciembre de 1981 el SISMI participó en un interrogatorio a Agca que se prolongó durante cinco horas, en el que se exploró la vinculación de éste con el «terrorismo internacional». El juez Martella, fiscal del caso, reconoció en su largo informe de la investigación que había comentado a Agca la posibilidad de conmutarle la sentencia si «cooperaba»; la prensa italiana por su parte citó el informe del abogado de Agca, donde se explicaban los términos de los pactos que le habían propuesto.[19] Diversos informes de la prensa europea disidente se hicieron eco de las presiones ejercidas sobre Agca durante su estancia en prisión. Un equipo del *Sunday Times* londinense señaló en mayo de 1983 que los servicios secretos «habían visitado a Agca y le advirtieron que una vez concluida su reclusión en solitario "las autoridades no podían seguir garantizando su seguridad"».[20] Según Orsen Oymen, experto turco en el caso, el capellán católico de la prisión en la que se encontraba Agca, el padre Mariano Santini, se había dirigido varias veces a éste y le había presionado para que cooperase con las autoridades.[21] Una posible confirmación de las tácticas persuasivas de Santini es la carta que Agca envió al Vaticano, fechada el 24 de septiembre

18. Tribunal de lo Criminal de Roma, *Juicio del caso de Francesco Pazienza, et al.*, 29 de julio de 1985, firmado por Francesco Amato, presidente del tribunal.

19. Diana Johnstone, «Latest Scandal Leads to Reagan Administration», *In These Times* (26 de mayo de 1983), p. 50.

20. Tana de Zulueta y Peter Godwin, «Face to Face with the Colonel Accused of Plotting to kill the Pope», *Sunday Times* (26 de mayo de 1983), p. 50.

21. «Behind the Scenes of the "Agca Investigation"», *Milliyet* (noviembre de 1984). Este excelente trabajo del corresponsal de *Milliyet* en Alemania Occidental describe la incompetencia y la parcialidad exagerada de la investigación italiana que entonces se estaba desarrollando. Los numerosos hechos nada convenientes pero de absoluta relevancia que contiene pueden haber contribuido a que la prensa occidental lo ignorara por completo.

de 1982, en la que se quejaba amargamente de las amenazas contra su vida procedentes de un emisario de la Santa Sede.

En el transcurso del juicio de Roma, Giovanni Pandico, el principal testigo del Estado italiano en el juicio contra los dirigentes de la Mafia, y personaje próximo a Raffaelle Cutolo, líder de esa organización que estuvo con Agca en la prisión de Ascoli Piceno, declaró en una entrevista (y posteriormente ante el tribunal), que Agca había sido coaccionado, persuadido y entrenado por Cutolo, Santini y otros para que implicase a los búlgaros. Pandico afirmó que el propio Cutolo había sido coercionado mediante amenazas para que trabajase a Agca, y que los desencadenantes clave del complot fueron los antiguos oficiales del SISMI Giuseppe Musumeci y Francesco Pazienza. Uno de los importantes personajes acusados por Pandico, Francesco Pazienza, al tiempo que negaba esas acusaciones daba su propia y detallada versión de qué miembros del SISMI *habían* colaborado en persuadir a Agca de que hablase.

Desde el principio del juicio se percibieron factores que indicaban que Agca recibió entrenamiento durante su estancia en prisión. Tras su largo (e inexplicable) silencio, Agca identificó a los búlgaros en un álbum de fotos que presuntamente le habían mostrado por primera vez el 9 de noviembre de 1982. Pero en una intervención ante el Parlamento italiano el ministro de Defensa, Lelio Lagorio, declaró que Agca había identificado a los búlgaros en septiembre de 1982. Esta discrepancia nunca ha sido explicada, pero no resulta creíble que Agca viese por primera vez esas fotos el 9 de noviembre.[22] Un elemento clave del testimonio de Agca fue su afirmación de haber visitado el apartamento de Sergei Antonov, uno de los búlgaros arrestados en el «complot», y de haberse encontrado con la mujer y la hija de éste, afirmaciones que apoyaba con sutiles detalles relacionados con las aficiones de Antonov y con las características de su apartamento. Con todo la defensa pudo demostrar que Agca erró al mencionar una de tales características, propia del resto de apartamentos del edificio, pero no del de Antonov. Ello indicaba que Agca había recibido información basada en la observación de los otros apartamentos. Y aún más importante, la defensa pudo demostrar también que en la época en la que Agca afirmó

22. Para una discusión sobre los varios aspectos sospechosos de esta identificación fotográfica, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 110-111.

haber visitado a Antonov y haber visto a su mujer, ésta se encontraba fuera del país. Después de que los periódicos publicasen los argumentos de la defensa, el 28 de junio de 1983, Agca se retractó de sus afirmaciones de haber visitado el apartamento de Antonov y de haber encontrado a la familia de éste. Así pues, la única explicación posible de los detalles que Agca había dado del apartamento y de la familia era que le habían dado información de ambas cosas durante su estancia en la prisión. En muchos otros casos, Agca proporcionó informaciones sobre las que recayeron serias sospechas de proceder de funcionarios o agentes de los tribunales o de la policía. Los periodistas del londinense *Sunday Times*, que habían entrevistado en Sofía a uno de los búlgaros acusados, escribieron que «cuando Martella le preguntó en Bulgaria si tenía alguna característica física destacable, Vassilev respondió que tenía un lunar en la mejilla izquierda. El propio Vassilev hizo observar que en una confesión *posterior*, "Agca describió mi lunar *con las mismas palabras* que yo había utilizado para ello"».[23]

Durante la celebración del juicio de Roma en 1985-1986, no se encontró ningún rastro del dinero que Agca afirmaba haber recibido de los búlgaros. El automóvil que, según él, los búlgaros habían utilizado para escoltarle en Roma no apareció en ningún lugar, y tampoco se encontraron testigos de sus supuestos encuentros con ellos. El arma le había llegado a través de la red de los «Lobos Grises» turcos, y abundaban las pruebas de sus encuentros con miembros de ese grupo en Europa occidental. La nota que Agca llevaba consigo el 13 de mayo no hacía mención alguna a colaboradores, y más bien parecía un programa no muy preciso del intento de asesinato, tras el cual estaba previsto un viaje por tren a Nápoles.

En resumidas cuentas, es sumamente probable que a Agca se le brindase la posibilidad de negociar, y que tuviese claro que quienes tenían capacidad de decisión sobre su bienestar deseaban que implicase a los búlgaros y a la Unión Soviética en el intento de asesinato. Había tenido acceso al modelo SHK incluso antes de su confesión,

23. De Zulueta y Godwin, «Face to Face with the Colonel...», p. 50. Incluso en la fase de investigación del caso, se reveló que el hecho sensacional de que Agca conociera los números de teléfono de la embajada búlgara en Roma tenía cierta relación con el descubrimiento de que «inadvertidamente» había sido dejado a solas con un ejemplar del listín telefónico de Roma. Para otros ejemplos, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 112, 118-119.

por lo cual ésta resultaba sospechosa desde el principio. Desde que Agca implicó a los búlgaros por primera vez empezó a tomar cuerpo un «modelo alternativo» de explicación de los hechos, basado en estímulos, presiones y asesoramiento; modelo que con el tiempo resultó cada vez más convincente, ya que Agca se retractó de sus declaraciones estratégicas y no se halló ninguna prueba que confirmase la conexión búlgara. De igual manera, el modelo SHK, inverosímil ya desde el principio, fue cada vez menos sostenible.

4.4. La aceptación acrítica de la conexión búlgara por parte de los medios de comunicación

Pese a la poca verosimilitud de uno de los supuestos del modelo SHK, según el cual búlgaros y soviéticos habrían contratado a Agca para que disparase contra el papa, y aunque los argumentos en que tal supuesto se basaban eran un fraude absoluto, la conexión búlgara satisfacía los criterios de utilidad. Por tanto, en esta ocasión y tal como preveía el modelo de propaganda, los medios de comunicación de los Estados Unidos dieron por válido el modelo SHK, ignorando el modelo alternativo y participando en una campaña de propaganda clásica que llevaba al público el mensaje de la culpabilidad búlgaro-soviética. Algunos de los miembros de esos medios de comunicación participaron en la creación de la supuesta conexión búlgara, mientras que otros se limitaron a difundir la línea SHK (excluyendo cuidadosamente otros puntos de vista informativos e informaciones poco convenientes para el caso).

La campaña empezó con el artículo de Sterling publicado en el *Reader's Digest* en septiembre de 1982, al que siguió inmediatamente el programa de la NBC, del 21 de septiembre de ese mismo año. La repercusión de esos dos informes que daban por sentada la conexión búlgara fue enorme, y los otros medios de comunicación se hicieron eco de ellos, resumiendo sus declaraciones sin cuestionarse prácticamente en modo alguno su validez. Cuando Agca mencionó a los búlgaros en noviembre de 1982, los medios de comunicación empezaron a informar exhaustivamente acerca de la conexión búlgara. Tales informaciones se ajustaban estrictamente al modelo SHK, y la mayoría de los medios de comunicación no se desviaron

un ápice de él hasta la conclusión del juicio de Roma, en marzo de 1986.[24]

Que Agca mencionase a los búlgaros fue el factor clave que desencadenó la avalancha informativa y proporcionó las bases para la reiteración de detalles relacionados con los búlgaros, la explicación de la motivación búlgara (y soviética), y las especulaciones acerca de las implicaciones políticas de las acusaciones, en caso de que éstas se confirmasen. Una de las características principales de tales informaciones era su absoluta superficialidad: las acusaciones no fueron examinadas detenidamente, sino que se regurgitaban y elaboraban a partir de extraños hechos y opiniones, siguiendo el modelo SHK (y sin tener en cuenta para nada la posible relevancia de un modelo alternativo). Si se tomaban al pie de la letra y se presentaban de una manera superficial, las acusaciones constituían una forma de vindicación del modelo SHK (es decir, si los medios de comunicación obviaban la conveniencia política, las condiciones de la prisión, la credibilidad de los desmentidos, etc.). Y este procedimiento (la reiteración de las declaraciones de Agca complementadas con superficiales especulaciones en pro del complot) era el recurso principal mediante el cual los medios de comunicación aceptaron y fomentaron los argumentos de la propaganda.

En su artículo «The Plot to Kill the Pope John Paul II» (El complot para asesinar al papa Juan Pablo II), publicado el 3 de enero de 1983, el *Newsweek* nos ofrece un prototipo de cobertura informativa dentro del modelo SHK. Se habla una y otra vez de la motivación búlgaro-soviética en los términos en que la describen Sterling, Henze y Kalb, mediante citas a fuentes afines («una solución preventiva y alternativa a la invasión de Polonia»), sin que nadie analice sus costes y beneficios, la naturaleza de la jefatura soviética, o lo provechoso que resultaba para *Occidente* la confesión de Agca.[25] De hecho, *Newsweek* sugería que para los gobiernos

24. El primer alejamiento de los medios de comunicación del modelo SHK, a pesar de no haber otra alternativa, no se produjo hasta el 12 de mayo de 1983, en el programa de la ABC-TV «20/20». Sobre la pauta seguida en esta y en posteriores ocasiones, véase la nota 26, *infra*.

25. Hacia el final de este largo artículo, *Newsweek* dice de paso que «es difícil creer que los soviéticos esperaran solucionar el problema polaco con la muerte del papa. Para algunos, resulta extraño que los soviéticos pusieran su destino en manos de búlgaros y turcos, renunciando al control que es tan esencial en una delicada

occidentales era una dolorosa tarea el acusar al bloque soviético del intento de asesinato (repitiendo como un loro la argumentación del modelo SHK al respecto). En ningún momento el *Newsweek* sacó a relucir los diecisiete meses que Agca tardó en efectuar su confesión, ni las condiciones en que éste se encontraba en la prisión, ni reflejó en este artículo (o en otros posteriores) las afirmaciones e informaciones publicadas en el *Sunday Times* de Londres y en la prensa italiana acerca de los estímulos o de las amenazas coercitivas que Agca pudo haber recibido mientras estuvo detenido.

El *Newsweek* recurrió a diferentes métodos para dar credibilidad a las declaraciones de Agca: repitiéndolas varias veces como voz de fondo de la historia; subrayando en dos momentos diferentes la presunta honestidad, integridad, escrupulosidad, y etc., del juez Martella; citando a funcionarios italianos que afirmaban «tener pruebas» de que «Agca actuaba en estrecho contacto con los búlgaros»; afirmando que «todas las pruebas indicaban» que Agca «no estaba loco». Pero aún más importante es la ya mencionada negativa a discutir las premisas del modelo SHK o a utilizar un modelo alternativo.

El *Newsweek* «se tragó» intactas y enteritas toda una serie de presunciones ideológicas de Sterling, Henze y Kalb, tales como «los investigadores [léase Paul Henze] opinan» que probablemente Agca utilizó a los «Lobos Grises» como coartada; que Bulgaria y la Unión Soviética trataban desde hace tiempo de «desestabilizar Turquía mediante el terrorismo» (citando directamente a Henze); la presencia de Agca en Sofía «debió llamar la atención de la policía secreta búlgara» (repitiendo el frecuente error del modelo SHK u olvidando su afirmación de que Agca había sido reclutado para el intento de asesinato del papa en Turquía, y admitiendo erróneamente que la policía búlgara podía identificar con facilidad a los turcos que circulaban por su país). El *Newsweek* daba por supuesto que «Agca había recibido ayuda de un gran número de búlgaros», aunque las únicas pruebas que daba de ello eran las propias declaraciones de Agca, las de los funcionarios italianos y las de Paul Henze. Mencionaba también las continuas negociaciones de Agca con los

---

operación de inteligencia». Estas frases, poco habituales en los medios de comunicación a causa de las preguntas que plantean, aparecen aisladas y sin desarrollar, tras un largo discurso que acepta la validez del análisis SHK.

búlgaros en Roma, sin referirse al problema de las verosímiles negativas ante esas acusaciones y sin inmutarse por la insensatez de semejante libreto. Aun con todo el artículo del *Newsweek* resultaba convincente, con su repetición de diferentes detalles, su confiada asunción de complots y subcomplots, sus referencias a diversas autoridades que confirmaban las acusaciones, su aparente imparcialidad y la circunstancial mención a la falta de pruebas definitivas, pero no por ello deja de ser un ejemplo de propaganda acrítica que, exceptuando la frase que acabamos de citar, se ciñe estrictamente al modelo SHK.

Al principio, los otros grandes medios de comunicación actuaron de manera bastante uniforme; es decir, de manera acrítica, trivial y trabajando solamente a partir de las bases del modelo SHK, pasando por alto todas las complicadas pero obvias preguntas que formulaba el modelo «alternativo». De los treinta y dos artículos acerca del complot o estrechamente relacionados con él publicados en el *New York Times*, entre el 1 de noviembre de 1982 y el 31 de enero de 1983, doce no tenían ningún contenido informativo, sino que se limitaban a reflejar las opiniones o especulaciones de alguien con respecto al caso —o la negativa de ese alguien a especular—. (El *New York Times* publicó un artículo cuyo único contenido era decirnos que el presidente Reagan «no tenía comentarios que hacer».) Aún más característico era el artículo de portada de Henry Kamm, «Bonn is Fearful of Bulgaria Tie with Terrorist» (Bonn teme la vinculación búlgara con los terroristas) (del 12 de diciembre de 1982), o el de Bernard Gwertzman «U.S. Intrigued But Uncertain on a Bulgarian Tie» (Los Estados Unidos intrigados pero dudosos acerca de la conexión búlgara) (26 de diciembre de 1982). «Noticia» tras noticia, individuos no identificados se sentían «intrigados», se había «despertado» su interés, decían que las pruebas «no eran absolutamente convincentes» o que «faltaba la prueba definitiva». Cuatro de los artículos informativos del *New York Times* trataban de temas colaterales, como el contrabando en Bulgaria o las relaciones papales con la Unión Soviética. *Sólo uno* de los dieciséis artículos más directamente informativos se ocupaba de un hecho real, a saber, la detención de Antonov en Roma. Los quince artículos restantes trataban de trivialidades, como los de Kamm, titulados «Bulgarians Regret Tarnished Image» (Los búlgaros lamentan el deterioro de su imagen) (del 27 de enero de 1983) y

«Italian Judge Inspects Apartment of Suspect in Bulgarian Case» (Juez italiano inspecciona el apartamento de un sospechoso en el caso búlgaro) (del 12 de enero de 1983). Todos ellos exponen opiniones, dudas, intereses, suposiciones, y detalles de poca importancia, a fin de mantener en el candelero el tema de la posible implicación de los soviéticos, y evitaban cualquier referencia a temas sustantivos que profundizasen en las motivaciones, las características de las pruebas o en los contextos turco e italiano.

Durante los años siguientes y hasta el final del juicio en marzo de 1986, los medios de comunicación, salvo raras excepciones, se adhirieron total y acríticamente al modelo SHK.[26] No sólo evitaron formular cuestiones alternativas, sino que rehusaron examinar detenidamente las premisas, la lógica o las pruebas en las que se apoyaban las acusaciones de Sterling, Henze y Kalb. En parte, ello se debió a la extraordinaria confianza que los medios de información depositaron en Sterling y Henze como fuentes de información (y a la posición de Kalb como periodista de noticias de la cadena televisiva de la NBC), y a su poca predisposición para exigir a dichas fuentes pruebas que demostrasen sus afirmaciones.

4.5. La parcialidad de las fuentes de información

Sterling y Henze, y en menor medida Michael Ledeen, dominaban casi por completo la percepción que los medios de comunica-

26. La ABC ofreció los *únicos* programas de la televisión nacional que desafiaron el modelo de propaganda: uno de ellos, el único programa que en cinco años de cobertura televisiva dio las mínimas muestras de buen ejercicio de la profesión, capacidad crítica y honestidad, fue «To Kill the Pope», emitido en «20/20» el 12 de mayo de 1983. Posteriormente, ABC también emitió un programa-debate con Claire Sterling y Alexander Cockburn, aunque éste fue preparado sin que lo supiera Sterling, que se enfureció al tener que soportar que sus opiniones fueran rebatidas. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 123-124, para el relato de este encuentro. En cuanto a los periódicos, la conformidad con la propaganda prevaleció hasta que en junio de 1984 se hizo público el informe del fiscal Albano, cuando Michael Dobbs, del *Washington Post*, empezó a tomar posturas más críticas junto a Don Schanche, de *Los Angeles Times*. Aunque durante los años siguientes fue escéptico con las declaraciones de Agca, Dobbs se mantuvo igualmente escéptico ante la idea de que Agca hubiera sido preparado, a lo que se refería como «la opinión búlgara». Dobbs nunca investigó seriamente esta hipótesis. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, «The Small Voices of Dissent», pp. 199-202.

ción estadounidenses tenían de la conexión búlgara. Además, influenciaron el curso de los acontecimientos en Italia, ya que su versión de la culpabilidad de los búlgaros fue difundida por los medios de comunicación italianos antes de que Agca los mencionase, e incluso pudo haber influenciado también a Martella.[27] Sterling y Henze dominaron la cobertura informativa de los medios de comunicación gracias a la enorme difusión de sus artículos y libros sobre el tema, y a que la prensa de elite, las revistas de información general, así como los informativos y debates televisivos, recurrieron a ellos como expertos de manera constante y acrítica.[28] Además de su artículo en el *Reader's Digest*, Sterling publicó tres importantes trabajos en el *Wall Street Journal* y otras colaboraciones en el *New York Times*. El programa *CBS News* se hizo eco repetidamente de sus puntos de vista, sin cuestionarlos en absoluto. Henze era el autor de doce de los catorce artículos que acerca de la conexión búlgara publicó el *Christian Science Monitor* entre septiembre de 1982 y mayo de 1985, trabajos que fueron citados repetidamente en otros medios de comunicación. Durante esa época el único artículo de opinión sobre la conexión búlgara que publicó el *Philadelphia Inquirer* se debía a la pluma de Michael Ledeen. Estos tres personajes (Sterling, Henze y Ledeen) ocuparon el 76 por 100 del tiempo en tres espacios que a este tema dedicó el programa «*McNeil-Lehrer News Hours*». En estos programas no se les formularon preguntas espinosas ni tampoco se oyeron voces disidentes, quizá debido a que Sterling y Henze rechazaban aparecer en programas televisivos (y en otros debates) en los que participasen personas que se oponían a sus puntos de vista, y a que Henze insistía en aprobar por adelan-

27. Martella visitó la ciudad de Washington en octubre de 1982, ocasión en la que no sólo sacó provecho de la perspicacia de Arnauld de Borchgrave, sino que le fue ofrecida una proyección especial del programa de la NBC-TV «The Man Who Shot the Pope» (véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 24-27). Ledeen puede haber tenido una relación más directa con el inicio del caso en Italia, la acusación presentada por Francesco Pazienza. Véase Diana Johnstone, «Bulgarian Connection: Finger-pointing in the Pontiff Plot Labyrinth», *In These Times* (29 de enero-4 de febrero de 1986).

28. Para una cuantificación estadística de la magnitud de esta parcialidad, véase cuadro 7.1, «Sterling-Henze-Ledeen Dominance of Media Coverage of the Bulgarian Connection, September 1982-May 1985», en Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 18-83.

tado todas las preguntas que se le iban a formular. Así, su predominio inicial se veía reforzado por tácticas coercitivas.[29]

Si nos preguntamos por la razón última por la cual estos expertos ostentaban esta posición predominante, seguramente hallaremos la respuesta en el poder de sus patrocinadores y en la afinidad de sus puntos de vista con los de la comunidad empresarial y los de los principales medios de comunicación. Sus mensajes pasaban con bastante facilidad a través de los filtros del sistema de propaganda. El *Reader's Digest* financiaba y publicaba los trabajos de Sterling, lo que les proporcionaba una enorme difusión y un reconocimiento inmediato «de imagen de marca». La red conservadora es también una gran admiradora de Sterling, al igual que su numerosa cuadra de columnistas y los centros de estudio y asesoramiento afiliados a ella, como el Georgetown Center for Strategic and International Studies (CSIS) y el American Enterprise Institute, que promovían los puntos de vista de nuestra autora. También la administración Reagan estaba encantada con Sterling, pese a sus constantes acusaciones de cobardía a la CIA y al Departamento de Estado, ¡por no perseguir al terrorismo y a la conexión búlgara con suficiente agresividad!, así como el *New York Times*, *Time*, *Newsweek*, el programa *CBS News* y muchos otros. Sterling era la más popular y relevante expositora del tema reclamada por los conferenciantes durante el encuentro del Jonathan Institute de julio de 1979 y recomendada por la administración Reagan, ansiosa por crear un ambiente moral favorable a la carrera de armamentos y un apoyo global para los luchadores por la libertad contrarrevolucionarios.[30] También Henze, antiguo peón de la CIA y protegido de Zbigniew, estaba financiado por el *Reader's Digest*, y a su vez Ledeen formaba parte del CSIS y del equipo político de Reagan. Si los medios de comunicación transmitían las literales mentiras de estos Tres Grandes —como solían hacer—, el mecanismo de réplicas críticas permanecía en silencio. Según comentó un funcionario de dicha red a uno de los autores, si un crítico de la conexión búlgara

29. Sus tácticas coercitivas fueron efectivas porque su importancia preestablecida y su poder les confirió prioridad ante los organizadores de la programación, los cuales les dieron ventaja. Esta es la base de los «acuerdos vinculantes», declarados ilegales en la sección 3 de la Ley Clacton.

30. Este asunto de Sterling y los fines perseguidos por estos conferenciantes también reflejaban un consenso de la elite de los Estados Unidos; de otro modo, los medios de comunicación no habrían aceptado sus opiniones tan fácilmente.

hiciese oír su voz a través de las ondas, «él se encargaría de poner los puntos sobre las íes, pero con Sterling no había problemas».

Una vez más, conforme al modelo de propaganda, a los medios de comunicación no parecía preocuparles el que Sterling, Henze y Ledeen fuesen unas fuentes de información extraordinariamente partidistas, inmunes a los dictados de la evidencia y de hecho agentes de la desinformación. Hemos visto antes cómo Sterling descartaba el compromiso de Agca con los turcos y cómo abordó el tema de su arma, a lo que podríamos añadir numerosos casos similares.[31] Su libro *Terror Network* destaca por su credulidad a la hora de aceptar como ciertas las afirmaciones que le habían proporcionado las policías secretas de Israel, Sudáfrica y Argentina, y aun más notablemente las de Jan Sejna, desertor estalinista checo,[32] ¡cuyas pruebas de la red de terrorismo soviética procedían de un documento que la CIA había falsificado para verificar su integridad![33] Una de las características destacables de *Time of Assassins* y de otros escritos de Sterling acerca de la conexión búlgara es su reiterada creencia en que la administración Reagan y la CIA detuvieron su persecución del complot rojo debido a su interés en la distensión.[34] Y pese a sus excepcionales ventas y a la acrítica recepción de sus obras por parte

31. Véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, capítulo 6, «The Disinformationists».

32. En una mentira característica, Sterling dice en *Terror Network* (Holt, Rinehart & Winston/Reader's Digest Press, Nueva York, 1984, p. 290) que Sejna salió de Checoslovaquia «zafándose del ejército invasor soviético», cuando en realidad Sejna desertó en plena Primavera de Praga, mucho antes de la invasión soviética, en medio de un escándalo por corrupción del cual fue protagonista. Véase Leslie Gelb, «Soviet-Terror Ties allied Outdated», *New York Times* (18 de octubre de 1981). En su libro *Veil*, Bob Woodward señala que los analistas de la CIA descartaron las maquinaciones de Sterling por ser «absurdas», dando algunos ejemplos, incluida su confianza en los relatos de la prensa italiana que habían sido infiltrados mediante las operaciones de desinformación de la CIA (Simon & Schuster, Nueva York, 1987, pp. 124-129). Para un rebatimiento detallado, véase Edward S. Herman, *The Real Terror Network*, South End Press, Boston, 1982.

33. Por supuesto, Sejna no pasó el *test* al «reconocer» el documento falsificado, que se le había ido de la memoria, y que utilizó en años posteriores para sus espectaculares revelaciones. Véase Lars-Erik-Nelson, «The Deep Terror Plot: A Thickening of Silence», *New York Daily News* (24 de junio de 1984); Alexander Cockburn, «Beat the Devil», *The Nation* (17-24 de agosto de 1985). Sterling recibió esta información llovida del cielo sobre Sejna de Michael Ledeen. Véase Sterling, *Terror Network*, p. 34.

34. Véase también «Why Is the West Covering Up for Agca? An Exclusive Interview with Claire Sterling», *Human Events* (21 de abril de 1984).

de los medios de comunicación estadounidenses, Sterling lamentaba que «la actitud que gozaba de aquiescencia, la actitud socialmente indispensable ... si tienes ganas de entrar en determinados círculos, y si te preocupas porque tu trabajo sea aceptado en Occidente», consistía en dudar de la conexión búlgara, algo que atribuía al éxito de la KGB en la difusión de un opúsculo de cuarenta páginas sobre el complot escrito por la periodista soviética Iona Andronov.[35]

Todas estas evidencias de la impostura no deterioraron la credibilidad de Sterling entre los medios de comunicación de los Estados Unidos. De hecho, el *New York Times* le concedió un espacio en la portada y el papel de periodista habitual para todas las *noticias* relacionadas con la conexión búlgara; obrando de esta manera, el *New York Times* garantizaba que la política editorial controlaba las noticias que se daban a imprenta. Esto quedó sobradamente demostrado en el relato de Sterling del informe del fiscal Albano, publicado en portada el 10 de junio de 1984. La noticia más relevante de dicho informe era que el 28 de junio de 1983 Agca se había retractado de una parte substancial de sus declaraciones contra los búlgaros. Sterling no hizo mención a ello, pero sugería tímidamente que aunque Agca se había retractado de algunas cuestiones indeterminadas, éstas habían sido ya «corroboradas». Esta era una grave tergiversación: nunca se corroboró que Agca hubiese visitado el apartamento de Antonov ni que hubiese conocido a la familia de éste, y tanto Sterling como Henze habían utilizado con anterioridad los detalles que Agca había dado sobre este tema como elementos fundamentales para sustentar sus afirmaciones. Así la retractación de Agca desembocaba en la importante cuestión de cómo había llegado a conocer los detalles del apartamento de Antonov sin haber estado nunca en él. Pero el *New York Times* no hizo nunca referencia a ello.[36]

35. Sterling presentó y expuso esta cita y línea de pensamiento durante su discurso en la Conferencia sobre la Desinformación, celebrada en París el 5 de diciembre de 1984, patrocinada por la Internationale de la Resistance, una coalición de organizaciones derechistas de resistencia y «liberación». Nuestra cita procede de la p. 2 del ejemplar de su discurso distribuido por los patrocinadores. El opúsculo de Andronov al que atribuye tanta influencia nunca fue mencionado, por lo que sabemos, por los medios de comunicación estadounidenses, a excepción de Sterling y Henze.

36. Incluso Dobbs fracasó al tratar el hecho de que la defensa búlgara declarara que ninguna fuente pública (periódicos, radio o televisión) había proporcionado detalles sobre el apartamento de Antonov *antes* de que Agca suministrara dichos

Paul Henze había sido durante mucho tiempo un funcionario de la CIA que dirigía la emisora de dicha organización en Turquía, y era también un especialista en propaganda. Bulent Ecevit, anterior jefe de Estado turco, llegó a acusar a Henze de contribuir a desestabilizar Turquía durante su estancia en aquel país.[37] En sus artículos «informativos», Henze nunca hizo referencia a su activa participación en los asuntos turcos en su calidad de funcionario de la CIA. Sus artículos destacan por sus constantes defensas del gobierno militar turco, por su deshonestidad,[38] y por el hecho de que Henze prescindía abiertamente de los dictados de la evidencia a la hora de probar la culpabilidad soviética.[39]

Michael Ledeen, como ya hemos visto en el primer capítulo, sostiene que los medios de comunicación conocen mejor a Gaddafi que el gobierno de los Estados Unidos, y que éstos dedican más atención a las víctimas del terror de Estado en los estados clientes de Estados Unidos (¿Indonesia, Timor Oriental y Guatemala?) que a la de los estados enemigos y radicales (¿Camboya y Polonia?). Pero tampoco en este caso tales disparates limitaron el acceso de Ledeen a los medios de comunicación como experto en la conexión búlgara o en cualquier otro tema.[40]

Los medios de comunicación no sólo permiten el predominio de esas fuentes de desinformación, sino que las protegen contra revelaciones que podrían evidenciar sus dudosas credenciales. La prensa casi nunca mencionó que Henze había sido durante mucho

---

detalles al magistrado que dirigía la investigación. Esto parece indicar que Agca se enteró de los mismos mediante algún tipo de contacto mientras estuvo en la cárcel. Dobbs descarta esta posibilidad considerándola la «opinión búlgara», pero nunca explica qué otra opinión puede dar cuenta del conocimiento que tenía Agca sobre lugares en los que no había estado jamás.

37. *Panorama* (26 de mayo de 1985), p. 107.

38. Los libros de Ugur Mumcu, mencionados anteriormente, son un reportaje en directo sobre lo que Mumcu repetida y explícitamente llama «mentiras» de Henze.

39. «... creo que ya hemos superado el punto en el que se sirva a los intereses de otro partido que no sea el soviético al adoptar un enfoque minimalista y legalista de la cuestión que argumenta que a falta de "evidencia documental" u otra prueba concluyente de que el gobierno soviético está detrás de algo, debemos suponer que no lo está» (Paul Henze, «The Long Effort to Destabilize Turkey», *Atlantic Community*, invierno de 1981-1982, p. 468).

40. Ledeen publicó tres artículos de opinión en el *New York Times* en los años 1984-1987.

tiempo funcionario de la CIA (y por lo que sabemos, la televisión no lo ha mencionado nunca), así como tampoco reveló su defensa constante del régimen militar turco ni sus frecuentes mentiras. Por lo que se refiere a Sterling, sus repetidos errores, sus disparatados argumentos y sus descabelladas opiniones políticas no han sido nunca desenmascarados ante los lectores del *New York Times*, de *Time* o de *Newsweek*, o los espectadores de los programas *CBS News* o «*McNeil-Lehrer News Hour*», e incluso han sido ignoradas algunas cuestiones muy «periodísticas» acerca de su capacitación profesional. Por ejemplo, los repetidos ataques de Sterling contra Henry Curiel, activista radical francés que fue asesinado, desembocaron en una demanda por difamación presentada contra ella en París. El *New York Times* no ha mencionado nunca esta demanda, que hubiera dado una mala imagen de Sterling y no sólo porque la perdiese total o parcialmente, sino también por la idea que daba con respecto a sus fuentes de información y a sus métodos. Sterling había obtenido gran parte de su información a través de un periodista francés, George Suffert, que era un enlace de los servicios de inteligencia franceses y sudafricanos, y que había tenido la amabilidad de poner en cabeza de su lista de organizaciones «terroristas» al Congreso Nacional Africano. En su libro *Terror Network*, Sterling da a entender repetidamente que Curiel era un agente de la KGB, pero el tribunal francés, basándose en documentos aportados por el servicio de inteligencia de ese país, no encontró pruebas que sustentasen tal afirmación. La defensa de Sterling rebajó planteamientos y adujo que su insinuación de la conexión de Curiel con la KGB era simplemente una «hipótesis» más que una afirmación de hecho. En resumen, el proceso evidenció que Sterling era un elemento transmisor de desinformación, totalmente dispuesta a difamar a un radical asesinado basándose en afirmaciones proporcionadas por fuentes de desinformación de extrema derecha.

Michael Ledeen, activista y desinformador neoconservador, con acceso directo al *New York Times*, ha gozado también de estrecha protección de la publicación. Su libro *Grave New World* fue reseñado en el *New York Times* por William Griffith, «editor volante» del *Reader's Digest*, hombre de derechas y especialista en ciencia política del MIT, para quien la versión de la conexión búlgara de

Ledeen resultaba totalmente convincente.[41] Ledeen estaba profundamente implicado con Francesco Pazienza en el asunto «Billygate», y tenía numerosos contactos con el servicio de inteligencia y con la extrema derecha italianas. Licio Gelli, fascista italiano y dirigente de la P-2 que se ocultaba en Uruguay, ordenó a uno de sus cómplices que hiciese llegar un manuscrito a Ledeen. Pazienza declaró que Ledeen era miembro de la agencia de información italiana SISMI, y que su número de identificación era el Z-3 (extremo que confirmó Santovito, dirigente del SISMI). Ledeen recibió del SISMI más de cien mil dólares por los servicios prestados, incluyendo el suministro de informes viejos del servicio de información de los Estados Unidos que el SISMI hacía pasar por propios. Ledeen canalizó este dinero a la cuenta de un banco en las Bermudas. Sus actividades manipuladoras en Italia llegaron a tal nivel que en el verano de 1984 el nuevo director del SISMI comunicó al Parlamento italiano que Ledeen era un «entrometido» y *persona non grata* en Italia.[42] El *New York Times* se abstuvo de mencionar estas cuestiones.[43]

4.6. El esquema de la propaganda: preguntas no formuladas, fuentes de información sin explotar

Existe una estrecha vinculación entre las fuentes de información utilizadas, los esquemas de referencia, y las pautas de lo periodístico. Cuando los medios de comunicación deciden apoyarse en Ster-

41. *New York Times Review* (19 de mayo de 1985). Para un análisis de la teoría neoconservadora de los medios de comunicación de Ledeen, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 166-170.

42. Para documentación y fuentes, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, pp. 93-98, 160-161; véase también Jonathan Kwitny, «Tale o Intrigue: Why an Italian Spy Got Closely Involved in the Billygate Affair», *Wall Street Journal* (8 de agosto de 1985).

43. El alcance de la protección del *Time* a sus fuentes de desinformación fue puesta en evidencia de forma divertida cuando en febrero de 1987 Charles Babcock, del *Washington Post*, reveló que era más que probable que Ledeen hubiese sido expulsado en 1972 de la Universidad de Washington en St. Louis por plagio. El mismo día apareció en el *New York Times* un artículo de Stephen Engelberg sobre Ledeen que describía la historia de éste del modo siguiente: «Tras ser cesado en la Universidad de Washington en St. Louis en 1972, Ledeen se convirtió en...». Esto es todo lo que la prensa fue capaz de publicar.

ling, Henze y Ledeen, adoptan simultáneamente un marco de referencia en el cual los búlgaros y los soviéticos son los presuntos culpables, Agca es un mercenario apolítico, y el diligente juez Martella se encarga de promover la justicia en la libre Italia. En la campaña de propaganda resultante, las cuestiones espinosas con respecto a las características del modelo SHK sencillamente no se plantean, y no se tienen en cuenta otras fuentes de información y otros modelos explicativos.

De nuevo resulta aplicable y esclarecedora la distinción entre los asuntos que están dentro de las pautas y los que no. «En el orden del día» están los informes de Agca y Martella acerca de las últimas declaraciones de Agca y las pruebas de la participación búlgara, la opinión de Brzezinski acerca de si era verosímil que los búlgaros estuviesen comprometidos en semejante aventura (lo estaban), o la pregunta de Judy Woodruff a Paul Henze de si los soviéticos «podían tener intenciones o deseos de intentarlo de nuevo» (ellos hacen siempre este tipo de cosas, pero seguramente adoptarían más precauciones «porque habían salido muy bien librados en Italia»).[44] Como en el caso de las elecciones en el Tercer Mundo que hemos descrito en el capítulo 3, los medios de comunicación preferían centrarse en detalles superficiales acerca de los implicados, en opiniones formuladas dentro del estrecho margen de los criterios del *establishment* (y también en los fraudulentos desmentidos de los funcionarios búlgaros y soviéticos), junto a cualquier novedad que corroborase la causa aceptada (las acusaciones de un desertor, una nueva confesión de Agca, el informe de un investigador o del fiscal del caso, y filtraciones de presuntas declaraciones o de los cambios que se iban a producir), fuera cual fuese su credibilidad.

«Fuera del orden del día» están los argumentos y los hechos que pueden llegar a cuestionar la validez del modelo básico de Sterling, Henze y Kalb, así como los relacionados con el «modelo alternativo» (que empieza preguntándose por qué Agca tardó tanto en confesar y la probabilidad de que fuese alentado y presionado para hablar). Nos ocuparemos tan sólo de alguna de las importantes cuestiones y pruebas que los medios de comunicación dejaron fuera de su agenda.

El modelo básico SHK apoyaba su acusación en la motivación

44. «McNeil-Lehrer News Hour», programa del 27 de mayo de 1985.

soviética, en la estancia de Agca en Sofía, y en el alto grado de profesionalismo de las policías secretas búlgara y soviética, que hacía probable que hubiesen manipulado a Agca si éste había interrumpido su viaje en Bulgaria. Sólo el programa «20/20» de la cadena ABC emitido el 12 de mayo de 1983 estudiaba con alguna profundidad la motivación soviética, pese a la constante reiteración que los otros medios de comunicación hacían de la línea SHK. La ABC se tomó la molestia de preguntar al Vaticano acerca de la validez de la afirmación de Marvin Kalb, según la cual el papa había escrito una nota amenazando con su dimisión y su regreso a Polonia para liderar la resistencia ante cualquier invasión soviética. El cardenal John Krol, portavoz del Vaticano, dijo que «no sólo no ha existido jamás semejante carta, sino que el hecho de que el papa hubiese escrito directamente a Breznev hubiese significado desviarse totalmente de todos los procedimientos habituales. De ninguna manera se puede concebir que el Santo Padre diga "dimitiré"». La información que la ABC obtuvo del Vaticano indicaba que el mensaje *oral* del papa a Breznev había sido conciliador. Los restantes medios de comunicación no se hicieron eco de este espectacular rechazo de uno de los elementos nucleares del modelo SHK, rechazo del que no se volvió a hablar tras la emisión del programa de la ABC. Los medios de comunicación tampoco efectuaron ningún balance de los supuestos beneficios que obtenía la Unión Soviética frente a los costes y riesgos que le significaba apadrinar a Agca.

Ninguno de ellos se detuvo a valorar la carta escrita por Agca en 1979, en la que amenazaba con matar al papa durante su visita a Turquía. Y nunca se puso en cuestión la ridícula afirmación de Sterling, según la cual la KGB había contratado a un turco para asesinar al papa con el ánimo de perjudicar la relación de Turquía con la OTAN. Los medios de comunicación estadounidenses tampoco se ocuparon del tema de la autenticidad de la carta que Agca escribió a Alparslan Turkes, que evidentemente tenía que ver con su compromiso político (y por consiguiente con otra de las premisas del modelo SHK). Y las informaciones que dieron sobre el juicio de Roma no reflejaron las declaraciones de Abdullah Catli, según las cuales Bulgaria era una de las rutas hacia Europa preferidas por los «Lobos Grises» por la relativa facilidad de pasar desapercibidos en ese país, debido al gran número de turcos que circulaban por él, lo cual contradice abiertamente la premisa del modelo SHK según la cual la

cual la policía secreta búlgara estaba al corriente de todo, por lo cual la estancia de Agca en Sofía respondía a un plan de los funcionarios búlgaros.

Sin embargo, la deficiencia más chocante de los medios de comunicación con respecto a las premisas básicas del modelo SHK, era su increíble ingenuidad ante las especulaciones pseudocientíficas del mismo, y ante el cúmulo de violaciones a los principios elementales de la verosimilitud de los desmentidos. Las absurdas afirmaciones de Sterling, Henze y Kalb —sin rastro alguno de pruebas que las sustentasen— de que Agca había sido reclutado en Turquía por la KGB para un futuro trabajo, y que Agca se había hecho pasar por derechista como «coartada», no fueron ridiculizadas ni evaluadas cuando se presentaron como una presunta realidad.[45] Los medios de comunicación nunca discutieron el que la tesis del reclutamiento previo de Agca en Turquía y la cuidadosa elaboración de la coartada eran totalmente incoherentes con la afirmación de que lo habían llevado a Sofía para darle instrucciones. Con respecto a las presuntas y abiertas relaciones de Agca con los búlgaros en Roma, los medios de comunicación se negaron sencillamente a tomar en consideración que el supuesto profesionalismo y la utilización de un derechista turco como «coartada» habían desaparecido.

Por lo que se refiere al modelo alternativo, y a la probabilidad de que Agca hubiera sido alentado y asesorado, los medios de comunicación rehusaron también explorar estas posibilidades discordantes. Simplemente se negaron a examinar y a discutir la *conveniencia* del recientemente descubierto complot para los intereses occidentales; el enorme retraso de Agca en mencionar a los búlgaros; las condiciones en las que éste se hallaba en prisión y los contactos que había mantenido; los informes sobre las reuniones, ofertas y amenazas dirigidas a Agca para inducirle a hablar; y la naturaleza transigente de la policía y de los servicios de información italianos. Todo ello hace que los medios de comunicación sean cómplices de la supresión de importantes documentos.

A modo de ejemplo, el 12 de julio de 1984, el *Informe de la Comisión Parlamentaria sobre la Logia Masónica P-2* italiana, describe con todo detalle la penetración de esta masiva conspiración

45. Véase nuestra referencia anterior sobre la falta de sentido crítico del artículo del *Newsweek* del 3 de enero de 1983.

neofascista en el estamento militar, en los servicios secretos, en la prensa y en la judicatura, entre otros. Este informe era periodístico por derecho propio, pero también tenía que ver con la causa de la conexión búlgara, ya que hacía referencia a determinadas características de las instituciones italianas que estaban directamente involucradas en la elaboración y seguimiento de la acusación contra los búlgaros. El *New York Times*, *Time*, *Newsweek* o el programa *CBS Evening News* no mencionaron jamás la publicación de dicho informe.

Como segundo gran ejemplo podemos citar el que un año después, en julio de 1985, el Tribunal Penal de Roma dictó su *Sentencia sobre el caso de Francesco Pazienza et al.*, en el que se describía reiteradamente la corrupción de los funcionarios de la agencia de servicios secretos italianos SISMI, incluyendo la falsificación y ocultación de documentos. Estos funcionarios estaban también acusados de participar en el encubrimiento de los agentes que llevaron a cabo la matanza en la estación de Bolonia el año 1980, el tipo de conexión terrorista que atrae la frenética atención de los medios de comunicación cuando la pueden atribuir a los culpables adecuados. Como ya hemos mencionado anteriormente, funcionarios del SISMI visitaron a Agca en la cárcel y esa agencia emitió también un documento falso implicando a la Unión Soviética en el tiroteo contra el papa el 19 de mayo de 1981, tan sólo seis días después del intento de asesinato. Esta falsificación no fue nunca mencionada por el *New York Times*, el *Time*, *Newsweek* o el *CBS News*, y la sentencia del tribunal de julio de 1985 apenas mereció un artículo en la última página del *New York Times*.

Estos silencios informativos se producían en relación a materiales que indicaban la corrupción del proceso italiano y la posibilidad de que Agca hubiera sido persuadido y entrenado para atribuir el complot a los países del Este. Naturalmente, un sistema de propaganda que explotaba la presunta conexión búlgara debía eludir tales documentos.

Durante 1982 y 1983 los medios de comunicación estadounidenses no hicieron ninguna referencia a las condiciones extremadamente laxas bajo las que transcurría la estancia de Agca en prisión, ni a las numerosas informaciones aparecidas en la prensa disidente de Italia y de Estados Unidos. En junio de 1983, Diana Johnstone, editora en el extranjero del periódico *In These Times*, envió una

columna de opinión al *New York Times* y al *Philadelphia Inquirer* en la que resumía las pruebas y las declaraciones acerca de las visitas del servicio de inteligencia, los informes de las amenazas a Agca en el sentido que las abiertas y agradables condiciones de las que gozaba en prisión llegarían a su fin si no se decidía a cooperar, y el acuerdo que Martella le propuso. Esta colaboración fue rechazada, y ni el *New York Times* ni el *Philadelphia Inquirer* permitieron que esta información trascendiese en sus páginas; y que nosotros sepamos, no trascendió en ninguna publicación. Algunos años más tarde, en un artículo publicado en el *New York Times*, el 17 de junio de 1985, sobre la detallada descripción efectuada por Pandico del entrenamiento que Agca recibió en prisión, John Tagliabue calificaba de «notablemente permeable» la reclusión de Agca. Pero el *New York Times* nunca antes había mencionado dicha permeabilidad, y por lo visto no la consideraba relevante para el caso.

Cuando en noviembre de 1982 Agca identificó a los búlgaros, la integridad del proceso investigador y judicial italiano en el seguimiento del caso estaba ya en entredicho por diversas razones,[46] aunque a los medios de comunicación de los Estados Unidos eso les traía sin cuidado. Tampoco estaban interesados en las extrañas circunstancias que rodeaban a la famosa fotografía de Antonov, ampliamente difundida en la prensa occidental, en la que se le veía claramente contemplando el panorama de la plaza de San Pedro el 13 de mayor de 1981. Finalmente, Martella declaró que el personaje que aparecía en la fotografía no era Antonov, sino un turista estadounidense. Pero este turista, que al parecer tenía exactamente el mismo aspecto que Antonov, nunca fue localizado, y el carrete del que procedía la fotografía había desaparecido inexplicablemente.[47] Tampoco atrajo la atención de los medios de comunicación el que Agca modificase sus declaraciones sobre los búlgaros, ni que Martella le permitiese generosamente cambiar sus recuerdos con respecto al horario de los acontecimientos ocurridos el 13 de mayo, cuan-

46. Para una discusión sobre el arreglo subyacente en la identificación fotográfica de los búlgaros del 9 de noviembre de 1982, así como sobre la dirección del caso por el juez Martella, véase Herman y Brodhead, *Bulgarian Connection*, capítulo 5.

47. Sobre la probabilidad de que la foto de Antonov hubiera sido «fabricada» como elemento de desinformación, véase Howard Friel, «The Antonov Photo and the "Bulgarian Connection"», *Covert Action Information Bulletin*, 21 (primavera-verano 1984), pp. 20-21.

do ya las pruebas en contra presentadas por los búlgaros eran demasiado fehacientes.[48] El 28 de junio de 1983 Agca se retractó de sus declaraciones según las cuales había visitado el apartamento de Antonov y había encontrado a la familia de éste, lo que los medios de comunicación no mencionaron hasta un año después, y ni aun entonces este cambio hizo que la prensa plantease algún problema sobre el caso o sobre la investigación de Martella.[49] ¿Cómo podía Agca conocer detalles del apartamento de Antonov si nunca había estado allí? Una prensa honesta se hubiese ocupado del tema de una manera implacable, pero el *New York Times*, con Sterling como periodista, omitió la cuestión.[50] Los otros medios de comunicación sencillamente no estaban interesados en ella.

Tampoco les interesaba que Orsen Oymen hubiese descubierto que el Vaticano se había esforzado en el intento de implicar a los búlgaros, o en la revelación durante el juicio de que las autoridades germano-occidentales habían intentado sobornar a Oral Celik, miembro de los «Lobos Grises», para que se presentase en la República Federal y confirmase las declaraciones de Agca. Las declaraciones confidenciales de Pandico y Pazienza de que la Mafia y el SISMI habían contribuido a que Agca hablase merecieron una insignificante atención, y todo este cúmulo de materiales acerca del proceso italiano nunca fue reunido para someterlo a un nuevo análisis del caso.

Quizá el ejemplo más flagrante de ignorancia premeditada sea el relacionado con el intrigante y antiguo miembro del SISMI Francesco Pazienza. Buscado por diversos crímenes, Pazienza huyo de Italia y en 1985 vivía exiliado en Nueva York. Finalmente fue apre-

48. Esta cuestión se trató de forma sobresaliente en el programa «20/20» de la ABC el 12 de mayo de 1983; asimismo, a principios de junio de 1984, Michael Dobbs abordó correctamente el tema de la declaración de Agca en el *Washington Post*. No obstante, ambos casos son excepcionales, tal como señalamos en la nota 26 *supra*.

49. Dobbs es una honorable excepción, aunque se mantuvo muy cauteloso al generalizar sobre la manera en que el juez Martella se ocupó del caso, y no llegó a tomar en serio el obvio modelo alternativo.

50. Al principio, Sterling sugirió indirectamente que las declaraciones de las que se había retractado habían sido «corroboradas», lo cual era falso. Más tarde, Sterling siguió la solución del fiscal italiano Albano: Agca realmente estuvo en el apartamento de Antonov, pero lo negaba para advertir a los búlgaros que más les valdría sacarle de la cárcel.

sado y retenido por el Servicio de Inmigración y Naturalización. Pazienza había colaborado con Michael Ledeen en el asunto «Billygate» en Italia, y conservó su relación con éste aún después de que Ledeen se convirtiera en la mano derecha del general Haig en Italia, en la primera época de la presidencia de Reagan. Pazienza había sido también un estrecho colaborador de Giuseppe Santovito, director del SISMI. A partir de 1983 la prensa italiana suponía que Pazienza estaba implicado en las presiones ejercidas sobre Agca para lograr que hablase, y finalmente el propio Pazienza efectuó unas pormenorizadas acusaciones de entrenamiento por parte de elementos del SISMI. Aunque Pazienza se encontraba en la prisión de Nueva York y era muy fácil conseguir una entrevista con él, el *New York Times* lo ignoró. Nuestra hipótesis es que dicha publicación obró de esta manera porque de haber hablado con Pazienza le hubiese resultado difícil no tratar el tema de sus conexiones con Ledeen y Sterling (ambos fuentes de información y protegidos del *New York Times*), lo cual hubiese dejado en mal lugar la fiabilidad de las fuentes de información de la publicación. El relato de Pazienza a buen seguro hubiese evidenciado también que el *New York Times* había suprimido los hechos relacionados con la corrupción del SISMI, al tiempo que suscitaba preguntas con relación al entrenamiento de Agca. Ambas cosas hubiesen interferido la argumentación de la propaganda.

El juicio de Roma resultó incómodo para los medios de comunicación occidentales, ya que Agca se apresuró a declarar que era Jesús y, aún más importante, no pudo proporcionar ninguna prueba que respaldase sus declaraciones de la complicidad búlgara. La diligente y extensa investigación del tribunal encontró numerosos vínculos de Agca con los «Lobos Grises» durante el período inmediatamente anterior al intento de asesinato, pero no pudo hallar ningún testimonio de sus (presuntas) numerosas reuniones con los búlgaros en Roma, ni el dinero, ni el coche, y al final, ninguna condena. Como ya hemos señalado, además de las pruebas ya obtenidas acerca de las infames prácticas negociadoras mantenidas con Agca mientras estaba en prisión, y las reuniones celebradas en 1981 con funcionarios del servicio de inteligencia y la oferta de Martella, se producía una continua acumulación de pruebas y afirmaciones de haber presionado a Agca para que implicase a los búlgaros. Pero a pesar de todas estas pruebas y de la imposibilidad

de condenar a los búlgaros tras un prolongado juicio e investigación, los medios de comunicación de Occidente nunca ofrecieron una nueva y fidedigna versión del caso. Casi unánimemente se limitaron a informar de que el tribunal italiano había desestimado el caso por falta de pruebas, más que a demostrar la inocencia. Nunca insinuaron siquiera la posibilidad de que el tribunal y el jurado italianos hubiesen podido actuar con parcialidad por tratarse del bloque del Este, y protegiendo los poderosos intereses occidentales que con tanto empeño habían apoyado la conexión búlgara.

Tampoco se refirieron retrospectivamente a sus propias afirmaciones sobre el caso, ni a las de los desinformadores, para ver cómo habían pasado por alto todas las pruebas que se habían acumulado. El 3 de enero de 1983 el *Newsweek* hacía referencia a un funcionario italiano que afirmaba que «tenemos pruebas fehacientes ... [de que] Agca actuaba en estrecho contacto con los búlgaros», y en el editorial del 20 de octubre de 1984 del *New York Times* leíamos que «se pueden demostrar varios puntos de las declaraciones de Agca en relación a sus encuentros con funcionarios búlgaros». Si habían «pruebas fehacientes» y aspectos «demostrables» ya mucho antes del juicio ¿por qué no se presentaron dichas pruebas ante el tribunal? ¿Por qué, tras un enorme esfuerzo de investigación, no habían aún suficientes pruebas para fundamentar la condena? Los medios de comunicación de los Estados Unidos nunca intentaron dar respuesta a estas preguntas. Tal cosa hubiese significado cuestionar seriamente la validez del modelo de Sterling, Henze y Kalb, así como tomar en consideración otras alternativas, lo que dichos medios no estaban preparados para hacer. Para ellos, el modelo alternativo, verosímil desde el principio y, ya en marzo de 1986, corroborado por un gran número de pruebas, era aún «la versión de los búlgaros». Las cuestiones que ponía sobre el tapete la «versión búlgara» son, a nuestro entender, las que hubiesen planteado los medios de comunicación estadounidenses si unos hechos semejantes se hubiesen producido en Moscú. Y esto significa que la versión que utilizaron desde el principio hasta el final era «la versión del gobierno de los Estados Unidos», tal como la proponía el modelo de propaganda.

5. LAS GUERRAS DE INDOCHINA: LAOS Y CAMBOYA

Los acuerdos de Ginebra de 1954 estipularon un arreglo político en Laos y Camboya. Sin embargo, ambos países se vieron envueltos en la agresión estadounidense a Indochina, con devastadoras consecuencias. En ambos casos, los medios contribuyeron notablemente a este resultado.

5.1. Laos

En Laos, al igual que en Vietnam, los Estados Unidos decidieron evitar un acuerdo político, según declaró abiertamente ante el Congreso el embajador Graham Parsons, quien afirmó que «durante dieciséis meses he estado luchando para evitar una coalición». Violando los acuerdos de Ginebra, los Estados Unidos establecieron una misión militar con cobertura civil, encabezada por un general vestido de civil, y su ayuda llegaba a raudales en un esfuerzo por establecer el control estadounidense. Que Laos fuese «el único país en el mundo en el que los Estados Unidos asumía el 100 por 100 del presupuesto militar»[1] da la medida de la magnitud de esa ayuda y de su finalidad.

Con todo, en 1958 se estableció un gobierno de coalición, tras las únicas elecciones dignas de ese nombre de la historia de Laos.

1. Mencionado por Bernard Fall, *Anatomy of a Crisis*, Doubleday, Nueva York, 1969, p. 163, de las audiencias del Congreso. Las razones eran políticas: el Pentágono no estaba a favor. Véase también Walter Haney, «The Pentagon Papers and U.S. Involvement in Laos», en *Pentagon Papers*, edición del senador Gravel, Beacon Press, Boston, 1972, volumen 5; de ahora en adelante *PP*.

Pese a los enormes esfuerzos de los Estados Unidos, la izquierda venció con facilidad. Nueve de los trece candidatos de las guerrillas del Pathet Lao consiguieron un escaño en la asamblea nacional, junto a cuatro candidatos neutralistas de tendencias izquierdistas («compañeros de viaje», según la denominación del embajador Parsons). Por tanto, los «comunistas o compañeros de viaje» se hicieron con trece de los veintiún escaños en liza. El mayor número de votos fue para el líder del Pathet Lao, el príncipe Souphanouvong, que fue elegido presidente de la asamblea nacional.

Las presiones estadounidenses —incluyendo, fundamentalmente, la retirada de la ayuda— condujeron rápidamente al derrocamiento del gobierno mediante un golpe realizado por un «neutralista pro-occidental» que prometió lealtad al «mundo libre», manifestó su intención de disolver el partido político del Pathet Lao (Neo Lao Hak Sat, o NLHS) y desestimó los acuerdos que había logrado establecer la coalición. Fue derrocado a su vez por el favorito de la CIA, el general ultraderechista Phoumi Nosavan. Tras la victoria de los clientes estadounidenses en las elecciones de 1960, amañadas tan toscamente que incluso los observadores más proestadounidenses quedaron horrorizados, se desencadenó una guerra civil, en la que la URSS y China respaldaban una coalición que abarcaba prácticamente todo el espectro político a excepción de la extrema derecha, ésta apoyada a su vez por los Estados Unidos. Según estos últimos, «en la primavera de 1961 el NLHS parecía estar en situación de apoderarse de todo el país», fundamentalmente debido a su control de la zona rural, donde «había montado diligentemente una organización que abarcaba la mayoría de las diez mil aldeas del país», como señalaba apesadumbradamente el periodista australiano y furibundo anticomunista Denis Warner.[2] Era el mismo problema de siempre: los Estados Unidos y sus clientes eran militarmente fuertes, pero políticamente débiles.

Reconociendo que su política se encontraba en un callejón sin salida, en 1962 los Estados Unidos accedieron a participar en una nueva conferencia de Ginebra, que propuso un nuevo acuerdo. Este acuerdo pronto quedó en papel mojado, reanudándose la guerra civil con una alineación diferente y con la creciente intervención de

2. Departamento de Estado, *Background Notes*, marzo de 1969; Denis Warner, *Reporting Southeast Asia*, Angus & Robertson, Sydney, 1966, p. 171.

los Estados Unidos y sus aliados, y de Vietnam del Norte, en el contexto de expansión de la guerra en Vietnam. Las operaciones militares clandestinas estadounidenses empezaron en 1961, y el bombardeo regular por parte de Estados Unidos a principios de 1964: la operación «Barrel Roll», dirigida contra el norte de Laos se intensificó en 1966, alcanzando un extraordinario nivel a partir de 1968, tras el supuesto «cese del bombardeo» en Vietnam del Norte, en realidad una redistribución de los bombardeos, desviando los aviones hacia la destrucción de Laos.[3]

La cobertura informativa de los medios con respecto a Laos fue en ocasiones, especialmente durante el primer período, extensa. Según apreciaciones del analista de los *Papeles del Pentágono*, el *New York Times* le dedicó tres veces más espacio que a Vietnam. Pero el contenido de tales informaciones era muchas veces absurdo. Por ejemplo, el factor esencial en la subversión estadounidense del gobierno electo en Laos en 1958 fue el cese de la ayuda, pero «la prensa nacional nunca lo dijo»; de hecho apenas mencionó el tema salvo para efectuar equívocos comentarios sobre el engaño de Washington.[4] Bernard Fall expuso detallada e irónicamente algunos de los incidentes más ridículos, incluyendo incendiarias invenciones que ayudaron a profundizar la crisis y condujeron a una mayor intervención en Tailandia e Indochina. Son notables también los enfebrecidos informes de Joseph Alsop sobre las acciones militares comunistas, en su mayoría inventadas.[5]

Con la escalada de la guerra del Vietnam, Laos se convirtió tan sólo en «una gota en el océano de Vietnam» en palabras de Dean Rusk, o una «guerra secundaria», según Walter Haney, como lo sería más tarde Camboya. A medida que la «guerra secundaria» iba en aumento, disminuía la atención de los medios. De hecho, los Estados Unidos mantenían tres guerras diferentes: el bombardeo de la

3. Sobre este período, véase, entre otros, Haney, «U.S. Involvement in Laos»; Noam Chomsky, *At War with Asia*, Pantheon, Nueva York, 1970, de ahora en adelante *AWWA*; Nina S. Adams y Alfred W. McCoy, eds., *Laos: War and Revolution*, Harper & Row, Nueva York, 1970; Charles Stevenson, *The End of Nowhere*, Beacon Press, Boston, 1972.

4. Howard Elterman, *The State, the Mass Media and Ideological Hegemony: United States Policy Decisions in Indochina, 1974-1975 - Historical Record, Government Pronouncements and Press Coverage*, tesis doctoral, New York University, 1978, p. 198.

5. Fall, *Anatomy of a Crisis*.

ruta Ho Chi Minh en el Sur; el bombardeo de la población campesina del norte de Laos, que según admitió el propio gobierno estadounidense no tenía relación con la guerra en Vietnam del Sur, y la «guerra clandestina» entre la fuerza mercenaria dirigida por la CIA, compuesta por miembros de las tribus de las montañas, y el Pathet Lao, apoyado por Vietnam del Norte, al parecer, al mismo nivel que los tailandeses u otros mercenarios introducidos por los Estados Unidos. Se dio información del bombardeo del sur de Laos, pero no así de la guerra clandestina y del bombardeo del norte del país, si exceptuamos los cuentos sobre la agresión norvietnamita, muchas veces fantásticos y exentos del menor análisis crítico.[6]

En julio de 1968 el corresponsal de *Le Monde* en el sudeste asiático, Jacques Decornoy, publicó extensos informes sobre los bombardeos de Laos, de los que había sido testigo presencial, en los que constataba que la zona se había convertido «... en un mundo silencioso, ya que las aldeas circundantes habían desaparecido y sus habitantes vivían escondidos en las montañas ... siendo peligroso asomarse en cualquier momento del día o de la noche», debido a los incesantes bombardeos que conducían a «la destrucción científica de las zonas tomadas por el enemigo». Decornoy describió «las ruinas inmóviles y las casas desiertas» de la capital del distrito Sam Neua, bombardeado por primera vez por las Fuerzas Aéreas estadounidenses en febrero de 1965. La mayor parte de este «núcleo de población» había sido «arrasado» por los bombardeos; a su llegada, Decornoy pudo contemplar las humeantes ruinas provocadas por los recientes ataques aéreos con bombas de fósforo, los «enormes cráteres» diseminados por toda la ciudad, las iglesias y las casas «demolidas», y los restos de las bombas de fragmentación estadounidenses arrojadas para maximizar las bajas civiles. En un radio de acción de treinta kilómetros desde esa población, «ni

6. Si los reporteros se hubiesen dirigido a la (muy cooperativa) embajada estadounidense en Vientiane para conseguir documentación, pronto se habrían dado cuenta de que las declaraciones en las que confiaban, surgidas de las sesiones de información de dicha embajada, tenían muy poco que ver con los hechos, tal como uno de nosotros pudo comprobar a principios de 1970, cuando estaba trabajando allí. Para un análisis detallado de la información disponible referida a intervenciones extranjeras (norvietnamitas, tailandesas, de los nacionalistas chinos y estadounidenses) a lo largo de los sesenta, y su relación con la información facilitada por los medios de comunicación, véase *AWWA*, pp. 203-206; y Noam Chomsky, *For Reasons of State*, Pantheon, Nueva York, 1973, pp. 178-179 (a partir de ahora *FRS*).

una sola casa había sido respetada en todos los pueblos y aldeas. Los puentes habían sido destruidos, y los campos, hasta llegar a los ríos, estaban agujereados por los cráteres de las bombas».[7] Tras los informes de Decornoy no cabía ninguna duda de que las fuerzas aéreas estadounidenses estaban librando unos ataques letales contra la sociedad civil del norte de Laos. Estos informes de terribles destrucciones fueron repetidamente sometidos a la atención de los medios de comunicación, que los ignoraron o, para ser más precisos, los suprimieron. Posteriormente descrito como «bombardeos secretos» en una «guerra ejecutiva», el ataque estadounidense fue efectivamente «secreto», no simplemente por la duplicidad del gobierno, como se suele considerar, sino por la complicidad de la prensa.

Los medios de comunicación no sólo no publicaron las informaciones de los ataques contra la indefensa sociedad civil, ni trataron de investigar más a fondo por su cuenta, sino que, en las raras ocasiones que mencionaron los bombardeos, se dedicaron a ofrecer relatos exculpatorios cuya inexactitud sabían a ciencia cierta. Cuando en 1969 se empezó a hablar de los bombardeos de Laos, se pretendía que éstos iban dirigidos contra las rutas por los cuales los norvietnamitas se infiltraban en Vietnam del Sur (la «ruta Ho Chi Minh»), y posteriormente, que los aviones estadounidenses proporcionaban apoyo táctico a las fuerzas gubernamentales que combatían contra los agresores norvietnamitas, lo cual nada tenía que ver con lo que Decornoy había presenciado y descrito; era en cambio una versión bastante más tolerable de unos hechos inaceptables.[8]

Ciñéndonos exclusivamente al *New York Times*, durante 1968 esta publicación no hizo mención alguna de los bombardeos, excepto minúsculas noticias dando cuenta de las quejas del Pathet Lao (22 y 31 de diciembre de 1968). El 18 de mayo de 1969, el *New York Times* informó del bombardeo estadounidense de Laos, pretendiendo que éste estaba «dirigido contra las rutas, especialmente

7. En Adams y McCoy, *Laos*; extractos en *AWWA*, pp. 96-97.

8. Sobre la tentativa de A. J. Langguth, antiguo director de la oficina del *New York Times* en Saigón, de explicar la supresión del bombardeo en el norte de Laos, ocultando la crucial diferencia entre el bombardeo de la sociedad civil del norte y el bombardeo de la ruta Ho Chi Minh en el sur (aceptable según la doctrina de «defender Vietnam del Sur de la agresión de Vietnam del Norte»), véase Noam Chomsky, *Towards a New Cold War*, Pantheon, Nueva York, 1982, p. 402 (hay traducción castellana: *La segunda guerra fría*, Crítica, Barcelona, 1988).

la llamada ruta Ho Chi Minh, a través de las cuales los norvietnamitas enviaban hombres y suministros, infiltrándolos en Vietnam del Sur». Un informe del 14 de junio señalaba que los «aviones estadounidenses bombardean blancos en todo Laos, especialmente a lo largo de la ruta Ho Chi Minh, en un esfuerzo para acosar al Pathet Lao, movimiento rebelde laosiano de inspiración comunista, y para detener la afluencia de suministros del enemigo a Vietnam del Sur». El 16 de julio, Charles Mohr informó que los bombardeos estadounidenses «iban dirigidos contra las rutas de infiltración que desde Vietnam del Norte atraviesan Laos en dirección al Sur». El 28 de julio encontramos una referencia a «200 salidas diarias de bombarderos estadounidenses hacia el noreste de Laos», que se dirigían contra las fuerzas norvietnamitas, y Hedrick Smith, desde Washington, añadió el 2 de agosto que los Estados Unidos «habían bombardeado concentraciones norvietnamitas» en Laos. El 25 de agosto, T. D. Allman informó de misiones de bombardeo «en apoyo táctico» de las fuerzas del gobierno que combatían a los norvietnamitas, y de «ataques de acoso contra las posiciones comunistas diseminadas por el noreste de Laos», dando en esta última crónica el primer atisbo de algo que se alejaba de la versión aprobada. El 7 de septiembre aparecieron nuevas informaciones sobre las operaciones del poderío aéreo estadounidense en apoyo táctico y para «cortar las rutas de suministro norvietnamitas», a las que siguió una crónica de Allman sobre el éxito de la ofensiva del gobierno con operativos «reforzados por soldados tailandeses» y apoyados por «los bombardeos estadounidenses más intensos jamás vistos en Laos» (18 de septiembre). Posteriores informes desde Washington y Vientiane (del 19, 20, 23, 24 y 30 de septiembre) confirmaron que las fuerzas aéreas estadounidenses proporcionaron apoyo táctico a las misiones de combate del gobierno que se sumaban a los bombardeos de las rutas de infiltración norvietnamita. Entre estas informaciones se contaba un despacho fechado el 23 de septiembre de la agencia France Presse en el que se informaba «del bombardeo de las zonas del Pathet Lao por aviones de los Estados Unidos», lo que evidenciaba que los bombardeos habían ido más allá de las rutas de infiltración y las operaciones de combate, algo que era del dominio público en París y en Vientiane pero no así en Estados Unidos, donde todavía no se había informado de ello.

En resumen, el bombardeo para causar el terror en el norte de

Laos, permaneció fuera de la agenda pese a ser conocido; en general las informaciones fueron insignificantes y, cuando menos, considerablemente equívocas. Para Elterman, la guerra en Laos y Camboya fue prácticamente «invisible» para los medios de comunicación durante 1969, a excepción del izquierdista *National Guardian*, que dio información sustancial de lo que estaba sucediendo en realidad.[9]

Finalmente, el 1 de octubre de 1969 el *New York Times* publicó un artículo de T. D. Allman (cuya valiosa información sobre la guerra fue publicada principalmente en el extranjero), en el que afirmaba que «en aquel momento, los blancos principales de los Estados Unidos» eran «la economía y el tejido social de los rebeldes», y que sus bombardeos hacían que la población se refugiase durante el día en cuevas y túneles, lo que dificultaba al Pathet Lao «librar una "guerra popular", pues cada vez contaba con menos gente». Para los Estados Unidos no era menos importante, según Allman, el control del territorio. «Con sus bombardeos los Estados Unidos son capaces de destruir, casi a voluntad, cualquier pueblo, puente, ruta o concentración de soldados enemigos o de civiles.»[10]

Esta confirmación de lo que hacía tiempo era sabido en restringidos círculos del movimiento por la paz y conscientemente ignorado por la gran prensa, pasó sin especial repercusión. Ésta tampoco se ocupó del ejército clandestino de la CIA, que había barrido la Llanura de los Jarros los meses precedentes, evacuando a todos los civiles que permanecían en la zonas cercanas a Vientiane, ni de las horrendas historias que de él se contaban en todas partes.[11]

9. Elterman, *State-Media-Ideological Hegemony*, pp. 332 y ss. y apéndices.

10. El informe asegura que «hasta el principio de la primavera, cuando las tropas norvietnamitas emprendieron una serie de avances en el noroeste de Laos», la guerra había sido «limitada», los bombardeos estadounidenses tenían como objetivo «las rutas de abastecimiento norvietnamitas» y «las concentraciones de tropas enemigas», y «se evitaron los núcleos de población civil y las zonas de cultivos». Numerosos informes de refugiados tardaron poco en demostrar la inexactitud de esta información, como lo hicieran quince meses antes los informes de Decornoy basados en testimonios presenciales.

11. Véanse las referencias citadas *supra* y Fred Branfman, *Voices from the Plain of Jars*, Harper & Row, Nueva York, 1972; y Walter Haney, «A Survey of Civilian Fatalities among Refugees from Xieng Khouang Province, Laos», en *Problems of War Victims in Indochina*, Audiencia (*Hearings*) ante la Subcomisión (Kennedy) sobre los Refugiados y Huidos, Senado de los Estados Unidos, 9 de mayo de 1972, parte 2: «Laos and Cambodia», apéndice 2. En 1970 aparecieron algunos informes en los medios de comunicación: Daniel Southerland, *Christian Science*

Walter Haney, estadounidense laosianoparlante que recopiló una pormenorizada serie de entrevistas con refugiados —calificada de «seria y cuidadosamente preparada» por el embajador estadounidense en Laos, William Sullivan—, recogía las declaraciones de un funcionario estadounidense en Laos citándolas como «el relato más preciso de los bombardeos»:

> En 1968 la intensidad de los bombardeos fue tal que no era posible ningún tipo de vida organizada en los pueblos, que se desplazaron hacia las afueras y posteriormente más y más al interior de la selva, a medida que los bombardeos llegaron a su apogeo en 1969, cuando los aviones hacían su aparición diariamente y destruían toda estructura permanente. No quedó nada en pie. Los aldeanos vivían en trincheras, agujeros o cuevas, y sólo podían cultivar por la noche. [Todos] los informantes, sin excepción, habían visto cómo sus aldeas quedaban completamente destruidas. En la última fase, la finalidad de los bombardeos era la destrucción sistemática de las bases [materiales] de la sociedad civil.[12]

Un estudio realizado por miembros de la Subcomisión Kennedy llegó a la conclusión de que el objetivo principal del bombardeo estadounidense fue «destruir la infraestructura física y social» de las áreas controladas por el Pathet Lao, conclusión totalmente corroborada por los hechos.[13]

También periodistas occidentales elaboraron crónicas acerca de la destrucción del norte de Laos que habían presenciado, pero fueron publicadas en el extranjero. A finales de 1971 T. D. Allman sobrevoló la Llanura de los Jarros, e informó de que ésta «estaba vacía y arrasada» por el napalm y las bombas de saturación B-52, «utilizadas en un intento de extinguir toda vida humana en esa zona». «Toda la vegetación ha sido destruida y los cráteres son

---

Monitor (14 de marzo); Lawrence Stern, *Washington Post* (26 de marzo); Hugh D. S. Greenway, *Life* (3 de abril); Carl Strock, *New Republic* (9 de mayo); Noam Chomsky, «Laos», *New York Review of Books* (23 de julio de 1970), con más detalles sobre la cuestión (publicado también en *AWWA*).

12. Haney, *PP*, V. Véase *FRS*, pp. 176 y ss., sobre cómo Sullivan desvirtuó las conclusiones de Haney.

13. *Refugee and Civilian War Casualty Problems in Indochina*, Informe presentado a la Subcomisión (Kennedy) sobre los Refugiados y Huidos, Senado de los Estados Unidos, 28 de septiembre de 1970.

literalmente incontables» y muchas veces imposibles de distinguir entre «las interminables parcelas de tierra batida por los repetidos bombardeos». En la misma época el *Washington Post* publicó las declaraciones de Robert Seamans, secretario de las Fuerzas Aéreas, que con respecto al norte de Laos informaba que «no tenía pruebas de los bombardeos indiscriminados»; que los «brutales» eran los norvietnamitas y que el pueblo no estaba «en contra de los Estados Unidos, sino todo lo contrario». John Everingham, periodista australiano y laosianoparlante, viajó en 1970 «a través de aldeas y más aldeas agonizantes» de los hombres de la tribu Hmong, que habían sido «lo bastante inocentes como para confiar en la CIA» y cuya única opción era una «carrera forzosa hacia la muerte» dentro del ejército clandestino de la CIA en lo que quedaba de un país en el que los bombardeos habían «convertido la mitad de toda su superficie en una tierra de ruinas carbonizadas y cuyo cielo causaba temor a sus habitantes», en suma, «no quedaba nada vivo ni en pie que los comunistas pudiesen heredar». A excepción de la minoritaria prensa pacifista, ningún periódico estadounidense se interesó por la historia, aunque más tarde los medios de comunicación se lamentaron de la miserable situación de los Hmong que habían conseguido sobrevivir, presentándolos como «las víctimas del comunismo». El 7 de octubre de 1970 el *Bangkok World* publicó un comunicado de la AP en el que se informaba que los bombardeos estadounidenses habían «aniquilado» poblaciones; hacia 1972 este tipo de informaciones aparecieron alguna que otra vez en la prensa estadounidense.[14] Posteriormente, Nayan Chanda visitó la Llanura de los Jarros, informando (en el extranjero) que desde el aire la zona «parecía un paisaje lunar, plagado de agujeros como nuestro satélite a causa de los cráteres producidos por las bombas, espantoso testimonio de los años de guerra que despojaron la zona de personas y viviendas», durante «los seis años de bombardeos "secretos"» realizados por la aviación estadounidense, mientras que «a ras de suelo, los signos de muerte y destrucción eran aún más

14. En 1986 uno de los autores participó en un encuentro de personajes de los medios de comunicación celebrado en Nueva York. Un conocido periodista de televisión defendió la cobertura del bombardeo del norte de Laos por los medios de comunicación argumentando que en 1972 se hizo un reportaje sobre un campo de refugiados. Uno se pregunta cuánto crédito habría merecido un periódico que hubiese informado acerca del bombardeo de Pearl Harbor en 1945.

omnipresentes», incluyendo la capital de la provincia «completamente arrasada», tal como habían informado anteriormente los refugiados a los que nadie hizo caso. Continuando la práctica de los voluntarios estadounidenses durante la guerra, trabajadores auxiliares con larga experiencia en Laos trataron de dar información acerca de la postguerra laosiana a los medios de comunicación —con parco resultado— y nos informaron privadamente que sus relatos habían sido seriamente distorsionados por los periodistas del *New York Times* «que omitieron datos y resaltaron el aspecto negativo de las imparciales declaraciones que efectuamos», así como otros métodos por el estilo.[15]

Oficialmente, el gobierno estadounidense lo negó todo, continuando el engaño incluso después de que los hechos fueran expuestos y conocidos con cierto detalle por quienes se preocuparon del tema. Para muchos la guerra estadounidense en Laos fue «un éxito» (para los senadores Jacob Javits y Stuart Symington), e incluso «*un éxito espectacular*» (para Thomas McCoy, antiguo funcionario de la CIA en Laos).[16]

Por su alcance y esmero, el extenso análisis de los informes sobre los refugiados, efectuados por unos cuantos jóvenes voluntarios estadounidenses en Laos, soporta muy favorablemente la comparación con los posteriores estudios sobre los refugiados camboyanos, que fueron objeto de gran publicidad en Occidente, después de la toma del poder de los Khmer rojos. La historia fue tan horrible como sumamente oportuna para las operaciones que los Estados

15. T. D. Allman, *Manchester Guardian Weekly* (1 de enero); *Far Eastern Economic Review* (8 de enero de 1972; a partir de ahora *FEER*); véase *FRS*, pp. 173 y ss., para un extracto más largo. Robert Seamans, mencionado por George Wilson, *Washington Post-Boston Globe* (17 de enero de 1972); véase *FRS*, pp. 172 y ss., para testimonios similares a éste del embajador William Sullivan ante el Congreso. John Everingham y comentarios subsiguientes sobre las tribus Hmong (Meo), mencionado en Noam Chomsky y Edward S. Herman, *Political Economy of Human Rights*, South End Press, Boston, 1979, pp. 119 y ss. (a partir de ahora *PEHR*); Chanda, *FEER*, 23 de diciembre de 1977; véase *PEHR*, II, pp. 121 y ss., 340, para estos y otros testimonios directos que no coinciden con la mayoría, salvo excepciones. *Bangkok World*, mencionado por Haney, «U.S. Involvement in Laos», p. 292, junto con la columna de Jack Anderson en el *Washington Post* del 19 de febrero de 1972. Sobre las experiencias de posguerra del cuerpo de socorro estadounidense, véase *PEHR*, pp. 132 y ss. y 340.

16. El énfasis de McCoy, en una carta al *Washington Post*; citado por Haney, «U.S. Involvement in Laos», p. 293.

Unidos estaban llevando a cabo. Pero no hubo mucho interés por ella; los materiales que se publicaron, fundamentalmente fuera de los canales principales, fueron prácticamente ignorados y pronto olvidados. La acción del terror resultaba inapropiada para las necesidades del sistema doctrinal. Los medios de comunicación, al no informar de los hechos cuando estaban en disposición de hacerlo, en 1968, y al no efectuar nuevas investigaciones cuando ya no se podía negar lo que había sucedido, en 1969, contribuyeron al éxito del engaño de la opinión pública, y a que continuase la destrucción.

Al terminar la guerra, el comentarista de la *ABC News*, Harry Reasoner, manifestó su esperanza de que Laos y su «apacible pueblo» pudiesen volver a vivir en paz tras «la payasada de la CIA y la perversa invasión de los norvietnamitas».[17] La «payasada de la CIA» comprendía la destrucción de la «economía y el tejido social de los rebeldes» en el norte de Laos, con un número desconocido de muertos en zonas irrecuperables, y la matanza masiva de los Hmong que fueron enrolados en la causa de la CIA y abandonados cuando ya no les servían para nada. No se puede atribuir nada ni remotamente comparable a la «perversa invasión de los norvietnamitas», pese a que incurrieron en atrocidades como el asesinato de doce miembros de las fuerzas aéreas estadounidenses en marzo de 1968, en una base de radar cercana a la frontera norvietnamita, utilizada para dirigir los bombardeos y las operaciones contra ese país efectuadas por mercenarios comandados por los Estados Unidos.[18]

Al final de la guerra el *New York Times* analizó el tema, concluyendo que habían sido asesinadas unas 350.000 personas, más de una décima parte de la población, y otra décima parte desarraigada en esa «lucha fratricida que aumentó a unas proporciones trágicas a causa de adversarios extranjeros». La «lucha fratricida» bien hubiese podido terminar con el gobierno de coalición de 1958 de no haber sido por los «extranjeros», con los Estados Unidos jugando todo el tiempo un papel decisivo, un rol totalmente ignorado en este significativo análisis histórico, a excepción de ciertos comentarios equívocos. A estas alturas, el *New York Times* sigue pretendien-

17. Comentario de televisión publicado en *Christian Science Monitor* (10 de junio de 1975).

18. Véase *AWWA*, pp. 119 y ss., y Haney, «U.S. Involvement in Laos», citando audiencias del Congreso, y el *Washington Post* (16 de marzo de 1970).

do que el bombardeo estadounidense iba dirigido contra las rutas de suministro norvietnamitas, sin mencionar nada más. También han desaparecido los hechos cruciales de la historia real, o han sido groseramente tergiversados. Las informaciones posteriores eliminaron también regularmente el rol de los Estados Unidos al crear la devastación, y los «problemas» de la posguerra fueron atribuidos exclusivamente a los comunistas. Todo ello no es más que una vergonzosa evasiva, a la luz de unos hechos históricos indiscutibles.[19]

Una vez más, la actuación de los medios de comunicación, en modo alguno gloriosa, queda bien explicada mediante el modelo de propaganda.

5.2. Camboya

5.2.1. «*La década del genocidio*»

Pocos países han sufrido tan amargamente como Camboya durante los años setenta. La «década del genocidio», denominación propuesta por la Comisión Investigadora Finlandesa que intentó averiguar lo que había sucedido,[20] pasó por tres fases, la última de las cuales se prolonga en el tiempo hasta nuestros días, como trágica huella de esos años terribles:

Fase I: Desde 1969 hasta abril de 1975, los bombardeos estadounidenses, a un nivel sin precedentes en la historia, así como la guerra civil apoyada por los Estados Unidos, dejaron al país sumido en la ruina. Aunque el Congreso decretó el final de los bombardeos en agosto de 1973, la participación del gobierno estadounidense en las continuas matanzas prosiguió hasta la victoria de los Khmer rojos, en abril de 1975.[21]

19. Walter Saxon, *New York Times*, 24 de agosto de 1975. Véase *PEHR*, capítulo 5, para más detalles sobre este informe y una discusión general sobre la cobertura informativa de Laos durante la posguerra.

20. Kimmo Kiljunen, ed., *Kampuchea: Decade of the Genocide*, Informe de la Comisión Investigadora Finlandesa, apoyada por el gobierno, Zed, Londres, 1984. Véase también Kiljunen, «Power Politics and the Tragedy of Kampuchea during the Seventies», *Bulletin of Concerned Asian Scholars* (abril-junio 1985).

21. Véase William Shawcross, *Sideshow*, Simon & Schuster, Nueva York, 1979, y Seymour Hersh, *The Price of Power*, Summit, Nueva York, 1983.

Fase II: Desde abril de 1975 hasta 1978 estuvo sometida al criminal gobierno de los Khmer rojos (Kampuchea Democrática, KD), derrocado por la invasión vietnamita de Camboya en diciembre de 1978.

Fase III: Vietnam instaló en el poder en Camboya al régimen de Heng Samrin, pero la coalición Kampuchea Democrática (KD), articulada fundamentalmente en torno a los Khmer rojos, mantuvo el reconocimiento internacional, a excepción del bloque soviético. Reconstruida con la ayuda de China y de los Estados Unidos en la frontera tailandesa-camboyana y en bases tailandesas, las guerrillas de los Khmer rojos, la única fuerza militar efectiva de la KD, han continuado desarrollando actividades de esas que, cuando el destinatario es un gobierno amigo, se consideran de tipo «terrorista».

Nos referiremos ahora a las penalidades sufridas por Camboya durante esos años terribles, y a la forma en que éstas han sido descritas, primero con algunas observaciones preliminares y posteriormente con mayor detalle, fase por fase.

5.2.2. *Problemas de escala y responsabilidad*

Las tres diferentes fases de la «década del genocidio» han corrido diversa suerte en los medios de comunicación y en la cultura general, de un modo que se ajusta perfectamente a las expectativas de un modelo de propaganda. La primera fase, de la que los Estados Unidos fueron los principales responsables, fue poco investigada, tanto en el momento en que tuvo lugar como después, y nunca ha sido descrita ni con mucho con los términos condenatorios aplicados a la segunda fase. Según nuestra conceptualización expuesta en el capítulo 2, la pléyade de camboyanos asesinados, heridos y traumatizados en este período eran víctimas «indignas».

La fase segunda, la era de Pol Pot, se ha descrito como un «holocausto», por lo general comparado con las peores atrocidades de Hitler y Stalin casi desde el principio, y ha sido objeto de una masiva publicidad y de indignación por los sufrimientos de esas víctimas «dignas».

La tercera fase renovó el status del pueblo camboyano como

víctimas dignas que sufrían bajo el gobierno vietnamita. Los vietnamitas, enemigos oficiales de los Estados Unidos, pronto se convirtieron en los malos de la película y en los responsables de las indescriptibles condiciones en las que se encontraba Camboya, así como en los culpables de una agresión no provocada. Mientras tanto, los Estados Unidos apoyaban a su aliada China, que llevó a cabo una invasión punitiva de Vietnam en febrero de 1979 y reconstruyó las derrotadas huestes de Pol Pot.

En los inicios de la tercera fase, se presumía que «los vietnamitas estaban llevando a cabo un sutil genocidio» en Camboya, acusación tácitamente confirmada en un estudio demográfico de la CIA, que estimaba un descenso en la población de 700.000 personas durante «el primer año del gobierno de Heng Samrin».[22] Este nuevo «holocausto» se construyó sobre la base de graves tergiversaciones de los datos que se poseían, según demostró Michael Vickery en su respuesta a las advertencias de William Shawcross sobre «el

22. William Shawcross, «The End of Cambodia?», *New York Review of Books*, 24 de enero de 1980, que confía en los informes de François Ponchaud, un cura francés cuyo trabajo proporcionó el mayor número de pruebas sobre las atrocidades de los Khmer rojos en el período 1975-1976: François Ponchaud, *Cambodia: Year Zero*, Holt, Rinehart & Winston, Nueva York, 1978, revisión de un estudio francés de 1977 que tal vez haya sido el libro inédito con más influencia en la historia política reciente tras el análisis que de éste hiciera Jean Lacouture («The Bloodiest Revolution», *New York Review of Books*, 31 de marzo de 1977); véase también, del mismo autor, «Cambodia: Corrections», *New York Review of Books* (26 de mayo de 1977), donde se retiran las declaraciones más sensacionalistas. Nuestro análisis (*The Nation*, 25 de junio de 1977) fue el primero, que sepamos, que tuviera en cuenta dicho texto, que apareció en inglés un año después. Véase nuestro *PEHR*, II, 6, sobre el registro de falsificaciones basado en este libro, y sobre el notable registro de Ponchaud, analizado posteriormente por Michael Vickery en *Cambodia: 1975-1982*, South End Press, Boston, 1984. CIA Research Paper, *Kampuchea: A Demographic Catastrophe*, CIA, Washington, mayo de 1980. Para una crítica de este estudio que revela la falsificación masiva de hechos condicionada por las prioridades del gobierno estadounidense (especialmente la supresión de las peores atrocidades de Pol Pot durante el último período), véase Michael Vickery, «Democratic Kampuchea-CIA to Rescue», *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 14, 2 (1982), y su libro *Cambodia*. Este último es el mejor estudio del período de los Khmer rojos, obra de uno de los pocos eruditos camboyanos auténticos, que ha tenido gran repercusión entre los estudiosos de Indochina y otros lugares, pero que ha sido virtualmente ignorado en los Estados Unidos, al igual que el informe de la Comisión Investigadora Finlandesa. Véase Noam Chomsky, «Decade for Genocide in Review», *Inside Asia*, Londres, febrero de 1985, reeditado en James Peck, ed., *The Chomsky Reader*, Pantheon, Nueva York, 1987, para varios estudios serios sobre este período.

fin de Camboya»,[23] pero no antes de que éstas hubiesen dejado su huella en la opinión pública, en la cual aún persisten diversas distorsiones y contradicciones. En su *Quality of Mercy*, Shawcross coincide con Vickery en afirmar que no existió la hambruna a gran escala de la que se habló en un principio,[24] si bien, según este último, el régimen de Heng Samrin «fue responsable de crear algunas de las condiciones que causaron la hambruna» en Camboya. Estos conflictivos relatos merecieron la atención de Ben Kiernan, especialista australiano en Camboya, quien propuso una explicación parcial: «*existió* la amenaza de hambruna, tal como proclamó el gobierno de Heng Samrin a mediados de 1979. Pero ésta fue contrarrestada por la reducida pero crucial cosecha de diciembre-enero, a la que Shawcross apenas hace referencia, *y* por los programas masivos de ayuda internacional, a los que Shawcross acostumbra a infravalorar».[25]

La ansiedad por dejar al descubierto la perversidad de los vietnamitas por «acabar con Camboya», la serena confianza en fuentes de reconocida escasa solvencia,[26] y las posteriores evasivas una vez se desvanecieron las acusaciones, quedan fácilmente explicadas por la hostilidad de los Estados Unidos (y en general del bloque occidental) contra Vietnam, que hizo que los Estados Unidos se alineasen sigilosamente con Pol Pot y que su presunta preocupación por

23. Michael Vickery, «Ending Cambodia-Some Revisions», rechazado por el *New York Review of Books* en junio de 1981. Véase su *Cambodia* para una discusión más amplia. Para entonces el propio Shawcross se lo había pensado mejor (véase «Kampuchea Revives on Food, Aid, and Capitalism», *The Bulletin* (Australia, 24 de marzo de 1981). Véase su *Quality of Mercy: Cambodia, Holocaust and Modern Conscience*, Simon & Schuster, Nueva York, 1984, para una versión posterior.

24. Página 370, culpando al engaño vietnamita por el informe en el que confió en 1980.

25. Shawcross, *The Nation* (21 de septiembre de 1985); Ben Kiernan, carta a *The Nation* (3 de octubre de 1985), inédita. Para una evaluación de los esfuerzos internacionales para proporcionar ayuda, véanse Vickery, *Cambodia*; Kiljunen, *Kampuchea*; Joel Charny y John Spragens, *Obstacles to Recovery in Vietnam and Kampuchea: U.S. Embargo of Humanitarian Aid*, Oxfam America, Boston, 1984; Shawcross, *Quality of Mercy*.

26. François Ponchaud, en quien Shawcross confió, es una fuente muy dudosa debido a razones que han sido sobradamente probadas; véase la nota 22. Nadie con un nivel de duplicidad tan alto como el suyo merecería credibilidad al tratar de establecer acusaciones no probadas contra alguien que no fuera un enemigo oficial.

los camboyanos se transformase en preocupación por las víctimas de la ocupación vietnamita.

La tercera fase tenía a su vez una dimensión interior, estadounidense, de gran importancia para nosotros. En un fascinante ejercicio, característico de las campañas de propaganda de apoyo al sistema, se lanzó la acusación de que los horrores de la segunda fase habían pasado «desapercibidos» en su momento: Esta supuesta realidad, desarrollada en la influyente obra de William Shawcross *Quality of Mercy*, suscitó muchos comentarios sobre «el holocausto y la conciencia moderna» —el subtítulo del citado libro—, y del fallo de la gente civilizada por no reaccionar adecuadamente ante las atrocidades que se estaban cometiendo. En el apartado «La fase III en los Estados Unidos» (p. 327), nos referiremos a los méritos de esta acusación con relación a la segunda fase. En cuanto a la primera fase de «la década del genocidio», la acusación de silencio se le aplica perfectamente aunque ni entonces ni ahora se ha hablado de ello. Tampoco en la bibliografía básica sobre el tema nadie ha calificado este período como un «holocausto» o «genocidio». La primera fase no suscitó ningún llamamiento en favor de la intervención internacional ni de juicios por crímenes contra la humanidad; desde entonces ha sido por lo general borrada de la historia. Visto en perspectiva las críticas más severas aparecidas en los medios de comunicación con respecto a la fase I se limitan a atribuir «la destrucción de la sociedad camboyana» a los «años de guerra» y a la «irreflexiva política de la Casa Blanca».[27] Durante la vista del caso Watergate surgió la cuestión del bombardeo estadounidense de Camboya, pero la principal preocupación se centró en que el Congreso no había sido informado de ello.

Michael Vickery sugiere una «interesante comparación, que po-

27. Shawcross, *Quality of Mercy*, pp. 49-50. Shawcross advierte que «en esos años de guerra asistimos a la destrucción de la sociedad camboyana y al resurgimiento de los Khmer rojos de sus cenizas, en buena medida como resultado de la política de la Casa Blanca»; «al dominar a las fuerzas nacionalistas desatadas por la guerra, los Khmer rojos se convirtieron en un ejército cada vez más poderoso», mientras en la «campaña de bombardeos intensivos de los Estados Unidos» a la que los Khmer rojos estaban expuestos durante el mes de agosto de 1973, «se supone que sus bajas fueron muy numerosas». La expresión «sus bajas» se refiere presumiblemente a las fuerzas militares de los Khmer rojos; no se mencionan bajas civiles. Sobre el limitado alcance de la «quality of mercy» (calidad de la piedad) de Shawcross, véase «La fase III en los Estados Unidos», *infra*, p. 327.

dría realizar algún periodista investigador», caso de que estuviese realmente interesado en los problemas de la región, entre Camboya durante la fase III y Tailandia, «en la que no ha habido guerra, invasión extranjera, bombardeos de castigo ni revolución, donde se da una masiva inversión extranjera y se disfruta de la simpatía de las más avanzadas potencias occidentales», pero donde las condiciones de la sociedad campesina son tan terribles que «desde 1980 se proporciona sustancial ayuda a los "refugiados" en la zona fronteriza, a los "aldeanos tailandeses afectados", cuya salud y nivel de vida, para asombro del personal de ayuda extranjero, no era mucho mejor que la de los refugiados camboyanos».[28] Naturalmente, nunca se ha realizado tal comparación, ni ha existido siquiera un destello de preocupación por los diversos informes, sumidos en la adecuada oscuridad, sobre las decenas de miles de niños, muchos de ellos menores de diez años, que trabajaban en situación de «virtual esclavitud» en fábricas tailandesas semejantes a campos de concentración,[29] o sobre las condiciones de vida normales de los campesinos de la región, ahora expuestas al tropel de visitantes de los campos fronterizos a los que éstos han acudido para presenciar las consecuencias del terror comunista y a expresar la compasión por las víctimas de éste.

El verdadero alcance de la carnicería y la destrucción durante las dos auténticas fases de matanza a gran escala durante la «déca-

28. Vickery, *Cambodia*, p. 293.

29. AP, *Boston Globe* (24 de septiembre de 1978), donde se menciona el Informe de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra sobre los más de cincuenta millones de niños obreros del mundo, con Tailandia encabezando la lista de países explotadores de la infancia, gracias a una opresiva pobreza, un eficaz gobierno militar respaldado por los Estados Unidos y una «completa libertad de empresa». Véanse *PEHR* y *PEHR*, II, para la descripción del Banco Mundial sobre la situación en Tailandia. Sobre el trato brutal que reciben muchos de los aproximadamente 10,7 millones de niños trabajadores de Tailandia, véase *Human Rights in Thailand Report*, 9, 1, Coordinating Group for Religion in Society, Bangkok, enero-marzo de 1985; *Thai Development Newsletter*, 3, 1, 1985, Bangkok, 1986. Sobre el trato que reciben las mujeres en «el burdel de Asia», con sus aproximadamente 500.000 prostitutas, masajistas y camareras, el 20 por 100 de las cuales tiene menos de catorce años, llevadas a Bangkok (y a veces vendidas a Europa) desde las empobrecidas áreas rurales por medio de «una enorme red subterránea de burdeles y talleres que se alimentan de la carne y el trabajo infantiles», véanse varios artículos en *Beyond Stereotypes: Asian Women in Development, Southeast Asia Chronicle* (enero de 1985).

da del genocidio» (fases I y II) sería, en el mejor de los casos, difícil de calcular, y los problemas de la virtual orgía de falsificaciones al servicio de unos fines políticos demasiados obvios.[30] La Comisión Investigadora Finlandesa estima que unas 600.000 personas, de una población de unos siete millones, murieron durante la fase I, que ocasionó también dos millones de refugiados.[31] De la segunda fase dieron una estimación realista, que oscilaba entre 75.000 a 150.000 ejecuciones sumarísimas, y una cifra cercana al millón de personas muertas a causa de asesinatos, hambre, enfermedad o exceso de trabajo. El análisis de Vickery es hasta la fecha el intento más esmerado de clarificar los hechos. Vickery acepta como cifra plausible de «bajas de guerra» la de 500.000 personas durante la primera fase, calculada a partir de las estimaciones de la CIA, pero inferior a éstas (véase nota 31), y unas 750.000 «muertes más de lo normal debidas a las especiales condiciones en las que se encontraba KD», con unas 200.000 a 300.000 ejecuciones y un descenso total de la población durante este período cercano a las 400.000 personas.[32]

Estas estimaciones, por lo que sabemos las más precisas de las

30. Para pruebas sobre esta cuestión, véase *PEHR*, II, 6, y Vickery, *Cambodia*.

31. Otros dan cifras estimadas más altas. Ponchaud habla de 800.000 muertos, pero tal como observamos en nuestro análisis de 1977, parece haber exagerado el número de víctimas de los bombardeos estadounidenses, y como se muestra en la nota 22, es una fuente muy poco fiable. «Fuentes del gobierno estadounidense dan una cifra oficiosa de 600.000 a 700.000» (estudio demográfico de la CIA, que acepta la cifra menor).

32. Vickery, *Cambodia*, pp. 184 y ss. Otras estimaciones varían considerablemente. Entre las más bajas, el estudio demográfico de la CIA propone una cifra entre 50.000 y 100.000 refiriéndose a personas que «podrían haber sido ejecutadas», y una estimación de las muertes en general que carece de sentido a causa de la estimación errónea de la población de la posguerra y de la parcialidad por motivos políticos de dichas valoraciones; el *Far Eastern Economic Review* informó de un substancial aumento de la población bajo KD de hasta 8,2 millones de personas, «basándose principalmente en las estimaciones de la CIA» (*Asia 1979* y *Asia 1980*, anuarios del *FEER*; este último reducía la cifra estimada de 8,2 millones a 4,2 millones, estando la cifra real alrededor de los 6,5 millones); en el periódico del gobierno estadounidense *Problems of Communism* (mayo-junio 1981), el especialista australiano en Indochina Carlyle Thayer sugiere una cifra de muertes por cualquier causa de 500.000, de las que 50.000 a 60.000 serían ejecuciones. Entre las más altas, las estimaciones alcanzan los 3 millones o más, pero sin contar con un análisis fiable. Todos los observadores serios hacen hincapié en que el margen de error es muy considerable.

que se pueden encontrar por escrito hasta el momento, indican que el número de víctimas durante la fase II del «genocidio» es algo superior al de la fase I, aunque no se trate de una diferencia radical. Pero antes de dar estas cifras por válidas debemos tener en cuenta que parte del número de víctimas de la fase II deben atribuirse a las condiciones fruto de la guerra estadounidense. Cuando terminó la guerra, tan sólo en Phnom Penh las muertes por inanición se cifraban en unas 100.000 al año; pese a ello se interrumpió inmediatamente el puente aéreo estadounidense que mantenía a la población con vida. Fuentes cercanas al gobierno de los Estados Unidos preveían un millón de muertos en Camboya si cesaba su ayuda. Un doctor occidental que trabajó en Phnom Penh durante 1974 y 1975 explicó que:

> Esta generación de niños va a ser una generación perdida. La desnutrición está afectando su capacidad mental y los está diezmando. Así, además de destruir una generación de hombres jóvenes, la guerra está destruyendo una generación de niños.

La embajada estadounidense estimaba que el arroz de que se disponía entonces en Phnom Penh bastaría como mucho para unas pocas semanas. El informe final del U.S. Aid observaba que el país tendría que hacer frente a la hambruna en 1975, con el 75 por 100 de sus animales destruidos por la guerra, y que la siembra de arroz para la nueva cosecha, a ocho meses vista, debería realizarse «mediante el duro trabajo de personas gravemente desnutridas». El informe predecía la «inanición generalizada» y «un trabajo de esclavos y raciones insuficientes para la mitad de la población del país» para el año siguiente, y «privaciones y sufrimiento generalizado ... durante los dos o tres años siguientes, antes de que Camboya pudiera volver a autoabastecerse de arroz».[33]

33. George Hildebrand y Gareth Porter, *Cambodia: Starvation and Revolution*, Monthly Review Press, Nueva York, 1976, basado en informes de ayuda estadounidenses e internacionales, mencionado en Vickery, *Cambodia*, p. 79; el corresponsal del *FEER*, Nayan Chanda, en varios artículos, mencionado en *PEHR*, I, 6, pp. 229 y ss.; el doctor occidental es la doctora Penelope Key, de la World Vision Organization, mencionada por Hildebrand y Porter, junto a informes parecidos de los observadores de la Cruz Roja y de los Catholic Relief Services; Shawcross, *Sideshow*, pp. 370 y ss. El libro de Hildebrand y Porter, el único estudio en profundidad de la situación después de la guerra, fue muy alabado por el estudioso indo-

También está la cuestión del efecto de los bombardeos estadounidenses sobre los Khmer rojos y la sociedad campesina que les proporcionaba base social, un factor señalado por todos los analistas serios. Un especialista en Camboya, Milton Osborne, llegó a la conclusión de que el terror comunista fue «seguramente una reacción ante el terrible bombardeo que sufrieron las regiones controladas por ellos» a manos de las fuerzas aéreas estadounidenses. Otro experto en Camboya, David Chandler, comentó que los bombardeos convirtieron a «millares de jóvenes camboyanos en partícipes de una cruzada anti-estadounidense», pues este país «había destruido gran parte del tejido social de la Camboya anterior a la guerra y proporcionó al CPK [Khmer rojos] los ingredientes psicológicos de una revolución social violenta, vengativa e implacable», una «guerra de clases entre la "gente de base" que había sido bombardeada, y la "nueva gente" que se había protegido de los bombardeos, alineándose así, en opinión de los Khmer rojos, con los Estados Unidos». «La intransigencia francesa convirtió a los nacionalistas en comunistas», según Philip Windsor, mientras que «la crueldad estadounidense ha transformado a los comunistas en fanáticos totalitarios».[34] Cabe preguntarse el peso que puede atribuirse a este factor a la hora de determinar la política de los Khmer rojos, al provocar la inquina de la sociedad campesina de «base» e impelirla a hacer que quienes en su opinión habían colaborado en su destrucción experimentasen la vida de los pobres campesinos o aún peor. Pero en cualquier caso no se puede dudar de la importancia de dicho factor.

Si valoramos todos estos elementos, parece justo tasar la respon-

---

chino George Kahin, pero completamente ignorado, cuando no difamado, por los medios de comunicación. Véase *PEHR*, II, 6, pp. 232 y ss., para un ejemplo notorio protagonizado por William Shawcross en el *New York Review of Books*. Cuando el *PEHR*, II, 6, estaba circulando en forma de manuscrito entre los expertos camboyanos y los periodistas, recibimos una carta de Shawcross solicitando que suprimiéramos las referencias a él. Le contestamos que nos complacería considerar cualquier caso específico que estimara erróneo o equívoco y retrasamos la publicación del libro a la espera de su respuesta, la cual nunca llegó. Sobre su respuesta pública, véase *infra*.

34. Milton Osborne, *Before Kampuchea*, Allen & Unwin, Londres, 1980, p. 191; David Chandler, *Pacific Affairs*, verano de 1983; Philip Windsor, *The Listener*, BBC, Londres, 11 de julio de 1985.

sabilidad de los Estados Unidos y de Pol Pot respecto de las atrocidades durante «la década del genocidio» prácticamente al mismo nivel.

Poco es lo que se sabe acerca de la primera fase del «genocidio», ya que ni entonces ni después ha habido mucho interés por averiguar qué sucedió en realidad. El informe de la Comisión Investigadora Finlandesa dedica tres superficiales páginas al tema, dada la precaria información de que disponían. La segunda fase se ha estudiado con mucha más intensidad y actualmente es posible conseguir información sustancial de los hechos. David Chandler y Ben Kiernan señalaban que a resultas del intenso interés en la fase II, «sabemos bastante más acerca de la textura de la vida cotidiana en la Kampuchea Democrática, supuestamente un régimen "ermitaño", de lo que sabemos de los regímenes manifiestamente abiertos de la república Khmer (1970-1975) o de la época Sihanouk (1954-1970) que le precedieron».[35] Pese a este considerable desequilibrio en conocimiento, el Centro de Documentación de Camboya en Nueva York se concentra en la fase II del genocidio. La espectacular diferencia en la información disponible de las dos fases, y el enfoque de las investigaciones en curso, son perfectamente explicables en los términos del modelo de propaganda.

Dejando de lado los círculos maoístas marginales, desde el principio no hubo prácticamente dudas de que el régimen de los Khmer rojos bajo el emergente líder Pol Pot era el responsable de atrocidades espeluznantes. Pero sí se dieron diferentes apreciaciones acerca del alcance y el carácter de dichos crímenes.

Los especialistas en Camboya del Departamento de Estado se mostraban escépticos ante las apreciaciones que habían sido objeto de publicidad generalizada en 1977, y con razón, según revelaron posteriores investigaciones. La *Far Eastern Economic Review* basaba su tesis, publicada en enero de 1979, de que la población había aumentado realmente durante el período de Pol Pot, en fuentes de la CIA; Nayan Chanda, su cualificado corresponsal, comentaba con respecto a los antecedentes de la invasión vietnamita que «algunos observadores están convencidos que si el régimen camboyano hubiese tenido un respiro, su imagen interna y externa hubiera

35. David Chandler y Ben Kiernan, eds., *Revolution and Its Aftermath in Kampuchea*, Monografía 25, Yale University Southeast Asia Series, 1983, p. 1.

mejorado lo suficiente como para hacer difícil, si no imposible, cualquier campaña vietnamita».[36]

Estas diferentes valoraciones continuaron incluso tras las abundantes evidencias proporcionadas por la afluencia de refugiados a Tailandia en 1979 y de las visitas a Camboya, que proporcionaron asimismo la primera información significativa de los años 1977-1978. En un extremo, Pol Pot continuaba siendo descrito por algunos como el forjador de nuevos modelos de genocidio comparables a los peores excesos de Hitler y de Stalin. En el otro extremo, encontramos la valoración de la posguerra como la de Douglas Pike, especialista del gobierno estadounidense, y en la actualidad jefe de los Archivos de Indochina de la Universidad de California, el experto «independiente» alabado por la Freedom House y el paradigma de los nuevos especialistas no ideológicos, tan admirado por el *New York Times*. En noviembre de 1979, Pike describió a Pol Pot como el líder «carismático» de una «sangrienta pero próspera revolución campesina, con un residuo sustancial de apoyo popular», bajo el cual «y ateniéndonos a bases estadísticas, la mayoría de ellos [los campesinos] no han padecido una excesiva brutalidad».[37] El estudio demográfico de la CIA del año 1980 sitúa las ejecuciones de la etapa de Pol Pot en el período de finales de enero de 1977. Por lo que se refiere al resto de ese año y a 1978 se limita a decir que «con toda probabilidad las condiciones de vida durante esos dos años no fueron muy diferentes de las que se daban durante 1976», pese a que como era sabido cuando la CIA realizó dicho estudio, esos últimos años fueron los peores, con mucho, en el contexto de las purgas internas y del creciente conflicto con Vietnam, una época en suma en la cual los Estados Unidos estaban empezando a «decantarse» hacia China y Pol Pot. La CIA acababa diciendo que entre «la vieja gente», la «población rural», «los fundamentos de la nueva sociedad revolucionaria de los Khmer rojos», se produjo un ligero incremento en la población durante el período de la KD.

36. Véase nota 32, *supra*; *FEER*, 19 de enero de 1979.

37. Douglas Pike, *St. Louis Post-Dispatch* (29 de noviembre de 1979), y *Christian Science Monitor* (4 de diciembre de 1979); mencionado por Vickery, *Cambodia*, p. 65. Sobre la valoración del trabajo de Pike por la Freedom House y el *New York Times*, véase Fox Butterfield, «The New Vietnam Scholarship», *New York Times Magazine* (13 de febrero de 1983), donde se considera a Pike como modelo de la «nueva raza» de especialistas imparciales.

Deng Xiaoping, estrecho aliado de los Estados Unidos que emergía en diciembre de 1978 como «hombre fuerte del partido» en China (que pronto pondría en marcha un plan para «castigar Vietnam» y que continuó siendo el principal apoyo de Pol Pot), expresó opiniones aún más prudentes. Se opuso enérgicamente a los intentos de apartar al Khmer rojo de su papel preponderante en la coalición Kampuchea Democrática en 1984, llegando a exclamar en un arrebato: «no entiendo por qué alguna gente desea destituir a Pol Pot. Es cierto que en el pasado ha cometido algunos errores, pero actualmente está encabezando la lucha contra los agresores vietnamitas».[38] La postura de Deng ha sido apoyada por la administración Reagan (véase «La fase III en Indochina», p. 322).

A estos ejemplos reales de las interpretaciones menos duras del período de Pol Pot cabría añadir algunas de las del tipo mítico a las que nos referiremos luego.

5.2.3. *El país «no tan apacible». Algunas historias que hacen al caso*

Parte de la ilusoria historia forjada sobre Camboya de los años setenta en adelante es que este «apacible país» y sus «sonrientes pobladores» habían conocido escaso sufrimiento antes de que el país se viese envuelto en la guerra de Indochina y fuese objeto del «autogenocidio» de Pol Pot. La realidad es diferente. Tras la famosa «sonrisa Khmer», como observó Charles Meyer, asesor francés del príncipe Sihanouk, subyace bastante amargura y violencia.[39] Vickery señala que las primeras crónicas «están llenas de referencias a ejecuciones públicas, emboscadas, torturas, quemas de aldeas y emigraciones forzadas», con la destrucción de aldeas y paisajes, torturas y asesinatos como moneda corriente, y pocas limitaciones institucionales al terror. El campesinado del interior de

38. Nayan Chanda, *Brother Enemy*, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York, 1986, pp. 329, 394, para un análisis detallado de las maniobras durante este período. Véase también Grant Evans y Kelvin Rowley, *Red Brotherhood at War*, Verso, Londres, 1984.

39. *Derrière le sourire khmer*, Plon, París, 1971; véase *FRS*, capítulo 2, sección 2.

Camboya, bastante desconocido para los expertos occidentales y para la población urbana, parece haber vivido en situaciones de extrema violencia y de aborrecimiento a los opresores ajenos a la aldea.

Durante la guerra francesa de reconquista a finales de la década de los cuarenta, un número «quizá próximo al millón de habitantes de las zonas rurales ... fueron "reagrupados" por la fuerza». La enorme afluencia de refugiados a Phnom Penh durante la primera fase de la «década del genocidio» no fue la primera migración masiva de la historia reciente, dice Vickery, y añade, además, que «estamos ante una historia extraña» que contempla el desplazamiento de personas que huyen de los bombardeos y de la salvaje lucha de los Estados Unidos «como algo menos horroroso o más "normal" que el movimiento contrario de 1975», la evacuación forzosa que se produjo cuando el ejército campesino de los Khmer rojos conquistó la ciudad. Los dirigentes de la resistencia antifrancesa tras la segunda guerra mundial describen con evidente satisfacción horribles atrocidades como parte «normal» de las «tradiciones Khmer». En esos mismos años, fuerzas del gobierno dirigidas por Lon Nol, líder del gobierno cliente apoyado por los Estados Unidos a principios de los setenta, llevaron a cabo masacres generalizadas en aldeas durante la retirada de los franceses. Entre otras cosas, realizaban «pruebas individuales de fuerza», que consistían en «agarrar a niños por las piernas y arrancárselas», acciones que «probablemente no habían sido olvidadas por los hombres de la zona que sobrevivieron hasta convertirse en las tropas de los Khmer rojos», cuyas posteriores atrocidades en este «apacible país» despertaron tanta indignación en Occidente. Así, concluye Vickery, «para el 80 al 90 por 100 de la población rural camboyana, la arbitrariedad de la justicia, las súbitas muertes violentas, la opresión política, el uso esquilmador de la religión y la reacción antirreligiosa, violenta y reposada a la vez, eran hechos frecuentes en su vida mucho antes de la guerra y la revolución de los setenta». Esta situación no despertó interés en Occidente. «Todas las creaciones de Pol Potismo estaban en estado embrionario», continúa Vickery, para ser «dirigidas en primer lugar a la población urbana» tras una guerra que en gran medida fue «una guerra entre la ciudad y el campo, en la que la conflagración urbana se incrementó en gran

medida con el único objetivo de mantener sus privilegios mientras sufrían las zonas rurales».[40]

Sería ocioso comentar que los Estados Unidos desplegaron sus abundantes recursos violentos en defensa de los privilegios urbanos. Pero en realidad, esta misión tenía sólo una importancia secundaria. Para los Estados Unidos, la destrucción de la Camboya rural era subsidiaria al objetivo de mantener en el poder el régimen cliente de Vietnam del Sur.

A diferencia de los convenios en Laos y Vietnam, los acuerdos de Ginebra no permitían el reconocimiento de la resistencia antifrancesa en Camboya, un hecho que causó gran amargura. El país estuvo gobernado por el príncipe Sihanouk hasta marzo de 1970, en que fue derrocado por un golpe apoyado por los Estados Unidos.[41] Durante este período, Sihanouk intentó mantener interna y externamente un difícil equilibrio. En Camboya, reprimió los alzamientos campesinos y de izquierda y trató de dirigir a la derecha, si bien el poder continuaba en gran parte en manos de las elites urbanas de derecha. En el exterior, intentó mantener una actitud de neutralidad frente al entramado de la galopante guerra en Indochina, guerra que, a su parecer, iba a terminar con una victoria comunista.[42]

Los esfuerzos neutralistas de Sihanouk no fueron apreciados por los Estados Unidos y sus aliados. Las tropas de Diem atacaron desde 1957 las regiones fronterizas: también menudearon las provocaciones tailandesas. En 1959 se frustró un intento de golpe de Estado, probablemente apoyado por la CIA, según opinión generalizada en Camboya. Esto debe verse en un contexto de subversión general de la zona por parte estadounidense, en el período posterior a los acuerdos de Ginebra; contexto en el que cabe incluir un golpe apoyado por la CIA y una invasión con el propósito de derrocar a Sukarno en Indonesia en 1958, la subversión del gobierno electo en

40. Vickery, *Cambodia*, pp. 7, 17, 5-6, 17, 43; Vickery, «Looking Back at Cambodia», *Westerly*, Australia, diciembre de 1976. Véase *PEHR*, II, 6, para extractos de este último estudio.

41. Véase *FRS*, pp. 192 y ss., y las fuentes citadas, en especial los estudios de 1971 de T. D. Allman, basados en entrevistas con miembros de la elite camboyana.

42. Véase Elizabeth Becker, *When the War Was Over*, Simon & Schuster, Nueva York, 1987, p. 28, donde se menciona un telegrama de la embajada estadounidense de 1963 que cita a Sihanouk; Chanda, *Brother Enemy*, pp. 61 y ss. Véase *AWWA* y *FRS* para más detalles sobre el período de Sihanouk.

Laos en el mismo año, y los esfuerzos para destruir la resistencia antifrancesa en Vietnam del Sur y consolidar la dictadura de Diem, al tiempo que socavaba los acuerdos políticos de Ginebra. En 1963, las fuerzas del Khmer Serei apoyadas por la CIA atacaban con frecuencia Camboya desde bases sudvietnamitas y tailandesas, en un momento en el que los Estados Unidos estaban intensificando sus actividades clandestinas en Laos y maniobraban, con creciente violencia, para impeler un acuerdo político en Vietnam del Sur. En 1966, el Khmer Serei «declaró la guerra en Camboya y exigió responsabilidades por las incursiones a lo largo de la frontera».[43]

Los ataques de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos y Saigon contra los puestos fronterizos y aldeas camboyanas se intensificaron a partir de principios de los sesenta, causando cientos de bajas cada año. Posteriormente, campesinos y guerrilleros vietnamitas huyeron a refugiarse a las zonas fronterizas en Camboya, especialmente tras las criminales operaciones militares estadounidenses en Vietnam del Sur a principios de 1967; que dieron lugar a las cínicas acusaciones de Washington, de las que se hicieron eco los medios de comunicación, sobre la invasión comunista de la neutral Camboya. Según la mayoría de las fuentes, en la época del golpe de 1970 que derrocó a Sihanouk, los vietnamitas estaban diseminados a lo largo de las zonas fronterizas y se habían internado como máximo unos veinticinco kilómetros. La primera evidencia de campamentos vietnamitas en Camboya fue descubierta a finales de 1967, cercanos a la frontera no señalizada. Mientras que en los Estados Unidos se produjo una gran indignación por «la agresión norvietnamita», la visión interna en Washington fue considerablemente más matizada. A través de los *Papeles del Pentágono* hemos sabido que hasta mayo de 1967, bastante después de las operaciones estadounidenses que habían causado la huida hacia la frontera, altos oficiales del Pentágono creían que Camboya era «cada vez más importante como base de suministros, por el momento de alimentos y medicinas, y quizá más tarde de municiones». Un año antes, una comisión de estudio investigó sobre el terreno las acusaciones con-

43. Michael Leifer, «Cambodia», *Asian Survey*, enero de 1967. Becker, *When the War Was Over*, p. 27, sostiene que la CIA estaba detrás del complot de 1959. Para fuentes, generalmente francesas, sobre estos desarrollos, véanse *AWWA* y *FRS*. Véase Peter Dale Scott en *PP*, V, sobre el contexto regional de la intensificación de los acontecimientos en 1963.

cretas formuladas por el gobierno estadounidense, que consideraron infundadas, si bien toparon con una aldea camboyana que había sufrido el reciente ataque de un helicóptero de combate estadounidense (uno de los muchos, según la población local). Siguiendo la pauta habitual, el gobierno estadounidense negó primero estos ataques, si bien tuvo que admitirlos, dada la existencia de testigos presenciales estadounidenses (entre los que se contaban la cadena televisiva CBS).

El gobierno camboyano dio a conocer diversos incidentes similares. Así, Camboya se quejó ante las Naciones Unidas que el 24 de febrero de 1967, «un nutrido grupo de elementos de fuerzas armadas entre los que se contaban estadounidenses, sudvietnamitas y sudcoreanos se introdujeron en territorio camboyano y abrieron fuego sobre la aldea Khmer de Chrak Kranh ... [la cual] fue entonces invadida e incendiada por tropas estadounidenses y sudvietnamitas» que la ocuparon hasta el 3 de marzo. En abril de 1969 plantaciones de caucho fueron defoliadas mediante ataques aéreos. En enero de 1970, un «Libro Blanco» oficial del gobierno camboyano informaba sobre miles de accidentes similares que habían causado numerosas víctimas, proporcionando descripciones, fechas y otros detalles, e indicaba también que no se había hallado ni un solo cadáver del Vietcong tras los bombardeos o ataques terrestres de los Estados Unidos y Saigón.

Ninguna de estas quejas —y tampoco el «Libro Blanco» oficial— tuvo eco en los Estados Unidos, pese a que esa información estaba disponible en documentos oficiales y en fuentes extranjeras fidedignas, así como en las publicaciones del movimiento por la paz, fácilmente ignoradas.[44] Una vez más, era inadecuado mencionar a los oficiantes de la violencia.

La circunstancial reacción de los medios de comunicación ante esas incursiones resultaba instructiva. El 25 de marzo de 1964, Max Frankel, a la sazón corresponsal y actualmente editor del *New York Times*, informó de un ataque con vehículos blindados y bombarderos del ejército de Saigón (ARVN) sobre la aldea camboyana de Chantrea, que dejó tras de sí muchos aldeanos muertos y heridos. Las fuerzas del ARVN estaban acompañadas de asesores estadounidenses, entre los que se contaba el piloto del ejército que había sido

44. Véanse *AWWA* y *FRS* para referencias y otros ejemplos.

«salvado del derribo» de un avión de observación «abatido en acción». Diplomáticos llegados al lugar de los hechos confirmaron que «por lo menos un helicóptero de transporte de tropas había aterrizado en Chantrea con tres estadounidenses a bordo». Frankel se sentía indignado porque Camboya había tenido la osadía de exigir reparaciones, dejando a Washington «alarmado y entristecido, por no decir confuso». El titular rezaba así: «Pisando la punta del pie a los Estados Unidos: Camboya, como muchas naciones pequeñas, pone a prueba la política de paciencia». Camboya «ha seguido el ejemplo de Fidel Castro», rugió Frankel, al exigir compensaciones por la atrocidad estadounidense: «Una vez más se ha abierto la veda para que las naciones débiles se dediquen a pisar la punta del pie de las grandes naciones ... A la cabeza del acoso a las grandes potencias se encuentra actualmente una de las naciones más pequeñas, el reino de Camboya, en el sudeste asiático», con su «inteligente, impetuoso y excéntrico líder», a quien Washington considera «carente del talento y temperamento necesarios para desempeñar su cargo», si bien «el instinto de la administración ha sido preservar la independencia de esta rebelde y joven nación a pesar de ella misma y, a veces, a pesar de sus propios dirigentes». Asimismo, Washington está alarmado por «el actual empeño de Camboya en forzar a los Estados Unidos a una gran conferencia que podría incomodar a sus amigos tailandeses y vietnamitas», prosigue Frankel, un empeño que «será resistido», aludiendo a una conferencia que podría llegar a acuerdos sobre los temas fronterizos y garantizar la neutralidad de Camboya en un momento en que los Estados Unidos trataban desesperadamente de socavar los esfuerzos internacionales para neutralizar Vietnam del Sur, Laos y Camboya, a fin de evitar la gran guerra hacia la que los Estados Unidos se estaban dirigiendo dada su debilidad política en Indochina.

Este clásico del paternalismo colonialista refleja pormenorizadamente el ambiente general de la época, como lo hace el rechazo a informar de temas tan triviales como los ataques regulares sobre Camboya de los Estados Unidos y el ARVN, que en lo sustancial han quedado al margen de la historia en ese país, excepción hecha de las publicaciones disidentes.

5.2.4. *La fase I: la destrucción estadounidense de Camboya*

Los célebres «bombardeos secretos» empezaron el 18 de marzo de 1969. Una semana más tarde, el 26 de marzo, el gobierno camboyano condenó públicamente dichos bombardeos y el acribillamiento de «la población camboyana residente en las poblaciones fronterizas ... realizado casi diariamente por la aviación estadounidense», con crecientes asesinatos y destrucción; señalaban que tales ataques estaban dirigidos contra «los pacíficos campesinos camboyanos» y exigiendo que «cesasen inmediata y definitivamente esos ataques criminales ...». El 28 de marzo el príncipe Sihanouk convocó una rueda de prensa en la que desmintió a todos los efectos los informes que circulaban por los Estados Unidos según los cuales él «no se opondría a los bombardeos estadounidenses de blancos comunistas dentro de sus fronteras». «Personas desarmadas e inocentes habían sido víctimas de los bombardeos estadounidenses», incluyendo «el último bombardeo, las víctimas del cual fueron campesinos Khmer, especialmente mujeres y niños». Sihanouk hizo entonces un llamamiento a la prensa internacional: «les pido que hagan saber en todas partes cuál es la clara postura de Camboya, esto es, que de ninguna manera aprobaré los bombardeos en territorio camboyano, sea cual sea el pretexto».[45]

No resulta sorprendente que este llamamiento no obtuviese respuesta alguna. Por si fuera poco, este material ha sido suprimido hasta nuestros días, excepción hecha de la literatura disidente.[46] La postura generalizada, adoptada tanto por los defensores de los bombardeos como por sus críticos, era que «Sihanouk no protestó» (William Shawcross). Cuando en 1973 los «bombardeos secretos» pasaron a ser del dominio público, se afirmó que Sihanouk había autorizado en privado los bombardeos de las bases vietnamitas cercanas a la zona fronteriza. Verdadero o falso, esto nada tiene que vez con la supresión del apasionado llamamiento de Sihanouk, en el que se refería al bombardeo de los *campesinos Khmer*. Por otra

45. *Bombing in Cambodia*, Sesiones (*Hearings*) ante el Comité de Servicios Armados, Senado de los Estados Unidos, 93 Congreso, 1.ª sesión, julio-agosto de 1973, pp. 158-160, fuente principal sobre los «bombardeos secretos».

46. Véase *PEHR*, II, 6, p. 288.

parte, como ya hemos comentado antes «mientras que por una parte los comentaristas y los analistas de los medios de comunicación pueden sacar las conclusiones que consideren oportunas a partir de las evidencias disponibles, esto no les autoriza a suprimir lo que, se mire como se mire, es una evidencia crucial: en este caso, el intento de Sihanouk de provocar la protesta internacional por los bombardeos estadounidenses de la sociedad civil».[47]

Revisando este período en su obra *Cambodia Year Zero*, Françoise Ponchaud señala que Sihanouk calificó a los bombardeos estadounidenses de «las bases del Vietcong» de «escándalo y crimen a través de Radio Phnom Penh, aunque nadie se llamó a engaño». Sin embargo, los que se han llamado a engaño son Ponchaud y sus lectores: Sihanouk denunció públicamente los bombardeos y otros ataques sobre los *campesinos Khmer*, y no sólo a través de Radio Phnom Peng, sino en documentos públicos y en llamamientos a la prensa internacional. En su *Sideshow*, Shawcross dijo solamente que Camboya «siguió denunciando» los ataques aéreos y de artillería estadounidenses durante 1969, pero «no realizó ninguna protesta que mencionase específicamene los ataques de los B-52» (p. 94), lo cual es cierto pero irrelevante, por las razones que hemos repetido en el último párrafo.[48]

En mayo de 1969 William Beecher, citando fuentes estadounidenses informó de los ataques de los B-52 contra «depósitos de suministros y campamentos base del Vietcong y de Vietnam del Norte en Camboya». Beecher afirmó que «Camboya nunca protestó», sin tener en cuenta los llamamientos de Sihanouk y su protesta por el asesinato de «campesinos Khmer, especialmente mujeres y niños», y no por el bombardeo de bases militares vietnamitas. Beecher comentó también que «en el pasado, fuerzas estadounidenses y sudvietnamitas ocasionalmente habían disparado de un lado a otro de la frontera, e incluso habían llamado cazas o helicópteros de combate para contrarrestar el fuego que recibían de las unidades

47. *PEHR*, II, 6, pp. 380, 383. Shawcross, *Quality of Mercy*, p. 49, que se refiere únicamente a los bombardeos de los B-52 sobre los «santuarios» vietnamitas de las regiones fronterizas, en una típica salida por la tangente.

48. Véase *PEHR*, II, 6, p. 383, donde se hace referencia al mismo punto y se discute su irrelevancia. Shawcross centró la atención en estos temas cuando estaba escribiendo su *Sideshow*, al revisar artículos suyos anteriores que habían aparecido en la prensa británica.

enemigas», sin tener en cuenta un hecho aún más importante, a saber, que la aviación estadounidense y el ejército de ese país y fuerzas del ARVN y sudcoreanas habían atacado aldeas camboyanas, según el «amistoso» gobierno de ese país. El titular del artículo de Beecher señalaba falsamente «los ataques estadounidenses a Camboya no han provocado protestas». Este artículo causó consternación en Washington, sentando la primera etapa de lo que después se convertiría en el escándalo Watergate. Como ya hemos comentado en otro lugar, «cabe destacar que el único, aunque insuficiente relato de Beecher, se presenta ahora como prueba de que la prensa mantuvo su honor durante ese período, a pesar de los crímenes de Richard Nixon».[49]

Una vez más la escalada de la guerra estadounidense contra Camboya en 1969 coincidía con similares esfuerzos en Laos y Vietnam. La reacción general fue similar de principio a fin, y continúa siendo igual. La acelerada campaña de pacificación tras la ofensiva del Tet, que destruyó completamente la base civil del FLN, fue considerada tan poco interesante que pasó prácticamente desapercibida en las obras de divulgación sobre el tema. Tras estudiar la información que dieron los principales medios de comunicación, Elterman comenta que, por lo que se refiere a las guerras de Laos y Camboya, a excepción de la «prensa alternativa» éstas fueron prácticamente «invisibles» para los medios de comunicación en 1969, época en la que estaban alcanzando nuevas cotas, dado que las fuerzas aéreas estadounidenses fueron enviadas desde Vietnam del Norte a Laos y a Camboya tras el «cese de los bombardeos».[50]

En marzo de 1970 Camboya se vio irrevocablemente envuelta en la carnicería que asolaba Indochina. El 18 de marzo Sihanouk fue derrocado en «un golpe de la clase alta, no una revolución» llevado a cabo por «intereses de índole doméstica y política», y por lo

49. William Beecher, *New York Times* (9 de mayo de 1969); *PEHR*, II, 6, pp. 271, 289, 383.

50. Elterman, *State-Media-Ideological Hegemony*, p. 344. Adviértase que en parte se informó puntualmente sobre las operaciones posteriores a la ofensiva del Tet, aunque a menudo en el marco distorsionado que ya hemos discutido. Para ejemplos, véase *AWWA*. Sobre la cobertura de los medios de comunicación de los bombardeos de Laos, véase «Laos», pp. 272-283.

menos con «el apoyo indirecto de los Estados Unidos», si no más.[51] Dos días más tarde, dieron comienzo las operaciones de tierra y aire del ARVN en la provincia de Svay Rieng, en la frontera vietnamita, que continuaron durante el mes de abril y encabezaron la invasión estadounidense y del ARVN del día 29 de ese mismo mes, efectuada con una extrema brutalidad presentada algunas veces vívidamente en los medios de comunicación, que estaban especialmente aterrados ante el comportamiento de las fuerzas del ARVN. Sin embargo, la mayor parte del enorme número de víctimas civiles fueron causadas por la fuerza aérea, incluyendo ataques de bombarderos estadounidenses que arrasaron o dañaron gravemente pueblos y aldeas.[52] Uno de los efectos de la invasión fue conducir a las fuerzas vietnamitas lejos de la frontera, internándose en Camboya, donde empezaron a apoyar la creciente resistencia campesina contra los dirigentes golpistas. Un segundo efecto, tal como lo describió Richard Dudman, corresponsal estadounidense que presenció directamente los hechos tras su captura por la resistencia camboyana, fue que «los bombardeos y los disparos radicalizaron la población de la Camboya rural y fue convirtiendo esa zona en una masiva, ferviente y efectiva base revolucionaria».[53] Camboya se vio entonces inmersa en una guerra civil, con una creciente violencia por ambos bandos.

Los bombardeos estadounidenses continuaron a gran escala tras la retirada de sus fuerzas de Camboya. A finales de 1971, un equipo investigador de la General Accounting Office terminó afirmando que el bombardeo de los ejércitos de los Estados Unidos y de Saigón es «una de las causas importantes de los refugiados y las bajas civiles», calculando que casi una tercera parte de los siete millones de habitantes podían ser refugiados. El servicio de inteligencia estadounidense informó que «lo que los aldeanos más temían era la posibilidad de la artillería y los ataques aéreos indiscriminados», y también informes de refugiados y otras fuentes confirman

51. T. D. Allman, *FEER* (9 de abril de 1970); *Manchester Guardian* (18 de septiembre de 1971). Véase nota 41.

52. Véase *FRS*, p. 194, y las fuentes mencionadas; véase *AWWA* sobre la cobertura de la invasión por parte de los medios de comunicación.

53. Richard Dudman, *Forty Days with the Enemy*, H. Liveright, Nueva York, 1971, p. 69.

que éstas fueron las principales causas de las bajas de civiles y de la huida de los refugiados.[54]

La información acerca de lo que estaba sucediendo en la sociedad campesina de Camboya a principios de la década de los setenta era limitada pero no inexistente. En primer lugar, habían muchos refugiados con historias que contar, si bien los medios de comunicación no estaban interesados en ella. Había también la narración de Serge Thion, especialista francés en el sudeste asiático, que pasó dos semanas en regiones controladas por la guerrilla camboyana. Ofreció sus artículos al *Washington Post*, que los rechazó.[55] Éstos no eran de mayor interés que los artículos sobre la vida bajo los bombardeos en Laos, o sobre temas similares con respecto a Vietnam durante y después de la guerra.

Como en Laos, la escalada de la guerra siguió siendo prácticamente «invisible» en los medios de comunicación. Examinando durante un período de cinco meses, a principios de 1972, la prensa nacional, Elterman encontró que

> en cuanto a las bajas de guerra, el *New York Times* y el *Time* atendieron sólo a las muertes que tenían que ver con militares y casi siempre en las que ocurrían en Vietnam, ignorando también las muertes de civiles y de refugiados en ese país ... Durante el invierno y la primavera de 1972, la guerra en Camboya y Laos quedó más relegada aún de lo normal en la mayoría de informaciones sobre Indochina, que se centraban en la ofensiva norvietnamita en Vietnam del Sur y los bombardeos estadounidenses de Hanoi y Haiphong ... de hecho, el *Time* dio más información de las bajas civiles en Irlanda del Norte durante la primera mitad de 1972 que sobre la guerra de Indochina.[56]

Mientras tanto, Camboya estaba siendo destruida sistemáticamente, y los Khmer rojos, hasta entonces un elemento marginal, se convirtieron en una fuerza importante con sustancial apoyo campesino en el interior de Camboya, cada vez más castigada por el terror de los Estados Unidos. Por lo que se refiere al régimen de

54. Terence Smith, *New York Times*, 5 de diciembre de 1971; Iver Peterson, *New York Times*, 2 de diciembre de 1971. Véase *FRS*, pp. 188 y ss., para menciones de fuentes francesas y estadounidenses. Véase también Fred Branfman, en *PP*, V.

55. Véase *FRS*, pp. 190-192, para extractos de *Le Monde*.

56. Elterman, *State-Media-Ideological Hegemony*, pp. 335 y ss.

Lon Nol, que contaba con el apoyo estadounidense, Michael Vickery señala que su «mentalidad cliente» y su consiguiente «dependencia, le lleva a consentir, o incluso a fomentar, la devastación de su propio país mediante una de las peores y más agresivas embestidas de la guerra moderna, apareciendo así como traidores ante el victorioso ejército campesino que ha roto con el viejo patrón de relaciones de clientela y ha sido conscientemente organizado y adoctrinado para la independencia individual, de grupo y nacional».[57]

A principios de 1973, el bombardeo estadounidense se incrementó hasta una escala tal que bien podía merecer el calificativo de «genocida» empleado por la Comisión Investigadora Finlandesa. En los cinco meses posteriores a la firma de los acuerdos de paz de París, los bombardeos igualaron el nivel de los tres años anteriores,[58] y continuaron a ese mismo nivel hasta que el Congreso impuso su final en agosto, si bien el bombardeo de la zona rural por el ejército del régimen apoyado por los Estados Unidos continuó de manera sustancial, con la dirección y los suministros que este país proporcionaban, hasta el final de la guerra. Más de un millón de refugiados huyeron hacia Phnom Penh, que se convirtió en una cámara de horrores, mientras que la zona rural quedó yerma, incluyendo los bombardeos de los B-52 dirigidos contra «las áreas más densamente pobladas de Camboya», donde los mapas de las FF.AA. estadounidenses mostraban «miles de kilómetros cuadrados de áreas fértiles y densamente pobladas ... señaladas en negro a causa de las inundaciones», la «irreflexiva política de la Casa Blanca» que criticó William Shawcross.[59] Fue en esa misma época en la que se endurecieron terriblemente los programas de los Khmer rojos, según indican los datos de que disponemos, entre los que se cuentan un estudio de refugiados realizado por Kenneth Quinn, del Consejo Nacional de Seguridad, quien nunca consideró la posible conexión causal entre el endurecimiento de dicha política y el acusado incremento del programa de bombardeos de saturación. Timothy Carney, el segundo de los tres grandes especialistas del gobierno estadounidense sobre Camboya (Quinn, Carney y Charles Twining), se-

57. Vickery, *Cambodia*, p. 15.

58. UPI, *New York Times*, 22 de junio de 1973, donde se mencionan estadísticas del Pentágono.

59. Shawcross, *Sideshow*, pp. 272, 297; y véase *supra*, p. 287.

ñala también que «en algún momento de 1973 el partido decidió a parecer acelerar su programa para cambiar la sociedad Khmer», sir ninguna razón aparente.[60]

5.2.5. *La fase I en los medios de comunicación*

Durante este período se produjo una amplia cobertura informativa de Camboya y no escasearon pruebas de lo que estaba sucediendo en las zonas sometidas a las atrocidades de las fuerzas aéreas estadounidenses. No era necesario emprender una dificultosa expedición a la frontera tailandesa-camboyana para encontrar refugiados que explicasen cuanto sabían, pero las víctimas de la fase I de la «década del genocidio» que estaban amontonadas en los suburbios de Phnom Penh u otros pueblos o aldeas a los que habían huido no despertaban mayor interés que las que se encontraban en los miserables campos de las afueras de Vientiane a menos que tuviesen cuentos de terror sobre los insurgentes camboyanos que contar (habiéndose desvanecido ya los vietnamitas en la oscuridad).[61] No hubo libros o artículos escritos por el padre Ponchaud, que vivió entre los campesinos y se solidarizó profundamente con su difícil situación, como nos decía al exponer las atrocidades de los Khmer rojos. Y lo mismo podemos decir de muchos otros que expresaron después su sincera preocupación por los camboyanos que sufrían bajo el terror de los Khmer rojos, aunque no trataron de investigar y de dar publicidad de la situación de la población rural durante la primera fase del genocidio, cuando tales esfuerzos hubiesen podido tener un impacto crucial en la política que estaba destruyendo Camboya, lo cual es un hecho digno de cierta reflexión

El retrato generalizado que de la fase I dieron los medios de comunicación estadounidenses es algo parecido a esto: «hasta el momento crítico de 1973 ... a primera vista, los camboyanos sonreían y estaban llenos de amabilidad»,[62] pero después, el humor de los «camboyanos» se convirtió en «apatía» y «resignación» porque

60. Véase *PEHR*, II, 6, pp. 154 y ss., 220 y ss., 365 y ss., para fuentes extractos y discusión.

61. Henry Kamm, *New York Times* (25 y 28 de marzo de 1973).

62. Becker, *When the War Was Over*, p. 32.

los «empobrecidos agricultores, refugiados y soldados» (la mayoría de los cuales habían sido enrolados a la fuerza, arrancándolos de las comunidades de pobres y refugiados) sentían que sus «dirigentes parecían incapaces de defenderles contra las adversidades humanas y naturales».[63] Existe un cierto «espíritu fatalista», pues el gobierno «estuvo al borde de dar al traste con la república democrática que se proponía crear» con el golpe que derrocó a Sihanouk.[64] Los estadounidenses trataban, pero con poco éxito, de «imbuir en los camboyanos algún sentimiento de confianza en sus dirigentes», pero, con todo, «la moral camboyana había decaído inexorablemente durante mucho tiempo». Sin embargo, «aquí [en Phnom Penh], más que una sensación de perentoriedad, existe un gran fatalismo que responde en gran manera al budismo con influencia hindú que impera en Camboya»,[65] aunque éste no parece afectar «al enemigo» cuya «determinación» frente a la imponente fuerza armamentista desencadenada contra ellos «desconcierta» a los estadounidenses. Pero existe aún «el sentimiento de que los estadounidenses salvarán a los camboyanos en el último minuto, puesto que éstos no pueden salvarse a sí mismos». «Casi todas las conversaciones con un camboyano giran en torno al mismo tema», es decir, el temor de que «el desmoralizado ejército se derrumbe» cuando los estadounidenses den por finalizados los bombardeos el 15 de agosto. El inminente cese de los bombardeos es «doloroso» para los «camboyanos» debido a los «recientes y constantes éxitos de las tropas enemigas», que combatían contra fuerzas muy superiores. En su informe final desde Phnom Penh al finalizar los bombardeos, Sydney Schanberg planteó «la pregunta clave no respondida: ¿Cómo han sido capaces los insurgentes, sin disponer de aviones, y el amplio apoyo artillero del que disfrutaban las tropas del gobierno, con sólo armamento

63. Malcolm Browne, «Cambodians' Mood: Apathy, Resignation», *New York Times* (29 de junio de 1973). Sobre el reclutamiento forzoso entre «las clases más pobres ..., los refugiados y los desempleados», incluidos los «pobres campesinos» que «acudieron en masa a la capital» tras la destrucción de sus pueblos, pero no entre los hijos de las elites adineradas, véase Sydney Schanberg, *New York Times* (4 de agosto de 1973).

64. Kamm, *New York Times* (25 de marzo de 1973).

65. Véase Vickery, *Cambodia*, pp. 9 y ss., sobre el budismo, acerca del cual «es probable que se hayan escrito más tonterías redomadas en Occidente ... que acerca de cualquier otro aspecto de la vida en el sudeste asiático», especialmente en lo que se refiere a Camboya.

ligero y móvil ... no tan sólo de igualarse a las fuerzas del gobierno, que superan más de dos veces su número, sino de hacerlas retroceder y mantener una ofensiva durante seis meses, sin ninguna tregua significativa?». «Dado que los insurgentes no son superhombres, debe haber otras explicaciones de su éxito.» Quizá son tan «determinados y capaces» porque son «menos fatalistas que los Khmer de este lado» y «creen que pueden cambiar su entorno» (un funcionario de la embajada estadounidense). A este respecto «el enemigo» es bastante diferente del «aldeano camboyano», que «por lo general no se ocupa de la política» y «no está interesado en tomar partido, sino que sólo desea trabajar la tierra, pescar y alimentar a su familia y, de vez en cuando, celebrar las festividades budistas».[66]

Así, la guerra civil enfrentó a «los camboyanos» contra «el enemigo», los campesinos camboyanos que seguramente no rebosaban amabilidad durante los bombardeos estadounidenses anteriores a 1973. «Los camboyanos», fatalistas y resignados, se debatían entre que los dejasen solos («el campesino camboyano») o la esperanza que los Estados Unidos los salvasen a ellos y a su gobierno, luchando por la democracia («los camboyanos» en general). El éxito del enemigo en su lucha contra unas fuerzas muy superiores, desconcertaba a los estadounidenses, al igual que les había sucedido a aquellos de sus paisanos que construían la «democracia» en Vietnam del Sur, América Central y otros muchos lugares. Dado que éstas eran las conclusiones obtenidas a partir de «casi todas las conversaciones mantenidas con camboyanos», seguramente son ciertas, por lo menos si entendemos como «camboyanos» aquellos que no pertenecen «al enemigo» de la prensa objetiva, de la misma manera que los «sudvietnamitas» eran los sudvietnamitas que colaboraban con los agresores estadounidenses.

El esquema es el acostumbrado, si bien quizá con un matiz más acusado a la luz de lo que pudo haber pasado por las mentes de aquellos camboyanos que no eran «camboyanos» durante la primera fase del genocidio.

Poco sabemos de este tema por los medios de comunicación. Los refugiados que abarrotaron Phnom Penh y otras áreas a las

66. Schanberg, *New York Times* (3 y 8 de mayo, 19 y 30 de julio, 12 y 16 de agosto de 1973).

que viajaron periodistas estadounidenses fueron prácticamente ignorados. Para hacernos idea de esta notable circunstancia, pasemos revista a la información aparecida durante esos meses en el *New York Times*, la mayoría de ella debida a la pluma de su corresponsal Sydney Schanberg, ganador del Premio Pulitzer, quien, más que cualquier otro periodista estadounidense, terminó siendo considerado como la conciencia de los medios de comunicación con respecto a Camboya.

Schanberg llegó a Phnom Penh en mayo de 1973, en el apogeo del intensificado bombardeo, que continuó hasta el alto el fuego de mediados de agosto. Durante este período, el *New York Times* publicó veintisiete de sus artículos sobre Camboya, la mayoría de ellos largos y detallados, junto a una columna en la que Schanberg expresaba su desprecio por el «llamado cuerpo de prensa internacional» que empleaba su tiempo «entrevistándose entre sí» en el hotel Le Phnom.[67]

Desde el principio, Schanberg informaba de que «los refugiados entraban a raudales en la ciudad», pero no les hizo ninguna entrevista para que relatasen las características de la vida bajo los bombardeos. Hemos escuchado a «una mujer camboyana acomodada» que nos ha dicho que «el bombardeo es terrible»; ella «no está asustada, tan sólo molesta, porque el bombardeo despierta a mi niño todos los días en plena noche, y tengo que levantarme» (3 de mayo). Pero los aldeanos que querían que los dejasen solos no tuvieron la oportunidad de transmitir sus narraciones y sus preocupaciones algo más serias, a excepción de algunas frases sueltas, y no hay ni una sola palabra que sugiera que los refugiados podían tener otra actitud, aparte del temor, con respecto a esos «decididos» combatientes que «creían que podían cambiar su entorno», pese a que, evidentemente, disponían de una sólida base en la sociedad campesina que estaba siendo hecha añicos por los bombardeos de saturación. Como había sucedido en Laos unos años atrás, los refugiados podían contar, sencillamente, el lado amargo de la historia, y el tipo de historias que fácilmente hubiesen aflorado de haber habido alguien suficientemente interesado en ellas, quedaron inéditas.

67. 22 de agosto de 1973. El material que se analiza aquí va del 3 de mayo al 16 de agosto.

Examinando la serie de artículos en busca de material importante, el número 5 (del 2 de mayo) hacía referencia a un diplomático europeo-occidental que decía que «hombres estadounidenses en aviones estadounidenses están bombardeando este lugar, convirtiéndolo en un infierno», y señalaba que la aviación estadounidense «no siempre recibe las respuestas precisas por parte de los mandos camboyanos que dirigen los bombarderos sobre el número de civiles en las zonas determinadas como blancos». Así, los camboyanos tienen la culpa de las bajas civiles que se puedan producir, si bien «no disponemos de cifras fidedignas» y no se preguntó a los refugiados para complementar la información con lo que sabían. Las dos crónicas siguientes (24 y 27 de mayo) son las únicas que se ocupan directamente del efecto de los bombardeos en la zona rural. La primera da cuenta de la «extensa» destrucción causada por los bombardeos, que había borrado «toda una serie de aldeas» a lo largo de la carretera principal, en kilómetros y kilómetros no había quedado ni una sola casa en pie, mientras «algunas personas vagaban desamparadas por entre los escombros, aturdidas por lo que había pasado, sorteando los cráteres y hurgando entre los cascotes». Un grupo de aldeanos de la provincia de Svay Rieng, colindante a Vietnam, informaron de la destrucción de siete aldeas y de las muertes que se habían producido. «Los asustados aldeanos, desarraigados por los bombardeos, tienen muchas cosas que decir», comentó Schanberg, aunque nosotros no las hemos podido leer en sus artículos. En lugar de ello, explicaba que «no hay dudas de que la Séptima Fuerza Aérea está realizando un notable esfuerzo para evitar bajas civiles, por lo menos fuera del tercio oriental del país, que está sólidamente tomado por el enemigo»; y si se producen bajas es por culpa de los oficiales militares camboyanos, que solicitan ataques aéreos «prácticamente sin preocuparse por las vidas o propiedades de los civiles». La segunda crónica nos informa de que «los refugiados hablan con frecuencia de los bombardeos» que han destruido aldeas y «aterrorizado al resto de los aldeanos», según informa un diplomático occidental. Pero a los refugiados sólo se les concedieron dos frases, una petición «cortés e incongruente»: «Me sentiría muy feliz si el gobierno dejase de enviar aviones a bombardear»; y una súplica de un monje que pedía a los Estados Unidos y a otros gobiernos que «no destruyan todo lo que hay en Camboya».

Hasta la crónica 15 (del 26 de julio) no vuelven a hacer su

aparición los refugiados, en un relato gráfico sobre «un ataque terrorista sobre la población civil» por fuerzas comunistas que bombardearon la afueras de Phnom Penh. En él, un niño lloroso describe cómo le cortaron las manos a su hermano pequeño; la calle y el quicio de la casa ensangrentadas testificaban la barbarie comunista, tan distinta de las operaciones dirigidas por el escrupuloso mando estadounidense. La crónica 19 (del 5 de agosto) nos habla de los miles de nuevos refugiados «que huían de los asaltos del enemigo»; la crónica 21 (del 7 de agosto) describe cómo los soldados camboyanos saqueaban una aldea reconquistada que «parecía como alcanzada por una lengua de fuego durante una tormenta»; cómo muchas de sus casas habían quedado «destrozadas por los proyectiles», pero sin decir ni una sola palabra de las víctimas, que habían huido. A continuación tres crónicas (del 7, 9 y 12 de agosto) describían con todo detalle el bombardeo de la aldea de Neak Luong, en el que murieron muchos soldados gubernamentales y sus familias. Este es el único ejemplo de los bombardeos estadounidenses que apareció en la película *The Killing Fields*, la única representación vista aquí de la primera fase del genocidio; su recuerdo era aceptable puesto que se trataba simplemente de un error.

Encontramos dieciocho nuevos artículos fechados en Camboya, desde el 25 de marzo hasta el 18 de agosto.[68] En uno de ellos se cita a un aldeano: «los bombardeos pueden matar algunos comunistas, pero matan también a todos los demás» (Browne, 11 de abril), pero no hallamos otros ejemplos de la reacción de las víctimas, si bien aparecía una fotografía de un soldado camboyano llorando por su esposa y sus diez hijos, que habían perecido en el bombardeo por error de Neak Luong (10 de agosto).

Así, vemos que de cuarenta y cinco crónicas hay tres en las que las víctimas de los bombardeos estadounidenses pronuncian algunas frases describiendo lo que sucedía en Camboya. Ni una sola de ellas intenta explorar las reacciones de los refugiados que no se hallaban lejos del hotel Le Phnom, o los de Battambang, o en los aún mucho más miserables campos de refugiados en las zonas rurales cercanas, ni tampoco intentan explicar lo que debía estar sucedien-

68. Principalmente Malcolm Browne; también Henry Kamm y agencias de información. Omitimos algunos informes breves, por lo que esta relación puede ser incompleta.

do bajo los frenéticos bombardeos de aquellos meses. Recordemos que sólo en Phnom Penh se encontraban cerca de un millón y medio de refugiados que habían huido de las zonas rurales, algunos de los cuales, con toda certeza, deberían tener algunas informaciones que contar acerca del momento álgido de la primera fase del genocidio. El lector no podía darse cuenta de ninguna manera de las terribles cosas que estaban sucediendo en la zona rural camboyana, a lo sumo podía pensar que las cosas no estaban claras y que los estadounidenses quedaban explícitamente exonerados de ellas, excepción hecha del error de bombardear una aldea inadecuada.

La historia continuó por los mismos derroteros durante la primera fase del genocidio. Los horrores que se sucedían en el propio Phnom Penh fueron en ocasiones vívidamene descritos, especialmente en el extranjero,[69] pero no se hicieron muchos esfuerzos para aclarar qué estaba sucediendo en las zonas tomadas por el enemigo de los Estados Unidos (y por tanto, el enemigo de la prensa estadounidense; prácticamente todo el país, pues «los camboyanos» estaban confinados en los centros urbanos que a su vez estaban desbordados por una enorme afluencia de refugiados que permanecían tan ocultos a la vista como los que se encontraban en los densos suburbios de Saigón o en los campos que circundaban Vientiane).

Los corresponsales occidentales evacuados desde Phnom Penh tras la victoria de los Khmer rojos se pudieron hacer una ligera idea de lo que estaba sucediendo en la zona rural. Así, el corresponsal británico Jon Swain resume sus impresiones con las siguientes palabras:

> Los Estados Unidos tienen mucho de qué responder, no sólo en términos de vidas humanas y de masiva destrucción material; la inflexibilidad y el rencor de esos individuos funestos anticamboyanos que gobiernan ahora el país, o lo que queda de él, son en gran medida un producto de los masivos bombardeos estadounidenses, que han endurecido y afilado tanto sus mentes como el que sean un

69. Compárese, por ejemplo, la horrible descripción que hace Jon Swain de la situación en los hospitales de Phnom Penh durante la evacuación de 1975 con la superficial observación de Sydney Schanberg de que «muchos de los heridos morían por falta de asistencia» (Swain, *Sunday Times*, Londres, 11 de mayo de 1975). Véase *PEHR*, II, 6, pp. 249 y ss., para extractos más largos.

> producto de Marx y Mao ... [La evacuación masiva de las ciudades] no constituye una campaña deliberada de terror, más bien se debe a la penosa organización, la falta de visión y la brutalización de la gente causada por una guerra larga y salvaje ... El daño causado por esta guerra aquí [en la zona rural], como en todas las partes que hemos podido ver, es total. No queda ni un solo puente en pie y apenas alguna casa. He sabido que la mayoría de aldeanos han pasado los años de guerra viviendo semipermanentemente enterrados en subterráneos y bunkers de tierra para escapar de los bombardeos ... toda la zona rural ha quedado batida por los cráteres causados por los bombarderos estadounidenses B-52, pueblos y aldeas han quedado totalmente arrasados, hasta el punto que no he podido ver siquiera una sola pagoda intacta.[70]

La situación era en gran medida similar a la que describieron en 1970 los refugiados procedentes de la Llanura de los Jarros, en Laos. En ambos casos, sus relatos quedaron casi totalmente excluidos de los principales medios de comunicación.

Así acabó la primera fase del genocidio. En los años siguientes, aquellos que habían transmitido fragmentos estrictamente seleccionados de este cuento de horror expresaron su amargura porque Camboya había sido «olvidada». En el décimo aniversario de la toma del poder por los Khmer rojos, Sydney Schanberg escribió dos artículos en el *New York Times* titulados «Cambodia Forgotten» (Camboya olvidada). En el primero destaca la frase: «Las superpotencias se ocupan hoy tan poco de los camboyanos como en 1970», y el segundo rechaza las declaraciones efectuadas por Richard Nixon en 1985 de que «no hubo bombardeos de terror indiscriminados», sino ataques «muy precisos» «contra blancos militares enemigos». Schanberg comenta que «cualquiera que haya visitado los campos de refugiados en Camboya y haya hablado con los supervivientes civiles de los bombardeos averiguará rápidamente el importante número de bajas». Vuelve a recordar que «cuando estalló la guerra en Camboya en 1970, los Khmer rojos eran una fuerza irrelevante ... que para crecer y desarrollarse necesitaban una guerra que los alimentase. Y las superpotencias, incluyendo los Estados Unidos, con la incursión de Nixon en 1970 y los masivos bombar-

70. *Sunday Times* (Londres, 11 de mayo de 1975). Véase *PEHR*, II, 6, pp. 249 y ss., para extractos más largos.

deos que la siguieron, les proporcionaron esa guerra y el sustento que necesitaban». Sin embargo, Schanberg no nos informa de qué superpotencia, aparte de los Estados Unidos, invadió Camboya y la sometió a los bombardeos masivos. Así, con comparable imparcialidad podríamos deplorar la contribución de las superpotencias, incluyendo la URSS, en la destrucción de Afganistán, o la actitud de las grandes potencias, incluyendo la Alemania nazi, hacia las víctimas de los campos de exterminio, a los que Schanberg hace referencia en una crónica posterior publicada ese mismo mes, titulada «Memory is The Answer» (El Recuerdo es la Respuesta). Pero Schanberg no menciona lo que los lectores de sus columnas pueden haber aprendido de la vida en la zona rural de Camboya a partir de sus informaciones durante el período álgido del bombardeo.[71]

También otros subrayan que «el recuerdo es la respuesta». Comentando la premiada película *The Killing Fields*, Samuel Freedman escribió que «mientras los supervivientes del holocausto han ayudado a perpetuar la memoria de la infamia nazi, el genocidio camboyano está siendo ya olvidado», refiriéndose a la segunda fase del mismo, puesto que la primera había pasado al olvido sin ningún problema.[72] El *New York Times* nos recuerda que «Camboya sigue siendo quizá la víctima más conmovedora de la guerra de Indochina», puesto que está presa entre las fuerzas de Pol Pot y de Hanoi, que utilizan los ataques de Pol Pot contra las aldeas vietnamitas como «el tan largamente buscado pretexto para la invasión» y hacen «del ejército de 30.000 Khmer rojos de Pol Pot en Camboya» (de hecho, la mayoría en Tailandia) «el pretexto para permanecer en el país». «Inimaginables carnicerías, invasión brutal y ocupación han seguido a la hambruna y a la pestilencia», atribuibles todas ellas a los comunistas, si bien el sufrimiento había sido «agravado por el cinismo de las grandes potencias», sin diferenciarlas tampoco esta vez. Por lo que se refiere a los Estados Unidos, la explicación se reduce a que «cuando las guerrillas del Vietcong utilizaron la neutral Camboya como santuario, ésta fue machacada por los bombardeos estadounidenses y conducida a una guerra que confiaba evitar». En un comentario posterior los editores admitieron que «los criminales bombardeos aéreos seguidos por la brutal revolución,

71. Schanberg, *New York Times* (6, 8 y 23 de abril de 1985).
72. *New York Times* (28 de octubre de 1984).

la hambruna y la guerra civil» llevaron a Camboya a la ruina, pero de todo ello, lo que «no se puede borrar de un plumazo son las carnicerías de los Khmer rojos» y las acciones de Hanoi, que han «sojuzgado y empobrecido» Camboya: es decir, la segunda y tercera fases de «la década del genocidio».[73]

«El recuerdo es la respuesta», pero sólo cuando ésta se dirige a los objetivos adecuados, lejos de casa.

5.2.6. *La era de Pol Pot*

La segunda fase de «la década del genocidio» empezó con la toma del poder por los Khmer rojos en abril de 1975. A las pocas semanas, la prensa internacional les acusó de «bárbara crueldad» y de «política genocida» comparable al «exterminio soviético de los Kulaks o al archipiélago Gulag».[74] En aquella época el número de muertes se cifraba quizá en miles; el medio millón o más de muertes ocurridas durante la primera fase del genocidio nunca merecieron tales comentarios; tampoco esas declaraciones sobre los primeros días de la fase II (o de los días siguientes) fueron por lo general acompañadas de reflexiones sobre las consecuencias de la guerra estadounidense, anticipadas por los funcionarios de los Estados Unidos y los trabajadores auxiliares en la zona que hemos comentado antes, o por cualquier reconocimiento de un posible nexo causal entre los horrores de la segunda fase y la guerra estadounidense contra la sociedad rural durante la primera fase.

No vamos a documentar aquí la avalancha de furia y cólera dirigidas desde el principio contra los Khmer rojos y las pruebas en que éstas se basaban, pues lo hemos hecho ya detalladamente en otro lugar.[75] Pero sí cabe destacar algunos hechos: 1) la indignación, instantánea y contundente, que llegó a su apogeo a principios de 1977 y que se mantuvo hasta el derrocamiento de Pol Pot, estaba

73. Editoriales, *New York Times* (7 y 11 de abril, 9 de septiembre de 1985). Otros destacan «el papel de América en la trágica destrucción de la civilización camboyana», que «hace sospechar de cualquier preocupación tardía por la soberanía de Camboya» (editorial, *Boston Globe*, 12 de abril de 1985).

74. Editorial, *New York Times* (9 de julio de 1975); también Jack Anderson, *Washington Post* (4 de junio de 1975).

75. Véase *PEHR*, II, 6.

basada casi exclusivamente en pruebas que se referían fundamentalmente a 1975 y 1976.[76] 2) Excepción hecha de algunos periodistas especializados, los expertos en Camboya del Departamento de Estado y, probablemente, la mayoría del reducido grupo de expertos en Camboya (es decir, la mayor parte de aquellos que tenían una base para emitir un juicio), las acusaciones más extremas consistieron en un gran despliegue de indignación por las atrocidades comunistas, acusaciones cuya integridad puede ser valorada comparándolas con las reacciones ante la primera fase del genocidio y la responsabilidad de los Estados Unidos en la misma. 3) Estas apreciaciones escépticas, suprimidas casi totalmente en los medios de comunicación, probaron ser muy precisas por lo que se refiere al período en cuestión. 4) La evidencia que proporcionó la base crucial para la denuncia del genocidio comunista, era del tipo que habría sido rechazado con escarnio si algo parecido se hubiese dicho en relación a la primera fase del genocidio u otras atrocidades de los Estados Unidos, entre las que cabría contar las entrevistas y fotografías falsificadas y las declaraciones inventadas y atribuidas a los oficiales de los Khmer rojos, repetidas constantemente aun tras haber sido admitida su falsedad; las estimaciones falsas del número de bajas basadas en la malinterpretación de estudios que se convirtieron en doctrina incuestionable incluso después de que su inexactitud hubiese quedado manifiesta; los muy selectivos informes sobre los refugiados que no contemplaban muchos de los testimonios de éstos, así como tampoco pormenorizados estudios realizados por especialistas en Camboya que no podían ser explotados, por lo que pronto se convirtió en una campaña propagandística con un nivel de fraude de sorprendente magnitud.[77]

Como ya hemos señalado desde el primer párrafo de nuestra anterior revisión del material, a la que solamente nos referiremos aquí en algunos casos específicos, «no hay dificultad alguna en documentar las enormes atrocidades y la opresión, fundamentalmente a partir de los informes de los refugiados». Hay pocas dudas de que «el historial de las atrocidades en Camboya es sustancial y

76. El análisis citado en la nota anterior se vio limitado a los materiales sobre este período temprano, pues era todo lo que estaba disponible en el momento de redactar este libro.

77. Véase *PEHR*, II, 6, VI; Vickery, *Cambodia*.

muchas veces horripilante» y supone «un pavoroso número de víctimas», que «una vez comprobados los hechos, puede suceder que las condenas más extremas fueran en realidad correctas», aunque eso «de ninguna manera alteraría las conclusiones a las que hemos llegado sobre la cuestión central planteada aquí: cómo los hechos que se conocían fueron seleccionados, modificados y en ocasiones inventados para crear una imagen determinada que ofrecer a la población en general. La respuesta a esta pregunta parece clara, y no se ve afectada por cualquier cosa que podamos descubrir sobre Camboya en el futuro». Como hemos señalado repetidamente, en este capítulo de un estudio en dos tomos sobre la política y la ideología de los Estados Unidos, nuestro objeto de estudio han sido los Estados Unidos, no Indochina; nuestro propósito no ha sido el de «establecer los hechos relacionados con la posguerra indochina» basándonos en los datos de que disponíamos, sino más bien examinar las interpretaciones elaboradas en base a estos datos, analizar la manera en que éstos han sido enfocados «a través del prisma de la ideología occidental, lo que es algo muy diferente».[78] Las conclusiones allí esbozadas continúan siendo válidas. Que nosotros sepamos, no se ha detectado ningún error, omisión o siquiera tergiversación alguna.[79]

Ese estudio de un impresionante despliegue de propaganda despertó gran indignación, lo que por otra parte no debe sorprendernos: la respuesta en los dominios soviéticos es similar, así como las razones, cuando los disidentes exponen invenciones propagandísticas con respecto a los Estados Unidos, Israel y otros enemigos oficiales. Indignados comentaristas nos describieron como justificadores de las atrocidades de los Khmer rojos»,[80] por un estudio que denunciaba dichas atrocidades (hecho que siempre se olvida) y pro-

78. *PEHR*, II, 6, pp. 135-136, 140, 290, 293, 299.

79. En la única valoración erudita, Vickery llega a la conclusión de que «muy poco [de lo que se discute en el *PEHR*, II, 6] requiere una revisión después de la nueva información de la que se dispone desde que apareció». También comenta la «difamatoria», «incompetente» y «deshonesta crítica de Chomsky y Herman que ha caracterizado el trato que los medios de comunicación han dispensado a su trabajo», señalando las falsedades de William Shawcross, entre otros (*Cambodia*, pp. 308, 310).

80. Guenter Lewy, *Commentary*, noviembre de 1984, es un ejemplo típico de literatura substancial. Que nosotros sepamos, Lewy, como otros críticos enfurecidos, no condenó por escrito a los Khmer rojos tan dura ni tan tempranamente como nosotros.

cedieron a demostrar las singulares características de la propaganda occidental, nuestro tema a lo largo del estudio en dos tomos del que formaba parte dicho capítulo. Se produjo también una nueva ola de falsificaciones, irrefutables muchas veces, puesto que los periódicos rechazaron admitir réplicas. No vamos a estudiar aquí estos nuevos ejercicios propagandísticos, nos limitaremos a señalar que ofrecen un curioso ejemplo de lo que, en otros contextos, se describe como la mentalidad totalitaria: no es suficiente denunciar a los enemigos oficiales, es también necesario proteger y vigilar el derecho a mentir al servicio del poder. La reacción a nuestro desafío a este sagrado derecho se ajusta una vez más primorosamente a las expectativas del modelo de propaganda, y a ello cabe añadir el ataque de la Freedom House a los medios de comunicación por no servir a la política del Estado con el suficiente vigor y optimismo.

A principios de 1977, las denuncias contra los Khmer rojos por haber causado «crímenes sin precedentes en ese apacible país» y un «autogenocidio», se extendieron desde las publicaciones de difusión masiva como el *Reader's Digest* (con decenas de millones de lectores) y el *TV Guide* (con una circulación de nueve millones), hasta el *New York Review of Books* y a los medios de comunicación en general, además del *best-seller* obra de John Barron y Anthony Paul, basado en su artículo en el *Reader's Digest* y en el generalmente malinterpretado estudio de François Ponchaud mencionado anteriormente. Material de estas mismas características continuó fluyendo abundantemente en la prensa y en los semanarios, en el *New York Times Magazine* y en todas partes. Las evidencias del período 1977-1978 estuvieron disponibles tras la expulsión vietnamita del gobierno de los Khmer rojos, que puso término a la segunda fase del genocidio, suscitando nuevas condenas por el presunto «genocidio» llevado a cabo por los «prusianos de Asia».

Michael Vickery describe la imagen creada por este coro de denuncias desde los primeros días de la Kampuchea Democrática (KD) en 1975 como «la versión total estándar» (VTE). Según dicha versión, con anterioridad a la victoria de los Khmer rojos en abril de 1975 Camboya había sido un «país apacible» (Barron y Paul), de «gente apacible y sentimental», que «sólo deseaba vivir en paz en su exuberante reino» (Jack Anderson), un país en el cual el hambre era «prácticamente desconocida» (Henry Kamm). Pero en 1975, los «anteriormente alegres y acomodaticios camboyanos» fue-

ron sometidos por el «cruel régimen» de los Khmer rojos, que ordenó que todos aquellos que no estuvieran bajo su mando antes de la victoria podían ser «asesinados», puesto que «ya no eran necesarios», incluso aunque sólo quedasen un millón de Khmers (Donald Wise, citando algunas de las frecuentemente aludidas declaraciones de los Khmer rojos cuya falsedad había sido ya admitida).[81]

Según la versión total estándar, durante el período anterior a 1977, en el que se basaban las conclusiones, la dirección de los Khmer rojos estuvo envuelta en una política de exterminio y destrucción sistemáticas de toda la vida social y cultural organizada, exceptuando el Gulag gobernado por «los nueve hombres en la cúspide», comunistas formados en París, sin variaciones locales y sin otro motivo que un inexplicable sadismo y el dogma marxista-leninista. A principios de 1977 se presumía que éstos habían «alardeado» de haber asesinado unos dos millones de personas (Jean Lacouture en el *New York Review*). Esta siguió siendo la cifra habitual incluso después de que Lacouture la retirase semanas después, reconociendo que había malinterpretado sus fuentes (Ponchaud) y que la cifra real podía cifrarse en miles, no sin añadir, empero, que concedía poca relevancia a la diferencia entre los millares de asesinados y la «fanfarronada» de los dos millones de muertos. Esta postura expresa con cierta claridad la actitud general con respecto a la realidad, tanto en ese período como en el futuro. A ello hay que añadir su afirmación de que «apenas tenía importancia determinar qué persona había proferido exactamente esa frase inhumana», cuando el caso en cuestión se refería a frases inhumanas que él había atribuido a oficiales de los Khmer rojos que luego habían resultado ser tergiversaciones de frases que habían sido completamente inventadas por sus fuentes de información (Ponchaud) o que no habían aparecido en un periódico camboyano, como Lacouture afirmaba,

81. John Barron y Anthony Paul, *Murder in a Gentle Land*, Reader's Digest Press, Nueva York, 1977. Anderson, *Washington Post* (1 de octubre de 1978). Kamm, *New York Times Magazine* (19 de noviembre de 1978), donde aparecen las fotografías falsificadas; véase *PEHR*, II, 6, pp. 202, 253; y pp. 367, 372, sobre la bibliografía especializada que describe un país donde «la población está siempre al borde del ayuno» en años anteriores y que en 1975 sufre una absoluta carencia de economía. Wise, *FEER* (23 de septiembre de 1977). Véase *PEHR*, II, 6, para más ejemplos y detalles; y Vickery, *Cambodia*, para pruebas adicionales.

sino en un periódico tailandés erróneamente traducido por Ponchaud, que expresaba prácticamente lo contrario de lo que éste afirmó. La cifra de dos millones fue posteriormente aumentada a tres o más, citando con frecuencia fuentes de la propaganda vietnamita de guerra. Los ejemplos son bastante característicos.

Pero no todo el mundo se unió a ese coro. Las excepciones más notables las constituyeron aquellos que disponían del mejor acceso a la información procedente de Camboya, en particular los especialistas sobre ese país del Departamento de Estado. Su opinión, basada en todos los datos disponibles en la época (fundamentalmente de la Camboya noroccidental), era que las muertes causadas por las diversas causas podían cifrarse en las «decenas, sino centenas de miles», la mayoría de las cuales fueron debidas a las enfermedades, la desnutrición y al «cambio rápido y brutal», no al «genocidio de masas». Estas conclusiones provisionales fueron casi totalmente ignoradas por los medios de comunicación —si bien hemos encontrado una importante excepción en nuestro estudio— sencillamente porque no resultaban adecuadas al caso en aquel momento, al igual que había sucedido con los testimonios de refugiados que no coincidían con la versión total estándar. En el extranjero, algunos periodistas que tenían un especial conocimiento de Indochina dieron también versiones más matizadas, especialmente Nayan Chanda.[82]

En su detallado estudio región por región, Vickery muestra cómo la versión total estándar era un retrato de escaso mérito, y que los escasos escépticos acertaron en lo esencial por lo que se refiere a ese período, aunque en 1977 y 1978 algo semejante a la versión total estándar llegó a ser cierto en el contexto de las brutales purgas internas del partido y la expansión de la guerra con Vietnam. Vickery señala, sin embargo, la consideración obviamente lógica de que «las evidencias de 1977-1978», que sólo se conocieron tras la conquista vietnamita en 1979, «no justifica retrospectivamente la versión total estándar» predominante y que se basaba en los datos disponibles del período de 1975 y 1976, y que «la adopción por parte de los vietnamitas de algunas de las peores historias de la propaganda occidental para que apoyasen su postura en 1979, no prueba que

82. Véanse nuestras referencias a sus escritos en *Far Eastern Economic Review* (Hong Kong) y *Le Monde Diplomatique* (París), en *PEHR*, II.

tales historias fuesen válidas».[83] Estudios recientes indican que las peores masacres, incluyendo aquellas que dejaron tras de sí las sepulturas masivas y los horribles montones de cráneos hallados por los periodistas que entraron en Camboya tras la conquista vietnamita, se produjeron en la zona oriental fronteriza con Vietnam de mediados a finales de 1978.[84]

La naturaleza de la aflicción occidental por Camboya durante la segunda fase del genocidio, como fenómeno sociocultural, queda aún más clara cuando la confrontamos con la reacción ante las comparables y simultáneas atrocidades cometidas en Timor. En ese caso, como durante la primera fase del genocidio camboyano, los Estados Unidos eran los principales responsables y podían haber actuado para reducirlas o para ponerles fin. Por el contrario, en la Camboya bajo el gobierno de Kampuchea Democrática, donde la culpa podía atribuirse al enemigo oficial, no era posible hacer nada de eso, extremo que fue resaltado por los expertos del gobierno cuando George McGovern hizo un llamamiento en agosto de 1978 en favor de la intervención internacional, obteniendo las mofas de muchos medios de comunicación.[85] Ni McGovern ni nadie recomendó una intervención semejante contra los Estados Unidos durante la primera fase del genocidio, o contra Indonesia y los Estados Unidos por las atrocidades que se estaban cometiendo en Timor, a las cuales los Estados Unidos (y en bastante menor medida, otras potencias), prestaron su apoyo material y diplomático, ni tampoco hubo ningún llamamiento a la intervención a principios de la década de los ochenta, época en la que los ejércitos de El Salvador y Guatemala procedían a asesinar a la población de sus respectivos países con el apoyo entusiasta de los Estados Unidos.

La comparación entre Timor y la fase II en Camboya resultaba especialmente chocante, y posteriormente fue señalada en algunas ocasiones. Las excusas aducidas ahora con respecto a la negati-

83. *Cambodia*, p. 48. Véase también la reseña de su libro del experto británico en Indochina R. B. Smith, donde hace hincapié en el mismo punto (*Asian Affairs*, febrero de 1985).

84. *Cambodia*, capítulo 3. También los ensayos de Vickery y Ben Kiernan en Chandler y Kiernan, *Revolution and Its Aftermath*; y Ben Kiernan, *Cambodia: The Eastern Zone Massacres*, Center for the Study of Human Rights, Documentation Series, n.° 1, Columbia University, Nueva York, 1986.

85. *PEHR*, II, 6, pp. 138-139, 152-153, 156-157, 163.

va a informar sobre lo que estaba sucediendo en Timor, o a protestar por esas atrocidades, o a actuar para detenerlas, resultan instructivas en el presente contexto. Así, William Shawcross rechaza la obvia interpretación de la respuesta comparativa ante Timor y Camboya en favor de «una explicación estructuralmente más seria»: «una parangonable falta de fuentes de información» y el no tener acceso a los refugiados.[86] Lisboa está a dos horas de vuelo desde Londres, e incluso Australia no es ni con mucho tan difícil de alcanzar como la frontera tailandesa-camboyana, pero el gran número de timoreses refugiados en Lisboa y Australia fueron ignorados por los medios de comunicación, que prefirieron los «hechos» proporcionados por el Departamento de Estado y los generales indonesios. Asimismo los medios ignoraron los estudios de refugiados a su alcance, procedentes de fuentes por lo menos tan creíbles como las utilizadas como base para la ideológicamente útil condena a los Khmer rojos, y no tuvieron en cuenta a los sin duda creíbles testigos que llegaron a Nueva York y Washington junto con nuevas evidencias procedentes de fuentes eclesiásticas y de otras. En realidad, la información sobre Timor descendió acusadamente a medida que aumentaban las masacres con el creciente apoyo de los Estados Unidos. No es difícil discernir (véase el capítulo 1) la verdadera y «estructuralmente seria» razón de esta diferencia en el carácter y el alcance de la información, aunque tal razón no resulte cómoda para la opinión pública occidental y sea aún más evidente si consideramos el extenso abanico de casos que ejemplifican las mismas conclusiones.[87]

5.2.7. *La fase III en Indochina: Camboya y la sangría de Vietnam*

Como ya escribimos en 1987, los moralistas occidentales callaron cuando sus gobiernos proporcionaron a Indonesia los medios para que continuasen su campaña de terror y represión en Timor. Mientras tanto, los Estados Unidos apoyaban la coalición Kampu-

86. Shawcross, en Chandler y Kiernan, *Revolution and Its Aftermath*.

87. Véase *PEHR*, y Edward S. Herman, *The Real Terror Network*, South End Press, Boston, 1982, para una discusión más amplia. Véase también el capítulo 2, *supra*.

chea Democrática, basada esencialmente en los Khmer rojos, por su «continuidad» con el régimen de Pol Pot, según informó el Departamento de Estado en 1982. El Departamento de Estado explica asimismo la razón de la diferente reacción ante la guerrilla del Fretilin que resiste la agresión indonesia en Timor, y las guerrillas de los Khmer rojos que atacan Camboya desde bases tailandesas: la coalición basada en los Khmer rojos es «incuestionablemente» más representativa del pueblo de Camboya que el Fretilin lo es de los timorenses.[88] Sin embargo, no hay necesidad de devanarse los sesos por la aparente inconsistencia de la actitud de los Estados Unidos a finales de la década de los setenta con respecto a Pol Pot y a los generales indonesios: el primero, objeto de odio y desprecio por las masacres ocurridas en Camboya bajo su gobierno durante la fase II; los últimos, nuestros amigos a los que alegremente suministramos y apoyamos cuando realizaron comparables masacres en Timor durante la misma época. Esta aparente inconsistencia, que llegó incluso a preocupar a los editores del *Wall Street Journal* a principios de la década de los ochenta,[89] queda ahora felizmente resuelta: apoyamos a *ambos*, los Khmer rojos y los generales indonesios.

El actual apoyo estadounidense a los Khmer rojos merece poca atención por parte de los medios de comunicación, que tampoco se ocupan de dar a conocer la postura vietnamita: un acuerdo político entre camboyanos, excluyendo a los dirigentes de los Khmer rojos Pol Pot y su íntimo asociado Ieng Sary.[90] Como hemos señalado antes, fuentes del Congreso han realizado un informe para aumentar la ayuda estadounidense a los Khmer rojos. A ello hay que añadir que la administración Reagan, siguiendo «inclinaciones chinas más que del sudeste asiático», ha rehusado apoyar los esfuerzos de sus aliados en esta zona para «diluir la fuerza del aliado de China, el depuesto régimen de Pol Pot, dando mayor peso a las guerrillas no comunistas y a las agrupaciones políticas».[91] En 1984

88. John Holdridge (Departamento de Estado), Sesiones (*Hearings*) ante el Subcomité de Asuntos Asiáticos y del Pacífico del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Representantes, 97 Congreso, 2.ª sesión, 14 de septiembre de 1982, p. 71.

89. Para una discusión sobre estos escrúpulos y el modo en que los resolvieron, véase Chomsky, *Towards a New Cold War*, capítulo 13.

90. Nayan Chanda, *FEER*, 1 de noviembre de 1984; 7 de noviembre de 1985 con modificaciones menores, su posición general al principio de la fase III.

91. Henry Kamm, *New York Times* (8 de noviembre de 1981).

Nayan Chanda informó que los Estados Unidos habían «doblado con mucho su ayuda financiera a las fuerzas de la resistencia», principalmente a través de fondos destinados a la asistencia humanitaria, lo cual permite a los aliados de los Estados Unidos distraer fondos para la compra de armas, una estratagema bastante socorrida.[92] Aunque se afirma que la financiación está limitada a la, por lo general, ineficaz resistencia no comunista, ésta es una apreciación superficial. Desde Phnom Penh, James Pringle, en el *Far Eastern Economic Review* explica que «ni el ejército de Sihanouk ni el KPNLF de Son Sann», los dos componentes de la resistencia no comunista, «cuentan para nada en Phnom Penh». «No hacen más que beber coca-cola en la frontera», comentó un diplomático del bloque soviético conocedor del tema. Desde la zona fronteriza con Tailandia, Barbara Crossette informa que «camiones cargados con hombres y muchachos, a razón de 150 a 200 cada vez, abandonan los asentamientos controlados por los Khmer rojos de Pol Pot y se internan en Camboya», donde se «transportan y acumulan los suministros para éstos», que esperan ser capaces de imponerse por la fuerza militar y el terror una vez se hayan retirado los vietnamitas, tal como exigen los Estados Unidos. Un portavoz del ejército nacional de Sihanouk explicaba en Bangkok que «el problema principal que tenemos actualmente es cómo hacer que se vayan los vietnamitas sin que vuelvan los Khmer rojos», la probable consecuencia de la política de los Estados Unidos. Richard Holbrooke, antiguo subsecretario de Estado, comentaba que la ayuda estadounidense «terminará en manos de Pol Pot y su gente», hecho que han señalado también diversos periodistas. Dith Pran, asociado camboyano de Sydney Schanberg, cuya historia de sufrimiento bajo el terror de la Kampuchea Democrática fue la base de la conocida película *The Killing Fields* y de gran parte de los comentarios de los medios de comunicación, encontró grandes dificultades para hacer llegar al público su opinión de que «proporcionar armas estadounidenses [a la resistencia de los Khmer rojos] es como echar gasolina al fuego», y tal cosa es lo útlimo que Camboya necesita. David Hawk indica que «es del dominio público que funcionarios políticos de la admi-

92. *FEER*, 16 de agosto de 1984. Prácticamente la misma historia apareció en el *Washington Post* del 8 de julio de 1985, sin mencionar las fuentes, tal como se comentó en el *FEER*, no sin cierto enojo, el 8 de agosto de 1985.

nistración Reagan y adjuntos de defensa de la embajada estadounidense en Bangkok han visitado los enclaves de los Khmer rojos».[93]

Las razones para apoyar la coalición Kampuchea Democrática con base en Tailandia van más allá de su «continuidad» con el régimen de Pol Pot. En 1979 Deng Xiaoping señaló una razón aún más fundamental: «Es juicioso forzar a los vietnamitas a que permanezcan en Camboya porque ello les hace sufrir cada vez más y así no podrán extender sus manos hacia Tailandia, Malasia y Singapur».[94] Este afán por «sangrar Vietnam» para asegurarse así que no se recuperará del castigo sufrido a manos de Occidente tiene ventajas suplementarias. Al actuar de esta manera, y al intensificar el sufrimiento y la represión en Indochina, demostramos retrospectivamente la «benevolencia» de nuestra «noble cruzada» de años anteriores.

Como ya hemos visto, los camboyanos eran «víctimas dignas» cuando estaban bajo el terror de los Khmer rojos durante la segunda fase del genocidio, y recuperaron este status una vez más tras la invasión vietnamita que puso fin a esta segunda fase, si bien con un cambio en el reparto de los papeles, dado que los Estados Unidos se unieron a China en su apoyo de los Khmer rojos. Tras los primeros esfuerzos para acusar de «genocidio» a los vietnamitas, la condena del enemigo oficial se desplazó a los terribles actos cometidos por los «prusianos de Asia», que habían «sojuzgado y empobrecido» Camboya desde el derrocamiento de Pol Pot, según los editores del *New York Times*. Recordemos que todos los horrores de los años precedentes, incluyendo las atrocidades de la primera fase, «que no se podían borrar» son «las carnicerías de los Khmer rojos», lo cual evidentemente importa poco ahora en Washington, dado que la doctrina Reagan ha calificado a las fuerzas de Pol Pot como las fuerzas de la resistencia.

93. Pringle, *FEER* (25 de febrero de 1988); Crossette, *New York Times* (1 de abril de 1988). Holbrooke, citado en *Indochina Issues*, junio de 1985. Véase también Robert Manning, *South* (septiembre de 1984), y Elizabeth Becker, «U.S. Backs Mass Murderer», *Washington Post* (22 de mayo de 1983), sobre las presiones estadounidenses para forzar a la resistencia no comunista hacia «una ignominiosa coalición con Pol Pot». Dith Pran, citado por Jack Colhoun, *Guardian* (Nueva York, 5 de junio de 1985). Carta, *FEER* (2 de agosto de 1984), con una fotografía de Alexander Haig «reunido, copa en mano, con un sonriente Ieng Sary» (ministro de Exteriores de los Khmer rojos) en Nueva York.

94. Chanda, *Brother Enemy*, 9. 379.

Nos resultaría difícil encontrar algún observador serio de la realidad camboyana actual que considere que los vietnamitas han reducido Camboya a un nivel por debajo del que se encontraba durante el período de la Kampuchea Democrática, como estos comentarios dan por supuesto. Por el contrario, entre las personas que están preocupadas por el pueblo de Camboya por sí mismo y no simplemente por su valor para los ejercicios de propaganda, pocos pondrían en cuestión que «está claro que para el pueblo la vida es con mucho mejor ahora que bajo la Kampuchea Democrática»;[95] algunos especialistas en Camboya han indicado que el régimen actual sale favorecido en la comparación con cualquiera de sus predecesores. Los adversarios consecuentes de la agresión pueden tener una base moral para condenar la invasión vietnamita, pese a la rápida intensificación de las atrocidades en 1977 y 1978 y los criminales ataques contra Vietnam emprendidos por fuerzas camboyanas bajo el gobierno de Pol Pot.[96] Sin embargo, resulta difícil tomar en cuenta seriamente este argumento cuando quienes lo esgrimen condenan a Occidente por no haber emprendido acciones más enérgicas para «rescatar» a los camboyanos de las manos de Pol Pot, «rescate» cuyo intento no hubiese sido menos interesado que la invasión vietnamita, tal como la historia se ha ocupado de aclarar. Y tampoco es necesario que nos entretengamos mucho con un argumento facilitado por aquellos que toleran o aplauden las agresiones criminales cuando se ajustan a sus fines: la invasión indonesia de Timor, la «liberación» del Líbano por fuerzas israelíes en 1982 (según la denominación de los editores del *New York Times*), o la «defensa de Vietnam del Sur», por mencionar unos cuantos casos evidentes.

95. Chanthou Boua, «Observations of the Heng Samrin Goverment», en Chandler y Kiernan, *Revolution and Its Aftermath*.

96. Según nuestra manifiesta opinión, «la invasión vietnamita puede explicarse, pero no justificarse» (*PEHR*, II, prefacio, p. 19). Contando con la información que desde entonces ha aparecido sobre el terror de Pol Pot en 1977-1978 y los ataques fronterizos contra Vietnam, este juicio debería ser matizado, incluso por lo que se refiere a una interpretación restrictiva del derecho a la propia defensa en el derecho internacional.

5.2.8. *La fase III en los Estados Unidos: El silencio absoluto y la fuerza oculta de la izquierda*

Situándonos en el frente doméstico, la fase III ejemplifica de una forma diferente las expectativas de un modelo de propaganda. No resulta agradable contemplar la verdad acerca de la respuesta de los medios de comunicación y de «la cultura» en general ante las atrocidades de Pol Pot, así como el espectacular contraste con la reacción ante ejemplos comparables en los que a los Estados Unidos corresponde la responsabilidad principal. Habida cuenta que la contundencia de los hechos no permite su refutación, la estrategia más adecuada no es otra que sepultarlos simplemente en el olvido. Una vez realizada esta tarea con la acostumbrada celeridad, podemos observar sin sorpresa que «Occidente despertó ante los sufrimientos de Kampuchea en otoño de 1979» (William Shawcross), y fue entonces cuando se empezó a reflexionar acerca de la curiosa incapacidad occidental, siempre consumiéndose en la autoflagelación, para percibir las atrocidades de sus enemigos.[97] Y estos resortes han funcionado en la última fase de la triste historia de Camboya.

Según Floyd Abrams, «el silencio se cernió a mediados de la década de los setenta, mientras ocurrían las matanzas masivas de los Khmer rojos», y «las historias sobre atrocidades procedentes de Camboya con posterioridad a 1975, sencillamente no fueron creídas» (David Hawk), época en la cual las acusaciones de genocidio al estilo de Hitler y Stalin resonaban desde el *New York Times* y el *Washington Post* hasta el *Reader's Digest* y el *TV Guide*, el *New York Review of Brooks* y los medios de comunicación en general. «Occidente despertó ante el horror de lo que había pasado sólo tras la invasión vietnamita» (*Economist*), y «casi nadie en el extranjero, fuese de izquierdas o de derechas, conocía [los horrores del régimen de Pol Pot] en la época en la que realmente estaban sucediendo (de 1975 a 1978)» (Conor Cruise O'Brien); es decir, en la época en la que Jimmy Carter calificó a Pol Pot como «el peor violador de los derechos humanos» y en la que el informe del Foreign Office británico condenaba al régimen por la muerte de «varios cientos de

97. *London Guardian* (26 de octubre de 1984).

miles de personas».[98] Uno bien podría imaginar que afirmaciones tan poco frecuentes no pueden pasar desapercibidas, pero esto es subestimar la capacidad de las instituciones ideológicas para responder a una causa digna de ello: en este caso, la causa de eliminar la verdad acerca de la respuesta occidental a «la década del genocidio» y demás atrocidades.

Que el «silencio» se había cernido sobre las atrocidades de Pol Pot fue también una afirmación insistente en el momento de mayor indignación por el genocidio de éste. La revista *Time* publicó el 31 de julio de 1978 un importante artículo de David Aikman, en el que afirmaba que los «experimentos genocidas» de los Khmer rojos estaban siendo ignorados, añadiendo un nuevo giro que fue asimismo adoptado con entusiasmo en la posterior reconstrucción de la historia: «en Occidente hay intelectuales muy comprometidos con los gemelos Moloch de nuestra época —"liberación" y "revolución"— que pueden realmente defender lo que ha sucedido en Camboya»; «algunos teóricos en política lo han defendido, al igual que George Bernard Shaw y otros intelectuales occidentales defendieron la brutal ingeniería social en la Unión Soviética durante la década de los treinta». Pero Aikman no mencionaba a nadie, por la sencilla razón de que no había nadie que hubiese hecho tal cosa, pese a que el *Time* intentó en vano suscitar declaraciones positivas sobre el régimen de Pol Pot entre los activistas contrarios a la guerra, para reforzar esta útil tesis.

Cada uno de estos temas, el «silencio» de Occidente, la defensa de Pol Pot por intelectuales occidentales, queda inequívocamente refutado por masivas y bien conocidas pruebas, aunque fueron dejadas de lado por la movilizada cultura intelectual. Pero este nivel de tergiversación al servicio de una noble causa es todavía insuficiente. Los dos temas fueron combinados por William Shawcross en un inspirado logro de agitación y propaganda que hizo que la farsa avanzase un paso más.[99] Esta nueva contribución despertó gran entusiasmo; muchos de los comentarios que acabamos de citar

98. Abrams, carta, *New York Times* (8 de enero de 1985); también Abrams y Diane Orentlicher, *Washington Post Weekly* (9 de septiembre de 1985); Hawk, *New Republic* (15 de noviembre de 1982); *Economist* (13 de octubre de 1984); O'Orien, *London Observer* (30 de septiembre de 1984).

99. *Quality of Mercy*; *Washington Post* (2 de septiembre de 1984); su artículo en Chandler y Kiernan, *Revolution and Its Aftermath*.

proceden de revisiones de su libro, o están obviamente inspirados en él.

En su estudio de «Cambodia, Holocaust and Modern Conscience», Shawcross reflexiona sobre el relativo «silencio» occidental ante las atrocidades de los Khmer rojos. Los hechos son radicalmente diferentes, pero la idea de que Occidente ignora las atrocidades comunistas mientras que se angustia por las propias resulta bastante más atractiva para la conciencia occidental. A continuación, Shawcross procede a adoptar la segunda tesis de Aikman, aplicándola de manera ingeniosa para explicar el mecanismo subyacente tras esta desgana de Occidente para enfrentarse a las atrocidades comunistas, notable característica de la vida occidental. Para Shawcross el silencio sobre la segunda fase del genocidio es el resultado del «escepticismo (para usar un calificativo suave) mostrado por la izquierda occidental con respecto a las historias procedentes de la Kampuchea Democrática. Tal escepticismo fue ferviente y frecuentemente expresado por Noam Chomsky ..., [quien] desde el momento de la victoria de los Khmer rojos en 1975 declaró que la prensa occidental se había confabulado con gobiernos occidentales y asiáticos anticomunistas, especialmente Tailandia, para elaborar una campaña de propaganda "vasta y sin precedentes" contra los Khmer rojos».[100]

Para reforzar su afirmación, Shawcross ofrece lo que intenta ser una cita, pero sin mencionar una fuente identificable, y ello por dos buenas razones. La primera de ellas el que no existe tal cita,[101] aunque incluso su versión de ella socava su afirmación básica, con su referencia a «la horripilante» realidad de Camboya bajo el gobierno de los Khmer rojos. La segunda es que la fuente de esta cita inventada es un trabajo publicado en noviembre de 1979, casi un año después de la caída del régimen de Pol Pot. De mencionar esta fecha se hubiese planteado la cuestión de cómo esta «ferviente y frecuente» expresión de escepticismo pudo haber intimidado a los gobiernos y a los medios de comunicación desde 1975 hasta 1978. Además, nosotros habíamos dejado meridianamente claro que el

100. *Quality of Mercy*, p. 55; *Washington Post*, 2 de septiembre de 1984.

101. Está confeccionada con una serie de frases que aparecen en la introducción al primer volumen del *PEHR*, pp. 19-20, con omisiones cruciales que demostrarían inmediatamente lo absurdo del razonamiento que presenta.

historial de atrocidades era «estremecedor» y que llegaba quizá al nivel de las fabulaciones más extravagantes.

Cabe observar que Shawcross pudo haber citado ejemplos reales de «escepticismo»; por ejemplo, el de los analistas del Departamento de Estado en el apogeo del furor sobre Camboya, o los comentarios *a posteriori* de Douglas Pike y otros citados anteriormente (pp. 293-294), o los de aquellos periodistas que durante la segunda fase estaban dispuestos a colegir únicamente que los relatos de los refugiados «indican que para los Khmer rojos resulta difícil gobernar el país si no es mediante la coerción» y «sugieren incluso que el terror está siendo empleado como sistema de gobierno», señalando que «no parece que los refugiados se encuentren en una situación lastimosa» y que si, como se afirma, los Khmer rojos están perpetrando una «atrocidad», «ésta no empezó en abril [de 1975], sino que sencillamente se encuentra en su sexto año de existencia» (William Shawcross).[102] Pero evidentemente la verdad no se hubiese ajustado a los fines de ese ejercicio.[103]

Había quizá algún otro ejemplo de esta «ferviente y frecuente» expresión de escepticismo que silenció a Occidente. Shawcross actúa cuerdamente al evitar dar ejemplos, pues, como sabe muy bien, su principal fuente de información, Ponchaud, se apartó de su línea elogiando a Chomsky «por su responsable actitud y la precisión de su pensamiento» mostrada en sus escritos sobre Camboya, refiriéndose a la revisión de su libro que efectuamos en 1977 y que hemos mencionado anteriormente y a correspondencia no publicada a la que había tenido acceso, que agota todo lo que de interés apareció durante el período de la Kampuchea Democrática.[104] De manera que Shawcross quería hacernos creer que un solo artículo publicado en 1977 en *The Nation* había silenciado a Occidente, un artículo en el cual, además, elogiábamos el libro escrito por Ponchaud, su fuente principal, calificándolo de «serio y digno de ser leído», con sus «horribles relatos de las informaciones que le habían proporciona-

102. Mencionado en Vickery, *Cambodia*, pp. 58 y ss., en una discusión sobre el posterior esfuerzo de Shawcross por «borrar su anterior juicio positivo y declarar haber sido proveedor de una VTE sensacionalista, cuando estaba claro que no lo era».

103. En efecto, Shawcross pudo haber tenido otros motivos; véase la nota 33.

104. Véase el prefacio del autor en la edición norteamericana de Ponchaud, *Cambodia: Year Zero*. Sobre el considerable fraude de Ponchaud ante esta cuestión, véase *PEHR*, II, 6, pp. 278 y ss.

do los refugiados sobre el bárbaro trato que habían recibido a manos de los Khmer rojos», y en el que declarábamos que no estábamos en situación de sacar conclusión alguna sobre el verdadero alcance de las atrocidades, coincidiendo con los especialistas del Departamento de Estado y otras fuentes bien informadas de la época.

Hablando claro, en nuestro único artículo, al que Ponchaud hace referencia, sí manifestamos cierto «escepticismo», pero no sólo sobre las afirmaciones que habían sido ya consideradas como invenciones, sino también acerca de otras que seguían dándose por válidas. Así, al revisar a Ponchaud, expresamos escepticismo con respecto a sus estimaciones de las bajas causadas por los bombardeos estadounidenses, que nos parecían excesivas y posiblemente basadas en malintepretaciones de las cifras que él citaba, y planteamos preguntas acerca de algunas de las citas atribuidas a los Khmer rojos en las que Ponchaud (y más tarde otros) confiaban a pies juntillas, pero que había presentado de maneras muy diferentes en diversas ocasiones, y que, según admitió posteriormente, carecían de base.[105] Es digno de mención que nuestro escepticismo sobre las acusaciones contra los Estados Unidos, aunque basadas simplemente en sospechas, no suscitara ningún comentario, mientras que nuestro escepticismo sobre las acusaciones contra los Khmer rojos, que estaba basado en pruebas textuales y, como se vio más tarde, había sido subestimado, haya despertado grandes iras en los que Vickery describe como comentarios «incompetentes e incluso deshonestos» y «muchas veces difamatorios».[106]

Esta reacción diferente es fácil de explicar. Se da por supuesto que las acciones de los Estados Unidos deben ser explicadas con total escrupulosidad y teniendo en cuenta los matices, de manera que nuestra insistencia en que se trata simplemente de lo que cabe esperar no merece comentarios. (Estamos de acuerdo.) Por el contrario, la actuación de los enemigos oficiales no merece tales escrúpulos, y es un crimen imperdonable cuestionar los ejercicios de propaganda emprendidos al servicio del poder.

Es de notar que incluso de haber existido un grado significativo

105. Para una relación basada en investigaciones posteriores, véase *PEHR*, II, 6, pp. 253-284.

106. Véase nota 79, *supra*.

de «escepticismo» entre «la izquierda occidental» a la que Shawcross alude, la idea de que éste pudiera haber tenido las consecuencias que describe, proveniendo de gente sistemáticamente excluida de los principales medios de comunicación y de la línea central de la discusión, es una invención de una audacia tal que no podemos más que admirar a su creador. Shawcross aduce además que este supuesto «escepticismo de izquierdas» no sólo silenció a los medios de comunicación y a los gobiernos occidentales, sino que evitó también cualquier respuesta significativa de Occidente a las atrocidades de los Khmer rojos. Esta tesis es demasiado ridícula como para merecer comentario alguno, y podemos juzgar de antemano la seriedad de Shawcross refiriéndonos a las propuestas efectuadas por él sobre qué se podía hacer en la época en que sucedieron los hechos, recordando que Shawcross tuvo siempre fácil acceso a los principales medios de comunicación. No hemos encontrado ni una sola palabra sugiriendo qué podía hacerse,[107] por la sencilla razón de que ni él ni nadie podía pensar nada que fuese de alguna utilidad. Desde luego, la situación era bastante diferente durante la primera fase del genocidio, o con respecto a Timor durante la segunda fase y posteriormente, y en otros innumerables casos las acusaciones de Shawcross hubiesen sido válidas. Verdaderamente hemos aprendido mucho acerca del «holocausto y la conciencia moderna» observando este ejercicio y la reacción que provocó.

Shawcross atribuye en parte este «escepticismo de izquierdas» que tuvo tan desastrosas consecuencias, dada la influencia de la izquierda en las instituciones occidentales, a la propaganda vietnamita. Los «portavoces de Vietnam quitaron hierro a los relatos de los refugiados sobre la conducta de los Khmer rojos», escribió, «aumentando así la incredulidad en ellos, especialmente entre la izquierda

107. Para ser precisos, hemos encontrado una sugerencia, aunque mucho después de los acontecimientos. En *The Times Higher Education Supplement* del 6 de diciembre de 1981, junto a una serie de tergiversaciones de nuestra posición del tipo de las que aquí se discuten, Shawcross afirma que, dada nuestra «influencia política», podríamos haber tenido un importante papel en la movilización de la opinión pública mundial para presionar a China para que terminara con las atrocidades de los Khmer rojos (algo que tratamos desesperadamente de hacer). Huelga todo comentario. Los directores del periódico es evidente que así lo pensaron, y rechazaron publicar una respuesta, a pesar de nuestra impresionante «influencia política». Cabe dudar que Shawcross se hubiera atrevido a publicar tan pueriles absurdos si no hubiese estado seguro de que no se publicaría ninguna respuesta.

occidental».[108] que naturalmente sigue el ejemplo de Hanoi y repite como un loro sus doctrinas, según el dogma establecido, aunque resulta interesante el que Shawcross insinuase también que la influencia de Hanoi se extendía más allá de sus acólitos. Y, ¿por qué no? Si hemos llegado al punto de afirmar que la izquierda occidental silenció a la prensa y a los gobiernos, ¿por qué no pasar a mantener que incluso fuera de esos peligrosos círculos la propaganda vietnamita es una poderosa fuerza a la hora de conformar la opinión pública? Naturalmente Shawcross no intenta ni por asomo dar ninguna prueba de lo que como muy bien sabe es una pura fantasía, desde el principio hasta el final.

Podemos situar esta extravagante explicación del «silencio» de Occidente junto a las similares afirmaciones de que el Departamento de Estado perdió China, que los medios de comunicación están amenazando los fundamentos de la democracia con su «postura adversa», etc. Sin embargo, la reacción ante esas afirmaciones no fue de burla, sino que despertaron gran entusiasmo. Para citar tan sólo un ejemplo característico, David Hawk comenta que Shawcross «atribuye la indiferencia mundial» a «la influencia de académicos y activistas de la izquierda estadounidense contrarios a la guerra, que ofuscaron la conducta de los Khmer rojos, denigraron los informes de los refugiados posteriores a 1975 y denunciaron a los periodistas que publicaron tales historias».[109] Hawk acepta como válidas las tesis de Shawcross, pero tampoco da ninguna prueba de la «indiferencia» ante las atrocidades, que en todo el mundo fueron denunciadas como genocidas, ni de la presunta conducta de la izquierda estadounidense, ni explica los mecanismos mediante los cuales esta conducta, de haber existido, pudo haber controlado los principales medios de comunicación, o siquiera influenciarlos de forma marginal. Las mitologías oportunas no precisan pruebas ni lógica alguna. Ni precisan tampoco prestar atención a la propia actuación de Hawk durante la época, como funcionario de Amnistía Internacional y especialista en el sudeste asiático. El informe anual de Amnistía Internacional de 1977 señala que el número de presuntas ejecuciones en Camboya fue «inferior al del año anterior», y aunque resu-

108. *Quality of Mercy*, p. 357.

109. Reseña de *Quality of Mercy*, *Washington Post Weekly*, Book World (30 de julio de 1984).

me algunos informes de ejecuciones y desapariciones, su informe es moderado. El informe anual de 1978, si bien era más duro en sus aseveraciones de violencia, señalaba que los informes de los refugiados, en los que necesariamente se debía confiar, «eran muchas veces imprecisos o conflictivos», dejando así a Amnistía Internacional y al propio Hawk en la categoría de Shawcross-Hawk de aquellos que «denigraban los informes de los refugiados posteriores a 1975». Resulta muy fácil moralizar *a posteriori*.

Posteriormente, Shawcross desarrolla sus tesis de manera interesante.[110] Para demostrar que los comentaristas occidentales rehusaban reconocer que «el de los Khmer rojos es un gobierno marxista-leninista», señala que el periodista británico John Pilger «comparaba constantemente» a los Khmer rojos con los nazis, ocultando el hecho que él comparaba explícitamente sus acciones con el «terror de Stalin», como señaló Pilger en su respuesta a una de las muchas revistas que repitieron las invenciones de Shawcross.[111] Refiriéndose a nosotros, Shawcross afirmó posteriormente que «estos autores creyeron durante años» que «los refugiados no eran dignos de confianza, que la CIA estaba tramando un baño de sangre para decir "ya os lo habíamos advertido"». Menciona nuestro único artículo (*The Nation*, 1977), en el que no hay ningún indicio de una tesis semejante, como no lo hay en ningún otro lugar. En ese artículo, y también posteriormente, dijimos de manera clara y explícita que los informes de los refugiados no dejaban duda alguna de que el historial de las atrocidades de los Khmer rojos era «esencialmente y muchas veces horroroso», y que «en el caso de Camboya no existe dificultad alguna para documentar las grandes atrocidades y la opresión, fundamentalmente a partir de los informes de los refugiados».[112] Para sostener su argumento con respecto a nuestra presunta negación de la verosimilitud de los refugiados, Shawcross cita nues-

110. Véase su ensayo en Chandler y Kiernan, *Revolution and Its Aftermath*, único intento por aportar alguna prueba que respaldara unas declaraciones muy divulgadas.

111. *New Statesman* (2 de noviembre de 1984). Sobre la cuestión de si KD era «marxista-leninista», sea lo que fuere lo que se supone que significa exactamente, véase Vickery, *Cambodia*.

112. Las primeras páginas de nuestro capítulo sobre Camboya en *PEHR*, II, pp. 135-136. Para alguno de nuestros comentarios sobre el artículo en cuestión, véase *supra*, p. 330.

tro comentario sobre la necesidad de analizar cuidadosamente los informes de los refugiados, afanándose en ocultar que nos estábamos refiriendo a Ponchaud, su principal fuente de información, y que el comentario que menciona es un tópico familiar. Su referencia a que la CIA estaba tramando un baño de sangre es una pura fantasía, aunque podemos añadir que en la época en la que Shawcross escribía, tras la aparición de nuestro libro, Michael Vickery presentó pruebas de que el relato de Barron y Paul publicado en el *Reader's Digest* respondía en parte a un esfuerzo desinformador de la CIA.[113] Posteriormente, Shawcross manifestó su opinión «contraria a la de Chomsky y Herman» de que el gobierno estadounidense «permaneció bastante inactivo» por lo que se refiere a la propaganda anti-Khmer. Nosotros no hemos propuesto que el gobierno de los Estados Unidos haya jugado algún papel a la hora de orquestar el fraude de Shawcross y otros autores que hemos documentado, y en realidad hemos considerado los informes del Departamento de Estado como los más verosímiles de los que disponíamos entonces. Y así sucesivamente.

Pero Shawcross, y otros, que están profundamente ofendidos por nuestro desafío al derecho de estar al servicio del Estado predilecto de uno, saben muy bien que las acusaciones contra las opiniones disidentes no precisan pruebas, y que las acusaciones ideológicamente útiles se basan simplemente en interminables repeticiones, por ridículas que puedan ser, como por ejemplo la afirmación de que la izquierda estadounidense silenció a todo Occidente durante el período de Pol Pot.

Las acusaciones de Shawcross contra otros enemigos siguen el mismo esquema; otro factor, presumiblemente, que colabora al atractivo de su mensaje. Así, en el seguimiento de su búsqueda para atribuir la principal responsabilidad por la continua tragedia de Camboya a Vietnam, no a aquellos que fueron responsables de la primera fase del genocidio con su «irreflexiva» política y que actualmente apoyan a Pol Pot, Shawcross racionaliza este apoyo como la respuesta natural a las acciones vietnamitas. Dada la invasión de Camboya por Hanoi, y la conducta de los vietnamitas desde entonces, Shawcross explica que China y los países de la ASEAN del sudeste asiático (por no hablar de sus «socios occidentales») tenían

113. Véanse las referencias de la nota 22.

que «intentar aplicar todas la formas de presión posibles sobre Hanoi» para que renunciase a sus intenciones, y «los vietnamitas podían haber previsto que tales presiones incluirían el apoyo a los Khmer rojos». Así los vietnamitas tienen la culpa de que China y los Estados Unidos apoyen a Pol Pot, junto a solícitos abogados de los derechos humanos como Indonesia y Tailandia, con su estricta confianza en los medios pacíficos. Sin embargo, este análisis no se hace extensivo a los vietnamitas, que siempre llevan a cabo estrategias a sangre fría en un mundo sin las amenazas procedentes de China o de los Estados Unidos, las cuales nos permiten «predecir» (y así implícitamente disculpar) dichas estrategias. Para Shawcross, «la conducta de Vietnam raramente da a entender que deseen contemplar un compromiso en el que los Khmer rojos desaparezcan como fuerza viable en Camboya, lo que según los países de la ASEAN y sus asociados occidentales era su objetivo». «Es imposible predecir si una sugerencia semejante [de Hanoi] hubiese sido aceptada por los chinos o por los países de la ASEAN, pero la cuestión estriba en que nunca ha sido hecha tal sugerencia», afirma Shawcross sin reservas.[114] Hanoi ha ofrecido repetidamente retirarse en favor de un régimen autóctono, con la única condición de la exclusión de los altos dirigentes de los Khmer rojos. Ignoramos si tales ofertas eran serias o no, puesto que han sido desestimadas por la alianza Deng-Reagan y, con más vacilaciones, por los países de la ASEAN. Estos rechazos, en favor de continuar el apoyo a Pol Pot, no han sido referenciados en los medios de comunicación, lo que por otra parte apenas puede sorprender a cualquier observador racional. Pero a fin de cuentas, estos hechos tampoco corroboran el análisis de Shawcross.

En un renovado esfuerzo para endosar la culpa al enemigo de costumbre, Shawcross afirma que los vietnamitas «tienen más confianza en los torturadores que en sus víctimas, de manera que muchos de estos torturadores están siendo promocionados por el nuevo orden a posiciones de autoridad sobre sus víctimas». Como única prueba hace referencia a una historia, que menciona dos veces en su libro, sobre una anciana que encontró en Camboya «quien le describió apasionadamente cómo el Khmer rojo que asesinó a su hijo estaba viviendo, sin haber recibido castigo alguno, en

114. *Quality of Mercy*, p. 357.

una aldea vecina». Repitió la misma historia en la *New York Review of Books*, provocando una carta de Ben Kiernan, que le acompañaba cuando este supuesto incidente tuvo lugar (y que actuaba como su intérprete). Kiernan hizo referencia a la grabación de las declaraciones de esa mujer, que revelaba que ésta simplemente había dicho que el asesino había «escapado» con dirección a un «distrito cercano», indicando, como hacía Kiernan, que éste individuo temía algún castigo, pero no que hubiese sido «promocionado» a un «rango superior». Ante esta prueba, Shawcross mantuvo su postura, refugiándose en la afirmación de que algunos de los oficiales con los que se había encontrado «parecían bastante desagradables», lo cual, según su lógica, bastaba para probar su explicación.[115] Estos ejemplos son bastante característicos.[116]

5.2.9. *Resumen*

Para terminar podemos decir que, con anterioridad a la «década del genocidio», el tratamiento de los medios de comunicación con respecto a Camboya siguió las pautas previstas por el modelo de propaganda; lo mismo vale para las dos fases de este terrible período y la etapa posterior. Durante la primera fase, el testimonio de los refugiados se consideró poco interesante, por lo que poco sabemos hoy en día, aparte de que se produjeron enormes carnicerías y destrucciones. Esta fase no figura en la historia como un «holocausto» o un ejercicio de «genocidio», y su origen es olvidado. Durante la segunda fase, el mito del «país apacible» se extendió a lo largo de 1975, y el papel y la responsabilidad de los Estados Unidos por lo que estaba sucediendo pasó por lo general bastante inadvertido, si bien algunos no llegaron a semejante nivel de indecencia. Se buscaban con impaciencia los informes de los refugiados, si bien sólo aquellos que apoyaban la versión total estándar, y las valoraciones de los especialistas del Departamento de Estado y otros comentaristas expertos que daban una visión más matizada (y vista

115. *Op. cit.*, pp. 358-359; *New York Review of Books* (27 de septiembre de 1984). Hacemos hincapié en que lo que aquí se trata no es la corrección de su acusación, sino más bien la evidencia que utiliza para respaldarla.

116. Para varios casos anteriores, véanse *PEHR*, II, 6, y Vickery, *Cambodia*.

en perspectiva, sustancialmente correcta) fueron desestimadas y consideradas carentes de utilidad. Se produjo una condena masiva, que llegó a su apogeo a principios de 1977, cuando aún el número de muertes era bastante inferior al que se produjo en la primera fase, llegándose a un récord de fraude que resulta muy ilustrativo.[117] Cuando algo parecido a la versión total estándar empezó a tener algunos visos de realidad, en 1977-1978, los horrores fueron minimizados en los círculos oficiales del gobierno; el posterior apoyo de los Estados Unidos a Pol Pot suscitó pocos comentarios.

Los acontecimientos de la fase III siguieron un curso doble. En una caprichosa reconstrucción de los hechos que mantiene el nivel de integridad acostumbrado, se afirma que el «escepticismo de izquierdas» dominó de tal manera la opinión pública y los gobiernos occidentales que el «silencio» se cernió a lo largo del período de la Kampuchea Democrática. La aceptación generalizada de esta tesis, pese a las características de las pruebas aducidas y su manifiesta absurdidad, cuenta como un nuevo ejemplo de cómo verdaderamente los argumentos más inverosímiles pueden convertirse en doctrina, siempre que sean útiles. En Indochina dio comienzo una nueva fase de preocupación occidental por el sacrificio de Camboya, con la indignación dirigida ahora no contra Pol Pot, sino contra los nuevos opresores que le habían derrocado. Los Estados Unidos se adjudicaron un papel dirigente en la organización de esta nueva preocupación, que combinó los intereses chinos y estadounidenses por «sangrar a Vietnam» con una renovada exhibición de la conciencia occidental, adecuadamente dirigida para excluir la primera fase y sus efectos a largo plazo, pasando por alto el papel estadounidense en el apoyo a Pol Pot, en parte a través de sus aliados chinos, que habían sido admirablemente sinceros al explicar su postura. Esta benevolencia cuidadosamente canalizada tuvo éxito en su objetivo de mantener activas las fuerzas de Pol Pot y perjudicar a Vietnam, así como, incidentalmente, al sufriente pueblo de Camboya, que es el objeto de nuestra profunda preocupación. El esfuerzo en la ayuda de Camboya en 1979-1980 logró ayudar a los camboyanos sumidos en la miseria, pero ha mantenido también las fuerzas

117. Y, significativamente, se suprimieron (y se siguen suprimiendo) atrocidades comparables en curso cuya responsabilidad principal recaía en los Estados Unidos, con vergonzosas apologías cuando ya no se podían seguir negando los hechos.

de Pol Pot, impidiendo así la recuperación de Camboya y, quizá, su independencia, si bien a este respecto sólo podemos hacer especulaciones.

Dejando aparte las reacciones indudablemente sinceras de muchas personas que fueron expuestas a las evidencias adecuadamente seleccionadas que pasaron a través de los filtros de los medios de comunicación, la única conclusión racional de esta esclarecedora historia es que Occidente se consumió por el horror de las atrocidades cometidas por los Khmer rojos durante la segunda fase, no por una súbita pasión por el destino del sufriente pueblo de Camboya —como deja bien claro la historia durante la primera fase, y en otros lugares—, sino porque los Khmer rojos tenían un provechoso papel a desempeñar, a saber: permitir una justificación *a posteriori* por los anteriores crímenes cometidos por los franceses y los estadounidenses en Indochina, y facilitar la reconstrucción de la ideología occidental tras el trauma de Vietnam, así como superar el pavor por el «síndrome de Vietnam» y preparar el terreno para «el resurgimiento de los Estados Unidos» en la prosecución de su vocación histórica de defender la libertad y la justicia. Por la misma razón los hechos que sucedieron en realidad fueron, y siguen siendo, de escaso interés.

CONCLUSIONES

En su defensa de los medios de comunicación ante la acusación de que éstos se habían convertido en algo demasiado independiente y peligroso para el bien público, Anthony Lewis, del *New York Times*, escribió que:

> La prensa está protegida [por la Primera Enmienda] no por su propio interés, sino para permitir la actuación de un sistema político libre. En el fondo, el tema no atañe tanto al periodista y al editor como al ciudadano crítico con el gobierno.

Cuando se habla de la libertad de prensa lo que está en juego «es la libertad para desarrollar una función en nombre del gobierno».[1] Lewis alude al juez Powell, del Tribunal Supremo, según el cual «ningún individuo puede obtener por sí mismo la información necesaria para el desempeño inteligente de sus responsabilidades políticas ... Al permitir al público efectuar un control significativo del proceso político, la prensa desempeña una función crucial, llevando a cabo el propósito social de la Primera Enmienda». Por tanto, tal como el juez Gurfein contemplaba en su veredicto favorable al derecho del *New York Times* a publicar los *Papeles del Pentágono* una vez que el gobierno hubiese sido incapaz de demostrar la existencia de alguna amenaza de quiebra de la seguridad del país, más allá de la posibilidad de dificultades, «las autoridades

1. Lewis, «Freedom of the Press-Anthony Lewis Distinguishes Between Britain and America», *London Review of Books* (26 de noviembre de 1987). Lewis presenta su interpretación de las opiniones de James Madison y Justice Brennan (sobre el caso de *The New York Times v. Sullivan* que Lewis describe como la «mayor victoria legal de la prensa en los tiempos modernos»), manifestando su apoyo.

deben tolerar una prensa arisca, tenaz y omnipresente, a fin de preservar los supremos valores de la libertad de expresión y el derecho del pueblo a saber».

Nosotros no aceptamos el criterio de que la libertad de expresión deba defenderse en términos instrumentales, en virtud de su contribución a algún bien superior; a nuestro entender se trata de un bien en sí mismo. Pero dejando esto aparte, tan enérgicas declaraciones expresan unas aspiraciones válidas y, por encima de ello, expresan la imagen que de sí mismos tienen los medios de comunicación estadounidenses. Nuestro afán en este libro no ha sido otro que investigar la relación entre esta imagen y la realidad. A diferencia de la sólida percepción de la prensa como arisca, tenaz y omnipresente en su búsqueda de la verdad e independiente frente a la autoridad, hemos trazado y aplicado un modelo de propaganda que muestra cómo realmente los medios de comunicación desempeñan un «propósito social», pero no el de permitir que el público efectúe un control significativo del proceso político, proporcionándole la información necesaria para una inteligente asunción de sus responsabilidades políticas. Por el contrario, el modelo de propaganda deja entrever que el «propósito social» de los medios de comunicación es el de inculcar y defender el orden del día económico, social y político de los grupos privilegiados que dominan el Estado y la sociedad del país. Los medios cumplen este propósito de diferentes maneras: mediante la selección de los temas, la distribución de intereses, la articulación de las cuestiones, el filtrado de información, el énfasis y el tono, así como manteniendo el debate dentro de los límites de las premisas aceptables. Hemos tratado de mostrar cómo se llevan a la práctica las expectativas de este modelo, y cómo éstas quedan sobrepasadas, en algunos casos cruciales, por la práctica real de los medios de comunicación. Estamos bastante de acuerdo con el juez Hughes, del Tribunal Supremo, citado también por Lewis, acerca «de la necesidad fundamental de una prensa vigilante y valerosa», si los procesos democráticos han de actuar de una manera significativa. Pero los materiales que hemos examinado indican que en la práctica habitual esta necesidad no queda ni con mucho satisfecha.

Con frecuencia se afirma que los medios de comunicación no siempre han sido tan independientes, vigilantes y provocativos con la autoridad como supuestamente lo son hoy, sino que más bien las

experiencias de la generación pasada han servido para enseñar a los medios a ejercitar «el poder de inmiscuirse en nuestra vida nacional, exponiendo lo que consideran oportuno exponer», sin tener en cuenta las presiones externas o las órdenes de la autoridad (Lewis). Por tanto, es este período en que vivimos el que supuestamente representa un desafío al modelo de propaganda, razón por la cual lo hemos elegido como el núcleo de nuestra investigación. Algunos de los ejemplos que abordamos pertenecen a la década anterior, época en la que los medios de comunicación liberales estaban presuntamente enfrentados a la administración «conservadora», a la que presumiblemente debían oponerse con toda energía. En un esfuerzo adicional para asegurarnos que no estábamos seleccionando casos excepcionales, hemos examinado todos los temas detenidamente, y hemos elegido para nuestro estudio los casos que suponen el más serio desafío para nuestro modelo, es decir, aquellos que suscitaron críticas por considerar que los medios de comunicación habían ido demasiado lejos en su exuberante independencia y desafío a la autoridad, tanto que debían ser refrenados si la democracia debía sobrevivir: por ejemplo, las informaciones sobre la ofensiva del Tet, el primer ejemplo de los presuntos excesos de los medios que se dio en las décadas de los setenta y los ochenta. Incluso estos casos demuestran la subordinación de los medios a las exigencias del sistema de propaganda del Estado. Tampoco desfalleció su subordinación a estas exigencias en el momento álgido de su presunta independencia, cuando la guerra del Vietnam entraba en su fase final y los medios amenazaban la presidencia de Nixon, como refleja la información que ofrecieron del tratado de paz de París de 1973, uno de los ejemplos más flagrantes de tergiversación basada en una acrítica reiteración de las declaraciones oficiales y en la adhesión a la agenda política del Estado.

Podemos ilustrar este punto con otro ejemplo, al que suelen referirse quienes defienden la versión estándar de los medios como exponente máximo: el caso Watergate. Para muchos críticos de los medios de comunicación, este incidente ejemplifica sus excesos irresponsables; para aquellos que orgullosamente los defienden ejemplifica su independencia ante las autoridades superiores y su compromiso con los valores del periodismo profesional. ¿Cuáles son, llegados a este punto, las lecciones del caso Watergate?

Según la argumentación principal de la prensa, el fundamental

escándalo del Watergate fue que la administración Nixon envió a un puñado de criminales de pacotilla a hurgar en los cuarteles generales del partido demócrata, por razones que siguen siendo oscuras. El partido demócrata representa poderosos intereses internos, sólidamente arraigados en la comunidad empresarial. Por esta razón las acciones de Nixon fueron un escándalo. El Partido Socialista de los Trabajadores, un partido político legal, no representa intereses poderosos. Por ello, no se produjo ningún escándalo cuando se reveló, justo en el momento en que las pasiones provocadas por el caso Watergate alcanzaron su cenit, que el FBI hubiese intervenido las actividades de este partido durante una década, mediante intrusiones ilegales y otras actividades, violando el principio democrático de manera bastante más grave y reiterada que cualquier actividad relacionada con la vista del Watergate. Y aún más importante, estas acciones de la policía nacional política eran tan sólo un elemento de los programas gubernamentales, que abarcaban diversas administraciones, para refrenar la acción política independiente, instigar la violencia en los *ghettos*, y socavar los movimientos populares que estaban empezando a atraer a sectores generalmente marginados a la arena de la toma de decisiones.[2] Estos programas secretos e ilegales fueron revelados en procesos judiciales y en otros foros durante el período Watergate, pero nunca quedaron reflejados en las actas del Congreso y los medios de comunicación no les dedicaron excesiva atención. Ni siquiera fue un escándalo la complicidad del FBI en el asesinato a manos de un policía de uno de los organizadores de los Panteras Negras en Chicago, en acusado contraste con la «lista de enemigos» de Nixon, que identificaba a personas poderosas que fueron denigradas en privado pero que no sufrieron consecuencia alguna. Como hemos señalado, el papel de los Estados Unidos al iniciar y llevar a cabo la primera fase de la «década del genocidio» en Camboya formó parte de la vista del Watergate sólo de una manera marginal: no porque cientos de miles de camboyanos hubiesen sido asesinados en el transcurso de un

2. Véanse, entre otros, N. Blackstock, ed., *COINTELPRO*, Vintage, Nueva York, 1976; Frank J. Donner, *The Age of Surveillance: The Aims and Methods of America's Political Intelligence System*, Knopf, Nueva York, 1980; Robert J. Goldstein, *Political Repression in America*, Schenkman, Cambridge, 1978; Morton H. Halperin *et al.*, *The Lawless State*, Penguin, Nueva York, 1976; Christy May y Susan Kaplan, eds., *Documents*, Penguin, Nueva York, 1980.

enorme crimen de guerra, sino porque el Congreso no había recibido la oportuna notificación, de manera que sus privilegios habían sido violados, e incluso esto fue considerado una infracción demasiado leve como para formar parte de las acusaciones finales. Lo que el Congreso dio por bueno lo dieron también los medios de comunicación y sus investigaciones reflejadas en los informes que «ayudaron a que el presidente abandonase el poder» (Lewis) en lo que se considera una de las más notables exhibiciones de la independencia, o arrogancia, según se mire, de los medios de comunicación.

La historia ha sido suficientemente benigna para urdir en beneficio nuestro un «experimento controlado» para determinar qué es lo que estaba en juego durante el período Watergate, en el que la postura confrontacional de la prensa llegó a su apogeo. La respuesta es clara y precisa: los grupos poderosos son capaces de defenderse a sí mismos, lo cual no es ninguna sorpresa, y según las pautas de la prensa el escándalo se da cuando su posición y sus derechos están amenazados. Por el contrario, mientras las ilegalidades y las violaciones de la esencia democrática se reduzcan a los grupos marginales o a las víctimas distantes de los ataques militares de los Estados Unidos, o su resultado sea un coste difuso sobre la población en general, la oposición de los medios de comunicación es sorda o ausente a la vez.[3] Por esta razón, Nixon pudo llegar tan lejos, arrullado por una falsa sensación de seguridad, precisamente porque el perro guardián sólo ladró cuando el presidente empezó a amenazar a los privilegiados.

Idénticas lecciones se desprenden de los escándalos Irán-contra y de la reacción de los medios de comunicación ante ellos.[4] Saltó el

3. Los casos de coste difuso incluirían los multimillonarios desembolsos soportados por los contribuyentes para financiar las operaciones secretas de la CIA y la subvención de regímenes clientes, el desmesurado coste del imperio y de la carrera armamentista, los enormes timos perpetrados por el conjunto de militares e industriales que ofrecen armas innecesarias a precios exagerados, y las recompensas para los colaboradores de las campañas electorales en forma de legislación tributaria favorable y otros incentivos (por ejemplo, las desgravaciones que siguieron a la elección de Reagan en 1981 y el aumento del precio de la leche decretado por Nixon inmediatamente después de que el grupo de presión constituido por el sector lácteo hiciera substanciosos donativos al Partido Republicano).

4. De hecho, los escándalos e ilegalidades detallados por la Tower Commission y las investigaciones del Congreso eran bien conocidos antes de estas «revelaciones» del *establishment*, pero eran suprimibles; véase Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1988.

escándalo cuando se percataron de que la administración Reagan había violado las prerrogativas del Congreso durante el asunto Irán-contra, pero no cuando rechazó con desprecio la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, según el cual los Estados Unidos estaban involucrados en el «uso ilegal de la fuerza» y en la violación de tratados, es decir, en la violación de las leyes supremas del país y del derecho internacional consuetudinario, en su ataque contra Nicaragua. El mecenazgo y el apoyo del Estado del terror que ha costado unas doscientas mil vidas en América Central durante la década anterior no fueron objeto de interpelaciones parlamentarias o de la preocupación de los medios de comunicación. Estas acciones fueron realizadas de acuerdo con el consenso de la elite, y recibieron el continuo apoyo de los medios, como ya hemos visto al examinar el destino de las víctimas dignas e indignas de atención y el tratamiento de las elecciones en los estados clientes y errantes.[5]

Asimismo, en el caso de Vietnam, incluso quienes condenaron a los medios por su supuesta postura adversa reconocieron que, por lo general, casi todos ellos habían apoyado la política de los Estados Unidos *hasta el momento* en que gran número de tropas estadounidenses se vieron envueltas en la «intervención» en Vietnam del Sur, cuando las víctimas eran ya numerosísimas y se habían gastado enormes sumas de dólares y empezaban a surgir las protestas de las elites que veían amenazados sus intereses. Sólo entonces algunos elementos de los medios de comunicación emprendieron cualificadas y nuevas valoraciones, aplicando la relación «coste-beneficio». Pero durante el período de creciente implicación de la que tan difícil fue librarse, el perro guardián animaba en realidad al ladrón para que se sintiese como en su casa en un lejano país, y para que bombardease y destruyese sin medida.

En resumen, los mismos ejemplos que se ofrecen para alabar a los medios de comunicación por su independencia, o para criticar su celo excesivo, ilustran exactamente lo contrario. A diferencia de la imagen habitual de una «prensa adversaria» que ataca enfervorizadamente a un conmovedor gigante ejecutivo, estos medios de comunicación (con su falta de interés, de celo investigador, y de

5. Véase también el prefacio. Sobre la persistencia del consenso de la elite, incluidos los medios de comunicación, durante el período de la vista del caso Irán-contra y los meses posteriores, véase Chomsky, *Culture of Terrorism*.

noticias básicas informando de la acumulación de ilegalidades de la rama ejecutiva), han permitido con regularidad, e incluso *alentado*, violaciones aún mayores de la ley, cuya expresión última cuando los intereses de la elite estaban ya amenazados se ofrecen como una demostración del servicio de los medios de comunicación «en nombre del Estado». Estas observaciones refuerzan las conclusiones que hemos documentado a lo largo de esta obra.

Algunos críticos consideran insuficiente el nivel de subordinación a la autoridad del Estado que se observa entre los medios de comunicación. Hemos comentado algunos ejemplos de ello. Así, la Freedom House y otros que se preocupan por proteger la autoridad del Estado del intruso público, condenan a los medios por su falta de suficiente entusiasmo a la hora de apoyar las cruzadas oficiales: incluso el limitado desafío a la autoridad establecida durante la guerra de Vietnam y el período Watergate despertó preocupación por el excesivo poder de los medios de comunicación. Muy a menudo, la leve apertura que ocasionalmente se concede para disentir se considera demasiado peligrosa. Esta percepción adopta algunas veces la forma de una visión paranoide del poder de la izquierda que lo arrastra todo a su paso: por ejemplo, el alegato de Claire Sterling y de otros que dominaban la cobertura informativa de los medios de comunicación sobre la conexión búlgara, según el cual su voz apenas se oía debido al estrépito de la propaganda soviética. Un caso aún más sorprendente es la fantasía de Aikman-Shawcross, impacientemente repetida por muchos otros, acerca del «silenciamiento» de los medios de comunicación internacionales y de los gobiernos por parte de la izquierda durante la era de Pol Pot. En realidad, se produjo un enorme coro de protestas por las atrocidades de los Khmer rojos, que alcanzó un extraordinario nivel de engaño y fraude. La importancia de estos hechos, y del presunto «silencio» impuesto por la izquierda, queda realzada por el contraste con el silencio real con respecto a atrocidades comparables ocurridas en Timor durante la misma época, y las evasivas y silencios durante la primera fase de «la década del genocidio», por mencionar dos casos en los que los Estados Unidos eran el agente responsable y las protestas hubiesen podido surtir efecto a la hora de disminuir o poner fin a esas atrocidades a gran escala.

Un modelo de propaganda ofrece una pronta explicación de este tratamiento dicotomizado, por lo demás bastante característico.

Las atrocidades de los Khmer rojos podían atribuirse al enemigo comunista, poniendo de relieve valiosos argumentos propagandísticos, si bien no se podía hacer (ni tamposo se propuso) nada en favor de las víctimas camboyanas. La imagen de los monstruos comunistas resultaría también de utilidad para la posterior participación estadounidense en el terror y en la violencia, como en sus cruzadas en América Central emprendidas inmediatamente después. En El Salvador, los Estados Unidos apoyaron a la criminal Junta en su lucha contra lo que fue calificado de «la izquierda de Pol Pot», mientras Jeane Kirkpatrick reflexionaba oscuramente sobre la amenaza a El Salvador de «las bien pertrechadas guerrillas, cuyo fanatismo y violencia recuerdan a algunos observadores los de Pol Pot», inmediatamente después de que el arzobispo hubiese denunciado a los miembros de la Junta, amigos de Kirkpatrick, por llevar a cabo una «guerra de exterminación y genocidio contra la indefensa población civil».[6] Algunos son más circunspectos; por ejemplo, William Buckley, que comentaba que «los sandinistas han condenado a su pueblo al genocidio» y siguen claramente la línea de Pol Pot, si bien aún no habían alcanzado su nivel.[7] La utilidad de la demostración de condena por las atrocidades de Pol Pot resulta evidente desde el momento que el destino de estas víctimas dignas fue inmediatamente explotado para justificar la organización por parte de los Estados Unidos de atrocidades que, de hecho, merecen compararse con las de Pol Pot.

Sin embargo, las atrocidades en Timor oriental no tienen esta función utilitaria, antes al contrario. Estas atrocidades fueron co-

6. Lawrence R. Simon y James C. Stephens, Jr., *El Salvador Land Reform 1980-1981*, Impact Audit, Oxfam America, Boston, febrero de 1981, p. 51, donde se menciona al embajador Robert White y al consejero para la reforma agraria Roy Prosterman al referirse a «la izquierda de Pol Pot»; Raymond Bonner, *Weakness and Deceit*, Times Books, Nueva York, 1984, p. 88, donde se menciona al embajador White, y p. 207, donde se menciona al arzobispo Rivera y Damas, sucesor del asesinado obispo Romero. Jeane Kirkpatrick, «U.S. Security and Latin America», *Commentary* (enero de 1981).

7. *Washington Post* (21 de mayo de 1987). El «genocidio» al que se refiere Buckley es «el de los indios misquitos», de los que tal vez murieron varias docenas a manos de los sandinistas en el contexto de los ataques de las fuerzas mercenarias estadounidenses, en un momento en que los militares guatemaltecos apoyados por Estados Unidos estaban exterminando a decenas de miles de indios, aunque para Buckley no estaban cometiendo ningún «genocidio».

metidas por nuestro cliente indonesio, de manera que, evidentemente, los Estados Unidos hubiesen podido actuar para reducirlas o ponerles término. Pero dedicar atención a la invasión indonesia hubiese podido molestar a un aliado leal y hubiese revelado rápidamente el papel crucial de los Estados Unidos, que proporcionaba ayuda militar y apoyo diplomático para la agresión y la carnicería. En una palabra, las noticias sobre Timor oriental no hubiesen sido útiles y, en realidad, hubiesen desconcertado a importantes grupos de poder domésticos. Así pues, los medios de comunicación —y la comunidad intelectual en general—, canalizaron sus benévolos impulsos hacia otro lugar: Camboya, no Timor.

Como hemos subrayado a lo largo de este libro, los medios de comunicación estadounidenses no funcionan a la manera del sistema de propaganda de un Estado totalitario. Por el contrario, permiten —e incluso fomentan— enérgicos debates, críticas y disidencias, en tanto permanezcan fielmente dentro del sistema de presupuestos y principios que constituyen el consenso de la elite, un sistema tan poderoso que puede ser interiorizado en su mayor parte, sin tener conciencia de ello. Nadie dio instrucciones a los medios de comunicación para que se centrasen en Camboya e ignorasen Timor oriental. Naturalmente tendieron a ocuparse de los Khmer rojos y hablaron de ellos con total libertad,[8] al igual que suprimieron con toda naturalidad la información sobre las atrocidades que Indonesia cometía en Timor oriental y la responsabilidad de los Estados Unidos en la agresión y las masacres. Durante este proceso los medios de comunicación no proporcionaron ni los hechos ni los análisis que hubiesen permitido al público entender la cuestión o la base de la política del gobierno con respecto a Camboya y Timor, y de esa manera aseguraron que dicho público no pudiese ejercer una influencia significativa en la decisiones que se estaban tomando. Esto es bastante característico del *verdadero* «propósito social» de los medios de comunicación en los temas que son relevantes para el poder establecido; no «permitiendo al público ejercer un control significativo sobre el proceso político», sino más bien evitando semejante peligro. En estos casos, como en muchos otros, la opinión pública

8. Aunque, tal como hemos señalado, sin ningún reparo en dar credibilidad a suposiciones y rumores útiles, divulgando incluso cuentos considerados falsos desde tiempo antes.

fue dirigida y movilizada desde arriba, mediante los mensajes muy selectivos y las evasivas dadas por los medios de comunicación. En palabras de W. Lance Bennett, analista de medios,

> La opinión pública está expuesta a poderosos y persuasivos mensajes desde arriba y es incapaz de comunicarse significativamente a través de los medios de comunicación en respuesta a esos mensajes ... Los dirigentes han usurpado una enorme cantidad de poder político y han reducido el control popular sobre el sistema político utilizando a los medios de comunicación para generar apoyo, conformidad y una evidente confusión entre la opinión pública.[9]

Aún más significativo para el tema que nos ocupa aquí, es que los medios de comunicación ofrecen por sí mismos su propia e independiente contribución, incluso sin ser «utilizados», en la manera y por las razones que ya hemos comentado. Otro analista de los medios, Ben Bagdikian, señala que la parcialidad institucional de los medios de comunicación privados «no sólo se limita a proteger el sistema corporativo, sino que sustrae a la opinión pública la oportunidad de entender el mundo real».[10]

Un modelo de propaganda tiene cierta credibilidad inicial por lo que se refiere a los supuestos de libre mercado que no son especialmente discutibles. En esencia, los medios de comunicación privados son grandes empresas que venden un producto (lectores y audiencias) a otros negociantes (los anunciantes). Característica de los medios de comunicación nacionales es que se dirigen y sirven a la opinión de las elites, grupos que, por una parte, ofrecen un «perfil» óptimo para los fines de los anunciantes, y, por otra, desempeñan un papel en la toma de decisiones tanto en la esfera pública como en la privada. Estos medios no lograrían satisfacer las necesidades de su audiencia de elite si no presentasen una imagen pasablemente realista del mundo. Pero su «propósito social» exige también que la interpretación que los medios de comunicación dan del mundo, refleje los intereses y las preocupaciones de los vendedores, los compradores y las instituciones gubernamentales y privadas dominadas por estos grupos.

9. W. Lance Bennett, *News: The Politics of Illusion*, 2.ª edición, Longman, Nueva York, 1988, pp. 178-179.

10. Ben Bagdikian, *The Media Monopoly*, Beacon Press, Boston, 1980, p. 10.

Asimismo, un modelo de propaganda nos ayuda a entender cómo el personal de los medios de comunicación se adapta, y es adaptado, a las exigencias del sistema. Dados los imperativos de la organización corporativa y la actuación de los diversos filtros, la conformidad con las necesidades y los intereses de los sectores privilegiados resulta esencial para el éxito. En los medios de comunicación, al igual que en otras grandes instituciones, quienes no muestren los valores y puntos de vista precisos, serán considerados «irresponsables», «ideológicos», o de alguna manera aberrantes, y tenderán a quedar arrinconados. Si bien puede haber un pequeño número de excepciones, el modelo es omnipresente, e imaginable. Quienes se adapten, quizá honestamente, tendrán libertad para expresarse con poco control por parte de los directivos, y podrán afirmar, acertadamente, que no son objeto de ninguna presión para adaptarse. Efectivamente, los medios de comunicación son libres para aquellos que adoptan los principios exigidos por su «propósito social». Puede que algunos sean sencillamente corruptos, y que sirvan de «recaderos» al Estado y otras autoridades, pero no es la norma.[11] Por nuestra experiencia personal sabemos que muchos periodistas son bastante conscientes de la forma en que actúa el sistema, y que utilizan las ocasionales fisuras que éste proporciona para ofrecer informaciones y análisis que se apartan en cierta medida del consenso de la elite, plasmándolas cuidadosamente para que se adapten de manera general a las normas exigidas. Pero a buen seguro este grado de penetración no es muy frecuente, y la norma es más bien

11. Edgar Chamorro, que fue seleccionado por la CIA como portavoz de la contra, describe a Stephen Kinzer del *New York Times* como «un recadero dedicado a construir las historias que encajan en el orden del día de Reagan (un día es la Iglesia, el siguiente los misquitos y otro el sector privado). En las dos últimas semanas he visto al menos ocho artículos de Kinzer que dicen exactamente lo que la Casa Blanca quiere. Kinzer siempre plantea preguntas sobre las intenciones de los sandinistas, sobre si son realmente democráticos, etc. Cuando se analizan sus artículos, te das cuenta de que simplemente reacciona ante lo que está diciendo la Casa Blanca», entrevista, *¡Extra!* (boletín del *FAIR*, Fairness & Accuracy in Reporting), octubre-noviembre de 1987. FAIR es el homólogo liberal e izquierdista de la organización derechista Accuracy in Media, lamentablemente carente de recursos y excluida del debate, a diferencia de la AIM. Sus cartas a los directores a menudo son rechazadas, incluso cuando su exactitud es reconocida en privado; véase la misma fuente para ejemplos.

creer que impera la libertad, sobre todo para aquellos que han interiorizado los valores y los puntos de vista exigidos.

Esta cuestiones revisten cierta importancia. Evidentemente podemos entender por qué los periodistas guatemaltecos no dieron información de las atrocidades de la década de los ochenta; unos cincuenta cadáveres ilustran dramáticamente los costes sufridos por los periodistas independientes por desviarse de la autoridad. Pero explicar por qué los periodistas estadounidenses han evitado estos temas, e incluso han llegado tan lejos como para describir Guatemala como un modelo para Nicaragua (véase p. 197), precisa una mayor explicación, y lo mismo puede decirse de innumerables casos similares, algunos de los cuales hemos analizado con detalle. Un modelo de propaganda ofrece la base para entender este fenómeno omnipresente.

Sin embargo, ningún modelo simple es suficiente para dar cuenta de cada uno de los detalles de un tema tan complejo como la actuación de los medios de comunicación nacionales. A nuestro entender, un modelo de propaganda capta alguna de las características esenciales del proceso, pero no permite analizar diversos matices y efectos secundarios. Es necesario identificar también otros factores. Algunos de ellos entran en conflicto con el «propósito social» de los medios de comunicación, tal como lo describe el modelo de propaganda; otros lo apoyan. En la primera categoría, la humanidad y la integridad profesional de los periodistas les lleva muchas veces en direcciones que son inaceptables en las instituciones ideológicas, y no debemos subestimar la carga psicológica que conlleva suprimir verdades evidentes y mantener las doctrinas requeridas de benevolencia (posiblemente salió mal), error inexplicable, buenas intenciones, inocencia herida, etc., ante abrumadoras evidencias incompatibles con tales premisas patrióticas. Las tensiones que resultan de ello encuentran a veces una limitada expresión, pero por lo general son suprimidas, consciente o inconscientemente, con la ayuda de unos sistemas de creencias que toleran la prosecución de estrechos intereses, sean cuales fueren los hechos.

En la categoría de factores de apoyo nos encontramos, en primer lugar, con el patriotismo elemental, el acuciante deseo de pensar bien de nosotros mismos, de nuestras instituciones y de nuestros dirigentes. Nos consideramos seres fundamentalmente buenos y de-

centes en nuestra vida personal, de manera que nuestras instituciones deben funcionar de acuerdo con el mismo propósito benevolente. Este razonamiento resulta muchas veces persuasivo, aunque es un clarísimo *non sequitur*. La premisa patriótica se refuerza con la creencia de que «nosotros, el pueblo», somos los que gobernamos, principio central del sistema de adoctrinamiento desde la primera infancia, aunque de escaso valor, como evidenciaría rápidamente un análisis del sistema social y político. Existen también ventajas reales en la conformidad que van más allá de las recompensas y privilegios que ésta lleva consigo. Si uno opta por denunciar a Gaddafi, a los sandinistas, a la OLP o a la Unión Soviética, no necesita prueba creíbles para ello. Lo mismo podemos decir si repetimos las doctrinas convencionales sobre nuestra propia sociedad y su comportamiento, a saber, que el gobierno de los Estados Unidos está dedicado a su noble y tradicional compromiso con la democracia y los derechos humanos. Pero un análisis crítico de las instituciones estadounidenses, de la manera en que actúan internamente y de sus operaciones internacionales, debe responder a unos parámetros más elevados; de hecho, se exigen unos parámetros que a menudo no se encuentran siquiera en las ciencias naturales. Uno debe trabajar duramente, producir pruebas creíbles, elaborar razonamientos serios, presentar una documentación exhaustiva, tareas todas ellas que resultan superficiales si uno se mueve dentro del esquema presuposicional del consenso doctrinal. No es sorprendente que pocas personas estén dispuestas a acometer tal esfuerzo, dejando de lado la diferencia entre las recompensas que resultan de la conformidad y los costes de la disidencia franca.

Hay otras consideraciones que tienden a inducir a la obediencia. Un periodista o comentarista que no desee tener que trabajar duramente puede sobrevivir, e incluso ganar respetabilidad, publicando información (oficial o confidencial) procedente de las fuentes habituales; [12] estas oportunidades bien pueden ser negadas a quienes no se contentan con transmitir las interpretaciones de la propaganda del Estado como si ésta fuese la realidad. La estructura técnica de

12. Para informes clásicos, véase Warren Breed, «Social Control in the Newsrooms: A Functional Analysis», *Social Forces* (mayo de 1955), pp. 326-335; Gaye Tuchman, «Objectivity as Strategic Ritual», *American Journal of Sociology* (enero de 1972), pp. 660-670; Jim Sibbison, «Environmental Reporters: Prisoners of Gullibility», *Washington Monthly* (marzo de 1984), pp. 27-35.

los medios de comunicación prácticamente exige la adhesión a los pensamientos convencionales, no otra cosa puede expresarse entre dos anuncios, o en setecientas palabras, sin la apariencia de absurdidad que resulta difícil de evitar cuando se desafían las doctrinas familiares sin oportunidad de desarrollar los hechos o los razonamientos. A este respecto, los medios de comunicación de los Estados Unidos son bastante diferentes de los existentes en la mayoría de democracias industriales, y las consecuencias de ello son visibles en la estrechez de miras de la opinión y los análisis articulados. El crítico debe estar preparado también para enfrentarse a un aparato de difamación contra el cual existen pocos recursos, factor inhibidor de no poca importancia. Existen muchos factores semejantes, relacionados con las características estructurales esenciales sacadas a la luz por el modelo de propaganda, pero aun así dignas de un detallado análisis por sí mismas. El resultado es un poderoso sistema de conformidad inducida ante las necesidades de los privilegios y del poder.

En resumen, los medios de comunicación de masas de los Estados Unidos son instituciones ideológicas efectivas y poderosas, que llevan a cabo una función propagandística de apoyo al sistema mediante su dependencia de las fuerzas del mercado, los supuestos interiorizados y la autocensura, y sin una coerción abierta significativa. Este sistema de propaganda se ha ido haciendo cada vez más eficiente en las décadas recientes, con el desarrollo de las redes nacionales de televisión, la mayor concentración de los medios de comunicación de masas, las presiones de la derecha en la radio y televisión públicas, y el crecimiento en el alcance y sofisticación de las relaciones públicas y el tratamiento de noticias.

Con todo, este sistema no es todopoderoso: el dominio del gobierno y de la elite de los medios de comunicación no ha logrado superar el síndrome de Vietnam y la hostilidad del público ante la intervención directa de los Estados Unidos en la desestibilización y el derrocamiento de gobiernos extranjeros. El esfuerzo masivo de desinformación y propaganda de la era Reagan, que refleja en gran medida el consenso de la elite, ha logrado algunos de sus objetivos principales movilizando el apoyo de los Estados Unidos a los estados del terror (las «democracias incipientes»), mientras satanizaba a los sandinistas y eliminaba del Congreso y de los medios de comunicación toda controversia que fuese más allá del debate táctico sobre

los medios que debían emplearse para retornar a Nicaragua al «estilo centroamericano» y «contener» su «agresividad» al tratar de defenderse de un criminal y destructivo ataque de los Estados Unidos en todos los frentes. Pero no ha logrado obtener el apoyo público siquiera para librar una guerra contra Nicaragua mediante un ejército subsidiario. Dado que los costes de los Estados Unidos aumentaban, y que la guerra por poderes acompañada del embargo y de otras presiones había logrado restaurar «el estilo centroamericano» de miseria y sufrimiento en Nicaragua, así como abortar las prósperas reformas y los proyectos de desarrollo de los primeros años tras el derrocamiento de Somoza, el aliado de Washington, la opinión de las elites cambió también —bastante espectacularmente, en realidad— en el sentido de recurrir a otros métodos, de mejor relación coste-eficacia, para conseguir los fines compartidos.[13] Los fracasos parciales del bien organizado y generalizado esfuerzo de propaganda estatal, y el desarrollo simultáneo de un activo movimiento opositor de base con un acceso muy limitado a los medios de comunicación, resultaron cruciales para eliminar la posibilidad de una abierta invasión estadounidense de Nicaragua y condujeron a que el Estado emprendiera operaciones subterráneas, ilegales y clandestinas que podían ocultarse mejor a la población doméstica, con, de hecho, una considerable complicidad por parte de los medios de comunicación.[14]

Por otra parte, mientras se han producido importantes cambios estructurales en la centralización y fortalecimiento del sistema de propaganda, han surgido fuerzas opuestas con potencial para un acceso mayor. El surgimiento de comunicaciones por cable y por satélite, que inicialmente han sido captadas y dominadas por intereses comerciales, ha debilitado el poder del oligopolio de la red de comunicaciones y conserva potencial para reforzar el acceso de los grupos locales. En los Estados Unidos están ya funcionando unos tres mil canales de acceso público, que ofrecen unas veinte mil horas semanales de programas producidos localmente, existen incluso productores y distribuidores nacionales de programas para acce-

13. Véase Chomsky, en la revista *Z*, marzo de 1988, para una discusión sobre estas tendencias.

14. Para pruebas sobre estas cuestiones, véanse los ejemplos específicos discutidos, *supra*; y para una descripción más amplia, Chomsky, *Culture of Terrorism*, y las fuentes mencionadas.

der a los canales vía satélite (por ejemplo, Deep-Dish Television), así como cientos de proveedores locales, si bien todos ellos deben luchar por su financiación. Las organizaciones populares y de interés público deben reconocer, y tratar de aprovecharse de, las oportunidades organizativas de estos medios.[15] Las emisoras de radio y televisión locales sin ánimo de lucro ofrecen también una oportunidad de acceso directo a los medios de comunicación que en los Estados Unidos ha sido infrautilizada. En Francia, varios grupos locales disponen de su propia emisora de radio. Un caso a destacar es el de la cooperativa progresista Longo Mai, en la Alta Provenza, que tiene una programación de veinticuatro horas al día en su Radio Zinzine, que se ha convertido en una importante institución comunitaria, que ha contribuido a informar y a movilizar a muchos agricultores que anteriormente se encontraban aislados. El valor potencial de la radio no comercial es perceptible en zonas del país en que emisoras como Pacifica Radio ofrecen una visión del mundo, profundidad informativa, y un alcance en la discusión y los debates que generalmente no se encuentra en los principales medios de comunicación. La radio y televisión públicas, pese a que han sufrido graves perjuicios en los años de Reagan, representan también un canal de comunicación alternativo cuya resurrección y mejora debería preocupar seriamente a aquellos que estén interesados en contestar el sistema de propaganda.[16] Hay que oponerse enérgicamente a la continua comercialización de las ondas de propiedad pública. A la larga, un orden político democrático precisa un mayor control y acceso a los medios de comunicación. En las agendas progresistas debe contemplarse una seria discusión de cómo hacerlo, así como la incorporación de reformas fundamentales de los medios de comunicación debe figurar en los programas políticos.[17]

15. La Cable Franchise and Telecommunications Act de 1984 autoriza a las ciudades a exigir acceso público a los canales, pero permite a los empresarios de sistemas de cable dirigir estos canales hacia otros usos si no son bien utilizados. Por consiguiente, la no utilización puede sentar las bases para eliminar el acceso del sector público.

16. Sobre las diferencias entre la televisión pública y la privada en los años de la guerra de Vietnam, véase, Eric Barnow, *The Sponsor*, Oxford University Press, Nueva York, 1978, pp. 62-65.

17. Véanse los programas para Gran Bretaña, en James Curran, Jake Ecclestone, Giles Oakley y Alan Richardson, eds., *Bending Reality: The State of the Media*, Pluto Press, Londres, 1986.

La organización y autoeducación de grupos en la comunidad y en el lugar de trabajo, y el activismo y la articulación de redes de comunicación, siguen siendo los elementos fundamentales para avanzar hacia la democratización de nuestra vida social, así como de cualquier cambio social significativo. Sólo en la medida en que estos avances consigan prosperar, podemos esperar ver unos medios de comunicación libres e independientes.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ABC, 28, 38
ABC-TV, 60
Abrams, Elliott, 57
Abrams, Floyd, 327
Accuracy in Media (AIM), 64-67
Advance Publications, *véase* Newhouse
AFL-CIO, 172
Agca Dossier (Mumcu), 244
Agca, Mehmet Ali: arma usada por, 245, 251, 259; cartas escritas por, 244, 265; como mercenario apolítico, 243-244, 264, 266; como miembro de los «Lobos Grises», 236, 240, 245, 251, 254, 265, 269, 270; como perteneciente a la extrema derecha, 243, 245; confesión de, 239, 246-252, 253, 254, 264, 268-269; encarcelamiento de, 246-247, 249, 266-270; entrenamiento de, 249-252, 266-271; «guiños» a los asociados, 247; influencia de la CIA en, 246, 258, 259; juicio de, 253, 265, 270; negociación hecha por, 246, 251; pago de, 251; publicidad deseada por, 248; reclutamiento y adiestramiento soviético de, 238, 243, 247, 254, 256, 265, 266
Aikman, David, 328, 346
Air Force Journal International, 53
Alcina, Jaime, 92
Alemán, Colindres, 124
Alsop, Joseph, 274
Allman, T. D., 277, 279
American Enterprise Institute, 39
American Friends Service Committee (AFSC), 53-54
American Legal Foundation, 64
Americas Watch (AW), 133, 140-143, 145, 177, 182, 191-192, 195
Amnistía Internacional (AI), 133, 135, 137, 138, 139-142, 195, 333-334
Andersen, Robin K., 100
Anderson, Jack, 318
Andronov, Iona, 260
ANSESAL, 50
Antonov, Sergei, 250-251, 255, 260, 269
AP, 101, 138, 280
Arbenz, Jacobo, 129, 131
ARENA, partido, 108
Arévalo, Juan, 130
Armed Forces Journal, 53
Ascoli Piceno, prisión, 250
ASEAN, 335-336
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), 144-145
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), 160, 162, 168, 169, 180, 184, 201, 203, 205, 207-208, 210, 211, 215, 219-220, 229, 231, 232
Asociación Internacional de Juristas Democráticos para los Derechos Humanos, 167, 200
audiencias: «alto nivel» *vs.* «nivel inferior», 44; calidad de, 45; «disposición compradora», 49; «flujo» de los niveles de, 50; poder adquisitivo de, 46

Bagdikian, Ben, 26, 349
Banco Mundial, 162

Bangkok World, 280
Barnouw, Erik, 48, 50
«Barrel Roll», operación, 274
Barron, John, 60, 77, 318, 335
Becklund, Laurie, 108, 109
Beecher, William, 301
Bennett, W. Lance, 349
Big Story (Braestrup), 67
«Billygate», asunto, 263, 270
Bonner, Raymond, 98, 116, 176
Bosch, Juan, 69
Bosworth, Stephen, 134-135
Braestrup, Peter, 67
Breznev, Leonid, 265
Brzezinski, Zbigniew, 258, 264
Buckley, William F., Jr., 347
Buchanan, Patrick, 65
Bush, George, 237
Bushnell, John, 97, 100
Byrdy, Maria, 92

Cámara de Comercio de los Estados Unidos, 54, 59
«Cambodia, Holocaust and Modern Conscience» (Shawcross), 329-337
«Cambodia Forgotten», 313
Cambodia Year Zero (Ponchaud), 301
Camboya, Centro de Documentación de, 292
Camboya: acuerdo de Ginebra sobre (1954), 272, 296; «atrocidades comunistas» en, 288, 291, 311, 315-322, 325, 329-337, 339, 346-348; atrocidades en Timor *vs.*, 322, 327, 332, 346, 348; «autogenocidio» en, 38; bajas, víctimas, 289-290, 309-310, 313, 316, 320, 331; bombardeo estadounidense de, 283, 287, 291, 298, 300-315, 331; budismo en, 307; cobertura informativa de, 278, 284-289, 294, 298-300, 302, 304, 306-315, 318-339, 346-349; como «invisible», 302, 304; como Kampuchea Democrática (KD), 284, 289, 292, 318, 326, 329, 330, 338; como «país apacible», 282, 294, 306, 318, 337; como república Khmer, 292; devastación de, 228, 301, 305; distorsión de la información sobre, 284-289, 307, 308-312, 318-321; época de Sihanouk, 292, 294-297, 300-301, 302, 307, 324; escepticismo ante la cobertura informativa, 329-333, 338; especialistas del Departamento de Estado en, 316, 320, 323, 330, 337; estudio demográfico de la CIA de, 285, 289, 293, 296; fase I del genocidio en, 283, 284, 289, 292, 300-315, 316, 325, 332, 335, 337, 339; fase II del genocidio en, 284, 289, 292, 314-322, 325, 329, 330, 332, 337, 339; fase III del genocidio en, 284-288, 322-339; fuerzas de los Khmer rojos en, 281, 283, 284, 291, 295, 297, 306, 308-313, 315-339, 346-348; fuerzas del Khmer Serei en, 297; genocidio en, 283-339, 343; «gente de base» *vs.* «nueva gente» en, 291, 293; guerra civil en, 283, 308-313; hambre en, 286, 290; historia de violencia en, 294-299, 306-309, 314; incursiones estadounidenses en, 296-299, 301, 303; invasión francesa de, 294-295, 339; invasión israelí del Líbano comparada con, 326; invasión vietnamita de, 284, 294, 314, 318, 319, 321, 324, 326, 327, 332, 335-336; investigación de las condiciones en, 292-293, 297-298; modelo de propaganda y cobertura de, 287, 316-318, 321, 327, 331, 333-334, 339; refugiados en, 288, 295, 304, 305, 308, 311, 316, 320, 322, 331, 332, 334, 337; régimen de Pol Pot, 75, 137, 284, 285, 286, 292, 293, 295, 315-322, 325, 327, 328, 329, 335-336, 347; relaciones de la administración Reagan con, 294, 323, 325, 336; responsabilidad estadounidense en el genocidio de, 284-294, 295, 312-313, 321, 324-327, 337-339, 346, 348; «silencio» de los medios de comunicación sobre, 327-328, 332, 346; trabajos previos de autores sobre, 317-318, 329-330; «versión total estándar» (VTE) de, 318-321, 337; víctimas indignas *vs.* víctimas dignas en, 284, 325; vista del caso Watergate y, 287, 302, 344

Capital Cities (ABC), 28
Capital Legal Foundation, 64
Carney, Timothy, 305
Carranza, Nicolás, 99, 109
Carrigan, Ana, 128
Carter, Jimmy, 95, 97, 104, 113, 125, 133, 327
Casanova, Eugenio Vides, 109, 122, 128, 129
Casanova, Óscar Edgardo, 122, 128
Castro, Fidel, 299
Catli, Abdullah, 244, 265
caza de rojos (1919-1920), 74
CBS, 28, 32, 45, 64
CBS News, cobertura informativa de: Camboya, 298; el asesinato de religiosas estadounidenses, 117, 122; de las elecciones en El Salvador, 206; de las elecciones en Guatemala, 193, 194; de las elecciones en Nicaragua, 214, 217, 218, 227, 229; de las víctimas latinoamericanas, 91, 95; de los asesinatos en Guatemala, 149, 150; del asesinato de Popieluszko, 82, 86, 89; del asesinato de Romero, 106; complot para asesinar al papa, 239, 257, 262, 267
Celik, Oral, 269
Center for Defense Information, 57
Center for Media and Public Affairs, 65
Center for Strategic and International Studies (CSIS), 60, 258
Cerezo, Vinicio, 152, 177, 178-179, 190, 197
CIA (Central Intelligence Agency), 66, 212; en el complot para asesinar al papa, 246, 258, 259; en Laos, 275, 278, 280, 281; estudio demográfico de Camboya hecho por, 285, 289, 293, 297
Ciudad de Guatemala, acuerdo de paz de (1987), 216
Clarke, Maura, 93, 112-129
cobertura informativa: antecedentes de, 151; comunicados y, 50-51; credibilidad, 56; desviación de, 58, 75, 138; facilidades para, 55-56; fuentes de, 22, 26, 50-62; «grandes noticias» en, 71, 95; local, 26, 51; «objetiva», 22, 51, 151, 308; utilidad de, 75, 77
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, 144
Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, 177
Comisión Investigadora Finlandesa, 283-284, 289, 292, 305
Comisión Nacional para los Derechos Humanos, 145
Comisión para los Derechos Humanos de Guatemala, 153, 177, 194
Comité Coordinador Democrático, 207
Comité de Familiares de los Desaparecidos, 145
Comité de Información Pública, 58
Comité del Congreso para Asuntos Exteriores, 114
«compromiso constructivo», 134-136
Conferencia Episcopal de Guatemala, 193
Conferencias Episcopales de la Iglesia Católica de Escocia y de Inglaterra-País de Gales, 166
Congreso Nacional Africano, 262
Contadora, propuestas de paz de, 229
Convención Americana, 167
Crónica del pueblo, 169, 186, 217
Crosette, Bárbara, 324
Cruz, Arturo, 180, 198, 202, 212, 215, 218, 219
Cry of the People (Lernoux), 82
Curiel, Henry, 262
Curran, James, 24, 43, 45
Cutolo, Raffaelle, 250
Cypher, Michael Jerome, 91-92

Chanda, Nayan, 280, 292, 320, 324
Chandler, David, 291
Chantrea, ataque a, 298
Chávez, Lidia, 117
Chile, 76
Chomsky, Noam, 317, 329-331, 335
Chrak Kranh, masacre de, 298
Christian Science Monitor, 239, 257

D'Aubuisson, Roberto, 99, 107, 108-112, 175

D'Escoto, Miguel, 229
Daily Herald, 45
Daix, Pierre, 70, 71
Decornoy, Jacques, 275-276
Deep-Dish Television, 355
delegación interparlamentaria irlandesa, 201, 203, 205, 207, 211, 219, 231
Delwitt, Pascal, 70
demócrata, partido, 343
Deng Xiaoping, 325, 336
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 57
Departamento de Estado de los Estados Unidos: como fuente de información, 50-51, 56, 135, 139, 141-143, 191, 192, 201, 214, 230, 258, 292; especialistas en Camboya de, 316, 320, 322, 330, 337
derechos humanos, 73, 133-137, 138-145, 352
Dewaele, Jean-Michel, 70
Diem, Ngo Dinh, 296
Dinges, John, 121-122, 129
«Disappearences»: A Workbook, 140
«Disappearences» ... under the Goverment of General Óscar Humberto Mejía Víctores, 140
disidentes soviéticos, 75, 144
Dith Pran, 324
Doherty, William, 181
Domínguez, Djalmi, 165
Donovan, Jean, 93, 112-129
Dow Jones, 28
Dreier, Peter, 41
Duarte, José Napoleón, 98, 102, 106, 112, 119, 121, 126, 163, 175-176, 178, 211
Dudman, Richard, 303

Ecevit, Bulent, 261
Economist, 47, 327
El Salvador: censura en, 94, 218; cobertura informativa de, 67, 97-104, 111-112, 185-188, 192, 197, 209, 211, 221-224, 231; como Estado cliente, 113, 126, 128, 187; como Estado contrainsurgente, 161; condiciones electorales básicas en, 161-182, 186, 188, 203, 220-221, 232-234; «democracia» en, 175-176, 233; ejército de, 65; elecciones en (1984, 1982), 66, 154, 158, 165, 174, 185-188, 192, 197, 200, 201, 204-206, 207, 211, 222-223, 229; escuadrones de la muerte en, 99, 106, 112, 122, 169, 176, 181, 218, 220; estado de sitio en, 164, 186; grupos extremistas en, 99, 101-103, 104, 106, 108, 120; Guardia Nacional de, 84, 109, 113-129; junta de, 97-104, 105, 111, 113, 176, 347; legitimación de las elecciones en, 231; libertad de expresión y de reunión, 164-165, 169, 186; libertad de prensa en, 169, 172, 186, 217, 226; matanza en, 176; medidas coercitivas en, 183, 208, 231; mitos oficiales acerca de, 111, 112; modelo de propaganda y cobertura informativa de, 76, 143-144, 186-187, 188; movimiento guerrillero en, 174, 175, 185-187, 206, 211, 232; obligatoriedad del voto en, 183, 186, 205, 232; observadores extranjeros en las elecciones de, 200; organización sindical en, 172, 174; participación electoral en, 185, 188, 206; partidos políticos en, 174-176, 180, 187-188, 211, 213, 218, 220, 227; paz como problema en, 158-159, 188, 193; periodistas asesinados en, 169, 186, 217, 221; política de la administración Reagan en, 67, 205-206; «reformas» en, 98-103, 111, 112; requerimiento de la cédula de identificación en, 183, 204, 232; rondas de enganche al ejército en, 218; subversión estadounidense en, 107, 112, 133, 162, 163, 188, 347; «temerosa pasividad» en, 168, 181, 183, 208; terrorismo de Estado en, 67, 156, 161, 164, 181, 183, 211, 218, 234, 321; urnas usadas en, 205-206; víctimas religiosas en, 84, 85, 90, 92-129; violación de los derechos humanos en, 144; «votos contra balas», campaña en, 175, 188

elecciones en el Tercer Mundo, 154-234; apoyo militar a, 156-159; condiciones básicas para, 158-182; de estados censurables, 159-160; democracia y, 156, 159, 232; «demostrativas», 154, 192, 202, 230; dicotomía en la cobertura de, 154; doble pensamiento en la cobertura de, 160, 218; función de relaciones públicas de, 154, 155, 156; legitimación por, 154, 155, 190; limpieza de, 157, 230; literatura y, 204; manipulación de símbolos en, 156; mecanismos electorales, 204-205; modelo de propaganda y, 154, 155-160, 183, 230; observadores oficiales en, 156, 230-231; oposición rebelde a, 156, 159; orden del día de los temas, 155; papel de los Estados Unidos en, 159; parcialidad de los medios de comunicación, 221-227, 264; participación electoral, 157, 159, 182; propósito de, 154, 155, 156, 157, 158; significado de, 159-160, 195; temas «fuera del orden del día» de, 158, 195, 208, 218, 221; *véase también* países individuales
Elterman, Howard, 278, 302, 304
Enders, Thomas, 141-143
Espionaje, Ley de (1917), 171
Evan, William, 46
Everingham, John, 280

Fall, Bernard, 274
Far Eastern Economic Review, 292, 324
FBI (Federal Bureau of Investigation), 343
Feulner, Edwin, 59
Financial Times, 45
Fishman, Mark, 51
Ford, Ita, 93, 112-129
France Presse, Agence, 277
Frankel, Max, 298-299
Freedman, Samuel, 314
Freedom House, 293; como brazo propagandístico del gobierno y de la derecha internacional, 64, 66-67, 318, 346
Fulbright, J. W., 52

Gálvez Galindo, Carlos, 138
Gannett, 28
García, Guillermo, 121, 183, 186
García, Lucas, 133, 135, 173, 189
García, Nineth de, 152
General Accounting Office de los Estados Unidos, 303
General Corp., 28
General Electric, 28, 36, 39, 41
Gleijeses, Piero, 131
Godoy de Cuevas, María Rosario, 93, 148-152
Gómez, Leonel, 168, 181
Gómez Calito, Héctor, 148-152
Grande, Rutilio, 93
Grave New World (Ledeen), 262
Greenhouse, Steve, 153
Griffith, William, 262
Grillmaier, Horst, 245
Group W, 28, 36
Grupo de Derechos Humanos del Parlamento británico, 145, 166, 195
Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), 140, 143-153, 172, 179
Gruson, Lindsey, 112
Guardian, 45
Guatemala: «aldeas modelo» en, 166, 182, 190; anticomunismo en, 131, 136; asesinato de Popieluszko *vs.* asesinatos en, 137, 148, 150, 151; campesinos de, 177-178; censura en, 170; clima de terror en, 182, 196, 208; cobertura informativa de, 135, 137-143, 149-152, 188-198, 209, 211, 231, 351; como Estado cliente, 76, 129, 133, 146; como Estado contrainsurgente, 132, 136, 161-163, 179; condiciones electorales básicas en, 161-182, 190, 193-198, 203, 232-234; constitución de, 196; «democracia» en, 130, 134, 177-179, 189-190, 192, 196, 197-198, 233; demostraciones públicas en, 167; «desapariciones» en, 132, 135, 144-153, 165, 168; dicotomía en la cobertura informativa, 139; disidencia en, 194; elecciones en (1984-1985), 140, 154, 167, 174, 177, 188-198, 200, 202, 205, 206, 211, 231; escuadrones de la muerte en, 132, 135,

138, 143, 152, 218; excusas en la cobertura informativa, 135-141, 149-151, 189, 191-192; Grupos de Apoyo Mutuo suprimidos en, 140, 143-153, 172, 179; grupos en pro de los derechos humanos, 133-134, 135, 137, 138, 139-143; grupos extremistas en, 138; «imagen» internacional de, 189; intervención estadounidense en, 70, 129-137, 162, 163; legitimación de las elecciones, 190, 197, 231; libertad de expresión y de reunión, 165-168, 169; libertad de prensa en, 170, 171-172, 195; limitación de la judicatura, 195; medidas coercitivas en, 184, 195, 208, 210, 231; modelo de propaganda y cobertura informativa de, 129, 138, 149, 189, 196-197; movimientos guerrilleros en, 177, 190-191, 197-198, 233; obligatoriedad del voto en, 184, 232; observadores oficiales estadounidenses en las elecciones de, 192, 199; organización sindical en, 172, 174; participación electoral en, 202; partidos políticos en, 177-179, 191, 192, 197-198, 205, 211; periodistas asesinados en, 170; polos de desarrollo, 167, 179; reformas políticas en, 130, 168, 179; régimen militar en, 147, 149, 151, 165, 179, 189-190, 192, 195, 198; relaciones de la administración Carter con, 133; relaciones de la administración Reagan con, 133-136, 139, 149, 153, 189, 191; sistema de patrullas civiles, 166-167, 179, 190, 193, 195; terrorismo de Estado en, 76, 129, 131-136, 139, 155, 161, 165-166, 172, 179, 182, 191, 195, 196, 210, 211, 234, 321; transferencia de poder en, 193; uso de la tortura en, 137, 146, 165; víctimas religiosas en 84, 129-143; violación de los derechos humanos en, 133-137, 139, 140-143, 167, 177, 179, 195

Guatemala Revised: How the Reagan Administration Finds «Improvements» in Human Rights in Guatemala, 141

Gulf + Western, 47
Gutiérrez, Jaime Abdul, 99, 174
Gwertzman, Bernard, 74, 255

Haig, Alexander, 114, 270
Haití, 233
Haney, Walter, 279
Hawk, David, 324, 327, 333, 334
Hearst, 28
Heng Samrin, 285, 286
Henze, Paul, 238, 239, 243, 244, 254, 256, 257, 259, 261, 264
Herman, Edward S., 317, 329-331, 335
Hicho, señor, 145
Hideo de Aquino, Herlindo, 152
Hinton, Deane, 121, 125
Holbrooke, Richard, 324
Hughes, John, 135, 201
Human Rights in Guatemala: No Neutrals Allowed, 143

Ibarra, Antonio, 124
Ieng Sary, 323
«imparcialidad, doctrina de la», 32, 64
In These Times, 267
Independiente, 169, 186, 217
Indochina, guerras de, *véase* Camboya; Laos; Vietnam; Vietnam, guerra de
Indonesia, 321, 322
Informe de la Comisión Parlamentaria sobre la Logia Masónica P-2, 266-267
Informe sobre los derechos humanos por países (1981), 135
International Telephone and Telegraph, 39
Irán-contra, escándalos, 344
Irvine, Reed, 67
ITT, *véase* International Telephone and Telegraph

Javits, Jacob, 281
Johnson, administración: invasión de la República Dominicana por, 69
Johnstone, Diana, 267

Jonathan Institute, 237, 258
Juan Pablo II, papa, intento de asesinato de, *véase* papa, intento de asesinar
juristas democráticos, 167, 200

KAL 007, derribo, 74, 76
Kalb, Marvin, 239, 240, 256, 264
Kamm, Henry, 255, 318
Kaufman, Michael, 89
Kazel, Dorothy, 93, 122-129
Kennedy School of Government, 57
Kennedy, John F., 69, 70
Kiernan, Ben, 286, 292, 337
Killing Fields, The, 311, 314, 324
Kinzer, Stephen, 149-152, 192, 193, 195-197, 200, 202, 205, 207, 210, 214, 215
Kirkpatrik, Jeane, 114, 118, 347
Kissinger, Henry, 58
Knight-Ridder, 28, 38
Kriegel, Annie, 70, 71
Krol, John, 265

Laborista, Partido, 25, 45
Lacouture, Jean, 319
Lagorio, Lelio, 250
Laos: acuerdo político en, 272, 275; acuerdos de Ginebra sobre (1954), 272; ayuda militar estadounidense, 272, 274; bombardeo estadounidense de, 273-283, 302, 304; cobertura informativa de, 274-283, 302, 304; conferencia de Ginebra (1962) sobre, 273; control comunista de, 273, 274, 280, 283; «guerra clandestina» estadounidense en, 275, 277, 279, 282-283; hombres de la tribu Hmong en, 280, 282; invasión vietnamita de, 282; Llanura de los Jarros en, 278-281, 313; modelo de propaganda y cobertura informativa de, 282-283; operaciones de la CIA en, 275, 278, 280, 281; refugiados en, 279, 281, 313; ruta Ho Chi Minh en, 275, 277; víctimas en, 282
LASA, *véase* Asociación de Estudios Latinoamericanos
Le Phnom, hotel, 309, 311
Ledeen, Michael, 67, 256-258, 261, 262-263, 270
Leiken, Robert, 71, 198
Lernoux, Penny, 82, 90
Levitsky, Melvyn, 135
Lewis, Anthony, 340, 342, 344
Lewis, George, 43
Líbano, invasión israelí del, 326
libio, derribo de un avión, 74
Lichter, Linda y Robert, 65
«Lobos Grises», 237, 240, 243, 251, 254, 265, 269, 270
Lon Nol, 295, 305
Longo Mai, 355
Los Angeles Times, 28, 121

Majano, Adolfo, 111
Maldonado, Meyer, 146
Mao Tse Tung, 61
maoísmo, 292
Martella, Ilario, 247, 249, 251, 254, 257, 264, 268, 269, 270
Martínez, Dagoberto, 124, 125
Massera, José Luis, 73
Mayorga, Román, 100
McCarthy, era, 62, 63, 71, 75
McCoy, Thomas, 281
McGovern, George, 321
McGraw-Hill, 28
McNeil-Lehrer News Hour, 60, 61, 243, 257, 262
Media Institute, 64
Media Monitor, 65
medios de comunicación: acciones de, 31, 37; adaptación del personal de, 350-353; «afinidad burocrática» de, 51; agenda patriótica de, 26, 152, 158, 185, 192, 196, 207, 221, 227, 229, 342, 345, 352; alternativa, 24, 42-47, 53-55, 302, 354-355; anticomunismo como ideología de, 22, 64, 68-71, 79; apoyo político de, 39, 40-45, 48; audiencias de, 44-50; autorizaciones para, 40; calidad de cobertura informativa en, 78-79; como «democráticos», 46, 341, 352; como «liberales», 67, 341-342,

353; conformismo en, 350-353; «contramedidas» para, 22, 63-68, 72, 74, 79, 143; control corporativo de, 29-37, 54, 58-60, 63, 64-65, 67-68, 72, 349, 350; control financiero de, 33-39; datos financieros sobre, 30; debates limitados en, 57-62; defensores de, 135-141; dirección, manejo de, 22, 40-41, 58, 63-68; discriminación en, 47; en el mercado libre, 24, 25, 32, 43-44, 49, 58; estratos de, 26-27; exentos de regulaciones, 32; «expertos» proveedores de, 22, 230; familias propietarias de, 31; fuentes de información para, 21, 26, 50-62, 71-80, 142, 192, 352; ideología conservadora de, 22, 48, 60-62, 64-71; influencia del gobierno sobre, 21-22, 41-42, 51-55, 71-80, 142-143, 192, 196, 352, 354; influencia empresarial sobre, 22, 38-42, 54-56, 64; información de política exterior en, 64-65, 67, 72; instituciones ideológicas, 351-353; intereses no relacionados con, 39-40; inversores institucionales de, 37-38; juntas directivas de, 36, 41; marginación de la disidencia por, 22, 56-62, 70, 71, 78; mecanismos de control de, 21, 34-35, 36, 68-71; participación en el mercado y, 44; «postura adversa» de, 333, 345; programación de, 32, 47, 48-49; propiedad cruzada de, 32-39; propiedad de, 22, 24-42; propósito social de, 340-341, 348, 351; publicidad y, 22, 32, 42-50, 63, 72, 349; rentabilidad de, 28-29, 32; situación económica de, 43, 46, 50, 51; umbral de la separación en, 40, 56, 72; víctimas indignas *vs.* víctimas dignas, como objeto de cobertura informativa, 72-73, 78-79, 81-153, 234, 284-285; *véase también* cobertura informativa; propaganda, modelo de; televisión
Meislin, Richard, 185, 205
Mejía Víctores, Óscar Humberto, 140, 146, 147, 151, 172, 189, 191, 195
Melrose, Diana, 162
Meyer, Charles, 294
Miami Herald, 106, 176
Mobil Oil, 54
Mohr, Charles, 277
Molina, Arturo Armando, 94
Monasterio, Augusto Ramírez, 83
Monde, Le, 275
Montenegro, Julio Méndez, 190
Montufar, Miguel Ángel, 83
Moss, Robert, 237
Moynihan, Daniel Patrick, 153
Mumcu, Ugur, 243, 244
«Murder of a Gentle Land» (Barron y Paul), 77
Murdoch, Rupert, 28, 40
Musumeci, Giuseppe, 250

Naciones Unidas, 195, 298
Nation's Business, 54-55
National Council of the Churches of Christ (NCC), 53, 54
National Guardian, 278
National Public Radio, 57
NBC, 28, 36, 39, 48
NBC-TV, 76, 238, 239, 256
Neak Luong, bombardeo de, 311
Neo Lao Hak Sat (NLHS), 273
New Deal, 75
New York Review of Books, 318, 319, 327, 337
New York Times: cobertura informativa de Camboya, 282, 293, 298-299, 304, 309-312, 313, 314, 325, 326; cobertura informativa de Laos, 274, 276, 278, 281; cobertura informativa de las elecciones de El Salvador, 187, 188, 205, 207, 221-224, 226-227; cobertura informativa de las elecciones de Guatemala, 192, 193, 195-197; cobertura informativa de las elecciones de Nicaragua, 188, 199, 202, 205, 207, 212, 217, 220-227, 229, 231, 233; cobertura informativa de las religiosas estadounidenses asesinadas, 115-118, 119, 120, 121; cobertura informativa de las víctimas de Latinoamérica, 90-91, 92-93; cobertura informativa de los asesinatos en El Salvador, 142, 144; cobertura informativa de los asesinatos en

Guatemala, 137-138, 141, 149-152, 153; cobertura informativa del asesinato de Popieluszko, 83, 86, 89, 90-91, 103, 105, 106, 115; cobertura informativa del asesinato de Romero, 96, 100, 101, 102-103, 104, 105, 106, 107, 111; cobertura informativa del complot para asesinar al papa, 76, 239, 255, 257, 260, 262, 263, 267, 270; como fuente de propaganda, 74, 230, 233; como un imperio, 28
New York Times Magazine, 318
Newhouse, 28
News Chronicle, 45
Newsweek: cobertura informativa de Guatemala, 190, 192, 194; cobertura informativa de las elecciones nicaragüenses, 214, 217, 227-228, 231; cobertura informativa de las elecciones salvadoreñas, 206; cobertura informativa de las religiosas estadounidenses asesinadas, 117, 118, 121, 129; cobertura informativa de las víctimas latinoamericanas, 91, 95; cobertura informativa de los asesinatos en Guatemala, 149, 150; cobertura informativa del asesinato de Popieluszko, 82, 86, 89, 91; cobertura informativa del asesinato de Romero, 106; cobertura informativa del complot para asesinar al papa, 239, 253-254, 258, 262, 267, 271; programas extranjeros de, 41; propietario de, 28
Nicaragua: apoyo popular al gobierno de, 162-163, 168-169, 173, 180-181, 203-204, 207, 215, 219; ataques militares estadounidenses a, 70, 161, 171, 234, 354; campaña de desinformación contra, 58, 75, 163, 227-230; censura en, 170, 218; clima político en, 202, 203-204, 208-211; comités de defensa en, 219; como Estado enemigo, 192; como Estado «marxista-leninista», 212, 233; condiciones electorales básicas en, 159-182, 197, 203-204, 220-221, 232-234; contras en, 163, 171, 182, 206-208, 216-217, 219, 229, 234; delegaciones de observadores extranjeros en, 201, 207-208, 211, 216, 219-220, 230-231; deslegitimación de las elecciones en, 198-227, 231; dicotomía en la cobertura informativa de, 220-221; disidentes en, 168, 184; elecciones en (1984), 58, 155, 168, 171, 174, 186, 198-234; envío de los MIG a, 23, 58, 227-231; estado de sitio en, 168; gobierno sandinista de, 162-163, 200, 201, 205, 206, 209, 212, 216, 221, 347, 352, 354; libertad de expresión y de reunión, 168-169, 217-221; libertad de prensa en, 171-172,217-221; «medidas coercitivas», 208-211, 231; modelo de propaganda y cobertura informativa de, 199, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 229, 231, 233-234; obligatoriedad del voto en, 184, 203, 205, 206, 208-211, 219; organización sindical en, 173; parcialidad de los medios de comunicación contra, 163, 192, 198-227, 351; participación electoral, 186, 202, 206-208, 214; partidos políticos en, 180-181, 203, 206, 211-217; propaganda estadounidense en, 163, 227-230; pruebas cuantitativas de la parcialidad de los medios de comunicación contra, 221-227; relaciones de la administración Reagan con, 171, 198, 202, 214, 221, 227, 345, 353; repulsa y apatía en la cobertura informativa de, 201-204; servicio militar en, 218; sistema electoral proporcional, 205; subversión estadounidense en, 155, 207, 214; suministro de armas por, 58; terrorismo de Estado, ausencia del, en, 182, 184; urnas usadas en, 205, 210; violaciones de los derechos humanos en, 211, 347; voto secreto en, 203, 205, 206, 209
Nichols, John S., 171
Nielsen, índice, 46
Nixon, Richard M., 302, 313, 342, 344

O'Brien, Conor Cruise, 327
Observer, 45

Oficina en Washington para América Latina, 141, 167
ORDEN, 99, 217
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 239, 241
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), 352
Ortega, Daniel, 197, 209, 216, 219
Osborne, Milton, 291
OTAN, *véase* Organización del Tratado del Atlántico Norte
Oxfam, 162, 173
Oxfam América, 173
Oymen, Orsen, 249, 269

Pacific News Service, 121
Pacifica Radio, 355
Pacto de Varsovia, países del, 238
Paley, William, 63
Pandico, Giovanni, 250, 268
Panteras Negras, 343
papa, intento de asesinar al, 235-271; acusaciones plausibles y, 240-241, 245-246, 247, 254; administración Reagan, puntos de vista de la, sobre, 247, 255, 258, 259; amenaza de dimisión del papa y, 265; anticomunismo y, 237; artículos no críticos con, 252-256, 271; campaña de desinformación sobre, 249, 253, 262, 271; cobertura informativa de, 249-250, 251-271; como acto terrorista, 247, 248, 258; como un complot búlgaro y de la KGB, 76, 235-271, 346; defensas en la cobertura informativa de, 262; distensión y, 259; «expertos» en, 57, 60, 254, 256-263, 269-270; implicaciones de la Mafia en, 250, 269; investigación italiana de, 247, 248-252, 254, 266-270; mecanismos de réplicas críticas y, 258; modelo alternativo, 235, 246-252, 255, 264, 266, 271; modelo de propaganda y cobertura informativa de, 74, 76, 235, 247, 253-254, 258, 260, 263-271; motivos para, 239-240, 241-246, 256, 265; movimiento Solidaridad y, 240, 242, 245; nuevas fuentes en, 235-238; papel de la CIA en, 246, 258, 259; parcialidad de las fuentes de información, 256-263; política turca y, 241, 243-244, 254; presunción ideológica de, 237, 240-241, 244, 255; pruebas en, 240, 242, 255, 256, 262, 270; servicios de inteligencia implicados en, 238, 266-270; Sterling-Henze-Kalb (SHK), modelo, del, 238-246; «temas fuera del orden del día» en, 263-271; *véase también* Agca, Mehmet Alí
Papeles del Pentágono, 274, 297, 340
París, Acuerdos de Paz de (1972): cobertura informativa de, 342
Parsons, Graham, 272, 273
Pathet Lao, 273, 275, 277, 279
Paul, Anthony, 77, 318, 335
Pazienza, Francesco, 250, 263, 267, 269-270
Penados del Barrio, Próspero, 144, 146
Pentágono, 50, 53, 57
Pérez Nieto, 125
«Perfil de la Audiencia Cliente» (PAC), 45
periódicos: artículos de opinión en, 67, 79; británicos, 24, 43, 45; clases trabajadoras, 24, 43-47; costes de capital de, 25, 43; en libre mercado, 24, 42-43; independencia de, 340-356; publicidad para, 43-46; televisión *vs.*, 38; tirada de, 25, 44; *véase también* periódicos específicos
Philadelphia Inquirer, 257, 268
Phoumi Nosavan, 273
Pike, Douglas, 293, 330
Pilger, John, 334
Pilla, Anthony M., 118
«Plot to Kill the Pope, The» (Sterling), 77, 238, 239, 245, 253, 258
Polonia, 72-73, 193
Ponchaud, François, 301, 306, 318, 319, 330-331, 335
Popieluszko, Jerzy, 81-88; asesinato de religiosas estadounidenses *vs.*, 115, 116, 117-120, 123, 127; asesinato de Romero *vs.*, 103, 105, 106, 108, 112; asesinatos en Guatemala *vs.* 137, 149, 150, 151; aspectos cuantitativos de,

82-87; conexión búlgara en, 89; detalles de, 87-88; editoriales sobre, 83, 88; implicación soviética en, 89; juicio por, 85; responsabilidad por, 88-89; víctimas de América Latina *vs.*, 83, 90-93
Powell, Lewis, 59
Pravda, 192, 230
Prensa Libre, 166
Prensa, La, 171, 217, 221
Primera Enmienda, derechos que otorga la, 340-341
Pringle, James, 324
problemas ambientales, 48
Procter & Gamble, 59
Propaganda Due (P-2), 248, 263, 266-267
propaganda, modelo de, 21-80; dicotomización en, 71-80, 139, 346; elecciones en el Tercer Mundo y, 154, 155-160, 182-183, 230; en estados no totalitarios, 346-354; filtros de, 22-71, 73, 77, 258; predicciones de, 77-79, 112, 128, 341; utilización de, 21-22, 74-76, 77-78
Pyes, Craig, 108, 109

Quality of Mercy (Shawcross), 287
Quinn, Kenneth, 305

radicales, antiguos, 61-62, 70
Radio Europa Libre, 66
Radio Phnom Penh, 301
Radio Zinzine, 355
Ramírez, Atilio, 109, 124
Ramírez, Sergio, 220
Rather, Dan, 63, 186, 190, 229
RCA, 39
Reader's Digest, 28, 41, 60, 76, 77, 238, 239, 318, 327, 335
Reagan, Ronald, 61, 65-67, 136, 237, 247
Reagan, administración: relaciones con Camboya de, 294, 323, 325, 336; asesinato de las religiosas estadounidenses, postura ante, 114-115, 118, 125; intento de asesinar al papa y, 247, 255, 258, 259; relaciones con Polonia, 72-73; relaciones con El Salvador, 67, 205; relaciones con Guatemala, 133-136, 139, 149, 153, 189, 191; relaciones de Nicaragua con, 171, 198, 202, 214, 221, 227, 347, 353
Reasoner, Harry, 282
religiosas estadounidenses, asesinato de, 93, 112-129; asesinato de Popieluszko *vs.*, 115, 116, 117-120, 123, 127; Comisión Rogers sobre, 113, 116, 119, 126; compromiso de la Junta en, 113, 119-127; «delimitar daños y perjuicios» en, 120; detalles de, 115-117, 124; «eludir» la investigación en, 123-127; encubrimiento de, 120-128; falta de indignación por, 117-118; familias de las víctimas, 115, 126; Guardia Nacional salvadoreña implicada en, 113, 114, 119, 120, 122, 127-129; implicaciones de los Estados Unidos en, 113-115, 118, 123-127; investigación de, 112-115, 121, 122-127, 164, 181; juicio por, 117, 127-129; justicia rechazada en, 118-119, 123; planificación de, 121; propaganda, modelo de, y, 128; respuesta de la administración Carter a, 113, 125; respuesta de la administración Reagan a, 113-115, 118, 125
República Dominicana, 69-71, 154, 233
Resistance International, 66
Reuter, agencia, 101
Rhodesia, elecciones en (1979, 1980), 66
Ríos Montt, Efraín, 133, 135, 173, 189
Rogers, William P., 113
Rogers, Comisión, 113, 116, 119, 126
Romero, Óscar Arnolfo, asesinato de, 82, 83, 85, 92-93, 95-112; asesinato de Popieluszko *vs.*, 103, 105, 106, 108, 111-112; detalles de, 96; funeral y, 101; investigación de, 108-112; opiniones de Romero y, 104, 106, 108; propaganda sobre, 97-104; responsabilidad en, 105-108
Rother, Stanley, 137, 138
Rusk, Dean, 274
Russell, George, 209

Sagastume Vidaure, Ricardo, 165, 195, 196
Sajarov, Andrei, 73
Santini, Mariano, 249
Santiváñez, Roberto, 109, 122, 128, 129
Santovito, Giuseppe, 248, 263, 270
Scripps-Howard, 28
Schanberg, Sydney, 307, 309-312, 313
Schumacher, Edward, 105
Seamans, Robert, 280
Seaton, Jane, 24, 43
Seekins, Steven V., 65
Sejna, Jan, 259
Sentencia sobre el caso de Francesco Pazienza *et al.*, 267
Serra, Luis Héctor, 173
Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, 153, 270
Sharansky, Natan, 144
Shaw, George Bernard, 328
Shaw, Terri, 143
Shawcross, William, 287, 300, 305, 322, 327, 328-337, 346
Shevchenko, Arkady, 60, 71
Shultz, George P., 159-160, 221
Sideshow (Shawcross), 301
Sihanouk, príncipe Norodom, 292, 294-297, 300-301, 302, 307, 324
SISMI, 238, 248, 263, 267, 269, 270
Smith, Hedrick, 220-221, 277
Smith, Ian, 66
Socialista de los Trabajadores, Partido, 343
Solidaridad, movimiento, 85, 103, 106, 240, 243, 245
Son Sann, 324
Spence, Jack, 185
St. Louis Democrat, 25
Stalin, 61
Sterling, Claire: como autor, 77, 238, 239, 245, 257; como «experto», 57, 60, 71, 238, 245, 247, 256, 260, 262, 270, 346; terrorismo visto por, 237, 238, 258, 259, 262
Sterling-Henze-Kalb (SHK), modelo, 238-246; acceso de Agca a, 247, 251; difusión del modelo de, 247, 251-257, 271; elementos de, 238-241; validez de, 161
Sudáfrica, 134
Suffert, George, 262
Sullivan, William, 279
Sunday Times, 249, 251, 254
Sunday Express, 25
Sunday Citizen, 45
Svay Rieng, provincia, 303, 310
Swain, Jon, 312-313
Symington, Stuart, 281

Tagliabue, John, 268
Tailandia, 274, 288
televisión: acceso público, 354; como principal fuente de noticias, 27; por cable, 28, 38, 354; pública, 47, 50, 355; *véase también* programas específicos
Terror Network, The (Sterling), 237, 259, 262
Tet, ofensiva: cobertura informativa de, 67, 342; «descripción negativa» de, 67
The Nation, 330, 334
Theilheimer, Edmundo Guerra, 145
Thion, Serge, 304
Time, 28; cobertura informativa de Camboya, 304, 328; cobertura informativa de las elecciones de El Salvador, 201-202, 204, 205; cobertura informativa de las elecciones de Guatemala, 190-192; cobertura informativa de las elecciones de Nicaragua, 191, 199, 201-202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 217, 227, 228, 230; cobertura informativa de las religiosas estadounidenses asesinadas, 116, 117, 118, 121; cobertura informativa de las víctimas de América Latina, 91, 95; cobertura informativa de los asesinatos en Guatemala, 138-139, 143, 149, 150, 191; cobertura informativa del asesinato de Popieluszko, 82, 86, 88-89; cobertura informativa del asesinato de Romero, 100, 106; cobertura informativa del complot para matar al papa, 239, 258,

262, 267; «expertos» como fuentes de, 60; mercados extranjeros de, 41-42
Time, Inc., 28, 32, 38
Time of the Assassins (Sterling), 259
Times (Londres), 45
Times-Mirror, 28
Timor oriental, 75, 321-322, 326, 332, 346, 347-348
Tinker, Grant, 47
Treaster, Joseph, 102-103, 105
Triangle, 28
Tribunal Internacional de Justicia, 345
Tribune Company, 28
Turkes, Alparslan, 244, 265
TV Guide, 28, 318
Twining, Charles, 305
Tyler, Harold R., 126, 129

U.S. News & World Report, 28
Ungo, Guillermo Manuel, 100
UPI, 138

Valladares Molina, Acísco, 195
Valle Espinoza, César, 124
Vance, Cyrus, 107
«20 × 20», 265
Vickery, Michael, 287, 289, 294-295, 305, 320, 331, 335
Vietnam: invasión de Camboya por, 284-285, 293, 314, 318, 319, 320, 324, 325-326, 333, 335-336; invasión de Laos por, 282; «sangrar» a, 326, 338; «síndrome de Vietnam», 339, 353
Vietnam, guerra del: bombardeos estadounidenses de, 274, 302, 304; cobertura informativa de, 342, 345; como «pérdida» para los medios de comunicación, 342, 345; modelo de propaganda y cobertura informativa de, 75; *véase también* París, Acuerdos de Paz de (1972); Tet, ofensiva del
Villacorta, Jorge Alberto, 101

Wagner, Richard, 218
Wall Street Journal, 28, 239, 257, 323
Warner, Denis, 273
Washington Post, 28, 106, 121, 143, 280, 304, 327
Washington, Harold, 152
Watergate, escándalo: Camboya y, 287, 302, 343; cobertura informativa de, 342-344
Weakness and Deceit (Bonner), 116
Westinghouse, 28, 36, 38, 39, 40
Westmoreland, William, 64
White, Robert E., 57, 103, 108, 117, 124
Whittlesey, Faith, 65
Will, George, 237
Windsor, Philip, 291
Wise, Donald, 319
WNET, 47
Woodruff, Judy, 264
World Anticommunist League, 66

Zamora, Mario, 175

ÍNDICE DE CUADROS

1.1. Datos financieros de las veinticuatro empresas de medios de comunicación más importantes (o de sus casas matrices, diciembre de 1986) 29

1.2. Potencial económico de los grupos mayoritarios de las veinticuatro empresas más importantes de medios de comunicación (o de sus casas matrices, febrero de 1986) 34

1.3. Filiación de los directores foráneos de diez de las grandes empresas de medios de comunicación (o sus casas matrices, en 1986) 37

1.4. Expertos sobre terrorismo y defensa en el *McNeil-Lehrer News Hour* desde el 14 de enero de 1985 hasta el 27 de enero de 1986 61

2.1. Cobertura informativa de los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas. 1: Un sacerdote polaco asesinado frente a cien religiosos asesinados en América Latina 85

2.2. Las salvajadas infligidas a las víctimas dignas e indignas, tal como las describe el *New York Times* . . 92

2.3. Cobertura informativa de los medios de comunicación de las víctimas dignas e indignas. 2: El asesinato de un sacerdote polaco frente al asesinato de dos funcionarios del Grupo de Apoyo Mutuo guatemalteco 150

3.1. Temas incluidos y excluidos en la cobertura informativa que el *New York Times* efectuó sobre las elecciones salvadoreñas del 25 de marzo de 1984 . . . 222

3.2. Temas incluidos y excluidos en la cobertura informativa que el *New York Times* efectuó sobre las elecciones nicaragüenses previstas para el 4 de noviembre de 1984 224
3.3. Temas incluidos y excluidos en la cobertura informativa que el *New York Times* efectuó sobre las elecciones nicaragüenses del 4 de noviembre de 1984 . . . 225

ÍNDICE

Prefacio 11

1. Un modelo de propaganda 21
2. Víctimas dignas e indignas 81
3. Elecciones legitimadoras frente a elecciones irrelevantes en el Tercer Mundo: El Salvador, Guatemala y Nicaragua 154
4. El complot de la KGB y Bulgaria para asesinar al papa: desinformación de libre mercado servida como si se tratara de «noticias» 235
5. Las guerras de Indochina: Laos y Camboya 272
6. Conclusiones 340

Índice alfabético 357
Índice de cuadros 371